



# Laboratorios de paz en territorios de violencia(s)

¿Abriendo caminos  
para la paz positiva  
en Colombia?

Miguel Barreto Henriques



**UTADEO**

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



# Laboratorios de paz en territorios de violencia(s)

¿Abriendo caminos para la paz  
positiva en Colombia?



**UTADEO**

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Barreto Henriques, Miguel

Laboratorios de paz en territorios de violencia(s) / Miguel Barreto Herinques.  
-- Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 2016.  
548 p.; 17 x 24 cm.  
ISBN: 978-958-725-192-0

1. PAZ - COLOMBIA. 2. CONSTRUCCIÓN DE PAZ - COLOMBIA. 3.  
CONFLICTO ARMADO – COLOMBIA. I. tit.

CDD303.66”B270”

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  
Carrera 4 N° 22-61 – PBX: 242 7030 – [www.utadeo.edu.co](http://www.utadeo.edu.co)

Laboratorios de paz en territorios de violencia(s)  
¿Abriendo caminos para la paz positiva en Colombia?

ISBN: 978-958-725-192-0  
Primera edición 2016  
© Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

RECTORA: Cecilia María Vélez White  
VICERECTORA ACADÉMICA: Margarita María Peña Borrero  
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES: Sandra Borda Guzmán  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES:  
Olga Lucía Illera Correal  
DIRECTOR DE BIBLIOTECA: Andrés Felipe Echavarría  
DIRECTOR DE PUBLICACIONES: Jaime Melo Castiblanco

CONCEPTO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN: María Paula Berón R.  
CORRECCIÓN DE ESTILO: Melisa Restrepo Molina  
IMPRESIÓN DIGITAL: Xpress Estudio Gráfico y Digital

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN  
ESCRITA DE LA UNIVERSIDAD  
IMPRESO EN COLOMBIA - PRINTED IN COLOMBIA



# Laboratorios de paz en territorios de violencia(s)

¿Abriendo caminos para la paz  
positiva en Colombia?

Miguel Barreto Henriques





*A todos aquellos que en Colombia, a pesar de toda la adversidad,  
siguen luchando a diario y creyendo que otro país y otro mundo son posibles...*

*A Luis Javier Garavito, mi amigo, hombre de fe,  
de paz y víctima de una de las múltiples caras de la violencia*



## Agradecimientos:

En 7 años de investigación, en los cuales viví en tres países, me crucé con centenares de personas, que de una forma u otra, han sido importantes y significativos para mi investigación, y he acumulado un capital de afectos, que hacen que la lista de agradecimientos sea necesariamente larga, y tal vez aun así incompleta.

En primer lugar, debo agradecer a mi director de tesis de doctorado, el Profesor de la Universidad de Coimbra, Augusto Rogério Leitão, que acompañó todo el proceso de investigación y fue figura determinante en su evolución.

Agradezco igualmente a Jorge Restrepo, quién me acogió como visitante académico en el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), en Bogotá, y dio una contribución esencial a la progresión de la investigación.

A Álvaro Gómez Cerón, en el Cauca, Marco Fidel Vargas, en el Magdalena Medio, y Pedro Chica, en el Oriente Antioqueño, que me abrieron las puertas de estas regiones, como si fueran sus casas, y sin los cuales no hubiera sido posible realizar el trabajo de campo. También a Margarita Nova, Omar Gutiérrez, Miriam Villegas, Moisés Aldana, Diego Jaramillo, Francesco Vincenti y Catherine Barme, por su colaboración fundamental en el trabajo de campo en estas regiones.

Agradezco también a todas las personas que estuvieron amablemente disponibles para ser entrevistadas en Colombia y Bélgica, y a los equipos de los Laboratorios de Paz en el Magdalena Medio, Cauca, Nariño, Oriente Antioqueño y Bogotá; y a un grupo extenso de diversas personas, que han ayudado, de diferentes formas, mi trayecto e investigación, especialmente, Maurizio Tinnirello, Jenny Pearce, José Manuel Pureza, Silvia Monroy, Juana Murillo, Luis Javier Garavito y Bibiana Portillo.

Por último, quisiera agradecer a mis padres y abuelos, quienes, desde muy pequeño, estimularon mi gusto por los libros y los viajes, sin los cuales esta empresa no hubiera sido posible.



# Contenido

|              |    |
|--------------|----|
| Introducción | 19 |
|--------------|----|

## Capítulo I

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| El marco conceptual de la paz: del paradigma realista a la transformación de conflictos - los enfoques estructurales e inclusivos para la construcción de la paz | 29 |
| Introducción                                                                                                                                                     | 29 |
| Estado del arte de los estudios de paz y conflictos ( <i>peace and conflict studies</i> )                                                                        | 30 |
| El paradigma dominante: la visión realista de 'gestión de conflictos'                                                                                            | 30 |
| La ' <i>Peace Research</i> '                                                                                                                                     | 35 |
| Los enfoques estructurales e inclusivos para la construcción de la paz                                                                                           | 37 |
| El concepto y enfoque de resolución de conflictos                                                                                                                | 37 |
| Los idealistas de la paz                                                                                                                                         | 38 |
| El papel de la sociedad civil en la transformación de conflictos y el ' <i>peacebuilding from below</i> '                                                        | 53 |

## Capítulo II

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Los enfoques históricos para la paz y el conflicto armado en Colombia | 61 |
| Introducción                                                          | 61 |
| Los enfoques históricos del conflicto armado y de la paz en Colombia  | 62 |
| El enfoque militar                                                    | 63 |
| El enfoque de negociación                                             | 68 |
| Las limitaciones de estos enfoques                                    | 70 |
| El enfoque militar                                                    | 70 |
| El enfoque de negociación                                             | 75 |
| Conclusión                                                            | 80 |

## Capítulo III

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Las causas profundas del conflicto armado colombiano | 85  |
| Introducción                                         | 85  |
| Las causas profundas del conflicto armado            | 86  |
| Exclusión socio-económica                            | 87  |
| Exclusión política                                   | 94  |
| Exclusión regional                                   | 99  |
| Conclusión                                           | 108 |



# Capítulo IV

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Las políticas de paz de la Unión Europea hacia Colombia:<br>la concepción de los laboratorios de paz desde<br>el trayecto europeo | 113 |
| Introducción                                                                                                                      | 113 |
| La Unión Europea como actor internacional de paz                                                                                  | 114 |
| La Unión Europea como actor internacional                                                                                         | 114 |
| La Unión Europea como actor de promoción estructural de paz                                                                       | 117 |
| La cooperación al desarrollo de la Unión Europea como<br>instrumento de promoción estructural de paz                              | 120 |
| ¿Un enfoque europeo de transformación del conflicto<br>colombiano? Las políticas de paz de la Unión Europea<br>para Colombia      | 122 |
| Las relaciones Unión Europea-Colombia: origen y contexto<br>del involucramiento europeo en Colombia                               | 122 |
| ¿Un enfoque europeo para la transformación del<br>conflicto colombiano?                                                           | 127 |
| Las políticas e instrumentos de la Unión Europea para<br>la paz en Colombia                                                       | 133 |
| La dimensión político-diplomática del enfoque de la<br>Unión Europea hacia la paz en Colombia                                     | 134 |
| La cooperación europea al desarrollo comunitario<br>enfocada a la paz en Colombia                                                 | 137 |
| El origen y la concepción de los laboratorios de paz<br>desde el trayecto europeo                                                 | 140 |
| Los laboratorios de paz como instrumentos de la<br>cooperación europea                                                            | 143 |
| Conclusión                                                                                                                        | 144 |

# Capítulo V

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| El laboratorio de paz del Magdalena Medio:<br>¿un 'laboratorio de paz' en una región 'laboratorio<br>de violencia(s)'? | 149 |
| Introducción                                                                                                           | 149 |
| La región del Magdalena Medio                                                                                          | 151 |
| El origen y concepción del laboratorio de paz del<br>Magdalena Medio y del PDPMM desde el trayecto colombiano          | 158 |
| La estructuración del laboratorio de paz: el laboratorio<br>de paz como instrumento del PDPMM                          | 166 |
| El concepto de laboratorio de paz                                                                                      | 168 |
| Los objetivos y el propósito del laboratorio de paz                                                                    | 171 |
| La filosofía del laboratorio de paz y del PDPMM                                                                        | 175 |
| La construcción de la paz desde las regiones                                                                           | 176 |
| La asociación de paz y desarrollo                                                                                      | 181 |
| La metodología participativa                                                                                           | 186 |
| La influencia filosófica religiosa en el laboratorio                                                                   | 190 |
| Una concepción amplia y positiva de paz                                                                                | 195 |
| Los actores y dinámicas internas del laboratorio de paz                                                                | 197 |
| El rol de la Unión Europea en el proceso,<br>del PDMM al laboratorio de paz                                            | 210 |
| Los proyectos y procesos del laboratorio de paz: la construcción<br>de la paz desde las veredas                        | 212 |
| Los componentes del laboratorio de paz                                                                                 | 215 |
| Escenarios de paz, concertación y derechos humanos:<br>la dimensión política de la construcción de la paz              | 217 |

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática:<br>la dimensión social, cultural<br>e institucional de la construcción de la paz | 239 |
| Procesos productivos ambientales para la equidad y el<br>desarrollo sostenible: la dimensión socio-económica<br>de la construcción de la paz    | 266 |
| El impacto, potencial y limitaciones del laboratorio de paz<br>y del PDPMM en el Magdalena Medio                                                | 284 |
| Conclusión                                                                                                                                      | 305 |

## Capítulo VI

|                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| El segundo laboratorio de paz: ¿la expansión de la<br>'formula' de paz o el 'secuestro' por la <i>realpolitik</i> ?<br>El estudio de caso del laboratorio de paz del Cauca<br>y Nariño (Macizo Colombiano y Alto Patía) | 309 |
| Introducción                                                                                                                                                                                                            | 309 |
| El origen del laboratorio<br>de paz de Cauca/Nariño<br>(Macizo Colombiano/Alto Patía)                                                                                                                                   | 311 |
| Las regiones del Cauca y de Nariño y<br>las subregiones del Macizo Colombiano<br>y del Alto Patía                                                                                                                       | 318 |
| La concepción y estructuración del laboratorio de paz II<br>del Cauca/Nariño                                                                                                                                            | 325 |
| Los actores y las dinámicas internas del laboratorio de paz<br>del Cauca/Nariño                                                                                                                                         | 329 |
| 'Bottom up' vs. 'top down': las dinámicas contrarias al interior<br>del laboratorio de paz                                                                                                                              | 339 |
| Distintos actores, distintas 'paces': los modelos y enfoques de paz<br>en confrontación al interior del laboratorio de paz                                                                                              | 358 |

|                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Los proyectos y procesos del laboratorio de paz del Macizo Colombiano y Alto Patía: la construcción de la paz desde las veredas                                                                        | 376 |
| Eje I: Paz, derechos humanos y vida digna. La dimensión política y cultural de la construcción de la paz                                                                                               | 378 |
| Eje II: Fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática y participación ciudadana. La dimensión social e institucional de la construcción de la paz                                          | 386 |
| Eje III: Desarrollo socio-económico sostenible en armonía con el medio ambiente. La dimensión socio-económica de la construcción de la paz                                                             | 406 |
| El impacto del laboratorio de paz en las regiones del Cauca y Nariño                                                                                                                                   | 422 |
| El laboratorio como una plataforma de movimientos sociales                                                                                                                                             | 423 |
| Fortalecimiento de la sociedad civil regional                                                                                                                                                          | 425 |
| Participación social y cívica y fortalecimiento institucional                                                                                                                                          | 427 |
| Un laboratorio de (cultura) de paz                                                                                                                                                                     | 431 |
| Los impactos socio-económicos                                                                                                                                                                          | 432 |
| Las limitaciones estructurales                                                                                                                                                                         | 434 |
| El laboratorio de paz y la violencia directa en el Cauca y Nariño                                                                                                                                      | 437 |
| Los Laboratorios de Paz I, II y III: La unidad y diversidad en los laboratorios de paz. Un estudio comparativo entre el laboratorio de paz del Magdalena Medio y el del Macizo Colombiano y Alto Patía | 441 |
| Conclusión                                                                                                                                                                                             | 464 |

## Capítulo VII

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Los laboratorios de paz: La relación entre el nivel micro de la iniciativa y el nivel macro del conflicto colombiano | 469 |
| Introducción                                                                                                         | 469 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Los laboratorios de paz en el contexto macro de Colombia                        | 470 |
| ¿Los laboratorios de paz y los PDP en un escenario de posconflicto en Colombia? | 488 |
| El diálogo entre los laboratorios de paz y los estudios de paz y conflicto      | 490 |
| Los laboratorios de paz y los enfoques convencionales de gestión de conflictos  | 490 |
| Los laboratorios de paz y la <i>Peace Research</i>                              | 495 |
| Conclusión                                                                      | 498 |
| Conclusión                                                                      | 501 |
| Listado de entrevistas realizadas                                               | 519 |
| Referencias bibliográficas                                                      | 527 |



# Introducción

El conflicto armado en Colombia configura uno de los casos que se prolonga durante más tiempo a nivel internacional, y guerrillas como las FARC y el ELN tienen una longevidad sin par en este continente. En su configuración actual, el conflicto remonta a la década de 1960, pero sus raíces pueden trazarse mucho más atrás.

De igual forma, la intensidad del conflicto evidencia niveles muy elevados, al presentar algunas de las peores cifras del mundo en términos de violencia política, desplazamiento interno y secuestros. Asimismo, la violencia adopta diversas modalidades, formas y expresiones, que no se agotan en los grupos armados en sí mismos, y se cruzan con cuestiones sociales, políticas, económicas, étnicas y culturales, razón por la cual, más que de violencia estamos delante de ‘violencias’.

En este ámbito, este ha sido retratado frecuentemente como un conflicto irresoluble o intratable. Los enfoques tradicionales de acercamiento al conflicto y a la paz han revelado históricamente grandes insuficiencias y debilidades. Casi treinta años de procesos de paz con la insurgencia, con diferentes modelos y enfoques, han producido pocos frutos y resultados. Del mismo modo, las estrategias militares para la derrota de la insurgencia no han logrado, en más de cuarenta años de guerra, la victoria final.

Por lo tanto, este conflicto constituye, tanto desde el punto de vista político, como académico, un desafío. Colombia es un estudio de caso común en las relaciones internacionales y las ciencias políticas y ha merecido un lugar destacado en la bibliografía de los estudios de paz y conflicto. Sin embargo, la perpetuación del conflicto armado y su constante evolución y mutación, así como la riqueza social de este escenario de conflicto, sigue permitiendo y alimentado nuevas miradas y más propuestas analíticas y teorizaciones sobre este estudio de caso.

Asimismo, la emergencia en las últimas dos décadas de un alto número de iniciativas de construcción de paz desde la sociedad civil, que contrastan con el marco sombrío e insatisfactorio de gestión y resolución del conflicto a nivel político, muestran otro lado y dimensión del conflicto y configuran este país como un escenario de guerra y de paz (o paces) simultáneamente. En este ámbito, se impone cuestionar, analizar, problematizar e indagar las posibles vías e instrumentos para la paz en Colombia.

Este libro es el producto de una investigación de doctorado en Política Internacional y Resolución de Conflictos, desarrollada en la Universidad de Coimbra, en Portugal, del 2005 al 2012. En él se recogen los principales insumos de la tesis doctoral “Laboratorios de Paz en territorios de violencia(s): ¿abriendo caminos para la paz positiva en Colombia?”, sustentada el viernes 13 de abril del 2012 y premiada en el año siguiente en Portugal, por la Casa de América Latina/Banco Santander, como mejor tesis de doctorado en la categoría de ciencias sociales. Corresponde a una versión más corta y actualizada de un pequeño ‘ladrillo’ de 932 páginas, que ostentaba el impresionante peso de 2.400 gramos.

La investigación incidió sobre una experiencia particular y *sui generis* de construcción de paz en Colombia puesta en marcha entre el 2002 y el 2010: los laboratorios de paz. Situados en algunas de las regiones más problemáticas y conflictuales del país, e íntimamente conectados a los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), constituían programas multidimensionales de construcción de paz desde la base, sostenidos por la sociedad civil y con el respaldo y participación de la Unión Europea (UE) y del Estado colombiano.

Se concibieron y configuraron como verdaderos ‘laboratorios de paz’, en la medida en que buscaron caminos novedosos y ‘fórmulas’ alternativas para la paz a nivel local y regional. Se sostuvieron sobre un conjunto complejo de procesos sociales, culturales, económicos y políticos de base, que han buscado integrar los territorios marginados y periféricos y los sectores sociales tradicionalmente excluidos de la población colombiana, tales como los grupos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, pero fundamentalmente los campesinos, y acercarlos a la institucionalidad, al desarrollo y a la democracia, con vista a incidir sobre las causas profundas de la conflictividad en Colombia, a generar una cultura de la paz y unos mecanismos de participación.



En cuanto ‘laboratorios de paz’, estos se presentan como un caso que reúne características únicas y particulares que los diferencia de otras iniciativas de paz en Colombia. En esta medida, se considera que el análisis de esta experiencia podrá traer nuevos elementos y una modesta contribución para la discusión sobre las rutas para la paz en Colombia, aún más frente a la actual posibilidad de una solución política negociada para el conflicto y un valor agregado, tanto desde el punto de vista político como académico, en temas de conflicto en un país en donde los enfoques convencionales para la paz han fallado y necesitan desesperadamente de soluciones nuevas e imaginativas para la paz.

La importancia y alcance de esta iniciativa social trascienden el carácter eminentemente local y regional de los laboratorios de paz. Pueden dar pistas, enseñanzas y respuestas para las preguntas: ¿Qué Colombia queremos? ¿Qué paz debemos construir? Así, el objetivo principal al que se dirige este libro es evaluar en qué medida los laboratorios de paz configuran instrumentos de transformación del conflicto y de la violencia en Colombia, en sus diversas expresiones y manifestaciones, y modelos de construcción de una paz sostenible, duradera y positiva en las regiones y zonas periféricas del país, desde la especificidad de estos territorios.

Se parte de la caracterización y análisis de la experiencia de los laboratorios de paz en dos regiones de Colombia: el Magdalena Medio y el Macizo Colombiano, con vista a escudriñar el enfoque para la paz que preconiza y de qué forma este ha sido aplicado y puesto en marcha en procesos sociales desde la base. Hasta cierto punto, lo que está en consideración es indagar si los laboratorios de paz son verdaderos ‘laboratorios de paz’ y configuran un enfoque innovador y alternativo hacia el conflicto y la violencia en Colombia.

En esta medida, el núcleo duro y el corazón del libro se estructuraron con base en un extenso trabajo de campo en las regiones del Magdalena Medio, Cauca, Nariño, Oriente Antioqueño y Bogotá, y en centenas de entrevistas<sup>1</sup> con participantes y actores de los laboratorios de paz, que se convirtieron en la fuente de información más relevante e importante del estudio.

---

1 Se realizaron casi dos centenares de entrevistas con actores de distintos sectores sociales y políticos, funciones profesionales y perfiles sociales: desde campesinos a embajadores europeos, de sacerdotes y obispos a guerrilleros desmovilizados, de líderes comunitarios y directores de ONG a exministros de la República, de académicos a funcionarios de instituciones gubernamentales, de indígenas a representantes de la Comisión Europea, de beneficiarios de proyectos a mediadores y negociadores en procesos de paz en Colombia.

Esto implicó diversos viajes entre las ‘dos Colombias’, desde los trancones de la capital, hasta las trochas, los ríos y las ciénagas de los territorios más marginados y periféricos, en camiones, motos, jeeps, chalupas, taxis y busetas.

Estas travesías implicaron algunos cruzamientos fortuitos y ocasionales con actores armados, tanto guerrilleros como paramilitares, y pasajes por intimidatorios *checkpoints* del ejército, que pusieron en evidencia, acaso restaran algunas dudas, que este no era un mero ejercicio de abstracción académico, ni una experiencia de laboratorio aséptica. Era una investigación que se inscribía en un determinado contexto social, que se relaciona con situaciones límite, de la mayor urgencia y profundidad humana, como la vida y la muerte, el dolor y la esperanza, la desesperación y los sueños, y las utopías de quien, frente a toda la adversidad, sigue creyendo que es posible construir la paz en un país en guerra.

Entre los participantes de los procesos de los laboratorios de paz y los entrevistados de esta investigación, hubo gente que fue víctima de violencia política, que estuvo secuestrada, que fue desplazada, que tuvo que exiliarse debido a amenazas de grupos armados, que fue objeto de procesos judiciales por subversión; gente a quien le mataron a sus padres, hijos o hermanos, e incluso personas que fueron asesinadas. Son las vicisitudes del trabajo de campo en un escenario de violencia(s) que toca el rostro más negro de la guerra, pero también lo que de más humano emerge y sobresale en condiciones extremas y de profundas dificultades. Esta investigación se encontró con personas notables con historias de vidas extraordinarias, que se cruzan y se confunden con la historia política del país y sus guerras.

Así, entre sonrisas de campesinos, jugos, arepas, ‘tintos’, vallenatos, y el gas lacrimógeno de la policía de intervención de la capital, fue posible vislumbrar las muchas *colombias* que caben dentro de Colombia y conocer los paisajes geográficos y humanos y los colores, olores y sabores de este país en conflicto, ubicado entre dos océanos y rasgados por montañas, escenario de realismo mágico y laboratorio de violencias, pero también de paces y utopías. Fue una experiencia de una extrema riqueza, tanto en términos personales como académicos, que permitió acompañar con alguna cercanía a un marco representativo de las problemáticas y contradicciones de las regiones, de sus ‘violencias’ y ‘paces’.

En términos metodológicos, el libro procura desarrollar un constante diálogo entre el nivel micro y macro, o sea, entre la transformación del conflicto desde la base y desde arriba. El análisis de los laboratorios de paz y su potencial y limitaciones para la

construcción de paz se hará por niveles: de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. De cierta forma, se busca cruzar la mirada de las ciencias políticas con la de la antropología y establecer una línea y un puente entre ‘el terreno y el palacio’ entre las macro dinámicas políticas que sostienen, moldean y condicionan el conflicto, y la guerra y construcción de paz como vivenciadas desde el terreno por las comunidades arrinconadas por la violencia en el día a día.

En esta medida, el libro se estructura en tres momentos distintos:

Los primeros cuatro capítulos se enfocan en el nivel macro, situando los laboratorios de paz en el contexto específico del conflicto armado en Colombia y en el marco de los modelos históricos de gestión del conflicto, de las causas profundas de la conflictividad, pero también en el marco de los debates teóricos sobre la paz y la resolución de los conflictos y de la política exterior de la Unión Europea.

Este recorrido se configura como esencial en la medida en que no es posible entender verdaderamente los laboratorios de paz fuera de su contexto macro y de las problemáticas más amplias de la construcción de la paz. Los laboratorios de paz se han construido en medio de un contexto político, social e histórico, y de un conflicto armado complejo. El análisis de los laboratorios de paz depende necesariamente de la lectura del conflicto. La construcción de paz no es un concepto abstracto, es contingente a una realidad.

Así, en el primer capítulo se hace una recensión crítica de la bibliografía de los estudios de paz y conflictos, tanto en lo que dice respecto a los enfoques *mainstream* de gestión de conflictos, como a los enfoques alternativos de resolución y transformación de conflictos afines a la *Peace Research*. De igual forma, se introducen algunos conceptos esenciales en temas de paz y se discuten algunas dimensiones del rol de la sociedad civil en este ámbito para proveer herramientas analíticas que permitan guiar mejor la lectura, analizar los estudios de caso y dar más significado a los elementos empíricos.

En el segundo capítulo se realiza un análisis histórico y crítico de los enfoques convencionales sobre la paz y el conflicto armado en Colombia y de los factores por los cuales estos han fallado. Se argumenta que estos enfoques encierran limitaciones, debilidades e insuficiencias para la generación de una paz duradera, positiva y sostenible en Colombia, al no tener en cuenta un número importante de elementos, componentes y factores.

El tercer capítulo se enfoca en la especificidad del conflicto armado colombiano, en particular en lo que toca a sus raíces, aplicando un marco histórico de análisis

que enfatiza la dimensión estructural del conflicto y pone en evidencia la exclusión socio-económica, política y regional como factores generadores y sostenedores del conflicto, que no han sido tenidos suficientemente en cuenta en los enfoques convencionales para la gestión del conflicto.

En el cuarto capítulo se describe la génesis de los laboratorios de paz desde el trayecto de la UE, buscándose integrar esta iniciativa en el marco de una política exterior en construcción de la UE y en el marco específico de las políticas de cooperación al desarrollo comunitarias europeas.

En el quinto y sexto capítulo se presentan los dos estudios de caso regionales, esto es, el laboratorio de paz del Magdalena Medio y el laboratorio de paz del Cauca y Nariño (Macizo Colombiano y Alto Patía) en el marco de sus contextos sociales particulares y de las problemáticas específicas del conflicto a escala regional. Se analiza la génesis de los programas y de su enfoque particular para la paz, la multiplicidad de actores y dinámicas que atraviesan las iniciativas, sus impactos a nivel social y político en la escala local y regional, y se hace una panorámica y recorrido por diversos proyectos, procesos e iniciativas de los laboratorios de paz, con vista a deslindar cómo se procesa ‘la construcción de paz desde la vereda’, y cómo se generan ‘paces locales’ y transformaciones del conflicto a nivel micro.

El sexto capítulo incluye igualmente un estudio comparativo entre los dos estudios de caso regionales, que busca poner en evidencia la unidad y diversidad en los laboratorios de paz, y las transformaciones que sufrieron en el proceso, especialmente con la cooptación relativa del programa por parte del gobierno nacional en el segundo laboratorio de paz. La línea de comparación entre los procesos busca también evaluar si la fórmula particular de paz y la experiencia social puede ser replicada y reproducida fuera de su contexto original y si la hipótesis de los laboratorios como potenciales instrumentos de transformación del conflicto y de construcción de paz positiva es aún válida<sup>2</sup>.

---

2 A este respecto, toca subrayar también que a pesar de que se tengan en cuenta las dinámicas de las demás regiones que componen el segundo y el tercer laboratorio de paz (Norte de Santander, Oriente Antioqueño, Montes de María y Meta) y se destaquen algunos elementos de sus procesos en la sección del sexto capítulo referente a la unidad y diversidad al interior de los laboratorios de paz, el análisis se centra esencialmente en los laboratorios de paz del Magdalena Medio y del Macizo Colombiano. En esta medida, las conclusiones presentadas en la investigación respecto a estos dos estudios de caso no son generalizables a los demás laboratorios y territorios de Colombia, que encierran sus propias especificidades.

Por último, el séptimo capítulo pretende cerrar el círculo y establecer una ligación y un puente entre el nivel micro y macro. Se procura averiguar cómo esta iniciativa regional específica desafía o se integra con las temáticas políticas descritas y analizadas en el inicio del libro, particularmente en los debates sobre las vías para la paz en Colombia.

En lo que toca al horizonte temporal del análisis, se debe referir que se cruzan diversos planos temporales. El estudio se centra fundamentalmente en el periodo de duración del primer y segundo laboratorio de paz (2002-2006, 2006-2010), que coincide con la coyuntura política marcada por la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en Colombia. No obstante, tendrá en cuenta los desarrollos políticos en el marco de la actual administración presidida por Juan Manuel Santos (2010-presente), así como la “pre-historia” de estas iniciativas, particularmente los procesos sociales en su génesis en la década de 1990, y los factores históricos y estructurales que están en la base del origen y perpetuación del conflicto armado.





# Capítulo





# El marco conceptual de la paz: del paradigma realista a la transformación de conflictos - los enfoques estructurales e inclusivos para la construcción de la paz

## Introducción

Para analizar y comprender la particularidad, la ‘alternatividad’ y el potencial de la experiencia y del enfoque de construcción de paz de los laboratorios de paz, es vital investigar y describir, en primer lugar, no solo los modelos dominantes y enfoques históricos del conflicto armado y la paz en Colombia, sino también algunas discusiones teóricas respecto a los temas de la paz y la resolución de conflictos. Esta es la finalidad de los dos primeros capítulos de este libro.

Se ha conceptualizado e interpretado la paz y las vías de consecución de la misma de diferentes formas y bajo diferentes modalidades y enfoques, tanto desde el punto de vista académico, como político. De la misma forma, se han definido distintos actores y protagonistas de la construcción de la paz y resolución de los conflictos y se han atribuido diferentes roles y valoraciones a la sociedad civil en este proceso. El presente capítulo busca examinar el estado del arte de los estudios

de paz y conflictos y establecer un marco conceptual que permita analizar los laboratorios de paz, y su acercamiento al tema de la paz y de la construcción de la paz, así como encuadrar la discusión en términos teóricos y empíricos. Se tienen en cuenta los enfoques convencionales y hegemónicos de gestión de conflictos, pero se da particular énfasis a los enfoques teóricos estructurales e inclusivos para la construcción de paz afines a la *Peace Research*, que presentan más afinidad con la filosofía de paz de los laboratorios y proveen un mejor entendimiento sobre el rol de la sociedad civil en la transformación de conflictos. La opción conceptual preferencial se centra en los conceptos de paz positiva y de transformación de conflictos, que permiten ubicar, contextualizar y definir la hipótesis de la investigación, y evaluar los laboratorios de paz como instrumentos de construcción de paz en el marco específico del conflicto armado colombiano.

## Estado del arte de los estudios de paz y conflictos (*peace and conflict studies*)

### El paradigma dominante: la visión realista de 'gestión de conflictos'

La guerra y la paz, la violencia y los conflictos son elementos centrales en la condición humana que acompañan y marcan indeleblemente muchas áreas de la actividad social y política. Son así temas que han atraído desde hace mucho la atención de las ciencias políticas y sociales, razón por la cual hay numerosos acercamientos teóricos a la comprensión de los conflictos y la construcción de la paz.

Empezaremos aquí por referirnos a aquel que es considerado como el pensamiento tradicional y además el paradigma dominante, no solo en la teoría, sino también en la práctica política —el realismo y su equivalente en el área de análisis de conflictos—, la gestión de conflictos, pasando en seguida al análisis de los enfoques alternativos e idealistas para la construcción de la paz.

De hecho, el realismo político no es *per se* un modelo de resolución de conflictos o un enfoque para la paz; es una escuela o teoría de relaciones internacionales. Sin embargo, al ser el paradigma político dominante, determina en gran medida el enfoque ‘convencional’ y hegemónico hacia los conflictos armados (internacionales e internos), no solo en Colombia sino también a nivel internacional.

A pesar de la pluralidad de enfoques y autores realistas, los cuales evidencian diferencias substanciales entre ellos que no vamos a analizar aquí en su complejidad y diversidad, se pueden subrayar algunos elementos recurrentes y generales para caracterizar el realismo (Donnelly, 2000, p. 9), especialmente en lo que concierne a la resolución y gestión de conflictos y la práctica política en este ámbito.

En primer lugar, el paradigma realista es fundamentalmente Estado-céntrico. Ve a los Estados como los principales y únicos actores de importancia en el sistema internacional (Keohane, 1987 citado por Donnelly, 2000, p. 7). Los actores sub-estatales o trans-estatales son vistos por los realistas como actores marginales en el ámbito internacional, teniendo poca influencia o significado. Consecuentemente, esta es una escuela de pensamiento político que confiere muy poca importancia a la sociedad civil y a los actores locales en la resolución de conflictos, desvalorizando su rol en la construcción de la paz. Apenas los ‘actores que cuentan’ deben ser incluidos en un proceso de gestión de un conflicto (Wallensteen, 2002, p. 48). Como lo afirman Marchetti y Tocci (2009, p. 10),

Dentro de esta tradición, los Estados y los actores que actúan como Estados, tanto en la forma de partes de un conflicto, o como terceros, son los actores principales en el “juego” de gestión del conflicto. El valor de organizaciones sociales es secundaria, marginal o no-existente.

El realismo es, en su esencia, un enfoque elitista, basado en un proceso vertical de decisión, y que se orienta exclusivamente a lo que la literatura anglosajona llama el nivel ‘*track 1*’ de la resolución de conflictos, es decir las actividades y diplomacia desarrollada por actores oficiales, en detrimento de actores no oficiales (*track 2*) (Nan y Strimling, 2004). Solo los actores estatales y las élites armadas caben en esta concepción de resolución de conflictos.

En segundo lugar, identifica el “concepto de interés definido en términos de poder” (Morgenthau, 1955, p. 5) como el rasgo principal y la fuerza motriz en la política (internacional). La arena política y los conflictos son retratados como implacables

luchas por el poder. Para los realistas el poder surge con un medio y un fin en sí mismos (Sheenan, 1996, p. 12 citado por Jeong, 2000, p. 295). Así, los temas de conflictos son depurados en gran medida, de su complejidad y multidimensionalidad, y reducidos a una a competición por el poder político (Väyrynen, 1991, p. 8).

Por lo tanto, el realismo ubica todos los niveles y componentes de la gestión de conflictos en un marco de poder (Burton, 1990, pp. 72-73). Como John Burton (1990, p. 73) señala, constituye un “enfoque de poder hacia los conflictos”. Consecuentemente, para los enfoques realistas hay esencialmente dos instrumentos fundamentales para gestionar los conflictos: la negociación (*bargaining*) y la coacción.

Respecto al primero, los enfoques realistas y neorrealistas se concentran fundamentalmente en la noción de gestión de conflictos, alcanzada mediante la negociación entre las partes, involucrando potencialmente actores externos a través de la mediación (Marchetti y Tocci, 2009, pp. 209-210).

Para esta tradición política las actividades de construcción de paz son concebidas como un proceso conducente a un acuerdo de paz (Marchetti y Tocci, 2009). Negociaciones basadas en el poder y el interés aparecen como “la única alternativa práctica a la violencia inter-grupo” (Morgenthau, 1985 citado por Rubenstein, 2001). Para los afiliados a este enfoque teórico, resolver los conflictos es visto como irrealista, dadas las diferencias irreconciliables de intereses y valores entre las partes; tan solamente es viable gestionarlos o contenerlos, razón por la cual las intervenciones se deben enfocar en la obtención de acuerdos políticos, particularmente mediante el recurso al poder político y militar para influenciar las partes (Miall, 2004, p. 3). La gestión de conflictos aparece así como una forma de dirimir las diferencias y divergencias entre los actores en conflicto de forma práctica y ‘realista’ en un proceso de cooperación (Bloomfield y Reilly, 1998, p. 18 citado por Miall, 2004, p. 3).

Esta escuela de pensamiento se centra principalmente en la manera de obtener la ‘paz negativa’, es decir, el cese de las hostilidades o la violencia directa entre las partes en conflicto. El énfasis está en cómo traer las partes en conflicto en torno a una mesa de negociación, en los procedimientos de este proceso una vez que los actores estén en la mesa y en las técnicas de intervención de terceros que puedan ser utilizadas para bajar la intensidad de las manifestaciones violentas de un conflicto e influenciar el cálculo de los actores armados (Stedman, 1997; Zartman, 2000). No está

en juego tratar los problemas que son la fuente del conflicto o encontrar soluciones creativas y alternativas a los mismos. Se tiende a subestimar la dimensión estructural de los conflictos y a no cuestionar las causas y raíces profundas de la violencia en las relaciones sociales y a subrayar la racionalidad y discrecionalidad de los actores en el involucramiento en los procesos de conflicto (Wallensteen, 2000, p. 44). Para el realismo los conflictos nacen del cálculo de actores racionales que promueven sus intereses<sup>1</sup> (Collier, 1999), sin intenciones morales en la ecuación; son juegos de suma cero en los cuales lo que una parte gana, la otra pierde, por lo que promueve soluciones en forma de un compromiso entre los opositores (Wallensteen, 2000, p. 45). Por lo tanto, no propone mecanismos que intenten transformar o resolver estructuralmente el conflicto y no corresponde a una verdadera resolución de conflictos (Dudouet, 2005, p. 53).

Para la perspectiva realista, que sigue siendo dominante en gran medida, no solo en términos académicos sino en la práctica política de los Estados e instituciones internacionales, ‘construcción de paz’ significa gestión del conflicto. La escuela realista no está interesada en resolver, ni transformar el conflicto; tan solamente congelar, contener, limitar o hacer desaparecer la violencia armada para preservar el poder e interés del Estado. Como argumenta Pureza (2009, p. 34), “el rasgo más característico de la construcción realista de paz es su minimalismo”. Se enfoca exclusivamente en el aspecto armado del conflicto y en cómo hacerlo llegar a su fin (Wallensteen, 2002). Se centra en el presente y en el futuro inmediato y es claramente un enfoque de corto plazo. Adam Curle (1971, p. 184) caracteriza este modelo de negociaciones como una técnica de ‘no resolución’ que solamente ‘barre los conflictos para debajo de la alfombra’. No confiere importancia a las causas que los provocan y sostienen.

El segundo gran instrumento realista de gestión de conflictos es la coacción, particularmente la coacción por la fuerza. Siguiendo una concepción de la naturaleza humana como inherentemente agresiva y egoísta, que se remonta a Hobbes y Maquiavelo (Donelly, 2000, p. 9), y una descripción de los conflictos como resultado directo de la competencia por recursos escasos, el realismo político defiende que deben haber autoridades poderosas para controlar los comportamientos de las

---

1 Una perspectiva central en este entendimiento es planteada por Collier (1999), que subraya las agendas económicas en los conflictos y el interés de los actores en la perpetuación de un conflicto por la oportunidad de depredación de recursos que estos confieren.

personas y las naciones (Burton, 1990, p. 73). Se entiende que cuanto mayor el nivel de poder de un Estado, mayor el grado de seguridad, razón por la cual se concibe la adquisición de poder como el objetivo principal de las autoridades estatales (Burton, 1990, p. 73). Esta perspectiva defiende y legitima el uso de la coacción y la fuerza física como medio para manejar los conflictos. La guerra aparece como un ‘estado natural’ (Waltz, 1988, p. 151) y la “continuación de la política por otros medios” (Clausewitz, 1989, p. 75).

Desde este punto de vista, los conflictos deben ser contenidos dentro del marco de las normas sociales y legales existentes, como determinadas y aplicadas por las autoridades (Burton, 1990, p. 72). Esta visión está íntimamente relacionada con la salvaguarda del *status quo* y las instituciones existentes (Jeong, 2000, p. 34).

En este paradigma dominante del realismo político y en la forma convencional de gestión de los conflictos internos, las amenazas al orden establecido se tratan dentro de un marco de autoridad y poder. Como Burton afirma, “para el estratega, políticos poderosos, ciudadanos de las naciones poderosas, la policía y los jefes de familia autoritarios, la resolución de conflictos aún significa el uso de la fuerza suficiente para producir un resultado deseado” (Burton, 1998).

Esta perspectiva tiene dos importantes consecuencias políticas que se notan de forma muy particular en el caso colombiano y se reflejan en los enfoques políticos tradicionales a ese conflicto armado. En primer lugar, tiene el efecto de “atribuir la culpa de los conflictos a personas y grupos, eliminando así cualquier consideración política de cambio a instituciones y políticas” (Burton, 1990, p. 73). Claramente privilegia la agencia sobre las estructuras de violencia. En segundo lugar, esta perspectiva plantea un marco criminal y de seguridad como el marco adecuado para aplicar a los conflictos y manejarlos. Es un enfoque teórico y político que legitima la opción militar y el uso de coacción física como ‘salidas’ viables a los conflictos.

Los métodos convencionales (realistas) de gestión de conflictos han demostrado ser claramente insuficientes en muchos conflictos intratables, como el colombiano. El caso colombiano es notoriamente influenciado, si no determinado por una concepción realista<sup>2</sup>.

---

2 No solo los dos principales instrumentos utilizados históricamente para manejar el conflicto han sido la coacción física (por vía militar y policial) y negociaciones (por las élites armadas, con base en una lógica de

El marco realista de gestión de conflictos encierra así muchas limitaciones que analizaremos a lo largo de este capítulo: en primer lugar, el realismo favorece claramente las estructuras de poder existentes y el *status quo*. Los procesos de gestión de conflictos se basan en instrumentos que privilegian el control por las partes dominantes (Dudouet, 2005, p. 67). Por lo tanto, es un enfoque que configura una paz ‘hegemónica’ (Richmond, 2008, p. 109), dictada por los ‘vencedores’ y los actores con un poder político y militar más acentuado. Así, en casos de diferencias de poder relativo entre las partes su aplicación es problemática y difícil (Jeong, 2000, p. 36).

Además, la sostenibilidad de las ‘soluciones’ basadas en una gestión de conflictos es muy débil. Confiere una ‘paz’ frágil. La gestión de conflictos puede imponer acuerdos de paz, pero difícilmente la construcción de verdaderas relaciones pacíficas duraderas que sean socialmente transversales. La paz necesita más que un acuerdo entre las élites de las partes en conflicto. Una firma en un documento no puede representar por sí misma la receta para una paz duradera. Es necesariamente de una naturaleza restringida y de un alcance limitado. Un conflicto no se puede resolver simplemente por manejar sus aspectos destructivos, sin abordar las causas subyacentes de la hostilidad (McDonald, 1998).

## La ‘Peace Research’

En oposición a este paradigma y entendimiento realista de la paz y los conflictos, ha nacido toda una bibliografía en los últimos cuarenta años. Específicamente las teorías de resolución y de transformación de conflictos y de forma general, la comúnmente designada *Peace Research* (investigación para la paz) nacieron en respuesta al realismo y a los estudios de seguridad, buscando consolidarse como una alternativa política y académica que preconizaba un cambio de paradigma.

La *Peace Research* emergió en los años 1950 y 1960 en el contexto de la Guerra Fría y la amenaza nuclear, con base en la creencia en la incapacidad de los análisis

---

poder y no estructural), pero además la existencia de la insurgencia en el país ha sido tratada habitualmente como un asunto criminal y de autoridad, y no como un problema social y político.

tradicionales de la paz (del realismo y los estudios de seguridad) para promover una paz sostenible. Fundamentalmente, ha tenido como objetivo y fundamento epistemológico responder a dos simples, pero complejas cuestiones: ¿cuáles son las causas de la guerra y de los conflictos y cuáles son las condiciones para la paz? (Dunn, 2005, p. 7). Ha buscado así entender las raíces de los conflictos, encontrar maneras de reducir o eliminar la violencia (Wallensteen, 2000, p. 5) y ofrecer soluciones y formas pacíficas y equitativas de convivencia social, con base en una visión ética.

La *Peace Research* buscó por encima de todo ofrecer un marco de referencia alternativo. Se planteó como un nuevo enfoque para pensar sobre la guerra y la violencia, buscando una nueva ontología de la paz. Es un ramo científico con claros fundamentos normativos, orientado a prevenir los conflictos violentos y garantizar las condiciones para una paz sostenible. No se limita a mirar y analizar como el mundo ‘realmente’ es y funciona, sino que parte del precepto de que este debe ser ‘perfeccionado’. Tiene una considerable dosis de utopianismo (Wallensteen, 2011, p. 14). Las motivaciones detrás del análisis teórico se asocian a un compromiso de cambio y a la construcción de “la paz por medios pacíficos”, utilizando una expresión de Galtung (1996).

Sin embargo, la *Peace Research* no forma una disciplina intelectual coherente. Es un área transdisciplinaria y plural, que integra diferentes áreas de las ciencias sociales, desde la sociología a la antropología, desde los estudios feministas a la teoría crítica, y que fue construida con base en las distintas propuestas alternativas a los estudios estratégicos y a la disciplina de relaciones internacionales, dominada por el realismo y un enfoque positivista (Pureza y Cravo, 2007, p. 77).

Su agenda e intereses de investigación son mucho más amplios que la *high politics* realista. La *Peace Research* ha colocado otras violencias en la agenda y ha puesto en evidencia otras dimensiones de la guerra, como las asimetrías de poder, la violencia de género y la relación entre la desigualdad, la injusticia y la violencia. Áreas como el desarrollo y los derechos humanos se volvieron temas centrales de la *Peace Research* (Jeong, 2000, p. 42). Por lo tanto, no solo la concepción de paz sino también la misma construcción de paz se han vuelto, por intermedio de la *Peace Research*, mucho más extensas y multidimensionales.

En la ‘tradición’ y orientación de la *Peace Research* se incluyen de forma general, las teorías de resolución y transformación de conflictos y los enfoques estructurales e inclusivos de ‘idealistas de la Paz’, como John Burton, Johan Galtung y John Paul Lederach, a cuyos análisis y pensamiento nos referiremos a continuación.



# Los enfoques estructurales e inclusivos para la construcción de la paz

## El concepto y enfoque de resolución de conflictos

La resolución de conflictos surge simultáneamente como un concepto y como un enfoque particular para entender la paz. Se define en oposición a la gestión de conflictos y se distingue de esta en distintos aspectos y elementos:

En primer lugar, mientras la gestión de conflictos se enfoca tradicionalmente en el aspecto armado de los conflictos y en su contención, así como en técnicas de desescalamiento y negociación, la resolución de conflictos se enfoca en aspectos más ambiciosos y pasa por un proceso mucho más complejo (Wallensteen, 2000, p. 53). Busca que las partes en conflicto enfrenten voluntariamente y de forma conjunta sus incompatibilidades para lograr una “solución no jerárquica, sin coerción y de integración” (Hoffman, 1992, pp. 264-265, citado por Jeong, 2000, p. 204). Wallensteen (2000, p. 50) define este concepto como

[...] una situación social, en la cual las partes armadas en conflicto resuelven vivir pacíficamente – y/o disolver sus incompatibilidades básicas a través de un acuerdo (voluntario), y de allí en adelante dejan de utilizar las armas unos contra los otros; esto significa que el conflicto ha sido transformado de una conducta violenta a no violenta por las partes que estaban enfrentadas en conflicto.

En esta medida, se distingue del fin de un conflicto a través de una victoria militar. Para los autores afines a este enfoque, un conflicto puede ser indiscutiblemente terminado por una parte al ganarle a la otra, pero esto no constituye una verdadera solución (Wallensteen, 1991, p. 129). Los conflictos no pueden resolverse mediante esfuerzos para derrotar o aniquilar a un oponente, pues esto significa tan solo que uno domina al otro y es capaz de imponer su orden.

En segundo lugar, este enfoque parte del principio que los conflictos se pueden resolver y se orienta precisamente a la búsqueda de soluciones. Luego, se diferencia del concepto y enfoque de transformación de conflictos, noción que analizaremos

con más profundidad más adelante, y que aboga por que los conflictos no se pueden solucionar, sino transformar.

En tercer lugar, la resolución de conflictos se centra en las causas subyacentes de los conflictos. Parte del principio que los conflictos no se resolverán sin atacar las fuentes subyacentes de la hostilidad (Jeong, 2000, p. 204).

John Burton, uno de los pioneros de las teorías de resolución de conflictos, se refiere a este concepto como

[...] la transformación de relaciones en un caso particular, a través de la solución de los problemas que llevaron a la conducta conflictiva en primer lugar. [...] Por lo tanto, hacemos una distinción entre la resolución, es decir, el tratamiento de los problemas que son la fuente de conflicto, y la supresión de la solución de conflictos por medios coercitivos, o por la negociación en la que el poder determina el resultado. (Burton, 1990, p. 2)

Así, se evidencia que la resolución de conflictos es un término empleado para caracterizar tanto a un proceso (basado en una serie de instrumentos empleados para abordar los conflictos y establecer la paz, como la facilitación, la mediación, el *peacekeeping* y el *peacemaking*, usualmente involucrando el rol de actores externos), y un resultado (la paz basada en la superación de la raíz y causas de los conflictos y la transcendencia de las incompatibilidades entre las partes) (Dudouet, 2005, p. 48).

Esta situación lleva a crear alguna ambigüedad y confusión general respecto a la definición y contenido de la resolución de conflictos: al designar a la vez un campo de investigación amplio (que a veces se confunde con la misma *Peace Research*), un enfoque particular para la paz (distinto tanto de la gestión como de la transformación de conflictos) o en un entendimiento más restringido, un conjunto específico de técnicas de establecimiento de la paz.

## Los idealistas de la paz

En este capítulo, analizaremos tres autores en particular, que se pueden identificar en la *Peace Research*: John Burton, Johan Galtung y John Paul Lederach. Estos se podrían denominar como tres ‘idealistas’ de la paz, cuya obra es especialmente importante para la construcción de un marco conceptual que nos permita comprender

mejor la complejidad de la resolución y transformación de los conflictos, y así mismo los laboratorios de paz en Colombia. Los tres han aportado nuevas formas de pensar la paz y los conflictos, y han puesto en relieve, desde puntos de vista y marcos diferentes, la dimensión social y estructural de la paz y de la construcción de paz. Para los tres autores la paz ha sido replanteada como un proceso de emancipación social y auto-realización (Dunn, 2005, p. 94).

El volumen de trabajo y producción intelectual de estos autores es inmenso. Por lo tanto, no será el propósito de este capítulo analizarlo en detalle, ni en su totalidad, pero sí algunos aspectos y elementos centrales de su pensamiento que son de especial interés e importancia para el tema de esta investigación.

### *John Burton y la teoría de las necesidades humanas*

Uno de los pioneros de la resolución de conflictos y de los autores más prominentes en esta área es John Burton. Este australiano ha hecho contribuciones de gran importancia a los estudios de los conflictos y resolución de conflictos. Burton (1990, p. 173) desafió el paradigma político dominante, al cual se refería como el “realismo político y de poder en la gestión de conflictos”, que, desde su punto de vista, no podía dar una respuesta adecuada a los problemas y las dinámicas de los conflictos contemporáneos. Trató por lo tanto de desarrollar un marco alternativo a este.

Su trabajo se centró fundamentalmente en la teoría de las necesidades humanas. Burton ofreció una nueva dimensión a los estudios de paz y conflictos al vincular directamente los conflictos violentos a necesidades humanas insatisfechas. Sostuvo que una de las principales causas de los conflictos intratables es la insatisfacción de las necesidades, en los niveles del individuo, del grupo y de la sociedad (Marker, 2003), que impulsa a la gente a intentar corregir esta situación.

De acuerdo a la teoría de las necesidades humanas, hay cuestiones negociables y no negociables y “conflictos que pueden ser tratados mediante el empleo de la trinidad convencional de la fuerza, la ley y/o negociación basada en el poder, y aquellos cuya resolución requiere de otras medidas” (Rubenstein, 2001). Contrariamente a los intereses, las necesidades no pueden ser suprimidas, intercambiadas o negociadas (Marker, 2003). Para Burton (1990, p. 39), el comportamiento humano está condicionado por algunas necesidades y valores fundamentales que no pueden ser

reprimidos y no pueden ser negociados. Necesidades básicas universales y genéticas, tales como “el reconocimiento personal y la identidad son la base del desarrollo individual y la seguridad en una sociedad” (Burton, 1998). Burton señala en primer lugar la identidad, el reconocimiento, la seguridad y el desarrollo personal como las necesidades más importantes y destacadas, siendo, desde su punto de vista, aún más esenciales que la comida y la vivienda. Para este enfoque, no importa cuán subjetivamente experimentadas y culturalmente afectadas sean las necesidades, si estas se sienten frustradas por las instituciones y normas, los conflictos surgirán, ya que requieren satisfacción (Sandole, 2001).

Las necesidades surgen pues como elementos centrales para la construcción de la paz. En esta perspectiva teórica, a menos que se llenen las necesidades básicas de los individuos no puede haber una paz sostenible, ni una auténtica y duradera estabilidad social (Väyrynen, 1991). Por lo tanto, si en la base de un conflicto se encuentra la privación o negación de ciertas necesidades, entonces el proceso de resolución del conflicto deberá pasar por la identificación de estas necesidades y la estructuración de mecanismos que den respuestas a ellas (Wallensteen, 2002, p. 39).

Este enfoque busca apartarse de los modelos tradicionales de negociación que no tienen en cuenta la existencia de cuestiones como las necesidades humanas, las cuales no son negociables. La teoría de Burton nos ofrece una clara y sólida diferenciación entre la resolución de conflictos y la gestión de conflictos, que demuestra que la resolución de conflictos es mucho más que ‘llevar gente a una mesa de negociación’.

Burton, como otros teóricos de las necesidades humanas, cree que si bien la estructura de una sociedad no se cambia de tal forma que proporcione a todos soluciones a estas necesidades, el conflicto seguirá siendo intratable (Burgess y Burgess, 2003). Así, si los acuerdos de paz no tocan las cuestiones subyacentes al conflicto y se limitan a dar ventajas a las élites, crearán acuerdos que no durarán (Wallensteen, 2002, pp. 39-40).

Se hace evidente que la teoría de Burton hace énfasis en las causas y las fuentes de los conflictos. Una metáfora médica utilizada por él es particularmente elocuente y reveladora para ilustrar el punto anterior. Para Burton, el riesgo de no abordar las causas subyacentes de los conflictos es tan grande como no tratar los síntomas de una enfermedad. Este autor plantea que, como los síntomas de una enfermedad, los conflictos y las conductas desviadas son síntomas de otra cosa: son señales de deficiencias estructurales, los fallos de un sistema (político y social) en el cumplimiento de las necesidades de las personas (Väyrynen, 1991).

En sus propias palabras,

Los problemas que se refieren a la estabilidad social y la supervivencia humana no se resuelven en la ausencia de un enfoque explicativo para ellos. [...] En las últimas décadas hemos desarrollado una costosa e importante industria para controles de seguridad, pero hemos puesto mucho menos atención y recursos en las razones de la criminalidad y el terrorismo. Gastamos más y más en las cárceles, pero muy poco en las razones de las conductas desviadas. [...] Nosotros tratamos de reducir el tráfico y consumo de drogas, prestando poca atención a las razones de producción y consumo de drogas. Utilizamos medidas policiales para hacer frente a la violencia de pandillas, con poca consideración por las razones de alienación social e identidad que influyen en la formación de pandillas. [...] Mientras tanto, los costes de la contención de los conflictos y la violencia - es decir, del tratamiento de los síntomas por medios coercitivos tradicionales - son más de lo que las sociedades pueden permitirse. [...] Nuestra conclusión es que ahora no hay más remedio que prestar atención a los problemas que dan lugar a conflictos, aunque esto puede requerir modificar las instituciones y políticas. (Burton, 1990, p. 17)

Llevando esta discusión teórica al caso colombiano, los modelos convencionales de gestión del conflicto en Colombia se han direccionado estrictamente a contener la violencia, despreciando las causas profundas del conflicto. Todavía, para hacer frente en cualquier nivel a conflictos bien enraizados e intratables, como es el colombiano, se requiere “un marco holístico e integral que capture la complejidad del conflicto” y que aborde la fuente de los diversos problemas y disputas que lo sostienen (Sandole, 2001). Para Burton (1990, pp. 1-55) este proceso de resolución de conflictos requiere frecuentemente una reestructuración política e institucional importante y un cambio sistémico.

Este enfoque ha conferido igualmente un rol y un marco conceptual y metodológico para los actores no-estatales y la sociedad civil en la resolución de los conflictos. Al enfocarse en todo el tipo de necesidades humanas, como la identidad y la participación política, en detrimento de la seguridad e intereses del Estado exclusivamente, ha abierto el camino para la representación de todo el tipo de voces en la resolución de los conflictos y en la consecución y garantía de las necesidades humanas y para

que la paz se pueda construir de abajo hacia arriba por actores de la sociedad civil, a la par de los Estados y los actores políticos y públicos (Richmond, 2008, p. 102).

## *Galtung y los conceptos de violencia estructural, paz estructural y paz positiva*

Un ‘compañero de viaje’ de John Burton, como Sandole (2001) se refirió a él, es Johan Galtung. Este autor noruego hizo de forma similar y casi al mismo tiempo, importantísimas contribuciones al desarrollo de la *Peace Research*.

Como Burton, Galtung enfatizó la existencia de elementos estructurales en los conflictos y subrayó la dimensión estructural de la construcción de la paz. De hecho, la investigación pionera de Galtung ha sido uno de los principales responsables de que los elementos estructurales en el estudio de los conflictos tenga relevancia hoy en día. Siendo uno de los pioneros de la *Peace Research*, fue Galtung quien amplió el significado de la paz de la antítesis de la guerra y revaluó el concepto de violencia, de su sentido y connotación tradicional –violencia física– para darle una significación más amplia.

Este autor ha cambiado sustancialmente el panorama del estudio de la paz y los conflictos con la introducción de los conceptos *violencia estructural* y *paz estructural* en un artículo de 1969 llamado “Violence, Peace and Peace Research” (La violencia, la paz y la investigación para la paz). Reflexionando sobre la violencia y la paz, Galtung quería llamar la atención sobre el hecho de que el dolor y el sufrimiento son una consecuencia no solo de la violencia infligida por una persona en contra de otra persona, sino también de estructuras socialmente injustas (Pearce, 2007, p. 16).

Galtung (1969, p. 170) hizo una importante distinción entre lo que él consideraba *violencia directa* y *violencia estructural*:

Nos debemos referir al tipo de violencia en la cual hay un actor que comete la violencia como personal o directa, y a la violencia donde no hay tal actor como estructural o indirecta. En ambos casos, las personas pueden ser asesinadas o mutiladas, golpeadas o heridas en los dos sentidos de estas palabras.

Para Galtung (1969, p. 173), la comprensión tradicional de la violencia se ha centrado únicamente en la violencia personal o directa, pero la violencia estructural

conduce a por lo menos tanto sufrimiento como la violencia personal. Según este autor, “la violencia está presente cuando los seres humanos son influidos de manera que sus efectivas realizaciones somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales” (Galtung, 1969, p. 168). Se relaciona con un tipo de violencia que ocurre no por intermedio del uso individual de armas, sino a través de la organización de la sociedad (Wallensteen, 2011, p. 16).

Por lo tanto, elementos tales como las relaciones de explotación y dependencia, las condiciones de injusticia social, desigualdad, miseria, hambre, represión, desarrollo desigual y discriminación, y las violaciones de los derechos humanos representan marcas de violencia estructural que son tan dañinas como la violencia directa en tiempos de guerra. Estos elementos no son vistos por Galtung como simples escenarios de la violencia, sino como expresiones de la violencia en sí misma. Pueden infligir tanto dolor y sufrimientos en las personas como la violencia física y ser responsables por igual número de muertes. Con esta distinción entre *violencia directa* y *estructural*, Galtung amplía largamente la definición de violencia.

Por encima de todo, el concepto de *violencia estructural* tiene fundamentalmente dos dimensiones y asume dos tipos: una política, asociada a la represión, y una económica, relacionada con la explotación. Está íntimamente relacionado con las formas y condiciones de injusticia social. Es una noción que confiere un sentido mayor a la inequidad y convierte el desarrollo y los derechos humanos en un campo vital para la paz y la investigación para la paz.

El concepto de *violencia estructural* se relaciona así con las causas profundas de los conflictos. Para Galtung, en los conflictos existen causas y factores más fundamentales de lo que se expresan en el nivel de las controversias, que tienen que ver con estructuras, a menudo impalpables e invisibles, de opresión política y explotación económica.

Galtung considera que la *violencia directa* y *estructural* son igualmente importantes, pero difieren en su naturaleza y contenido. Mientras que en el caso de la *violencia directa* sus “consecuencias pueden ser rastreadas a personas y actores concretos” (Galtung, 1969, pp. 170-171), en el caso de la *violencia estructural* “esto ya no es significativo. Puede no haber una persona que directamente daña a otra persona”.

Como explica Galtung (1969, p. 173):

La violencia personal es evidente. El objeto de la violencia personal percibe, por lo general, la violencia y puede quejarse. El objeto de la

violencia estructural puede ser persuadido a no percibir esto en absoluto. La violencia personal representa cambio y el dinamismo - no solo la ondulación en las olas, pero las olas en las aguas que de otra manera serían tranquilas. La violencia estructural es silenciosa, no es evidente, es esencialmente estática; son las aguas tranquilas. En una sociedad estática, la violencia personal será vista, mientras que la violencia estructural puede parecer tan natural como el aire que nos rodea. La violencia estructural puede manifestarse, ya que se destaca como una enorme roca en un arroyo, lo que impide la libre circulación y crea todo el tipo de remolinos y turbulencias.

Este concepto amplio de violencia ha llevado a un concepto igualmente vasto de la paz y a la distinción entre *paz negativa* y *paz positiva*. En las propias palabras de Galtung (1969, p. 182),

Así como una moneda tiene dos caras, siendo una cara solamente un aspecto de la moneda, y no la moneda completa, la paz también tiene dos caras: la ausencia de violencia personal, y la ausencia de violencia estructural. Nos referiremos a ellas como paz negativa y paz positiva, respectivamente. La razón para el uso de los términos “negativa” y “positiva” es fácil de ver: la ausencia de violencia personal no conduce a una condición definida positivamente, mientras que la ausencia de violencia estructural es lo que nos hemos referido como justicia social, que es una condición definida positivamente (la distribución igualitaria del poder y de recursos). Así, la paz concebida de esta manera no es solo una cuestión de control y reducción del uso visible de la violencia, sino de lo que otros han denominado “desarrollo vertical”.

Desde este punto de vista, la paz no es solamente la ausencia de la guerra, estos no son elementos equivalentes. Lo que le anima es una visión de la paz, no como antónimo de la guerra, sino de violencias (Pureza, 2008, p. 3). Para este autor, un mundo sin guerra no sería necesariamente un mundo en paz. Galtung concibe una paz definida positivamente, que implica una reestructuración profunda de las relaciones humanas. Se acerca a la definición de paz de Adam Curle (1974) como una “situación caracterizada por un nivel reducido de violencia y un nivel alto de justicia”.

Por lo tanto, es evidente que Galtung define y transmite un concepto amplio y denso de paz, uno que implica mucho más que el silenciamiento de los fusiles. Se



basa en una visión integral de la paz y los conflictos, que establece un vínculo claro y fuerte entre el desarrollo, la justicia social y los temas de la paz. En su concepción, la *Peace Research* y las teoría(s) de paz y de lo(s) conflicto(s) están íntimamente relacionados con las teoría(s) de desarrollo, especialmente en lo que concierne la paz positiva (Galtung, 1969, p. 182). Hasta cierto punto, retrata la construcción de la paz como un cumplimiento de los derechos humanos de todas las generaciones.

Esta concepción ya amplia de la paz extendió aun más su alcance en la década de 1990 con la introducción por Galtung (1990) de los conceptos de *violencia cultural* y *paz cultural*. Estos conceptos se relacionan con la esfera simbólica de la vida humana. Galtung define como *violencia cultural* a los aspectos de la cultura que pueden ser usados para justificar o legitimar la violencia directa o estructural (Galtung, 1996, p. 196). Se refiere a elementos en áreas como la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, las ciencias, los medios y la educación que contribuyen para volver aceptable la violencia a los ojos de la sociedad.

La *violencia cultural* se vuelve una fuente de *violencia directa* al producir sentimientos y condiciones de odio, miedo, sospecha, distorsión y prejuicio (Jeong, 2000, p. 23) y un elemento sustentador de *violencia estructural* al proceder a la institucionalización de condiciones de subordinación y hegemonía. Un buen ejemplo de esto es el patriarcado.

Por lo tanto, mientras la *violencia directa* es un evento y la *violencia estructural* es un proceso, la *violencia cultural* constituye una invariante que remite a lo que el historiador francés Fernand Braudel consideraba la '*longue durée*'. Galtung (1996, p. 199) compara la *violencia cultural* con una falla sísmica, en oposición a los sismos (que representan, tal como la *violencia directa*, eventos) y a los movimientos de las placas tectónicas (que, así como la *violencia estructural*, constituyen procesos).

Así, Galtung llega a una definición triádica de la paz representada por la fórmula: Paz = paz directa + paz estructural + paz cultural, como oposición a los tres niveles y patrones de violencia que define: *violencia directa*, *violencia estructural* y *violencia cultural*. Para cada uno de estos patrones de violencia, Galtung hace corresponder tres modelos de *paz positiva*: *paz positiva directa*, basada en el amor, la bondad física y verbal y centrada en todas las necesidades básicas; la *paz positiva estructural*, enfocada en la sustitución de la represión por la libertad, de la explotación por la equidad, de la imposición por el diálogo, de la fragmentación por la solidaridad y de la segregación por la participación; y la *paz positiva cultural*, centrada en la sustitución de la legitimación de la violencia por la legitimación de la paz (Galtung, 1996, pp. 31-32).

El concepto de *paz positiva* figura como central para esta investigación, es su línea conductora y eje estructural en la medida en que identifica un horizonte de paz a nivel abstracto, da sentido a la labor por alcanzar la paz de los laboratorios de paz en Colombia y un marco de acercamiento al conflicto más complejo y comprensivo con vista a una paz durable y sostenible.

Galtung critica las visiones unidimensionales de la paz. Para este autor hay varios elementos y factores a nivel político, social, económico y cultural que deben abordarse para lograr una paz sostenible. Según él, teorías de paz basadas en un solo factor (como sea la democracia, el comercio libre, o los medios de producción) han tenido casi siempre resultados negativos (Galtung, 1996, p. 3). En la concepción de Galtung, hay que crear la paz en los varios niveles de la organización social y humana. La paz no puede ser obtenida sin el desarrollo de condiciones justas y equitativas, la eliminación de las varias formas de discriminación y el cambio de las estructuras sociales responsables de la violencia y la inequidad. Su línea orientadora y su horizonte político y social son la identificación y transformación de estructuras y sistemas de relación hegemónicos, con vista a la emancipación (Richmond, 2005, p. 118). Configura una investigación crítica para la paz.

La definición amplia de Galtung de la paz ha abierto así el espacio para una definición y comprensión profundas de la construcción de la paz. Las actividades que afrontan y abordan los aspectos estructurales y culturales de la violencia obtienen un nuevo sentido y significado. La construcción de la paz aparece asociada a la generación de procesos, actitudes, relaciones, valores y estructuras más inclusivas y sostenibles (ECP, 2006, p. 6). Es un proceso holístico que pasa por la generación de determinadas condiciones estructurales que garantizan la ausencia de violencia física organizada, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la vigencia de los derechos humanos y la repartición proporcional del poder a nivel institucional. Exige la generación de relaciones más sanas, tanto en términos horizontales —entre actores—, como verticales en diversos niveles.

En la concepción de Galtung la construcción de paz no es entendida solamente como la reducción de las violencias de los tres tipos. Galtung concibe igualmente la construcción de paz como la “transformación no violenta y creativa de los conflictos” (1996). Es una definición más dinámica y ‘positiva’ de la construcción de paz y más enfocada en el conflicto en detrimento de la violencia. Paz en este sentido aparece como el “contexto propicio a que los conflictos se desarrollen

de forma no violenta y creativa”. En este sentido, la construcción de paz se da con la transcendencia y transformación pacífica de las incompatibilidades entre las partes, abordadas de manera creativa (Galtung, 1996, p. 266), con la capacidad de superar el análisis dual de la realidad y la capacidad para desarrollar desde lo cotidiano nuevas dimensiones y alternativas de vida que superen las lógicas de la guerra y de los actores armados (ECP, 2006, p. 6).

Galtung pone énfasis marcadamente en la dimensión no violenta de la construcción de la paz. Para él debe haber coherencia entre los fines y los medios de la paz. Es un autor cuya mayor referencia es Gandhi y cuya obra es claramente inspirada por él. Se enfoca en la ‘paz por medios pacíficos’, como sugiere el título de un libro suyo. Asimismo, pone en relieve el elemento de ‘creatividad’ como fundamental e inherente a cualquier proceso de construcción de paz.

La paz y la construcción de paz asumen así alguna flexibilidad en Galtung. Este autor cree que la paz se sostiene en determinados valores y pilares centrales, pero que no hay que tener definiciones demasiado restringidas de paz. Galtung tiene un entendimiento plural de la paz. Plantea que no se debe pensar en paz, sino en paces. Según él, cuanto más refinada y enriquecida sea la definición de paz, más situaciones empíricas se descartarán en que todos los criterios se han satisfecho (Galtung, 1996, p. 13). Es una visión que da sentido a la profunda diversidad y heterogeneidad de situaciones y experiencias sociales de construcción de paz desde la base. De hecho, Galtung ha dado un aporte teórico y político valioso a las nuevas formas de ‘paz por medios pacíficos’, como los laboratorios de paz aspiran a ser. Para Galtung, la paz cada vez más depende de la gente que hace sus propias ‘políticas de paz’, en el nivel micro del individuo y la familia, en el nivel meso de la sociedad, y en el nivel macro de los conflictos inter-sociales e inter-territoriales, y no solo en las decisiones de las élites (Galtung, 1996, p. vii).

La concepción de construcción de paz de Galtung va mucho más allá del paradigma y noción dominante de las Naciones Unidas de *peacebuilding*, corporizada en la Agenda para la Paz de Boutros Ghali, como acciones de post-conflicto destinadas a la consolidación de la paz que ocurren después del cese de las hostilidades armadas. En su entendimiento, la construcción de paz es vista como cualquier proceso conducente a la transformación pacífica de relaciones sociales con vista a la paz positiva, razón por la cual puede ocurrir en distintas etapas de un conflicto, preceder o suceder a un acuerdo de paz y abarcar acciones usualmente asociadas a la prevención de conflictos, a la resolución de conflictos y a la reconstrucción post-bélica.

Así, por todos estos elementos, la teorización de Galtung es innovadora y de gran importancia para la comprensión y problematización de los temas de la paz y conflictos y al análisis de experiencias como los laboratorios de paz. Galtung es revolucionario en su identificación de la dimensión estructural y cultural de la violencia y de la paz y la descripción de sus elementos. Volveremos a estos temas y problemática en el capítulo final del libro.

## *Lederach y el enfoque de transformación de conflictos*

El último ‘idealista de la paz’ a que nos referiremos en este capítulo es John Paul Lederach. Este autor ha desarrollado un marco conceptual que es de gran valor e importancia para la teorización de la paz, que integra varios temas y dimensiones de la construcción de paz y la transformación de conflictos.

El trabajo de John Paul Lederach es especialmente importante para esta investigación, en la medida en que permite hacer el puente entre la dimensión estructural de la resolución y transformación de conflictos, con lo que hemos llamado aquí la dimensión inclusiva, es decir, con el papel de la sociedad civil y los actores sociales de base en la construcción de la paz. Por lo tanto, es una teorización de importancia particular para el análisis y encuadramiento del enfoque de construcción de paz de los laboratorios de paz. Este autor se encuadra en la ‘tradición’ y enfoque teórico de la paz comúnmente designado como la transformación de conflictos.

Este es un enfoque teórico que se distingue tanto de la gestión como de la resolución de conflictos. Lederach comenzó a utilizar el término *transformación de conflictos* en la década de 1980. El autor cuenta que este se desarrolló en el marco de su experiencia en América Central, cuando se dio cuenta de que muchos de sus colegas latino-americanos expresaban muchas inquietudes y sospechas respecto al concepto convencional de resolución de conflictos. Para ellos, la resolución encerraba el peligro de cooptación, al llevar el riesgo de que se ignoraran cuestiones importantes y legítimas, así como cambios necesarios (Lederach: 2003, p. 3).

La existencia de conflictos tiene una razón y un significado social y evidencia a menudo problemas sociales y políticos profundos. Por lo tanto, soluciones rápidas a los conflictos, como a menudo buscan o plantean la resolución de conflictos, podrían significar solamente la ocultación de estos y el mantenimiento de las estructuras y relaciones de poder prevalecientes. Así, Lederach planteó una nueva

terminología y concepto: la *transformación de conflictos*. Es un enfoque que se basa en dos elementos e hipótesis: en primer lugar, en la constatación de que el conflicto está continuamente presente y raya en la normalidad en las relaciones humanas. En segundo lugar, en la convicción de que el conflicto constituye un motor potencial de cambio constructivo (Lederach, 2003, p. 15).

El enfoque de transformación de conflictos purga de esta forma a los conflictos de la connotación negativa *per se* que encierran los enfoques de gestión y resolución y enfatiza el potencial de los conflictos como motor y canal de transformación. Los conflictos pueden ser tan destructivos como constructivos. Lederach (2003, p. 18) plantea los conflictos, no solo como amenazas, sino también como oportunidades y posibilidades de innovación, cambio y crecimiento.

La transformación de conflictos se centra en los aspectos dinámicos de los conflictos sociales. De hecho, las percepciones, las relaciones y los patrones de comunicación continúan cambiando a lo largo del progresar de los conflictos (Jeong, 2000, p. 37). Los conflictos nunca son estáticos, son un fenómeno esencialmente dinámico y dialéctico (Lederach, 1997, p. 63).

Así, el enfoque de transformación de conflictos tiene como meta no la eliminación de los conflictos en las relaciones humanas, sino su transformación positiva. Se centra en el estímulo a procesos de cambio creativo que reduzcan la violencia en todas sus formas y aumenten la justicia (Lederach, 2003, p. 22). Es un proceso que tiene que ver con lo que Lederach (2008, pp. 12-13) llamó la *imaginación moral*, es decir, la capacidad de imaginar y proyectar algo con base en el mundo real, pero orientado a un horizonte ideal y de transformación. En su base está la transformación de las formas destructivas de los conflictos en constructivas y trascender los ciclos de violencia (Burgess y Burgess, 2003; Lederach, 2008, p. 23). Los defensores de la terminología de la transformación de conflictos insisten en la necesidad de distinguir entre conflicto y violencia, y que su propósito normativo no es la eliminación de los conflictos (Dudouet, 2005, p. 56).

La transformación de conflictos ofrece por lo tanto una perspectiva sobre los conflictos que es diferente de la resolución de conflictos en varios aspectos. El enfoque y concepto de resolución implica encontrar una solución a un problema específico; se busca una conclusión; hay un propósito y naturaleza definitivos. Al contrario, la transformación busca un cambio. Plantea que los conflictos no se pueden resolver, sino solamente transformar; la resolución es vista como una ilusión (Väyrynen, 1991, p. 23).

Asimismo, mientras el concepto de resolución de conflictos está asociado a una búsqueda intencionada de medios para satisfacer los intereses explícitos de las partes en conflicto, la transformación de conflictos pasa por la transformación de las mismas partes, de sus intereses y acciones (Wallensteen, 1991, p. 129). La transformación de conflictos busca volver las partes en actores y los intereses en valores (Galtung, 1996, p. 95).

La resolución de conflictos se centra en los procedimientos y resultados, la transformación de conflictos se centra en el proceso. Plantea que la búsqueda y construcción de la paz es una tarea que nunca termina. La paz no es un estado final, es un proceso (Dunn, 2005, p. 83). Como lo señala Galtung (1996, p. 17), “no habrá ni paz total, ni la salud total para el año 2000, o cualquier otro año. Lo que puede suceder es un mejor equilibrio entre la paz y la violencia, lo que significa más y mejor paz”.

En el concepto de la transformación de conflictos la paz no es vista como un fin estático, sino como una continua evolución y desarrollo. Lederach la retrata como un ‘proceso-estructura’, un fenómeno que es a la vez dinámico, adaptable y cambiante (Lederach, 2003, p. 20). Así, el modelo de transformación de conflictos propuesto por Lederach se centra en el concepto de construcción de paz como un proceso dinámico y continuo de búsqueda y cimentación para la paz. En sus palabras,

Aquí construcción de paz se entiende como un concepto amplio que engloba, genera y sostiene toda la gama de procesos, enfoques y etapas necesarias para transformar los conflictos hacia relaciones más pacíficas y sostenibles. El término implica, pues, una amplia gama de actividades y funciones que tanto preceden como siguen a los acuerdos de paz formales. Metafóricamente, la paz es vista no solo como una etapa en el tiempo o una condición. Se trata de una construcción social dinámica. Esta conceptualización requiere un proceso de construcción, que involucra inversión y materiales, diseño arquitectónico y coordinación de trabajo, establecimiento de fundaciones y trabajo acabado detallado, así como un mantenimiento continuo. (Lederach, 1997, p. 19)

Para este autor, el término *proceso de paz* adquiere un significado totalmente nuevo, que va mucho más allá de su significación convencional como ‘negociaciones de paz’. Mientras un proceso de paz en su sentido convencional se enfoca en los actores enfrentados en armas y tiene como base sus ritmos, agendas y posicionamientos políticos, y como objetivo la obtención de la firma de un acuerdo entre ellos como

solución para colocar término a la violencia (ECP, 2006, p. 6), un *proceso de paz* para Lederach es un proceso continuo, complejo y multifacético de roles, funciones y actividades múltiples e interdependientes que contribuye a la transformación constructiva de los conflictos (Lederach, 1997, p. 63). Es fundamentalmente un proceso de construcción de paz. Se trata de mucho más que negociaciones de dirigentes políticos y mediadores, y del cese al fuego; pero también supone más que el entendimiento convencional de las Naciones Unidas de actividades de *peacebuilding* y *peacemaking* como “enviados de alto perfil viajando entre las capitales, soldados de cascos azules en la vigilancia de las calles, organizaciones no gubernamentales suministrando alimentos o asesoramiento”.

En gran medida, Lederach retrata la construcción de paz como un proceso de cambio social. Para él, el cambio social es indispensable para lograr una transformación sostenible de los conflictos. La paz sostenible implica el proceso de transformación representado por el paso de una etapa de enfrentamiento a una de negociación y relaciones pacíficas; de una condición de extrema vulnerabilidad y dependencia a una de autosuficiencia y bienestar, y de una espiral de violencia y destrucción a una espiral de paz y desarrollo (González, 1997, p. 121). Pasa por la eliminación de todas las formas y relaciones de exploración que conducen a los conflictos y por un proceso de generación de justicia social (McDonald, 1998). Asimismo, requiere la generación y movilización de la imaginación moral para construir una red de relaciones que incluya a nuestros enemigos, la superación de la polaridad dualista y la aceptación del riesgo de avanzar hacia lo desconocido (Lederach, 2008, p. 24).

Este proceso de cambio social dirigido a la paz tiene fundamentalmente dos marcas: es estructural e inclusivo. De hecho, la *transformación de conflictos* de Lederach es un enfoque estructural e inclusivo para la paz. Como Galtung y Burton, Lederach también hizo una contribución importante al análisis de los elementos estructurales de los conflictos y de la dimensión estructural de la resolución y transformación de conflictos, pero lleva más lejos sus teorías.

Tal como en el caso de los dos autores anteriormente mencionados, este es un enfoque grandemente basado y centrado en las causas profundas de los conflictos. Según Lederach, la recomposición de relaciones sociales defectuosas solo puede hacerse sobre la base de la identificación y comprensión sistemática de las condiciones socio-económicas, políticas y culturales que son la base de un conflicto y afectan a la población (González, 1997, p. 123).

Este autor entiende la construcción de paz como transformación y reestructuración de relaciones (Lederach, 1997, p. 71). Propone la reestructuración de las infraestructuras socioeconómicas, que constituyen la génesis principal de las relaciones sociales, y el análisis y revisión del sistema político, jurídico y cultural, que igualmente condicionan en gran medida las relaciones sociales (González, 1997, p. 123). El enfoque de transformación de conflictos confiere particular atención y énfasis a la violencia estructural (Dudouet, 2005, p. 40).

Esto es necesariamente un proceso a largo plazo, que no consigue los resultados inmediatos, concretos y palpables que la gestión o la resolución de conflictos pueden obtener (Väyrynen, 1991, p. 21). Por lo tanto, el marco conceptual definido por Lederach propone el replanteamiento del marco temporal de la construcción de paz. Hay la necesidad de re-conceptualizar los marcos de tiempo para la planificación y la acción para la construcción de paz. Para Lederach, hay una necesidad de pasar “de las cuestiones a los sistemas” (1997). La paz sostenible requiere que se tomen en consideración tanto “los temas inmediatos y micro de los conflictos, como las problemáticas más amplias y sistémicas” (Lederach, 1997, p. 55). Según este autor debe haber una articulación de estrategias de construcción de paz para el corto y el largo plazo. Es necesario abordar las crisis de corto plazo, pero también desarrollar la capacidad de pensar en unidades de tiempo más largas. Esto requiere la capacidad de pensar en décadas en vez de semanas o meses. Como afirma, “tomará tanto tiempo para salir de un conflicto armado como lo que se tardó en entrar en él” (Lederach, 1997, p. 78).

De igual forma, el enfoque de transformación tiene mucho que ver con la inclusión. Se enfoca al empoderamiento de una población marginada, buscando que los actores sociales desfavorecidos salgan de una posición social de discriminación y vulnerabilidad hacia la autosuficiencia y el bienestar. En la perspectiva de Lederach (2003, p. 21), “la gente debe tener acceso y voz en las decisiones que afectan sus vidas”. La *transformación de conflictos* se encuadra en un marco de cambio social direccionado a la promoción de la justicia, entendida como satisfacción de las necesidades humanas básicas, como participación y empoderamiento social.

En resumen, la *transformación de conflictos* requiere tanto un cambio estructural como relacional. De hecho, Lederach ubica la transformación en cuatro niveles: personal, relacional, estructural y cultural. La dimensión personal de la transformación se refiere a los cambios desarrollados en los individuos y deseados para los individuos.



La dimensión relacional concierne los cambios en las relaciones interpersonales y sociales. La dimensión estructural centra su atención en las condiciones y estructuras sociales que causan y sostienen las expresiones violentas de los conflictos. La transformación estructural busca construir y organizar formas sociales, económicas, políticas e institucionales que satisfagan las necesidades humanas básicas y proporcionen participación y acceso (Lederach, 2003, pp. 23-25). Por fin, la transformación cultural se vislumbra como la identificación de los patrones culturales que contribuyen para la erupción de la violencia y construcción de mecanismos culturales para su manejo pacífico y constructivo (Lederach, 2003, p. 27). Lederach plantea así la transformación de conflictos, no como un proceso de cambio, sino como procesos de cambio. Es una red interconectada de relaciones, procesos e iniciativas a múltiples niveles (Lederach, 2003, p. 38).

Teniendo en cuenta todos estos elementos, lo que llama la atención en Lederach es la naturaleza global y holística de su análisis. Es transversal, tanto en los horizontes temporales, estructuras, procedimientos y grupos sociales involucrados. Lederach trata de teorizar toda una 'infraestructura para la paz' y un "enfoque integrado a la construcción de la paz" (Lederach, 1997, p. 79) que converge en gran medida con la filosofía de paz de los laboratorios y encuentra en esta iniciativa un eco y una experiencia social que dialoga con este autor.

## El papel de la sociedad civil en la transformación de conflictos y el '*peacebuilding from below*'

Después de haber distinguido diferentes enfoques teóricos a la paz y de haber analizado algunos elementos conceptuales de la construcción de paz, en particular su dimensión estructural, en este punto nos vamos a centrar más en lo que puede ser un enfoque inclusivo de transformación de conflictos, introduciendo algunos elementos analíticos respecto al papel de la sociedad civil y de los actores sociales de base en la construcción de la paz.

Una pregunta fundamental en la discusión teórica de la paz es: ¿quiénes son los actores fundamentales de la construcción de la paz?, ¿los actores armados?, ¿el Estado?, ¿las élites?, ¿la sociedad civil? ¿Qué rol pueden tener y tienen estos actores? ¿Quién tiene más potencial para ser agente de transformación de conflictos? ¿Y, en particular, qué rol

desempeña o puede desempeñar específicamente la sociedad civil? ¿De qué forma la sociedad civil contribuye para la transformación estructural e inclusiva de los conflictos?

El papel de la sociedad civil en los conflictos y la construcción de la paz es también objeto de debate y controversia, siendo tanto su potencial como sus limitaciones subrayados por muchos. De hecho, los grupos de la sociedad civil no son solo víctimas de los conflictos, son actores. Influyen, participan, reaccionan, condicionan, y se desarrollan en las dinámicas de los conflictos.

Uno de los autores que ha aportado una mayor contribución a la comprensión del papel de la sociedad civil es el ya mencionado John Paul Lederach. Este autor caracteriza diferentes niveles en la construcción de la paz, que implican a diferentes actores. Sostiene que todos los sectores de la sociedad deben participar en la construcción de la paz. De hecho, Lederach es uno de los autores que, tanto desde un punto de vista teórico, como práctico, ha proporcionado un argumento más convincente en contra de la visión de la resolución de conflictos como un proceso de nivel superior de élite y a favor de la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la construcción de la paz.

Este autor ha desarrollado un marco de análisis de los conflictos y de la transformación de los conflictos que pone de manifiesto los distintos niveles de la construcción de la paz. Este marco se basa en una pirámide compuesta por tres niveles de actores y liderazgos. El nivel 1 corresponde a los principales dirigentes políticos y militares de un conflicto ubicados en el ápice de la pirámide; se concentra fundamentalmente en negociaciones entre los más altos representantes de las partes de los conflictos (Lederach, 1997, pp. 39-40). El nivel 2 se refiere a los dirigentes intermedios nacionales y regionales, así como a actores prominentes y respetados, en sectores e instituciones como la salud, la educación, la religión, las universidades y las jerarquías militares; finalmente, el nivel 3, que constituye la base de la pirámide, concierne a los dirigentes de base y a la población expuesta al conflicto. Incluye a la gran mayoría de la población afectada por el conflicto, 'la gente común', las poblaciones desplazadas, los dirigentes locales y las ONG de base local (Woodhouse, 1999, p. 25).

Para Lederach los tres niveles son igualmente importantes para construir la paz. Todos deben ser objeto de estrategias de transformación de conflictos y no solo la parte superior de la pirámide, como suele ocurrir en relación con la gestión y resolución de conflictos. El enfoque de construcción de paz de Lederach no es jerárquico, pero este autor hace especial hincapié en el papel del segundo nivel de la pirámide. Para él, los actores de gama media tienen el mayor potencial en la construcción de

la paz y transformación de los conflictos, ya que están en una situación única y privilegiada entre la parte superior y el nivel de las bases para hacer el puente entre los tres niveles y desarrollar canales y procesos entre ellos (Lederach, 1997, p. 94). Así, tienen un potencial único para enlazar las iniciativas oficiales con las no oficiales, o sea el *track 1* con el *track 2*. Además, en la perspectiva de Lederach, los actores en este nivel no se restringen a las amarras políticas del cálculo gubernamental, ni a las limitaciones de la necesidad cotidiana de sobrevivencia del nivel de base (Lederach, 1997, p. 42). Tienen más flexibilidad de movimiento y de acción.

Esta es una perspectiva que da especial énfasis a una forma inclusiva de construcción de paz, en contraposición con un marco meramente de élite y de sentido de arriba hacia abajo. La construcción de la paz es pues una tarea de varios niveles y las fundaciones de la paz deben comenzar a ser construidas tanto desde la cima como desde la base de la pirámide. El modelo conceptual de Lederach es un enfoque multinivel a la construcción de la paz. Subraya la importancia de la ‘construcción de paz desde abajo’, pero también desde la parte superior. En juego no está desprestigiar la importancia de los procesos de paz de nivel superior (1), sino mostrar sus limitaciones como una estrategia y un enfoque aislados de resolución o transformación de conflictos. Como señaló Lederach (1997, p. xvi),

Creo que la naturaleza y características de los conflictos contemporáneos sugieren la necesidad de un conjunto de conceptos y enfoques que van más allá de la diplomacia estatista tradicional. Construir la paz en los conflictos de hoy en día exige un compromiso a largo plazo de establecer una infraestructura a través de distintos niveles de una sociedad, una infraestructura que potencie los recursos para la reconciliación desde el interior de la sociedad y maximice la contribución desde el exterior. En resumen, la construcción de la “casa” de la paz se basa en una plataforma de múltiples actores y actividades encaminados a lograr y mantener la reconciliación.

El análisis de Lederach es muy centrado en el desarrollo de una “circunscripción de paz” (1997, p. 94), es decir, en la participación de actores sociales en la construcción de una infraestructura para la paz. La construcción de una circunscripción de paz implica la utilización de los recursos locales y la participación de toda la población afectada de forma que haya una apropiación social amplia de los procesos de paz (Woodhouse, 1999, p. 25; Mouly, 2011, p. 305). De hecho, la sociedad

civil es un elemento crucial para el cambio social, factor que vincula la dimensión estructural de la resolución y transformación de conflictos con la necesidad de un enfoque inclusivo.

La obra de Lederach le da un significado especial a lo que generalmente la literatura anglosajona llama *peacebuilding from below*, es decir, la construcción de paz desde abajo, con base en las comunidades. Geraldine McDonald (1997, pp. 1-2) define este concepto como

[...] tanto una práctica, como una actitud. En cuanto a la práctica, significa una construcción de paz comprometida al nivel local con la gente que vive en el medio de la violencia. Como una actitud, se centra en la suposición que los más afectados por la violencia, que entienden y tienen que vivir con sus consecuencias, son los mejor situados para encontrar las soluciones apropiadas para ella.

Esta es una perspectiva que ha tenido una importancia creciente tanto en la comunidad académica, como en las instituciones internacionales. El potencial de paz de las comunidades locales ha sido enfatizado más y más por varios autores de renombre (Curle 1971, Lederach 1997, Fetherston, 1998, Barnes 2005, Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, Richmond, 2009), que subrayan que

[...] procesos de construcción de paz eficaces y sostenibles deben basarse no solo en acuerdos de paz desarrollados y firmados por las élites, sino, de modo más importante, en la potenciación de las mismas comunidades asoladas por la guerra, que, deben construir a partir de ellas mismas la paz desde abajo. (Ramsbotham et al. 2005, p. 215)

De hecho, la construcción de la paz debe partir y enraizarse en el mismo suelo en que el conflicto se desarrolló (Lederach, 1997, p. 107) y solo se logrará mediante la participación de los protagonistas y las víctimas de la violencia en cada territorio y localidad del conflicto (McDonald, 1998, p. 93). Los más afectados por la violencia tienen un conocimiento profundo de los problemas y necesidades reales. Como Catherine Barnes (2005, p. 7) afirma, “las personas y las sociedades deben crear sus propios sistemas para manejar sus diferencias. Mientras que los gobiernos deben desempeñar un papel crucial en este proceso, las personas son la clave para la transformación de conflictos a largo plazo”.

En esta nueva visión de paz integrada en el enfoque de transformación de conflictos, la solución no es traída de afuera por un actor tercero, nace y emerge de los

recursos de la gente (Woodhouse, 1999, p. 24). Todos los actores sociales son vehículos fundamentales de estrategias y procesos de paz. Los procesos de transformación se operan a diversos niveles. Pasan por cambiar las estructuras y las personas. La transformación de la sociedad es el resultado indirecto de la transformación de los individuos y no solo de la reestructuración institucional y las reformas sociales y políticas (Bush y Folger 1996, p. 20 citados por Mitchell, 2002, p. 12). El cambio social pasa por la concientización y el empoderamiento de los individuos, elementos que dan significado y relevancia a los procesos de construcción de la paz desde la base, por más circunscritos que sean.

Pero, en lo que toca al potencial de la sociedad civil en la transformación de conflictos, otras cuestiones, temas y autores merecen alguna mención y análisis:

En primer lugar, la sociedad civil tiene un papel esencial en el marco de negociaciones y acuerdos de paz. Para obtener una paz sostenible y un acuerdo de paz duradero se requiere una fuerza popular de apoyo y consolidación. En términos de Lederach, se requiere una ‘circunscripción de paz’.

Como destaca Catherine Barnes (2005, p. 20),

Los procesos de paz suelen ser incompletos e imperfectos. Los conflictos no se transforman solamente por acuerdos. [...] Si el público y la sociedad civil organizada han sido excluidos del proceso, o creen que no se han ocupado de sus necesidades reales, son menos propensos a trabajar activamente en su aplicación. Sin un electorado amplio como base, hay pocas salvaguardas en contra de aquellos que quieren hacer fracasar el acuerdo.

De hecho, el rol de construcción de paz de la sociedad civil se relaciona fundamentalmente con un factor: la sostenibilidad de la paz. Un proceso de paz solo es sostenible si es apropiado por la población. Para que la paz se consolide y gane raíces hay que crear la paz entre vecinos y en el seno de las comunidades. La sostenibilidad de la paz solo puede ser endógena. Si Clemeanceau dijo un día que la guerra era demasiado grave para confiársela solo a los militares, podría también decirse hoy que la paz es demasiado importante para confiársela solo a los políticos. La ‘gente’ es la clave para desarrollar una infraestructura y una cultura de paz. Así, cualquier estrategia de largo plazo para una paz sostenible tiene que pasar por la sociedad (con o sin el apodo de civil). El rol de las organizaciones sociales es fundamental para ampliar y consolidar los procesos de apropiación de la paz (Mouly, 2011, p. 304).

La función cultural y educativa de la sociedad civil es uno de los aspectos centrales de la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. La sociedad civil tiene un papel crucial en el tratamiento de los elementos de lo que Galtung (1990) llama violencia cultural, a través de medios tales como la educación para la paz, los medios de comunicación para la paz o el arte para la paz. Es esencial en el proceso de transformación (o perpetuación) de las actitudes y patrones relacionales profundos que originan la violencia (Barnes, 2005, p. 14) y en la promoción de la tolerancia y de los valores proclives a la paz. Esto contribuye, en el largo plazo, a la creación de una cultura de paz, que es, como la paz estructural, el único camino hacia una paz sostenible y duradera.

La sociedad civil tiene un papel vital en la transformación de los conflictos. Es un agente esencial de cambio. Tiene un potencial en el empoderamiento de los grupos sociales discriminados y excluidos y en el tratamiento de las causas de los conflictos. Aunque no tenga el poder, ni la capacidad política o militar de los Estados para incidir en las estructuras, tiene una fuerza de proposición, influencia y lobbying y una capacidad de movilización y concientización, que es de gran importancia para la transformación de un conflicto. Asimismo, es imprescindible para la creación de consensos políticos y la aceptación de la sociedad en general (Fischer, 2006, p. 20), factores sin los cuales no puede verdaderamente haber paz.

De hecho, la sociedad civil es a menudo una fuente de creatividad. Dentro de la sociedad civil pueden (más fácil y libremente) surgir iniciativas que traten la violencia en formas nuevas e innovadoras y creen formas alternativas y sin coerción para tratar los conflictos y abordar sus causas. Los actores sociales no están restringidos a los trámites y constreñimientos de los actores tradicionales como el Estado y los actores armados, ni se confinan a las amarras políticas de su cálculo de poder. Pueden actuar y manejar de forma diferente y hacer cosas que los gobiernos no pueden hacer. Este es precisamente el caso y el propósito de los laboratorios de paz.

La vitalidad y la fuerza de la sociedad civil determinan igualmente su capacidad para la construcción de la paz y la capacidad de la sociedad misma para la aceptar y desarrollar la paz. La sociedad civil puede desempeñar un papel en la apertura y ampliación de espacios para la interacción sin violencia, lo que finalmente representa una herramienta de construcción de paz (Pearce, 2007, p. 27). Poner fin a las guerras se civiles requiere la reconstrucción de las sociedades con principios que son inclusivos y proporcionan una mayor participación en los asuntos de Estado a los dirigentes y los ciudadanos (Wallenstein, 2002, p. 159).

2

# Capítulo





# Los enfoques históricos para la paz y el conflicto armado en Colombia

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”  
*John F. Kennedy*

## Introducción

El conflicto armado en Colombia es uno de los más largos y más violentos en el mundo. Varios niveles y dimensiones de violencia se mezclan en él. Colombia presenta trágicamente algunos récords mundiales en términos de desplazamiento interno, secuestros, narcotráfico, homicidios políticos y asesinatos de sindicalistas. A menudo se ha descrito como un conflicto sin solución alguna. Su erupción se sitúa en la década de 1960, pero sus raíces se remontan a las décadas de 1940 y 1950 (González, Bolívar y Vázquez, 2003, p. 264; Chernick, 2008, p. 64).

Corresponde a lo que parte de la bibliografía de resolución de conflictos designa como un conflicto intratable (*intractable conflict* en su original), es decir un conflicto de alta intensidad y complejidad que se prolonga por un largo periodo de tiempo, con raíces profundas y muchos elementos y actores en juego, y cuya resolución es bastante difícil (Burgess y Burgess, 2003). Más de cuarenta años de guerra y derramamiento de sangre no han sido capaces de traer un lado victorioso. De la misma manera, 27 años de negociaciones de paz, con diferentes modelos y enfoques, han conducido a más desilusiones y procesos de paz fracasados. Varios intentos fallidos de resolución acompañan el conflicto colombiano.

Este capítulo tiene fundamentalmente dos etapas: en primer lugar, busca caracterizar los enfoques políticos dominantes al conflicto armado y a la paz en Colombia, por intermedio de un análisis histórico de las políticas presidenciales de paz (y guerra) y los intentos de resolución o gestión del conflicto armado. En segundo lugar, hace un examen crítico de estos enfoques y políticas, para identificar sus limitaciones y analizar algunos de los factores por los cuales han fallado. Particular énfasis se le confiere a las últimas políticas vigentes, en concreto, la política de seguridad democrática del gobierno Uribe y el “Plan Colombia”.

El capítulo no pretende hacer un análisis histórico exhaustivo y profundo de las políticas para la paz en Colombia, ni tiene en cuenta las experiencias alternativas de construcción de paz desde la base desarrolladas en el país. Tiene como finalidad tan solamente la descripción del contexto nacional e histórico de construcción de paz en donde los laboratorios de paz se insertan para poder subrayar la especificidad y originalidad de su enfoque.

## Los enfoques históricos del conflicto armado y de la paz en Colombia

En más de cuarenta años de guerra en Colombia distintas formas, métodos, instrumentos y modelos han sido utilizados y desarrollados para hacer frente al conflicto. Sin embargo, en términos generales, históricamente se pueden identificar tres enfoques políticos principales frente al conflicto armado y la paz en Colombia, que no constituyen necesariamente modelos de resolución o transformación de conflictos *strictu sensu*.

Hasta cierto punto y en diversos momentos y periodos, todos estos enfoques se han mezclado y cruzado. Estos no son enfoques completamente desconectados y se han utilizado de forma simultánea y articulada por la mayoría de los presidentes de Colombia durante los últimos treinta años.

## El enfoque militar

La opción militar ha sido el enfoque más recurrente en Colombia desde el comienzo del conflicto. Bajo diferentes estrategias y modalidades, ha sido utilizado por todos los presidentes de Colombia durante los últimos cuarenta años. Incluso aquellos que han llevado a cabo negociaciones de paz han recurrido simultáneamente o alternadamente a la opción militar.

Este enfoque conlleva a un esfuerzo para ganar la guerra, para derrotar la otra parte, para llegar a una victoria sobre la guerrilla, por medios militares. En algunos casos su objetivo es debilitar la insurgencia a tal grado que se les fuerza a negociar en los términos dictados por el gobierno, basándose en la perspectiva (a menudo equivocada) que el poder militar se convierte en una ventaja política en una negociación. Es un enfoque que está directamente asociado y ligado a la coacción y que implica la búsqueda de dominio del otro e imposición de un orden sobre él (Wallenstein, 1991, p. 129). En el ámbito de este acercamiento, la insurgencia armada se trata como un problema de orden público y no de orden social.

Desde el comienzo del conflicto armado, todos los gobiernos colombianos han desarrollado campañas estratégicas y militares para derrotar a la guerrilla: desde el bombardeo de Marquetalia en 1964, a la ‘guerra integral’ de César Gaviria o la ‘seguridad democrática’ de Álvaro Uribe. En este proceso, se ha recurrido incluso a la creación, apoyo y formación de grupos paramilitares, con efectos muy negativos para la dinámica del conflicto.

En términos históricos, la mayor influencia conceptual de este enfoque militar ha sido la doctrina de contrainsurgencia de los EE. UU. Su rostro y configuración actuales tiene dos nombres: “Plan Colombia” y la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”. Analizaremos en seguida estos elementos.

El enfoque militar aplicado al conflicto colombiano ha sido influenciado históricamente, en términos conceptuales y políticos, fundamentalmente por la doctrina norteamericana de contrainsurgencia<sup>1</sup> (Stokes, 2005, p. 84). De forma explícita

---

1 La contrainsurgencia es una doctrina militar nacida y estructurada en el contexto tumultuoso de la Guerra Fría, cuya finalidad principal era contener la propagación del comunismo. Después de la Revolución Cubana en 1959, se convirtió en la receta para la guerra en América Latina contra la emergencia de guerrillas marxistas por todo el hemisferio. Como explica Stokes (2005, pp. 58-59), “para resistir a lo que se caracterizó como la expansión comunista

o implícita, ha establecido y apoyado las directrices para el enfoque militar al conflicto (y la necesidad de tener uno).

Los manuales de contra-insurgencia norte-americanos han conferido históricamente las directrices a los sucesivos gobiernos colombianos para la guerra contra las guerrillas.

Así pues, la contrainsurgencia estadounidense no solo proporcionó la base conceptual de las prioridades estratégicas de Colombia en la lucha contra la guerrilla, sino también abrió el espacio para el surgimiento y desarrollo de grupos paramilitares y tácticas de ‘guerra sucia’, en la medida en que convirtió la población civil en un elemento crucial en la guerra. La contrainsurgencia patrocinada por los EE. UU. promovía la vigilancia, control y represión de sectores pacíficos de la sociedad civil considerados izquierdistas (Stokes, 2005, pp. 58-59). El fin era ‘remover el agua de los peces’, siguiendo la famosa metáfora de Mao Tse Tung, es decir, eliminar todos los que se podrían considerar como la base de apoyo de la guerrilla, en lugar de apuntar directamente a la guerrilla.

Dentro del discurso contrainsurgente, la subversión fue definida de forma tan amplia que las fuerzas sociales progresistas pacíficas y prácticamente cualquier forma de disidencia se vincularon a la subversión y la insurgencia. Esto contribuyó a una legitimación ideológica de la represión y del terror dirigido a la sociedad civil (Stokes, 2005, p. 59), así como a evitar cualquier forma de resolución pacífica del conflicto y cualquier posibilidad de reformas estructurales progresistas en Colombia. Como subrayó Stokes (2005, p. 78), la estrategia contrainsurgente de EE. UU. ha tratado de ‘inmunizar’ el Estado colombiano de presiones populares reformistas, a fin de preservar un orden social favorable a los importantes intereses estratégicos y económicos estadounidenses en Colombia.

Pero en Colombia la contrainsurgencia norteamericana no representa un fósil de la Guerra Fría. Está viva y ha determinado en gran medida los enfoques oficiales de Colombia al conflicto. El desarrollo del comúnmente designado “Plan Colombia” por los EE. UU., a partir del 2000, es una clara evidencia de esto.

---

en toda América Latina, la doctrina de contrainsurgencia de EE. UU. preveía una guerra que debería librarse en los frentes ideológico, político y militar. El papel de seguridad interna de los receptores militares requería la vigilancia de sus propias poblaciones para evitar que las fuerzas sociales indígenas desafiaron el *statu quo*, orientado hacia lo que se percibía como los intereses nucleares de EE. UU.: el mantenimiento de gobiernos favorables a los EE. UU. y de economías nacionales abiertas a la penetración del capital norteamericano.”

## El “Plan Colombia”

“Frente a este escenario difícil y al creciente problema del tráfico de droga en Colombia, Andrés Pastrana, presidente conservador elegido en 1998, propuso lo que se planteaba como una especie de “Plan Marshall’ para la paz en Colombia” (Vaicius, 2002, p. 21), que apuntaría a solucionar los problemas fundamentales e interconectados del país, como el conflicto armado, el narcotráfico y el subdesarrollo. Sin embargo, cuando este plan fue presentado a los EE. UU. para su financiación y apoyo y renegociado con la administración Clinton, el plan multifacético y multidimensional de la formulación original se transformó y de cierta forma, se desvirtuó. Siguiendo los intereses geoestratégicos y de seguridad nacional de Washington, lo que fue originalmente concebido como un ‘Plan Marshall’ para la paz, se volvió un plan antidrogas con finalidades contrainsurgentes acopladas.

Nació así, en el año 2000, el “Plan para la Paz, Prosperidad y Fortalecimiento Institucional”, informalmente conocido como “Plan Colombia”. A pesar de lo que planteaba nominalmente su título oficial, este plan estructuró, por encima de todo, un enfoque represivo a la problemática de las drogas, basado en una política de erradicación de los cultivos de uso ilícito por intermedio de fumigaciones con glifosato. Se buscaba la solución al problema de las drogas a través de la reducción de la producción y la incidencia sobre la variable de la oferta (y no sobre la del consumo).

Sin embargo, el elemento más notorio del Plan Colombia es que ha operado una militarización de la lucha contra las drogas (Pardo y Carvajal, 2004, p. 206), apoyada en el supuesto de la relación del narcotráfico con la insurgencia y en la controvertida tesis de Paul Collier (1999) según la cual la subversión armada es el producto de agendas económicas y que el tratamiento de los conflictos debe pasar por la eliminación de los medios de financiación de los grupos armados. El Plan tuvo una dotación financiera de 1,3 billones de dólares de ayuda<sup>2</sup>, de la cual 80% se enfocaba a la ayuda militar y solamente 20% en ayuda socio-económica (desarrollo alternativo, derechos humanos y justicia). Se caracterizó fundamentalmente por la entrega de equipo militar estadounidense a Colombia (Hylton, 2003, p. 86),

---

2 Del paquete financiero aprobado por el Congreso de EE. UU. 860 millones de dólares se destinaban a Colombia y el dinero restante a Bolivia, Perú y Ecuador.

principalmente helicópteros Black Hawk y Huey, pero también por el entrenamiento de las fuerzas armadas, la policía y los servicios secretos. Más que un plan de paz, el Plan Colombia se volvió un plan de guerra.

La puesta en marcha del Plan Colombia (desde el año 2007 en su segunda fase) ha pasado esencialmente por operaciones en el sur de Colombia (Putumayo y Caquetá), donde las FARC tienen gran fortaleza y los cultivos de uso ilícito están muy difundidos. Este hecho llevó a Doug Stokes (2005, pp. 101-104) a defender que los verdaderos objetivos del Plan Colombia son anti-insurgentes y no anti-narcóticos. Sostiene esta tesis con base en el hecho que el Plan Colombia busca incidir sobre las zonas de mayor implantación de la guerrilla (en el sur del país) y no de los grupos paramilitares (en el norte y oriente), en donde hay igual proliferación de cultivos de uso ilícito y vínculos más fuertes con el comercio de drogas que los evidenciados con la insurgencia.

De hecho, después del 11 de septiembre, el Congreso de los EE. UU. aprobó oficialmente en 2002 que los recursos del Plan Colombia fueran destinados también a enfrentar la subversión armada (designada como terrorista), hasta entonces explícitamente solo reservados a la lucha antidroga (Pardo y Carvajal, 2004, p. 195)<sup>3</sup>.

Por lo tanto, el Plan Colombia marca indudablemente el enfoque militar actual al conflicto en Colombia. Desempeña un papel central en la lucha contra la guerrilla, tanto al nivel estratégico, como político. De la misma forma, es un instrumento que comprueba el camino ascendente de los EE. UU. sobre Colombia y hasta qué punto el rol de este país es fundamental y condiciona el enfoque oficial al conflicto y a la paz en Colombia.

### *“La Política de Defensa y Seguridad Democrática”*

A la par con el “Plan Colombia”, la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” fue recientemente la cara más visible del enfoque militar al conflicto en Colombia. Esta constituyó la principal bandera política del gobierno de Álvaro Uribe, desde 2002 al 2010, y la política oficial respecto al conflicto armado.

---

3 La presente administración Obama ha reafirmado su apoyo al Plan Colombia, aunque haya reducido el volumen de la ‘ayuda’ e introducido un mayor énfasis en materias sociales (Estefan, 2009).

Con Uribe los tambores de la guerra volvieron a sonar alto en Colombia y el espacio político para negociaciones con la guerrilla se redujo drásticamente. Este presidente fue elegido con un programa claro y sencillo. No habría más concesiones para la guerrilla. La única solución para el problema de la insurgencia era ‘acabar con ellos’ con un puño de hierro (Hylton, 2003, p. 88).

La Política de Seguridad Democrática constituyó así fundamentalmente un plan de guerra. Su finalidad primordial fue la confrontación con las FARC. Según Francisco Leal (2006, pp. 233-234) esta se basó en tres líneas de acción: una ‘política de paz’ con los paramilitares, la continuación de la ofensiva contra las FARC iniciada por el gobierno anterior, y un grupo de medidas e instrumentos puntuales y disgregados: el reclutamiento de los llamados ‘soldados campesinos’, la creación de brigadas móviles y de ‘batallones de montaña’, la conformación de redes de informantes civiles, el estímulo a la desertión en los grupos armados ilegales, y la creación de zonas de rehabilitación. Constituyó un enfoque de seguridad que seguía una línea y una matriz esencialmente contrainsurgentes, particularmente al negar el estatuto político y beligerante a las guerrillas y al buscar involucrar la población civil en las operaciones militares (Castañeda, 2012, p. 202).

Oficialmente esta política gubernamental proclamaba como su motivación fundamental brindar a la población ‘seguridad democrática’. Su objetivo principal ha sido lo que denominó ‘recuperación social del territorio’, es decir, rescatar las zonas de dominio histórico de las guerrillas para el control del Estado, y debilitar militarmente a la guerrilla al punto que aceptara negociar su rendición incondicional.

En cuanto a su aplicación, se tradujo en el designado “Plan Patriota”, una continuación del “Plan Colombia”, que ha sido igualmente implementado con la asesoría y la ayuda de los Estados Unidos, y que ha tenido como finalidad atacar el liderazgo de las FARC en el sur del país, su zona de retaguarda estratégica.

La política de seguridad democrática tuvo así un pronunciado sesgo militar (Leal, 2006, p. 265). Ha significado un impresionante esfuerzo militar y un fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de las fuerzas de seguridad. Pasó por un plan de modernización, profesionalización y expansión de las fuerzas armadas, que pasaron de tener 145.000 combatientes a finales de la década de 1990 a 431.000 en enero de 2009 (Granada, Restrepo y Vargas, 2009, p. 79). Implicó igualmente un aumento considerable del gasto militar, que representaba en 2008 la impresionante

cifra de 5,7% del PIB (Ministerio de Defensa, 2008, p. 83) y figuraba como uno de las más altas del mundo (Pécaut, 2008, p. 65).

Esta política ha debilitado grandemente la fuerza y la presencia de la guerrilla en el país. Sin embargo, no la ha derrotado.

## El enfoque de negociación

En Colombia, desde el primer proceso de paz a comienzos de la década de 1980, todos los presidentes y gobiernos han conducido, hasta cierto grado, negociaciones con los insurgentes y buscado una solución política negociada al conflicto.

A pesar de las especificidades de cada proceso de paz y las diferencias de contextos, resultados, métodos, actores y movimientos guerrilleros implicados, que pueden volver cualquier intento de sistematización una simplificación, dos modelos principales de negociación han emergido en Colombia: negociaciones con una agenda limitada de temas o con una agenda amplia (García-Peña, 2004, p. 68).

### *Negociación con una agenda limitada*

Las negociaciones sobre la base de una agenda y gama limitada de cuestiones en discusión han sido desarrolladas históricamente en los procesos de paz del gobierno de Virgilio Barco con el M-19 (1986-1990), y de César Gaviria (1990-1994) con el Quintín Lame, PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia), EPL (Ejército Popular de Liberación) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

Este modelo se sustenta en dos elementos: en el principio que las reformas sociales y políticas se deben producir de forma independiente y fuera de las negociaciones con los insurgentes y basarse en las instituciones legales apropiadas, tales como el Congreso; y en la perspectiva de que las conversaciones deben centrarse en la discusión de las garantías políticas que permitan a los combatientes insurgentes desarmarse, reincorporarse a la vida civil y convertirse en movimientos democráticos legales.

Por lo tanto, este es un modelo de negociaciones centrado exclusivamente en temas de desmovilización, desarme y reintegración (DDR). Se enfocó en lo que Belisario Betancur, utilizando una expresión de Lenin, llamó las ‘condiciones



subjetivas de la violencia’, es decir, las necesidades individuales de los combatientes de la guerrilla (Chernick, 2008, p. 83).

Este modelo de negociación con agenda limitada logró un acuerdo de paz con los movimientos guerrilleros del M-19, PRT, Quintín Lame, EPL y la CRS. Estuvo también en el origen de la formación de una Asamblea Constituyente, que produjo la nueva Constitución colombiana de 1991. Sin embargo, ha fracasado con las dos principales guerrillas de Colombia, las FARC y el ELN.

## *Negociación con una agenda amplia*

Este modelo ha sido desarrollado históricamente en los procesos de paz entre Belisario Betancur y las FARC en La Uribe (1984), Andrés Pastrana y las FARC en el Caguán (1998-2002) y Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana (2012-presente). Es un modelo que se basa en el reconocimiento de las ‘condiciones objetivas de la violencia’ en Colombia, es decir, las causas profundas y estructurales del conflicto, como la inequidad y la exclusión política y socio-económica.

Es caracterizado por no limitar el diálogo a la discusión del desarme y desmovilización de las guerrillas y a las necesidades individuales de los combatientes, es decir, a las condiciones subjetivas de la violencia, y traer una agenda abierta, amplia y diversa a la mesa de negociaciones (Chernick, 2008, p. 83). En esta agenda se incluyen reformas estructurales a nivel social, económico y político y los temas políticos clave para las guerrillas, como la reforma agraria, la democratización del sistema político, los recursos naturales y las relaciones internacionales de Colombia.

Sea limitada o amplia la agenda de las negociaciones, hay otro tema que es importante subrayar, que es transversal a los dos modelos negociados desarrollados en Colombia: los actores presentes en las negociaciones. Tuvieran asiento en las negociaciones exclusivamente los líderes de los gobiernos y de la insurgencia. Es notoria la ausencia de dos tipos de actores en los procesos de paz: actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. La presencia internacional en los distintos procesos de paz ha sido nula o muy limitada. Solo en el caso de las negociaciones de Pastrana y de Santos con las guerrillas se desarrolló la figura de una facilitación internacional, aunque con poco protagonismo político y lejano de lo que se consideraría una mediación. De igual forma, no ha habido espacio para una participación

relevante de actores de la sociedad civil en los procesos de paz en Colombia, sea como facilitadores, mediadores, autores o implementadores de propuestas, o base de apoyo del proceso.

Esto no constituye solamente un detalle de los procesos de paz. Es un elemento relevante y significativo, que tiene necesariamente consecuencias y repercusiones, no solo en el desarrollo de las negociaciones, como en sus resultados y sostenibilidad.

## Las limitaciones de estos enfoques

**T**odos estos enfoques presentan algunos fallos, debilidades y limitaciones, que pueden imposibilitar la resolución o transformación del conflicto en Colombia e impedir que una paz sostenible, duradera y positiva sea alcanzada.

### El enfoque militar

El enfoque militar ha sido el modelo utilizado de forma más recurrente en la historia del conflicto armado en Colombia. Durante cuarenta años, cada gobierno y presidente electo en Colombia ha prometido derrotar a la guerrilla. El ministro de defensa de Gaviria, Rafael Pardo, anunció en 1992 que podrían vencer a las FARC dentro de 18 meses (Chernick 2008, p. 30). Más de 18 años han pasado y las FARC aún no han sido derrotadas. Uribe fue elegido con el mandato y promesa de finalmente vencer a las FARC. Su discurso y el de su séquito político parecieron una marcha de la victoria. El comandante general de las fuerzas armadas Freddy Padilla refirió que se estaba ‘en el fin del fin’. El exministro de la defensa y actual presidente Juan Manuel Santos habló de “darle la estocada final” a las FARC (Granada et al., 2009, pp. 30-31). Pero al final de dos periodos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010), pasados ocho años de seguridad democrática y a pesar de haber logrado numerosas victorias militares y haber debilitado grandemente este grupo, las FARC no están derrotadas todavía.

Por lo tanto, hay razones de peso para creer en la falibilidad de este enfoque militar y para plantear que no hay solución estrictamente militar para el conflicto

colombiano. Esta conclusión se basa en varios elementos, pero sobre todo en dos factores: la historia y la geografía colombianas.

La historia ha demostrado la incapacidad de ambas las partes del conflicto para alcanzar una victoria militar. A pesar de cuarenta años de políticas destinadas a derrotar las guerrillas, de los aumentos sucesivos del gasto militar (con Gaviria, Pastrana y Uribe) y de la ayuda militar masiva de la mayor potencia militar del mundo en equipamiento y formación, ningún gobierno ha sido capaz de vencer a las guerrillas todavía.

La geografía ha tenido un papel decisivo en esto. El marco geoestratégico del conflicto es crucial. En cierta medida, este elemento está del lado de la insurgencia. Colombia es un país enorme, situado entre dos océanos, atravesado por la Cordillera de los Andes y llena de impenetrables selvas tropicales. Esto proporciona un refugio topográfico natural para la guerrilla, lo que vuelve extremadamente difícil para un ejército convencional derrotarlos. Además, hay un déficit histórico de presencia estatal en muchas zonas y regiones del país, que dificulta igualmente una victoria total sobre la guerrilla (Chernick, 2008, p. 106).

Otro factor ha complicado esta ecuación y ha vuelto aún más difícil la derrota militar de la guerrilla: el boom del tráfico de drogas en la década de 1980 y el subsecuente vínculo progresivo con las FARC ha conferido a este grupo un inmenso poderío financiero que los ha fortalecido considerablemente a nivel militar. Debido al dinero de la droga, las FARC son un grupo de gran solidez y fortaleza en el plano militar y económicamente autárquico (Francia, 2003). Generan sus propios recursos y pueden depender de sí mismos. Durante los últimos veinte años esta guerrilla se han expandido de forma progresiva por todo el territorio del país, lo que les ha permitido además crear una confianza militar, que los estimula aún más a una insistencia ciega en la vía armada.

Pero, por otro lado, en ningún momento la guerrilla ha estado a punto de marchar sobre Bogotá y derrocar al régimen. El ejército nacional ha sido siempre mucho más fuerte. A pesar de la acentuación del poder militar de la guerrilla, esta nunca ha tenido la fuerza militar, política y social para conquistar la Casa de Nariño. Además, carece del apoyo y legitimidad populares necesarios para ello.

Esto configura un callejón sin salida a nivel militar. Ninguna de las partes es capaz de derrotar a la otra. El Estado no es capaz de derrotar a la guerrilla y la guerrilla de tomar el poder. Por lo tanto, el camino hacia la paz en Colombia tiene que

pasar necesariamente por la vía negociada y por un proceso de reconciliación de las diferencias políticas, tanto en la mesa de negociaciones, como en el plano social, no por el campo de batalla. La victoria militar es un resultado posible para Colombia, pero improbable (Chernick, 2008, p. 242).

Además, el poder militar no puede resolver la mayoría de los problemas que enfrenta Colombia, ni la mayoría de las cuestiones relacionadas con el conflicto armado. En algunos casos incluso los ha agudizado (Granada et al., 2009, pp. 103-104). El panorama complejo de violencia generalizada de Colombia, en el cual se interconectan y se cruzan violencia insurgente, paramilitar, mafiosa, criminal y asociada al narcotráfico, exige soluciones que vayan más allá de negociaciones entre el Estado y los grupos insurgentes (McDonald, 1997, p. 1). Un enfoque al conflicto basado exclusivamente en la fuerza militar no puede resolver los graves y enraizados problemas estructurales a nivel social y político que padece Colombia y tampoco logrará poner fin a la violencia en sus distintas formas (Pardo y Carvajal, 2004, p. 216).

Es un enfoque que representa la antítesis de la vía para la paz positiva. No conduce a un cambio o transformación positiva, sino a una incapacitación. Por lo tanto, trae un resultado forzado y no aceptado por la otra parte, razón por la cual no permite una paz sostenible (Galtung, 1996, p. 119). Lo máximo que puede obtener es una ‘paz de los sepulcros’. Sin algún tipo mínimo de entendimiento entre los grupos en conflicto no se puede hablar de resolución del conflicto (Wallensteen, 2002, p. 52). Por lo demás, al no tener en cuenta los aspectos estructurales, culturales, institucionales y relacionales de la violencia, y al despreciar el rol de la sociedad civil, no conduce a la transformación del conflicto e imposibilita la construcción de una paz positiva y sostenible.

Por último, este enfoque militar ha tenido históricamente un tremendo efecto en la dinámica, naturaleza y repercusiones sociales del conflicto. El recurso a la creación, apoyo y formación de grupos paramilitares ha vuelto el ya muy difícil panorama del conflicto colombiano aún más complejo, tanto en términos sociales, como militares. Una especie de Frankenstein incontrolable fue creado y puesto en libertad. Ha traído a Colombia una guerra sucia contra la sociedad civil y la población rural, como parte de la guerra contra-insurgente.

Por lo tanto, otro tipo de enfoques y rumbos, en lugar de los militares, son necesarios para resolver y transformar el conflicto colombiano.

## *Los últimos enfoques militares al conflicto; Plan Colombia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática*

Los últimos enfoques militares aplicados al conflicto, el Plan Colombia y la política de seguridad democrática, encierran igualmente diversas debilidades, limitaciones y elementos pasibles de crítica.

Con respecto al Plan Colombia, la ofensiva militar sobre el sur del país no obtuvo los resultados esperados y deseados por el gobierno. Las FARC fueron golpeadas, pero no totalmente arrinconadas, ni vencidas (Granada et al., 2009, p. 98). Por lo demás, el enfoque que encierra es equivocado, tanto para el tratamiento de la problemática del narcotráfico, como del conflicto en Colombia. Fundamentalmente, carece de una dimensión social. Es un enfoque que ignora la realidad socioeconómica del campo colombiano que empuja los campesinos empobrecidos a la ilegalidad, sea en la forma económica de producción de coca, o uniéndose a grupos armados ilegales. Teniendo en cuenta que la pobreza alimenta y sostiene el cultivo de drogas en Colombia, la resolución de este problema tendría que pasar necesariamente por programas de desarrollo del campo, así como por la substitución de cultivos y la solución del problema agrario.

El balance de la política de seguridad democrática fue dúplice:

En términos militares y de seguridad, son indiscutibles los éxitos de esta política presidencial. La política de seguridad democrática produjo grandes avances militares y condujo a un punto de quiebre en el conflicto (Granada et al., 2009, p. 97). La guerrilla ha sufrido duros golpes. La fuerza militar de las FARC se ha debilitado considerablemente. Algunos de sus frentes han sido diezmados. Perdió o se redujo su presencia y capacidad de maniobra en muchas zonas del país. Ha perdido cabecillas importantes, entre ellos miembros del secretariado, como el comandante Raúl Reyes y Alfonso Cano. Cuanto al ELN, a pesar de seguir contando con cerca de 3.000 efectivos, se redujo a una fuerza casi imperceptible, que ya no constituye una amenaza nacional (Celis, 2009).

La situación de seguridad mejoró en la mayoría del país, sobre todo en los centros urbanos, en los territorios más densamente poblados y en las vías de circulación. El Estado ha recuperado el control de zonas económicamente importantes, como Cundinamarca, Oriente Antioqueño y Montes de María, otrora bajo influencia (total o parcial) de la guerrilla. Además, gracias a la protección de la fuerza pública, la circulación por las carreteras en Colombia dejó de ser una ruleta

rusa, en la medida en que se disminuyeron considerablemente los retenes y los secuestros en el país.

Sin embargo, el éxito y eficacia de la seguridad democrática merece una lectura cuidadosa y crítica. Luego de ocho años de confrontación, la guerrilla fue golpeada y enflaquecida, pero no derrotada. El ‘fin del fin’ anunciado por el gobierno no ha llegado. Aunque debilitada, la guerrilla tiene presencia en 300 municipios del país (Celis, 2009) y sigue controlando regiones importantes. La seguridad democrática es deficitaria en zonas como la Amazonia, Orinoquia y el Tolima. Análogamente, grupos paramilitares y neoparamilitares, lo que el gobierno colombiano llama eufemísticamente como ‘bandas emergentes’, mantienen importantes núcleos activos.

Como señala el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), uno de los centros de investigación en Colombia que mejor se ha enfocado recientemente en la sistematización de la violencia en el país, el conflicto presenta actualmente niveles de intensidad y de eventos de violencia similares a los registrados a mediados de la década de los noventa. Y de igual forma, subsisten niveles elevados de victimización de civiles (Granada et al., 2009, p. 48, 64). Por estas razones, CERAC describió el período comprendido entre 2003 y 2008 como un momento de acomodamiento y no de inminencia de derrota de la guerrilla, y por eso señaló un agotamiento de la política de seguridad democrática. La salida del conflicto está así aún lejana. Los logros de la política de seguridad democrática son parciales y relativos (Granada et al., 2009, p. 98).

Por lo demás, poner a un soldado o un policía armados en cada rincón de cada carretera o calle del país no es definitivamente una receta para una paz sostenible y duradera. De hecho, en este punto residió la falibilidad de la seguridad democrática. Esta política falló como enfoque para la paz positiva y la transformación del conflicto. Fue una política que no tuvo en cuenta los aspectos y dimensiones sociales, culturales y económicas de la paz, ni de la seguridad. Por lo tanto no es encuadrable ni siquiera en un marco y concepción de seguridad humana, entendida como más que la seguridad del Estado y expresada en la satisfacción de las necesidades de los individuos y en el bienestar del ser humano (Duffield y Waddel, 2004, pp. 2-3). Se basó en una concepción conservadora y restringida de seguridad, así como un entendimiento restringido de la paz, o sea una paz negativa.

La política de seguridad democrática tenía por consiguiente claras limitaciones estructurales. Como señalan Granada, Restrepo y Vargas (2009, p. 103),

En la medida en que la política de seguridad actual centra el problema de la seguridad en los grupos armados, genera mecanismos tan solo para enfrentarse a estos y no aborda la cuestión fundamental de la violencia en Colombia: los órdenes sociales y económicos, locales y regionales, diferentes del orden social e institucional que se pretende irradiar y trasplantar desde el Estado central (liberal y moderno).

De hecho, la violencia en Colombia es un fenómeno y una realidad complejas. Va más allá de los aparatos armados de los grupos ilegales. Erradicar la violencia de los grupos armados es insuficiente para la paz en Colombia. La construcción de la paz en este país pasa por la transformación del orden social en muchas regiones y partes del país y por el desarrollo de mecanismos e instituciones legales de resolución de conflictos. Es un proceso difícil y de largo plazo, pero sin el cual los procesos que generan la violencia y para-Estados locales seguirán siendo alimentados, sea en la forma de guerrillas, paramilitares, mafias o grupos narcotraficantes (Granada et al., 2009, pp. 102-104). La política de seguridad democrática, al no tener en cuenta esta realidad, fue un enfoque manifiestamente insuficiente y limitado para la paz en Colombia.

## El enfoque de negociación

### *Negociación con una agenda limitada*

El modelo de negociaciones con una agenda limitada ha tenido en Colombia un resultado dual. En términos positivos se pueden discernir fundamentalmente dos elementos: en primer lugar, ha tenido éxito en traer a las guerrillas de segunda generación (M-19, Quintín Lame, PRT), el EPL y la CRS a la vida civil y les ha permitido entrar al sistema democrático legal. En segundo lugar, desempeñó un rol importante en el proceso de reforma constitucional del país, en el cual participaron delegados de estos grupos recién desmovilizados.

Sin embargo, ha fracasado por completo en lo que respecta a negociar con las dos principales guerrillas en Colombia: las FARC y el ELN. Fundamentalmente una razón puede explicar esta situación: grupos guerrilleros como el M-19 luchaban principalmente por la democratización del sistema político. Y en cierta medida, lo han conseguido en los procesos de paz con Barco y Gaviria, por intermedio de su participación en la Asamblea Constituyente, que reformó y democratizó el sistema político colombiano.

Todavía, la lucha de las FARC y el ELN es por un cambio más radical de las estructuras y del régimen de Colombia. No solo reivindican una democratización política, sino especialmente social y económica. Teniendo en cuenta el *background* social e histórico de estas guerrillas, profundamente arraigado a las luchas agrarias del país, así como su considerablemente mayor capacidad militar, es poco probable que un día acepten deponer las armas a cambio solamente de participación política y garantías de desmovilización. Cuestiones sociales y económicas de cariz estructural son y seguirán siendo esenciales para las FARC y el ELN en el marco de un proceso de paz. Para estas guerrillas las negociaciones están profundamente inter-ligadas con un proceso de reformas económicas y sociales. Es una lógica que se explica por la racionalidad histórica de las FARC y el ELN (CIP-FUHEM, 2003, pp. 117-118) y que está inserta en su código genético.

Por lo tanto, diferentes concepciones de paz entraron en choque en las negociaciones entre los gobiernos de Gaviria y Barco y estas dos guerrillas. Mientras para los gobiernos la paz significaba cese al fuego y DDR, para las FARC y el ELN la paz tiene que ver con muchas más cosas y muchos más elementos, en los planos político, económico y social (Kline, 1999, p. 111).

Por último, otros dos factores vuelven difícil la aplicación de este modelo a las FARC. El ‘genocidio político’ de la Unión Patriótica (UP) tras el Acuerdo de La Uribe, tal como posteriormente la persecución a muchos excombatientes del M-19, EPL y CRS, así como el relativo fracaso electoral y progresivo desvanecimiento del M-19 y del EPL como fuerzas políticas, ha demostrado a las FARC y el ELN las limitaciones de este tipo de solución y del modelo de desarme y desmovilización (Chernick, 2008, p. 93).

Así, la mayor limitación de este modelo de negociaciones es que no incluye y no tiene en cuenta algunos de los factores estructurales que sostienen el conflicto y que se relacionan con las banderas históricas de las guerrillas, tales como la reforma



agraria y la igualdad socio-económica. Es un tipo de negociaciones con un carácter muy circunscrito.

Por encima de todo, este modelo de negociación busca únicamente absorber a los grupos guerrilleros en el sistema político existente, en lugar de construir una paz estructural y positiva. Es un enfoque que privilegia el *status quo* y no posibilita la transformación de los elementos estructurales del conflicto. En otras palabras, este enfoque se limita a abordar el conflicto armado o la dimensión violenta del conflicto, en lugar de abordar también el conflicto social que lo sostiene y la violencia estructural y cultural que encierra el país. Restringe el proceso de paz a la búsqueda de un acuerdo político entre los actores alzados en armas sin incidir en otras dimensiones y facetas de la violencia. Se enfoca principalmente en una concepción minimalista de la paz, una paz negativa.

## *Negociación con una agenda amplia*

El enfoque de paz basado en negociaciones con una agenda amplia ha obtenido, hasta al momento, pocos resultados en Colombia.

En lo que toca las negociaciones entre Betancur y las FARC, los acuerdos de La Uribe (1984) produjeron un cese al fuego y la creación de un nuevo partido político: la UP. Estos elementos constituyen logros políticamente significativos que no deben ser subestimados. Al introducir un nuevo actor en la arena política en un régimen bipolarizado por los liberales y conservadores constituyó una señal de la democratización del sistema político colombiano. Sin embargo, finalmente el Acuerdo de la Uribe no fue capaz de producir la paz, ni siquiera profundizar el proceso de paz.

El proceso de paz del Caguán (1998-2002) tiene una hoja de registro aún más negativa. En estas negociaciones los únicos dos temas en que se alcanzó un acuerdo fueron un intercambio humanitario de soldados y policías retenidos por las FARC por combatientes guerrilleros en prisión y la destitución de algunos pocos generales del ejército acusados de conexiones con grupos paramilitares (Chernick, 2008, p. 100). Todas las demás cuestiones esenciales se mantuvieron congeladas. Hubo un bloqueo constante en los temas en discusión. Durante cuatro años, se discutieron reformas sin ningún tipo de acuerdo. Una personalidad involucrada en el proceso de paz señala que las negociaciones en el Caguán constituyeron esencialmente ‘conversaciones sobre conversaciones’. Pécaut (2008, p. 60) afirma que la “la negociación nunca llega a arrancar”.

Explicar por qué el modelo de negociaciones desarrollado por Betancur y Pastrana ha fracasado es un ejercicio analítico complejo. Muchos elementos han contribuido al resultado final, tanto en el primero, como en el segundo, algunos de carácter estructural y de la concepción del proceso, otros de cariz coyuntural. Fundamentalmente, han faltado dos elementos en estos procesos de paz para poseer un enfoque integral de resolución y transformación del conflicto que pudiera traer una paz duradera y sostenible a Colombia. En primer lugar, a pesar de que este modelo de negociación incluyó algunos elementos estructurales y fue el único de los cuatro enfoques descritos que tuvo en cuenta y trató de abordar, al menos hasta cierto punto, las causas profundas del conflicto colombiano, muy poca voluntad política estuvo presente para hacerlos avanzar. Estos no constituyeron verdaderos procesos estructurales. Tanto los gobiernos de Betancur, como de Pastrana no acompañaron las negociaciones con reformas estructurales; se mantuvieron inalteradas las condiciones socio-políticas y no se procedió a una redistribución del poder (Tokatlíán, 2000, p. 332). De hecho, muy pocos temas de fondo fueron sujetos a una discusión y acuerdo en la mesa de negociación entre la insurgencia y los gobiernos.

Así, se evidencia la falta de voluntad política del *establishment* colombiano para hacer cambios de fondo y transformaciones estructurales, lo que ha constituido históricamente uno de los principales factores que han impedido una solución política y la paz en Colombia.

En segundo lugar, estas han sido fundamentalmente negociaciones con base en las élites armadas del conflicto. Como Daniel García-Peña (2004, p. 71) refiere,

No puede haber una expresión más gráfica del arquetipo de bilateralismo que la imagen del presidente [Pastrana] y del legendario jefe guerrillero [Marulanda] cuando se encontraron a solas bajo una carpa, como dos generales caballerescos decidiendo la suerte de toda una nación.

En realidad, estos no han logrado ser procesos amplios e inclusivos de construcción de paz, donde se incluyan no solo los líderes gubernamentales e insurgentes, sino también otros sectores y actores de la sociedad colombiana, como la Iglesia, las instituciones regionales, las élites empresariales locales y la sociedad civil en general. Estos son elementos que han estado ausentes en las conversaciones de paz y que, como se planteó en el capítulo anterior, son esenciales para apoyar, fortalecer

y consolidar un proceso de paz y para establecer una ‘circunscripción de paz’. Un proceso amplio y sostenible de construcción de la paz tiene que ser construido tanto en el sentido de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, incluyendo no solo las estructuras superiores, sino también procesos de construcción de paz locales e intermedios (Lederach, 1997, p. 94).

En el proceso de paz iniciado por Betancur, como en los demás procesos de paz en Colombia, no hubo participación de la sociedad civil en absoluto. Las negociaciones de Pastrana con las FARC en el Caguán incluyeron algunos elementos de participación e integración de la sociedad civil en las llamadas ‘audiencias públicas’. No obstante, estas eran puramente formales y no tuvieron relevancia en el desarrollo de las negociaciones. De hecho las negociaciones del Caguán constituyeron claramente el caso de un proceso que crecientemente careció de apoyo popular, factor que contribuyó en gran medida a su resultado final.

El presente proceso de paz desarrollado por el gobierno Santos con las FARC en La Habana permite ser optimista cuanto a las posibilidades de obtención de un acuerdo negociado. No solo se han tenido en cuenta algunas lecciones y errores del pasado, se ha definido una agenda de negociación equilibrada, que incluye temas estructurales del conflicto, como la cuestión agraria, el narcotráfico, las víctimas y la participación política. No obstante, es aún largo el camino a recorrer y la relativa ausencia de la sociedad civil en las negociaciones, así como la oposición de diversos sectores políticos y sociales al proceso de paz, lanza desafíos adicionales a la construcción de la paz en el país.

Así, el modelo elitista de negociaciones que se ha desarrollado históricamente en Colombia es un enfoque a la paz frágil y de alcance limitado. Dificilmente puede traer una paz sostenible y duradera a un país cuya violencia es un fenómeno particularmente complejo y multidimensional y que no se circunscribe a la existencia de grupos alzados en armas. La violencia en Colombia está enraizada y es alimentada y sostenida por factores políticos y socio-económicos estructurales. Así, si la resolución del conflicto colombiano se limita a la dimensión de meras conversaciones de paz entre el Estado y la insurgencia. Hay un gran riesgo de que, dada la historia de conflicto en el país, la cultura de la violencia y violencia estructural que lo asola, la existencia de múltiples actores y de dinámicas regionales muy diversas, el país no alcance la paz positiva y que la violencia reincida, o por lo menos adopte otras formas. La naturaleza multidimensional de la violencia en Colombia y las causas

multidimensionales del conflicto inviabilizan negociaciones estrictamente de élite y hacen que un enfoque a la paz deba ser también multidimensional.

Un acuerdo político no acabaría totalmente con la violencia en Colombia, ni sería suficiente para establecer una paz duradera. La paz requiere más que el entendimiento entre las partes, aunque acuerdos de paz sean un paso necesario e indispensable en ese proceso (Wallensteen, 2002, p. 8). Por lo tanto, es esencial que la construcción de la paz en Colombia tenga una dimensión estructural, institucional y cultural y pase por abordar las causas profundas y estructurales que han originado el conflicto y lo sostienen.

## Conclusión

Este capítulo buscó hacer un análisis histórico de los enfoques dominantes al conflicto armado y a la paz en Colombia y presentar algunas de sus debilidades. Se defendió el argumento que todos estos enfoques encierran algunos fallos y limitaciones, que pueden obstaculizar la resolución y la transformación del conflicto en Colombia e impedir que una paz sostenible y positiva sea alcanzada.

Los enfoques convencionales en Colombia buscan fundamentalmente la gestión del conflicto armado, más que la construcción de la paz. Intentan gestionar, no resolver, y aún menos transformar el conflicto. El caso colombiano es notoriamente influenciado y determinado por una concepción realista de gestión del conflicto y lectura de sus causas. No solo los dos principales instrumentos utilizados históricamente para manejar el conflicto han sido la coacción física por vía militar y policial y negociaciones entre las élites (armadas), con base en una lógica de poder y no estructural, la existencia de insurgencia en el país ha sido tratado habitualmente como un asunto criminal y de autoridad, más que un problema social y político. Los modelos convencionales de gestión del conflicto en Colombia se han centrado generalmente en esfuerzos para contener la violencia, en lugar de abordar las causas profundas del conflicto, con resultados muy costosos para la construcción de paz y en términos humanos.

La interpretación política del conflicto por parte del *establishment* colombiano plantea una clara negación o desvalorización de las llamadas causas profundas y

‘objetivas’ del conflicto. El campo realista, representado en Colombia y en el plano internacional por autores como Rabasa y Chalk (2001), Collier (1999), y el ex asesor político del expresidente Uribe, José Obdulio Gaviria (2005), ha en gran medida procedido a una simplificación de la complejidad del conflicto en Colombia, al convertirlo casi exclusivamente en un problema de seguridad arraigado al tráfico de drogas. Se ha sobreestimado el papel que la adquisición de recursos desempeña en el conflicto y la violencia, al aplicar un modelo interpretativo basado en la elección racional, que hace caso omiso de los insurgentes como los líderes de colectivos movidos por las condiciones estructurales objetivas (González et al., 2003, p. 27).

Por lo tanto, los enfoques de gestión de conflictos hegemónicos en Colombia tradicionalmente han negado o pasado por alto las causas profundas del conflicto colombiano, como las desigualdades socio-económicas históricas y la exclusión y represión políticas, y han prescrito en el ámbito político, de forma implícita o explícita, una solución militar para el conflicto o una solución negociada con base en una lógica y dinámica de poder.

Ambas opciones han demostrado que son esquemas débiles, no solo en sus resultados (con la excepción de las guerrillas de segunda generación, no han logrado la cesación de la violencia de los grupos armados), como en sus concepciones y ejes de estructuración. Son enfoques que demuestran una visible incapacidad para garantizar el fin de la violencia armada (paz negativa), pero que, de igual forma, son recetas equivocadas o insuficientes para traer la paz positiva a Colombia.

Los métodos militares y de negación del conflicto no constituyen en realidad enfoques de resolución o transformación del conflicto. No tienen verdaderamente la intención de resolver el conflicto, en el sentido de hacer frente a las incompatibilidades entre ambos lados del conflicto. El enfoque militar se basa en la visión equivocada de que el conflicto es ‘solucionable’ a través de las armas. Cuarenta años de historia han demostrado la falibilidad de esta perspectiva que ha dado un resultado negativo. No es además un enfoque que pueda resolver los problemas graves políticos, económicos y sociales que presenta Colombia, que sostienen y alimentan el conflicto, y seguirá siendo imperante atacar, aunque no hubiera un conflicto armado o si se obtuviese un acuerdo político, para que pueda haber una paz social y positiva.

En cuanto a los enfoques negociados, carecen fundamentalmente de dos dimensiones: no son estructurales, ni inclusivas. El modelo de negociaciones desarrollado no atiende a las causas profundas y estructurales que sostienen el conflicto y no

incide sobre la violencia estructural y cultural. No presenta una construcción de paz positiva, en términos galtungianos. Además, es un modelo vertical y elitista de búsqueda de la paz, sin ninguna participación de la sociedad civil en el proceso de construcción de paz. Se sitúa en el nivel 1 de la pirámide de conflictos de Lederach (1997), y por esa razón no conduce a una paz sólida, duradera y sostenible.

Es así un enfoque que se distingue de la transformación de conflictos, que tiene una esencia inclusiva y una concepción de paz como cambio social, empoderamiento, justicia y participación. Pero también que se aleja del concepto de resolución de conflictos, entendido como la paz basada en la superación de la raíz de los conflictos y satisfacción de las necesidades humanas básicas.

Fundamentalmente, tanto la opción militar como el modelo negociado desarrollado en Colombia son enfoques sin una racionalidad a largo plazo, que han favorecido claramente las estructuras de poder existentes y el *status quo*, no han integrado a la sociedad civil, y se han revelado recetas equivocadas tanto para la paz negativa, como positiva. Por lo tanto los fallos y limitaciones de los distintos enfoques al conflicto y a la paz en Colombia descritos en este capítulo vuelven apremiante la búsqueda de otro tipo de acercamientos a la paz en Colombia, que tengan en consideración las distintas dimensiones de la violencia y las causas profundas del conflicto Colombiano. El análisis de los laboratorios de paz como potenciales instrumentos de transformación del conflicto a nivel regional y de construcción de paz positiva desde la base tendrá como base esta premisa.

# 3

## Capítulo





# Las causas profundas del conflicto armado colombiano

“Tu Colombia, Camilo hermano, sigue como la dejaste: absurda y generosa,  
paupérrima y exuberante...”

*Pedro Casaldaliga*

## Introducción

Este capítulo se enfoca en la identificación y análisis de las causas profundas y raíces históricas del conflicto colombiano. No se pretende contribuir al debate académico sobre estas, sino definir un marco político y social a nivel histórico que permita analizar mejor las vías para la paz en Colombia. Como señala Francisco Leal (2004, p. 96), “cualquier política de paz tiene que ver con la interpretación del conflicto armado. Y si esta no es adecuada, se cae en costosos errores”.

Por consiguiente, aunque no se procede a un análisis exhaustivo de las causas históricas del conflicto, ni de la evolución de las dinámicas de violencia en Colombia, en la medida que este no constituye un trabajo de historiografía, se trata de trazar un marco analítico del conflicto en términos estructurales e históricos, analizando las causas principales del conflicto y los canales que lo alimentan, desde dónde se interviene desde los laboratorios de paz. Se parte de una lectura del conflicto armado y de la aplicación de una grilla propia de análisis, pero en relación de la perspectiva de

los laboratorios de paz y del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPM) (que analizaremos más adelante).

Así, si en el primer capítulo se planteó fundamentalmente la multidimensionalidad de la paz y de las violencias y en el segundo se mostraron las limitaciones de los enfoques dominantes al conflicto armado en Colombia. En este capítulo se busca demostrar y analizar las problemáticas sociales de la realidad colombiana, particularmente las causas profundas del conflicto y la violencia estructural y cultural que lo sostienen, que, contrariamente a los laboratorios de paz, los enfoques convencionales para la paz no tienen en cuenta, y que son fundamentales en el sentido de la construcción de una paz positiva en el país.

Esta discusión es importante por tres motivos: en primer lugar, permite una mejor comprensión del escenario del conflicto en donde se insertan los laboratorios de paz en su contexto histórico. En segundo lugar, es fundamental para el análisis de la acción de los laboratorios, en la medida en que este capítulo se enfoca esencialmente en los canales que alimentan el conflicto en Colombia y desde donde se interviene con los laboratorios de paz. Por último, permite poner en evidencia la peculiaridad del enfoque para la paz de los laboratorios que se basan en transformar las causas profundas del conflicto.

## Las causas profundas del conflicto armado

Para resolver o transformar cualquier conflicto armado en el mundo es fundamental e imprescindible conocer y analizar en profundidad su historia. La construcción de la paz en Colombia pasa necesariamente por una apreciación de sus raíces históricas.

El conflicto colombiano no es tan fácil de leer. Se trata de un complejo y multidimensional cruce de violencias, cuyas configuraciones y dinámicas han evolucionado continuamente en las últimas cuatro décadas, que tiene origen en la década de 1960, pero cuyas raíces vienen de mucho tiempo atrás. De hecho, el conflicto armado en Colombia tiene que ser enmarcado en un contexto histórico más amplio. Se inscribe en procesos históricos de larga duración (Pécaut, 2008, p. 20).

La Revolución Cubana (y en cierta medida La China) desempeñan un rol esencial en la emergencia de las guerrillas en Colombia. Sin embargo resultan insuficientes y simplistas como explicación única del conflicto (Pécaut, 1992, p. 227). El conflicto armado se sostiene debido a factores estructurales internos. Diversos conflictos sociales y violencias estructurales se sobreponen y están por detrás y en la base de la dinámica del conflicto armado en Colombia. Hay una realidad que se ve y otra que está oscura, como en la caverna de Platón. Distintos niveles de violencia se agregan y se cruzan en el conflicto. La(s) violencia(s) colombianas no giran en torno a una polarización única bien definida entre enemigos, sino en varias dinámicas de distinto orden y sobre la base de diferentes procesos históricos (González et al., 2003, p. 197).

Por lo tanto, la identificación de las causas del conflicto es una tarea analítica complicada y controvertida. Pocos están de acuerdo sobre lo que es el conflicto colombiano realmente y lo que está verdaderamente en juego. Como Sabine Kurtenbach (2005) dice, “la complejidad del conflicto armado colombiano no es capturado ni por las viejas interpretaciones de la Guerra Fría ni tampoco por los nuevos paradigmas internacionales de conflictos, como los Estados fallidos y el terrorismo”. Se trata de un conflicto multi-causal y multidimensional para el cual explicaciones simplistas y monotemáticas tienen gran probabilidad de fallar y equivocarse.

En este capítulo se pretende demostrar la tesis según la cual el conflicto colombiano se asienta en factores estructurales y se relaciona fundamentalmente con la falta de inclusión a tres niveles: político, socioeconómico y regional, razón por la cual un enfoque integral para una paz sostenible y positiva tendrá necesariamente que tener estos factores y elementos en cuenta. Se analizan estas tres causas fundamentales del conflicto colombiano separadamente, aunque están profundamente ligadas.

## Exclusión socio-económica

El conflicto armado en Colombia tiene en su base, fundamentalmente, estructuras de exclusión políticas, sociales y económicas, y en particular, un panorama de exclusión del campesinado, agravado históricamente por un problema

agrario no resuelto. En el marco de la conceptualización de Galtung, Colombia se caracteriza por una profunda violencia estructural, que se vuelve a menudo oculta o despreciada en el contexto de la intensa violencia armada que asola el país.

Para comprender el fenómeno de la guerrilla en Colombia es de vital importancia echar una mirada a la realidad rural, a la sociología del campo y la historia de las luchas agrarias en el país. La insurgencia es un fenómeno nacido en la esfera de la realidad campesina en Colombia. Las FARC no son simplemente un efecto de difusión de la Revolución Cubana. Podemos situar sus raíces por lo menos diez años antes de que Fidel Castro y sus compañeros tomaron La Habana. Las FARC están profundamente arraigadas en la historia de los conflictos sociales del siglo XX en Colombia, en particular, los conflictos agrarios.

Colombia, como la mayoría de los países de América Latina, es una nación con una estructura agraria altamente desigual. Esta tiene origen en la época colonial, pero se ha mantenido sin cambios y ha sido incluso acentuada desde la independencia, por un Estado y una nueva élite que han sido históricamente defensores y promotores de los latifundios. Esta estructura trajo varias luchas sobre la tierra a lo largo del siglo XX, especialmente en torno de las llamadas fronteras de colonización.

Este es un país en que una gran porción del territorio nacional ha estado escasamente poblada desde los tiempos de la colonia hasta el día de hoy. Se calcula que en 1850 el 75% del país correspondía a territorios baldíos (Pearce, 1990, p. 22). A mediados del siglo XX aún la mitad del territorio nacional eran zonas de frontera. La progresiva ocupación y poblamiento de estas zonas durante el siglo XIX y especialmente el XX sería el origen de múltiples gérmenes de violencia. El choque de una dinámica de privatización de las tierras públicas que favoreció una consolidación creciente del latifundio y la exclusión del campesinado con el movimiento de migración de colonos de las zonas más densamente pobladas del país en las montañas y valles andinos a las zonas de frontera, condujo a un enfrentamiento entre la colonización campesina y la colonización terrateniente y empresarial (González et al., 2003, p. 264). Los episodios de violencia armada fueron frecuentes, y proto-expresiones de lo que décadas más tarde sería la acción de los grupos guerrilleros y paramilitares que tienen en las fronteras de colonización su primer escenario. Esta dinámica

de choque entre los grandes hacendados y los colonos campesinos fue especialmente visible en las zonas de colonización reciente, como el Magdalena Medio (región donde surge el primer Laboratorio de Paz), el Patía (una de las regiones donde se ubicó el Laboratorio de Paz II), el Tolima y el Huila, a partir de la crisis agraria de los años veinte del siglo pasado, acelerándose en los años cincuenta con la guerra civil conocida como La Violencia (González et al., 2003). En este proceso los campesinos fueron empujados a zonas cada vez más apartadas de las fronteras y cada vez más lejanas de la institucionalidad y del desarrollo.

Las raíces de las FARC (y en menor medida del ELN) se ubican en este universo campesino y en el marco de las luchas agrarias en las fronteras de colonización. La insurgencia, en particular las FARC, representan históricamente un movimiento campesino levantado en armas (Pécaut, 1992, p. 22). Como Adriana Marulanda (2003) comenta, hay una incidencia profunda de la problemática agraria en los orígenes de las FARC. Esta es visible fundamentalmente a dos niveles:

En primer lugar, este grupo guerrillero germinó sobre todo en las áreas donde el movimiento agrario había estado latente en las décadas de 1920 y 1930 (Marulanda, 2003, p. 22) y en donde el recientemente creado Partido Comunista Colombiano venía desempeñando un papel político importante (Pécaut, 2008, p. 23). Las FARC representan un grupo guerrillero de origen campesino y cuyas banderas originales han correspondido a las reivindicaciones de este sector. Esta guerrilla refleja y recoge la trayectoria larga de las luchas del movimiento campesino en Colombia (Marulanda, 2003, p. 73). Su base social y su aparato militar y político han sido en su gran mayoría campesinos.

En segundo lugar, los núcleos fundadores de las FARC fueron las autodefensas campesinas de Marquetalia, Riochiquito, el Pato y Guayabero, que se habían desarrollado en el contexto de la guerra civil de La Violencia y que fueron reprimidas violentamente por el régimen en 1964. De hecho, aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia solo hayan sido formadas en 1966, esto solo oficializó un proceso que se venía gestando y desarrollando desde hace algunos años (Pécaut, 2008, p. 23). En gran medida, las FARC (y en cierta medida el ELN y el EPL) se basaron en la experiencia militar y política de grupos guerrilleros liberales y comunistas armados en el marco de La Violencia (Chernick, 2008, p. 64). Hay un cierto *continuum* entre las guerrillas liberales y

comunistas y las nuevas guerrillas colombianas nacidas en los años sesenta, que se ve reforzado por vínculos directos, como el hecho de que muchos combatientes de las guerrillas liberales se convirtieron más tarde en dirigentes de las FARC. El más famoso de estos casos es Manuel Marulanda.

Por lo tanto, la problemática agraria se convirtió en el corazón de su plataforma y programa político, su principal bandera y un instrumento de su legitimación entre el movimiento y sectores campesinos. El tema de la tierra ha desempeñado el papel central dentro del ideario de lucha de las FARC y la reforma agraria una de sus principales reivindicaciones (Marulanda, 2003, p. 60).

Aunque las guerrillas colombianas constituyan expresiones de las ideologías y las divisiones internacionales de la Guerra Fría, tienen lazos profundos con las particularidades de la sociedad colombiana. Como comenta Marc Chernick (2008, p. 64), “ser un campesino comunista en una región cafetera representaba, por lo general, más una respuesta a los problemas que enfrentaba el campo colombiano a mediados del siglo XX que un concepto abstracto del comunismo mundial”.

Así, en su fase inicial, la insurgencia encontró receptividad a su mensaje y una base social de apoyo entre los grupos campesinos, especialmente en las fronteras de colonización. En estas zonas cumplió el papel de representante y protector de estos sectores sociales contra la presión social, económica y armada de los latifundistas (Molano, 1992, p. 196).

Sin embargo, importa subrayar que hoy la realidad de Colombia no es la misma que la de los años sesenta. El país ha cambiado y el conflicto ha evolucionado. Colombia se urbanizó, el campo se transformó, el campesinado tradicional es cada vez más escaso y las mismas FARC han cambiado. No se concentran solo en las zonas de colonización, están también en el resto del territorio nacional, en zonas donde han emergido con dinámicas muy diferentes, más violentas, menos ligadas a las bases sociales y más asociadas a la depredación de recursos (González et al., 2003, p. 34). Por lo demás, sus progresivos vínculos con el narcotráfico y la acentuación de su componente militar en detrimento de la política la han deslegitimado popularmente como fuerza de cambio y representante del campesinado. Difícilmente pueden hoy reivindicar el rol de protector de los campesinos.

No obstante, es evidente que los temas agrarios y una cosmovisión campesina siguen profundamente parte de su estructura y discurso y están enmarcados

en su código genético. Como Daniel Pécaut (2008, p. 69) argumenta, las FARC permanecen atadas al *ethos campesinista*. Están impregnadas del universo campesino y de la sociedad rural. Representan la expresión de una Colombia excluida que se ha venido olvidando desde los centros de poder en el país desde la fundación de Colombia hasta el presente.

Pero la incidencia de la exclusión socio-económica en el conflicto no se limita a las raíces agrarias de las FARC. El escenario de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades y alternativas para la población en las zonas rurales de Colombia representan un factor decisivo que lleva a los jóvenes a la guerra. Los grupos armados se alimentan de la situación de pobreza, de desempleo y ausencia de perspectivas económicas y de vida de las zonas rurales de Colombia. En otras palabras, son alimentados por un marco de violencia estructural. En la gran mayoría de los casos, la guerra no constituye una decisión política o ideológica adoptada individualmente a consciencia para entrar en los grupos armados. Se relaciona con la falta de oportunidades económicas, es la alternativa a la miseria. La guerra se convierte en un trabajo diario que, en el caso de los paramilitares, provee un sueldo.

Los grupos rebeldes son, en gran medida, un síntoma de la desintegración de la economía campesina en Colombia, de la falta de políticas macroeconómicas para hacerle frente y de la profunda inequidad en la distribución de la riqueza en el país. Para González et al. (2003, p. 66), “tanto el denominado problema agrario como la violencia de los actores armados pueden ser vistos como las dos caras de la misma moneda y aspectos de una misma problemática”.

Asimismo, esta exclusión socio-económica tiene también una dimensión simbólica. En contextos y ambientes profundamente anómicos, los grupos armados confieren un sentido de identidad y pertenencia a un grupo. Por intermedio de las armas y del uniforme se adquiere un status inalcanzable en la vida ordinaria marcada por la falta de oportunidades.

En consecuencia, este configura un panorama de guerra que se desarrolla principalmente en las zonas rurales y afecta fundamentalmente a la población rural. La carne de cañón del conflicto armado en Colombia siempre han sido los campesinos.

El conflicto se estructura sobre la base de escenarios sociales y territoriales de pobreza y exclusión socio-económica. En realidad, a pesar del hecho de que

Colombia ha crecido de forma constante a lo largo del siglo XX, de ser un país de renta media y de disfrutar de una economía relativamente estable, el crecimiento económico que configura Colombia ha dejado atrás a muchas zonas del país y sectores de la población, especialmente en el campo. En Colombia 49.2% de la población vive por debajo de la línea de pobreza (CIA, 2010) y 27.9 % de la población vive con menos de dos dólares por día (PNUD, 2011). El panorama es especialmente problemático entre la población rural, que evidencia indicadores sociales y de desarrollo humano mucho más bajos que en las ciudades. De hecho, Colombia ha manifestado históricamente una distribución de la riqueza entre su población bastante desigual. Actualmente presenta un coeficiente de Gini de 0.58, figurando entre los países más inequitativos del mundo (UNDP, 2009).

El papel que estos factores económicos, en particular la pobreza y la desigualdad, desempeñan en los conflictos, en términos generales y en el caso colombiano, es un asunto controversial. Es objeto de un acalorado debate, tanto a nivel político como académico. Hay diferentes visiones sobre el tema. Sin embargo, hay una convergencia en la mayor parte de la academia en el sentido de que hay una correlación entre pobreza y conflicto, pero con distintas cualificaciones y matices (Gutiérrez, 2001, p. 55). No es una relación automática ni de determinación. Hay otros elementos y variables involucrados. La pobreza *per se* no lleva a la violencia. La pobreza implica sobre todo un riesgo de generación de violencia. Los escenarios de pobreza confieren más incentivos para que los individuos y grupos asuman conductas de riesgo (Galindo, Restrepo y Sánchez, 2009, p. 322). La Paz no puede prevalecer donde las condiciones económicas y sociales no son sostenibles. Las sociedades incapaces de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos son más vulnerables al colapso y a los conflictos. El hecho de que Colombia tiene niveles elevados de inequidad y pobreza vuelve a este país más propenso a la violencia política (Gutiérrez, 2001, p. 57).

La exclusión socio-económica ha sido reforzada por instituciones políticas excluyentes que han reproducido y perpetuado estas condiciones. Las políticas públicas han defendido fundamentalmente los intereses particulares de las élites. Por lo demás, la pobreza se convierte en una forma de exclusión política en la medida que los grupos socio-económicamente excluidos pierden capacidad para ejercer sus derechos (Dagnino citado por Castañeda, 2012, p. 53). Todo esto contribuyó para que a la exclusión a un nivel se asocie la exclusión en otro. Los derechos de



propiedad de la oligarquía terrateniente han sido garantizados por las instituciones políticas (primero coloniales y después criollas), frecuentemente de forma violenta. La exclusión de la población al acceso a la propiedad y la riqueza se combinó con formas de exclusión política, como la limitación de la participación política y la escasa provisión de servicios públicos (Galindo et al., 2009, p. 324).

La exclusión socio-económica y política en varias situaciones son diferentes rostros del mismo problema. Desde hace mucho en Colombia ha habido una yuxtaposición de la violencia política armada a la violencia estructural. Así, en el conflicto armado en Colombia una de las causas, no solo es la confrontación de diferentes modelos políticos, sino también de distintos modelos de desarrollo. Los distintos actores armados en el conflicto (Estado, guerrilla y paramilitares) pugnan por diferentes concepciones y modelos de desarrollo y en cierta medida, son los representantes de sus bases e intereses sociales (sea el campesinado pobre, las élites nacionales o locales).

Por último, otro factor que está íntimamente relacionado con este panorama de exclusión socio-económica es el tráfico de drogas y la economía de la coca. El problema de la coca debe ser enmarcado en el marco más largo de la economía rural en Colombia. Más que un problema de seguridad, los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico constituyen esencialmente un problema social y económico, producto de la ausencia de alternativas para desarrollar una economía legal en las zonas rurales de Colombia. De hecho, la expansión del tráfico de drogas y los cultivos de coca se han alimentado, en gran medida, de las limitaciones y dificultades de la economía campesina. La coca ha producido medios de sustento y sobrevivencia a muchos campesinos pobres, sobre todo en las zonas de colonización periférica, y representa la posibilidad de beneficios económicos que los cultivos tradicionales, que enfrentan actualmente graves dificultades en el país, no permiten (Molano, 1992, p. 211). El subdesarrollo de estas zonas rurales convierte la coca en una fuente alternativa de ingresos.

El narcotráfico no constituye una causa profunda ni directa del conflicto colombiano. Las guerrillas emergieron mucho antes de la industria de la coca. Además, el narcotráfico no explica de ninguna forma la totalidad y complejidad de la violencia política y armada en Colombia. Por lo tanto, su eliminación, aunque sea una posibilidad muy remota, no resolvería la cuestión del conflicto y de la violencia en Colombia, ni abordaría el cierre del problema (Bergquist, 1992, pp. 7-8).

Sin embargo, el fenómeno del narcotráfico ‘se casó’ de cierta forma con el conflicto armado y se ha interconectado íntimamente con este en los últimos veinte años. Constituyó un catalizador de la violencia en Colombia, que alimenta el conflicto y los grupos alzados en armas. Se convirtió en la principal fuente de financiación de las FARC y de los grupos paramilitares. Representa hoy uno de los principales factores que estructura la dinámica actual del conflicto colombiano en términos geopolíticos y geoestratégicos.

Así, teniendo en cuenta la extrema importancia que tiene el tráfico de drogas en la configuración actual del conflicto, este factor es en la actualidad una de las piezas centrales del rompecabezas que es el conflicto colombiano y un tema central para su transformación. Por lo tanto, el contexto de exclusión socio-económica encuentra en el narcotráfico un elemento y factor adicional de importancia.

## Exclusión política

La segunda causa del conflicto colombiano, que, en gran medida está interconectada con la primera, tiene que ver con la naturaleza del sistema político de Colombia y las ambigüedades y limitaciones de su régimen democrático. A menudo proclamada como la democracia más antigua de América Latina, el hecho es que representa una democracia muy peculiar. Muchas expresiones y metáforas han sido utilizadas para describirla, subrayando su naturaleza defectuosa, incompleta y violenta: democracia limitada, democracia sin pueblo, democracia iliberal, democracia de baja intensidad, democracia restringida, narco-democracia (Pécaut, 1992; Tokatlian, 2000, p. 300; González et al., 2003, p. 293). El padre Javier Giraldo (1996) la ha llamado incluso “la democracia genocida”, haciendo hincapié en la naturaleza violenta y represiva del régimen.

De hecho, a pesar de ser un régimen en el que la democracia no es ficticia, con elecciones presidenciales libres celebradas como un reloj cada cuatro años (Hylton, 2003, p. 53), con un sistema multipartidario, libertad de expresión, libertades civiles (aseguradas al menos formalmente), separación entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, es evidente que constituye una democracia con matices autoritarios. Representa una especie de una “democrata-dura”

(Galeano citado por Giraldo, 1996, p. 7), oxímoron que se adapta bien a las contradicciones de la realidad colombiana y a un sistema político que combina una democracia formal y elementos democráticos con características de una dictadura.

El sistema político en Colombia ha sido bastante exclusivo y a menudo represivo. Muchos elementos y características sostienen esto: el mecanismo extra constitucional del estado de sitio, que permite que el poder ejecutivo se sobreponga al judicial y legislativo, no ha sido utilizado históricamente en Colombia como una medida excepcional, pero casi de forma cotidiana; ha habido casos de elecciones fraudulentas, como las de 1970; varios presidentes colombianos han sido hijos de otros presidentes de Colombia (Hylton, 2003, p. 53), hecho que subraya la estrechez del régimen político y la naturaleza oligárquica del mismo; el Partido Comunista colombiano ha sido ilegalizado en más de una ocasión; alcaldes y gobernadores solo han comenzado a ser elegidos directamente por el pueblo en 1991; existen varias barreras y restricciones formales e informales a la oposición y a la movilización social (Gutiérrez, 2001, p. 72); miembros de la oposición son frecuentemente vigilados, amenazados e incluso objeto de procesos judiciales por subversión; el orden social se ha separado a menudo del orden institucional (Pécaut, 1992, p. 226), impidiendo que muchos de los derechos constitucionales se respeten, como también los derechos humanos y laborales; la movilización y la protesta sociales han sido a menudo criminalizadas; todo un partido político legal, la UP, fue perseguido y eliminado en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado como un genocidio político.

Otro elemento fundamental de exclusión política que disminuye la naturaleza democrática del sistema político colombiano se relaciona con las estructuras clientelistas locales y nacionales que sustentan la vida política colombiana. El ejercicio de la política en Colombia siempre ha estado ligado a intermediarios. La vida política se estructura en torno a redes clientelistas y de poder basadas en jefes políticos locales que disponen de los votos de sus clientelas como verdaderos barones feudales de la edad media (Lleras Restrepo citado por González et al., 2003, p. 301).

Los partidos tradicionales, conservador y liberal, funcionaron históricamente como ‘federaciones de caciques’. En la ausencia de visiones ideológicas distintivas substanciales entre ambos lo que se evidenciaba eran sobretudo los

particularismos y rivalidades locales (González et al., 2003, p. 274). El poder político de los jefes locales, que disponían con base en sus propiedades agrarias, les conferían no solo una mano de obra campesina, sino una clientela electoral (Marulanda, 2003, p. 16).

Estas estructuras clientelistas han obstaculizado una verdadera participación popular y han configurado mecanismos de ‘inclusión perversa’, en la medida en que el clientelismo es contrario a la noción de ciudadanía y participación política. En realidad, la noción y ejercicio de ciudadanía son precarios en Colombia. Como refiere Daniel Pécaut (citado por González et al, 2003, p. 216) “las instituciones formales parecen singularmente abstractas y lejanas”. Colombia es un país históricamente muy débil institucionalmente. El conflicto armado es un síntoma, en gran medida, de la carencia de una institucionalidad democrática.

Pero, por encima de todo, un elemento de exclusión política está directamente relacionado con la aparición de las guerrillas en Colombia: El Frente Nacional. Una consecuencia de la devastadora guerra civil conocida como La Violencia, entre liberales y conservadores, fue un pacto bipartidista en 1958 que dividió milimétricamente todo el poder político en Colombia. El gobierno fue compuesto por un porcentaje igual de ambos partidos y la presidencia se rotó cada cuatro años entre liberales y conservadores, aplicándose este monopolio bi-partidario igualmente a cualquier otro cargo público y esfera de poder. Asimismo, El Frente Nacional impuso diversas restricciones a las libertades civiles y a la oposición.

Este acuerdo puso fin a las hostilidades, no obstante, generó las raíces para un nuevo conflicto. Todas las demás fuerzas políticas quedaron fuera de este pacto. Los canales legítimos de participación democrática fueron así bloqueados. Una verdadera arena democrática estaba ausente. En este marco, las instituciones perdieron crédito y legitimidad y parte de la oposición se radicalizó. En la mente de muchos colombianos la única alternativa que este régimen dejó para la participación y expresión política fue la insurgencia armada. En gran medida, el surgimiento de las guerrillas en los años sesenta y setenta fue una reacción contra El Frente Nacional y el régimen político exclusivo que instituyó (Bergquist, 1992, p. 7). De cierta forma, las guerrillas en su momento inicial ejercieron una militarización de la lucha por la democracia.

Por lo demás, la institución del Frente Nacional coincidió con la Guerra Fría y la Revolución Cubana, factor que catalizó la emergencia de grupos

guerrilleros de diversas índoles, tipos y bases sociales. Las divisiones ideológicas de la Guerra Fría transpuestas a las contradicciones, divisiones sociales y problemas estructurales de este país andino, volvieron a Colombia el país de ‘todas las guerrillas’: desde la guerrilla campesina en la forma de las FARC, el guevarismo con ‘alma cristiana’ del ELN (Celis, 2008, entrevista), el maoísmo del EPL, el bolivarianismo criollo con métodos de guerrilla urbana del M-19, hasta la guerrilla indígena del Quintín Lame.

Por estos factores el Frente Nacional tuvo un impacto tremendo en el conflicto armado desde su origen hasta hoy. Como Hylton (2003, p. 67) señala “[el Frente Nacional fue] el momento definitorio de la historia moderna colombiana”. Estableció los parámetros para la política nacional en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, aunque el pacto del Frente Nacional duró formalmente hasta 1974, muchos de sus elementos se mantuvieron en la práctica hasta la reforma constitucional de 1991 (Chernick, 2008, p. 60).

Pero esta democracia limitada instituida por el Frente Nacional no fue en realidad una invención del siglo XX. Se debe enmarcar en un contexto histórico, lo cual Hylton (2003, p. 53) ha llamado la “diarquía” colombiana. Siguiendo las líneas políticas del siglo XIX, el régimen colombiano, se sostuvo por más de cien años en un sistema de dos partidos, que ha limitado el poder a las élites (Pécaut, 1992, p. 224). Como Stokes (2005, p. 78) refiere, “el sistema político de Colombia ha sido diseñado para funcionar en los intereses de su élite minoritaria. [...] La formación del Frente Nacional [solo] sirvió para afianzar aún más el poder de las élites de Colombia”.

Así, históricamente las políticas públicas en Colombia no han respondido a los intereses de la mayoría, pero sobretodo de la minoría. Ha habido una marginalización y exclusión de amplios sectores de la población colombiana de la participación política y de la prestación de servicios públicos. Un Estado ineficiente, oligárquico y a menudo represivo ha fallado en responder a las necesidades humanas de la mayoría población (McDonald, 1998, p. 33).

Adicionalmente, hay otros elementos políticos en Colombia que se sitúan en la base de la violencia y del conflicto armado:

En primer lugar, Colombia es un país que encierra una cultura política de la violencia visible a varios niveles y en varios aspectos. Debido al débil funcionamiento de las instituciones, a un sistema político excluyente y a la ausencia de

una regulación social y de mecanismos legales de resolución de conflictos, se ha desarrollado históricamente una tendencia en Colombia hacia la privatización de la justicia y de la violencia (McDonald, 1998).

El conflicto armado es, en gran medida, el resultado de una falla institucional (Restrepo, 2001). Como Jorge Restrepo (2001) subraya,

[...] cuando no existen instituciones –trátese de mercados, firmas o instituciones legales– que resuelvan una diferencia entre dos grupos sociales, el conflicto violento aparece como una opción para las partes en la que ellas deben medir su poder para resolver sus diferencias.

El sistema político cerrado y excluyente colombiano ayudó a desarrollar una sociedad en que las diferencias no se solucionan a través del diálogo y del compromiso. Así la fuerza ha tendido a regir los diversos niveles del relacionamiento y vínculo social.

A esto se suma una permanencia estructural de la violencia, que acompaña a Colombia desde la institución de la República. El historiador Gonzalo Sánchez (citado por Pearce, 1990, p. 17) retrata la Colombia del siglo XIX como un “país en guerra permanente”. En el siglo XIX Colombia vivió ocho guerras civiles, dos guerras internacionales e innumerables levantamientos armados (Pearce, 1990, p. 17). El choque entre dos partidos (Liberal y Conservador) que constituían igualmente dos identidades políticas dejó al país en un estado endémico de violencia que tocaba transversalmente toda la población colombiana. La participación política en la arena política pasó fundamentalmente por el ejercicio de la guerra. Como señala Fabio Zambrano (citado por Kline, 1999, p. 195), “la mayoría de la población aprendió la política a través del uso de las armas, antes que por el ejercicio del sufragio”. La violencia se convirtió en la forma normal de manejar los problemas. No se han desarrollado medios pacíficos para canalizar y resolver los conflictos.

De igual forma, ha desarrollado e inculcado en la sociedad y en la cultura política una tradición de sectarismo y una cultura de intransigencia e intolerancia. Tanto entre los actores armados como desarmados, Colombia es una sociedad que privilegia culturalmente, en gran medida, la fuerza sobre el diálogo (Zapata, 2006), factor que figura como una marca de violencia cultural. Este elemento ha contribuido para que las luchas sociales hayan sido históricamente criminalizadas

y tratadas de forma represiva (Vargas, 2002, p. 353). La existencia de grupos armados ilegales, sea en la forma de guerrilla, grupos paramilitares, o incluso carteles de droga, se tiene que enmarcar en este contexto político.

Conjuntamente, Colombia presenta un elevado grado de impunidad que, entre otros factores, ha contribuido a niveles bajos de legitimidad del Estado y a que la población en general no crea en las instituciones (OPI, 2006, p. 56). Esto se manifiesta, por ejemplo, en las altas tasas de abstención en este país.

Son así variadísimos los elementos que limitan la democracia del sistema político colombiano y que propician un escenario político propenso a la conflictividad. Aunque la exclusión política del sistema colombiano ha disminuido mucho desde los tiempos del Frente Nacional y la Constitución de 1991 estableció importantes reformas políticas con vista a la democratización, todavía hay un largo camino para recorrer hasta que la democracia colombiana pierda plenamente algunos de los adjetivos que se le han atribuido.

Así, esta causa profunda del conflicto sigue siendo relevante. Incluso si su influencia en el conflicto armado de hoy no es tan determinante como en su inicio, el régimen colombiano es todavía, en gran medida, un sistema político excluyente, que carece de una institucionalidad democrática. Como la democracia es mucho más que la celebración de elecciones y se basa no solo en procesos representativos, sino participativos, para construirse una paz sostenible, Colombia debería construir un régimen más inclusivo, en otras palabras, debería democratizar su democracia (Sousa Santos, 2003; Wallensteen, 2002, pp. 286-287).

## Exclusión regional

La tercera causa profunda del conflicto está íntimamente relacionada con las dos anteriores. La exclusión regional reviste una dimensión política y una dimensión socioeconómica, y la exclusión socio-económica y política se estructuran y se acentúan en torno de la exclusión regional. Asimismo, es una causa que está también profundamente arraigada en la historia de Colombia y del Estado colombiano y que por lo demás, ha tenido un impacto profundo en la manera como el conflicto armado se ha desarrollado en este país.

Podríamos darle distintos nombres e ilustrarlo desde diferentes puntos de vista: una brecha centro-periferia, una Colombia dual, la geometría variable de Colombia. En esta investigación se utiliza el término de *exclusión regional* para describirlo. De hecho, está relacionada con la exclusión de algunas regiones y zonas de Colombia del desarrollo, la democracia y las instituciones del país, factor que alimenta la violencia y sostiene la permanencia y evolución de grupos armados ilegales.

En lo que concierne a este tema, el primer elemento que se debe tener en cuenta es la misma geografía de Colombia. Esta ha tenido un impacto determinante en el curso de la historia del país y en la dinámica del conflicto armado. Colombia posee un territorio y una geografía complejos. Es un país de gran dimensión, tres veces mayor que Alemania, con un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados. Se encuentra situada entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, siendo atravesada longitudinalmente por tres cordilleras de los Andes y por dos grandes ríos, el Magdalena y el Cauca, en un territorio inmenso y diverso que se extiende hasta la selva de la Amazonia. Configura un mosaico de paisajes físicos y humanos. Encierra grandes variaciones de temperatura, clima y altitud, factores que influyen los patrones sociales y configuran una pluralidad de pueblos y culturas.

Colombia ha sido descrita como una “especie de archipiélago” (Pearce, 1990, p. 13). Las inmensas barreras físicas del país y las grandes dificultades de transporte y comunicación hicieron de Colombia un país de regiones aisladas, que vivían de forma casi autárquica y que desarrollaron fuertes especificidades culturales, sociales y políticas. Las ciudades “estuvieron durante siglos separadas por caminos tortuosos y picos cubiertos de nieve, como siguen siendo, para los que no pueden permitirse viajar en avión” (Hylton, 2003, pp. 55-56). De esta forma, la geografía y topografía de Colombia han hecho naturalmente difícil para el Estado controlar la totalidad de su territorio.

Por lo demás, otro factor ha sido fundamental para esto: la infraestructura de transportes y comunicación en Colombia es muy débil. Las autopistas y ferrocarriles son prácticamente inexistentes; se trata de un país grandemente desintegrado, como es posible comprobar en el relato de Isabel Rodríguez (2008, octubre 25, entrevista), una líder comunitaria de Cumbitara, en Nariño, y participante de algunos procesos sociales del laboratorio de paz del Macizo Colombiano, que



narra la verdadera odisea que tiene que hacer para viajar desde Pasto, la capital del departamento, hasta a su pueblo:

Para llegar al Bajo Cumbitara se parte desde Pasto dos horas por la vía panamericana hasta llegar a Puerto Remolino. De Puerto Remolino se baja y cruza el río Patía por una vía que es paralela al río Patía que atraviesa el 80% del municipio de Policarpa, hasta llegar a otro punto también en el río Patía que se llama Remolino Bajo Patía, que queda ubicado en la parte baja del municipio de Policarpa. Ya estando en el río Alto Patía, se cruza un puente colgante para pasar al lado del Bajo Cumbitara, donde se tiene que hacer un recorrido a lomo de mula, como lo decimos nosotros, o a caballo. Desde Remolino Bajo Patía hasta la primera cabecera corregimental son de dos a tres horas dependiendo del estado del tiempo y del estado de los caminos, porque hay muchas veces que el barro les llega hasta la barriga de las mulas. Entonces imagínese la dificultad para llegar hasta las veredas o hasta los corregimientos. Después de la primera cabecera corregimental que es Santa Rosa, se recorre una hora más a caballo y allá está la segunda cabecera corregimental, que es Damasco. Desde el Remolino Bajo Patía una vez se haya cruzado el río Patía, hay otra vía o hay otro camino de herradura paralelo al río Patía que más o menos haciendo un recorrido de cuatro a cinco horas (también dependiendo del estado del camino) y del tiempo se llega a la cabecera corregimental del tercer corregimiento que es Sidón. De allí para dentro de Santa Rosa, Damasco y Sidón, que son las cabeceras corregimentales, hay muchísimas veredas hasta tal punto que de donde se coge caballo usted puede recorrer perfectamente de diez, doce a quince horas a caballo y todavía encuentra existencia humana. [...] Esa es la forma que los habitantes del Bajo Cumbitara llegan a cada una de sus veredas.

Este aspecto es sumamente importante en la medida en que las carreteras llevan no solo a los carros y las personas, sino a las instituciones y al desarrollo. La geografía colombiana es un factor que está íntimamente relacionado con la estructura económica y política del país. Asimismo, la debilidad de la infraestructura

de transportes que se asocia a la exclusión de una gran parte del país encierra a menudo una dimensión y configuración políticas.



**Avenida asfaltada en el departamento del Cesar**

**Fuente:** *Miguel Henríques*

Un episodio ocurrido durante el trabajo de campo para esta investigación atestigua simbólicamente esta relación cercana entre la exclusión regional y política. Atravesando el Magdalena Medio en el César, por un breve e infrecuente momento, la carretera estaba asfaltada, después de horas por tortuosas trochas de tierra. Prontamente me fue explicado con una sonrisa en los labios y algún sarcasmo la razón de tal hecho: “es que acá es la finca de los Araújo!”, conocida familia de la élite del Cesar, (donde proviene, por ejemplo, la exministra de relaciones exteriores del expresidente Uribe, María Consuelo Araújo.) En gran medida, las vías en el campo se hacen para que los terratenientes lleguen a sus fincas. Se vuelve manifiesto que también en las carreteras hay una estructura desigual de distribución que toca de forma distinta a unos sectores que a otros.

Asimismo, la debilidad de la infraestructura vial colombiana tiene consecuencias importantes en términos económicos y políticos. Como señala el economista colombiano Jorge Iván González (2007, entrevista), debido a este factor,

Colombia no ha sido capaz de crear un mercado interno. Esta característica constituye un obstáculo a la expansión de los circuitos económicos y a las dinámicas de producción regionales y nacionales, impidiendo en gran medida, que la economía rural en Colombia pueda ser sostenible. Teniendo en cuenta la problemática de la exclusión socioeconómica descrita en el inicio de este capítulo, se vuelve evidente hasta qué punto este factor es un alimentador del conflicto.

Pero el fenómeno de exclusión regional en Colombia como causa profunda del conflicto tiene que entenderse fundamentalmente como la confluencia de factores geográficos e históricos. El conflicto armado en Colombia tiene que ser mirado a la luz del proceso histórico de construcción del Estado colombiano. Este proceso, que se extiende desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días, creó una presencia diferenciada del Estado en las regiones y dinámicas de exclusión de varios territorios y sectores sociales de la población.

Esta situación se relaciona fundamentalmente con el ya referido fenómeno de la colonización de las regiones periféricas. Hubo una integración progresiva de territorios y poblaciones a la nación, desde el siglo XIX hasta hoy, en sucesivas vagas de colonización. Estos territorios periféricos fueron poblados históricamente por grupos sociales marginales y excluidos de campesinos, negros, mestizos, mulatos y blancos pobres que huyeron de la concentración del desarrollo agrario en otras regiones (González, 2004, p. 11).

La existencia de territorios de frontera en Colombia configuró una precariedad del Estado y una profunda asimetría política, social y económica entre las regiones del país y creó una institucionalidad propia (o falta de ella) en estas zonas, en la cuales, se ha evidenciado un profundo vacío institucional. La regulación social del Estado ha sido nula o mínima y los servicios públicos muy reducidos. El Estado no ha dispuesto del monopolio del uso de la fuerza y el sistema de justicia ha sido muy incipiente.

En estos territorios la organización política y social se ha estructurado fundamentalmente sobre la base de redes locales y regionales de poder. Configuraban lo que lo que Forrest Hylton (2003, p. 55) llama una “topografía del clientelismo”. Según este autor, las condiciones geográficas de Colombia han permitido y facilitado que las élites locales en el país impusieran controles clientelistas parroquiales sobre la población y bloquearan las movilizaciones nacionales de la base. Las dos grandes familias políticas colombianas, Liberales y Conservadores,

han constituido desde el inicio organizaciones nacionales muy fragmentadas y divididas en facciones. Formaban una colcha compleja de rivalidades locales (Hylton, 2003, p. 56). Así, las condiciones estructurales de desarrollo de estas regiones propiciaron que a la mayoría de la población en estas regiones le fuera negada la participación política (dominada por las redes clientelistas) y económica (restringido el acceso al recurso de la tierra por el control de los latifundistas). Según Alejo Vargas (2002, p. 354) “a la mayoría de sus pobladores se les ha considerado extraños en su propia región.”

El proceso de construcción del Estado configuró de esta forma el desarrollo de sociedades regionales profundamente excluyentes. Asimismo, configuró un Estado precario y regionalmente diferenciado y una débil unidad nacional. La relación e integración de una gran parte de las regiones de Colombia con el conjunto de la sociedad y de la nación, a nivel social, económico y político ha sido muy tenue (González et al., 2003, p. 116). El Estado se ha instituido en negociación permanente con los poderes locales y regionales, que conservaban una relativa autonomía (González et al., 2003, p. 230). Hay una dispersión territorial de la política nacional colombiana. La tendencia centralizadora del Estado convive con las tendencias y dinámicas centrifugas de los poderes locales. Bogotá nunca fue históricamente un centro totalmente aglutinador del poder. Sufrió la competencia de otros polos, como Medellín, Cali y Barranquilla. Por lo tanto, el carácter de Colombia como Estado-nación es puesto frecuentemente en consideración y ha sido debatido política y académicamente. David Bushnell (1996) la ha apellidado como “una nación, a pesar de sí misma”. Fernán González et al. (2003) se refieren a la “nación fragmentada”. De hecho, con el proceso de independencia, Colombia logró construir un Estado nacional, pero no una nación (Bushnell, 1996, p. 111).

En este contexto histórico y geográfico, frente a la precariedad del Estado y de la nación, se ha desarrollado un fuerte regionalismo, característica que ha marcado la vida política de Colombia (Pearce, 1990, p. 13). Las identidades regionales son arraigadas y el sentido de pertenencia territorial es profundo. Ser paisa, cachaco, santandereano o costeño en Colombia tiene un fuerte significado.

El Estado colombiano fue creado sobre la base de realidades regionales muy diferenciadas, en un territorio fragmentado, con administraciones locales muy desconectadas. La inclusión gradual de nuevos territorios y poblaciones a la vida nacional por intermedio de un proceso de colonización configuró

una diferenciación de la relación entre el Estado con las varias regiones, con distintos grados de integración y exclusión de las regiones al Estado, a la vida política nacional e instituciones estatales (González et al., 2003, p. 45). Esto configuró un escenario en el cual hay regiones plenamente insertadas política y económicamente a la nación; otras medianamente integradas y otras completamente excluidas y marginadas (González et al., 2003, p. 116). Asimismo generó una sociedad muy jerarquizada socialmente sobre la base de exclusión de muchas poblaciones y del privilegio a otras.

En Colombia se presentan muchos centros y periferias, geográficamente y socialmente. Hay asimetrías y lógicas de exclusión (o inclusión precaria) entre lo nacional y lo regional, las áreas urbanas y las zonas rurales, pero también entre grupos sociales y étnicos. Colombia es un país de fronteras, no solo geográficas sino políticas, sociales y económicas; no solo visibles y tangibles, como ocultas y difusas. Distintas Colombias se desarrollaron y se evidencian a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hay distintos países que se suceden y se interceden en el mismo país. Colombia es un país que vive simultáneamente a varias velocidades. Tiene una geometría variable. Coexisten diferentes niveles de desarrollo e institucionalidad, algunas veces uno al lado del otro. Referenciando una famosa expresión del fallecido expresidente de Colombia López Michelsen, hay (al menos) ‘dos Colombias’. Hay una Colombia democrática, desarrollada, industrializada, occidental y urbana, cercana a Europa y a Estados Unidos; y una Colombia pobre, marginalizada, rural, campesina, subdesarrollada, sin Estado de derecho, fragmentada, violenta y no institucionalizada. Esta segunda cara de Colombia constituye un escenario similar al del África subsahariana o de una temporalidad del siglo XVIII.

Procesos históricos de varias índoles en Colombia configuraron una presencia precaria y diferenciada del Estado en el territorio y una sociedad atomizada y desintegrada socialmente, factor que ha sostenido y alimentado en gran medida el conflicto armado. La estructura política del Estado ha afectado históricamente apenas una reducida porción de la población. Como señala José María Samper (citado por González et al., 2003, p. 271), las instituciones republicanas solo tenían verdaderamente expresión en las ciudades “y eso a medias [...] Más abajo, ni el olor siquiera. En las parroquias nadie la conoce de vista y casi nadie de oídas, ni sabe qué color, ni sabor tiene”. La relación con la comunidad política nacional de

muchos sectores de la población (principalmente el campesinado) y de variadas zonas del país (sobre todo las regiones de colonización reciente), ha sido precaria.

Sin embargo, es una situación matizada geográfica y socialmente. La capacidad del Estado en una ciudad como Bogotá, Medellín o Cali es diametralmente diferente de su capacidad y presencia en un municipio de la Amazonia o una vereda del Magdalena Medio o Vaupés, tal como la autoridad de la corona de España era totalmente distinta en la capital que en otras partes del país. En la realidad, se conforma en Colombia un escenario cuyas raíces remontan al tiempo de la colonia de la Nueva Granada bajo la Corona de España, de coexistencia entre las instituciones formales y democráticas del Estado y las estructuras de poder informales regionales y locales. Esto configura un panorama en que se estructuran diferentes grados y tonalidades de institucionalidad, que se acentúan a medida que se acercan al centro y se debilitan a medida que se acercan a las periferias. No es una relación cerrada, ni estancada. Hay permeabilidades, coexistencias e intersecciones entre la institucionalidad legal y los otros tipos de ordenamiento social y político (González et al., 2003, p. 256).

Esta exclusión regional en términos políticos, socio-económicos e incluso culturales constituye una de las causas estructurales del conflicto. Hay territorios en Colombia que el Estado nunca realmente ha administrado. Los dividendos del desarrollo y del crecimiento del país no se han distribuido allí; la democracia y las instituciones democráticas no han llegado hasta ellos; no se han construido infraestructuras y no han sido prestados servicios públicos a la población. No solo Bogotá está muy lejos geográfica e institucionalmente de muchas regiones del país, como incluso las capitales departamentales a menudo lo están.

No por casualidad, pero debido a las condiciones estructurales de estas regiones, en las zonas periféricas de colonización reciente nacieron los grupos guerrilleros en los años sesenta y setenta y más tarde los cultivos de uso ilícito. Este espacio dejado por el Estado en muchas regiones de Colombia ha sido ocupado históricamente por los poderes locales y en las últimas décadas por la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Las FARC, como otros grupos armados, crecieron y se expandieron principalmente en las regiones donde la presencia estatal era imperceptible y la colonización avanzaba (Molano, 1992, p. 207). De hecho, en muchas partes del país la guerrilla no robó el poder al Estado. Lo ha ocupado y llenado en su ausencia. La guerrilla y los paramilitares han llenado el vacío

institucional (Zapata, 2006). En la realidad, frecuentemente los grupos armados ilegales no solo ejercen un control militar sobre los territorios, sino que también actúan como un verdadero ‘para-Estado’. Substituyen al Estado en sus funciones y roles fundamentales, como la prestación de ‘servicios básicos’ y seguridad, la administración de justicia y la recaudación de impuestos.

Esta institucionalidad alternativa desarrollada por los actores armados ilegales ha recibido distintas designaciones según las regiones, como la ‘ley de atrás’ en el Magdalena Medio, ‘la ley del monte’ en el sur del país, o ‘la ley de la guerrilla’ en el Cauca (González et al., 2003, p. 208). Por lo tanto, han emergido verdaderos órdenes sociales locales y micro-Estados, configurando una especie de realidad semi-feudal, donde distintos sistemas de justicia y instituciones oficiales y no oficiales coexisten, y donde se ejerce control por los grupos armados sobre la población, entre la legitimidad y la represión violenta. Constituyen una especie de ‘enclaves autoritarios’ que coexisten con las instituciones democráticas nacionales (Castañeda, 2012, p. 158).

Estos órdenes sociales locales<sup>1</sup> son una de las piezas fundamentales del conflicto colombiano. Sin transformar los órdenes sociales y establecer sistemas de regulación legítimos del Estado, seguirán habiendo condiciones para el desarrollo y expansión de grupos armados ilegales (Duncan citado por Granada et al., 2009, p. 104.)

Sin embargo, esto no significa que Colombia sea un Estado fallido<sup>2</sup>. Fundamentalmente estamos delante de lo que el historiador colombiano Fernán González (2007) llama una “presencia diferenciada del Estado”. El Estado y el régimen colombianos no se han hundido, como en algunos países africanos, y

---

1 Estos órdenes locales son de hecho una marca estructural de Colombia. Tienen antecedentes y paralelo en el pasado. En el contexto de La Violencia, se hablaba de las ‘repúblicas independientes’, comunidades campesinas relativamente autónomas, que constituían zonas de refugio del poder central, que venían desarrollando diferentes sistemas sociales, y tuvieron un rol fundamental en el proceso que dio origen a las FARC. De igual forma, en el siglo XIX ya se había desarrollado en Colombia el concepto de ‘patrias chicas’, para designar territorios extensos dominados por una familia local (Kline, 1999, p. 11).

2 El concepto de Estado fallido (Sorensen, 1999), tal como los conceptos similares de ‘Estado frágil’, ‘Estado colapsado’ o ‘*quasi-state*’, se ha vuelto recurrente en el análisis de la conflictividad en los países en vías de desarrollo. Describe una situación de crisis y de fragilidad del Estado a varios niveles, en la cual este no tiene la capacidad de desempeñar todas las funciones y atributos del Estado considerados esenciales, en términos de seguridad, desarrollo, bienestar y control del territorio.

han mantenido la fuerza suficiente para preservar y hacer funcionar una economía moderna e instituciones democráticas, para celebrar elecciones regulares, para alternar el poder y para proporcionar servicios básicos y seguridad a la mayoría de la población concentrada en las zonas urbanas de la meseta andina y del Caribe (Chernick, 2008, p. 114; González et al., 2003, p. 220).

Por encima de todo, lo que está en juego es el hecho de que Colombia no ha sido capaz de consolidar un Estado de bienestar y de derecho para la totalidad de su población y ciudadanos. Los actores armados son solo un síntoma de esto.

## Conclusión

Se buscó demostrar en este capítulo que el conflicto armado en Colombia es sostenido por factores estructurales que han alimentado históricamente la violencia en el país, en sus distintas formas, modalidades y configuraciones y que las causas profundas del conflicto armado se entrecruzan con necesidades humanas básicas, como planteadas por Burton.

No se pretendió con esto, de ninguna forma, plantear un determinismo estructural en el conflicto armado en Colombia. La violencia es producto de las opciones voluntarias de individuos y grupos sociales, pero influenciados y condicionados por las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de su entorno. Las estructuras no determinan los agentes (de violencia), los limitan y afectan. Como señaló Marx (1852), “los hombres hacen su propia historia, pero no en circunstancias de su propia elección”.

Así, fundamentalmente lo que está en juego es señalar que el conflicto armado está enmarcado en procesos históricos de largo plazo que se tradujeron en un problema de exclusión manifestada a un nivel político, socio-económico y regional. Las estructuras excluyentes desarrolladas en Colombia fomentan y catalizan la violencia armada en el país. Las tres causas profundas del conflicto descritas y analizadas aquí configuran un escenario de violencia estructural que asume una relación cercana con la extrema violencia directa que asola el país.

Por lo tanto, se concluye que la construcción de la paz y la transformación del conflicto en Colombia tendrán necesariamente que partir de esta realidad,



de la comprensión de estos factores, algo que los PDP y los laboratorios de paz han entendido y asumido en su trabajo y concepción de paz, en la medida en que son iniciativas que buscan incidir sobre las raíces históricas del conflicto y se proyectan fundamentalmente como plataformas de inclusión a nivel político, socio-económico y regional.

Un enfoque integral para la paz en Colombia, que tenga como horizonte la construcción de la paz positiva y no solo la ausencia de la guerra, tendrá que pasar necesariamente por una aproximación a causas profundas del conflicto y las estructuras de exclusión que impiden el ejercicio de la ciudadanía para una buena parte de la población. La ruta para la paz y la transformación del conflicto en Colombia implica un proceso de inclusión a nivel político, socioeconómico y regional que integre transversalmente los sectores sociales y las regiones colombianas, desde las élites a los actores de base, del centro a las periferias. Exigiría repensar la naturaleza del Estado, de la democracia, la sociedad y el desarrollo en Colombia, y reconsiderar los pilares fundamentales que los sustentan. La construcción de la paz en Colombia pasa en gran medida por la democratización del país, el desarrollo de una sociedad más inclusiva y la promoción de un desarrollo humano sostenible para el conjunto de la población colombiana Chernick (2008, p. 243).

Es necesariamente un proceso y un reto a largo plazo y a varios niveles. En términos de exclusión socio-económica, pasa por prestar especial atención a las zonas rurales de Colombia, el mundo donde el conflicto armado ha estallado y que se ve más afectado por él, y por políticas y estrategias económicas para incorporar a los campesinos en el desarrollo del país. En este marco, las problemáticas del desempleo rural, de la economía de la coca y de la estructura agraria se presentan igualmente como fundamentales.

En lo que se refiere a la exclusión política, en juego está la construcción de un régimen y una institucionalidad plenamente democráticos e inclusivos. Hay una necesidad manifiesta en Colombia de desarrollar verdaderos canales de participación política que vayan más allá de las redes clientelares de las estructuras de los partidos. De igual forma, es necesario la reconfiguración de la cultura política colombiana en torno de la ética del servicio público, de la resolución pacífica de conflictos y del reconocimiento y protección integral de los derechos políticos y civiles.

Por último, abordar la exclusión regional significa, fundamentalmente, reconciliar las ‘dos Colombias’. La paz en este país pasa necesariamente por integrar las regiones y territorios históricamente marginados de las instituciones, la democracia y desarrollo. No solo la presencia física del Estado es esencial, si no construir una presencia legítima e integral del Estado como prestador de servicios públicos para todo el territorio y toda la población. En otras palabras, se exige un Estado de bienestar en donde quepan todos los colombianos, independientemente de su clase, etnia, género o proveniencia regional.

Estos factores son fundamentales para la construcción de la paz en Colombia, no solo porque representan las causas profundas del conflicto, sino porque constituyen los problemas estructurales de la sociedad y del sistema político colombiano, que son necesarios abordar aunque no hubiera violencia política armada.

Así, fundamentalmente, los tres niveles de exclusión aquí descritos son esenciales para la construcción de una paz sostenible y duradera. No habrá paz en Colombia, en su concepción amplia y positiva, sin abordar estos factores estructurales. La guerrilla y los paramilitares no constituyen en sí la única enfermedad en Colombia. Representan el síntoma de otras enfermedades, para las cuales el país necesita encontrar curas. Sin tratar la raíz de los problemas, estos nunca desaparecerán.

En esta investigación se busca analizar e inferir en qué medida la experiencia social de los laboratorios de paz aborda estas causas y factores estructuradores del conflicto a nivel regional y configura un instrumento de inclusión con vista a la paz positiva.

# 4

## Capítulo



# Las políticas de paz de la Unión Europea hacia Colombia: la concepción de los laboratorios de paz desde el trayecto europeo

## Introducción

Los laboratorios de paz son iniciativas de construcción de paz intrínsecamente colombianas. Están profundamente arraigados en la realidad social del país y en las dinámicas del conflicto colombiano. Han emergido en el escenario social de violencia y movilización social de la región del Magdalena Medio, microcosmos del conflicto colombiano, sobre la base de la filosofía y experiencia social del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPM). La Unión Europea nunca ha sido el mentor ni el protagonista principal de la iniciativa. Su motor se ha ubicado siempre en la sociedad civil colombiana organizada en los PDP.

Sin embargo, la UE desempeñó un rol fundamental en este proceso y constituyó uno de los actores esenciales de la iniciativa. Los laboratorios de paz surgieron como un casamiento entre los intereses, estrategias y percepciones convergentes del PDPM y de la UE que confluyen en un determinado momento y lugar en Colombia: en el Magdalena Medio, a inicios de los años 2000.

La originalidad de esta iniciativa y su enfoque particular para la paz tiene raíz no solo en los procesos sociales de la región del Magdalena Medio y en la concepción intelectual del padre Francisco de Roux, sino también en cierta medida en las políticas de cooperación y concepciones políticas y de paz de la UE. Los laboratorios de paz constituyen no solo una experiencia de construcción de paz de la sociedad civil colombiana, sino también un instrumento europeo para Colombia de la cooperación para el desarrollo y una de las piezas fundamentales de la estrategia para la paz de la UE en este país. Por lo tanto, para analizar el enfoque de construcción de paz de los laboratorios es importante contextualizar igualmente esta experiencia en el marco de la política exterior de la UE.

Así, este capítulo se enfoca en el origen y concepción de los laboratorios de paz desde la trayectoria y perspectiva de la UE, a partir del análisis de las políticas exteriores y de paz de la UE hacia Colombia, particularmente sus políticas de cooperación al desarrollo. No se pretende contribuir para la teorización de la UE en cuanto actor internacional y para la problematización de su(s) política(s) exterior(es), sino fundamentalmente analizar en qué medida hay en construcción un enfoque europeo de transformación del conflicto colombiano que se materializa y converge en los laboratorios de paz.

## La Unión Europea como actor internacional de paz

### La Unión Europea como actor internacional

La UE es una entidad política compleja. Difícilmente se encuadra y se puede clasificar en las categorías convencionales de la ciencia política y de la teoría de las relaciones internacionales. Jacques Delors la designó como un objeto político no identificable. Augusto Rogério Leitão (2010, p. 127) la caracteriza como “un actor (político) en permanente indefinición”. Configura efectivamente una realidad institucional, jurídica y económica única en el mundo; es un actor político *sui generis* generado por la dinámica singular de la construcción europea (Leitão, 2007). No

es un Estado ni una organización internacional clásica (Petiteville, 2002, p. 151). Constituye la experiencia de integración política y económica con más profundización del mundo, revistiendo simultáneamente elementos de inter-gubernamentalidad clásica y supranacionalidad comunitaria. Encierra características únicas en sus procedimientos, dinámicas y una estructura institucional crecientemente compleja, que a veces hace parecer Bruselas a una torre de Babel.

Por lo tanto, su naturaleza y presencia como actor internacional y su política exterior son también complejas y *sui generis*. La UE no tiene una política exterior clásica (Telò, 2007, p. 227). Su posicionamiento internacional es original y particular. Configura lo que Hettne, Soderbaum y Stalgren (2008, p. 26) llaman un “complejo de política exterior” (*foreign policy complex*) de la UE. Para entenderse su rol e influencia en las relaciones internacionales toca ir más allá que una concepción estrecha de diplomacia y tomar en consideración los diversos instrumentos y dimensiones de la acción exterior de la UE (Petiteville, 2006, p. 15).

La política exterior de la UE encierra varios niveles. Se basa en un sistema de relaciones exteriores complejo derivado de la arquitectura intrincada de la UE y de la multiplicidad de instituciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos diferenciados que la componen (Hettne et al., 2008, p. 26). La UE no dispone de una autoridad centralizada con competencias para la consecución de su política exterior, sino múltiples entidades (Smith, 1995, p. 17). En la política exterior de la UE convergen, coexisten y se conciertan las políticas exteriores nacionales de los 28 Estados miembros, y la de la Unión como un todo, matizada institucionalmente y dividida en competencias y atribuciones entre la Comisión Europea, que ha regido históricamente las relaciones exteriores de la Comunidad Europea (CE), y el Consejo de la UE, que figura como la arena de los Estados miembros. Se debe entender como parte de la política exterior de la UE al conjunto de acciones internacionales imputables a la UE que tengan origen en los mecanismos de la comisión o del consejo.

Desde la institución de la UE en 1992, la política exterior europea constituyó una forma atípica apoyada en dos mecanismos diferenciados: un pilar con base en la Comunidad Europea en la esfera de las relaciones económicas exteriores (comercio, cooperación económica, ayuda al desarrollo, ayuda humanitaria) y en otras materias como el ambiente; y un segundo pilar intergubernamental en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

Su reestructuración institucional y política con el Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht en 1992, le posibilitaron un creciente papel político internacional, que se agregó a su ya notorio poder económico y rol importante en el marco de las relaciones comerciales. Sin embargo, no le confirieron una voz común en la escena internacional. La UE tiene una política exterior común, pero no una política exterior unificada. En la Unión Europea coexisten, se solapan, se interceptan y confluyen las distintas políticas exteriores de los Estados miembros, diferentes tradiciones de política exterior, variadas agendas internacionales y sensibilidades nacionales. Configura una red compleja, multidimensional y por veces ambigua de relaciones exteriores (Hettne et al., 2008, p. 52).

Robert Kagan (2003) caracterizó Europa como siendo “de Venus”, una organización adversa al uso de los instrumentos militares, en oposición a los Estados Unidos que son “de Marte” y basan su poder en la fuerza. De igual forma, el concepto más recurrente en la caracterización de la acción exterior de la UE es de ‘potencia civil’, un decir acuñado originalmente por François Duchêne (1972) respecto a un actor internacional cuya fuerza reside en su capacidad para promover y reforzar la paz y estabilidad a través de medios de naturaleza civil. Pone en relieve la dimensión no militar de la UE y su habilidad para usar instrumentos civiles, principalmente económicos y políticos, para intervenir y tener voz a nivel internacional. Tiene que ver con los medios de la UE, pero también, en gran medida, con los fines. En el entendimiento de Duchêne, Europa es una fuerza internacional de promoción y difusión de normas y valores democráticos, como la igualdad, la justicia y la tolerancia, que definen la identidad europea (Duchêne, 1972, p. 20).

En la misma línea de pensamiento se sitúa la aplicación usual del concepto de Joseph Nye de *soft power* a la naturaleza y tipo de acción de la UE. Corresponde a un tipo de poder que no se fundamenta en la coacción, a que el autor llama *hard power*, sino en la atracción (Nye, 2001, p. 354). Tiene que ver con la idea de producción de influencia fundada en recursos cooperativos no militares y no coercitivos de tipo económico, cultural e ideológico; pasa por la capacidad de influenciar, de marcar la agenda e instilar valores y normas en la gobernación internacional (Petiteville, 2002, p. 155). Nye (2004, p. 78) señala que la UE, a pesar de no ser tan poderosa militarmente como los Estados Unidos, es decir, de carecer de *hard power*, tiene la capacidad de tener una voz internacionalmente y poder solucionar problemas mundiales a través de instrumentos como la diplomacia, el comercio, la cooperación al desarrollo y la ayuda



humanitaria. Estos instrumentos puestos en marcha a través de *soft policies*, configuran la dimensión civil de la UE, que ejerce en cierta medida, un rol de equilibrio y contrapeso con relación a los EE. UU. (Leitão, 2003, p. 340). La UE tiende a privilegiar el *soft power* en detrimento del *hard power*; una diplomacia cooperante más que coercitiva, y a revelarse como una potencia civil más que militar (Petiteville, 2006, p. 228).

## La Unión Europea como actor de promoción estructural de paz

La UE es en su esencia un proyecto de paz para el continente europeo. En su origen estuvo fundamentalmente el objetivo de garantizar la paz y prevenir nuevos conflictos en una Europa martirizada por dos guerras mundiales, experiencia devastadora grabada en su memoria colectiva. La integración europea se ha desarrollado principalmente por la vía económica, pero con una motivación política primordial: la reconciliación franco-alemana, como base para un continente en paz. De hecho, la UE se basa en un modelo de integración y desactivación pacífica de conflictos por medio del desarrollo económico y social. Así, en realidad, la construcción europea ha constituido desde sus inicios “un ejercicio permanente de construcción de la paz” (Comisión Europea, 2001, p. 4). La UE “ha sido la piedra angular de la reconciliación y el desarrollo pacífico de Europa occidental en el último medio siglo, contribuyendo a consolidar la democracia y garantizar la prosperidad” (Comisión Europea, 2001, p. 6).

Por lo tanto, el tema de la paz está insertado, desde su concepción, en el código genético de la UE y el rechazo de la guerra en su ontología. La UE constituye en su esencia un modelo político de paz y desarrollo, lo que se refleja naturalmente en su política y relaciones exteriores. En realidad, la contribución de la UE a la paz mundial pasa, no solo por la pacificación de las relaciones entre sus Estados miembros europeos, sino también por su política exterior, en la cual, como es declarado explícitamente en el TUE (art. 2-5), la promoción de la paz y la estabilidad más allá de sus fronteras se volvió una de sus prioridades principales (Manners, 2008, p. 132; Tocci, 2008, p. 2).

Esta tendencia en su política exterior se ha manifestado en el desarrollo de políticas orientadas hacia la paz en varias zonas del mundo, en la inclusión de elementos relacionados con la paz en diversas políticas europeas, y en la creación de variados mecanismos de resolución de conflictos. De hecho, la UE tiene a su disposición una

amplia gama de instrumentos para la prevención y transformación de conflictos. En este ámbito, se distinguen fundamentalmente los instrumentos de corto plazo, destinados a responder a situaciones de crisis y pre-crisis, y los instrumentos y políticas de largo plazo, destinados a la promoción de estabilidad y paz estructural.

Este último componente es una de las dimensiones más *sui generis* de la política exterior de la UE y de su compromiso con la paz. La acción internacional de la UE en materia de paz no se limita a la dimensión de gestión de crisis. La UE ha estado históricamente más enfocada en temas y cuestiones estructurales que en temas de manutención de la paz (Manners, 2008, p. 132). Esto se debe en cierta medida a sus deficiencias y limitaciones políticas y logísticas en materia de la gestión de crisis y conflictos (Hettne et. al. 2008, p. 56). No hay una voluntad política clara de la UE de intervenir en escenarios de guerra y de *nation building* en el mundo. Asimismo, la esfera y capacidades de la PESD y de las ‘misiones de Petersberg’ son aún restringidas. La UE ha tenido poca participación en procesos de negociación y ha hecho poco uso de instrumentos de coerción, sea en la forma del ‘palo’ o de la ‘zanahoria’. Así, las mismas limitaciones de la PESD y las carencias militares de la UE la empujaron hacia otros medios, los instrumentos de largo plazo de carácter civil.

La política exterior de la UE tiene un componente de promoción estructural de paz. El enfoque para la paz de la UE es en gran medida buscar transformar los elementos estructurales de los conflictos y las simientes de lo que Galtung designa como la violencia estructural, como la injusticia social, el desarrollo inequitativo y la discriminación (Tocci, 2008, p. 3). La construcción de la paz a largo plazo, que reconoce no solo los síntomas violentos de los conflictos, sino sus causas estructurales, ha sido una preocupación y prioridad esencial de la UE, en particular en el marco de las políticas comunitarias gestionadas por la Comisión Europea.

Nathalie Tocci (2008) encuadra el enfoque para la paz de la UE como transformación de conflictos. Es un enfoque de una naturaleza considerablemente holística que toma en consideración elementos como los derechos humanos, la democracia, la legitimidad del Estado, los mecanismos de resolución de disputas, el Estado de derecho, la solidaridad social, el desarrollo sostenible y la sociedad civil; pasa fundamentalmente por el apoyo a reformas políticas, al desarrollo sostenible e integración política y económica, sobre la base del supuesto y concepción que estos son los elementos para una paz durable y sostenible (Vasconcelos, 2003, p. 2). Configura por

lo tanto una concepción amplia y de largo plazo de paz, en otras palabras, una paz sostenible y estructural.

En gran medida las políticas europeas de paz configuran lo que Stephan Keukeleire (2003) describe como una “diplomacia estructural”. De acuerdo con este autor, la UE desarrolla una diplomacia estructural en sus relaciones y asociaciones con el resto del mundo, basada en la promoción de transformaciones estructurales a largo plazo en la esfera interna de estas regiones y Estados (Keukeleire, 2003, p. 32). El objetivo fundamental es la transferencia de los principios ideológicos y de gobernanación que caracterizan el sistema europeo, tales como la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos, la integración y la economía de mercado (Keukeleire, 2003, p. 47).

Perspectiva análoga es vehiculada por Mario Telò (2007, pp. 227-228) quien se refiere a la “política exterior estructural” de la UE. Según este autor la UE busca, a través de su política exterior, desarrollar un ambiente y condiciones estructurales favorables a la paz y a valores civiles, y tener un impacto en las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas de sus socios internacionales (Telò, 2007). Funciona como una proyección internacional del método de Jean Monnet de creación de relaciones políticas pacíficas por intermedio de la interdependencia e integración económicas (Telò, 2007, p. 230). A través de su política exterior estructural, la UE condiciona indirectamente el comportamiento de otros actores pero sin recurrir a la coacción.

Es una política exterior implementada por medios pacíficos y civiles y que se integra en una lógica de largo plazo. Trasciende el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), e incluye varias dimensiones e instrumentos de sus relaciones exteriores. Sin embargo, está basada primordialmente en los instrumentos de *soft power* de la UE y las políticas comunitarias bajo la alzada de la Comisión Europea. Así, incluye no solo las relaciones diplomáticas y los diálogos políticos, sino también políticas temáticas y comunitarias, como la política comercial, la política de derechos humanos, la política medioambiental y las políticas de cooperación al desarrollo (Telò, 2007, pp. 227-228).

En este marco, la Comisión Europea surge como el actor y la institución más importante y con más protagonismo de la UE. La Comisión ha adquirido un grupo cada vez más alargado de competencias en materias de acción exterior (Petiteville, 2006, p. 139) y tiene un papel crucial en la conceptualización y desarrollo de la

política exterior estructural de la UE. Asume el liderazgo de los procesos políticos con otros países y regiones (Keukeleire, 2003, p. 51).

La promoción estructural de paz por parte de la UE asume diferentes formas, grados e intensidades, de acuerdo con los niveles de cooperación, integración y asociación de la UE con los países o regiones en cuestión. La UE tiene mayor capacidad de promoción estructural cuanto mayor sea la cercanía de sus fronteras. Así, tiene particular destaque y prioridad en las zonas de vecindad de la UE a sur y oriente, a través particularmente del Proceso de Barcelona y de la Política Europea de Vecindad, y menos densidad en áreas como África subsahariana y Latinoamérica.

## La cooperación al desarrollo de la Unión Europea como instrumento de promoción estructural de paz

Como se subrayó en el punto anterior, las relaciones exteriores de la UE van mucho más allá que la PESC. Las políticas comunitarias europeas, integradas históricamente en el primer pilar, siempre han sido extraordinariamente importantes para la acción exterior de la UE y su relación con el resto del mundo, en particular en su dimensión de actor civil y de promoción estructural de paz. Estas políticas completan y en algunos casos llenan brechas y vacíos de la PESC, configurando lo que Petiteville (2006, p. 97) llama de una “diplomacia cooperante”. En zonas como África y América Latina, substituyen a menudo una PESC inexistente o deficiente, funcionando como un medio de hacer entrar la “política exterior de la UE por la puerta de atrás” (Schmid, 2005 citado por Petiteville, 2006, p. 110), o desempeñando un rol como propulsor e intermediador político de la PESC.

En este marco, la cooperación para el desarrollo de la UE se revela una parte esencial y un instrumento fundamental de su política exterior de paz. La UE constituye el mayor donante de ayuda al desarrollo internacional. La cooperación comunitaria ha evolucionado a lo largo de las décadas desde su origen en la década de 1960. Fue concebida originalmente como un instrumento esencialmente de desarrollo. Las convenciones de Yaoundé y las tres primeras convenciones de Lomé de la CE con el Grupo ACP<sup>1</sup> se limitaban al plano de los intercambios comerciales

---

1 Este grupo incluye países de África, Caribe y Pacífico.

y de la ayuda financiera y técnica. Sin embargo, sobre todo a partir de la década de 1990 se dio una creciente politización y ‘securitización’ gradual de estas relaciones, y un proceso de reforma del sistema europeo de cooperación.

Así, progresivamente se introdujeron nuevos elementos y objetivos en el marco de cooperación comunitaria europea. La dimensión política de las relaciones de cooperación se fortaleció y el diálogo político se extendió a cuestiones de paz, seguridad y política exterior. Asimismo, uno de los principales aspectos de la reforma política del sistema europeo de cooperación se prendió con el establecimiento del principio de condicionalidad política de la ayuda al respeto de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernación. La ayuda al desarrollo de la UE dependía del cumplimiento de determinados requisitos políticos. Si se verificasen violaciones, la ayuda sería suspendida, al menos en teoría.

En este marco de politización de la cooperación al desarrollo, el tema de la paz se volvió un tema de alguna importancia. La estabilización política de los Estados y la prevención estructural de conflictos se volvieron objetivos y aspectos centrales de las relaciones de la UE con los países en desarrollo.

Estos elementos se enmarcan fundamentalmente en un marco de promoción y prevención estructural de la paz, que pretende sobre todo incidir sobre las causas y raíces de los conflictos. De hecho, como reconoce la misma Comisión Europea (2001, p. 10), la política de cooperación al desarrollo constituye el instrumento más poderoso que la UE dispone para tratar las causas de los conflictos.

La cooperación al desarrollo constituye el instrumento de la UE con más sustancia política en el caso colombiano y el marco de donde han sido concebidos los laboratorios de paz, razón por la cual analizaremos más adelante y más en detalle algunos aspectos de esta temática a lo largo del libro.

# ¿Un enfoque europeo de transformación del conflicto colombiano? Las políticas de paz de la Unión Europea para Colombia

## Las relaciones Unión Europea-Colombia: origen y contexto del involucramiento europeo en Colombia

El involucramiento de la UE en Colombia, y en particular su participación en el marco del conflicto armado, tiene como base una multiplicidad de factores políticos y la confluencia de determinadas circunstancias históricas, tanto en Europa como en Colombia, que nos remiten a la década de 1990.

Asimismo, las relaciones de la UE con Colombia encierran alguna complejidad, derivada no solo de la naturaleza de la UE como actor internacional, sino del contexto específico de este país. Hay por lo menos tres niveles de relacionamiento y de análisis (Maio-Coliche, 2005, p. 35). Se estructuran a partir de un entramado plural y complejo, en donde se sobreponen y entrelazan las relaciones bi-regionales UE-América Latina y UE-Comunidad Andina (CAN), las relaciones bilaterales de los Estados miembros de la UE con Colombia y las relaciones a nivel comunitario, cada una con matices y características propias.

De esta forma, el primer elemento que se debe evidenciar en la caracterización de las relaciones internacionales entre la UE y Colombia es que estas hacen parte y se encuadran en el contexto más amplio de las relaciones UE-América Latina, y en particular, UE-CAN.

En este marco y a este nivel, toca subrayar que en realidad, Latinoamérica no constituye, ni históricamente, ni en la coyuntura actual, una zona prioritaria o de interés estratégico para la UE. Solo en la década de 1990 se asistió a un acercamiento de la UE a América Latina y un progresivo involucramiento político y económico europeo en la región.

Las relaciones desarrolladas entre la UE y Colombia acompañan las tendencias generales de las relaciones UE-América Latina y UE-CAN. Colombia está profundamente conectada al continente Europeo por vínculos históricos, culturales y étnicos.

Sin embargo, en términos políticos el involucramiento de la UE en Colombia es poco denso y relativamente reciente. A pesar de que los vínculos entre la UE y Colombia se remontan al inicio del proceso de construcción europea y que algunos países Europeos desarrollan relaciones desde hace mucho, es fundamentalmente a partir de la década de 1990 que se extienden y profundizan los lazos.

Esta dinámica es visible en diversas áreas: se asiste a un estrechamiento de las relaciones políticas y económicas entre la UE y Colombia en los años 1990; se profundiza el apoyo Europeo a la lucha anti-drogas; se amplifica la ayuda al desarrollo en el país y en particular, se establece una delegación de la Comisión Europea en Colombia en 1993. Pero, en este marco y en el marco de la expansión de las relaciones políticas entre la UE y Colombia, un elemento ha tenido una importancia fundamental: la existencia de un conflicto armado interno en el país. Ha constituido uno de los factores centrales de la expansión y profundización de las relaciones políticas entre la UE y Colombia. En realidad, es fundamentalmente el conflicto armado interno en Colombia el que confiere una particularidad a esta relación en el marco latinoamericano y esto se refleja en las políticas europeas hacia Colombia.

Pero para entender e interpretar el desarrollo de las políticas de la UE para la paz en Colombia y de un enfoque hacia el conflicto armado que confluiría en la creación de los laboratorios de paz, hay que tener en cuenta diversos factores políticos en ambas márgenes del Atlántico, es decir, tanto en el orden interno colombiano como en el europeo.

En primer lugar, es necesario señalar que el involucramiento Europeo en Colombia tiene un precedente importante en la región: la experiencia de la UE en América Central en la década de 1980, en el marco del proceso de San José y del Grupo de Contadora. Constituyó una primera iniciativa de la UE en la región, en donde se manifestó un distanciamiento europeo de los Estados Unidos en el campo de la resolución de conflictos (Smith, 1995, p. xiv) al colocar la problemática del conflicto en un marco socioeconómico de pobreza, inequidad y represión y no en las lógicas geoestratégicas de la Guerra Fría de confrontación bipolar. Aunque con contornos muy limitados, expresó los elementos nucleares de la estrategia de la UE de prevención y transformación de conflictos con base en la promoción estructural de paz y estabilidad por intermedio de instrumentos de cooperación, factor que facilitaría el involucramiento político de la UE en Colombia en temas de paz.

En segundo lugar, en este periodo el conflicto armado colombiano se había internacionalizado significativamente (Tokatlian, 2000, p. 326). La violencia había causado efectos negativos de contagio en países vecinos a Colombia y olas de refugiados a nivel regional e internacional, además de una creciente e innegable crisis humanitaria y degradación del conflicto que traería uno de los mayores escenarios de desplazamiento forzado interno del mundo, y de violaciones de derechos humanos, asesinatos políticos y secuestros que atrajo la atención y visibilidad política y mediática a nivel internacional. Adicionalmente, el boom del narcotráfico en la década de 1980, que tenía su epicentro en Colombia, tuvo efectos en todo el mundo.

Así, un conflicto tradicionalmente olvidado en términos internacionales, recibió la mirada y la atención del mundo. Una internacionalización del conflicto colombiano daría lugar a una internacionalización de la resolución del conflicto colombiano. En realidad, las experiencias previas de fracaso de la construcción de la paz y el agotamiento de las iniciativas internas y de los modelos anteriores de negociación habían convencido a muchos, tanto dentro como fuera del país, que alguna forma de acompañamiento internacional era necesaria para que el proceso de paz avanzara (Chernick, 2008, p. 115). Consciente de esto, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) se había embarcado en una política y estrategia internacional conocida como una ‘diplomacia por la paz’. Se destinaba a buscar un máximo de aliados internacionales para sus esfuerzos de negociación con las guerrillas, especialmente en Europa y las Américas, y formar una gran plataforma internacional para la paz en Colombia. La UE estaría en la primera línea y los primeros destinatarios de esta estrategia. Por lo tanto, en este ámbito se desarrolló una participación de varios países europeos en cuanto facilitadores en el proceso de paz con las FARC y el ELN, involucrando así directamente a la UE en los esfuerzos de búsqueda de una solución política negociada para el conflicto.

Una pieza fundamental de esta internacionalización de la ‘resolución’ del conflicto se relaciona con el papel de los Estados Unidos, país con un ascendente histórico avasallador sobre Colombia. Como se describió en el segundo capítulo, parte de las políticas para la paz de Pastrana fue concebido en asociación con los EE. UU. con el “Plan Colombia”. La UE sería llamada a participar y financiar este plan. Sin embargo, su respuesta en términos institucionales fue negativa. La UE rechazó casi en su totalidad participar en el plan debido a su enfoque eminentemente militar. Esto



generó en la UE un imperativo político para que desarrollara su propia estrategia y política de paz en Colombia independiente de la norteamericana. Los laboratorios de paz son un elemento central de esta política. Estos dos acontecimientos políticos –por un lado, el proceso de paz con las guerrillas durante el gobierno de Pastrana, y por el otro el Plan Colombia– fueron fundamentales y serían los catalizadores políticos inmediatos que estarían en la base del desarrollo y la estructuración de las políticas europeas para la transformación del conflicto en Colombia y en el origen de la creación de los laboratorios de paz. Por esta vía y en este marco, la UE empezó a desarrollar lo que se podría considerar un primer esbozo o un proto-enfoque europeo para la paz en Colombia, que, a primera vista, podría parecer una alternativa al Plan Colombia.

Sin embargo, la interpretación de las motivaciones políticas que traen la UE a Colombia puede no limitarse a estos factores y hacer parte de una estrategia política más amplia. El involucramiento de la UE en Colombia y la definición de políticas para la paz de la UE para Colombia se prende en gran medida con la estabilización de un país visto como una potencial amenaza internacional y fuente de efectos negativos transnacionales, entre los cuales el narcotráfico aparece en primer plano, pero en los cuales también se incluyen elementos como el crimen organizado, el terrorismo y los refugiados (CIP-FUHEM, 2006, p. 9). Hay por lo tanto razones geopolíticas y geoestratégicas involucradas en la lógica y racionalidad de la política exterior europea hacia Colombia. Como señala Duffield (2005, pp. 31-34), la ayuda europea tiene que interpretarse también como parte de una política de contención del hemisferio norte. Hay un propósito de evitar el contagio de la violencia e inestabilidad del Sur y controlar el desorden y los problemas en la periferia, que muchas veces no está presente de forma explícita en la retórica liberal y de derechos humanos de la UE.

Los laboratorios de paz, aunque se definan como una experiencia intrínsecamente de nivel micro, tendrán que interpretarse y entenderse desde la perspectiva y concepción europea, también en un marco más amplio de una estrategia política de seguridad europea<sup>2</sup>.

---

2 No obstante, toca señalar que a pesar de que intereses y concepciones geopolíticas y de seguridad estén presentes en las políticas de la UE hacia Colombia, estas no encierran gran densidad. En realidad, el conflicto colombiano, contrariamente al caso de los EE. UU., no constituye ni es percibido como una amenaza directa a la seguridad europea (Kurtenbach, 2009, p. 386). El

El plano económico evidencia igualmente alguna importancia. Hay una progresiva atracción económica de Europa por Colombia que se manifiesta en una dinámica de creciente inversión europea en este país. Este creciente interés económico europeo se evidencia en las palabras del excomisario de relaciones exteriores Chris Patten, que afirma que “las instituciones europeas no son las únicas que creen en Colombia. Las empresas europeas también creen en Colombia” (citado por Saavedra y Ojeda, 2006, p. 88). Se configura así un interés explícito europeo en la pacificación y estabilización del país y su inserción en los mercados globales, que manifiesta también una dimensión económica. Como es reconocido por el excomisario, solo la estabilidad política de Colombia permitiría una plena expansión de los lazos económicos y empresariales.

No obstante, aunque constituya un factor de algún relevo, el involucramiento europeo claramente no se agota en este componente. El conflicto armado colombiano no toca directamente los intereses esenciales de la UE (Francia, 2003, p. 5). Tanto en términos políticos como económicos, Colombia es un país poco prioritario para la UE. Con la excepción de algunos pocos Estados miembros de la UE, fundamentalmente España y Francia, Colombia y el conflicto colombiano tienen baja prioridad y peso en la agenda política (Domínguez-Rivera, 2005, p. 12). De hecho, en el escenario post 11 de septiembre, tanto la política exterior como la cooperación europeas están centradas en otras zonas del globo (Roy, 2003, p. 22). Colombia y Latinoamérica surgen en una posición subalterna en lo político y de menor destaque en comparación con zonas como Norteamérica, Europa oriental, el Mediterráneo y África (Fescol, 2004, p. 2).

Así, a diferencia del marco de intervención norteamericano en Colombia, los factores económicos y geoestratégicos no desempeñan un rol determinante en el caso europeo y se limitan a pocos Estados miembros de la UE (Kurtenbach, 2004, p. 54). La UE parece no tener una agenda oculta, lo que, en la perspectiva de Sabine Kurtenbach, configura un escenario análogo al de la década de 1980 en Centroamérica y puede constituir una ventaja comparativa para la UE y Colombia (Kurtenbach, 2004). Por lo tanto, en gran medida, importa interpretar las políticas para la paz de la UE hacia Colombia y su cooperación al desarrollo como expresión y

---

conflicto armado colombiano tiene una lejanía de Europa que motiva a que este no afecte sus intereses geopolíticos y geoestratégicos esenciales, razón por la cual Colombia no constituye un centro significativo de interés político.

parte de la acción de un actor en busca de identidad, con ambición política de consolidar su rol y posición como actor global y proyectar su dimensión de potencia civil.

## ¿Un enfoque europeo para la transformación del conflicto colombiano?

La UE ha desarrollado en la última década, políticas e instrumentos de diferente índole y densidad orientados hacia la paz en Colombia. El involucramiento de la UE en la transformación del conflicto colombiano asume claramente dos dimensiones y niveles distintos, a veces incluso contradictorios: por un lado, ha tenido un tibio involucramiento, en términos político-diplomáticos, en el apoyo a una solución política negociada en Colombia. Por otro, ha desarrollado a nivel comunitario una cooperación al desarrollo orientada hacia la transformación estructural del conflicto y la construcción de paz ‘desde abajo’, dimensión en la cual los laboratorios de paz se evidencian como la principal iniciativa e instrumento.

Estos pueden configurar un enfoque específico europeo de transformación del conflicto armado, que se materializa en los laboratorios de paz y tiene en estos su principal bandera. Podrían igualmente constituir una alternativa europea al enfoque norteamericano al conflicto apoyado en el Plan Colombia. De hecho, el enfoque europeo para la paz en Colombia ha pasado por una actitud de un cierto distanciamiento respecto del estadounidense, y por alguna demarcación en cuanto al Plan Colombia. La UE ha buscado imprimir en Colombia su sello, pretendiendo encontrar un papel en la transformación del conflicto e imprimir otra dinámica de construcción de paz.

Sin embargo, hay un conjunto de factores de bloqueo que mitigan el enfoque de transformación del conflicto de la UE. En realidad, la posición de la UE frente a Colombia y al conflicto armado encierra muchas contradicciones. No hay un enfoque europeo consolidado, estructurado y coherente hacia la transformación del conflicto colombiano. Hay visibles inconsistencias, vacíos y brechas en el enfoque europeo para la paz en Colombia, que atraviesan necesariamente la participación de la UE en los laboratorios de paz. Se configura una multiplicidad de acercamientos, planteamientos, iniciativas, prioridades e iniciativas, algunas veces contradictorias o en competición. La UE es un actor heterogéneo que actúa a varios niveles y con

diferentes diapasones hacia Colombia, razón por la cual es difícil evaluar su posicionamiento. La UE ha recorrido un camino sinuoso y en zigzag pautado por la incertidumbre y la ambigüedad, algunas veces en contraste o choque con los Estados Unidos, otras de forma convergente o complementaria, en determinados momentos de forma crítica al gobierno colombiano, otras expresando su apoyo incondicional. Entre Bruselas y Bogotá, la UE raramente caminó en línea recta.

Sin embargo, se puede afirmar que hay elementos que configuran una posición tendencialmente común europea y un enfoque propio de la UE para la paz en Colombia, aunque con matices institucionales y nacionales. La UE converge en torno a determinados factores y principios y tiende a encerrar una visión y concepción política específica y común del conflicto armado interno en el país. Un diplomático europeo entrevistado en el marco de esta investigación se refiere a ‘una postura europea’ respecto a Colombia.

Fundamentalmente hay dos grandes principios y elementos que han definido, estructurado y dado dirección a la posición europea frente a Colombia: el enfoque en una solución negociada política al conflicto en detrimento de la vía militar y el énfasis en las causas profundas y estructurales del conflicto. A estos podríamos agregar igualmente la atención particular al tema de los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil. Es un enfoque eminentemente civil y estructural.

En realidad, la UE tiene una visión propia del conflicto y sus causas, que se distingue claramente de la visión estadounidense, y sobre la cual basa su enfoque y políticas hacia este país. Esta visión y lectura política de la UE y su enfoque para la paz se basa en los siguientes elementos:

En primer lugar, al contrario de la perspectiva oficial que fue vehiculada en Colombia por el gobierno Uribe, la UE reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país. Hay referencias explícitas al conflicto armado en múltiples declaraciones de la UE provenientes de distintas instituciones. A pesar de que la retórica de la lucha al terrorismo también haya contaminado el discurso oficial y enfoque de la UE hacia Colombia en los últimos años, la negación del conflicto nunca tuvo preponderancia en la UE.

En realidad, la visión de la UE de la crisis en Colombia encierra más que la mera constatación de la violencia armada de grupos ilegales o su reducción a una lucha contra grupos criminales con conexiones al narcotráfico. Es una perspectiva más compleja y multidimensional. La resolución del Parlamento Europeo sobre el “Plan

Colombia” y el apoyo al proceso de paz en Colombia (2001) en particular, reitera que “la situación actual en Colombia no es solo de carácter armado, sino que también tiene una dimensión social y política cuyo trasfondo es la exclusión económica, política, cultural y social”.

En segundo lugar, el enfoque europeo subraya las raíces del conflicto y el entorno socioeconómico que lo sostiene estructuralmente. La UE destaca factores como la pobreza, la desigualdad, la distribución de la tierra, la exclusión regional, la fragilidad de las instituciones democráticas y la debilidad del Estado como causas políticas subyacentes al conflicto colombiano, elemento que distingue su perspectiva de la norteamericana.

El documento “Estrategia País Colombia” de la Comisión Europea (2007, p. 11) señala que “el conflicto interno colombiano tiene orígenes históricos profundos, principalmente el abandono de algunas regiones del país por el Estado”. El mismo documento identifica cuatro causas centrales del conflicto: “cultura política de la violencia”, “debilidad del Estado colombiano”, “escasa participación política y el acceso desigual a la tierra y los recursos” (Comisión Europea, 2007). Así, fundamentalmente, la UE ha definido tres áreas políticas de acción prioritaria en Colombia: los derechos humanos, las disparidades socioeconómicas y el fortalecimiento institucional (Roy, 2003, p. 13).

La perspectiva de la UE se sitúa en un plan más social y político. Privilegia el social sobre el militar. Es por lo tanto un entendimiento más amplio y ‘positivo’ de la paz. Se podría encuadrar esencialmente en un enfoque de transformación de conflictos. De la misma forma, se encuadra en un esquema de seguridad humana que integra elementos sociales, económicos y culturales.

Por consiguiente, de forma coherente con esta lógica y concepción se vuelve evidente una tercera característica fundamental del enfoque y lectura política de la UE hacia el conflicto en Colombia: la UE es partidaria de una solución política negociada para el conflicto armado en Colombia. Su lectura del conflicto y perspectiva política ve en la solución negociada la única vía para la resolución del conflicto. Es uno de los principios y elementos nucleares de su acercamiento político en este país. La UE y la gran mayoría de sus Estados miembros defienden que la resolución del conflicto colombiano no se debe situar meramente en un plan militar. Como expresó la Declaración del Consejo de 9 de octubre de 2000, “para la Unión Europea, no hay alternativa a este proceso de paz, ni solución militar que permita lograr una paz duradera”.

La UE vehicula que el conflicto tiene como temas de fondo factores y problemas políticos, sociales y económicos de largo plazo, razón por la cual el conflicto no será resuelto por operaciones militares de corto plazo (Kurtenbach, 2005, p. 9). La UE se demarca de esta forma de una solución puramente militar para el conflicto colombiano, siguiendo el posicionamiento político de que causas estructurales exigen soluciones más complejas que las estrictamente militares y requieren una “estrategia global de paz” (Consejo de la UE, 2004). A pesar de que la UE y sus Estados miembros no rechazan el fortalecimiento de las capacidades y presencia del Estado, inclusive en el plano militar, no reducen el proceso a esta dimensión y sostienen que la construcción de la paz en Colombia debe pasar fundamentalmente por el fortalecimiento institucional, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social (Kurtenbach, 2009, p. 387). Como señaló el excomisario Chris Patten (2000 citado por Puyo, 2002, p. 130), Colombia padece de “males de carácter endémico que requieren respuestas profundas de carácter estructural”.

El enfoque de la UE es, por lo tanto, esencialmente civil, y en cierta medida, estructural. Para la persecución de sus objetivos políticos y específicamente, para la búsqueda y promoción de la paz, la UE ha recurrido en Colombia, como en tantas otras partes del mundo, esencialmente a instrumentos de *soft power*, de tipo económico y político, tales como la cooperación al desarrollo, la diplomacia y el comercio. En Colombia se manifiesta exclusivamente la dimensión de la UE en cuanto ‘potencia civil’.

En este sentido y bajo esta concepción y línea de pensamiento, la UE no encontró en el Plan Colombia y su enfoque militar contra-insurgente y anti-narcótico una solución para el conflicto (Barreto Henriques, 2006, p. 41). En su lectura política, el narcotráfico no es visto como una causa del conflicto, sino solamente como un alimentador y factor de violencia (Kurtenbach, 2005, p. 3), lo que configura una percepción distinta de la estadounidense, que atribuye a este factor una casi total centralidad. Como señala Massé (2003, p. 13) las divergencias entre la UE y los Estados Unidos no reflejan solamente concepciones diferentes y los diferenciales de *soft* y *hard power* entre las dos márgenes del Atlántico, sino una cuestión de prioridades: ¿es necesario eliminar las drogas para llegar a la paz o hacer la paz para eliminar las drogas? Para Washington, eliminar el narcotráfico es una condición para la paz en Colombia. Para Bruselas ambos temas hacen parte de un mismo

problema socioeconómico. La UE rechaza la militarización de la lucha antidrogas y del tratamiento de problemas socioeconómicos (Massé, 2003).

El rechazo al Plan Colombia fue particularmente notorio en la Resolución del Parlamento Europeo (2001) del 21 de septiembre del 2001, que subraya que

[...] sin tener en cuenta otros enfoques, [la UE] debe seguir apoyando la búsqueda de una solución negociada y pacífica a la situación de violencia permanente de que es víctima el pueblo colombiano, que incluya las reformas sociales indispensables para restablecer la paz y la democracia.

En el texto de la resolución se vuelve manifiesta la crítica al enfoque norte-americano y el planteamiento de un camino y acercamiento distinto y alternativo para la UE.

Por último, un elemento y una característica marcan indeleblemente el enfoque europeo para la paz en Colombia. Bajo su concepción de construcción de paz, la UE pone en relieve la importancia de la participación activa de la sociedad civil en este proceso, razón por la cual la UE confiere un rol destacado a la sociedad civil en su enfoque para la paz y canaliza gran parte de su ayuda a Colombia en el apoyo a actores de la sociedad civil. En juego está el apoyo a las víctimas de la violencia y la “construcción de los cimientos para la paz ‘desde abajo’” (ICG, 2006, p. i). Es un enfoque simultáneamente humanitario y paliativo, pero también de transformación del conflicto, pues, como se señaló en el primer capítulo, la ‘gente’ es el fertilizante de la paz. En este marco, la UE ha buscado, sobre todo, por intermedio de su cooperación al desarrollo, promover y apoyar en el terreno lo que Sabine Kurtenbach (2009, p. 390) llamó “islas de civilidad”<sup>3</sup>, es decir, espacios de resistencia civil y de fortalecimiento del tejido social en el medio del conflicto desarrollados por actores locales colombianos. En este ámbito los laboratorios de paz se evidencian como la iniciativa bandera y el más importante elemento del enfoque europeo para la paz en Colombia.

Sin embargo, a pesar de todos estos elementos políticos convergentes en la UE, y de una posición tendencialmente común europea hacia el conflicto armado en Colombia, se presentan varias brechas e inconsistencias en este enfoque de la UE para la paz en Colombia. Por encima de todo, se evidencian divergencias

---

3 El concepto originalmente es de Mary Kaldor.

internas importantes en la UE respecto a Colombia y sensibilidades, prioridades políticas y políticas exteriores nacionales distintas entre instituciones y estados miembros.

Tal como para Irak, los Balcanes, Kosovo, y tantos otros cuadrantes geográficos, el escenario se repite en Colombia y la UE se ha dividido en varios momentos y circunstancias respecto al tema del conflicto armado colombiano. No una hay posición unívoca de la UE hacia este país. Se manifiestan diferencias substanciales de percepción, de perspectiva, y de enfoque respecto al conflicto interno en Colombia (Barreto Henriques, 2010a, p. 88). La lectura del conflicto colombiano y prescripción de su resolución no es unívoca no solo entre Estados miembros, sino entre instituciones y funcionarios de la UE.

Estas divergencias al interior de la UE respecto a Colombia y al tema del conflicto armado se manifestaron en distintos momentos y diferentes circunstancias, pero tienen su correlato y expresión máxima en cuanto a la ‘recepción’ y respuesta al “Plan Colombia”. Como ya referimos, mientras la generalidad de los Estados miembros de la UE (liderados por Francia y los países Escandinavos) se apartaron del Plan Colombia, por su cariz eminentemente militar, y el Parlamento Europeo adoptó una posición abierta y firmemente crítica al Plan Colombia, dos excepciones de peso se evidenciaron y rompieron la unidad europea respecto a este tema (Kurtenbach, 2005, p. 5). Los gobiernos de Tony Blair en el Reino Unido y de José María Aznar en España alinearon su posición más con Washington que con Bruselas, coincidiendo en su perspectiva y enfoque militar. Ambos países defendieron el apoyo de la UE a este Plan y lo respaldaron en términos bilaterales. Por lo tanto, si para algunas instancias y sectores de la UE sus políticas hacia Colombia deben configurar una alternativa al Plan Colombia, para otros son complementarias y nunca se han destinado a oponerse a los EE. UU.

En realidad, el enfoque civil de la UE encierra claras fisuras. Diversos países europeos, como el Reino Unido, Alemania, Francia y principalmente España, prestan ayuda militar al Estado colombiano, situación que pone en entredicho la coherencia y efectividad de su enfoque civil y comprometimiento con la paz basada en una solución política negociada. Es un hecho sintomático de las inconsistencias de la UE en materia de política exterior, de la ambigüedad de su dimensión como potencia civil, de su duplicidad como actor internacional y de su incoherencia política respecto al conflicto colombiano. Es igualmente revelador



de la tensión existente entre el actor global y sus Estados miembros, es decir, de las dificultades con las que la UE como actor ‘civil-normativo’ es confrontada en términos de coherencia política. La *realpolitik* de la gestión de asuntos internacionales de sus Estados miembros se sobrepone a menudo a los valores y principios idealistas (proclamados, al menos formalmente) por la UE. El caso de Colombia constituye una buena evidencia de eso.

Por lo tanto, se vuelve evidente que contrariamente a las expectativas de algunos sectores políticos y sociales en Colombia y Europa que veían en la UE una potencial alternativa al Plan Colombia, si analizamos más atentamente el enfoque europeo hacia este país, este no parece radicalmente distinto de los Estados Unidos. El enfoque europeo sí es alternativo, ‘*ma non troppo*’. Aunque diferencias substanciales se manifiesten en el discurso, la percepción y lectura del conflicto, el acercamiento y la forma de actuación de los dos actores internacionales, en diversos elementos convergen. Los ideales-tipo de una ‘Europa de Venus’ y unos ‘EE. UU. de Marte’ se aplican al caso colombiano, pero no de forma plena y lineal (Barreto Henriques, 2010a, p. 92).

## Las políticas e instrumentos de la Unión Europea para la paz en Colombia

La UE ha desarrollado políticas e instrumentos de diferente tipo, contenido y densidad hacia el conflicto armado en Colombia. El enfoque europeo hacia la paz en este país se estructura claramente en torno a dos niveles y ejes distintos. Se evidencian manifiestamente dos formas de actuación institucionales diferenciadas de la UE:

- Un eje político-diplomático, en el marco de una PESC incipiente y al nivel de las políticas bilaterales de los Estados miembros, en donde la UE asume un enfoque para la paz en Colombia de poca densidad y se evidencia como un actor de bajo perfil y políticamente inconsistente.
- Y el eje comunitario, en donde, en el marco de los mecanismos de cooperación al desarrollo gestionados por la Comisión Europea, brotó la iniciativa

de los laboratorios de paz, estructurando un enfoque para la paz peculiar y alternativo.

Analizaremos en seguida ambos ejes y niveles en más detalle .

## La dimensión político-diplomática del enfoque de la Unión Europea hacia la paz en Colombia

A nivel político-diplomático, la UE asume un enfoque para la paz en Colombia de poca profundidad. El involucramiento de la UE en Colombia en el marco del segundo pilar del TUE (PESC y PESD) ha sido mínimo y residual. La política exterior de la UE en Colombia es paradigmática de su dimensión como potencia civil, apoyada por instrumentos comunitarios, pero de influencia limitada en materia de *high politics*. La UE no dispone de una política exterior común hacia Colombia. No ha adoptado acciones comunes, ni una estrategia común con relación a este país. Asimismo, no constituyó un ‘representante especial’ para este país, como dispone para varias regiones y países del mundo, que le permitiera tener una presencia política permanente en el terreno y apoyar iniciativas en curso (Diez y Pace, 2007, p. 6).

Esta dimensión está prácticamente ausente de la política exterior de la UE para esta región geográfica. Como señala Kurtenbach (2005, p. 10), la PESC está lejos de emerger en Latinoamérica y esta región es un teatro improbable para operaciones militares de la UE. En términos político-diplomáticos, la UE no dispone de una configuración definida y coherente. A este nivel, la UE se ha limitado en Colombia a una tibia participación en el apoyo a una solución política negociada en Colombia y a una ‘política’ de declaraciones desprovista de grandes consecuencias prácticas.

De hecho, en términos diplomáticos, el principal objetivo político de la UE respecto a Colombia es el apoyo al proceso de paz (Comisión Europea, 2001, p. 5). Siguiendo el principio político y la concepción de que “no hay alternativa al proceso de paz, ni hay solución militar que pueda llevar a una paz duradera” (Declaración de la Presidencia, 2000), la UE y sus Estados miembros han desarrollado algunos esfuerzos en el sentido de apoyar y respaldar un proceso de paz

y facilitar las negociaciones entre las partes del conflicto. Uno de los ejes de su acercamiento político ha sido el apoyo al proceso de paz.

Sin embargo, a este nivel, el rol de la UE en los procesos de negociación en Colombia ha sido históricamente marginal. En realidad, aunque Europa haya estado involucrada en la resolución del conflicto colombiano, en los procesos de paz con las guerrillas, la UE como tal, en términos institucionales, no ha estado involucrado, o apenas de forma limitada e indirecta. Por encima de todo, lo que está en consideración es la participación de Estados miembros de la UE, con mayor o menor incidencia e intensidad, en los procesos de negociación con las FARC y ELN.

La participación europea en los procesos de paz en Colombia se limitó a las negociaciones durante la administración Pastrana en el marco de una plataforma internacional de facilitación designada ‘grupo de países amigos’<sup>4</sup>, estructurada para cada uno de los procesos de paz con las dos guerrillas, en las cuales estuvieron incluidos algunos países europeos. En términos institucionales, se limitó a declaraciones del Consejo y de la presidencia, limitándose a expresar el apoyo europeo a los procesos de paz en curso.

Asimismo, el cambio radical de la coyuntura política en Colombia en 2002 con la elección de Álvaro Uribe llevó al congelamiento de los diálogos con las guerrillas y al agotamiento de la posibilidad de resolución pacífica del conflicto. Este hecho condujo al apagón político de la UE en Colombia y a una quiebra en su “frágil esquema de participación” (Ramírez, 2004, p. 310) y enfoque para la paz.

El colapso de la vía negociada en Colombia constituyó efectivamente un gran revés para la UE y su acercamiento político en la década del 2000. En este marco y escenario la participación europea se disipó en términos político-diplomáticos y ha emergido únicamente en términos de cooperación comunitaria, a través de los laboratorios de paz. En este marco, los laboratorios de paz emergieron y se destacaron como la única iniciativa política de paz de significancia de la UE, con valor y coherencia políticos para la paz, con un enfoque político propio y con un horizonte

---

4 Se constituyó para las FARC un grupo de países amigos que incluía cuatro países de la UE – Francia, España, Suecia e Italia–, un país europeo no miembro de la UE –Suiza–y tres países americanos –Venezuela, Cuba y Canadá–. Para el ELN, el grupo de países amigos se constituyó a partir de dos países de la UE –Francia y España–, y tres países europeos no miembros de la UE –Suiza y Noruega–, y un país no europeo –Cuba–. (ICG, 2002, p. 17).

temporal más extendido. La dimensión político-diplomática perdió su rumbo, al ser víctima de sus propias ambigüedades y limitaciones, y la PESC desapareció casi por completo en Colombia.

En el actual proceso de paz desarrollado entre el gobierno Santos y las FARC (2012-presente), aunque se haya establecido una participación internacional mediante la constitución de países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile respectivamente), la UE no desempeña ningún rol en las negociaciones.

Diversos factores se pueden identificar y apuntar para explicar esta situación de bajo perfil europeo en Colombia y su irrelevancia en el marco de la transformación del conflicto armado, algunos de cariz endógeno colombiano, otros derivados de la naturaleza de la UE en cuanto actor internacional: por encima de todo, hay una mezcla de falta de capacidad con falta de voluntad política (Barreto Henriques, 2010a, p. 92). Como ya fue mencionado al inicio de este capítulo, a excepción de un par de Estados miembros, Colombia no representa un interés estratégico o una prioridad política para la UE, razón por la cual, no tiene particular interés en involucrarse ni comprometerse a fondo en este país.

Asimismo, en el marco de una UE con 28 Estados miembros, su política exterior se basa sobre todo en mínimos denominadores comunes de entendimiento, que, frente a las diferencias evidenciadas al interior de la UE respecto al conflicto armado en Colombia, no permiten gran espacio de maniobra a la UE y se saldan en acuerdos restringidos y limitados, y configuran la UE como un actor cauteloso, reservado, sin asertividad política.

Pero hay también un problema de capital político de la UE en Colombia, de *soft power*, en la concepción original del término. La UE no tiene la capacidad de ejercer un poder de atracción en Colombia. Tiene poca influencia sobre las partes del conflicto. En un país históricamente alineado con los EE. UU., lo que cuenta es lo planteado por Washington y lo propuesto desde Bruselas tiene poco peso político (Barreto Henriques, 2010a, p. 92). En la realidad, la relación transatlántica determina, en gran medida, el rol (o ausencia de rol) político de la UE en Colombia. Los EE. UU. son un país que condiciona en gran medida no solo la evolución política interna en Colombia, sino las mismas políticas de la UE hacia este país. Colombia se encuentra en la esfera de influencia de los EE. UU., en su ‘patio trasero’. La UE no tiene ni la capacidad, ni la voluntad política para intervenir en su “coto de caza”

(Barreto Henriques, 2010a). A pesar de mantener diferencias con los EE. UU., prefiere no encontrar en Colombia fuentes de fricción transatlántica.

## La cooperación europea al desarrollo comunitario enfocada a la paz en Colombia

El nivel de la cooperación europea al desarrollo comunitario asume en Colombia una naturaleza e índole marcadamente distintas de la dimensión y del eje político-diplomáticos. Efectivamente, en Colombia se manifiesta fundamentalmente la dimensión comunitaria de su acción exterior. El bajo perfil y el enfoque incoherente en el plano político-diplomático contrasta con las iniciativas importantes desarrolladas en el marco de la Comunidad Europea (Francia, 2003, p. 1), en donde los laboratorios de paz sobresalen como el programa bandera, con un enfoque propio, peculiar y alternativo para la paz en Colombia.

Por intermedio fundamentalmente de los laboratorios de paz, la UE ha desarrollado una cooperación al desarrollo orientada hacia la transformación estructural del conflicto y la construcción de paz ‘desde abajo’. La UE plantea, en el plano comunitario, una política más integral hacia Colombia con un horizonte temporal a más largo plazo, menos condicionada por la existencia o no de negociaciones.

Esta es una dimensión en la cual la Comisión Europea, y no los Estados miembros de la UE, ocupa el lugar en el volante (Roy, 2003, p.12), al ser el motor de la política exterior de la UE en Colombia y el principal protagonista e interlocutor de la UE en el país, en particular en el marco de la iniciativa de los laboratorios de paz. De hecho, como ya fue previamente mencionado en el inicio de este capítulo, la Comisión Europea desempeña un rol de gran importancia en la política y relaciones exteriores de la UE, sobre todo en el campo económico. Como se comprueba por el caso colombiano, se denota una dinámica de autonomía de la Comisión Europea en la conducción de la política exterior de la UE, mediante la cual ha desarrollado sus propias visiones, intereses y formas de actuación (Hettne et al., 2008, p. 49).

De hecho, esta autonomía de la Comisión Europea es la que le ha brindado la posibilidad de formular su propia política de cooperación al desarrollo y que permite explicar que la UE a nivel comunitario, a través de los laboratorios de paz, haya

desarrollado un enfoque para la paz en Colombia de cariz distinto, con elementos diferentes de la ‘timidez’ e inconsistencia de su posición político-diplomática.

Toca señalar sin embargo, que la cooperación al desarrollo de la CE en Colombia, reflejada y materializada en los laboratorios de paz, aunque adquiriera una especificidad propia derivada de su entorno, contexto, filosofía y metodologías particulares, se encuadra en el contexto y marco de la cooperación de la UE hacia América Latina.

Esta cooperación al desarrollo en esta región asume una forma más limitada que con los países ACP. Al contrario de la cooperación en el marco de Lomé y Cotonou, no existe una convención o contrato de cooperación con los países latinoamericanos. Es una cooperación clásica. Los acuerdos son negociados y celebrados bilateralmente con los Estados. La cooperación comunitaria hacia Latinoamérica es menos densa que con los países ACP y no dispone de mecanismos de condicionalidad política (Comisión Europea, 2007, p. 17).

Sin embargo, hay que señalar que la UE es en el presente el mayor donante de ayuda al desarrollo tanto en América Latina como en Colombia. Los montantes y densidad de la ayuda han aumentado constantemente en los últimos años y hoy la Comisión Europea lidera claramente la asistencia internacional a Colombia (Roy, 2003, p. 9).

Esta tendencia se debe en gran medida a la existencia del conflicto armado en este país. Al tratarse Colombia de un país de renta media, relativamente más desarrollado que los otros países en desarrollo, este factor político ha motivado la acen- tuación de la ayuda y su contenido particular. La cooperación comunitaria se centró creciente y progresivamente en un objetivo: el apoyo a la construcción de una paz duradera y sostenible a través de una estrategia de ataque a las causas y raíces del conflicto (Comisión Europea, 2007, p. 17).

La paz se evidencia de esta forma como la principal prioridad política de la cooperación comunitaria europea. De hecho, los temas de paz y los proyectos “orientados para sectores de la cooperación que apuestan a una solución negociada para el conflicto armado interno y a mitigar sus efectos sobre la población civil” (DELCOL, 2005) reciben prácticamente la mitad de la ayuda europea (46%)<sup>5</sup> (Comisión Europea, 2007, p. 18).

5 Se sigue el apoyo a las “poblaciones desplazadas” (16%), “el medio ambiente, los grupos étnicos y el desarrollo rural” (16 %), “la consolidación del Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia” (13 %), y “el desarrollo económico y social” (9 %) (Comisión Europea, 2007, p. 18).

En este ámbito la Comisión Europea (2001, p. 21) ha desarrollado una estrategia con base en tres líneas:

- El apoyo a las actividades en curso en Colombia en la búsqueda de la paz.
- El ataque a las raíces y causas del conflicto.
- La prestación de asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto. El enfoque para la paz de la Comisión Europea en Colombia es efectivamente multidimensional. Según la Comisión Europea (2007, p. 26), “no existe una sola y única solución para promover la paz en Colombia; es necesario combatir simultáneamente los distintos componentes del conflicto”.

Por lo tanto, como reconoce el documento “Estrategia País”, la estrategia global de la UE en Colombia encierra tres niveles (Comisión Europea, 2007): un nivel a corto plazo, que pasa fundamentalmente por una asistencia a las víctimas de la violencia y grupos de la población particularmente afectados por el conflicto, a través de ayuda humanitaria; un nivel y prioridad a medio plazo, que fomenta la promoción de la paz a nivel local y nacional, por intermedio de la promoción de iniciativas de la sociedad civil en el ámbito de una economía participativa, un desarrollo alternativo, el buen gobierno local, la promoción de los derechos humanos, el trabajo en favor de la seguridad de las personas (*human security*), y el apoyo al refuerzo de la presencia del Estado en el territorio, no solo en términos policiales, sino fundamentalmente a nivel institucional y de prestación de servicios públicos; y un enfoque y nivel de largo plazo centrado en el combate a las raíces del conflicto armado y a la promoción del ‘desarrollo para todos’, dimensión en la cual se incluye, en particular, la promoción de la competitividad en el medio rural y el apoyo a proyectos de desarrollo alternativo.

Es notorio en estos tres niveles que el enfoque para la paz de la UE en términos comunitarios se caracteriza por su énfasis estructural, pero también por su componente inclusivo y humanitario. La UE apuesta efectivamente a la cooperación para la paz en Colombia, en el supuesto de que el diálogo político y la cooperación para el desarrollo son los únicos instrumentos que se tienen para estabilizar el país (Francia, 2003) y de una perspectiva ya establecida en la comunicación de la Comisión Europea sobre la prevención de conflictos (2001, p. 10) de que la política de cooperación al desarrollo es el instrumento más poderoso del que la UE dispone para abordar las causas del conflicto.

Esto configura un enfoque esencialmente a largo plazo en términos comunitarios, lo que le permite hacer un esguince a las dificultades de la UE para alcanzar consensos político-diplomáticos a corto plazo y no depender de la existencia de un proceso de paz formal, pero que no le permite impactos ni resultados palpables e inmediatos a corto plazo.

Asimismo, hay un marcado apoyo a la sociedad civil en el marco de la cooperación de la UE. El enfoque de la comisión, principalmente a través de los laboratorios de paz, se centra y se canaliza en el fortalecimiento de la sociedad civil y su potencial rol y protagonismo en la transformación del conflicto y la construcción de la paz. Para la cooperación de la UE, la intermediación de la sociedad civil y de las ONG es esencial (Fescol, 2004, p. 6). La cooperación de la UE se ha orientado hacia la construcción de paz ‘desde abajo’ y a la promoción de ‘islas de civilidad’ con base en la sociedad civil (Kurtenbach, 2009, p. 397).

Los laboratorios de paz se encuadran en esta finalidad. Se estructuraron con base en la experiencia y procesos sociales del PDPMM. Esta constituye de hecho la principal marca de la cooperación comunitaria en Colombia, que le confiere su especificidad.

Todos estos elementos y prioridades se reflejan y se materializan en los proyectos de los laboratorios de paz. El concepto de laboratorio de paz se basa y recoge en elementos de estas diversas áreas de prioridad, identificadas y planteadas por la UE.

## El origen y la concepción de los laboratorios de paz desde el trayecto europeo

Los laboratorios de paz nacen en el Magdalena Medio sobre las bases de la experiencia social y las estructuras del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que venía trabajando en la región desde mediados de la década de 1990. Este se había constituido como un programa social y político para la paz y el desarrollo en el territorio, involucrando diversas organizaciones sociales, pero centrado en la Iglesia católica, bajo el liderazgo carismático del padre jesuita Francisco de Roux (Barreto Henriques, 2009a, p. 546). Los laboratorios de paz no fueron, por lo tanto,



creados *ex nihilo*. Constituyen fundamentalmente un apoyo político y financiero de la UE a una iniciativa de construcción de paz en curso con base en la sociedad civil.

Sin embargo, el origen de los laboratorios de paz, desde el trayecto europeo, pasó por diversas circunstancias: además de los factores previamente señalados en este texto de transformación de la política exterior de la UE y sus políticas de cooperación al desarrollo, se encuadran fundamentalmente en el proceso de internacionalización del conflicto y su resolución en el marco de la ‘diplomacia para la paz’ de Pastrana y del Plan Colombia. Empiezan a ganar forma fundamentalmente en el contexto de las mesas de donantes, que se constituyeron en junio del 2000 por iniciativa de España y Colombia, como mecanismo internacional para buscar apoyo financiero y canalizar la ayuda externa para el Plan Colombia (Vranckx, 2005, p. 16).

En este marco, específicamente en la Conferencia de Donantes de Bruselas el 30 de abril de 2001, en la cual la Comisión Europea fue el anfitrión, la CE se comprometió con un paquete de ayuda para la paz de 334 millones de euros para el periodo entre 2000 y 2006, en el cual se incluía la financiación al primer laboratorio de paz en el Magdalena Medio, con una dotación financiera de 43 millones de euros (Vranckx, 2005, p. 19).

Este paquete de paz iba claramente más allá de la participación en el componente social del Plan Colombia. En realidad, después de la proposición del Plan Colombia y de la negativa europea de tomar parte en él, debido a su predominancia militar, era políticamente imperativo para Europa dar una respuesta y desarrollar sus propias políticas de paz y de aproximación a Colombia. La UE tenía la intención de diferenciarse del plan estadounidense y desarrollar su propia propuesta, de acuerdo con su propia visión de la resolución del conflicto en Colombia (Barreto Henriques, 2009b, p. 507).

La CE adoptó en cierta medida la perspectiva de la resolución del Parlamento Europeo (2001) que invocaba a la UE a que siguiera su propia estrategia no militarista, con énfasis social y participación de la sociedad civil. Efectivamente, los laboratorios de paz acabarían por corresponder a esta apelación del Parlamento Europeo a convertirse en uno de los elementos centrales de su enfoque para la paz.

La selección del PDPMM y de la región del Magdalena Medio para acoger el primer laboratorio de paz, desde el posicionamiento de la UE, se debe principalmente a dos factores: en primer lugar, el PDPMM había sido financiado entre 1998 y 2000 por el Banco Mundial a través de dos Préstamos de Aprendizaje e Innovación (PAI).

Así que, la UE decidió realizar el laboratorio de paz con base en el PDPMM al tener en cuenta las oportunidades y potencialidades que se abrían por el trabajo previo que el PDPMM ya había realizado en el campo y la experiencia en el manejo de ayuda internacional y en la estructuración de proyectos (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 15).

En segundo lugar, la posibilidad de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano de Pastrana (1998-2002) y el ELN en una zona de distensión en el sur de Bolívar, desempeñó igualmente un papel importante en el proceso y la localización del laboratorio de paz en el Magdalena Medio. La UE quería participar en el proceso y apoyar política y financieramente la creación de esta zona (Barreto Henriques, 2009a, p. 597). En este marco, una delegación de expertos patrocinada por la CE visitó Colombia y el Magdalena Medio con el fin verificar las posibilidades de ese territorio como zona de encuentro entre el gobierno colombiano y el ELN, y de proyectos sociales y económicos de construcción de paz que podrían ser financiados y apoyados (Ramírez, 2004, p. 291).

El Magdalena Medio y el PDPMM se destacaron en este contexto. El proceso social que se había desarrollado desde la mitad de la década de 1990 atrajo la atención de la UE. Se dio cuenta de que era una experiencia que merecía ser respaldada. El primer laboratorio de paz fue creado en este ámbito. Después de algunos contactos y concurrencia a algunas reuniones, la UE confirmó que quería colaborar en el proceso y apoyar la experiencia. La idea de un ‘laboratorio de paz’, concepto acuñado y propuesto por el entonces embajador de Francia en Colombia, Daniel Parfait (2000-2004), basado en la experiencia del PDPMM, se presentó y se aceptó (De Roux, 2007). Daniel Parfait había participado como facilitador en el proceso de paz con el ELN y había ejercido la presidencia rotativa de Francia de la UE en Colombia entre julio y diciembre de 2000, factores que propiciaron y abrieron las puertas al proceso de concepción del laboratorio de paz.

Así, en gran medida, la creación del Laboratorio de Paz, desde el enfoque europeo, fue un intento de la UE de apoyar una solución política negociada al conflicto (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 7). En su concepción inicial, su ayuda pretendía concentrarse en una zona en donde se tenían expectativas de que se negociaría e implementaría un Acuerdo de Paz con el ELN y de que emergería un escenario de post conflicto y de desmovilización de esta guerrilla (Vranckx, 2005, p. 34). Aunque esta zona no haya sido finalmente constituida y las expectativas hayan sido prematuras, la UE decidió estructurar los instrumentos para crear las condiciones para la paz en

la región. Bruselas buscó tener una presencia en el terreno, más allá de las iniciativas aisladas de sus Estados miembros (Massé, 2003, p. 16).

En cuanto al excomisario para las relaciones exteriores Chris Patten, quien acompañó el proceso de concepción y estructuración del primer laboratorio de paz, este anunció la iniciativa como “un plan para construir la paz desde abajo, fortalecer la justicia colombiana y ayudar las víctimas del conflicto” (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 88). Definió tres objetivos fundamentales:

[...] en primer lugar, apoyar en el terreno la implementación de acuerdos específicos entre las partes en conflicto; en segundo lugar, construir zonas de convivencia pacífica entre sus habitantes, mediante el fortalecimientos institucional local y el apoyo a actores civiles que promuevan la paz; y en tercer lugar, impulsar el desarrollo económico y social, incluyendo en lo posible, la promoción del desarrollo alternativo. (Comisión Europea, 2001, p. 26)

El concepto de laboratorio de paz arranca así fundamentalmente con la tentativa de creación de las condiciones sociales, económicas y culturales para la paz, a nivel de la base.

Así, todos esos elementos fueron importantes en la creación del laboratorio de paz en el Magdalena Medio, institucionalizado en febrero 2002 con la firma de la UE y el gobierno colombiano en un acuerdo especial de financiación. Un período de ocho años y un paquete financiero de 42 millones de euros se previeron para el laboratorio. Posteriormente, un segundo y tercer laboratorio serían creados en otras regiones de Colombia.

## Los laboratorios de paz como instrumentos de la cooperación europea

Como hemos señalado previamente, la cooperación comunitaria de la UE en Colombia, en el marco de la cual se han estructurado los laboratorios de paz, a pesar de insertarse en el paradigma de la cooperación europea a nivel internacional, tiene características distintivas que le confieren especificidad y un carácter *sui generis*. Configura una cooperación orientada claramente hacia la construcción de la paz y la

transformación del conflicto, que es, en gran medida, sintomática de la reforma de la cooperación de la UE iniciada en la década de 1990 en el sentido de politización y ‘securitización’, y es un ejemplo de una nueva experiencia de casamiento de la ayuda al desarrollo con la transformación de los conflictos.

Asume una originalidad y peculiaridad en el contexto colombiano derivada de esto mismo. De hecho, la especificidad de la cooperación al desarrollo de la UE hacia Colombia, que se materializa en los laboratorios de paz, emana fundamentalmente del entorno político-social de este país, y, en particular de su conflicto armado interno. Esta iniciativa constituye en la realidad un ‘laboratorio social’ intrínsecamente colombiano. La UE nunca ha sido el arquitecto ni el protagonista principal de la experiencia. Pero, en cierta medida, esta iniciativa es también un laboratorio para la UE. Representa un experimento en el marco de sus políticas de desarrollo comunitarias. Como señala Dorly Castañeda (2012, pp. 15-16), la UE desarrolló en Colombia, por intermedio de la Comisión Europea, un proceso político de ‘aprendizaje mediante la práctica’, a través de la interacción y concertación con los actores locales, como el PDPMM y el gobierno colombiano, y del contacto con la realidad de Colombia, que condujo a un enfoque específico europeo hacia la paz en este país. Los laboratorios de paz son por eso una iniciativa esencialmente contingente en su contexto político y social, al configurar un enfoque *ad hoc* y en construcción para la transformación del conflicto (Castañeda, 2012) y un instrumento *sui generis* y sin paralelo en el marco de las políticas y mecanismos de cooperación al desarrollo de la UE. A pesar de que la contribución de la Comunidad Europea sea modesta, la UE canalizó sus recursos de forma creativa (Domínguez-Rivera, 2005, p. 25).

Por lo tanto, los laboratorios de paz se han convertido en el principal instrumento de la UE para la transformación del conflicto en Colombia y el núcleo de su enfoque para la paz en este país.

## Conclusión

Se ha vuelto manifiesto a lo largo de este capítulo que en Colombia la UE es fundamentalmente un actor en busca de un enfoque y de un rumbo para su política exterior. El acercamiento y la política exterior de la UE hacia Colombia

es atravesada por dos dimensiones muy marcadas y contrastantes: una dimensión político-diplomática pautada por algunas inconsistencias, incoherencias y ambigüedades, en la cual la UE se ha revelado como un actor con un bajo perfil y un rol irrelevante o marginal en la resolución del conflicto, y una dimensión comunitaria, en la cual Colombia se destaca como un ítem *sui generis* para la UE (Vranckx, 2005, p. 6), al configurar una cooperación para el desarrollo orientada hacia la paz, con especificidades propias, y muy particularmente con un instrumento sin parangón en la cooperación europea: los laboratorios de paz.

Esta iniciativa podrá ser simultáneamente el reflejo y el catalizador de un enfoque europeo en construcción de transformación del conflicto en Colombia, en torno a la participación de la sociedad civil, la incidencia sobre las raíces del conflicto, el rechazo de la vía militar al conflicto y la promoción de ‘islas de civilidad’. Efectivamente, a pesar de que la UE no es ni el autor, ni el protagonista principal del proceso, los laboratorios de paz se han convertido en el instrumento, más coherente, integrado y relevante de la UE en el sentido de la construcción de una paz sostenible y positiva en el terreno y la transformación del conflicto en Colombia.

La UE se involucró y ayudó a consolidar y a estructurar, en el marco de sus mecanismos de cooperación, una iniciativa de construcción de paz nacida en la sociedad civil colombiana con una filosofía y metodología peculiares y un enfoque alternativo y holístico para la paz. Los laboratorios de paz son el fruto de este casamiento y convergencia de intereses y perspectivas políticas entre el PDPMM y la CE, en busca de caminos y rumbos nuevos, a nivel político, económico y social, y de un enfoque alternativo para la paz en este país.



A large, dark gray, stylized number '5' is positioned in the upper left quadrant of the page. It is partially obscured by the text 'Capítulo' which is written in a white, sans-serif font. The number '5' has a thick, blocky appearance with a slight shadow effect.

# Capítulo





# El laboratorio de paz del Magdalena Medio: ¿un ‘laboratorio de paz’ en una región ‘laboratorio de violencia(s)’?

“Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina.”

*Calle 13*

“Si el río [Magdalena] pudiese hablar, el gritaría con todas sus fuerzas ¡no más!”

*Teresa Castrillón (Lideresa del Movimiento de Víctimas Ave Fénix)*

## Introducción

El escenario de violencia armada, emergencia humanitaria y crisis política que enfrenta Colombia contrasta con el panorama de efervescencia de su sociedad civil. En los últimos quince años se ha asistido en este país a un boom de movilización social e iniciativas de paz desde la base, como las Asambleas Constituyentes, las comunidades de paz, las mingas indígenas y los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), que configuran, en cierta medida, una alternativa a las negociaciones nacionales con las guerrillas que han enfrentado duras dificultades y han provocado altas frustraciones sociales y políticas. Se evidencia lo que Mauricio García-Durán (2006, p. 150) designa como un contraste entre una “crisis en lo nacional y dinamismo en lo local” en el campo de la construcción de la paz en Colombia.

En este marco, los llamados ‘laboratorios de paz’ se destacan como una de las más interesantes, ambiciosas y originales iniciativas de construcción de paz nacidas en la sociedad civil que han emergido en Colombia, específicamente en la región del Magdalena Medio. Constituyen una forma peculiar e innovadora de construcción de paz que involucra actores de diversa índole y buscan caminos alternativos de paz y desarrollo en el nivel local y regional.

Este capítulo se enfoca en el laboratorio de paz del Magdalena Medio, el primero de los laboratorios de paz y propulsor de su filosofía y enfoque originales de paz. Será el primero de dos estudios de caso dedicados a la experiencia de los laboratorios de paz, siguiéndole el caso del segundo laboratorio de paz en el Cauca y Nariño. En este capítulo se pretende fundamentalmente analizar esta iniciativa en cuanto instrumento de construcción de paz positiva desde la base, tanto en cuanto propuesta conceptual para la paz, como en cuanto a su trabajo en el terreno y junto con las comunidades de base, en la búsqueda de vías alternativas para la paz.

En este sentido, se busca en primer lugar, encuadrar y contextualizar el laboratorio de paz en el marco específico del conflicto y la violencia en la región del Magdalena Medio; y exponer los factores particulares que dieron origen al laboratorio de paz desde el trayecto colombiano. En segundo lugar, se analiza el concepto de ‘laboratorio de paz’ y su filosofía y enfoque peculiares para la paz. En seguida, se tienen en cuenta el rol y los aportes de los distintos actores involucrados en el laboratorio. En cuarto lugar, se pretende examinar la ‘construcción de paz desde la vereda’, es decir, los diversos proyectos y procesos de base del laboratorio de paz. Por último, se busca traer alguna luz al impacto del laboratorio y los factores de bloqueo que han restringido o mitigado su potencial. En cierta medida, lo que está en juego es averiguar en qué medida esta iniciativa corresponde a un verdadero ‘laboratorio de paz’, en esta región que históricamente ha constituido un ‘laboratorio de violencia(s)’ y un microcosmos del conflicto.

El estudio no se limita al análisis del laboratorio de paz en su dimensión restricta de instrumento de la cooperación europea, sino más bien en el marco más amplio de todo el proceso social y filosofía de paz desarrollados por el PDPMM sobre la cual se sostiene esta iniciativa.

Este capítulo se basa, no solamente en investigación bibliográfica y análisis de documentos oficiales, sino fundamentalmente en trabajo de campo en la región del Magdalena Medio, realizado en el 2007 y 2008, a través de entrevistas a un amplio

y diversificado abanico de actores y de observación participante en varios eventos de proyectos y procesos del laboratorio.

## La región del Magdalena Medio

“Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera sino de luz”  
*Víctor Jara*

El Magdalena Medio es una región localizada en el noreste de Colombia, en el corazón geográfico del país, siendo atravesada por el río Magdalena, que se constituye a su vez como el eje del territorio. Corresponde a la parte intermedia del valle del río Magdalena, elemento que le confirió su nombre e identidad.

No forma una región administrativa. Tiene componentes de cuatro departamentos –Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia–, y se fragmenta política, cultural y socialmente en torno a distintos polos y centros. Es una región diversa, con distintos colores, paisajes y acentos. De hecho, el concepto de región del Magdalena Medio es elástico, debatible y difuso. No hay una noción de región del Magdalena Medio claramente definible e identificable (Molano, 2009, p. 105). Su matriz y eje común y transversal es el río Magdalena, históricamente la principal arteria y vía de comunicación de Colombia, y sobre la cual se ha organizado en gran medida la vida económica, social y cultural de la región.

En términos sociales y demográficos, es eminentemente un área rural y campesina, con solo dos centros urbanos importantes, Barrancabermeja y Aguachica (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 2). La economía campesina es dominante, correspondiendo al 80% del total predial de la región (Briceño, 2007, p. 3). Tiene una población de aproximadamente 800.000 habitantes (OPI, 2006, p. 8), un área de 30.000 km (CDPMM, 2001, p. 4) y está compuesta por treinta municipios.

Es una región primordial para Colombia desde el punto de vista geoestratégico, revelándose históricamente como clave para el conflicto armado. En primer lugar, su ubicación en el centro del país y la presencia del río Magdalena, que se ha constituido históricamente como la espina dorsal de Colombia, le confieren una posición geográfica privilegiada. Representa un punto de confluencia y conexiones entre el centro andino del país, las costas Atlántica y Pacífica de Colombia y Venezuela. Por

lo tanto, constituye un corredor vital para las rutas de comercio, así como del tráfico de drogas (Katz, 2004, p. 30). Asimismo, el Magdalena Medio se caracteriza por su abundancia y riqueza de recursos naturales, entre los cuales se incluyen el oro, carbón, maderas, bienes tropicales y petróleo. Este último asume una particular importancia y centralidad. La refinería más importante de Colombia está localizada en Barrancabermeja, que se volvió a la vez la capital petrolífera de Colombia y la primera ciudad obrera del país. El 70% de los crudos de Colombia se refinan allí (PNUD, 2007, p. 22).

Sin embargo, en términos económicos hay un contraste y una contradicción irreconciliable entre la riqueza de la región en términos de recursos y de generación de ingresos y el panorama de pobreza y carencias sociales de la población y de subdesarrollo de la región. El modelo de desarrollo del Magdalena Medio se basa en una economía extractiva y de enclave, en torno de recursos naturales como el oro, el petróleo, la madera y la ganadería extensiva. Esta ha generado riqueza, pero no ha propiciado el desarrollo de la región. Los ingresos y riqueza generados por esas actividades económicas salen de la región y generan poco beneficio para los habitantes locales. Se manifiesta una profunda inequidad en los procesos productivos y en la distribución de la riqueza, que ha excluido socioeconómicamente a la mayoría de la población (García y Sarmiento, 2002, p. 21). Hay profundas desigualdades en el Magdalena Medio y una alta concentración de capital y de tenencia de la tierra.

La pobreza y la inequidad han llegado a ser características estructurales de esta región: el 70% de la población es pobre, un número bien por encima del promedio nacional. El Magdalena Medio se evidencia como un escenario de clara violencia estructural, manifestando exclusión a nivel socio-económico, regional y político. Hay una carencia generalizada de vivienda, servicios, instalaciones, escuelas, centros de salud, empleos públicos y tierras (CDPMM, 2001, p. 5). La población carece de servicios básicos como acueducto o alcantarillado; los niveles de escolaridad son bajos; la cobertura de servicios de salud se extiende apenas a 44% de la población (García y Sarmiento, 2002, p. 52).

De igual forma, se manifiesta una distribución desigual de la tierra, factor que se destaca como uno de los temas y problemas más críticos en el Magdalena Medio. Es una de las facetas más visibles y problemáticas de la pobreza en la región y una causa histórica de la lucha social y el conflicto armado.

Este escenario económico ha empujado a muchos campesinos hacia la economía ilegal, específicamente al cultivo de la coca, pero también al cartel de la gasolina. El Magdalena Medio tiene importantes plantaciones de coca, especialmente en el sur de Bolívar, que corresponden entre el 10 y 15% de la coca colombiana (De Roux, 2007, p. 3). Es una economía muy vinculada a la guerra, con vínculos estrechos principalmente con los grupos paramilitares.

Esta exclusión que se manifiesta a nivel socio-económico, pero también a nivel político y regional, se relaciona en gran medida con la débil y precaria presencia del Estado. Históricamente, el Magdalena Medio ha sido una frontera de colonización interna, factor que, como se describió en el tercer capítulo, ha sido fundamental en la gestación del conflicto armado en Colombia. Permanece una región periférica, con débil y precaria presencia del Estado, tanto físicamente, como en términos de servicios sociales y públicos (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 15) y en su papel jurisdiccional, fiscal y económico. La ocupación del territorio del Magdalena Medio no se ha visto seguida por la presencia del Estado, y por esto sus instituciones han incumplido su función de balance territorial, regulación y cohesión sociales (Katz, 2004, p. 31).



**Ecopetrol, Barrancabermeja**

*Fuente: Miguel Henriques*

Por el contrario, la presencia del Estado ha sido eminentemente militar y represiva. El ejército ha sido el único rostro y marca del Estado colombiano, frecuentemente en una dinámica de persecución a los campesinos, vistos como auxiliares de la guerrilla. Su función en la región se restringió, en gran medida, a la protección de las compañías de petróleo (OPI, 2006, pp. 58-60), elemento que se hace evidente en el hecho de que justo al lado de la refinería de Ecopetrol se sitúa el batallón del ejército. Como refiere el sociólogo Marco Fidel Vargas, “el Magdalena Medio parece haberse detenido en el siglo XIX: sin vías, sin comunicaciones, sin justicia, sin Ley; con municipios que siempre han sido el patio de atrás o la “cola” de sus departamentos” (Vargas, 2007, p. 3).

Todos estos factores políticos, económicos, sociales y culturales configuraron el Magdalena Medio como un territorio de profundas contradicciones y conflictos de cariz social y armados. Los conflictos sociales se han desarrollado fundamentalmente en torno a dos ejes: en primer lugar, se evidenció un conflicto obrero en torno a la redistribución de la renta asociada a la producción y refinación del petróleo (Restrepo, 2008, entrevista), en segundo lugar, se encuentra el tema de la tierra y su modelo de producción.

La industria del petróleo en el Magdalena Medio permitió el florecimiento de una fuerte organización proletaria que remonta a la década de 1920, fruto del choque y de las relaciones de explotación entre las masas obreras y las fuerzas patronales de las petrolíferas multinacionales (Molano, 2009, p. 40). Barrancabermeja ha sido históricamente la ciudad obrera por excelencia de Colombia, centro de luchas laborales y de clase y símbolo del sindicalismo y del movimiento proletario encarnado por la Unión Sindical Obrera (USO). Es escenario y palco de múltiples huelgas, como la de 1948 que logró la nacionalización de la industria petrolera convertida en Ecopetrol. Esta marca es uno de los trazos estructurantes del Magdalena Medio. Como señala Alfredo Molano (2009, p. 6), “la explotación del petróleo será el eje que determine buena parte del desarrollo y de los conflictos sociales de toda la región”.

Otro eje de conflicto social ha opuesto históricamente a terratenientes, capitalistas agrarios y ganaderos de un lado, y campesinos del otro. Ha habido conflictos graves en torno al tema de la tierra y del modelo de producción para esta. El Magdalena Medio es una región de colonización reciente, en donde se ha hecho sentir de forma hincada la disputa por los derechos de propiedad entre los propietarios de grandes extensiones de tierras dedicadas a la ganadería extensiva y

los pequeños propietarios campesinos dedicados a cultivos comerciales de menor escala, como el cacao, el café y el maíz (Restrepo, 2008, entrevista).

Pero el Magdalena Medio no se restringe a las luchas obreras y campesinas, es un palco de todo el tipo de luchas y reivindicaciones sociales. No solo han sido comunes huelgas laborales y luchas campesinas por la tierra, como una movilización social y cívica generalizada por los servicios públicos que exigía lo que un Estado ausente no preveía o proveía pobremente a la población y a la región (OPI, 2006, p. 59). Barrancabermeja, como el Magdalena Medio en general, ha sido un epicentro de luchas sociales que atraviesan todo el siglo XX y un escenario de huelgas, de paros cívicos por servicios públicos y por el derecho al agua, protestas en defensa de la vida y de los derechos humanos (Lozano, 2006, p. 66). Esto ha convertido el Magdalena Medio en un espacio socio-geográfico de continuas protestas y conflictos sociales y ha creado una fuerte cultura política reivindicativa.

Pero el Magdalena Medio es igualmente un territorio en donde la conflictividad armada ha asumido históricamente contornos muy intensos y profundos. Los factores estructurales de la región y la conflictividad social latente que evidencia la región han conferido condiciones objetivas para el ascenso e implantación de grupos armados en la región. La débil presencia jurisdiccional del Estado y la falta de sentido de construcción de lo público y del bienestar común restringieron las vías y mecanismos de resolución pacífica de conflictos. De igual forma, la carencia de espacios de concertación y diálogo civiles y políticos fueron propicios al recurso a la vía armada (García y Sarmiento, 2002, p. 20). A las armas han recorrido no solo los sectores privilegiados para imponer y mantener su poder, sino los sectores marginalizados para buscar sus derechos (Molano, 2009, p. 105).

Así, el Magdalena Medio se configura como una 'zona roja', una región de alto conflicto. Es un territorio estratégico para la guerra en Colombia y en sí mismo un microcosmos del conflicto en el país. Todos los actores armados están presentes allí, el ELN, las FARC-EP, el EPL, y seis batallones del ejército nacional<sup>1</sup> (De Roux, 2001). En esta zona las FARC han establecido uno de sus frentes más importantes y el paramilitarismo confederado en las AUC disponía de su grupo más numeroso. En realidad, el Magdalena Medio ha sido cuna de

---

1 La guerrilla se concentra principalmente en las zonas más altas de la región, como la Serranía de San Lucas. En las partes planas y las cabeceras municipales marcan presencia y control fundamentalmente el ejército y los grupos paramilitares.

grupos insurgentes y paramilitares. Tanto el ELN, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dieron sus primeros pasos en el Magdalena Medio.

Históricamente, fue una zona de influencia del ELN (Bergquist, Sánchez y Pañaranda, 1992) y su mayor bastión y santuario. Fue en el Magdalena Medio “donde cayó Camilo [Torres]”, como Víctor Jara cantó, el sacerdote y sociólogo inspirado por la teología de la liberación, símbolo mayor de la lucha revolucionaria en Colombia. En el Magdalena Medio el ELN se consolidó históricamente y vivió sus episodios más determinantes. Esta guerrilla ha tenido una presencia e implantación en la región no solo militar, sino social. El ELN ha tenido vínculos fuertes con ‘las comunidades’ y las organizaciones sociales del Magdalena Medio (Pécaut, 2004, pp. 27, 28), y una base social de apoyo en parte de la población. La movilización social en el Magdalena Medio, sobre todo en Barrancabermeja, tenía contacto y en algunos casos, afinidad política con el ELN.

Progresivamente la guerrilla perdió mucha de su influencia y control del territorio en la región para cederlos a los grupos paramilitares. El Magdalena Medio ha sido testigo de la aparición, expansión y dominación política y militar del paramilitarismo desde los años ochenta hasta hoy. Fue uno de los primeros palcos de operación del MAS aún en la década de 1980, uno de los primeros grupos paramilitares colombianos en obtener notoriedad, y la cuna del modelo paramilitar que se extendería al resto del territorio colombiano y se confederaría en torno de las AUC (Loingsigh, 2002, p. 5). Desde Puerto Boyacá y Puerto Berrío se expandió la ofensiva contrainsurgente a partir de los años ochenta, pero especialmente después del año 2000, en torno a una confederación de intereses políticos y económicos contrarios a la guerrilla, en particular de los ganaderos. Las AUC lograron controlar todos los municipios destacados del Magdalena Medio y forzaron al ELN a concentrarse en zonas de retaguardia y difícil acceso en la Serranía de San Lucas, y a las FARC en el centro oriental y occidental del Magdalena Medio (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 14).

La entrada de los grupos paramilitares incrementó la violencia en la región e instauró una nueva era de terror, con masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado interno y consecuencias humanitarias negativas (Katz, 2003, p. 31). El Magdalena Medio se volvió en este periodo un ‘laboratorio de guerra’ para la contrainsurgencia, en donde la expansión territorial y el control militar, social, político y económico de los grupos paramilitares, con conexiones al Ejército, fueron



ensayados y puestos en práctica, asociados a todo tipo y modalidades de violencias, asesinatos selectivos, masacres, bombardeos, desplazamientos y prácticas de terror.

El control paramilitar se ejerció a varios niveles (Lozano, 2006; p. 54): en primer lugar, se ejerció mediante el terror y la persecución a organizaciones y activistas de izquierda y de derechos humanos, como sindicalistas, asociaciones campesinas, feministas, etc., siguiendo la lógica contrainsurgente de extinguir las bases sociales (reales o supuestas) de la guerrilla bajo el lema de ‘quitarle el agua al pez’<sup>2</sup>.

Pero además de la dinámica militar y social del paramilitarismo, se evidencia igualmente una dinámica económica paramilitar. El paramilitarismo no cumple solo una función contrainsurgente, sino también una función económica que responde a los intereses de los grandes terratenientes, ganaderos, mafiosos y barones del narcotráfico. Mediante el terror y la violencia paramilitar, se estableció progresivamente un proceso de concentración de la tierra y de verdadera ‘contrarreforma agraria’, por medio del desplazamiento forzado y violento de los campesinos, y ha convertido estos terrenos a la ganadería extensiva (Molano, 2009, p. 21). Asimismo, se manifiesta un control paramilitar a nivel político. La relación de las administraciones locales con el paramilitarismo es clara e innegable y fue incluso admitida por varios líderes paramilitares, como alias don Berna (Lozano, 2006, pp. 62- 65).

El proceso de desmovilización de los paramilitares no ha disminuido considerablemente tampoco la violencia en la región. El control paramilitar ha permanecido en varias áreas y una nueva generación de grupos paramilitares, tales como las Águilas Negras, ha emergido, continuando a sembrar el terror y la violencia (OPI, 2006, p. 19, 24). Se vive un ‘orden pos paramilitar’ en el Magdalena Medio, en que su presencia es menos visible, pero es innegable, sea en el campo económico, en control de las tierras y manejo de las economías ilícitas o en el manejo de las alcaldías y de las dinámicas políticas.

Todo esto configura un escenario de alta intensidad de violencia. La tasa de homicidios políticos en el Magdalena Medio es muy alta comparada con otras regiones de

---

2 De igual forma, el control social de los paramilitares estableció verdaderos micro-Estados autoritarios, en los cuales se impuso un control social y reglas de comportamiento que impedían manifestaciones personales tan sencillas como usar minifalda en las mujeres, o el pelo largo en los hombres, e incluso control del léxico de la población, prohibiendo palabras como ‘compañero’. Asimismo estableció una limpieza social que tuvo como blanco a grupos como homosexuales, prostitutas, indigentes, ladrones y traficantes (Lozano, 2006, pp. 54- 58).

Colombia y con el promedio nacional<sup>3</sup> (OPI, 2006, p. 19). Asimismo, toda esta dinámica rompió en gran medida el tejido social, silenció o redujo la visibilidad de algunos movimientos sociales, y en cierta medida, significó la derrota de los movimientos, no solo armados sino civiles y sociales que pugnaban por los cambios estructurales en el país.

Es en este contexto difícil y desafiante que surge el laboratorio de paz y frente a cual se debate, razón por la cual sus retos eran y siguen siendo grandísimos.

## El origen y concepción del laboratorio de paz del Magdalena Medio y del PDPMM desde el trayecto colombiano

Hemos analizado en el capítulo anterior el origen y concepción del laboratorio de paz del Magdalena Medio desde su trayecto internacional, a partir del rol de la UE en el proceso. Lo hemos encuadrado sobretodo en el marco de la internacionalización del conflicto y de la resolución del conflicto colombiano, particularmente en el marco del “Plan Colombia” y de la ‘diplomacia para la paz’ de Andrés Pastrana y de las reformas de la cooperación y política exterior de la UE orientadas hacia la promoción estructural de paz.

En esta sección analizaremos el origen del laboratorio de paz del Magdalena Medio desde el trayecto colombiano, es decir, desde las dinámicas endógenas que lo proporcionaron y en el marco de la historia social de la región y de las especificidades del conflicto armado en esta zona.

Como hemos descrito en el punto anterior, el Magdalena Medio es una región con una fuerte tradición histórica de movilización social, que cubre todo el siglo XX. El laboratorio de paz y el PDPMM, organización en que se basa y se sostiene el laboratorio de paz del Magdalena Medio, “no nació en un desierto organizativo” (Molano, 2009, p. 45). Hay una historia social riquísima en la región y todo un patrimonio y tradición de organización y de movilización social en torno a luchas obreras, campesinas, cívicas, sindicales y populares.

---

3 De acuerdo con el OPI (2006, pp. 13-14) el Magdalena Medio ha presentado 1.730 homicidios políticos de 1996 a 2004.

Organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO), la Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), la Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra (ACVC), el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el Consejo de Desarrollo Socio-Económico (CODES), la Pastoral Social de la Iglesia católica de Barrancabermeja, así como varias asociaciones campesinas y mineras, se han vuelto símbolos y bastiones sociales de lucha para todo el país y han hecho un trabajo social de base notable que el PDPMM y el laboratorio de paz recogen.

El laboratorio de paz y el PDPMM tienen sus raíces en una dinámica histórica de movilización social y popular en el Magdalena Medio. El PDPMM se benefició de una experiencia acumulada de resistencia civil y protesta social en la región, que tenía en las luchas laborales y campesinas y en organizaciones tales como la USO y la OFP, algunas de sus expresiones más importantes. De hecho, para entender el laboratorio de paz del Magdalena Medio hay que tener en cuenta un conjunto de movilizaciones populares y campesinas en la región hasta finales de la década de 1990. Por eso mismo, Alfredo Molano (2009, p. 105) señala que el PDPMM debe ser entendido como “un capítulo más de la historia del Magdalena Medio”.

También, se encuadra en una dinámica nacional en Colombia de movilización de base por la paz. En los últimos veinte años se ha asistido al surgimiento de varias experiencias civiles de paz y de resistencia civil en el seno de la sociedad civil. Iniciativas tales como las comunidades de paz, Justapaz, el mandato ciudadano para la paz, la vida y la libertad, las asambleas municipales constituyentes, las experiencias indígenas de resistencia civil en el Cauca han configurado a Colombia, no solo como un escenario de conflicto y violencia, sino como un escenario de paz (Hernández, 2002, p. 170).

Varios factores propiciaron esta dinámica: en primer lugar, resultan de un panorama de incremento de la violencia y de la intensidad del conflicto armado, en particular con la expansión del paramilitarismo y sus prácticas de terror y guerra sucia. El PDPMM, tal como muchas otras iniciativas de paz en la región y Colombia, nace en un marco de agudización del conflicto y su impacto sobre la población civil en el Magdalena Medio, en un momento en que algunas de las organizaciones sociales más emblemáticas de la región estaban a punto de ser liquidadas (Molano, 2009, p. 105). Pretendía asumirse como una forma de resistencia civil y de búsqueda de oxígeno en el medio de la violencia.

Asimismo, hay que tener en mente y tomar en consideración otros dos antecedentes asociados al momento histórico en que emergió. El PDPMM surgió a mitad de la década de 1990 en un contexto difícil para la nación, y en particular para la región del Magdalena Medio, caracterizada por una recesión y una liberalización económicas, con sus costos sociales inherentes. Este marco, tal como la violencia que se vivía, subrayó fallas del Estado y una inhabilidad para enfrentar la crisis a nivel político, económico y social. Estos elementos impulsarían a la sociedad civil a encontrar alternativas. Numerosas iniciativas de la sociedad civil se lanzaron en este periodo en Colombia (Banfield, Gunduz y Killick, 2006, p. 58).

De igual forma, este periodo de la década de 1990 fue marcado por las nuevas posibilidades y horizontes abiertos por la Constitución de 1991, que reconoce el pueblo como poder constituyente, la naturaleza multicultural y multiétnica de Colombia, e inició un proceso de democratización y descentralización política, que extendió y profundizó los derechos fundamentales y los medios de participación de los ciudadanos (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 10).

En este contexto surge una de las más ambiciosas y originales de las iniciativas de paz colombianas, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, experiencia sobre la cual se crearía y se estructuraría el laboratorio de paz. Este había sido creado en 1995, con base en distintos actores y referencias. Fue originado por una confluencia y convergencia de intereses y preocupaciones éticas, políticas y sociales entre la compañía de petróleo, Ecopetrol, su sindicato laboral, USO y la Diócesis de Barrancabermeja en torno a las razones de por qué una región tan rica tenía tanta pobreza y violencia.

Los caminos de las organizaciones se cruzaron por las trayectorias que venían llevando: la USO había creado en 1994 un Comité de Derechos Humanos, con el apoyo y financiación de Ecopetrol, que pretendía hacer frente al marco de graves problemas de violencia que afectaban la región y amenazaban a sus miembros. A partir de este organismo se desencadenó un proceso de discusión interna y de apertura a otras organizaciones de la región (García y Sarmiento, 2002, p. 22) que llevó a la alianza con la Diócesis de Barrancabermeja.

Asimismo, la Pastoral Social y la Diócesis de Barrancabermeja venían realizando desde los años sesenta en la región un trabajo social de base importante en temas de conflicto, paz, desarrollo y región (Ortegón, 2007, entrevista). Esta era de hecho una diócesis comprometida con los principios y la filosofía de la teología de la liberación,

con una preocupación por las causas culturales, sociales y económicas de la violencia en la región y a través de la cual se formaron y apoyaron bajo su alzada, organizaciones y procesos sociales, tales como la OFP (Molano, 2009, p 39). Además, desde 1993, se encontraba bajo el liderazgo de Monseñor Jaime Prieto, uno de los obispos más progresistas de Colombia y más comprometidos social y políticamente con los temas de la paz.

Así, se generó una alianza y un proceso entre estos tres actores con vista a abordar los problemas estructurales del Magdalena Medio, en particular la contradicción entre la riqueza de la región y la pobreza de su población. Se buscaba qué podría hacerse al respecto, de manera que el petróleo pudiera ser un factor real de desarrollo y paz en la región, más aún cuando ya se llevaban cincuenta años de generación de ingresos en el Magdalena Medio por este concepto (Soto, 2007, entrevista). Esta preocupación motivó a que se convocara a dos organizaciones nacionales, la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) y el Centro de Investigación para la Educación Popular (CINEP), organización asociada a la Compañía de Jesús, un informe de diagnóstico sobre las causas de la violencia y la pobreza en la región, las posibles soluciones y las vías para hacerlo.

La opción por CINEP se debe en gran medida a que la Diócesis de Barrancabermeja mantenía relaciones cercanas con esta organización y su director, y confería formación política, técnica y social a la diócesis (Ortegón, 2007, entrevista). Asimismo, esta organización, dirigida en ese momento por el sacerdote Francisco de Roux, era también fuertemente marcada en ese periodo por la corriente de la teología de la liberación, y desarrollaba desde 1986 un programa por la paz e investigación en estos temas. A esto se agregaron los vínculos históricos que la Compañía de Jesús tenía en la región (Angulo, 2007, entrevista).

El informe fue un proceso amplio, abierto y altamente participativo, se pretendió que se construyera con todos los habitantes de la región e involucró a más de 10.000 pobladores y grupos de trabajo en varios municipios de la región (Valderrama, 2007, entrevista). Como cuenta Francisco de Roux (2002) se recorrió todo el territorio de la región en 1996 y se convocó a los pobladores a responder a dos preguntas fundamentales:

¿Por qué hay tanta gente en la pobreza, siendo esta una región tan rica? Y ¿por qué, siendo este un territorio que ama tanto a la vida, donde la música y la celebración nunca paran, los límites de la muerte doblan las muertes que nos dan los espantosos índices de Colombia?

El proceso de respuesta a estas interrogantes, coordinado por la Pastoral Social de Barrancabermeja, condujo a la conformación de los llamados ‘núcleos de pobladores’, espacios populares de participación y debate, en donde los pobladores discuten horizontes y procesos de desarrollo a nivel local (García y Sarmiento, 2002, p. 24). El diagnóstico realizado por los pobladores y dinamizado por el CINEP, la ASAP y la Diócesis de Barrancabermeja, identificó que los principales factores asociados a la pobreza y a la violencia en la región eran la exclusión, la precariedad local del Estado y el modelo económico extractivo y de enclave (Vargas, 2007, p. 6). En este ámbito, las conclusiones del informe sugerían la creación de un programa que promoviera dinámicas de la paz a través de la construcción colectiva de lo público y del desarrollo sostenible (Vargas, 2007). La idea floreció y con estos objetivos políticos en mira, nació el PDPMM en febrero de 1995, con base en estas dos dimensiones y pilares de acción: la promoción de procesos de participación y organización popular que crearan condiciones para la paz y la resolución no violenta de conflictos, y el fomento de procesos socioeconómicos de desarrollo sostenible e inclusivo, mediante, en particular, la puesta en marcha de procesos productivos en la región (CDPMM, 2005, p. 13).

Los socios del proyecto fueron la Diócesis de Barrancabermeja, el CINEP, el comité de derechos humanos de la USO y Ecopetrol. Entre 1996 y 1998 el consorcio entre la SEAP y el CINEP fue el gestor del PDPMM. En 1998 la SEAP abandonó el proceso y se creó la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM), un consorcio entre el CINEP y la Diócesis de Barrancabermeja, que se mantiene desde ese periodo hasta la actualidad en la dirección del PDPMM (Molano, 2009, p. 41). Asimismo, al terminar el diagnóstico Ecopetrol salió. De esta forma, la Iglesia católica se volvió claramente el motor y actor fundamental del proceso.

El PDPMM arrancó con financiación de Ecopetrol, pero tomó vuelo con recursos del Banco Mundial. Frente a la necesidad de expandir los procesos, el proyecto de un programa de desarrollo y paz fue presentado al Banco Mundial. Encontró receptividad de esta institución a la propuesta, ya que la misión del Banco Mundial en Colombia buscaba respaldar proyectos de institucionalidad civil y consideró interesante la experiencia del PDPMM.

El Banco Mundial decidió apoyar el proceso a través de un instrumento nuevo que en el momento estaba comenzando: el “Préstamo de Aprendizaje e Innovación” (*Learning and Innovation Loan, LIL*). El Estado colombiano sirvió de intermediario

para obtener dos créditos LIL de cinco millones de dólares. Y luego se hizo un segundo LIL para consolidar el proceso. Como se describió en el capítulo anterior, este proceso culminó en la creación del laboratorio de paz del Magdalena Medio con el involucramiento de la UE en el proceso.

Carlos Moreno (2008) identifica varios elementos y factores internos de la iniciativa desarrollada por el PDPMM que sedujeron a la UE.

En primer lugar, se estableció una verdadera diplomacia y un *lobbying* internacional de la CDPMM que les permitió captar la atención política de la UE. La CDPMM y particularmente, su director Francisco de Roux, disponía de una red de conexiones internacionales, en las cuales se incluían gobiernos europeos y ONG católicas de Europa. Tuvo acceso a las conferencias internacionales donde se discutió el proceso de paz en Colombia, en particular las mesas de donantes, y logró colocarse en las agendas de la cooperación internacional (Moreno, 2008, p. 98).

Pero el éxito de su estrategia de *lobbying* y diplomacia pasó fundamentalmente por el contenido de su propuesta. La CDPMM estableció una diplomacia inteligente según la cual, más importante que los recursos de la cooperación internacional era el apoyo político internacional al proceso en curso. Asimismo, logró posicionarse frente a la comunidad europea con una metodología y enfoque para la paz válidos para la transformación del conflicto en Colombia, el del PDPMM, que fue llamativo para la CE y convergía con algunos de sus principios y objetivos políticos (Barreto Henriques, 2010b). Hicieron, en particular, visitas guiadas a la región en que pusieron en contacto a los embajadores europeos con los pobladores del Magdalena Medio y mostraron la riqueza de los procesos de base y la capacidad para mejorar la vida de la población con pocos recursos. Así, el PDPMM se 'vendió' fundamentalmente por su fuerza moral (Barreto Henriques, 2010b). La comunidad internacional no sabía cómo ayudar a Colombia y este factor fue aprovechado eficazmente por la CDPMM en el sentido que esta era la vía más adecuada (Moreno, 2008, p. 108). Fue un acercamiento sumamente innovador y que les confirió legitimidad política al interior de la comunidad internacional, en particular frente a la CE, y les posicionó en un lugar destacado en el mercado internacional de la cooperación.

La figura y personalidad de Francisco de Roux, carismática y pacifista, con el aura de un Gandhi colombiano, se vuelve clave en este proceso. 'Pacho' se vuelve una referencia para la comunidad internacional, imagen, símbolo y portavoz de la

sociedad civil colombiana arrinconada por la violencia e intentando salir de la guerra (Moreno, 2008, p. 97).

Se agrega a esto un contexto nacional en Colombia favorable al apoyo de la comunidad internacional y específicamente de la UE, o lo que Moreno (2008, p. 98) llamó una “apertura del sistema político” nacional e internacional. Esta apertura pasó por el contexto de posible solución negociada para el conflicto armado, mediante los diálogos entre el gobierno nacional de Pastrana con las FARC y el ELN (1998-2002). El proceso de paz en curso con el ELN, que se preveía que se realizaría en una zona de encuentro en el sur de Bolívar, en el noroeste de la región del Magdalena Medio, permitió que los ojos se concentrasen en esta región y confirió una mayor visibilidad al PDPMM. La posibilidad de conversaciones despertó el interés y atención de Estados miembros de la UE, como Francia, España y Suecia, y facilitó los contactos de la CDPMM con varias embajadas europeas.

La creación del laboratorio de paz basado en la experiencia del PDPMM, representó para la UE un intento de apoyar una solución política negociada al conflicto (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 7). En su concepción inicial, la ayuda pretendía concentrarse en una zona en donde se tenían expectativas de que se negociaría e implementaría un acuerdo de paz con el ELN y emergería un escenario de post-conflicto y de desmovilización de esta guerrilla (Vranckx, 2005, p. 34).

La consecución de los diálogos en la región, caen sin embargo por tierra. Hubo una oposición declarada a una zona de encuentro entre el gobierno nacional y el ELN en el sur de Bolívar que se expresó mediante protestas, paros, bloqueos de vías, dirigidas por organizaciones como Asocipaz y “No al Despeje” y por las AUC (Gutiérrez, 2004, pp. 37-45). Este movimiento correspondió a una mezcla de instrumentalización del paramilitarismo y rechazo genuino de las poblaciones civiles de la zona que habían visto deteriorarse su relación con la guerrilla (Gutiérrez, 2004, p. 36). Existía el miedo de ‘caguanización’ de esta zona del país y de establecimiento de una ‘república independiente’ en el norte de Colombia, pero también intereses de las élites políticas y económicas locales que impulsaban las protestas, así como la presión militar, política y social del paramilitarismo en ascensión en esta región, y que finalmente bloqueó esta posibilidad.

Este escenario de desaparición de la zona de encuentro en el sur de Bolívar colocaba un posible obstáculo al establecimiento y consecución del laboratorio de paz, visto que, en la perspectiva de la UE, este sería un instrumento de apoyo a una



solución negociada y un mecanismo para un marco de posconflicto. Sin embargo, una vez más la ‘diplomacia’ de la CDPMM y de Francisco de Roux permitieron que el proceso siguiera adelante con el apoyo político y financiero europeo y que finalmente se constituyera en 2002 el laboratorio de paz del Magdalena Medio. Francisco de Roux (2007) describió de esta forma los eventos:

[...] cuando Europa se dio cuenta de que no iba a haber en el Magdalena Medio una zona de encuentro con el ELN, casi deciden no hacer Laboratorio de Paz y nosotros tuvimos que convencer a los europeos que la paz en Colombia no se iba a dar simplemente con una conversación entre el gobierno y la guerrilla, que era un problema mucho más profundo, que era un problema de cambios de estructura muy serios, que había que hacer desde las regiones lo que iba a ser posible la paz, y que esos cambios se demoraban bastante, no se podían hacer en un año o en dos años, ni tampoco se iban a producir porque el gobierno y la guerrilla firmaran un acuerdo en una mesa de negociación.

Esta declaración de Francisco de Roux, verdadero ideólogo del PDPMM y del laboratorio de paz, es representativa del carácter de la iniciativa y sus finalidades y filosofía para la paz, pero también de las motivaciones políticas de la UE en el proceso y su interés en la región. El laboratorio de paz se instituye como un experimento en el campo de la construcción de la paz en esta región del Magdalena Medio, que había sido durante tanto tiempo un ‘laboratorio de violencia’ y microcosmos del conflicto. Así, se crea el laboratorio de paz en el Magdalena Medio en febrero de 2002, institucionalizado formalmente por la firma de la UE y el gobierno colombiano de un acuerdo especial de financiación.

A pesar de que la concepción del laboratorio de paz fue producto de una negociación directa entre la CDPMM y Bruselas, el Estado fue integrado en el proceso y en el acuerdo final. El Estado colombiano ya tenía una participación en el PDPMM a través del DNP, pero fue asociado de forma más profunda al proceso por iniciativa de la UE. La UE pretendía que se trabajara desde la institucionalidad y exigió una contrapartida estatal de financiación, que el gobierno acabaría por pagar mediante otro crédito del Banco Mundial y un programa que se establecería con el nombre “Paz y Desarrollo” destinado a microproyectos, sobre todo con desplazados internos.

Sin embargo, el rol protagónico en el desarrollo, gestión y coordinación del laboratorio estaba destinado al PDPMM. El convenio entre la UE y el gobierno

colombiano estableció que se delegara la ejecución y coordinación de las actividades del laboratorio de paz y la administración de los proyectos a la CDPMM (CDPMM, 2005, p. 4). A la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) correspondió la tutela de la iniciativa.

El convenio del laboratorio establecía igualmente un periodo de ejecución de ocho años (divididos en una primera fase de tres años, iniciada en febrero del 2002, y una segunda fase de cinco años, iniciada en septiembre del 2005) y una dotación financiera de 42.2 millones de euros, de los cuales la UE financiaba 34 millones y el resto el gobierno colombiano (Maio-Coliche, 2005, p. 37). Asimismo, definía como área de intervención treinta municipios<sup>4</sup> pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander (PDPMM, 2005, p. 6).

## La estructuración del laboratorio de paz: el laboratorio de paz como instrumento del PDPMM

El laboratorio de paz se estructuró sobre la base de la experiencia social, el equipo, los principios y la filosofía de paz del PDPMM. La UE nunca ha sido el arquitecto ni el protagonista principal de la iniciativa. Se volvería por lo tanto una experiencia desprovista de sentido estudiar el laboratorio de paz como estrictamente un instrumento de la cooperación europea. Así, el análisis del laboratorio de paz del Magdalena Medio en cuanto iniciativa de construcción de paz debe pasar necesariamente por en el marco más amplio de todo el proceso social y propuesta conceptual de paz desarrollados por el PDPMM.

El corazón y la fuerza motriz del laboratorio de paz son claramente el PDPMM y la CDPMM. De hecho, como hemos visto en la sección anterior, el laboratorio de paz no fue creado *ex nihilo*. Fue construido sobre la base de un proyecto y un proceso en

---

4 En el sur del departamento de Bolívar: Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Regidor, Río Viejo, Arenal, Tiquisio; en el sur del departamento del Cesar: Aguachica, La Gloria, Gamarra, San Martín, San Alberto. En el departamento de Santander: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra, Bajo Simacota, Bajo Rionegro, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Betulia, Cimitarra, Landázuri, Bolívar, El Peñón; en el departamento de Antioquia: Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare (Red prodepaz, 2008).

marcha en la región del Magdalena Medio –el PDPMM– (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 4), recogiendo su filosofía particular, su equipo, estructuras y experiencia social. El papel de la ayuda de la UE fue principalmente apoyar el proceso y la dinámica ya en marcha en la sociedad civil colombiana (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 3, 8). La UE nunca fue el mentor, ni el ideólogo de la iniciativa (Barreto Henriques, 2009a, 513).

La concepción estratégica del laboratorio de paz, así como su modelo de construcción de paz se basan en el concepto original de PDPMM. Es decir, su diseño, desarrollo y realización son principalmente de esta experiencia previa y más amplia. El proceso se sostiene en el PDPMM y es dinamizado por este. El laboratorio de paz es sobre todo, un apoyo europeo a él, corresponde a una amplificación y profundización del PDPMM (Bayona, 2007, entrevista). Fortaleció proyectos que venían avanzando con el PDPMM y puso en marcha nuevas iniciativas, como el Observatorio de Paz Integral (OPI) y los espacios humanitarios. Profundizó las acciones del PDPMM por la inyección de recursos e imprimió nuevas dinámicas metodológicas y políticas derivadas de la participación de este nuevo actor internacional que es la UE. Hubo un valor agregado del PDPMM con el laboratorio de paz.

Así, el papel de la UE, y especialmente de la Comisión Europea, ha sido el de un guía, un socio, una garantía y un verificador, pero no el de una imposición de términos sobre el territorio (Mojica, 2007, entrevista). El proceso se ha hecho esencialmente de abajo hacia arriba, manteniendo el programa un elevado grado de autonomía y control del proceso y la CDPMM, el liderazgo y ejecución de la iniciativa (Bayona, 2007, entrevista). La involucración de la UE trajo cambios importantes y substanciales a su estructura y metodología e introdujo diversas dinámicas verticales al proceso, que analizaremos más adelante en este capítulo. Sin embargo, la iniciativa, como propuesta y experiencia de construcción de paz, siguió basada en el PDPMM y su filosofía.

Así, en una gran proporción, el laboratorio de paz ha sido un sub-programa o un complemento de un programa más amplio llamado PDPMM. Según el PDPMM (2010) “se denomina Laboratorio de Paz, a la fase adelantada por el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio desde el año 2001, a través de la alianza con la Unión Europea”. Constituye esencialmente la etapa más reciente en el crecimiento del PDPMM; corresponde a su llegada a la madurez y a la edad adulta, después de las etapas iniciales y prospectivas con el diagnóstico participativo y los dos LIL

del Banco Mundial. Constituye una continuación, adaptación y expansión respecto a las fases precedentes. De hecho, el gran despliegue del PDPMM se dio bajo el soporte de la UE (Bertolini, 2007, entrevista).

El laboratorio de paz designa por lo tanto, fundamentalmente, el conjunto de proyectos y procesos desarrollados por el PDPMM bajo la financiación y los procedimientos técnicos de la UE, muchos de los cuales ya se habían iniciado previamente a la institución del laboratorio de paz con el apoyo del PDPMM. Así, el laboratorio de paz corresponde no tanto a un instrumento creado e idealizado por la cooperación europea, sino más bien a un instrumento del PDPMM apoyado en el marco de la cooperación de la UE. El programa y el laboratorio de paz, no siendo indiferenciables, tampoco son perfectamente distintos. Se debe entender el laboratorio esencialmente como una iniciativa de la sociedad civil en diálogo con la UE y sometida al ‘cinturón’ de los procedimientos técnicos de la cooperación comunitaria (Barreto Henriques, 2009b, p. 513).

En las palabras del exdirector de la CDPMM, Libardo Valderrama (2007, entrevista),

Para nosotros el laboratorio es un apoyo al Programa [de Desarrollo y Paz], no es un proyecto. Lo que es válido y subsiste es el Programa. El laboratorio es un apoyo, el PDPMM es un proceso. Es mucho más amplio. Cuando llega el laboratorio ya llevaba el PDPMM siete años. Ya tenía desarrollada toda una estrategia. No hay una separación entre el PDPMM y el laboratorio de paz. La estrategia es una. Hay diferentes apoyos pero la estrategia es la misma. Nunca se trató el laboratorio como ‘haciendo las cosas’ según la UE. El proceso es el PDPMM, con apoyo de la UE. Asimismo, el horizonte temporal del PDPMM sobrepasa el del laboratorio de paz. Se concibe como una lógica a largo plazo, contrariamente al laboratorio que se vio restringido a una duración definida y limitada de financiación por ocho años.

## El concepto de laboratorio de paz

Mucha de la esencia del laboratorio de paz reside en su misma designación. Cuando se piensa en el laboratorio de paz, lo primero que salta a la vista es su

nombre. De hecho, este vehicula un concepto y un mensaje. El término *laboratorio* está etimológicamente asociado a la idea de trabajo. Proviene del latín “*laborare*”, que significa trabajar, laborar. El Diccionario de la Lengua Española de La Real Academia Española (2010) lo define como “lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico” o “realidad en la cual se experimenta o se elabora algo”. En sentido figurado significa un lugar en donde operan grandes transformaciones u operaciones. Alude por lo tanto a una labor por la paz. Sugiere un intento de construir algo nuevo, de exploración, de innovación, y de ensayo y error. Implica la idea de un experimento en el campo de la construcción de la paz, aspecto que, en efecto, hace parte de los objetivos y filosofía del laboratorio de paz.

La autoría de este término es atribuida a Daniel Parfait, embajador de Francia en Colombia entre 2000 y 2004, facilitador en el proceso de paz entre el gobierno nacional de Pastrana y el ELN y unos de los protagonistas por parte de la UE en el proceso de concepción del laboratorio. Parfait (2008, entrevista) explica su opción por el concepto de ‘laboratorio de paz’ de la siguiente forma:

[...] se trataba de cómo se puede producir la paz y llegar a un acuerdo en una región que era una de las más conflictuales del país. Era por lo tanto un verdadero “laboratorio de paz”, porque podría encontrar formulas que pudieran en seguida ser aplicadas en otros contextos, y en otras zonas del país.

De igual modo, Franco Vincenti (2008, entrevista) señala que el concepto de laboratorio emergió como “una cocina donde nosotros vamos a hacer experimentos de ingredientes para saber si metemos más sal, más harina, más de esto, más de lo otro, para ir con algo que sea comestible; como un enfoque experimental de aprendizaje”.

Así, el laboratorio buscaba nuevos y alternativos rumbos hacia la paz y el desarrollo a un nivel local y regional (Barreto Henriques, 2009a, p. 558). Está dirigido esencialmente a explorar novedosas formas de entender y formular la paz (Moncayo, 1999) y desarrollar modelos y enfoques alternativos de paz a nivel local y regional. Se configura como un escenario de búsqueda por encontrar caminos de vida digna y formular propuestas de salida en una escala micro. Es una experiencia piloto y exploratoria que se pretende como un escenario provocativo para construir nuevas relaciones y nuevas transformaciones (Castillo, 2008, entrevista).

No pretende sustituir las negociaciones nacionales con los actores armados, sino servir como un proceso de aprendizaje y una fuente de innovación que demuestre vías y soluciones alternativas para abordar el tema del conflicto y construir la paz a partir de las comunidades locales (De Roux, 2001, p. 4). Como Francisco de Roux (2005, p. 41), primer director de la CDPMM lo expresa: “[tiene en mente] comenzar a construir regionalmente un proceso que muestre que es ya posible en medio del conflicto encontrar caminos alternativos para vivir pacíficamente y con justicia”. Busca mostrar a los actores armados y a la sociedad y nación colombiana en general que hay otros caminos, que hay alternativas a la guerra y que es posible poner en marcha otras salidas para el conflicto (Valderrama, 2007, entrevista).

En esta perspectiva, se plantea como una semilla que busca tener un efecto demostrativo y de difusión. El término laboratorio sugiere una idea de reproducción de una fórmula. Efectivamente, este es uno de los objetivos a que se apunta el laboratorio de paz del Magdalena Medio. Pretende ser una experiencia piloto de construcción de la paz y el desarrollo que se pudiera replicar y reproducir en otras regiones de Colombia (Vargas, 2007), como, de hecho, ha sucedido con la creación de los laboratorios de paz II y III en otras regiones del país.

Se concibe como un proceso plural, amplio, incluyente, en permanente construcción con las comunidades y organizaciones de la región, y sin un modelo predefinido o pre-establecido, aunque con referencias y principios éticos y políticos bien claros y marcados, y una filosofía propia. Busca, por intermedio de un conjunto de actividades que mezclan desarrollo económico, derechos humanos y gobernabilidad, experimentar y evaluar cuáles elementos tienen más impacto sobre el conflicto (Bertolini, 2007, entrevista). Opera como una especie de ‘laboratorio social’, en el cual los pobladores del Magdalena Medio son los investigadores (Moncayo, 1999) y los motores del proceso de transformación del conflicto y construcción colectiva de la paz. Es un proceso que confiere mucha importancia a aspectos como la creatividad e imaginación en la construcción de paz, elementos que Galtung (1996, p. 96) y Lederach consideran fundamentales para la paz.

Asimismo, se pretende que sea un laboratorio a varios niveles, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, tanto en el plano micro, como macro, o sea, no solo como un laboratorio para la región del Magdalena Medio, sino para el país y para los mismos individuos y participantes de sus procesos, y que pretende que

transformen sus comportamientos y formas de pensar en el sentido de alcanzar la meta de la paz.

Se distingue del concepto de programa de desarrollo y paz, fundamentalmente por la participación europea, pero sus objetivos y filosofía son comunes. Únicamente se encuentra entre ambos un ligero matiz en la proporción de énfasis que se atribuye en el al desarrollo, siendo la paz claramente central en el caso del laboratorio, y el énfasis más político que económico.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la iniciativa no es comparable a un laboratorio *strictu sensu*. Este no es un experimento o un ejercicio científico, ni académico. No hay condiciones de acción y experimentación en condiciones precisas y controlables. No puede ser fácilmente reproducido y sus variables no pueden ser aisladas. El escenario no es aséptico. Detrás y en la base del Laboratorio de Paz están personas, vivencias y angustias reales. Es la vida de la gente con que se está experimentando, y no elementos químicos en un laboratorio; es el día a día de personas y comunidades que siguen una causa, su supervivencia, la posibilidad de estar con sus seres queridos y su familia, de trabajar, de vivir con dignidad. Entre sus procesos, y entre los mismos entrevistados de esta investigación, hay gente que fue judicializada, amenazada, victimizada, objeto de violencia, gente que perdió familiares, que fue desplazada, que sufrió privaciones e incluso varias personas que perdieron la vida. No hay laboratorios sociales. La designación de ‘laboratorio de paz’ funciona fundamentalmente como una metáfora para designar un proceso social de búsqueda de la paz.

## Los objetivos y el propósito del laboratorio de paz

La originalidad y peculiaridad del laboratorio de paz del Magdalena Medio, como de los demás laboratorios de paz en Colombia, reside también en gran medida, en la amplitud e integralidad de sus objetivos. El laboratorio de paz tiene un programa ambicioso y osado. Busca construir la paz en sus distintas dimensiones e incidir sobre las distintas facetas de la violencia.

En términos oficiales, el convenio de financiación entre la CE y la República de Colombia firmado en 2002 y el Plan Operativo General (POG) define como objetivo general de esta iniciativa:

Establecer en el Magdalena Medio un laboratorio de paz que a través de la defensa de los derechos humanos básicos de todos los habitantes y el impulso del desarrollo humano sostenible, contribuya significativamente a la convivencia ciudadana, fortalezca el diálogo de paz y muestre caminos eficaces y viables en la superación del conflicto, que puedan aplicarse en otras regiones de Colombia.

Y como objetivo específico:

Consolidar, en un número limitado de municipios, un conjunto estrechamente articulado de procesos participativos de desarrollo sostenible, construcción de la convivencia ciudadana y fortalecimiento institucional, con vista a definir la alternativa socio económica, cultural y política posible en el Magdalena Medio. (CDPMM, 2005, p. 5)

Por encima de todo, el laboratorio es un intento de generar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para la paz e incidir sobre los factores que sostienen y causan el conflicto localmente. El principal objetivo de esta experiencia es, pues, la eliminación de las causas de raíz del conflicto, a un nivel micro, en particular la exclusión social, económica, política y regional, y la inclusión de los territorios y grupos sociales históricamente excluidos en Colombia, como los campesinos, los jóvenes, las mujeres. Francisco De Roux (2001, p. 4), principal ideólogo del PDPMM y del laboratorio de paz, describe la iniciativa como,

[...]procesos regionales de participación y fortalecimiento institucional que realizan en medio del conflicto transformaciones estructurales en el orden económico, social, cultural y político para construir colectivamente las condiciones de una paz basada en la vida con dignidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. [...] Son laboratorios de “paz” porque en ellos se busca transformar las dinámicas estructurales que han generado la violencia y la pobreza.

Sitúa por lo tanto la acción del laboratorio de paz bajo un ámbito y enfoque estructural que procura la construcción de paz sostenible y duradera. Se distingue de otras iniciativas y enfoques en la medida en que busca construir una paz positiva, como se describe en el primer capítulo, o sea, que encierra una dimensión



directa, estructural y cultural. Según De Roux (2001, p. 4), “sin estas transformaciones la paz es solo un discurso de buenas intenciones”. Efectivamente, el laboratorio de paz no pretende ser un espacio humanitario, sino incidir sobre las causas detonantes del conflicto, como la marginalidad, la desigualdad, la exclusión social y la extrema pobreza. Tiene en su horizonte buscar transformaciones estructurales de fondo que posibiliten una paz con dignidad y justicia en el Magdalena Medio y en Colombia.

Asimismo, en la medida que intenta ser un verdadero ‘laboratorio de paz’, busca, por medios participativos, pacíficos e institucionales, desarrollar rutas y modelos alternativos para construir la paz en medio del conflicto a niveles locales y regionales (Barreto Henriques, 2007, p. 8). Pretende ser un nuevo modelo de democracia local, de desarrollo territorial y de construcción del Estado desde lo local, y un medio innovador de articulación de la esfera pública con la sociedad civil (Vincenti, 2008, entrevista); busca demostrar cómo construir una alternativa a la violencia y a la guerra en la región del Magdalena Medio y producir efectos pedagógicos para la transformación del conflicto, que funcionen como una bola de nieve para la paz en Colombia y un faro para la paz en medio del conflicto. En esta medida, pretende fundamentalmente plantear y proyectar una agenda de reformas y transformaciones (Vincenti, 2008, entrevista) y mostrar líneas de acción específicas de cómo enfrentar, desde las regiones, las dinámicas sostenedoras del conflicto y de la violencia que puedan ser reproducibles en otros contextos y escenarios.

Así, el objetivo del laboratorio no es tanto la obtención de la paz y del desarrollo en sí mismos. Ese no es su ámbito, pues es una iniciativa circunscrita territorial y socialmente, sin los recursos económicos y humanos para incidir sobre las estructuras políticas y económicas del país y las macrodinámicas del conflicto; busca generar dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales a nivel regional de paz y desarrollo que demuestren que hay diferentes caminos posibles y alternativas para alcanzar la paz y superar el conflicto (Valderrama, 2007, entrevista). En otras palabras, no pretende macrotransformaciones, sino microtransformaciones que sean replicables en el nivel macro. Cada proyecto del laboratorio de paz busca ser un microescenario de transformación del conflicto y de construcción de la paz. Su propósito es plantear en cada caso una respuesta parcial y local que proyecte horizontes y muestre un camino para la respuesta total y nacional para el conflicto en Colombia (De Roux, 2007, p. 1).

Asimismo, se plantea como una vía y una alternativa política pacífica para Colombia. Como refiere Francisco De Roux (2008, entrevista), “tú necesitas hacer procesos en las regiones, que les muestren a esos muchachos que no necesitamos armas para poder cambiar el país, que es posible hacerlo de otra manera.” De cierta forma el laboratorio de paz es una apuesta por el cambio estructural por la vía reformista y pacifista.

Igualmente, el laboratorio de paz del Magdalena Medio es también una propuesta de desarrollo (Barreto Henriques, 2009b, p. 520). Procura buscar y construir modelos diferentes y alternativos de desarrollo, más participativos, inclusivos y equitativos, que se constituyan como una alternativa al modelo extractivo e inequitativo del Magdalena Medio y que contribuyan de esta forma a incidir sobre los elementos estructurales que sustentan el conflicto en la región.

El laboratorio de paz se sustenta claramente en dos ejes. Sus líneas centrales de acción son la paz y el desarrollo. Eso se hace evidente en el nombre del programa en sí mismo que da vida y gestiona el laboratorio, pero también en sus componentes, sus proyectos y su filosofía. Esencialmente está dirigido a tratar dos asuntos: el alto nivel de violencia que afecta principalmente a la población civil y los altos niveles de pobreza y exclusión (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 27).

Parte del principio de que la construcción de la paz pasa por generar nuevas condiciones de vida, la inclusión para la gente en el campo y por el desarrollo socioeconómico de las comunidades (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 32). En este sentido, se ha preocupado por cómo generar empleo para los campesinos, cómo generar alternativas para los jóvenes y cómo transformar la actividad económica para la paz y el desarrollo humano (De Roux, 2008, entrevista). Por eso, los proyectos productivos desempeñan un rol esencial en los objetivos del laboratorio.

En juego está fundamentalmente quitar fuerza de trabajo y espacio a la guerra (Bertolini, 2007, entrevista). El laboratorio no tiene como objetivo el crecimiento o desarrollo económico *tout court* de la región (De Roux, 2007, p. 2) o la simple generación de empleo. Su acción tiene un propósito eminentemente político. Trata de colocar en marcha proyectos que enfrenten problemas estructurales reales, transformen expresiones del conflicto y demuestren que es posible consolidar un desarrollo humano sostenible como ruta para la paz.

Del mismo modo, los objetivos del laboratorio de paz del Magdalena Medio pasan por crear transformaciones a nivel micro, es decir, tanto en los individuos

como en las comunidades. Busca crear sujetos de paz (Vargas, 2007), que corporicen valores éticos y democráticos, así como las transformaciones deseadas para la región y las condiciones políticas para una solución política del conflicto. Se pretende alfabetizar políticamente a la gente, generar emancipación social, construir ciudadanía, hacer evolucionar los imaginarios de la población y empoderar a los pobladores (Katz, 2008, entrevista). En gran medida se pretende construir lo que Lederach designa como una ‘circunscripción de paz’, así como desarrollar una cultura de paz en la región.

El laboratorio de paz del Magdalena Medio, sustentado en la concepción intelectual y la filosofía del PDPMM, es una iniciativa con un cariz fuertemente utópico y horizontes largos y desafiantes. La utopía del laboratorio es mostrar que otro modelo de paz y desarrollo es posible, que los cambios estructurales son viables y que hay caminos alternativos para concebir la vida, para estructurar económicamente y culturalmente el territorio sin exclusión, miseria y miedo.

Sin embargo, es en cierto sentido una utopía en marcha y en la práctica, no una quimera perdida en el mundo de las ideas; es una utopía que tiene planeamiento y marco lógico y que se estructura y materializa en proyectos y procesos precisos (Vargas, 2007); es una utopía envuelta en el sudor del trabajo de base por la paz protagonizado por los pobladores y organizaciones en las veredas del Magdalena Medio y reflejada en el espíritu de misión del equipo de la CDPMM.

## La filosofía del laboratorio de paz y del PDPMM

La filosofía de paz del laboratorio de paz del Magdalena Medio se basa en los principios políticos desarrollados por el PDPMM en su proceso social y en la concepción intelectual del padre Francisco de Roux, su principal ideólogo.

Esta filosofía no sigue un modelo abstracto específico o un marco conceptual totalmente definido o explícito. Se ha construido conceptual y metodológicamente “en la marcha” (Briceño, 2008, entrevista), a partir de unas nociones diversas, pero con referentes e influencias muy marcadas, que se podrían sintetizar en cinco grandes elementos: el énfasis en la necesidad de la construcción de la paz desde las

regiones, una asociación entre paz y desarrollo, una metodología participativa, una influencia religiosa y una concepción amplia de la paz.

## La construcción de la paz desde las regiones

El primer elemento que resalta de la filosofía del laboratorio de paz es el énfasis en el elemento territorial en la transformación del conflicto y en la necesidad de la construcción de la paz desde las regiones. El laboratorio de paz parte de la caracterización de Colombia como ‘un país de regiones’, heterogéneo, multicultural y multiétnico, y del supuesto teórico según el cual el Estado-nación está aún en construcción. La filosofía de paz del laboratorio, heredada del PDPMM, parte de la asunción de esta realidad, y de la perspectiva que la construcción de la paz tiene que hacerse desde la diversidad de las regiones, con un enfoque territorial y a partir de las comunidades (PNUD, 2011). Para el PDPMM, en un país como Colombia, en donde el conflicto tiene un rostro diferente en cada región, y en donde la exclusión regional se evidencia como una de las causas estructurales del conflicto, es esencial que la construcción de la paz sea descentralizada y pase por el nivel micro, por la diversidad de las regiones y de las veredas.

Esta es una discusión que nos remite al capítulo IV, en el cual buscamos analizar en qué medida la exclusión regional se evidencia como una causa estructural y raíz del conflicto armado en Colombia. Como se señaló, hay factores y procesos históricos que han propiciado dinámicas regionalmente diferenciadas, una presencia desigual del Estado, una diferenciación espacial de las violencias y fuertes identidades regionales. Del foso entre las ‘dos Colombias’ emergió y se alimentó el conflicto armado, de la exclusión regional se han nutrido las dinámicas de la violencia.

La acción de base del laboratorio parte en gran medida de esta lectura y de la asunción de esta realidad. Este énfasis regional y lectura histórica de Colombia y del conflicto son notorios en la perspectiva planteada por Francisco de Roux (2001, p. 2):

La guerra se da en las zonas campesinas de colonización y de precariedad del Estado y sus instituciones. [...] En las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Pereira etc.) el ambiente es de convivencia ciudadana

y de presencia institucional, en una vida cotidiana dentro de parámetros de orden normal esporádicamente perturbados por una bomba de proporciones pequeñas, por un grupo de desplazados que llegan a buscar refugio, o por las noticias de secuestros y masacres ocurridas en el campo. Colombia es el único país de América que entró en el siglo XXI sin haber resuelto el problema de la unidad nacional y sin haber conformado un Estado de Derecho aceptado serenamente por todos sus ciudadanos y ciudadanas. La solución a este drama social no es fácil en un territorio comparativamente rico por sus valles fértiles a diversos niveles sobre el mar [...], y por una composición étnica y social que divide al país en numerosas regiones típicas (antioqueños, costeños, santandereanos, caucanos, cundi-boyacenses, tolimeses, negros, indios, etc.) que no han podido ser unificados en el régimen centralista que ha resultado artificial.

En las palabras del sacerdote emergen claramente las ‘dos Colombias’ que atraviesan el conflicto armado y en qué medida la violencia armada se circunscribe, y emerge sociológicamente, sobre todo de esta otra Colombia, en la cual la exclusión regional, que asume simultáneamente una dimensión política y socio-económica, configura un escenario propiciador y alimentador del conflicto.

La filosofía y el propósito del PDPMM, que se extendió a los diversos laboratorios de Ppz y a los PDP que crecieron en el país, es, de cierta forma, reconciliar las ‘dos Colombias’, la Colombia de la carrera séptima de Bogotá y de los grandes centros urbanos, con la Colombia excluida, de los territorios “en donde la menor manifestación del Estado, se encuentra a varios días de camino, ya sea por río o a caballo” (González et al., 2003, pp. 218-219); busca aproximar las veredas del Magdalena Medio y la totalidad del territorio nacional a la institucionalidad, al Estado de derecho, y al desarrollo; traer la democracia y una cultura democrática y ciudadana a las veredas más remotas, proveer servicios públicos; ayudar a llenar el profundo vacío institucional; repartir el bienestar y los dividendos del desarrollo regional entre todos sin excepciones; disminuir el foso centro-periferia; ayudar a superar las fronteras y periferias geográficas, políticas, sociales y económicas. En cierta medida, es una forma de construcción del Estado y de la nación y una propuesta regional de desarrollo humano integral y sostenible como medio para la paz.

De la misma manera, este enfoque en lo local y lo regional del PDPMM se comprende no solo con la identificación de la exclusión regional como una causa raíz del conflicto, sino con el tomar en consideración la misma dinámica regionalmente diferenciada del conflicto armado en Colombia. De hecho, el macroconflicto nacional se compone de distintos conflictos a nivel micro. El conflicto armado es desigual y territorializado en sus características y manifestaciones. Cada región desarrolla sus especificidades en términos del conflicto, así como hay expresiones regionalmente diferenciadas del conflicto. Como afirma el historiador colombiano Fernán González et al., (2003, p. 197),

[...] la geografía de la violencia no cubre homogéneamente ni con igual intensidad el territorio de Colombia. Por el contrario, la presencia de la confrontación armada es altamente diferenciada de acuerdo con la dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social, como en su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global, su relación con el Estado y el régimen político. Y, consiguientemente con esa dinámica regional, la geografía del conflicto está relacionada con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en los distintos territorios.

De aquí que el conflicto colombiano tiene diferente facetas en cada región; se establecen diferentes relaciones entre el ejército, las guerrillas, los paramilitares, la población, los terratenientes y los narcotraficantes (McDonald, 1997, p. 7). La guerra irregular no se construye de manera uniforme. Los civiles viven experiencias radicalmente distintas. Los actores armados adoptan estrategias diferentes; el reclutamiento, el desplazamiento y la resistencia ocurren en contextos diferenciados; la guerra son muchas guerras. El conflicto en Colombia es multipolar y fuertemente atomizado (Chernick, 2008, p. 113). No solo la realidad del conflicto en las varias regiones es diferente, sino a veces en los diversos municipios de una misma región y en las veredas de un mismo municipio.

Hay una dinámica del conflicto a nivel nacional que se expresa en una lucha por corredores estratégicos; una dinámica regional que pasa por el enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares por el control de los recursos de una región, como la coca; y una dinámica local que refleja las luchas en las subregiones y sublocalidades (González, 2004, p. 7). Se evidencia una microterritorialidad del

conflicto. Es común en el Magdalena Medio que una vereda esté en manos de un actor armado, y la vereda de al lado en las de otro, o que las cabeceras del municipio estén bajo el dominio de los paramilitares y el ‘monte’ –las veredas– bajo el de la guerrilla (Pécaut, 2004, p. 31).

De igual manera, la dimensión local y regional de los actores armados colombianos es muy marcada. Las FARC, aunque sean eminentemente un ejército nacional, tiene orígenes localistas. El ELN asume una dinámica grandemente descentralizada y territorializada, patente por ejemplo en el caso de que, en esta guerrilla, los liderazgos son regionales, en la medida en que un comandante del ELN en una región no puede asumir el comando en otra región del país (Celis, 2008, entrevista); y el paramilitarismo siempre ha sido un fenómeno de cariz local y societal, expresión de élites locales, con una federación muy floja (Pécaut, 2004, p. 33).

De esta forma, tomando en consideración la naturaleza de Colombia y su conflicto, el laboratorio, siguiendo la concepción del PDPMM, muestra que es necesaria una especie de descentralización en la construcción de la paz (Barreto Henriques, 2009a, p. 559). Asume que el nivel local y regional son sumamente importantes para la construcción de un país en paz, especialmente en un lugar como Colombia. La perspectiva del laboratorio de paz es que la transformación del conflicto y la construcción de la paz en Colombia deben pasar necesariamente también por el nivel micro, por la diversidad de las regiones, de los municipios y de las veredas.

No pone en juego la necesidad de soluciones macro a nivel nacional y acuerdos entre los actores enfrentados en guerra, sino que las políticas macro, y específicamente, las políticas de paz, tengan en consideración las especificidades de las regiones (PNUD, 2011). De hecho, una política o un proceso de paz en Colombia que no tenga en cuenta la variable territorial y las particularidades regionales está condenada a fracasar o a obtener impactos mitigados. Para que sea sostenible y duradera no puede basarse en un enfoque estrictamente nacional. Necesita que encierre escalas y enfoques espaciales distintos, y agendas locales y regionales de paz. Pasa necesariamente por el involucramiento de las regiones, la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada a partir de los territorios, de forma que pueda desactivar las causas y expresiones violentas del conflicto, y enraizar dinámicas de resolución pacífica de conflictos, de cultura de paz y de inclusión política, social, económica y regional (Patiño, 2007).

El laboratorio es así fundamentalmente un modelo de intervención territorial, de construcción de la paz desde las dinámicas de la región y a partir de la participación de las comunidades y actores del territorio. Configura un modelo regional de construcción de paz. Como De Roux (2002, pp. 272-273) lo señala,

[...] tengo la convicción de que la paz en Colombia se construye desde las regiones y no desde Bogotá. Tampoco se construye solo como resultado del diálogo central entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, aunque desde luego es necesario ese paso. La paz verdadera se construirá a partir de procesos regionales muy hondos, porque Colombia es un territorio sin nación.

Esta perspectiva es subrayada igualmente por el padre Rafael Castillo (2008, entrevista), director técnico del laboratorio de paz de Montes de María, que afirma que

[...] este país no se construye desde el síndrome de la séptima de Bogotá, este país se construye desde las regiones. Colombia es un país de regiones; separar para comprender, no es dividir; el Caribe no es el Meta, el Valle del Cauca no es el Oriente Antioqueño; en cada pozo, el agua es diferente y ya vimos que es un fracaso pretender construir la paz desde el gobierno y los actores armados. Esto podrá funcionar en la medida en que a nivel territorial y regional empecemos a construir con el sabor propio de cada territorio, qué es lo justo, lo bueno, lo digno, lo conveniente y pertinente para cada territorio; las cosas en Colombia han andado mal porque siempre hay otros que deciden por uno y no le preguntan a uno que es lo que quiere; y un programa de desarrollo y paz es la oportunidad para que la gente diga lo que siente y lo que quiere ser.

La región es por lo tanto la unidad por excelencia de trabajo del PDPMM y de los laboratorios. Busca generar una construcción social de región que sea más apropiada al sentido de la vida de la gente y fomentar un arraigo más profundo al territorio y la identidad del Magdalena Medio, región constituida por recodos de cuatro departamentos y que se fragmenta entre estos distintos polos.

Este es uno de los grandes retos del laboratorio de paz del Magdalena Medio y de los laboratorios y PDP en Colombia en general. Su utopía es construir una nación en paz a través de un desarrollo regional y un enfoque integral sobre las



regiones, que mejore las condiciones de vida de la población y cree las condiciones sociales, económicas y políticas para la paz a nivel micro. Se pretende construir un proyecto colectivo de región que permita el reconocimiento de la misma como parte de la nación colombiana (Katz, 2004, p. 32).

Por último, esta filosofía y metodología de construcción de paz desde las regiones encierra en el caso del Magdalena Medio un último elemento. Tiene enmarcado en su filosofía y horizonte desarrollar gestiones, diálogos y acuerdos de paz con los actores armados a un nivel local que permitan mejorar y oxigenar las condiciones de vida y la seguridad de las poblaciones en estos territorios. Su punto de vista es que los procesos nacionales de paz no constituyen un obstáculo para que acuerdos regionales, y alguna forma de interlocución o gestión, sean alcanzados entre los actores armados, las administraciones locales y la sociedad civil (Bayona, 2007, entrevista).

Ni los paramilitares, ni las guerrillas conforman un bloque totalmente unificado. Manifiestan diferencias substanciales entre frentes y expresiones regionales distintas (Bayona, 2007, entrevista). En esta medida, como enuncia el presidente de Vallenpaz,

[...] es más fácil hacer la paz a nivel local que a nivel nacional. Cuando se plantea a una comunidad donde hay distintos actores armados (guerrillas, paramilitares, Ejército, campesinos) propuestas concretas para el mejoramiento de las condiciones de vida es más fácil ponerse de acuerdo. (citado por Saavedra y Ojeda, 2006, p. 34)

Además, como señala Manuel Bayona (2007, entrevista), ex subdirector de la CDPMM, “la gente conoce sus dirigentes [de los grupos armados]. Son muchachos de la zona”.

## La asociación de paz y desarrollo

Otro elemento estructurante de la filosofía del laboratorio de paz que se apoya directamente en la concepción del PDPMM es su énfasis en el desarrollo como medio para la paz. El laboratorio parte de una concepción de paz y una lectura política del conflicto colombiano que define elementos como la pobreza, la inequidad y la exclusión socio- económica como causas estructurales del conflicto y de la violencia (Barreto Henriques, 2009a, p. 519). Para el PDPMM, el conflicto nació, en una gran proporción, debido al modelo de desarrollo puesto en práctica en Colombia, y en

particular en el Magdalena Medio, que es esencialmente un modelo extractivo y excluyente, generador de pobreza y de inequidad (Vargas, 2007), aún si la región es rica en recursos y Colombia es un país de ingresos medios. La pregunta original que planteaba el PDPMM se relacionaba con la inequidad en la región.

El laboratorio parte de la perspectiva teórica, debatible desde el punto de vista académico y político, según la cual estos dos factores están interrelacionados y hay un nexo entre paz y desarrollo y una relación entre la pobreza, la inequidad y la violencia. Es una concepción y propósito que no separa el desarrollo de la paz. Busca tener una perspectiva integral que los asume como dos pilares indisociables que sostienen y hacen equilibrar la paz sostenible.

La relación entre estos factores fue analizada y discutida en más detalle en el capítulo IV, en el cual se identificó la exclusión socioeconómica como una causa estructural del conflicto colombiano y se defendió que hay una correlación entre pobreza y conflicto (Gutiérrez, 2001, p. 55), aunque no automática, pero sí mediada por factores como la desigualdad en la distribución de la riqueza y del poder político, la madurez y funcionalidad de la instituciones y del régimen político, y el grado de prestación de bienes públicos (Galindo et al, 2009, p. 322), elementos que en el caso colombiano configuran un escenario propenso a la conflictividad.

La perspectiva teórica adoptada por el laboratorio se acerca a estos planteamientos. Sostiene que el hecho de que Colombia y específicamente el Magdalena Medio sean territorios con altos niveles de pobreza y de inequidad los ha hecho más propensos a la violencia (Gutiérrez, 2001, p. 57). Por lo tanto, prescribe el desarrollo incluyente y sostenible como medio y receta para la paz. Es claramente un programa de desarrollo y paz, como es evidente en la designación del PDPMM, y de desarrollo como medio para la paz. Se sostiene y se estructura sobre estos dos ejes, líneas conceptuales y vectores de trabajo.

Para esta lectura y perspectiva contribuyó en gran medida el rol y el liderazgo de Francisco de Roux. Como líder y principal ideólogo del PDPMM, De Roux ha sido un vehículo de influencias teóricas, tanto en el campo económico, como ético y político. De hecho, esta personalidad es un sacerdote jesuita, pero también un renombrado economista y académico colombiano, con formación superior en ciencias económicas en la London School of Economics y la Sorbonne, factor que trajo los debates y la teoría económica para la praxis y la concepción intelectual del PDPMM y del laboratorio.

La relación dialéctica e indisociabilidad entre la paz y el desarrollo se expresa por De Roux (2008, entrevista) de esta forma:

[...] nosotros efectivamente llamamos a estos programas, programas de desarrollo y paz, porque pensamos que se trata de hacer los cambios estructurales sin los cuales la paz no es posible; nosotros creemos que la paz que usted consiga, depende del tipo de desarrollo que haga en un territorio; y entendiendo por desarrollo no el crecimiento económico, si no la participación ciudadana, la protección de la vida humana, de los derechos humanos, el poner al Estado el servicio de la dignidad humana, el desarrollo y respecto del medio ambiente y la sostenibilidad institucional y medio ambiental en los procesos económicos y el centrar la economía en la calidad de vida de los pobladores, una calidad de vida sin exclusiones; y en la medida en que avances en eso vas a poder tener paz en un territorio. [...] Entonces para nosotros articular el desarrollo por la paz y hacer que la paz sea una variable dependiente del desarrollo, es muy importante.

Así, el PDPMM plantea una relación dialéctica entre paz y desarrollo. Según el PDPMM, sin desarrollo no es posible la paz y de la manera como se haga el desarrollo, se logrará la paz. Si un desarrollo es excluyente, no se tendrá paz, sino pacificación y no una paz con dignidad (Briceño, 2008, entrevista). En ese orden de ideas, como se ha subrayado anteriormente, el laboratorio de paz fue concebido también como un instrumento de desarrollo. Pretende propiciar modelos y caminos socioeconómicos distintos, más inclusivos y equitativos, y que fomenten un desarrollo humano y sostenible, de forma que incida sobre la causa-raíz del conflicto que se manifiesta de forma tan aguda en la región.

Por lo tanto, hay un marcado énfasis en el laboratorio de paz en la apuesta por proyectos de índole económica y fundamentalmente en el apoyo a la economía campesina. Los proyectos desarrollados por el laboratorio de paz tienen en la mira lograr formas de integrar socioeconómicamente a los grupos desprotegidos y comunidades pobres, por intermedio de su entrada y aprovechamiento del potencial del mercado. En cuanto economista, Francisco De Roux definía la marginación como la imposibilidad de entrar al mercado (Angulo, 2007, entrevista a padre jesuita, exdirector del CINEP).

Sin embargo, la intencionalidad es manifiestamente política. El énfasis no está en la reducción de la pobreza, ni en sacar beneficios económicos, sino en

el problema del conflicto y de la violencia y en generar condiciones de paz y convivencia. La centralidad y horizonte es la paz. Se pretende fundamentalmente que los procesos de desarrollo sean un factor que saque espacio y pobladores del conflicto. Si hay una intervención desde lo económico es porque las condiciones de desarrollo son esenciales a una vida digna, sin la cual no puede haber una paz estructural y positiva. Como plantea Libardo Valderrama, (2007, entrevista), “si ves que tu familia se muere de hambre, que se hace injusticia contigo, no puedes sentirte en paz”.

La perspectiva del laboratorio de paz es que “cuando se tiene un cierto nivel de desarrollo es más difícil involucrarse en asuntos de guerra y, además, se tienen más elementos para enfrentar a los actores armados” (citado por Saavedra y Ojeda, 2006, p. 26). Por consiguiente, crear desarrollo, empleo y alternativas para los excluidos en la región es, en una gran proporción, sacar jóvenes de los grupos armados. Si consideramos que la pobreza es una causa estructural del conflicto colombiano, producir desarrollo es producir externalidades de paz.

La asociación de la dimensión económica con la construcción de paz desde la base constituye de hecho uno de los elementos originales de la filosofía y metodología de paz del PDPMM y del laboratorio. Es algo que no ha sido muy común en la historia de la movilización social para la paz en Colombia, ni en los enfoques de construcción de paz desde la base. Si por un lado han sido desarrolladas, de forma autónoma, iniciativas sobre la base de la resistencia civil, del pacifismo y procesos de paz, por otro se han dado esfuerzos para la mejoría de las condiciones de vida de la población, en el sentido de reducir los incentivos a la asunción de comportamientos depredatorios y violentos. Ambos enfoques, desarrollados de forma aislada y estanca, han, en gran medida, fracasado (Restrepo, 2008, entrevista).

En el PDPMM y el laboratorio de paz estas dos dimensiones surgen por la primera vez juntas. El PDPMM es un espacio y un proceso en donde ambas se encuentran. Es “una intervención dual” (Restrepo, 2008, entrevista), como queda claro y transparente en la designación ‘Programa de Desarrollo y Paz’. El PDPMM fue la primera iniciativa que preconizó y habló de desarrollo en el medio del conflicto (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 57), de “desarrollo en caliente”, como lo describe De Roux (Angulo, 2007, entrevista). Emerge como una propuesta y una iniciativa que se propone construir al tiempo desarrollo y paz de forma integral, como una alternativa de legalidad a la depredación de recursos y la violencia, lo que imprime

una dinámica integral, multidimensional y holística al laboratorio de paz en la persecución de la paz.

En el laboratorio de paz y en el PDPMM hubo una convergencia entre estas dos nociones y vías. El desarrollo se instituye como un incentivo y un medio para la construcción de la paz; pero, concomitantemente, subraya que el proceso tiene que ir de la mano con reformas institucionales que resuelvan las disputas alrededor de la propiedad y los recursos naturales, en una región con una historia de luchas sindicales y por la propiedad de la tierra (Restrepo, 2008, entrevista). Hay una originalidad en la visión y estrategia de integralidad del laboratorio de paz del Magdalena Medio. Es una intervención *sui generis* que permite integrar la población civil en espacios y procesos económicos, pero que al tiempo también reduce la inseguridad y abre horizontes de paz, pues al generar ingresos y mejorar las condiciones de desarrollo se generan oportunidades y capacidades para auto-determinarse, tener mejor participación política, y se producen sensaciones de bienestar, así como se proporciona un desincentivo para la asunción de riesgos criminales y violentos (Restrepo, 2008, entrevista).

Para el PDPMM se tenía que ir más allá que las 'palomas de paz' y las buenas intenciones de los discursos pacifistas y se necesitaba mejorar las condiciones de vida de la población y transformar la región estructuralmente. Según De Roux (2008, entrevista), había que desarrollar proyectos y procesos que desarrollaran las comunidades, que no dejaran que los campesinos se desplazaran, y que invitaran a que se fortalecieran las comunidades y pobladores y que resistieran juntos. En esta medida, la filosofía de paz del PDPMM aparece amarrada a un llamativo discurso de mejoría de los ingresos y condiciones de vida que ha seducido a las comunidades de la región.

También, ha ubicado la construcción de la paz en un campo en el cual habían emergido profundos conflictos sociales en el Magdalena Medio: el económico. En esta medida, el laboratorio configura un enfoque y modelo alternativo de construcción de paz, no solo por que el hecho de que sea construido a partir de la sociedad civil, sino que pudiéndolo construir desde la sociedad civil, puede verdaderamente transformar conflictos en una región pautada por choques económicos profundos entre obreros, campesinos y las élites económicas regionales (Restrepo, 2008, entrevista).

Así, el laboratorio encierra un carácter verdaderamente valioso en cuanto propuesta de paz alternativa, pues involucra a la sociedad civil en la transformación del

conflicto mismo. Su carácter alternativo no es solamente por la participación de la sociedad civil *per se*, ni por privilegiar un enfoque '*bottom-up*' en vez de '*top-down*', por valoraciones políticas, sino por el hecho que es una transformación del conflicto desde abajo, desde los enclaves del Magdalena Medio que alimentan y sostienen el conflicto armado. Es valioso en la medida que busca impactar e incidir directamente sobre los principales factores generadores de conflicto en la región (Restrepo, 2008, entrevista).

## La metodología participativa

Por último, la filosofía del laboratorio de paz se sostiene en una metodología participativa. La fórmula del laboratorio, desarrollada y apoyada por el PDPMM, está basada en la gente. Se basa en la convicción que la sociedad civil puede y debe tener un rol en la construcción de la paz en Colombia y que la paz, para que sea sostenible, tiene que ser más que acuerdos formales entre los líderes de la insurgencia y del Estado.

Consecuente con su filosofía, el laboratorio propone lanzar, fomentar y desarrollar procesos participativos con los sectores de la población históricamente marginados, como los jóvenes, las mujeres, los pescadores, los mineros y sobre todo, los campesinos. Intenta construir plataformas de actores sociales con los sectores excluidos de la población, aspirando a dar voz a los que no tienen voz, y alentándolos y ayudándolos a construir propuestas sociales, económicas y políticas alternativas. Considera que estos son no solo las principales víctimas de la violencia en Colombia, sino también actores esenciales para la construcción de un país en paz (Barreto Henriques, 2009a, p. 559).

De hecho, el laboratorio ha funcionado esencialmente como microplataformas de inclusión del campesinado y de otros actores sociales en términos socio-económicos, productivos y políticos. De cierta forma, lo que pretende el laboratorio es ser un instrumento de construcción de una democracia directa, y reconfigurar y democratizar la cultura política del país, de forma que se vuelva más incluyente y participativa (Barreto Henriques, 2009a). Se propone hacer que los ciudadanos se vean a sí mismos como amos y actores de su propia suerte, promover el desarrollo humano a través de una economía controlada por la población y alcanzar la paz a

través de la reorganización de la vida política y del control ciudadano de los recursos públicos (Rudqvist y Van Sluys, 2005, pp. 4-5).

Esta metodología participativa y colectiva se soporta en los 'núcleos de pobladores'. Estos constituyen espacios populares de participación y ejercicios de planeación participativa, en los cuales organizaciones locales y pobladores de un municipio formulan diagnósticos regionales y establecen propuestas de paz y desarrollo, expresadas en las propuestas municipales, subregionales o regionales (Katz, 2004, p. 32). Definen cómo ven los pobladores a la región, cuáles son sus necesidades, qué quiere la población para la región (Mojica, 2007, entrevista). Los núcleos de pobladores constituyen la base nuclear del PDPMM y su fuerza motriz. Representan una herramienta fundamental de organización y participación ciudadana, a través de la cual se eligen proyectos estratégicos para la vida social y económica de los municipios, se priorizan iniciativas comunitarias, se canalizan recursos y se establece la interacción y articulación con las administraciones locales (PDPMM, 2005).

Se pretenden no como una organización más en el municipio, sino como la posibilidad de articular las organizaciones y dinámicas sociales que existen en un municipio para pensar el desarrollo municipal, para pensar su propio desarrollo (Barajas, 2008, entrevista a coordinador de la línea 2 del PDPMM). De esta forma los pobladores se vuelven actores activos en el desarrollo de su región (Moreno, 2008, p. 104). Es una metodología eminentemente participativa, que pasa por la intervención de los mismos pobladores en los asuntos públicos y por su propia identificación de los problemas y soluciones (Moncayo, 1999). El punto de partida de la intervención del laboratorio son las ideas, sueños, esperanzas, expectativas y reivindicaciones de sus pobladores para abordar los problemas que enfrentan, las cuales a través del apoyo técnico, logístico, administrativo y financiero del laboratorio y concretamente, de la CDPMM, se convierten en proyectos. Es un proceso eminentemente horizontal, construido desde abajo hacia arriba con un elevado grado de participación (Katz, 2004, p. 33). Incorpora en esta medida el concepto de democracia participativa, entendido como una noción integral de la democracia que integra no solo la realización de elecciones, sino una ciudadanía política, civil y social, que pasa por el ejercicio del poder político, el usufructo de las libertades individuales y el derecho al bienestar socioeconómico.

Parte del principio y de la convicción que la inclusión política y la construcción de la democracia en lo local contribuyen para desbloquear los espacios de la violencia

y favorecer la resolución pacífica de los conflictos (PNUD, 2011). Tiene como fundamento y planeamiento la lógica de que para abordar la violencia y la pobreza hay que integrar la población en la concepción de sus propios proyectos de desarrollo y en las políticas públicas de forma directa y sin intermediación o tutelaje de los partidos políticos, dominados por lógicas clientelistas y corruptas (Molano, 2009, p. 49). Entiende la participación como parte del proceso de desarrollo y de construcción de paz (García y Sarmiento, 2002, p. 12) y como antídoto para construir esperanza en medio de la barbarie y la violencia.

Por consiguiente, este proceso busca no solamente empoderar y dar expresión a grupos invisibilizados y marginalizados, sino también construir un actor social y político (Valderrama, 2007, entrevista), uno que reconozca y defienda sus derechos, que es favorecedor de la paz y que toma parte en la vida pública con una nueva ética, una cultura democrática, una conciencia crítica y una capacidad de participación.

Como lo ha afirmado el padre De Roux (2001), un laboratorio de paz no es una billetera para financiar proyectos de desarrollo. Sino que es un proceso social, económico y político: busca construir colectivamente una nueva sociedad. La visión que sustenta el laboratorio de paz es básicamente la creación de nuevas formas de relación humana a través de la perspectiva de no violencia, diálogo, resistencia civil y participación ciudadana. La lógica de intervención tiene la participación como eje central. Busca una verdadera ciudadanía activa y el empoderamiento de las comunidades como germen de la paz sostenible.

Esta filosofía y metodología participativa se afirma y se expresa en el principio del PDPMM “el Magdalena Medio lo construimos entre todos y todas.” (PDPMM, 2007). Para el PDPMM la paz es una construcción colectiva. Todos los actores sociales, independientemente de su condición y motivaciones, desde la sociedad civil a los actores armados, desde los campesinos al Estado, desde la guerrilla a la contrainsurgencia, son necesariamente actores de construcción de paz.

Francisco De Roux (2002, p. 17) explica esta necesidad y filosofía de la siguiente forma:

Tenemos que construir [la paz] con todos nuestros políticos corruptos, que han hecho ganadería extensiva expulsando a los campesinos; tenemos que construir con nuestros pescadores, con nuestros obreros, con los empleados de Ecopetrol, con las mujeres de este territorio que tienen tanto entusiasmo para enfrentar la violencia, con los



muchachos que se metieron en la guerrilla, con los que se metieron de paras, con los jóvenes ‘raspachines’ que siembran la coca, ¡con todos! Es importantísimo tener esta actitud. Por eso el esfuerzo no puede ser para excluir gente de esta construcción colectiva. Todos juntos tenemos que construir esto y para lograrlo tenemos que cambiar. Nuestros políticos tienen que dejar la corrupción, los guerrilleros y paramilitares tienen que dejar las armas, la extorsión, el secuestro, los ganaderos tienen que comprender que la tierra tienen que compartirla con el campesino y por su supuesto todos tenemos que comenzar con los que tradicionalmente hemos excluido y hemos limitado en posibilidades de expresar su dignidad.

Corresponde a una determinada concepción de paz y de desarrollo de tipo incluyente y humanista, en los cuales los mismos actores sociales y las comunidades asumen las riendas del proceso de construcción de la paz. Para el PDPMM “el desarrollo es la gente”, como proclama otro de sus principios (PDPMM, 2007). La paz y el desarrollo o se construyen con todos o no pasan de una hazaña que fácilmente se puede esfumar. El proceso se centra en la participación y ‘empoderamiento de los pobladores y pobladoras’.

El laboratorio de paz defiende que la paz “no nace por una oferta o petición del gobierno” (De Roux, 2002, p. 17) y no debe ser manejada exclusivamente desde la centralidad del gobierno. Representa un interés y bien colectivo, lo que implica la participación amplia de la población (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 34). Ve a los actores sociales como protagonistas fundamentales de la construcción de paz y argumenta que los civiles no deben ser tratados como actores pasivos o invisibles. Como señala Ubencil Duque (2008, entrevista), actual director de la CDPMM, y figura con una presencia fuerte entre la población,

[...] el gran reto nuestro es cómo ponemos un grito con fuerza que la paz solo es posible en la medida que el sujeto de la paz sea el pueblo y que el gobierno y quienes están en armas tengas que ser sometidos a la exigencia del pueblo para avanzar en esa perspectiva de paz duradera.

Corresponde a una construcción de la paz desde abajo. El proyecto concibe la paz no como un simple tema de élites, ni como un resultado de negociaciones de paz entre partes contendientes. Los procesos sociales e iniciativas promovidas por el PDPMM han sido espacios abiertos a todos los sectores sociales y políticos del

Magdalena Medio, al buscar trabajar con todos en la región, independientemente de su *background* y filiación política, lo que llevó a que, en algunos casos, a las reuniones y encuentros de base del laboratorio hayan asistido actores armados, sea de forma declarada o incógnita.

Sin embargo, toca subrayar que esta metodología participativa desarrollada por el PDPMM, existente en los núcleos de pobladores, sufrió una distorsión y erosión con el establecimiento del laboratorio de paz, hecho al cual nos referiremos más adelante en este capítulo.

## La influencia filosófica religiosa en el laboratorio

El PDPMM y el laboratorio de paz del Magdalena Medio no son una iniciativa netamente religiosa, ni una propuesta de credo. Son una experiencia de la sociedad civil en donde la Iglesia Católica participa, a través fundamentalmente de CINEP y de la Diócesis de Barrancabermeja, pero con gran presencia de miembros laicos y en interacción con otras organizaciones sociales y con el Estado. Se basan en un soporte ideológico humanista amplio, que toma elementos filosóficos de distintas corrientes que se centran en la dignidad humana y los derechos humanos como eje transversal (Soto, 2007, entrevista). Trabajan por una ética pública, más que por una ética religiosa y por el bienestar de la población independientemente de su confesión (De Roux, 2008, entrevista).

No obstante, en el laboratorio de paz del Magdalena Medio, como en otros laboratorios y PDP en otras regiones de Colombia, la Iglesia asume un rol vital y figura como el principal protagonista de la iniciativa. Hay una fuerte influencia e inspiración filosófica cristiana sobre el laboratorio de paz del Magdalena Medio, por la presencia y participación del CINEP, la Diócesis de Barrancabermeja, la Pastoral Social y de varios sacerdotes, sobre todo jesuitas, tanto en los procesos de base, como en la misma dirección de la CDPMM.

La filosofía de paz del laboratorio es marcada y permeada por una visión cristiana progresista de la sociedad y del desarrollo y en particular, por los conceptos y visiones de la doctrina social de la Iglesia, de la teología de la liberación y del imaginario colectivo de los jesuitas (Soto, 2007, entrevista). No se puede entender la filosofía de paz del laboratorio sin tener en cuenta la influencia religiosa en la iniciativa.

Francisco De Roux se perfila como el principal ideólogo de las iniciativas, y en esta medida, el PDPMM y el Laboratorio han sido permeados por sus mismas influencias filosóficas y conceptuales, en cuanto sacerdote jesuita. El pensamiento, influencias y escritos teóricos de Francisco de Roux en cuanto director de la CDPMM estructuran en gran medida conceptualmente la iniciativa y configuran el marco teórico y la doctrina de paz del PDPMM (Briceño, 2008, entrevista; García-Durán, 2008, entrevista).

Ya nos hemos referido a su rol y a su visión en cuanto economista, aquí nos referiremos a sus concepciones como sacerdote jesuita.

En primer lugar, se debe señalar que los actores religiosos que componen el PDPMM (como Francisco de Roux, Monseñor Jaime Prieto, exobispo de Barrancabermeja, la diócesis de Barrancabermeja y CINEP) corresponden a una Iglesia muy particular. Pertenecen a un sector progresista y radicalizado de la Iglesia católica colombiana, que ha sido grandemente influenciado por los vientos de la teología de la liberación, que tanto han tocado y de forma tan especial a Latinoamérica. Muchos de los líderes, participantes y organizaciones integrantes del laboratorio de paz han sido formados en el marco de referentes metodológicos y filosóficos de la teología de la liberación.

La teología de la liberación es una corriente teológica de la Iglesia Católica, nacida en Latinoamérica en los años 1960 tras la inspiración de las reformas del Concilio Vaticano II, que debe algunas referencias del Marxismo (Bushnell, 1996, p. 332). Tiene en Colombia su expresión y referencia máxima en el sacerdote Camilo Torres, el cura que oyó un “Dios que gritaba revolución” (como cantó Víctor Jara) y dedicó el final de su vida a la insurgencia armada, alistándose en las filas del ELN, acabando por morir en combate en el Magdalena Medio en 1966. Es una figura que ejerció gran influencia sobre Francisco De Roux y varios miembros de CINEP, aunque estos renuncien claramente a la opción por las armas preconizada por Camilo Torres.

Tiene como hilo conductor una opción preferencial por los pobres (Prieto, 2008, entrevista a exobispo de Barrancabermeja y presidente de la Junta Directiva del PDPMM), que significa y se materializa en un compromiso de trabajo religioso y social con y por los pobres. Vehicula una visión según la cual los derechos del pobre son derechos de Dios. Para la teología de la liberación el cristianismo es planteado necesariamente como una religión de los pobres y que debe estar siempre del lado de los pobres (Berryman, 1989, p. 45). Configura una especie de socialismo cristiano. Pone énfasis fundamentalmente sobre la pobreza y la exclusión social.

Bajo el prisma de esta corriente, las estructuras de opresión, injusticia y explotación son reinterpretadas a luz del evangelio como el mayor ‘pecado’ y la salvación como la liberación integral del hombre (Soto, 2007, entrevista; Berryman, 1989, p. 88), que encierra tanto una dimensión material, como espiritual. La teología de la liberación subraya la dimensión estructural del pecado y de su superación y lo ubica en el contexto socioeconómico en el cual se imprime (Amorim, 2007, p. 2). La pobreza es entendida como un fenómeno social alimentado por estructuras que tienen que estar en la primera línea del trabajo transformador cristiano. Este se figura como uno de los principales rasgos heredados del marxismo. Es un movimiento a favor de la emancipación humana (Berryman, 1989, p. 12), de la eliminación de la explotación e injusticias, y de la garantía del acceso a la educación, salud y otros servicios; rechaza el asistencialismo en detrimento de la justicia social (Soto, 2007, entrevista). Tiene en vista la liberación a nivel económico, político, social y la búsqueda de condiciones de vida digna, elementos que marcan la filosofía del PDPMM de forma clara e indeleble. El Reino de Dios, bajo esta concepción, emerge como la consecución de nuevas relaciones humanas y del amor al prójimo. La teología de la liberación está de esta forma íntimamente ligada a la búsqueda de la transformación social y de relaciones sociales de comunión, solidaridad y espiritualidad comunitaria, imprimiendo al catolicismo una misión liberadora (Amorim, 2007, p. 2).

Parte de la perspectiva de que la Iglesia debe incidir políticamente en la orientación de sus comunidades, porque “una opción por el Evangelio tiene implicaciones políticas” (Castillo, 2008, entrevista). Preconiza un trabajo de base contra la injusticia y la opresión en los cual los pobres y marginados son los sujetos de su propio desarrollo y de su destino (Berryman, 1989, p. 87). Pasa por la propuesta y la práctica de la organización de los católicos en pequeñas comunidades de base, como asociaciones de pobladores y de trabajadores.

Esta es una concepción de la vivencia y acción religiosa que corresponde a lo que el padre Rafael Castillo (2008, entrevista) caracteriza como “una Iglesia más de la calle que de la eucaristía”. Esta es así una concepción de la vivencia religiosa y una lectura del Evangelio que pasa por una presencia en las veredas, cerca de los pobres, los marginales, obreros y excluidos, a la imagen de la figura y enseñanzas de Jesús, el Cristo.

Permea grandemente el posicionamiento de los religiosos en el laboratorio del Magdalena Medio en su trabajo con las comunidades y los excluidos en pro de una

nueva sociedad. De hecho, la opción por la teología de la liberación ha encontrado espacios propicios en el marco del PDPMM y del laboratorio de paz, así como en los demás laboratorios en Colombia, ya que dieron la oportunidad para desarrollar un trabajo social con los pobres y en contra de la pobreza.

En segundo lugar, se evidencia una influencia filosófica jesuítica en la iniciativa que va más allá de la participación de actores ligados a la Compañía de Jesús en el laboratorio de paz, como el CINEP y los directores de la CDPMM, primero Francisco de Roux y Libardo Valderrama, y se manifiesta principalmente en dos aspectos:

Por un lado, se denota una impronta jesuita, en aspectos como el énfasis en la dimensión social de la evangelización (Prieto, 2008, entrevista), y una mirada sistémica e integral de los problemas (Mendoza, 2008, entrevista a funcionario de la ONG jesuita Suyosama). Por otro lado, importaría señalar que, en cierta medida, los sacerdotes jesuitas involucrados en el laboratorio han querido, consciente o inconscientemente, rescatar el modelo de las misiones y reducciones de la Compañía de Jesús en Paraguay, Argentina y Brasil, experiencia que está grabada de forma indeleble en el imaginario colectivo de los jesuitas.

Este modelo desarrollado por los jesuitas con los indígenas en varios lugares de América del Sur, correspondía a un modelo de desarrollo integral centrado en la persona humana (Castillo, 2008, entrevista), un intento de construir un territorio de armonía entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza (Mendoza, 2008, entrevista), a la imagen de un microparaíso en la tierra. Las misiones se caracterizaron por la búsqueda de un modelo de desarrollo que implicara a la gente, en particular a los indígenas, es decir, pretendían generar procesos de desarrollo endógeno (García-Duran, 2008, entrevista). Este es un elemento que sigue vigente para los jesuitas y que está presente en el laboratorio de paz.

La influencia filosófica jesuita se refleja así en la convicción que reina en un grupo amplio de los jesuitas, de la importancia de impulsar procesos organizativos con niveles elevados de autonomía y que puedan incidir en cambios concretos y reales de la sociedad; y en la creencia de que hay que impulsar un cambio social que tenga raíces en las personas más pobres, excluidas y afectadas por el conflicto (García-Duran, 2008, entrevista). El laboratorio de paz es un lugar donde la paz significa fundamentalmente un bienestar colectivo, tal como, en cierta medida, las Misiones lo fueron (Mendoza, 2008, entrevista). Como señala Ricardo Mendoza (2008, entrevista),

la Iglesia era el centro, pero era un lugar de la cultura que celebraba la identidad de la aldea; todos tenían sus huertas caseras, y lo llamaban tierras colectivas; y a las tierras colectivas las llamaban tierra de Dios. El colectivo era lo divino; Marx se quedaría maravillado [...] el bien individual al servicio del colectivo, el colectivo al servicio del particular, las dos cosas en armonía; en el imaginario jesuita esta es la metáfora de un mundo perfecto, la reducción del Paraguay.

Esta referencia enmarcada en el código genético de los jesuitas impregnó la propuesta del laboratorio de paz del Magdalena Medio, en cuanto construcción colectiva, ideal de armonía terrena y espiritual por alcanzar, cercana a lo que hoy se llamaría de paz positiva y de desarrollo sostenible.

Asimismo, se denota una cierta influencia de la doctrina social de la Iglesia en la iniciativa. Como es reconocido por monseñor Jaime Prieto (2008, entrevista), exobispo de Barrancabermeja, principios consagrados en la doctrina social de la iglesia, como la dignidad de la persona humana, el bien común, la participación social, la solidaridad, la caridad, y la cultura de la vida están bien presentes en la *praxis* y la filosofía del laboratorio de paz y hacen parte de su patrimonio conceptual.

Muchos de los principios fundamentales del PDPMM reflejan la ética y el pensamiento cristiano. La afirmación de la centralidad y sacralidad de la vida es el mayor ejemplo de eso, materializada en el principio fundamental de ‘primero la vida’ que emergió del proceso de origen del PDPMM, y está presente de forma hincada en varios proyectos del laboratorio de paz, como son los espacios humanitarios (De Roux, 2002, p. 17).

Del mismo modo, la influencia de la doctrina social de la Iglesia en el laboratorio de paz se manifiesta igualmente en el creciente rol e importancia que el vaticano ha dado a los temas del desarrollo. La encíclica *Populorum Progressio* de Pablo VI afirmaba que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, y se desmarcó de las concepciones tecnocráticas del desarrollo, subrayando la necesidad de un desarrollo más integral y conducente a condiciones más humanas (Berryman, 1989, p. 88), idea que atraviesa de forma clara todos los planteamientos y líneas de acción del laboratorio y se asume como eje del PDPMM.

Pero fundamentalmente el laboratorio de paz del Magdalena Medio es influenciado por las referencias intelectuales y teológicas de Francisco De Roux. Las

convicciones éticas de Francisco de Roux marcan toda la filosofía y discurso del laboratorio. De Roux tiene concepciones éticas muy arraigadas que se reflejan en su trabajo y principios políticos y sociales y que han regulado la vida del PDPMM (Barajas, 2008, entrevista).

Es notoria la insistencia en el tema de la dignidad. La referencia a la dignidad humana y a una 'vida digna' atraviesa todas las finalidades políticas y la metodología del PDPMM y se asume como el principal valor del PDPMM. Bebiendo, por un lado, de una ética judaico-cristiana, que evoca el amor a Dios y al prójimo, y, por otro, de una matriz filosófica y ética liberal kantiana, que elabora que ninguna persona puede ser utilizada como un medio para conseguir un fin, si no que cada persona es un fin en sí misma, Francisco De Roux (2008, entrevista) reitera que todos los seres humanos tienen dignidad y esa dignidad es un valor absoluto. Emerge como un valor absoluto, que no se puede hacer crecer o desarrollar en sí mismo, sino que se puede proteger mediante condiciones de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de género.

Configuran un humanismo cristiano, en torno a valores como la solidaridad, la dignidad de las personas, el bien común, y la esperanza (CID, 2003, p. 33), que imprimen un toque fuertemente ético al laboratorio de paz. Esta dimensión ética y religiosa del laboratorio le confiere la legitimidad, el poder de apalancamiento y la fuerza moral para cuestionar las acciones y decisiones a las administraciones locales, al gobierno y a los actores armados, para llamar a la responsabilidad social a los empresarios, abordar y atacar el tema de la cultura de la ilegalidad y de la coca y soportar conceptual y socialmente al tema de los derechos humanos (Briceño, 2008, entrevista). Es una dimensión filosófica que estructura toda su acción y confiere legitimidad al trabajo social y político que desarrolla.

## Una concepción amplia y positiva de paz

El laboratorio de paz vehicula y desarrolla una filosofía de paz particular. Por encima de todo, el laboratorio de paz tiene y promueve una concepción de paz amplia y multidimensional, que implica más que la ausencia de guerra y el silenciamiento de los fusiles (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 31). Se acerca al concepto de Galtung de paz positiva, que describimos en el primer capítulo. En una gran proporción, el

laboratorio de paz se plantea como un modelo de exploración de vías y caminos desde las regiones para la construcción de la paz positiva y sostenible.

La expresión de este concepto de paz positiva en su filosofía y *praxis* se hace evidente en diversos elementos:

En primer lugar, el laboratorio de paz presenta una aproximación integral a la construcción de la paz y a la definición de paz. El amplio rango de proyectos que hacen parte del laboratorio es solamente comprensible dentro de un marco: su amplio y maximalista concepto de paz. El laboratorio de paz claramente no es una organización de asistencia humanitaria. Va mucho más allá. Retrata la construcción de la paz como un cumplimiento de los derechos humanos de todas las generaciones (Saavedra y Ojeda 2006, p. 32). Como plantea De Roux (2007, p. 4), “la paz no es simplemente que no maten gente. Es garantizar en primer lugar los derechos personales, sociales y políticos, [...] culturales y medioambientales. Estos derechos corresponden a la dignidad de todo ser humano”.

Para el PDPMM la paz es entendida como la vida digna, que implica y exige el ejercicio de los derechos, y el bienestar, o lo que el PDPMM a menudo refiere como ‘la vida querida’. La construcción de paz es entendida de esta forma como un proceso que trasciende las negociaciones entre las partes en conflicto y el desarme y desmovilización de los grupos armados, y pasa por transformar las dinámicas violentas que las sostienen a nivel económico y político (Katz, 2004, p. 33). Encierra claramente una dimensión estructural y una dimensión cultural, lo que configura un entendimiento y una concepción positivos de la paz.

La acción del laboratorio de paz, y aun más del PDPMM, se inserta en una lógica a largo plazo. La iniciativa está orientada a la eliminación de las causas raíz del conflicto, configura lo que puede llamarse una ‘transformación estructural del conflicto’ lo que implica reparar las estructuras sociales de violencia indirecta, tales como la pobreza, la explotación, la miseria, la represión y las violaciones de los derechos humanos (Galtung, 1996). De hecho, pretende entender y transformar, en el nivel local y en el nivel regional, las estructuras que causan y mantienen el conflicto.

Como señala Libardo Valderrama (2007, entrevista),

[...] nosotros no podemos esperar que la guerrilla y el gobierno pacten la paz; la paz no se logrará el día que se dejen los fusiles; estará aun presente toda la violencia social, todos los problemas estructurales; si no hay una sociedad sensible a la paz y organizada para la paz va a



ser muy complicado, si no se hacen los cambios estructurales, va a ser muy complicado. [Por eso] pensamos que debemos ir incidiendo en las cuestiones estructurales que favorecen el conflicto. Vamos construyendo una cultura de paz, un pensamiento de paz y condiciones para la paz.

Así, el laboratorio de paz tiene un fuerte enfoque político, socio-económico y cultural. Presta especial atención a la búsqueda de vías y condiciones conducentes a un desarrollo humano, incluyente y sostenible. La principal idea que estructura su acción y filosofía es ‘robarle’ gente a la guerra, por intermedio de la inclusión socioeconómica y política, el empoderamiento y organización social, la transformación de las condiciones de vida y la transformación misma de los individuos y su consciencia política y ética, de manera que se construya una cultura y una educación para la paz (Molano, 2009, p. 56).

Sin embargo, a pesar de todos estos elementos que configuran una filosofía y un enfoque para la paz del PDPMM y del laboratorio de paz, se debe subrayar que en gran medida, esta iniciativa es verdaderamente un ‘laboratorio de paz’ y en esa medida, busca la construcción de la paz con referentes y principios políticos y éticos muy hincados y marcados, pero sin un modelo de paz que sea fácilmente etiquetable o definible teóricamente, y fundamentalmente como un proceso que se va construyendo cotidianamente desde las veredas de la región. Esta perspectiva es comprobada en las palabras de Pascual Silva (2007, entrevista), miembro de la CDPMM,

[...] nosotros no vemos tanto lo de la paz como un discurso o cátedra, o curso, sino de cómo llevamos a la gente que construya un referente de autonomía, de sostenibilidad, de independencia, que permita a la gente construir alternativas para que no entre en el círculo de los actores armados.

## Los actores y dinámicas internas del laboratorio de paz

El laboratorio de paz tuvo una estructura singular. Se constituyó como una plataforma peculiar y poco convencional de actores, con una naturaleza heterogénea.

Si bien fue una creación de la sociedad civil, ha incluido al Estado colombiano; aunque haya sido en su esencia una iniciativa colombiana, trabajó y colaboró con organizaciones internacionales (Barreto Henriques, 2009a, p. 513). Se perfiló un triángulo de diálogo y cooperación en el laboratorio de paz. Un eje de las ‘3Bs’ se estableció entre Barrancabermeja, Bogotá y Bruselas. Tanto instituciones sociales, como estatales e internacionales han estado representadas. Fue un híbrido. No correspondió a una ONG, ni a una organización política o una política pública, sino a una organización inter-institucional y abierta, donde diversas dinámicas endógenas y exógenas se entrecruzaron (Barreto Henriques, 2009a, p. 513).

Funcionó como una especie de pirámide relativamente no jerárquica (Barreto Henriques, 2009a, p. 562). Ha tenido diferentes camadas: en su nivel más bajo, a nivel local y regional, ha trabajado con las comunidades y la población más vulnerable, como campesinos, obreros, grupos de mujeres, organizaciones de base, comunidades aisladas, cooperativas y ONG locales. Configuró una constelación de comunidades y organizaciones sociales de base de ámbito local o regional, que agregó bajo distintas formas y modalidades, pero en un mismo proceso y horizonte para la paz y el desarrollo, desde grupos de campesinos asociados en torno de la comercialización de sus productos, asociaciones de pescadores, cooperativas, parroquias, emisoras comunitarias, organizaciones de mujeres, grupos y redes de jóvenes, proyectos educativos, de salud, de derechos humanos, procesos de participación, universidades, etc. (PDPMM, 2005, p. 51). Se ha construido a partir de los grupos sectoriales política, económica y socialmente excluidos. No se concibieron como ‘simples beneficiarios’, como señalan Luz Ángela Herrera y Luis Guillermo Guerrero (2008, p. 15), “estas organizaciones son el alma y la vida” y los protagonistas fundamentales del laboratorio de paz; son ellos quienes han llevado a cabo las iniciativas, los proyectos y los procesos, que han desbravado caminos alternativos para la construcción de la paz y la vida con dignidad, inclusión y bienestar, y que han asumido los riesgos que sus acciones implican en un marco y escenario de conflicto armado (PDPMM, 2005, p. 56).

A un segundo nivel, en el plano nacional, el laboratorio de paz ha incluido al gobierno específicamente a través de las instancias gubernamentales como el DNP, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social, actual Departamento para la Prosperidad Social), así como la Red Prodepaz, algunas ONG nacionales y el CINEP.

Finalmente, en el nivel internacional ha incluido a la UE, y más específicamente a la Comisión Europea y su delegación en Colombia, pero también involucró de cierta forma en el proceso, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con su Proyecto de Reconciliación y Desarrollo (REDES), el Banco Mundial, que financió el proyecto “Paz y Desarrollo”, y algunas agencias europeas de cooperación bilateral.

Por lo tanto, el laboratorio de paz del Magdalena Medio no ha sido estrictamente ni una iniciativa de la sociedad civil, ni una política del Estado o iniciativa de la cooperación europea. Se trabajó con el Estado y con recursos canalizados a través del Estado, pero el laboratorio no se configuró como una intervención estatal o gubernamental, sino una acción apoyada por el Estado. Asimismo, no ha sido una creación de la cooperación de la UE, ha sido, más bien, parte de una estrategia de desarrollo y paz conjunta y cooperativa del PDPMM con el gobierno colombiano, la UE, así como con otras organizaciones internacionales, tales como el PNUD y el Banco Mundial.

Sin embargo, a pesar de esta estructura tripartita, el laboratorio de paz se ha sostenido esencialmente en un proceso social desarrollado por la sociedad civil y desde la sociedad civil. Como hemos visto anteriormente, la fuerza motriz de la iniciativa es la sociedad civil de la región organizada en torno del PDPMM y bajo el liderazgo de la CDPMM. La iniciativa, como propuesta y experiencia de construcción de paz, se ha basado y estructurado a partir del PDPMM, en su equipo, estructuras, experiencia social, filosofía y definición conceptual. Hay una identidad propia del PDPMM y un arraigo profundo a la autonomía de su proceso, metas y principios.

Se evidenciaron dinámicas verticales muy claras en el laboratorio (que analizaremos más adelante), que han sido introducidas por la participación de la UE y del gobierno colombiano en la iniciativa, sin embargo el proceso está hecho esencialmente de abajo hacia arriba, bajo una metodología participativa y con un elevado grado de autonomía del PDPMM. El proceso se sostiene en el PDPMM y es dinamizado en el terreno por este.

Esta multiplicidad de actores configuró una iniciativa y un modelo de intervención para la paz muy particular, en la medida en que participaban ‘todos’: entidades públicas, privadas, la Iglesia, la empresa Ecopetrol, las organizaciones de base, ONG, actores de la comunidad internacional (Angulo, 2007, entrevista). Es un modelo que convoca actores sociales de diferente índole, lo que propicia una

construcción colectiva de la paz con un fuerte potencial de sostenibilidad y una cercanía a la concepción de paz positiva.

Asimismo, la existencia y participación de distintos actores en el proceso con diferentes ídoles, naturalezas, agendas, prioridades, posiciones y concepciones ha configurado el laboratorio como un espacio permanente de negociaciones entre entidades y niveles. Como señala Bayona (2007, entrevista), “lo que tenemos hoy en el Magdalena Medio es el producto de un proceso continuo de discusiones”. En este ámbito, el laboratorio de paz se convierte en sí mismo en un instrumento de mediación entre diferentes sectores de la sociedad colombiana, factor facilitador de vías para la paz.

En términos de competencias y funciones atribuidas en el marco de la estructura institucional del laboratorio de paz, para la Comisión Europea, a través de su delegación en Colombia, se mencionan “acciones de supervisión, seguimiento, acompañamiento del programa y aplicación de los procedimientos de adjudicación de contratos” (CDPMM, 2005, p. 72). El gobierno Colombiano, además de ser el beneficiario de los recursos de la cooperación, otorgó a la ACCI (y posteriormente a Acción Social) la coordinación nacional del los laboratorios de paz y funciones de asistencia técnica al DNP.

A la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM) fue delegada la responsabilidad de ejecución de las actividades del laboratorio de paz. Esta es una entidad privada dotada de personería jurídica, con autonomía en el campo operativo, administrativo y técnico del laboratorio, conformada institucionalmente por la Diócesis de Barrancabermeja y la organización jesuítica CINEP. Es una estructura autónoma que funciona como la cabeza, orientador estratégico y agente técnico y administrativo del programa, con responsabilidad de planificación y ejecución técnica de las actividades del laboratorio de paz, y que estructura los proyectos con las organizaciones locales de base, hace uso y redistribuye los recursos (CDPMM, 2005, p. 73). Tiene un elevado grado de autonomía en el campo operativo, administrativo y técnico del laboratorio, dentro de lo acordado en el convenio de financiación y plan operativo global.

Se distingue del PDPMM en la medida que este es un proceso social en el territorio, constituido por todas las personas y pobladores que están involucrados en los proyectos con el propósito común de la paz. En cuanto a la CDPMM, es la entidad directiva que orienta, dinamiza y coordina el PDPMM. Contrariamente a

la CDPMM, el PDPMM no tiene personería jurídica. De esta forma, Francisco De Roux reiteraba que no era el director del PDPMM, sino de la CDPMM.

A pesar de estar institucionalmente compuesta por el CINEP y la Diócesis de Barrancabermeja, el equipo del CDPMM trasciende estas dos instituciones. Está compuesto fundamentalmente por elementos formados en las ciencias sociales, en particular sociólogos, economistas, antropólogos, politólogos, y abogados. De hecho, la CDPMM tiene una masa intelectual y crítica de un enorme valor, al componerse por miembros con una formación académica sólida, y de gran nivel intelectual, factor que imprimió a la CDPMM un apurado espíritu crítico y capacidad de pensar en la región, el país, el desarrollo y la sociedad, y permitió la concepción intelectual de un enfoque y modelo *sui generis* de construcción de paz desde las regiones. Asimismo, es un equipo que asume un compromiso con el laboratorio de paz con profundo espíritu de misión y activismo político y social que va mucho más allá del contrato laboral y “se ha convertido en una verdadera opción de vida” (CID, 2003, p. 6).

En lo que concierne a las dos instituciones que conforman la CDPMM, el CINEP y la Diócesis de Barrancabermeja, revelan igualmente una importancia central en esta iniciativa: el CINEP es una organización de la Compañía de Jesús con una trayectoria y un patrimonio acumulado de investigación y acción sobre temas del conflicto armado, capacidad de pensar la paz y el país, y con presencia efectiva en las regiones. En las últimas décadas se volvió una de las más dinámicas ONG colombianas en temas de paz (Macdonald, 1998, p. 18). Tiene un Programa por la Paz con más de veinte años de existencia.

La Diócesis de Barrancabermeja se evidencia igualmente como un actor central en la región del Magdalena Medio. Ha estado vinculada, desde los años 70, a innumerables procesos sociales en la región en defensa de los derechos humanos. Ha acompañando a las comunidades, interactuando con diversos movimientos y sectores sociales, políticos y económicos, desde los sindicatos hasta Ecopetrol, sirviendo de puente y base de comunicación y participando en los procesos de negociación de la paz (Soto, 2007, entrevista; Castilla, 2008, entrevista). En ese sentido, la participación de la Diócesis de Barrancabermeja, así como del CINEP en el PDPMM y en el laboratorio de paz han sido casi una consecuencia lógica de todo lo que ha venido construyendo la Iglesia Católica en la región y han facilitado el trabajo e intervención social en el territorio.

De hecho, la Iglesia ha desempeñado un rol determinante en el laboratorio de paz del Magdalena Medio. El PDPMM es en gran medida una iniciativa católica. No solo sus líderes son sacerdotes jesuitas, como muchos de sus líderes de base y coordinadores de proyectos son sacerdotes católicos, como es el caso del padre Rafael Gallego, del espacio humanitario de Tiquisio y el padre Hermes del espacio humanitario de Ciénaga del Opón. Sin la Iglesia probablemente no habría laboratorio de paz en el Magdalena Medio. No solamente la Iglesia fue muy importante para el origen del PDPMM, pues sirvió como puente entre Ecopetrol y la USO (Soto, 2007, entrevista), y ejerció una influencia filosófica importante sobre la iniciativa, si no que ha sido vital para el desarrollo y realización del PDPMM y del laboratorio.

La Iglesia Católica tiene una posición sin par en la sociedad colombiana, que le permite jugar un rol que ningún otro actor puede desempeñar en Colombia. Tiene una credibilidad y un estatus único frente a la población colombiana y a los actores armados legales e ilegales, lo que le ha permitido históricamente un rol fundamental en los temas de paz en Colombia. Es un actor involucrado en todos los niveles políticos y sociales de la construcción de paz en Colombia, que tiene presencia cerca de las comunidades arrinconadas por la violencia, que acompaña y apoya varios movimientos sociales, realiza un rol de facilitación y mediación directa, y puente entre los actores armados y el gobierno nacional (McDonald, 1998, pp. 123-125).

Asimismo, la Iglesia tiene una alta capacidad de convocatoria en territorios donde el conflicto es muy intenso y donde hay una polarización total. Los actores armados, sin excepción, así como los actores sociales y políticos demuestran respeto y confianza en la institución que es la Iglesia Católica y sus representantes, incluso entre los actores armados supuestamente propulsores del ateísmo, como las FARC (Soto, 2007, entrevista). Es un actor con legitimidad social y ética, como resultado de factores de orden sociológico, cultural e histórico que le han conferido un rol central a esta institución en la sociedad y cultura popular colombianas.

Fue en gran medida el involucramiento e imagen simbólica de la Iglesia bajo el comando de Francisco De Roux lo que permitieron que se desarrollara el PDPMM y el laboratorio de paz en las veredas del Magdalena Medio, aunque a veces de forma tensa y conflictiva. El estatus y credibilidad que aporta esta institución ha permitido al laboratorio entrar en zonas muy difíciles y violentas del Magdalena Medio y llevar a cabo proyectos y procesos sociales en ellas. Fue un factor preponderante en la expansión de la iniciativa para municipios en donde el Estado casi no tenía

presencia, las instituciones no tenían credibilidad, y había una profunda resistencia de la población y de los actores armados (Gómez, 2008 entrevista a antropólogo, ex coordinador técnico regional del laboratorio de paz del Macizo Colombiano). Asimismo, ha venido funcionando como una especie de paraguas y factor de blindaje social y político para los procesos sociales del laboratorio frente a los actores armados (Saavedra y Ojeda, 2006, pp. 29-30). Resulta más difícil a un actor armado atentar contra una figura religiosa, aunque esta situación no esté exenta de ocurrir<sup>5</sup>.

De la misma forma, la importancia que encierra la participación de religiosos en lo cotidiano y en iniciativas del laboratorio de paz es patente en una anécdota narrada por Francisco De Roux (2008, entrevista):

[...] hay elementos que difícilmente los hubiéramos podido hacer sin la Iglesia católica. En la cultura popular colombiana, el hecho de que yo sea sacerdote, eso para la gente es importante, para el guerrillero y los paramilitares [...] Un día estábamos en el Alto Cañaveral y llegó un grupo paramilitar. Estábamos en una reunión de 400 campesinos y se tomaron el lugar, y yo salí a buscar al comandante que se llamaba “el profesor” (su nombre de guerra); me acerqué y le dije: ¿usted por qué se está tomando este pueblo? El respondió que esa era una reunión de guerrilleros; y yo le dije: no señor, esta es una reunión de un proyecto de la UE, esta es una reunión de cacao. Estamos aquí con todas las veredas en el municipio de San Pablo y estamos reunidos aquí hace dos días y no hay guerrilleros. Entonces uno de ellos me preguntó: ¿y usted quién es? Y le dije: yo soy el padre Francisco de Roux. Entonces el comandante dice: “hijuepucha”! En seguida, trajeron a un campesino amarrado, delante de mí, y se lo presentaron al comandante: “este tipo es un guerrillero, yo estuve con él cuando yo estaba de guerrillero, estábamos en el mismo grupo, por eso se lo traigo”; Entonces dice el comandante: si saben quién es, procedan (o sea, mátenlo). Entonces yo le pregunto: ¿y por qué, señor? ¿Usted no se da cuenta? Este tipo

---

5 Este elemento fue posible comprobarlo en un episodio ocurrido en el marco del trabajo en el Sur de Bolívar. Cuando en el camino hacia Tiquisio, en un retén del Ejército, nos mandaron salir de la furgoneta. Frente a la actitud de fiereza, dureza y sospecha agresiva de los soldados, una mujer en nuestro grupo exclamó “este señor es cural”, refiriéndose al padre Rafael Gallego, coordinador del espacio humanitario de Tiquisio, una forma de ganarse la receptividad del actor armado.

que está con usted siguió en la guerra, está de paramilitar con usted, este otro muchacho dejó la guerra y se pasó a la producción campesina; lo que hay que hacer es celebrar que este muchacho haya dejado la guerra”. Y el tipo dijo: suéltelo! Esas cosas, donde yo no fuera cura, no hubiera podido hacerlas. A mí me matan [...] Y enseguida el tipo me dijo: no padre, deme 20 minutos y en 20 minutos me voy... y se fueron. Se salió toda la tropa.

Asimismo, la participación de la Iglesia dio credibilidad y sostenibilidad al proceso junto de las comunidades y actores sociales, en una región y país con un arraigado descredito de las instituciones. La Iglesia es vista como una garantía de transparencia en la ejecución de recursos. Como refiere el padre Alejandro Angulo (2007, entrevista), exdirector del CINEP, está arraigada la visión que contrariamente a los políticos, “los curas no se roban la plata”.

Sin embargo, a pesar de la fuerte influencia de la Iglesia Católica, este no es un programa clerical. Hay laicos, no creyentes, y gente de otras confesiones en el proceso; no hace parte de su praxis, ni un espíritu mesiánico, ni evangelizador; es un espacio abierto apoyado fundamentalmente en valores políticos y principios éticos.

En este ámbito, el rol de Francisco de Roux es de una importancia extrema. Se configura como uno de los actores principales del laboratorio de paz, y una figura sin la cual esta iniciativa no hubiera sido posible. Francisco de Roux, conocido por todos en el Magdalena Medio como ‘el padre Pacho’, no solo ha sido el ideólogo del PDPMM y del laboratorio de paz, el arquitecto conceptual de la iniciativa y su principal pensador por la paz, sino también alguien que, ha dedicando 18 horas por día al Programa, ha contribuido al impulso, y expansión del PDPMM y laboratorio de paz por las veredas del Magdalena Medio.

Su liderazgo, personalidad y carisma han sido cruciales para la concepción y origen del laboratorio de paz, mediante su red de contactos personales, a nivel regional, nacional e internacional. Se volvió uno de los símbolos de la sociedad civil en Colombia y uno de los rostros de paz del país. De Roux ha jugado un importante papel dando visibilidad al programa en medio de difíciles condiciones regionales y nacionales. Es una personalidad reconocida y admirada por todos, valor que le confirió al exdirector de la CDPMM el puesto de provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, así como innumerables premios nacionales e internacionales.



De Roux es alguien con una capacidad de dialogar y persuadir desde el más humilde campesino del Magdalena Medio, hasta al presidente de la República o un comandante de la guerrilla. Varias veces ha efectuado conversaciones, a veces duras y frontales, con los actores armados, y gestiones de paz a nivel regional. Su credibilidad como hombre de paz y de la iglesia y el reconocimiento como interlocutor válido se extienden desde el establecimiento colombiano a la guerrilla. Es en este ámbito que De Roux fue invitado por el ELN y el gobierno Uribe para integrar el Consejo Nacional de Paz, como facilitador en los diálogos de paz en La Habana y que fue escogido por la administración Uribe como facilitador de las conversaciones entre los indígenas y el gobierno en el 2008.

Fue alguien con una importancia y centralidad enorme en la vida cotidiana del laboratorio de paz, pareciendo por veces como un verdadero 'bombero' del PDPMM, corriendo siempre a cada circunstancia o situación en que se evidenciaba algún peligro o problema y cuando había que manejar una situación delicada. Hay una visión casi mesiánica de Francisco De Roux en los procesos del laboratorio de paz y del PDPMM. Le toca correr a todo, hablar con toda la gente. Esta situación causó alguna centralización y personalización del proceso del laboratorio en su figura, factor que encierra todavía algunos riesgos y contradicciones.

Sin embargo, el liderazgo de De Roux permitió logros de extrema importancia. Logró que la voz del PDPMM, y la voz de los que no tienen voz, fuera escuchada por las altas instancias del poder en Colombia. A Francisco De Roux le pasan el teléfono los ministros, los embajadores, el alto comisionado para la paz, el presidente de la USO y el presidente la República (Villegas, 2008, entrevista a gestora del PDPMM y encargada de los contactos inter-institucionales).

Esta capacidad de interlocución y de conexión de niveles de 'Pacho' posibilitó en muchas ocasiones que algunos conflictos hayan podido ser evitados o manejados y que se encontraran soluciones para algunos problemas, lo que contribuye en gran medida al acercamiento de la sociedad civil y la población de la región al Estado (Molano, 2009, p. 11). Mucha de la fuerza del laboratorio de paz ha tenido que ver con esta capacidad de diálogo y de convocatoria del padre De Roux. Asimismo, la acción, liderazgo y capacidad de diálogo y negociación de De Roux en innumerables casos y circunstancias permitió salvar vidas frente a los actores armados.

La transversalidad de su reconocimiento como interlocutor tiene mucho que ver con su tipo de liderazgo, un liderazgo basado no solo en su innegable carisma,

sino en su fuerza moral y en la legitimidad y la fortaleza de sus ideas desarrolladas en el marco de los procesos del PDPMM. De Roux figura como una autoridad legítima, que ejerce una forma consensual y no dominante de poder. Encarna la esperanza de muchos pobladores del Magdalena Medio en una sociedad desesperada y en busca de referentes (CID, 2003, p. 32). Cuando “Pacho” pasa por una vereda del Magdalena Medio todos los saludan y lo buscan. Este tipo de autoridad y liderazgo se deben en parte a su capacidad de empoderar a los demás, y potenciar sus medios de participación, elementos que permiten profundizar la ciudadanía y reducir la violencia directa y estructural en contextos de conflicto (Pearce, 2007, p. 52).

Todavía se debe tener en cuenta que estos actores de base y esta dinámica de nivel bajo apoyada en una metodología participativa tiene una contraparte en los actores de alto nivel y en las dinámicas verticales que el laboratorio de paz ha presentado, en particular por intermedio de la participación de la UE y del gobierno nacional, a través de su mecanismo de cooperación, Acción Social (Barreto Henriques, 2009a, p. 571).

El Estado es un actor fundamental y ha desempeñado un rol crucial en los procesos de los laboratorios de paz. Forma uno de los tres lados de la estructura triangular del laboratorio y es, en cierta forma, un puente y un intermediario entre la UE y las regiones. En primer lugar, los fondos y recursos europeos fueron canalizados a través de él, por intermedio, en un primer momento, de la ACCI, y posteriormente, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).

Acción Social<sup>6</sup> fue el interlocutor directo del gobierno en el marco del laboratorio de paz y se convirtió verdaderamente en la voz y rostro del posicionamiento político del gobierno Uribe al interior de la iniciativa. Asimismo, era la autoridad contratante del laboratorio de paz y asumía la coordinación nacional de la iniciativa, delegando, por su intermedio, la programación y ejecución operativa a nivel regional a las entidades coordinadoras regionales, y otorgando competencias de asistencia técnica al DNP.

---

6 Acción Social (2010) fue un organismo gubernamental destinado a canalizar recursos nacionales e internacionales para programas sociales direccionados a poblaciones vulnerables; nació de la fusión de la ACCI y la Red de Solidaridad Social y dependía directamente de la presidencia de la República.

La participación del Estado ha sido de gran importancia en el proceso: en primer lugar, el Estado es un actor fundamental y protagónico en la resolución de cualquier conflicto armado interno, en cuanto es una de las partes del conflicto y detentor del legítimo uso de la fuerza (Wallensteen, 2002, pp. 61-65). Es el rey en el tablero de ajedrez, el interlocutor de la movilización social, la entidad a quien se llama a reivindicar, la faz del sistema político y algunas veces de la represión.

En segundo lugar, en el marco de esta iniciativa, el laboratorio se ha convertido en un espacio y plataforma privilegiados de interacción y diálogo entre el Estado, la cooperación europea y la sociedad civil, que ha permitido que sectores sociales que de otra forma no tendrían esa oportunidad, sean escuchados por la institucionalidad, convirtiendo el laboratorio en un instrumento pionero al respecto. El Estado es en gran medida un destinatario del laboratorio. Estas han sido, en una gran proporción, propuestas a la institucionalidad. Se ha buscado que estos procesos se vuelvan política pública, conscientes de que es la única manera de que sean sostenibles y que se construya la paz y el desarrollo (Valderrama, 2007, entrevista). Esa es la razón por la cual en sus componentes y líneas estratégicas, el laboratorio de paz da un énfasis fuerte a la construcción y al apoyo de la institucionalidad.

Sin embargo, la relación y articulación del PDPMM con las estructuras de poder ha sido a la vez una de las fortalezas del proceso y uno de sus mayores problemas. Varias contrariedades y tensiones han emergido de su participación en el proceso. Significó la introducción de dinámicas verticales y de cooptación e instrumentalización de la iniciativa por parte del gobierno nacional, las cuales analizaremos más detalladamente en el capítulo siguiente.

Estas dinámicas se han evidenciado y exacerbado con la administración Uribe (2002-2010). De hecho la coyuntura política y el panorama gubernamental cambiaron grandemente en el decurso del laboratorio de paz. Mientras el convenio de financiación entre el Estado colombiano y la UE se firmó con la administración Pastrana (1998-2002) en un contexto de un proceso de paz en Colombia y posible salida negociada para el conflicto, la puesta en marcha del laboratorio inició en 2002 cuando llegó a la Casa de Nariño el presidente Álvaro Uribe, con un enfoque musculado y militarizado para el conflicto protagonizado por su política de seguridad democrática, con una filosofía para la paz bien distinta del gobierno anterior (Barreto Henriques, 2010b).

Así, el laboratorio de paz sufrió un choque estructural profundo y una crisis existencial en la medida en que el contexto en que fue concebido a través del ‘casamiento’ entre el PDPMM y la CE cambió radicalmente bajo los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010). La ‘política de paz’ de este gobierno era diametralmente contradictoria con la filosofía original del PDPMM, basada en el enfoque en las causas profundas del conflicto, en un desarrollo campesino sostenible y en un intento de concertación con los actores armados en el terreno. Si esta iniciativa fue formulada para un contexto de diálogos de paz, su implementación se debatió con el escenario de la política de seguridad democrática (Molano Cruz, 2009a, p. 2). El laboratorio fue concebido como mecanismo para complementar la construcción de una paz positiva para un contexto de solución negociada al conflicto que no se concretó. Pero en su desarrollo se enfrentaron con una política oficial hacia el conflicto basada en la vía militar y en la negación de la existencia del conflicto armado (Barreto Henriques, 2010b).

Esto provocó rupturas y cambios substanciales en las dinámicas internas del laboratorio y presiones de cooptación por parte de Bogotá en el proceso. Esto ha sido visible a varios niveles. Una situación que se presentó es que el gobierno Uribe (2002 – 2010) intentó introducir en el laboratorio su retórica oficial de negación de la existencia de un conflicto armado en Colombia a favor de una argumentación según la cual lo que existe es una ‘democracia amenazada por terroristas’, tendencia que generó muchos choques y tensiones en el laboratorio (Barreto Henriques, 2009a, p. 572). Como relata el padre Eliécer Soto (2007, entrevista) de la Diócesis de Barrancabermeja, “hubo proyectos que ‘estuvieron congelados’ por meses porque Acción Social se negó a firmar documentos que hablaban sobre conflicto social y armado y emergencia humanitaria”.

De hecho, hubo un marcado énfasis y preocupación de Acción Social por el control de la información en el marco del laboratorio de paz. Las directrices y lineamientos de Bogotá, interpuestos por el alto comisionado de paz, a través de Acción Social, reclamaban la eliminación en todos los documentos de la palabra *conflicto*, lo que resultó en un verdadero proceso de revisión lingüística o censura de los documentos del PDPMM, que excluía todo lo concerniente a ‘conflicto armado’, sustituido por ‘violencia’ sin ningún calificativo, y que procuraba reducir las referencias a contactos con integrantes de las ‘insurgencias’ por parte del PDPMM, a ‘diálogos estrictamente pastorales’ (Garavito, 2010). Ha procurado de esta forma afirmar al

Estado como el único interlocutor válido y legítimo de las organizaciones ilegales y no perder el monopolio de la política de paz y seguridad (Moreno, 2009, p. 102).

Por lo demás, hubo un intento del gobierno Uribe de instrumentalizar el laboratorio de paz como un paliativo o componente social de su política de seguridad democrática y parte de su política de ‘recuperación integral del territorio’. Para el gobierno y Acción Social, el PDPMM y el laboratorio de paz se convirtieron en alguna medida, en parte de su estrategia de intervención en ciertas zonas de conflicto. El laboratorio fue visto como un instrumento de consolidación del Estado y de desarrollo social, que se sigue a la fase de la recuperación militar del territorio, una especie de modelo de intervención “post conflicto” (Moncayo, 2008, entrevista), de zanahoria social, después del garrote de la seguridad democrática.

Por tanto, hubo permanentes tensiones y un diálogo diario de disputa entre estos actores. El PDPMM ha luchado por no perder su autonomía y su liderazgo en el proceso, lo que, contrariamente al caso del segundo y tercero laboratorios de paz, se ha logrado en gran medida. No obstante, en la medida que estos cambios y dinámicas verticales introducidas por el gobierno Uribe han sido más notorios en el laboratorio de paz II, analizaremos más en profundidad esta situación en el capítulo siguiente.

De igual forma, podemos también considerar otro tipo de actores en el laboratorio de paz: los actores armados. Ellos tienen el poder de condicionar, bloquear e influenciar las actividades y dinámicas del laboratorio, funcionan como una variante del proceso y constituyen una especie de ‘actor indirecto’ en la iniciativa (Barreto Henriques, 2009a, p. 516).

Todos los grupos armados han tenido sus ojos en el laboratorio y su intervención en ‘su territorios’ y áreas de influencia y acción. Han mirado con atención y a menudo con precaución y escepticismo el laboratorio de paz. Son claramente una presión y una tensión para el laboratorio y el PDPMM, con capacidad para limitar y condicionar su impacto y poner en peligro sus procesos, sus participantes, o su misma existencia. El laboratorio de paz del Magdalena Medio no ha representado una isla de paz, ha estado con sus pies bien ubicados en medio del conflicto y de las violencias. Por lo tanto, ha sufrido los efectos de este escenario entre su equipo y pobladores participantes. Se cuentan varias víctimas del laboratorio, así como las amenazas, las presiones, los secuestros y los desplazamientos forzados.

Sin embargo, hay otra dimensión de la relación del laboratorio con los actores armados. El laboratorio de paz trató con asuntos de paz y de conflicto en una región de

alta violencia. Por tanto ha sido necesario tratar la relación con los actores armados. Los proyectos del laboratorio han requerido algún grado de negociación, tolerancia o aceptación por parte de los actores armados en el terreno, para que puedan ser puestos a punto y funcionen. En varias circunstancias se realizaron diálogos de las comunidades o de los miembros del laboratorio con actores armados, de forma que estos procesos fueran respetados y puestos en marcha, lo que en algunos casos ha correspondido a verdaderas gestiones de paz, como la ocurrida en Micoahumado.

## El rol de la Unión Europea en el proceso, del PDPMM al laboratorio de paz

Por último, el triángulo que se conforma con el laboratorio se completa con la UE. A pesar de que el PDPMM figure como el eje a partir del cual se estructura y se desarrolla el laboratorio de paz, la UE ha influenciado y transformado la iniciativa en varios dominios. La participación de la UE trajo cambios importantes y sustanciales a la estructura y metodología del PDPMM e introdujo diversas dinámicas verticales al proceso (Barreto Henriques, 2010b).

El primer cambio y elemento que salta a la vista del pasaje de la primera fase del PDPMM para el laboratorio de paz es la multiplicación de recursos con la inyección financiera de la UE. Esto ha contribuido a consolidar y expandir los esfuerzos y proyectos del PDPMM y construir una base social más fuerte (PDPMM, 2007), al permitir reunir muchas más organizaciones y municipios y alcanzar un número mayor de personas.

Otro elemento importante es que la participación europea ha ampliado la dimensión política del PDPMM, que estaba más orientado al desarrollo y a los procesos productivos con la financiación del Banco Mundial. El laboratorio complementó al PDPMM con nuevos objetivos y consideraciones y con las especificidades de la visión europea, sus idiosincrasias, métodos y prioridades. La UE ha dado prioridad a los elementos de construcción de paz, imprimiendo su idiosincrasia y principios políticos, apoyados en el Estado de derecho, la democracia y la paz liberal. En la iniciativa, la UE puso énfasis, en particular, en el fortalecimiento institucional y la necesidad de tener un trabajo más cercano y articulado con las administraciones e instituciones locales y nacionales (Bayona, 2007, entrevista).

Para la UE se debe trabajar desde la institucionalidad, elemento que quedó marcado en el laboratorio de paz (Barreto Henriques, 2010b). En este marco, el PDPMM pasó de una actitud inicial un tanto confrontacional y de alguna sospecha respecto al Estado a una progresiva articulación y asunción de la importancia de la institucionalidad para la construcción de la paz. La UE desempeñó un rol importante en este proceso y cambio. Hoy está enmarcado en las finalidades y propósitos del PDPMM el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones, su acercamiento a las comunidades y la articulación de la sociedad civil con el Estado.

Pero, principalmente, hay una dinámica vertical introducida por la UE, visible no solo en el Magdalena Medio, sino en los demás laboratorios de paz. A pesar de ser una cuestión eminentemente de naturaleza técnica, se convirtió en un factor fundamental del proceso y en un importantísimo tema político y social. Se relaciona con el hecho de que la ayuda europea trajo nuevos procedimientos, normas y procesos administrativos al Magdalena Medio y al PDPMM que distorsionaron y rompieron con el proceso y metodología de participación desarrollados por el PDPMM hasta el momento, apoyado en los ‘núcleos de pobladores’.

La convocatoria pública exigida por Bruselas, como metodología de selección y financiación de proyectos ha tenido fuertes externalidades negativas. El cambio de una metodología eminentemente participativa por una metodología técnica y burocrática produjo muchísimos problemas al proceso social en el Magdalena Medio. Como señala Carlos Moreno (2008, p. 104), implicó la substitución de una idea y dinámica de democracia deliberativa, incorporada en la metodología de los núcleos de pobladores, por el concepto de democracia competitiva de la UE, implantado en la convocatoria pública (Barreto Henriques, 2010b).

Por encima de todo, puso en peligro los procesos sociales en marcha del PDPMM y contribuyó, en cierta medida, a obstaculizar e impedir que algunos de los sectores sociales más excluidos de la población participaran en el laboratorio, ya que no tenían la capacidad técnica para formular proyectos, cumplir los requisitos técnicos impuestos por la UE y manejar la pesada burocracia europea.

Esto provocó tensiones profundas y duros debates entre la UE y el PDPMM y durísimas críticas por parte de las organizaciones de base. Los procedimientos técnicos y administrativos requeridos por la Comisión Europea son percibidos en la región, por las organizaciones de base, como sumamente pesados, lentos, inflexibles y altamente burocráticos. Entre los dirigentes y funcionarios del PDPMM

la condena y crítica a este método europeo ha sido igualmente transversal, al ser acusado de poner en peligro los procesos sociales en marcha del programa.

Efectivamente, la UE impuso una normatividad compleja y ‘estandarizada’ que difícilmente se adapta a la realidad de la región del Magdalena Medio, caracterizada por su informalidad, fragmentación, baja institucionalidad y pobreza. Como refiere el padre Eliécer Soto (2007, entrevista), de la Pastoral Social de Barrancabermeja,

[...] a veces los proyectos sufren en su ejecución por que no hay como legalizar o soportar un gasto cumpliendo con todas las normas. No porque no se quiera, sino porque, en una vereda de San Pablo, Bolívar, por ejemplo, hay gente que no tiene un registro tributario; hay gente que nunca ha salido del monte.

Como se evidencia en este relato, la normatividad de la CE ha chocado con la realidad social de la región, lo que se figura como un factor de grandísima relevancia política y una condicionante esencial para su potencial de construcción de la paz y de transformación del conflicto. Como Libardo Valderrama (2007, entrevista) afirma: “el laboratorio de paz no pretende ser una empresa de proyectos. Los proyectos son un medio para construir la paz y el desarrollo sostenible”.

A pesar de la imposición de este cinturón técnico-administrativo al proceso, es preciso señalar que no se introdujeron dinámicas verticales por la UE en otros ámbitos. Nunca hubo, en particular, un condicionamiento, restricción o imposición por parte de la UE a qué proyectos de base se deberían apoyar o productos económicos se deberían sembrar y financiar. Como señala Miriam Villegas (2008, entrevista) de la CDPMM, “ninguno nos ha impuesto – Es que ustedes deben sembrar esto porque estamos necesitando biodiesel–Jamás, eso jamás”, hecho que deconstruye en gran medida, la perspectiva y lectura recurrente en Colombia de la participación europea con base en el apetito europeo por determinados recursos o bienes naturales colombianos.

## Los proyectos y procesos del laboratorio de paz: la construcción de la paz desde las veredas

El laboratorio de paz es una iniciativa ubicada conceptual y físicamente en un nivel micro. Tiene los pies bien asentados en el terreno, en el medio del conflicto.



La experiencia es intrínsecamente local: nace en lo local; se estructura en y se diseña para lo local; se desarrolla en lo local. Como refiere el padre Rafael Castillo (2008, entrevista), “un PDP no se hace en las vías principales, se hace por las trochas, por las vías que más sufrieron”. Su esencia es la construcción de paz desde un nivel local y regional. Busca transformar regionalmente las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales que sostienen y alimentan el conflicto. Es un *peacebuilding from below*, una construcción de paz desde abajo. Su labor se inserta en una microterritorialidad. Esta ha sido necesariamente la escala de actuación del laboratorio de paz y sus proyectos, aunque la iniciativa sea atravesada y se conecte a las macrodinámicas de la paz y del conflicto y se desarrolle en un constante vaivén entre el nivel micro y el macro. El laboratorio se ha situado entre microconflictos y el macroconflicto, buscando navegar en medio de la violencia.

En esta medida, es importante cuestionar cómo su filosofía y su enfoque para la paz y sus principios e ideas políticas particulares han sido traducidas en la práctica, cómo han sido convertidas para su contexto, en otras palabras, ¿cómo se construye, de forma pragmática o creativa, la paz desde la vereda? ¿Cómo las ideas abstractas se vuelven significativas? ¿Cómo los pobladores crean cotidianamente en la región del Magdalena Medio ‘la vida digna’, y ponen en práctica la persecución de los objetivos planteados? ¿En qué medida y de qué forma se construye una paz positiva a nivel de la base? ¿Qué es la ‘paz pragmática’ a nivel local (Barnes, 2005, p. 19)? ¿Cómo se crea inclusión para los sectores sociales excluidos? ¿Cómo el laboratorio interviene sobre los canales que sostienen y alimentan el conflicto en el terreno? ¿De qué forma los proyectos del laboratorio inciden o procuran incidir sobre las causas estructurales del conflicto? ¿Cómo se pone en marcha la metodología participativa? ¿Qué factores bloquean las vías para la paz? En resumen, ¿por qué vías camina la construcción de la paz desde la base del laboratorio de paz en el Magdalena Medio?

Así, esta sección del capítulo pretende mostrar la complejidad de la transformación del conflicto en el terreno y ser un fresco de la historia viva y cotidiana de la construcción de paz desde los pobladores, las comunidades y organizaciones del Magdalena Medio en el marco del laboratorio de paz, mediante el análisis de los proyectos y procesos, de las iniciativas, esperanzas, sueños, dificultades y angustias de quienes sufren en la piel las violencias del conflicto armado y sobre su sudor buscan construir la paz en la región y demostrar que otro Magdalena Medio es posible.

Se efectuará esencialmente un recorrido por los proyectos y procesos que desarrolla y ejecuta el laboratorio de paz en la región. No se pretende hacer una evaluación de cada uno de los proyectos, sino hacer una panorámica general y abordar una muestra representativa de los procesos de base, de forma que permita analizar, en su globalidad y especificidad, la forma de construcción de paz del laboratorio del Magdalena Medio.

Respecto a los proyectos del laboratorio de paz lo primero que se debe señalar es que, en la medida en que el laboratorio de paz no fue creado *ex nihilo*, sino sobre la base de un proceso ya en curso, el PDPMM, muchos de los proyectos del laboratorio vienen de atrás, tienen un trayecto en la región y en el marco del PDPMM anterior al laboratorio. El laboratorio de paz ha recogido muchos de sus procesos e iniciativas en marcha. Así, hay procesos en el marco del PDPMM que se volvieron proyectos del laboratorio, pero igualmente hay proyectos que se crearon en el marco del lanzamiento y convocatoria para el laboratorio de paz y que se volvieron ellos mismos procesos.

El laboratorio de paz ejecutó 338 proyectos<sup>7</sup> en su primera fase (2003-2004) y cuarenta más en la segunda (2005-2010) (PDPMM, 2005, p. 14). La ejecución de cada proyecto se delegó a una organización de base (entre las cuales se incluyen organizaciones campesinas, universidades, ONG, cooperativas, parroquias, alcaldías, radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, etc.), siendo que algunos proyectos han sido de ejecución directa de la CDPMM, como el Observatorio de Paz Integral (OPI). Estas organizaciones ejecutoras fortalecieron el proceso y se fortalecieron en el proceso (PDPMM, 2005, p. 51).

El laboratorio de paz reunió en la primera fase (2003 y 2004) 164 mil participantes directos entre sus diversas áreas (PDPMM, 2005, p. 14) (aunque haya aún en todos los proyectos beneficiarios indirectos no contabilizados). Entre los participantes de los proyectos se cuentan fundamentalmente comunidades y pobladores de sectores sociales excluidos. El 85% de los beneficiarios presenta niveles elevados de pobreza (PDPMM, 2005, p. 16), lo que configura un perfil social de los participantes como socioeconómicamente marginados, y convierte los proyectos

---

7 80 + 59 de infraestructura, 44 de procesos sociales, cultura, y gobernabilidad, 85 + 17 de procesos productivos y 37 + 16 de escenarios de paz.

del laboratorio en instrumentos para combatir la exclusión, empoderar las comunidades y generar capacidades.

Asimismo, se pretende que cada proyecto sea una microplataforma para la transformación del conflicto, o una microtransformación de expresiones diferentes del conflicto, y un espacio de negociación, conciliación y diálogo entre diferentes sectores e intereses (PDPMM, 2005, p. 6). No se conciben ni entienden como un fin, sino como un medio para combatir la exclusión y para generar participación, desarrollo y paz a nivel local y proyectar horizontes de transformación del conflicto a nivel nacional (Katz, 2004, p. 33). Los proyectos y procesos del laboratorio de paz son expresiones de ‘pequeñas paces’, son ‘micro-paces’ construidas y desarrolladas por la transformación de expresiones del conflicto a una escala micro.

Estos proyectos se han desarrollado en treinta municipios del Magdalena Medio, que incluyen tanto zonas de presencia y control insurgente como paramilitar, porque, como afirma De Roux, “así es el mapa del Magdalena Medio” (PDPMM, 2005, p. 5).

## Los componentes del laboratorio de paz

El laboratorio de paz configura, en sus componentes, un amplio, multidisciplinario y multidimensional rango de proyectos, procesos sociales, programas e iniciativas, que buscan traducir su filosofía y enfoque para la paz en la práctica y contexto de las veredas de la región y encontrar vías propias para la paz y el desarrollo. Representa un macroproyecto de paz que se desdobra en un abanico de microproyectos de paz, que se enfocan sobre varios aspectos y elementos de la construcción de paz, bajo una aproximación integral y un concepto amplio de la paz.

Los proyectos se agruparon en tres componentes y líneas estratégicas (PDPMM, 2007) que integran proyectos con naturalezas, actores y modalidades muy distintas, desde proyectos de frutales, redes de jóvenes, emisoras comunitarias hasta proyectos con las defensorías del pueblo. El laboratorio emerge como una especie de ‘feria de paz’, en donde en cada ‘tienda’ se trabaja un determinado componente y aspecto de la construcción de la paz. Así como la guerra en el Magdalena Medio son muchas guerras y un macroconflicto se compone de muchos microconflictos, la construcción de paz en esta región y en el ámbito del laboratorio, son muchas paces. Hay

procesos y experiencias radicalmente diferentes, pero con un eje de coherencia que es la paz.

La primera línea estratégica del laboratorio de paz se refirió a “Escenarios de paz, concertación y derechos humanos”. Puede considerarse una línea de construcción de paz *tout court*, en otras palabras, una línea que busca incidir sobre temáticas y actividades directamente relacionadas con el conflicto, enfocándose fundamentalmente en dinámicas de negociación, diálogos de paz y derechos humanos (Barreto Henriques, 2009a, p. 560). Se enfocaba fundamentalmente en la dimensión política de la construcción de paz. Con ella se proponía contribuir a la consolidación de las dinámicas sociales e institucionales que propician la coexistencia civil y la protección integral de los derechos humanos en los escenarios del conflicto del Magdalena Medio, a través del fortalecimiento de los “Espacios humanitarios”, el diseño y ejecución de estrategias de protección de grupos vulnerables y el apoyo a las instituciones democráticas (PDPMM, 2007).

La segunda línea se componía de “Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática”. Buscaba esencialmente fortalecer la sociedad civil y empoderar a los actores sociales, de forma tal que se mitigaran los efectos del conflicto sobre la población civil y se crearan sujetos políticos orientados a la paz. Se propuso potenciar actores sociales y políticos para incrementar la gobernabilidad democrática por medio del fortalecimiento de las expresiones de la sociedad civil y la transformación de las instituciones a niveles local y regional (PDPMM, 2007).

Finalmente, la tercera línea estratégica correspondía a “Procesos productivos ambientales para la equidad y el desarrollo sostenible”. Constituía una estrategia de desarrollo y sostenibilidad que pretendía movilizar al Magdalena Medio hacia una economía de paz, focalizándose primordialmente sobre sectores tradicionalmente excluidos. Se concebía como un proceso de generación de vida con dignidad y sin exclusiones, llevado a cabo por medios lícitos, por personas en armonía de género y con la naturaleza (PDPMM, 2007). Integraba esencialmente proyectos productivos.

Esto estructuraba tres grandes pilares en el laboratorio de paz, que reflejan su concepción de paz y su enfoque de transformación del conflicto y configuraba una tridimensionalidad, al encerrar una línea eminentemente política, una línea esencialmente social y una línea fundamentalmente económica. No obstante, estas no eran áreas estancadas, estaban interconectadas y la mayoría de los proyectos tenían

simultáneamente dimensiones de los tres ejes estratégicos. La paz y la construcción de paz solo pueden ser pensadas y construidas como un todo.

## Escenarios de paz, concertación y derechos humanos: la dimensión política de la construcción de la paz

En la primera línea estratégica del laboratorio de paz se incluyen proyectos como el Observatorio de Paz Integral (OPI), la iniciativa “Comunas territorio de no violencia”, el programa de fortalecimiento de las defensorías del pueblo, el proyecto “Acciones contra minas antipersonales” y los “Espacios humanitarios” (PDPMM, 2005, p. 22), proyecto que se evidenció como el más importante de esta línea y el que consumió el mayor número de recursos. Se enfocaban en temas eminentemente políticos y relacionados con la violencia directa en la región, incluyendo esencialmente procesos de resistencia civil y protección de los derechos humanos.

El OPI es un proyecto ejecutado directamente por la CDPMM, destinado a acotar y sistematizar las grandes dinámicas de paz, violencia en la región y el panorama de cumplimiento y violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH). Ha hecho un trabajo notable de visibilización y sistematización no solo de los procesos de violencia en el Magdalena Medio, sino de las varias iniciativas, experiencias y eventos de construcción de paz que emergen y se vienen desarrollando en este territorio (PDPMM, 2005, p. 25).

El proyecto de fortalecimiento de la defensoría del pueblo destaca por su contribución a la protección y promoción de los derechos humanos y el DIH junto a las poblaciones y comunidades más marginadas y victimizadas de la región del Magdalena Medio. El proyecto, que financió cinco equipos defensoriales compuestos por abogados y asistentes, fortaleció este organismo del Estado en la región y apoyó la experiencia de los “Espacios humanitarios” (PDPMM, 2005: 22). Proporcionó así un instrumento válido y de gran importancia en la defensa de la vida en la región, en la mitigación de la exclusión política y en el acercamiento del Estado, la institucionalidad y la democracia a sus ciudadanos, en zonas donde han sido históricamente ajenos. Ha contribuido a enseñar a los pobladores que tienen derechos efectivos, concientizarse y apropiarse de esos mismos derechos y

reivindicarlos, lo que constituye verdaderamente una forma de inclusión política y construcción de la democracia, elementos tan esenciales a la construcción de una paz positiva y sostenible en el país y la región del Magdalena Medio.

“Comunas territorios de no violencia” ha sido un proyecto ejecutado por la Diócesis de Barrancabermeja con vista a fortalecer la sociedad civil en las Comunas 4, 5 y 6 de Barrancabermeja (Castilla, 2008, entrevista). Tuvo origen en el 2001, cuando el PDPMM entró en las comunas populares de Barrancabermeja “en medio de toda la candela”, como refiere Juan de Dios Castilla (2008, entrevista), es decir, en el momento más duro del enfrentamiento entre las guerrillas y el paramilitarismo en esta ciudad, en el que la violencia alcanzaba su punto máximo de intensidad. Partió de la necesidad de romper con el estigma que tiene la ciudad de Barrancabermeja y en particular, sus comunas nororientales, desde los años 80, como escenario de guerra. Las comunas de Barrancabermeja son territorios donde en un primer momento la guerrilla (el ELN, las FARC e incluso el EPL), y posteriormente los paramilitares tuvieron asiento y allí sembraron el dolor, sometieron a la gente, e impusieron códigos de comportamiento<sup>8</sup>.

En esta medida, se ha pretendido con este proyecto convertir estos territorios de guerra en territorios de paz y no violencia. La labor del proyecto se centró en tres elementos: en primer lugar, reconstruir el tejido social por medio de la integración de la comunidad y la recuperación del espíritu de solidaridad, amistad, reconciliación y hermandad entre los habitantes de las comunas, en territorios profundamente marcados por el dolor, el miedo, la desconfianza y el señalamiento. El segundo elemento buscó generar procesos de reflexión alternativa a la violencia, que se construyeron a partir del Evangelio, complementado con textos de pacifistas como Gandhi y Martin Luther King. El tercer elemento se enfocó en el mejoramiento de las condiciones materiales de las comunas populares, con vista a incidir sobre el nivel de pobreza de los pobladores (Castilla, 2007, entrevista).

Esta es una iniciativa que se configura como un proyecto de construcción colectiva de un espacio territorial y una ciudad, con base en un rechazo de la violencia,

---

8 La expresión autoritaria del control de los grupos armados sobre la población de las comunas pasaba por la violencia sobre líderes comunales, la sumisión de las formas de organización y expresión, así como por elementos cotidianos de comportamiento, como el control sobre la apariencia física, la prohibición de determinadas expresiones de lenguaje asociadas a otros grupos armados, el control y punición de la criminalidad, y la represión de la homosexualidad (PDPMM, 2005, p. 22).

que es a la vez social, política y cultural. La construcción de la paz en este proyecto es entendida por los pobladores de las comunas como la forma de poder construir diariamente su propia comunidad y su propia región, sin amenazas ni presiones, en plena libertad y democracia. Es un casamiento del concepto popular, cotidiano y vivencial de paz de la gente, como tranquilidad y estabilidad, con el concepto político (Castilla, 2007, entrevista).

La vía de la no violencia preconizada por esta iniciativa tiene un largo camino a recorrer. Las comunas populares de Barrancabermeja siguen siendo territorios adoloridos por la violencia armada y profundas carencias. El reto es inmenso. Sin embargo, es evidente una disminución en los asesinatos perpetrados en estas zonas, que en los primeros meses de 2001 ascendían a 25 casos semanales y actualmente evidencian cifras mucho más bajas (PDPMM, 2005, p. 22).

### *Los “Espacios humanitarios” y las gestiones de paz*

Uno de los más importantes, interesantes y ambiciosos proyectos del laboratorio de paz integrados en la línea 1 fueron los así llamados “Espacios humanitarios”. Eran fundamentalmente espacios y procesos de resistencia civil a los grupos armados, destinados a prevenir, por la vía del empoderamiento y desarrollo de las comunidades locales, el desplazamiento de los campesinos de sus territorios y garantizar la protección de sus vidas.

Fueron concebidos como una forma para “crear condiciones favorables para la vida de los pobladores(as) en los territorios de más alto impacto del conflicto armado, escasa presencia del Estado, y por tanto, mayor vulnerabilidad de la población civil” (PDPMM, 2007). Representaron la presencia del laboratorio donde estaba la guerra, en el corazón del conflicto armado y de las poblaciones sometidas y arrinconadas por la violencia (Vargas, 2007, entrevista). Asimismo, implicaban una presencia e intervención del laboratorio en las zonas rurales y campesinas, en los territorios más marcados por la exclusión regional.

Corresponden a lugares donde la población civil ha enfrentado una alta y constante presión de los paramilitares y las guerrillas (y a veces del ejército nacional) y ha decidido, a raíz de las falencias del Estado y su incapacidad para brindar protección, auto-organizarse y enfrentar el problema directamente. Estos son los lugares donde la gente dijo ‘no más’ a la guerra, y declaró su autonomía frente a los actores del

conflicto armado (Vargas, 2007, entrevista). Eligieron no unirse a los grupos armados ni dejar el territorio al cual pertenecen. Tomaron un tercer camino: el camino de la desobediencia civil y la resistencia civil a través de la unión de la comunidad (Barreto Henriques, 2007, p. 23). En esta medida, es una iniciativa que demuestra alguna similitud con experiencias como las Comunidades de Paz en Colombia u otras iniciativas desarrolladas por grupos indígenas.

Surgieron frente a la necesidad preeminente de proteger la vida de los pobladores y las comunidades, después de episodios determinantes como la masacre del 16 de mayo de 1998 en la comuna 7 de Barrancabermeja, la Masacre de San Pablo y toda la persecución paramilitar en la cuenca del río Cimitarra.

Los “Espacios humanitarios” fueron introducidos en 2003 durante la segunda fase del Laboratorio de paz del Magdalena Medio (De Roux, 2005, p. 42) y reúnen varias iniciativas y comunidades que habían empezado a desarrollar procesos de resistencia o diálogo con los actores armados, y se habían convertido en protagonistas en la búsqueda de la paz en la región (PNUD, 2007, p. 18).

Fueron planeados y estructurados para trece zonas críticas<sup>9</sup>, donde las causas y efectos del conflicto y de la economía de la violencia estaban más concentrados y la población estaba más expuesta y sometida a la violencia y bloqueos. Se caracterizan por ser eminentemente zonas rurales y periféricas, que enfrentan situaciones de extrema pobreza, marginalidad, violencia, existencia de plantaciones de coca y débil presencia del Estado (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 18).

Los “Espacios humanitarios” son espacios socio-territoriales en los cuales se busca que la comunidad se cohesione internamente frente al conflicto, identifique las causas estructurales del conflicto y empiece a enfrentarlas localmente, por medio de procesos de desarrollo, de articulación con las instituciones y de procesos sociales y culturales de empoderamiento de la comunidad (Silva, 2007, entrevista). Su propósito es construir una alternativa ciudadana al conflicto, generar espacios de

9 Estos incluyen: proceso territorial Comité de Integración de Comunidades Agro-mineras del Sur de Bolívar-San Pablo; Espacio humanitario del Bajo Peñón; Comunidades de Borrascoso-Opón, Landázuri; Proceso de paz y desarrollo integral de La India; Zona de desarrollo integral del Sur de Bolívar (San Pablo, Simití y Cantagallo); Comunidades Agro-mineras de la Serranía de San Lucas; Zona de reserva campesina de Morales y Arenal; Proceso soberano comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado-Corcovado; Consejo permanente por la vida, la justicia y la paz del Alto Arenal; Proceso ciudadano por Tiquisio; Proceso territorial por la vida, la convivencia y el desarrollo, parte alta de Río Viejo; Espacio humanitario de la Serranía del Perijá y la zona urbana de Aguachica- Malokas protegidas del sur del César; Zona rural de Santa Rosa y Simití (PDPMM, 2010).



diálogo (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 19) y símbolos colectivos de solidaridad y afirmación de dignidad. En esta medida, los “Espacios humanitarios” son microespacios de paz, pequeños enclaves en donde criterios de convivencia y civilidad son respetados por las comunidades (Garavito, 2010). Se rigen por los fundamentos de la protección de la vida y del territorio, el desarrollo y la paz de las comunidades, y el respeto por los derechos humanos y el DIH.

Para José Antonio Páez (2007), los “Espacios humanitarios” son de alguna manera la inversión de la teoría del foco del Che Guevara. En vez de tratar de identificar y multiplicar pequeños focos de insurrección y guerra de liberación, los “Espacios humanitarios” intentan concentrar esfuerzos para proteger la población y para lograr reglas mínimas humanitarias en pequeños territorios afectados por el conflicto. Como en la aproximación de Guevara, esta pequeña intervención se espera que sea un ejemplo positivo que pueda diseminarse en un marco social y en escenarios más amplios. Corresponde, en alguna medida, a un ‘foquismo’ humanitario (Barreto Henriques, 2007, p. 25).

La estrategia de protección de las comunidades se ha basado en varios elementos: en primer lugar, en la búsqueda de la aplicación del derecho humanitario de distinción entre la población civil y los combatientes, y entre los bienes públicos y los objetivos militares. Los “Espacios humanitarios” son, sobre todo, procesos sociales de defensa de la vida y de protección de la población. Intentan disminuir las agresiones contra los civiles y contra las instalaciones sociales y productivas y buscan la no intervención ni presencia de los actores armados (PDPMM, 2007).

En segundo lugar, los “Espacios humanitarios” han recurrido a la interpelación de la institucionalidad y articulación con el Estado, con vista a garantizar niveles mínimos de protección y de seguridad para la población civil, en defensa de la vida y de los derechos de la población (PDPMM, 2010). Se entiende el mejoramiento de la respuesta estatal y de la presencia legítima del Estado en el territorio como un garante de los derechos humanos (Páez, 2007). Efectivamente, estos espacios corresponden a territorios de una extremadamente débil y precaria presencia del Estado, donde la única faz de institucionalidad que las poblaciones han conocido es el ejército nacional, a menudo en un modo represivo. Como el exdirector de la CDPMM refiere,

[...] la gente solo conoce el rostro de la guerra, no de la salud o de la educación [...] [Los “Espacios humanitarios”, entonces] buscan que

la gente comience a descubrirse como ciudadanos de este país y a encontrar otras formas de institucionalidad y una nueva cara del Estado más allá de los fusiles”. (Valderrama, 2007, entrevista)

A este respecto, ha sido particularmente relevante el trabajo del laboratorio de paz con las alcaldías municipales y la defensoría del pueblo, pero también, en algunos casos, con entidades internacionales como las brigadas internacionales de paz, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (Roux, 2008, entrevista). En este ámbito, se ha proporcionado e instituido un proceso de diálogo entre las comunidades y la institucionalidad, que le ha permitido a la gente descubrir que podía ser oída, que alguien podía escuchar sus quejas, y reconocerse a sí mismos como ciudadanos (Valderrama, 2007, entrevista).

Esta articulación con la institucionalidad corresponde, en algunos casos, como el de La India, a niveles de alguna intensidad que permiten que el mismo “Espacio humanitario” se haya convertido en un mecanismo de participación política y participación en la política pública. Como señala un participante del “Espacio humanitario” de La India, “los pobladores empezamos a ver al “Espacio humanitario” como una alternativa para participar en decisiones políticas haciendo que tomemos las decisiones en las mismas asambleas” (Páez, 2007, p. 14).

En tercer lugar, la estrategia de resistencia ha pasado por la unión de la comunidad frente a los actores armados. Los pobladores están conscientes de que, como señalaron los participantes de un “Espacio humanitario”, “juntando nuestros miedos, somos más” (citado por Páez, 2007, p. 16). En esta medida, han buscado generar símbolos colectivos de solidaridad y afirmación de la dignidad, que les permitan ser más fuertes y tener más instrumentos y capacidad de resistencia y diálogo con los grupos alzados en armas, de manera que se hacen respetar y garantizan la no intervención de estos grupos (PDPMM, 2010).

En cuarto lugar, la estrategia de protección ha pasado por una fusión del proceso de resistencia social civil a un proceso de desarrollo y de ‘ocupación productiva del territorio’. Este último es concebido como un medio de arraigo al territorio y de garantizar las condiciones socioeconómicas, psicológicas y simbólicas de permanencia en las zonas rurales. De hecho, hay diferentes modalidades de desplazamiento. Como señaló Mario Martínez (2008, entrevista), de la ACVC, “comprar tierra a un campesino es desplazarlo”. La relación de un campesino con su tierra y su territorio es de una comunión, dependencia, e incluso afecto profundos. Frente a este escenario, los

“Espacios humanitarios” pasan igualmente por la búsqueda de impulsar la economía campesina, y por procesos productivos y de desarrollo alternativo.

En esta medida, tienen no solo una marca de construcción de paz negativa, sino un componente de paz positiva. No solo reaccionan frente al conflicto y buscan la protección de la población, sino procuran procesos de empoderamiento de la comunidad, de respeto por los derechos humanos y de un desarrollo que favorezca la paz. Esta dimensión permite el salto de las comunidades de una etapa de resistencia a un escalón de transformación del conflicto (Naranjo, 2006, p. 45).

En este ámbito, uno de los primeros procesos en el Magdalena Medio que inspiró la experiencia de los “Espacios humanitarios” y en cierta medida todo el PDPMM, al encerrar esta doble dinámica, es el proceso en La India en torno a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC). De hecho, a pesar de haberse constituido recientemente como “Espacio humanitario”, es un proceso social que lleva más de veinte años. Es la primera experiencia de resistencia con una dimensión productiva a través del PDPMM, así como uno de los primeros procesos de interlocución con los actores armados.

En La India la población declaró su neutralidad activa frente a todos los grupos armados y, a pesar de varias víctimas en el proceso, logró acuerdos de convivencia y autonomía con las guerrillas y los paramilitares (Molano, 2009, p. 20). Se les había presentado un ultimátum por parte del ejército, a través del cual les fue dado como opciones: que se unieran a los grupos armados, se desplazaran, o murieran. Entre las tres vías, los habitantes de la India optaron por una cuarta: la resistencia a la agresión y al desplazamiento y la generación de alternativas de vida, a través de un plan de desarrollo colectivo y participativo que propiciase la paz y la seguridad alimentaria a la población. Implicó la construcción de infraestructuras y la provisión de servicios. Se desarrolló en esta comunidad por lo tanto un concepto de paz asociado al desarrollo local y a la multiplicación de las opciones para la población, más allá de la defensa de la vida y la resistencia no violenta a los actores armados, elementos que marcan en gran medida la experiencia del laboratorio de paz (ECP, 2006, p. 8).

Finalmente, esta dimensión de diálogo con los actores armados constituye el último factor de la estrategia de supervivencia y protección de los “Espacios humanitarios” y su mayor especificidad y valor agregado, en el marco del laboratorio de paz del Magdalena Medio, pero también de los demás laboratorios de paz y PDP en Colombia. Los “Espacios humanitarios” han estado tratando de poner en su lugar

procesos de diálogo con los actores armados y mesas de conciliación, que permitan que sean respetados y que se respeten los derechos humanos y el DIH.

El ejemplo mayor y más significativo de estas gestiones con los actores armados se dio en Micoahumado. La comunidad, frente a las constantes incursiones de la guerrilla y los paramilitares en su territorio, se asoció en el medio del conflicto y se constituyó como asamblea popular en 2002 (y “Espacio humanitario” en 2004) para reivindicar sus derechos y marcar su posición frente a los actores armados. En particular, logró, con la contribución de la gestión de la iglesia, un acuerdo con el ELN para que este removiera las minas del territorio por donde transita la comunidad, lo que fue un acuerdo sin par en la región y de gran simbolismo. Asimismo, la comunidad logró que el Bloque Central Bolívar de las AUC saliera del pueblo en enero 2003, que se reconstruyera el acueducto destruido por la guerrilla, que varias familias desplazadas retornaran y que las autoridades civiles del Estado volvieran a Micoahumado (PDPMM, 2005, p. 21).

No está en consideración la negociación del control territorial de los territorios por los grupos armados, sino el mitigar su control social y político y contener sus prácticas violentas. Las comunidades, convertidas en “Espacios humanitarios”, aprendieron a unirse e interpelar a los actores armados. Si en un momento, cualquier situación considerada adversa por un actor armado se traducían fácilmente en una sentencia de muerte, hoy estas comunidades más fácilmente se unen y lo interpelan, a fin de evitarla (Páez, 2007).

Un poblador de Ciénaga del Opón narra de la siguiente forma la dinámica lograda de interlocución con los actores armados:

[...] la guerrilla está por ahí todavía en el corregimiento, pero a nosotros ahora nos respetan como Espacio Humanitario. En las reuniones que tenemos a veces escuchan, pero nos dejan quietos, no se meten. Eso fue todo un proceso hacernos respetar, porque aquí la gente ni se reunía por temor. Al principio tuvimos que dialogar con ellos y hacerles reclamos por abusos. Citamos a un comandante a la vereda La Florida y ahí le manifestamos nuestras quejas. Después fueron entendiendo que nosotros no estábamos reunidos para hacerlos quedar mal, sino para que no nos hicieran daño a nosotros como civiles. (Páez, 2007, p. 6).

De igual forma, Miriam Gutiérrez (2007, entrevista), una de las líderes de base del laboratorio de paz, describe un episodio representativo de cómo el empoderamiento

de la comunidad es un factor facilitador de la resistencia a las dinámicas violentas del conflicto y específicamente a la presión armada de los grupos ilegales. Cuenta que un día dos soldados de un grupo armado llegaron “muy verracos” a buscar el presidente de su asociación y la gente los interpeló de la siguiente forma:

[...] ¿para que lo buscan? Y, con el poder que nos da la comunidad, empezamos a rodear a los dos tipos que estaban armados y dijimos “no, ustedes pueden mandar allá, pero aquí mandamos nosotros”. Cuando los “manes” se vieron muy rodeados, empezaron a bajar la guardia. Ellos hubieron podido matar a uno, pero a 100 personas no las iban a matar.

Se plantea de esta forma por las comunidades una especie de neutralidad activa, que permite ‘microconstrucciones de paz’. No solo se contribuye a disminuir la violencia armada sobre la población, sino que se inculca la vía del diálogo y de la mediación para la resolución de conflictos y se empodera y se da voz a las comunidades política y socialmente excluidas. Configuran ejercicios y expresiones de civilidad en el medio del conflicto (Páez, 2007, p. 18), pero también una forma de transformar el conflicto desde la base y propiciar bolsas de cultura de paz. De hecho, como es reconocido por la socióloga Elise Boulding (2000 citada por Ramsbotham et al., 2005, p. 217), las culturas de la paz pueden sobrevivir realmente en pequeños espacios y ‘bolsillos’ aún en el más violento de los conflictos, como es el caso del conflicto colombiano.

De hecho, los “Espacios humanitarios” han sido instrumentos muy importantes de la civilidad en medio del conflicto. Aunque enfrentan condiciones muy difíciles, han ayudado a prevenir en varios casos el desplazamiento forzado, han reducido la vulnerabilidad de la población y sus líderes, y han contribuido a fortalecer, organizar y empoderar a las comunidades locales y a generar símbolos colectivos de solidaridad y dignidad. Estas eran comunidades marginadas y silenciadas donde los “Espacios humanitarios” han ayudado a visibilizar y a empoderar a la población (Mojica, 2007, entrevista) y desarrollar procesos políticos y sociales. Se han convertido en verdaderos instrumentos de resistencia civil y protección frente a los actores armados. Hicieron que algunas comunidades volviesen a tener cara y expresarse.

Asimismo, el hecho que se hayan desarrollado redes, no solo sociales, sino económicas, “que la gente se reúna a hablar de su cacao, de sus pollos” (Páez, 2007, entrevista), es un factor de construcción de paz. La guerra corta los vínculos sociales y los lazos afectivos y de solidaridad; como refiere el padre Hermes (2007, entrevista), del

“Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón, cada uno se restringe a sus dolores y miedos, la tónica es “la ley de la jungla, cada uno defiéndose como pueda”. Estos procesos rescatan las ilusiones, sueños y valores como la fraternidad, la generosidad, el cariño; son una forma de oxigenación y de reconstrucción del tejido social. Constituyen en gran medida lo que Mary Kaldor (1999 citada por Kurtenbach, 2005, p. 10), llama ‘islas de civilidad’, es decir, comunidades locales en zonas de guerra que plantean un desafío político a la violencia armada al reconstruir la legitimidad y una visión política positiva, cosmopolita y conectada al Estado de derecho.

Sin embargo, a pesar de sus varios logros, los “Espacios humanitarios” claramente no son islas de paz en un mar de violencia. Estos son territorios simultáneamente de paz, de violencia, de civilidad y de terror, de exclusión y de desarrollo. Los “Espacios humanitarios” están cruzados por muchas y diferenciadas dinámicas, de sentidos y modalidades diversas y a veces antagónicas.

Las dinámicas del conflicto, como las prácticas locales del clientelismo y la corrupción están aún muy presentes en estos territorios, a pesar de la presencia de los “Espacios humanitarios”. Estas iniciativas han estado bajo una fuerte presión y se han enfrentado a retos profundos y a una gran cantidad de dificultades y problemas desde los puntos de vista político, militar y organizacional (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 20). De hecho, la violencia está lejos de haber desaparecido de la región. La violencia y las violaciones de los derechos humanos han permanecido muy altos en muchas de estas áreas (Mojica, 2007, entrevista).

Estos procesos de resistencia son ellos mismos un factor propiciador de violencia de los actores armados. Varios líderes y participantes de “Espacios humanitarios” han sufrido amenazas, hostigamientos y represalias por parte de los actores armados (Páez, 2007), factor que representa una presión tremenda sobre las iniciativas y los procesos organizativos y en algunos casos ha bloqueado o ablandado la dinámica de movilización y participación.

De hecho, aunque haya una disminución general de la violencia en el Magdalena Medio en los últimos años, es apremiante preguntar si esta se debe a los logros de la movilización social y a iniciativas como los “Espacios humanitarios” o es más bien la señal de que la ‘limpieza social’ que ha aplicado el paramilitarismo en el Magdalena Medio en la última década ha podido silenciar muchas voces y movilizaciones (Molano, 2009, p. 47).

Por último, nos referiremos a dos “Espacios humanitarios” en particular, en los cuales se realizó trabajo de campo: el “Espacio humanitario” de Tiquisio, oficialmente llamado “Proceso Ciudadano por Tiquisio” y el “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón, que se ha desarrollado bajo la designación “Proceso Comunitario de Ciénaga del Opón”.

### El “Espacio humanitario” de Tiquisio

Tiquisio es un municipio en el sur del departamento de Bolívar, que cuenta con 23.000 habitantes. Es un sitio remoto, perdido entre montañas, ríos y lagos, lejos del mundo, del Estado, y de la capital de su departamento. Toma cerca de ocho horas llegar a él desde Barrancabermeja, a través de rutas sinuosas entre montañas y las aguas pardas del Río Magdalena. Asimismo, para Cartagena de Indias, la capital del Departamento, el sur de Bolívar es un territorio lejano e inhóspito. A los gobernantes en esta ciudad costera “ni se le ocurre lo que pasa allí” (Garavito, 2010). Es un territorio profundamente lejano tanto física, como social e institucionalmente. Se presentan elevados niveles de ilegalidad social, manifestos en particular en la diseminación de los cultivos de coca, pero también en aspectos tan sencillos como el hecho de que los carros no tienen placas (De Roux, 2002, p. 15).



Tiquisio

Fuente: *Miguel Henriques*

Tiquisio, como los demás “Espacios humanitarios” muestra signos visibles de pobreza, violencia, carencia de servicios públicos y ausencia de presencia institucional. Es sociológicamente una zona de campesinos y mineros, cuyo paisaje geográfico y humano lo asemeja a África subsahariana, tanto en sus colores y escenario físico, como en el hecho que allá se pueden observar casas de palo y niños negros jugando descalzos en la calle.

La violencia también ha rodeado el área por largo tiempo. El sur del Bolívar es una de las zonas más afectadas por el conflicto en la región del Magdalena Medio. El ELN ha dominado militarmente el territorio por muchos años, lo que es sintomático en su misma propuesta de una zona de encuentro para un proceso de paz en esta zona. Luego los paramilitares se tomaron el lugar, de manera similar a como lo han hecho en varios otros lugares del Magdalena Medio. La presencia de los actores armados se ha, hasta cierto punto, apaciguado en los últimos años. Sin embargo, las sinuosas rutas que llevan a Tiquisio están aún llenas de retenes del ejército, de los paramilitares y de la guerrilla, como ha sido posible comprobar en el curso de esta investigación.

En los últimos años, el paisaje lujurioso y la miríada de colores y especies que rodean a Tiquisio han encontrado un paralelo en los nuevos colores y en el élan que el “Espacio humanitario” ha traído a la zona, bajo la coordinación de la Parroquia y el liderazgo del padre Rafael Gallego (2007, p. 25). El Proceso Ciudadano por Tiquisio ha sido altamente significativo para su población. Los campesinos hablan con una sonrisa en sus rostros acerca del “Espacio humanitario” y sus realizaciones, y (en la presencia de un europeo) expresan su profunda gratitud al PDPMM y a la UE por el respaldo a la iniciativa.

Varios han sido los logros e impactos de esta iniciativa: se ha creado en el ámbito del “Espacio humanitario” una emisora de radio comunitaria, instrumento que es fundamental para la participación y visibilización de una comunidad y para el fortalecimiento de una cultura de paz; hubo pobladores que aprendieron a leer en el decurso del proceso, aunque la coherencia y la seguridad de su discurso no siempre permiten reconocerlos; la gente ha sido alfabetizada y capacitada política y culturalmente y hoy los campesinos, los mineros y las mujeres saben a quién recurrir para hacer valer sus derechos y de qué forma exigir al Estado que cumpla sus responsabilidades a nivel político, social y económico; se han vuelto conscientes de sus derechos y han aprendido a organizarse y movilizarse, elementos que contribuyen a su inclusión política. Un campesino integrante de la iniciativa señaló



que “el “Espacio humanitario” hizo más por la población en cuatro años que la alcaldía en doce.”

También, el “Espacio humanitario” ha sido un instrumento importante de resistencia al paramilitarismo y al desplazamiento forzado, que han incidido en la última década de forma severa en este territorio. Este es todavía un proceso con avances y retrocesos, en que la línea entre la resistencia civil y la protección de la población y su victimización es muy tenue. De hecho, toca señalar que, como en muchos otros escenarios sociales y espacios del Magdalena Medio, el paramilitarismo ha constituido un anatema para este “Espacio humanitario”. Un año después de la visita a esta zona, el nuevo grupo paramilitar las Águilas Negras estuvo a punto de tumbar este proceso. Se plantearon amenazas y señalamientos por parte de este grupo armado sobre sus participantes y líderes, como el padre Rafael Gallego (Redher, 2008), y algunos de sus integrantes tuvieron que salir por algún tiempo de la zona y reunirse en otros sitios de la región y del país. No obstante, el proceso no ha desaparecido y hay gente que ha retornado y sigue la movilización y la lucha social. Como señala Ubencel Duque (2008, entrevista), “la gente ha tomado una decisión de vivir en ese territorio y de jugarse en el territorio por la vida que ha soñado vivir”.



Reunión del “Espacio humanitario” de Tiquisio

Fuente: *Miguel Henriques*

## El “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón

En el “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón, me encontré con otra realidad, aunque con unas mismas ganas de sacar adelante las cosas y una misma presencia nuclear de la iglesia, en la medida que el proyecto es operado por la Parroquia de San José Obrero de Barrancabermeja. De hecho, cada proceso y cada “Espacio humanitario” tiene su especificidad y elementos particulares, propios de sus ubicaciones geográficas y de las distintas dinámicas del conflicto, aunque evidencien planteamientos, principios y orígenes comunes.

La Ciénaga del Opón es un corregimiento de Barrancabermeja compuesto por un casco urbano y nueve veredas rurales (Hermes, 2007, entrevista). Su “Espacio humanitario” surge de la necesidad de la comunidad de hacer frente a una situación de violación sistemática de los derechos humanos y del DIH en esta zona, pero también de enfrentar la realidad de exclusión y violencia estructural de este territorio que afecta sus pobladores.

Frente a este panorama y a partir de estos elementos, la comunidad de Ciénaga del Opón, organizada en un “Espacio humanitario”, planteó un “Plan de Desarrollo Integral para la Paz”, como instrumento de visibilización de las necesidades y derechos sociales de la población, como forma de quitar niños a la guerra y como herramienta de diálogo humanitario con los actores armados (Páez, 2007). Como refiere el padre Hermes (2007, entrevista), coordinador del “Espacio humanitario”, “vamos a una vereda y hacemos que la vereda despierte”. Asimismo, a través del apoyo del PDPMM se dio un proceso de acompañamiento, designado expresamente jurídico de la población, de forma que esta población, largamente victimizada y abandonada, no se sienta tan vulnerable, haga prevalecer sus derechos y, por el contrario, se capacite.

En la reunión que tuve con los pobladores y participantes del “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón, entre gallinas y niños descalzos y sonrientes, la comunidad vino a recibirme y contarme sus problemas, preocupaciones e historias. Trajeron sillas, e hicieron un círculo en torno mío y me contaron sobre su proceso.

El timbre de las voces era distinto, no todos los participantes tenían la misma claridad sobre el proceso y claramente se manifestaban niveles de participación y concientización e integración distintos, que demuestran la no linealidad de la participación e inclusión social. De hecho, en el “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón se destaca un visible problema de participación, señal de la victimización que

ha padecido la Ciénaga del Opón y del desaparecimiento de sus líderes, factor que debilita los procesos sociales y su capacidad y claridad de intervención.

En Ciénaga de Opón se mostró un horizonte de futuro y una propuesta social menos claros que en Tiquisio. Cuando se preguntó a algunos participantes del “Espacio humanitario” en qué consistían sus procesos, y cuáles eran sus inquietudes, el énfasis planteado se puso fundamentalmente en cuestiones materiales. La comunidad demostraba preocupaciones especialmente con temas de producción. “Las gallinas que me dio el laboratorio me salieron más comedoras que ponedoras”, comentó uno de los pobladores.

En realidad, como demuestra este episodio, la metodología participativa y la construcción de paz desde la base tienen sus limitaciones. A menudo, las poblaciones ansían sobre todo las cosas concretas, palpables y materiales. Les interesa lo económico, pero no tanto lo social, lo político y lo cultural. Les estimulan los recursos para producir, pero no siempre los procesos organizativos y los talleres de derechos humanos. Esta dinámica también se evidencia en cierta medida en los núcleos de pobladores, al incidir frecuentemente las propuestas municipales en cuestiones como demandas de alcantarillado y acueducto y, en bien menor medida, en temas de otra índole (Molano, 2009, p. 50).

Efectivamente, el desarrollo es fundamental para las comunidades y es un componente esencial de la paz, pero hay otras dimensiones, como la cultural, la social y la política, que son igualmente importantes y sin las cuales la paz quedaría coja y restringida. Sin embargo, es preciso señalar que la paz para las comunidades pasa en muchos casos por cosas y elementos muy sencillos y pegados a la tierra. La paz para un campesino puede tener que residir en la productividad de sus gallinas, como demostraron los pobladores de la Ciénaga del Opón. Es la paz de los “pequeños nadas” (Barreto Henriques, 2012) y en esta medida, tiene todo el valor del mundo.

## *Las gestiones de paz*

Uno de los aspectos que confieren mayor relevancia y peculiaridad al laboratorio de paz del Magdalena Medio son sus ‘gestiones de paz’ a nivel local y regional con los actores armados y su rol de mediación en conflictos sociales en la región.

Se evidencian gestiones de paz del PDPMM de diferente índole e involucrando a distintos actores políticos, sociales y armados.

En primer lugar, además de los contactos y diálogos con los actores armados en el marco de los “Espacios humanitarios”, el PDPMM ha realizado varias gestiones de paz con la insurgencia y los grupos paramilitares. Son procesos de acercamiento y diálogo que tienen como propósito y finalidad, fundamentalmente, proteger a las comunidades y la vidas de los pobladores (Bayona, 2007, entrevista), la vigencia de sus derechos, así como asegurar la consecución de las mismas iniciativas y proyectos que desarrolla el laboratorio de paz.

Son gestiones esencialmente pragmáticas y humanitarias, que parten de la perspectiva de que si se presentan situaciones de riesgo para las comunidades y los pobladores necesitan ayuda, hay que abrir canales de comunicación y hablar con quien sea necesario (‘autodefensas’, guerrilla, o ejército) para hacer frente a la situación a favor de la gente. El PDPMM parte del principio de que “el Magdalena Medio se construye con todos”, y, en esta medida, no excluye el contacto ni el diálogo, tanto con las guerrillas como los paramilitares en sus vías para la paz en la región.

Los contactos y diálogos están al servicio de la comunidad y son de vigencia estrictamente local y en este sentido, no buscan en sí mismos, legitimar a los actores armados o a procesos de paz a nivel macro (Soto, 2007, entrevista). Sin embargo, la perspectiva del laboratorio de paz es que, a pesar del bloqueo del proceso nacional de paz con las guerrillas, e independientemente de su evolución, los diálogos regionales pueden ponerse en práctica (Bayona, 2007, entrevista), y que acuerdos locales con los insurgentes y los contrainsurgentes deben ser posibles, de modo que la vida de las comunidades pueda mejorarse.

Las gestiones de paz revisten distintos protagonistas: en algunos casos, son miembros del PDPMM o de la CDPMM que asumen el protagonismo en la gestión; otras veces, es la propia comunidad que hace las propuestas y llega a acuerdos con los actores armados (Ortegón, 2007, entrevista), mediante o sin la mediación o facilitación del PDPMM.

En este proceso, el rol de Francisco De Roux (y en segundo plano de Ubencil Duque y Miriam Villegas) se evidenció como primordial, tanto en lo que respecta a los diálogos con los actores armados como con el Estado. Francisco De Roux encierra un capital de confianza y legitimidad como ningún otro actor en la región dispone, que le confiere un poder de interlocución y un estatuto sin par y la apertura de canales con los diversos actores (armados, civiles y estatales) de la región. Es una persona que se ha ganado la confianza tanto del gobierno, como del ejército, de

los distintos grupos armados y de las mismas comunidades. Desde los campesinos a los comandantes de la guerrilla y de los paramilitares, hasta el presidente de la República, lo atienden y escuchan y respetan sus palabras. Su participación genera mucha confianza y credibilidad en las gestiones de paz. El carisma de su personalidad, la legitimidad y fortaleza de sus ideas, así como su estatuto como sacerdote le confieren un rol que nadie más dispone.

De Roux ha logrado caminar de forma recta y dialogar de forma frontal y directa con prácticamente todos los actores armados y actores sociales y estatales en el Magdalena Medio y en Colombia, pero manteniendo su independencia, no dejando que lo manipulen, ni que sea cooptado por ninguno de estos actores, ni abdicando de sus principios y valores, ni de la filosofía y propósitos de paz del PDPMM. Ha tenido la libertad para abogar por sus propuestas y defender sus planteamientos, no solo como sacerdote, sino como director de la CDPMM, elemento de gran dificultad en un contexto polarizado de conflicto como el colombiano y que es en gran medida un trazo distintivo de los diálogos desarrollados por Francisco De Roux (García-Duran, 2008, entrevista).

En cierta medida, esta capacidad deriva de su condición de sacerdote. La participación e intermediación de la Iglesia es indispensable para conseguir la luz verde en varias iniciativas, tanto por parte de los actores armados, como de las autoridades nacionales y regionales (Pécaut, 2004, p. 35); pero adviene también de su enfoque ético y de su posición tolerante pero frontal, sobre la cual basa sus diálogos y gestiones de paz. Francisco De Roux (2008, entrevista) señala que los diálogos con los actores armados parten del reconocimiento de su dignidad y del respeto mutuo por la opción tomada:

Nosotros siempre empezamos las conversaciones por reconocerle la dignidad a los interlocutores. Mire: yo creo que lo que usted está haciendo, lo está haciendo porque cree que es lo mejor que puede hacer por Colombia; entienda que yo estoy haciendo lo que hago, con todos los errores que pueda, pero porque creo que es lo mejor que puedo hacer por éste país; sobre ese acto de respeto mutuo empezamos a discutir. Yo les puedo preguntar a ellos: bueno, ¿y si ustedes están luchando por la libertad, por qué secuestran? ¿Cómo es posible que ustedes que son el ejército del campesinado de Colombia siembren minas en la Serranía de San Lucas? ¿Cómo es posible que

ustedes que son el ejército de liberación, de la libertad, tengan gente secuestrada?

Las gestiones de paz de De Roux y del PDPMM se desarrollan en diferentes contextos y circunstancias, pero siempre en el sentido de protección de los valores de la vida, de la dignidad e inclusión de las comunidades y pobladores de la región.

Miriam Villegas (2008, entrevista) se refiere a un ejemplo del contenido y elementos de estas dinámicas de diálogo y negociación en el terreno:

Cuando empiezan [los actores armados] a cobrar vacuna<sup>10</sup>, entonces vamos y hablamos con ellos: “Aquí no se va a pagar vacuna, pues el campesino está apenas saliendo adelante. Además no tiene sentido que ustedes estén hablando del desarrollo del campesinado y vengan y le cobren vacuna a un campesino”.

En otros casos, los contactos del PDPMM, liderados por Francisco De Roux, permitieron la liberación de secuestrados por las FARC, como el caso de empleados de empresas de palma africana en Puerto Wilches (Molano, 2009, p. 95).

Por lo demás, estas gestiones y diálogos con los actores armados figuran como procesos de aprendizaje y empoderamiento para las comunidades. Propician que estas aprendan a defenderse y les confieren herramientas de protección y modalidades de diálogo con los actores armados para salvaguardar sus intereses (Villegas, 2008, entrevista).

Asimismo, las gestiones de paz de Francisco De Roux han salvado, en innumerables ocasiones y en innumerables episodios, vidas humanas. Fue en particular una personalidad fundamental en el periodo de terror y violencia de la expansión paramilitar en el Magdalena Medio en el inicio de la década del 2000. Una figura conectada al laboratorio de paz cuenta que cuando las Autodefensas tomaron la comuna 7 de Barrancabermeja y cercaron la ciudadela educativa, una fugaz llamada telefónica a ‘Pacho’ permitió que este corriera rápidamente a la comuna y evitara un derramamiento de sangre que parecía inevitable, logrando ‘sacar’ dos líderes del proceso de ciudadela de Barrancabermeja para Bogotá (Vargas, 2007, entrevista).

Otra anécdota es representativa de esta condición de Francisco de Roux como un elemento de protección de la gente y de la sociedad civil en el Magdalena Medio.

---

10 ‘Vacuna’ es el término popular atribuido a los impuestos sobre la población cobrados por los actores armados.

Cuando en el periodo más conturbado de la paramilitarización del Magdalena Medio y de Barrancabermeja, Guillermina Hernández, directora de la ONG “Merquemos Juntos” y una de las líderes de base más reconocidas de la ciudad de Barrancabermeja, se cruzó con Carlos Castaño, la figura mayor de las AUC, en el aeropuerto de Barrancabermeja, pensó que este estaría allá para matarla y entró en pánico. Pero en ese mismo momento avistó a Francisco de Roux en el aeropuerto y se acercó rápidamente a él y no se le separó ya más, pensando que junto de ‘Pacho’ estaría protegida y nada le iría a pasar. Francisco de Roux se ha convertido en gran medida en un chaleco antibalas simbólico para la sociedad civil arrinconada por la violencia en el Magdalena Medio, de la misma forma que el PDPMM se convirtió en una boya de salvación en una región ‘laboratorio’ de guerra y de violencias.

Sin embargo, es preciso señalar que estas gestiones y diálogos con los actores armados, como el mismo desarrollo de proyectos e iniciativas de paz en el medio del conflicto, significan caminar sobre el filo de la navaja y encierran muchísimos obstáculos, problemas y bloqueos. La dinámica nacional iniciada por el gobierno Uribe fue contraria a la consecución de diálogos regionales con los actores armados; el gobierno nacional ha interdicto los contactos y negociaciones con las guerrillas, razón por la cual estos diálogos fueron manejados de forma limitada y con discreción, o reducidos formalmente a su dimensión de ‘diálogo pastoral’. A Francisco De Roux le fue permitida o tolerada la interlocución con los actores armados, pero solamente por su función y estatuto de sacerdote, bajo la etiqueta de los ‘diálogos pastorales’.

Por lo demás, estas relaciones y diálogos con los actores armados no han eximido de riesgos a los procesos del laboratorio. Por el contrario, ha habido una presión armada sobre el PDPMM, en particular del paramilitarismo, y hubo momentos de gran tensión entre el PDPMM y los actores armados por algunos secuestros de participantes en el laboratorio, amenazas recurrentes, desplazamientos forzados de pobladores, e incluso asesinato de varios integrantes de procesos de base del laboratorio. El PDPMM cuenta hasta el momento con tres decenas de personas asesinadas en manos de los actores armados, fundamentalmente, de los grupos paramilitares.

En la lógica maniqueísta, radicalizada y polarizada de los actores armados, el PDPMM siempre ha sido visto como parte de una estrategia del enemigo, sea como contra-insurgente para la guerrilla, o insurgente para el paramilitarismo. Entre los actores de la guerra hay mucha reserva respecto al PDPMM y al laboratorio de paz,



porque estos son una opción civilista y pacífica, que, tanto en el discurso como en la práctica, deslegitiman la guerra y la vía armada como opción de acción política. La guerrilla no ve con buenos ojos que se muestre que hay caminos alternativos y pacíficos para la transformación social y el apoyo a los campesinos; el paramilitarismo ve en el laboratorio un contradictor permanente, al hablar de derechos humanos y de la cultura de la legalidad; al ejército no le gusta la denuncia de sus vínculos con el paramilitarismo y sus abusos cometidos sobre las poblaciones. En gran medida los actores armados se sienten amenazados, pues estos proyectos y procesos les quitan las bases sociales y de miedo que les confieren el control de las comunidades.

Fueron necesarias muchas aclaraciones y diálogos por parte del PDPMM para poder desarrollar su trabajo, pero las sospechas han seguido vigentes. En realidad, casi todos los proyectos del laboratorio de paz implican algún grado de concertación a nivel local para que se pongan en marcha. Toca siempre negociar con los actores armados la entrada a una zona o un corregimiento y la consecución de un proyecto.

Otro nivel de las gestiones de paz del PDPMM pasa por el diálogo con el Estado. El laboratorio de paz se evidencia como un instrumento vital de articulación y comunicación entre la sociedad civil del Magdalena Medio y la institucionalidad.

Tal como en el caso de los actores armados, este es un plano en el cual Francisco De Roux desempeñó un rol crucial. Su estatuto en Colombia le permite dialogar con las más altas esferas de la política colombiana y llevar en muchos casos la voz de los excluidos y de las bases hasta la Casa de Nariño o hacer un *lobbying* institucional para la protección de los campesinos. En Colombia no le pasa al teléfono un ministro a un alcalde del Magdalena Medio, pero a Francisco De Roux sí lo hace. Francisco De Roux tiene vía abierta para hablar con el presidente de la República, los ministros, el alto comisionado de paz, los directores de una empresa, o altos comandantes de las fuerzas armadas (Molano, 2009, p. 111).

Es una capacidad que adviene de la legitimidad de sus ideas y fuerza de sus planteamientos, enfoques y principios éticos, pero también de su condición de sacerdote respaldado por la Compañía de Jesús, y apoyado política y financieramente por la UE y la comunidad internacional.

Permite un canal de comunicación directo y rápido entre la base y las altas esferas de la política, lo que Lederach ha definido como el nivel 1 de la construcción de paz. El PDPMM es un puente entre las necesidades de las comunidades y el Estado, y



entre los pobladores del Magdalena Medio, sus intereses y expectativas y el Estado y las élites políticas y económicas de la región y del país (Molano, 2009, p. 11). En esta medida, Francisco De Roux y el PDPMM han tenido un rol fundamental en abrir puertas en un país y región de puertas y ventanas cerradas para la mayoría de su población. Se generó en este proceso una capacitación de los líderes de base y de las comunidades, en el sentido de hacer valer sus derechos y saber usar las instituciones de la democracia colombiana a su favor.

Por último, el PDPMM desarrolla un trabajo notable de mediación en los conflictos políticos, sociales y económicos de la región del Magdalena Medio. Genera escenarios y espacios de interlocución entre diversos actores y desempeña un rol en varias situaciones de conflicto social concretas, tales como conflictos laborales, entre obreros y empresas, y entre mineros y multinacionales (Páez, 2007), en cuanto facilitador del diálogo, mediador de los intereses y proponente de vías de solución o transformación del conflicto entre las partes.

Es un papel de mediación y buenos oficios, pero en la perspectiva de la inclusión de los sectores y grupos sociales excluidos y desfavorecidos. Busca fortalecer la organización de la comunidad en la defensa de sus intereses en la interlocución con el Estado (Páez, 2007) y definir estrategias para, a partir de las comunidades, resolver y transformar conflictos. Provee apoyo jurídico y político a las comunidades y organizaciones de base frente a los intereses de los empresarios, ganaderos, terratenientes, o frente a los abusos de las autoridades militares; establece canales de comunicación con el gobierno central y las autoridades competentes; provee herramientas de negociación, información y propuestas, y busca defender los intereses de las comunidades.

En este ámbito asume particular relevancia lo que llaman las ‘mesas de negociación’, espacios de concertación que identifican conflictos en la región y buscan poco a poco convertirlos en procesos de desarrollo hacia la paz, tales como el problema de la expulsión de los campesinos de la tierra, la destrucción de la vida humana a través de las masacres, y la destrucción del medio ambiente.

De hecho, el PDPMM tiene una intervención y mediación en asuntos y litigios de la vida social y económica cotidiana, pero con la perspectiva de construcción de agendas que incidan en la transformación de la violencia y de los temas estructurales que sostienen el conflicto (CDPMM, 2005, p. 5). Procura transformar los conflictos sociales y de intereses en el Magdalena Medio y conciliar modelos de desarrollo en una región en donde ha habido conflictos profundos en torno a temas

como la propiedad de la tierra (Restrepo, 2008, entrevista). Como refiere Libardo Valderrama (2007, entrevista), “cada conflicto que consigas eliminar, es un aporte para la paz, desde lo cultural, lo social, lo económico, donde sea; es decir a los actores armados que hay otros caminos”.

En este marco, el laboratorio de paz ha dispuesto de mesas de negociación en torno a la definición y establecimiento de zonas de reserva campesinas, a la titulación de tierras, al tema del petróleo (con Ecopetrol, la Occidental Petroleum, OXY, y los obreros de Barrancabermeja), en torno a la construcción de una central hidroeléctrica en el Magdalena Medio (con Isagen), y en torno al tema de la minería, en particular del carbón, en el Carmen de Chucurí con la multinacional Río Tinto, y del oro en el Sur del Bolívar (De Roux, 2008, entrevista).

Se entienden como un espacio de interlocución con los poderes económicos y los poderes políticos, para transformar o resolver los conflictos sociales y para atender la crisis humanitaria generada por el conflicto armado interno, producto de la confrontación entre guerrilla y paramilitares, guerrilla y ejército. Estos escenarios y procesos buscan transformar los conflictos en el campo económico que afectan la región, algunos de los cuales interconectan dinámicas locales y transnacionales, como el conflicto entre la minería transnacional y la artesanal, y romper las lógicas y visiones de vencedores y vencidos que estimula la guerra, y de intereses políticos y económicos incompatibles, en detrimento de lógicas de negociación de suma positiva y de relaciones más cooperativas, de respeto e inclusión. Tratan de propiciar procesos que ‘a partir de la palabra’ posibilitan generar condiciones de transformación de las causas del conflicto y violencia (ECP, 2006, p. 6) y conciliar modelos de desarrollo divergentes. Es claramente un entendimiento de la construcción de la paz como transformación creativa y no violenta de conflictos, tal como la planteó Galtung.

Esta visión se puede comprobar en las palabras de Franco Vincenti (2008, entrevista), uno de los principales protagonistas europeos en los laboratorios de paz,

[...] nuestro propósito tiene que ser pasar de la guerra al conflicto, porque conflicto siempre habrá en democracia, porque nunca va a ser igual el terrateniente con el campesino, el gran industrial con el obrero; tiene que haber compatibilización de intereses y convivencia en los espacios democráticos con reglas del juego. Entonces el conflicto a mí no me preocupa, es la guerra la que hay que parar.

La violencia es por lo tanto la expresión del fracaso de transformación positiva de los conflictos. En esta medida, las gestiones de paz del laboratorio, tanto en el plano político con el Estado y los actores armados, tanto en el plano social y económico, permiten verdaderas microtransformaciones de conflictos de varias órdenes y son una vía para la transformación del conflicto armado a nivel macro. De la misma forma, “en el PDPMM cada proyecto es entendido como una mesa de negociación y un espacio para solucionar en el diálogo las diferencias de intereses” (PDPMM, 2005, p. 6). Son, en gran medida, una forma de ‘procesos de paz’ que se distingue del concepto estricto de procesos de paz asociado a negociaciones y acuerdos de paz y que sigue una concepción más amplia, profunda y positiva de la paz y de la construcción de la paz, en cuanto al desarrollo desde lo cotidiano de relaciones pacíficas, inclusivas y basadas en la justicia (ECP, 2006, p. 6).

En este sentido toda la acción del laboratorio de paz se configura como una forma de construcción paulatina de paz positiva a nivel regional y desde la base, por la vía de encontrar medios de convivencia entre los actores armados y las comunidades, de la apertura del camino para acuerdos pacíficos, de la transformación de los conflictos sociales, de la inclusión de los sectores sociales excluidos y de articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad. Como señala Molano (2009, p. 111) “el PDPMM muestra con toda nitidez que gran parte de los conflictos de la región puede encontrar soluciones civilizadas si hay respuestas justas y equilibradas de los gobiernos”.

## Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática: la dimensión social, cultural e institucional de la construcción de la paz

El segundo eje y línea estratégica del laboratorio de paz se designó “Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática”. Integró fundamentalmente la dimensión social, cultural e institucional de la construcción de la paz, y abarcó esencialmente proyectos de empoderamiento de la sociedad civil, fortalecimiento institucional y procesos de fomento de una cultura de paz. Se ha enfocado en empoderar actores sociales y políticos y una gobernación democrática, por intermedio del refuerzo y fortalecimiento de expresiones de la sociedad civil y la transformación de las instituciones del Estado a nivel local y regional (PDPMM, 2007).

## *El fortalecimiento de la sociedad civil y de las redes sociales*

Así, bajo esta línea, el laboratorio de paz desarrolló varios proyectos y procesos sociales de fortalecimiento de la sociedad civil y empoderamiento de actores, procesos y organizaciones sociales.

El fortalecimiento de la sociedad civil y la reconstrucción del tejido social erosionado por la guerra son vistos como elementos que toman un espacio civil al conflicto armado y confieren algún blindaje a la población, o sea, funcionan como un instrumento de construcción de paz. Un tejido social fuerte permite manejar de forma mucho más firme, asertiva y menos dependiente la relación con los actores armados y previene que los actores armados tan fácilmente dominen la población.

El PDPMM y posteriormente el laboratorio de paz dieron entrada en la región en un contexto dramático para la sociedad civil del Magdalena Medio, en el cual el combate entre las fuerzas guerrilleras y contra-insurgentes incidían de forma aguda sobre la movilización social, las organizaciones sociales y ponían en riesgo su actividad y sobrevivencia. Así, estas iniciativas de paz se enmarcaron en un propósito de preservar y mantener vivo lo que Jenny Pearce (2007, p. 28) llama “el espacio de participación en medio de la violencia” y de generar un escudo de protección para el tejido social y las varias expresiones de la sociedad civil del Magdalena Medio. Se ha procurado que, a través de la participación popular y del diálogo con el otro, las comunidades se fortalezcan, que se rellenen las reservas de solidaridad y los escenarios de confianza fragilizadas por años de violencia (Vargas, 2007, p. 11) y se supere el miedo y la sumisión frente a los actores armados, que les permitan demarcarse de la violencia y de dinámicas del conflicto (De Roux, 2001, p. 7).

En este ámbito, el laboratorio ha promovido y apoyado diversos procesos sociales y organizaciones de la sociedad civil de la región con un patrimonio e historial de movilización en el Magdalena Medio, como la OFP, la ACVC y la ATCC, pero también ha impulsado nuevos procesos sociales e iniciativas, por intermedio particularmente de la creación, expansión y empoderamiento de redes sociales, como la red de jóvenes y la red de mujeres.

El impulso y reactivación de varias redes sociales de diferentes tipos, desde redes comunitarias, veredales, escolares y de pobladores, ha buscado fomentar el diálogo entre pobladores, veredas y municipios, como instrumento de superar las dinámicas

e imaginarios de polarización amigo-enemigo y los análisis duales de la realidad propiciados por las dinámicas de la guerra, así como fomentar una cultura de solidaridad y una dinámica cultural y social de desarrollo y paz (Vargas, 2007, p. 11). Así, se ha podido fortalecer varias organizaciones de base en el Magdalena Medio, enriquecer procesos sociales, construir sujetos sociales y estrechar los vínculos entre organizaciones (PDPMM, 2005, p. 51).

De hecho, uno de los principales logros del laboratorio de paz en este ámbito es que estos procesos se volvieron importantísimas plataformas de diálogo y articulación intra-sociedad civil, al permitir que distintas organizaciones y movimientos sociales de varias índoles, como grupos de campesinos, de pescadores, organizaciones de mujeres, asociaciones de trabajadores, redes de jóvenes, se aliasen, trabajasen juntos y produjesen sinergias. Se han convertido en compañeros de ruta con vista a la construcción de la paz y del desarrollo en la región del Magdalena Medio, y pares de interlocución común con la institucionalidad regional y nacional.

El laboratorio de paz del Magdalena Medio se ha convertido en un espacio de encuentro en donde convergen todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en la región (Rojas, 2008, entrevista). Así, la confluencia de estos distintos grupos y movimientos sociales ha permitido que se fortaleciese y enriqueciese el proceso social y simultáneamente que estos se fortaleciesen en el proceso. Configura una experiencia en que se evidencia que la ‘unión es paz’, expresión proclamada por la organización de base apoyada por el PDPMM “Enraizar” (PDPMM, 2004). El Laboratorio ha generado escenarios de organización colectiva y gestión comunitaria de los problemas, factor que facilita la transformación de los conflictos y confiere más poder a las comunidades y organizaciones, particularmente en el diálogo y negociación con los grupos armados. Mientras una persona sola o una organización aislada son fácilmente controlables, la unión se puede convertir en una fuerza muchas veces más grande que las propias armas.

En este ámbito la labor del PDPMM con la OFP, una de las organizaciones sociales más emblemáticas del Magdalena Medio, con un trabajo de base valiosísimo en temas de género y de clase en la región, figura como fundamental. La OFP ejecutó en el marco del laboratorio de paz el proyecto “Red Regional de Mujeres contra la guerra y por la paz”, iniciativa que ha incidido en la construcción de una red en toda la región del Magdalena Medio que acompañara social, política, cultural y económicamente a las mujeres y contribuyera a visibilizarlas. Promovió la

capacidad de las mujeres de aliarse, de trabajar mancomunadamente y tejer una red regional de mujeres contra la guerra y por la paz, con presencia en trece municipios del Magdalena Medio, a partir de las cuales se construyen propuestas conjuntas (Rojas, 2008, entrevista).

El proyecto ayudó a posicionar la OFP en el terreno y a extender su labor con las mujeres del Magdalena Medio, favoreciendo esta organización para dar el salto del nivel local al regional. Asimismo, se construyó a partir de este proyecto, y, en términos más amplios, de todo el trabajo de la OFP, un movimiento social de mujeres contra la guerra en el Magdalena Medio, que ha fortalecido las organizaciones frente a los actores armados, ha empoderado socialmente a las mujeres y ha trabajado la especificidad del rol de las mujeres en el marco del conflicto y su potencial particular en la construcción de la paz. Bajo la consigna “las mujeres no parimos hijos para la guerra” (Rojas, 2008, entrevista), la OFP y la red de mujeres se atrevieron a reivindicar que la guerra debe parar, a impulsar la resistencia civil y la autonomía de las mujeres al conflicto armado y a mostrar una vía desde las mujeres para la paz.

Este trabajo y proceso ha pasado por diversos niveles y dimensiones.

Fundamentalmente, la labor de base de la OFP ha pasado por la visibilización y afirmación de las mujeres y sus roles en el conflicto y en la construcción de la paz, y por un trabajo de base de concientización y empoderamiento. Se ha buscado poner en la agenda tanto la violencia sobre las mujeres en el marco del conflicto, como otras dimensiones de la violencia sobre las mujeres, como el tema de la violencia intrafamiliar y de la cultura machista dominante en Colombia, así como el reconocimiento integral de los derechos de la mujer.

Este apoyo a las mujeres pasó igualmente por una asesoría jurídica y un apoyo psicosocial y de recuperación emocional. Es de señalar, en particular, diversas campañas de la OFP, como la campaña “hagámosle el amor al miedo y hagámosle el amor con libertad”, que buscó trabajar el tema del miedo, bajo el principio que cuando se unen los diferentes miedos de cada uno, el grupo se fortalece y se supera ese sentimiento bloqueador (ECP, 2006, p. 10).

De hecho, la OFP es una organización que trabaja mucho desde la dimensión simbólica y cultural. Como refiere Jackline Rojas (2008, entrevista), una de las líderesas de la OFP, “a través de los símbolos construimos una forma distinta de hacer política”. Se ha trabajado, en particular, la creación y fomento de símbolos antimilitaristas y de resistencia en un trabajo con vista a la substitución de una

cultura de violencia por una cultura de paz. Un ejemplo de este labor ha sido la campaña organizada por la OFP contra la oferta de regalos y juegos de guerra a los niños, como una forma y estrategia contra la normalización y banalización del tema de la guerra y ataque a las estructuras de legitimación cultural de la violencia (OPI, 2006, p. 68).

Por otro lado, se ha trabajado la denuncia como medio de protección. La OFP, tal como el PDPMM, recurre a la utilización de los mecanismos legales que existen en Colombia, a pesar de su democracia limitada, y ‘sus expresiones mínimas en la región’, para garantizar los derechos de las poblaciones y protegerlas.

Sin embargo, a pesar del apoyo internacional y del fortalecimiento de los procesos, esta postura de resistencia de la OFP ha comportado costos altos. Significó la pérdida de vida de varias mujeres y hombres afiliados a la organización en la región, y amenazas sobre integrantes y familiares, entre ellos a la coordinadora de la organización, Yolanda Becerra, que se ha visto obligada a partir del Magdalena Medio frente al asedio sistemático que ha sufrido. Como señala Rojas (2008, entrevista), “no es fácil nadar en una corriente tan complicada”. La OFP y sus integrantes han sido blancos de muchos y sistemáticos hostigamientos y amenazas. Durante la arremetida de las autodefensas sobre Barrancabermeja en el 2001, la OFP se volvió un objetivo militar (Loingsigh, 2002, p. 20), lo que llevó a que este grupo armado demoliera la Casa de la Mujer, una infraestructura de la OFP en Barrancabermeja, que funcionaba como un local de reunión de las mujeres y en donde se encontraba un comedor comunitario y un centro de capacitación.

Sin embargo, a pesar de esta persecución, la OFP sigue resistiendo y luchando contra estas dinámicas de la violencia y nadando contra esta corriente. Como refiere Rojas (2008, entrevista), “no ha sido fácil, somos mujeres y somos tercas y seguimos construyendo la esperanza, que es lo único que no nos han podido acabar y pienso que no lo van a hacer”. Este es efectivamente uno de los grandes logros del laboratorio de paz, lograr mantener viva la luz de la esperanza, de la paz y del desarrollo en medio de las tinieblas de la violencia y la exclusión y la miseria.

En este marco de fortalecimiento de redes sociales, toca señalar igualmente el apoyo del laboratorio de paz a la formación y fortalecimiento de la red de jóvenes, conformada por alrededor de quince organizaciones juveniles de la región, que se configura como uno de los frutos sociales principales del laboratorio de paz en el Magdalena Medio.

La importancia de este proyecto deriva de varios elementos y factores. En primer lugar, los jóvenes son el grupo social sobre el cual más incide el conflicto armado y del cual se alimentan los actores de la guerra, son la carne de cañón y la materia prima de la violencia. En esta medida, el trabajo desarrollado por la red de jóvenes en el sentido de conferir ocupación y formación para los jóvenes, y de proveer alternativas de vida para este sector social, constituye un medio directo que toma espacio social al conflicto armado y construye bases para la paz directa y positiva.

A través de la participación social y cultural de los jóvenes, del involucramiento en grupos de canto y baile, se inspira el amor a la vida y se rescatan jóvenes al conflicto. Como reconoce Mayerly Méndez (2008, entrevista), una de las integrantes de esta red, “solamente el hecho de que jóvenes estuvieran en una organización, que se sentaran a hablar, a hacer amigos y a compartir su tiempo, ya eso generaba que la guerra y los actores armados desaparecieran como opción de vida”.

De hecho, el trabajo de la red de jóvenes ha contribuido a una desvinculación de la opción armada a varios niveles. Con base en este proceso, muchos jóvenes han rechazado el servicio militar obligatorio y en algunos casos, se plantearon como objetores de conciencia. Así, está en juego claramente una deslegitimación cultural de la violencia, o en otras palabras, la construcción de una paz positiva en su dimensión cultural.

Asimismo, en el marco de la red de jóvenes se ha desarrollado igualmente una diversidad de actividades e iniciativas en áreas como la salud sexual y reproductiva, el rescate de la cultura juvenil y la sensibilización a la importancia del voto a conciencia.

En el ámbito de este último tema, la red de jóvenes ha desarrollado campañas pedagógicas que pretendían profundizar los procesos democráticos en la ciudad de Barrancabermeja y luchar contra la cultura política clientelista vigente. Como cuenta Mayerly Méndez (2008, entrevista),

[...] por toda la ciudad, comunas y corregimientos le decíamos a la gente: vote de manera consciente, piense muy bien por quién va a votar, no por la persona que usted más quiere, o porque le da mercado o le da esto, elija cual es la propuesta más apropiada para el desarrollo de la ciudad.

Se figura así como un medio de construcción local de la democracia y transformación de la cultura política. Este proceso ha dado frutos no solo entre los integrantes de la red, como en el mismo panorama social y político de la región. Se han formado jóvenes con conciencia política, una cultura del diálogo, y un comprometimiento con



la transformación social que evidencian un creciente rol de liderazgo y movilización social en la región. Algunos jóvenes formados en los procesos de la red de jóvenes y de las organizaciones juveniles apoyadas por el PDPMM y el laboratorio de paz terminaron siendo políticos y líderes de sus comunidades. El caso más representativo de esto es el alcalde de Barrancabermeja (2008-2011), Carlos Contreras, y su equipo gubernativo, compuesto por un *staff* muy joven, en el que figuraron varios elementos afiliados a los procesos juveniles del PDPMM.

Esto configura un ejemplo de cómo organizaciones que tuvieron su impulso con el PDPMM y el laboratorio de paz hoy caminan solas, y llegan a lugares de destaque de la sociedad del Magdalena Medio, contribuyendo a otra forma de hacer política en Colombia, y de pensar y plantear la democracia, la sociedad, el desarrollo. Esto estructura un potencial de transformación del conflicto y el establecimiento de bases para una paz positiva.

### *Fortalecimiento institucional*

En segundo lugar, el laboratorio de paz desarrolla y apoya diversos procesos y proyectos de fortalecimiento institucional y de la articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad, que involucran las administraciones locales.

Es una dimensión de la acción del laboratorio que reviste particular importancia pues se concibe como una forma de intervenir e incidir sobre uno de los canales principales que alimentan y sostienen el conflicto: la exclusión política y la precariedad del Estado y de las instituciones.

Históricamente, el Estado y sus instituciones han sido altamente precarios en el Magdalena Medio (como en tantas otras regiones periféricas y de colonización reciente de Colombia), tanto en su dimensión de presencia física como en su roles de regulación y providencia de servicios públicos, factores que han contribuido así al subdesarrollo y a la violencia en la región y a la deslegitimación del Estado frente a las poblaciones. Hay una percepción popular generalizada negativa de un Estado marginal, que históricamente no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades de protección y bienestar, y ha actuado en función de la conveniencia de la élite, haciendo uso del público como un instrumento patrimonial. Es un ‘Estado paradójico’, como señala María Clemencia Ramírez (2003, p. 172), por un lado represivo, amenazador y temido y por otro, ausente e incapaz de proveer. La percepción

del Estado es por lo tanto francamente negativa y este espacio no ocupado por el Estado y las instituciones ha propiciado condiciones políticas y sociales para su ocupación por los actores armados ilegales.



**Barrancabermeja**

*Fuente: Miguel Henriques*

Este panorama hizo que en su momento inicial el PDPMM, tal como gran parte de los movimientos sociales en Colombia, fuera paralelo o en contra de la institucionalidad, vista como corrupta, excluyente y opresiva y que su búsqueda por la participación de la comunidades en el espacio público se hiciera de manera alternativa a la mediación de los partidos políticos, tenidos como una estructura de clientelismo y corrupción (Molano, 2009, p. 45).

Sin embargo, en la pasaje del PDPMM para el laboratorio de paz y, en parte, por influencia del involucramiento de la UE en la iniciativa, el PDPMM se dio cuenta de la necesidad de trabajar con la institucionalidad, como medio para la paz y el desarrollo, y de que estos procesos sociales fomentados por el laboratorio pudieran únicamente cumplir su potencial de construcción de paz, si las instituciones no estuvieran en contra de la iniciativa y de la sociedad civil (Restrepo, 2008, entrevista). Fue reconocido por el equipo de la CDPMM y su director, Francisco De Roux (2002, p. 281), que, sin el respaldo y la articulación de estas iniciativas con las instituciones, estos procesos no podrían ser sostenibles. Como refiere Manuel Bayona (2007, entrevista),

“estos procesos no pueden plantearse como islas, si no se rodean de una institucionalidad, de la defensoría regional y nacional, de la procuraduría, del Ministerio del Interior, de la presidencia, quedan muy débiles”. La institucionalidad es el garante último de las condiciones para la paz, la dignidad, y el desarrollo.

Así, esta concertación y articulación con la institucionalidad es parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad de los procesos sociales y de desarrollo, sin los cuales fácilmente estos se dispararían. Por lo tanto, estos proyectos han sido concebidos como una invitación a las instituciones locales y regionales para que se apropien de las actividades, metodologías y filosofía que el laboratorio y PDPMM vienen realizando. De hecho, si la institucionalidad pública no asume y abraza, de alguna manera, los procesos del laboratorio, su impacto siempre va a quedar mitigado, pues los recursos que maneja son limitados (Mojica, 2007, entrevista; Guarín, 2008, p. 7).

El PDPMM, y particularmente el padre De Roux, entendieron esta dinámica y problemática y tuvieron claro que tenían que trabajar con la institucionalidad, no porque confiaran *per se* en la institucionalidad o fueran a permitir ser cooptados por la institucionalidad, sino como manera de interpelar la institucionalidad, en el sentido de invocar a su responsabilidad de proteger a las comunidades (Restrepo, 2008, entrevista).

Pero el PDPMM optó no solo por aceptar la institucionalidad, sino por trabajar dentro de las instituciones con la intención de transformarlas y democratizarlas, con vista a eliminar la exclusión, la impunidad, la corrupción, el clientelismo y las violaciones de derechos humanos, y establecer una cultura participativa y ciudadana. En juego está la construcción de la legitimidad pública (PDPMM, 2005, p. 42) y de un Estado verdaderamente democrático y participativo.

En este ámbito, el laboratorio de paz del Magdalena Medio ha desarrollado varios proyectos en convenio con instituciones locales, regionales y nacionales, tales como alcaldías, ministerios, secretarías y universidades públicas, en el sentido de atacar la exclusión política, incrementar la gobernabilidad democrática y transformar las instituciones a nivel local y regional: en particular, se han puesto en marcha proyectos de formación de administraciones locales, y de capacitación a funcionarios públicos en derechos civiles, teniendo en cuenta que la institucionalidad desconocía o no implementaba los derechos legalmente consagrados (Valderrama, 2007, entrevista); y de capacitación a la población para la evaluación de la gestión pública y la rendición de cuentas; proyectos de impulso, fortalecimiento y dinamización de asociaciones de municipios, tales como la de Sur del Bolívar, de Vélez y del

Cimitarra con base en los valores del público, de la legalidad, y del desarrollo humano; se desarrollaron igualmente con las alcaldías y las instituciones locales proyectos y programas de fortalecimiento de los sectores de la salud y educación, así como de construcción de vías y sistemas de saneamiento básico (PDPMM, 2005, p. 42, 53).

En este marco, cabe destacar la articulación del laboratorio de paz con la alcaldía de Barrancabermeja y la influencia que esta iniciativa ejerce en el modelo de gestión del equipo gubernativo de la ciudad. El alcalde de Barrancabermeja, Carlos Contreras, tal como varios elementos de su equipo, fue formado, en gran medida, en los procesos sociales juveniles del PDPMM y ha colaborado durante años con el Programa, razón por la cual su modelo de gestión ha sido permeado en varios elementos por la filosofía y principios políticos y de participación del PDPMM.

Diversos conceptos y metodologías con los cuales trabajó en el PDPMM han servido como aprendizaje para su nueva función como alcalde. Carlos Contreras (2008, entrevista), destaca en particular la participación, el presupuesto participativo, la rendición regular de cuentas y el trabajo conjunto y en articulación, como temas que “se planteaban desde la sociedad civil, ahora se plantean desde el gobierno”. En esta medida, la filosofía y metodología de trabajo participativas del PDPMM convergen en varios aspectos con la práctica y la concepción política del alcalde. En un planteamiento político muy cercano al del PDPMM, Contreras (2008, entrevista) subraya que no entiende la política como un ejercicio de poder, sino como “el ejercicio de la participación”, y contrasta su modelo político a los sectores políticos tradicionales de la región: “en su modelo político son ellos quienes deciden y en nuestro modelo somos nosotros quienes construimos decisiones”.

En este marco, el equipo gubernativo de la alcaldía de Barrancabermeja (2008-2011) ha desarrollado una articulación con el laboratorio de paz con vista al desarrollo colectivo de un plan de desarrollo municipal con base en una metodología participativa (PDPMM, 2005, p. 53). Este se ha concebido como un espacio donde todos se pueden encontrar, y que tenía cuatro objetivos fundamentales: la realización de una vida digna, la competitividad, la protección del medio ambiente y del territorio y la participación para la inclusión (Contreras, 2008, entrevista). Las referencias a la vida digna, participación e inclusión recogen mucho de la filosofía y discurso del PDPMM y ponen en evidencia el impacto de esta iniciativa en las políticas públicas actuales de Barrancabermeja.

Este elemento configura uno de los impactos más simbólicos del PDPMM y una evidencia de cómo es posible construir otra forma de hacer política y democratizar

desde la base el país, factor fundamental para lograr una paz positiva y sostenible en Colombia. Con estos proyectos y procesos de base se buscó promover un nuevo modelo de democracia local y relación entre el poder y los ciudadanos (Vincenti, 2008, entrevista) que pudiera sobrepasar la desconfianza de la gente hacia las instituciones y el Estado y construir un sentido de autoridad legítima en la región. Tienen en vista ampliar la participación directa de la población en la vida política, en la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas. Es una forma de incidir sobre la exclusión política, causa estructural del conflicto armado en el país.

Pero también es conducente a una forma diferente de hacer política y vivir la democracia, con base en una relación distinta y más cercana entre el ciudadano y el poder político, que encierra en sí el ideal de democracia participativa. Se propone hacer a la población descubrir que es posible otro tipo de institucionalidad que defiende los derechos de los ciudadanos. Implica el intento de superación de las prácticas políticas apoyadas en el bipartidismo histórico al servicio de la élite y de intereses particulares, del centralismo de la gobernación y de las estructuras políticas permeadas por culturas del clientelismo, antítesis de la noción de ciudadanía; pasa por la construcción de una institucionalidad basada en la rendición de cuentas, en el sentido del bien público y la legalidad, que permitan un sentido de autoridad legítima y de representación democrática (Vincenti, 2008, entrevista). En juego está la construcción de lo que Teresa Castrillón (2008, entrevista), una líderesa de base de Puerto Berrío, plantea como un municipio “para todos y para todas, no para los que sean amigos del alcalde, o familiares de los concejales”, es decir que haya una plena ‘democraticidad’ y una inclusión política de las poblaciones.

En gran medida, constituye una forma de construcción del Estado y de una institucionalidad democrática a nivel micro. Los proyectos han sido concebidos como espacios de interacción colectiva entre las comunidades, las organizaciones sociales y las instituciones, de forma que fortalezcan la confianza entre la población, los ciudadanos y la institucionalidad. Como refiere Libardo Valderrama (2007, entrevista) “la gente así siente que sus alcaldías sirven para algo”.

Esta dimensión constituye uno de los grandes acervos del laboratorio de paz, al volver esta iniciativa un instrumento y plataforma privilegiados de articulación entre la sociedad civil y el Estado y un medio de incidencia en la exclusión política, y al potenciar el impacto de los proyectos, en la medida en que se convierten en políticas públicas. Este fortalecimiento institucional figura igualmente como vital

para la transformación del conflicto, pues las instituciones son los vehículos y escenarios por excelencia de resolución pacífica de conflictos y permiten incidir en la transformación no violenta de las dinámicas del conflicto.

Asimismo, se revela como un medio fundamental de involucramiento del Estado en la protección de las comunidades y de la población civil. Se articula con la institucionalidad interpelando al Estado en el sentido de proteger a sus ciudadanos y planteando que la legitimidad y autoridad del Estado no derivan de las armas de fuego, sino de su capacidad para proteger. El laboratorio de paz preconiza por lo tanto la puesta en marcha en el Magdalena Medio de un tipo de seguridad que se aparta de las nociones tradicionales de seguridad en América Latina y en particular en Colombia: favorece la seguridad no de las instituciones y de los agentes del Estado, sino de la personas y las comunidades, es decir que se encuadra en un marco de seguridad humana (Restrepo, 2008, entrevista).

No obstante, frente a este escenario el PDPMM ha optado por la vía del diálogo y de la interpelación del Estado y de la institucionalidad como el medio considerado más eficaz de protección. Este es un elemento de alguna originalidad en el marco de la movilización social por la paz en Colombia. El planteamiento del laboratorio de paz se distingue, en particular, de la posición de iniciativas como las comunidades de paz, que, en una situación extrema de violencia y victimización, encierran una sospecha total hacia al Estado y rechazan la presencia de la institucionalidad y las fuerzas armadas (Restrepo, 2008, entrevista).

El laboratorio de paz es claramente una propuesta y un programa desde la institucionalidad. No es una propuesta revolucionaria, como la planteada por la insurgencia; los cambios estructurales que propone y por los cuales pugna se encuadran en el marco de la legalidad, del Estado de derecho, de la democracia parlamentaria colombiana y del sistema capitalista. En ese sentido tiene una matriz de cierta forma social demócrata.

Un episodio cotidiano recurrente en la vida del PDPMM es simbólicamente representativo de esto. En las innumerables ocasiones en que el padre Francisco De Roux se cruzó con guerrilleros y paramilitares en las veredas del Magdalena Medio y estos le pidieron su carnet de identidad, De Roux invariablemente no accedió a enseñárselo. Su rechazo encierra más que la mera desobediencia civil. En juego está el no reconocimiento de la autoridad ilegítima de los actores armados ilegales (De Roux, 2007, entrevista). Es a la vez un planteamiento ético y político y que encuadra

la acción del PDPMM y del laboratorio de paz en el marco de la construcción de un Estado de derecho en Colombia, en el fomento de un sentido de pertenencia a la comunidad política nacional y en una concepción de monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado en un país en el que las fuerzas armadas tienen considerable descrédito, sobre todo, en las zonas rurales.

La construcción paulatina de un Estado de derecho a nivel regional y de una cultura de la legalidad también se manifiesta en otro episodio ocurrido en el marco de los procesos de base del laboratorio de paz relatado por Javier Moncayo (2008, entrevista):

En un pueblito de Santander que se llama Bolívar, la comunidad había terminado recientemente un curso de derechos humanos. Y allí les llegó a la vereda un muchacho que venía subiendo huyendo de la guerrilla. El muchacho había violado a una niña de once años en el corregimiento de La India más abajo. Entonces lo recibieron ahí y llegó la guerrilla; la guerrilla puso preso al muchacho y dijo que lo iba a fusilar, que se lo llevaban. Entonces la gente se reunió y dijo: “bueno, pero esto ¿cómo lo enfrentamos ahora después de haber hecho este curso de derechos humanos?” Entonces dijeron “no, ¡nadie puede quitarle la vida a nadie! ¿Y qué hacemos? ¡No permitamos esto!”. Y se fueron cuarenta personas de la red a hablar con el comandante; le dijeron: “comandante, con todo respeto, usted no tiene el poder, ni la autorización para matar a nadie, y nosotros no vamos a dejar que usted mate al muchacho”. Entonces el comandante dijo “¿qué van a hacer? si quieren, ¡los mato a ustedes!” Ellos respondieron “pues mátenos; usted no puede matar a ese muchacho.” Y el tipo empezó a molestarse y al final terminó diciendo: “Bueno, ¡suelten a ese güevón! Se lo entrego. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Pues nosotros lo vamos a llevar a la policía. Y listo, se lo soltaron.

Los mecanismos de inclusión en términos sociales y políticos fomentados por el laboratorio han pasado igualmente por el impulso y apoyo a varias experiencias y procesos de planeación participativa que involucran las administraciones locales y representantes de los distintos sectores sociales y políticos, en municipios como Yondó, Santa Rosa y Cantagallo, y a un sistema regional de planeación participativa en la región. Son varios los ejemplos de este tipo de iniciativas, tales como consejos territoriales de planeación, experiencias de presupuestos participativos,



mesas de trabajo comunitarias para la formulación de planes de desarrollo municipal, ejercicios de rendición de cuentas, la realización de ‘trochas ciudadanas’, y varios ejercicios democráticos, con vista a atraer a la gente hacia el centro de las decisiones políticas y de las políticas públicas, y a fomentar una ciudadanía activa y una democracia incluyente (Villamarín, 2005, p. 93).

Fue posible presenciar un caso representativo de esta dinámica de progresiva construcción participativa en el decurso de esta investigación en la vereda del Guamo, en el Bajo Simacota. Este es un territorio supremamente marginado en términos geográficos e institucionales, situado en las inmediaciones de la serranía de los Yarigués. La cabecera municipal queda a 16 horas de viaje de esta vereda y para participar en el evento, hubo gente a la que le tocó hacer una travesía de diez horas, hecho que atestigua la desintegración y exclusión regional de grandes partes del territorio nacional colombiano. Este es igualmente un lugar que evidencia profunda exclusión y carencias en términos sociales: no dispone de saneamiento, ni de otros servicios básicos y como señala Omar, un poblador del Guamo integrado en el proceso de la zona de desarrollo integral del Bajo Simacota, “los alcaldes solo aparecían acá cada tres años para las elecciones”. Actualmente este municipio y vereda siguen padeciendo de carencias estructurales profundas. Todavía, el proceso social desarrollado en el marco del PDPMM ha posibilitado algunas transformaciones a nivel político y social de gran relevancia, en el sentido de la inclusión y participación de la población. Si antes el presupuesto municipal se manejaba exclusivamente desde la alcaldía, hoy se concibe en interacción con la comunidad y como señaló el mismo participante del proceso, se tiene consciencia de que “nosotros pobladores podemos ser constructores de nuestro futuro”. Hay un camino largo para recorrer, pero estos son pasos de suma importancia.

Estos proyectos y procesos revisten gran importancia en la medida en que son instrumentos de participación política, de democratización de la vida política local y regional, y de acercamiento de la sociedad civil y los ciudadanos de las instituciones. Son por lo tanto un medio de construcción del Estado y de eliminación o mitigación de la exclusión política que de forma tan aguda alimenta la violencia armada en Colombia.

## *La dimensión cultural de la construcción de paz*

Otro de los ejes fundamentales de la acción del laboratorio de paz tiene que ver con la dimensión cultural y educacional de la paz.



Colombia, y el Magdalena Medio, en particular, han sido históricamente ‘laboratorios’ de guerra y violencia(s). Prácticas, posturas y comportamientos violentos marcan en gran medida mucho de su imaginario. En realidad, el Magdalena Medio es un territorio profundamente permeado por la violencia armada, pero también por la violencia cultural. Hay una cultura de violencia que permea las relaciones sociales, que deriva en gran medida de la perpetuación del conflicto armado y sus impactos.

En Barrancabermeja los niños juegan a la guerra, asumiendo unos el rol de los paramilitares y otros de la guerrilla, como los indios y los *comboys*, imitando la forma como los adultos en la región se combaten. Asimismo, como Libardo Valderrama (2007, entrevista) cuenta, “si se escucha las canciones del Magdalena Medio, uno queda afligido por que algunas son a favor de la guerra; otras, de la coca”. Son formas de violencia simbólica y de legitimación estructural de la violencia que perduran y culturalmente sostienen de alguna forma el conflicto armado. Como el mismo refiere, “es toda una cultura que es preciso evolucionar”.

Así, partiendo de una concepción de la paz como un proceso social y personal, y de la misma idea planteada por la UNESCO de que si las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que se deben construir los baluartes de la paz, el laboratorio promovió varios proyectos culturales que han buscado cambiar las formas de pensar y actuar que legitiman la violencia, la exclusión socioeconómica y política, y la violación de los derechos humanos. En esta medida, el laboratorio de paz desarrolló y apoyó variadísimos proyectos, iniciativas y procesos con vista a la construcción de una cultura de paz en la región, que pretenden servir de soporte y estructura a la construcción de una paz duradera, sostenible y positiva.

Básicamente, pretende construir un imaginario colectivo favorable a la paz, por medio de una educación para la paz y los derechos humanos, el empleo de programas y talleres cívicos, actividades deportivas, iniciativas artísticas y radios comunitarias direccionadas hacia la paz, la ciudadanía, los derechos humanos y valores proclives a la paz (OPI, 2006, p. 64). La meta es construir una estructura integral de paz, en la cual se incluyan no solamente la dimensión económica y las instituciones políticas, sino las personas y los paradigmas de pensamiento (Vargas, 2007, entrevista).

### Las radios comunitarias

En el campo cultural asumen particular relevancia los proyectos desarrollados a partir de las radios comunitarias, específicamente el proyecto “Radio para la vida:

proyecto para el fortalecimiento y consolidación de comunicación radial ciudadana y comunitaria en el Magdalena Medio”, ejecutado por Aredmag. Esta es una red de radios comunitarias con enfoque en los territorios rurales, que, como señala su director, pretende ser “la voz de los que no tienen voz” (Hoyos, 2008, entrevista), y un medio de promoción de la participación pública y empoderamiento social de los campesinos.

Se concibió la red de radios comunitarias como más que un vehículo cultural o un medio de difusión musical, como un proceso social y de construcción de lo público, en torno a temas como “la ciudadanía, el género, el medio ambiente, las identidades culturales en la región, la niñez, la juventud, etc.” (Hoyos, 2008, entrevista). Como relata Julio César Hoyos (2008, entrevista),

[...] el tema era que la emisora debía convertirse en un espacio donde todas las voces estuvieran y no solamente la de los periodistas locales; entonces empezó un proceso de acercamiento entre las emisoras y las audiencias, para que las organizaciones sociales, los pobladores y las comunidades de la región también pasaran a no ser solo consumidores de lo que se producía en la emisora, si no también productores de contenido.

Las emisoras comunitarias se han convertido de esta forma en instrumentos de participación e inclusión política y social de las comunidades de las veredas del Magdalena Medio. Actores tradicionalmente excluidos e invisibles, como los jóvenes, los campesinos y las mujeres, logran por este medio ser oídos y reconocidos, participar en la esfera pública y garantizar la visibilidad de sus pensamientos, de su condición y posición social únicas (PDPMM, 2005, p. 44).

A partir de ellas no solo se llegó a las veredas y comunidades más excluidas del Magdalena Medio, sino que se promovió la discusión en estos mismos territorios de temas políticos locales, como los servicios públicos, el agua, el teléfono, las vías y la gobernabilidad. Las radios comunitarias se configuran de esta forma, no solo como un medio fundamental de participación, sino también como instrumentos de promoción de ciudadanía, entendida como la capacidad y el derecho que uno tiene como ciudadano, no solamente de votar, sino también de opinar, participar y debatir sobre los temas públicos. Asimismo, son una herramienta de empoderamiento social y político y de formación pedagógica transversal, pues en este proceso los participantes de las diversas radios adquieren y desarrollan competencias comunicativas,

de argumentación y síntesis, y capacidades analíticas, críticas, y propositivas. Por lo tanto, se configura como un proceso social de empoderamiento y transformación de los pobladores en sujetos políticos y participativos (Hoyos, 2008, entrevista).

Manuel Rondón, un joven que ha participado en una emisora, subraya igualmente la importancia que estos procesos han tenido para los jóvenes de estratos bajos de la región, pues les han dado herramientas “que de alguna manera les van a servir en la vida”, han contribuido a rescatarlos de medios de vida ilícitos, como la criminalidad, el tráfico de drogas o la adherencia a grupos armados ilegales, y a rescatar los valores, las alternativas y la confianza que a menudo el conflicto armado roba o mitiga (Blanco, 2008). En esta medida, se hizo por intermedio de las emisoras comunitarias un trabajo de gran valor en el sentido de la construcción y consolidación de un imaginario proclive a la paz.

Esta inclusión y empoderamiento que vehiculan las redes comunitarias pasa igualmente por su incidencia en las áreas rurales. AREDMAG es una red de emisoras con vocación rural, direccionada a la población del campo y con base en la participación activa de la población campesina proveniente de los espacios tradicionalmente ignorados por los medios nacionales y regionales. Da prioridad a las temáticas y realidades locales de las veredas rurales, en detrimento de las agendas urbanas y hegemónicas que marcan la mayoría de los medios colombianos.

En realidad, la exclusión regional en Colombia pasa igualmente por una incidencia casi exclusiva de los medios en problemáticas y temas urbanos, ignorando así la realidad y especificidad de la mayoría de los municipios del país de cariz eminentemente rural, y la ‘otra’ Colombia, sobre la cual incide principalmente el conflicto y de la cual deriva fundamentalmente la violencia. Este foso de percepciones respecto a la realidad colombiana y su conflicto se configura como uno de los factores que impiden su transformación.

En esta medida, AREDMAG busca colmatar este vacío y se figura como un medio de combate a la exclusión regional, al incidir preferencialmente sobre temáticas rurales, que derivan de la especificidad de estos territorios, y son estructuradas a partir del prisma de sus pobladores. Como afirma Hoyos (2008, entrevista),

[...] es una voz marginal lo que hemos tratado de traer al centro del debate [...] Nos dimos cuenta que las discusiones siempre eran urbanas, entonces decidimos: venga, incluyamos aquí la ruralidad, porque ¿cómo construimos un país que es eminentemente rural, donde los municipios son eminentemente rurales y las decisiones se toman solo

en lo urbano? Asimismo, Jorge Correa, de la emisora de San Vicente del Chucurí reitera esta perspectiva y explica el potencial y valor de esta dimensión de la siguiente forma:

[...] muchos de nuestros pueblos del Magdalena Medio empiezan a existir en el momento en que aparece la radio comunitaria. Y ese es su principal aporte a la paz en la región. Quien no existe en estos tiempos para los medios de comunicación, sencillamente no existe, no es. Empezamos a existir con nuestras propias voces reales, con nuestros cuentos, los de nuestros niños y viejos, nuestras músicas, y tratando de descubrir nuestra propia verdad, la de nuestras comunidades [...] Nosotros campesinos, nosotros estudiantes, nosotros gente de pueblo, oírnos y escucharnos tal como somos, y no como nos muestra la televisión nacional con todos esos estereotipos (citado por Blanco, 2008).

Las radios comunitarias se convierten así en la voz de los campesinos y las poblaciones de las veredas. Son una forma de llevar las periferias geográficas y sociales a los medios de comunicación dominados por las agendas hegemónicas urbanas y, en gran medida, dominados por los intereses de las élites político-económicas detentoras de los medios, de hacer lo invisible visible y, en cierta medida, de intentar reconciliar a las ‘dos Colombias’ a las que nos referimos en el tercer capítulo. Se configuran así como elementos constructores de inclusión a nivel político, social y cultural, lo que se revela como fundamental en el panorama colombiano para la construcción de la paz positiva.

## El arte para la paz

Otro de los dominios en que la apuesta en el fomento y construcción de una cultura de la paz se hace señalar es la del arte para la paz. El laboratorio de paz ha desarrollado varios proyectos e iniciativas de expresión artística con énfasis en la paz y valores proclives a la paz, como la tolerancia, el diálogo y la solidaridad. Corresponden a iniciativas que no trabajan el arte por el arte, es decir, en cuanto expresiones estrictamente artísticas, sino en cuanto medios de promoción de procesos culturales con énfasis en la paz y los derechos humanos. Buscan transformar las personas en sujetos de paz, tanto en su dimensión intrapersonal, como interpersonal.

El Magdalena Medio es una región de fuerte vocación artística con una fuerte cultura de la festividad. Como refiere Arturo Barajas (2008, entrevista), “aquí en

todos los pueblos se encuentra tamboras, teatreros, se encuentra artesanos, artistas, pintores, gente muy creativa, soñadora, emprendedora”. Así, se busca aprovechar esta dimensión cultural ribereña de la región en el sentido de la paz, y reforzarla en cuanto medio de transformación de conflictos y realización personal y colectiva de los pobladores. A través de variadísimas expresiones artísticas, como los bailes, la danza, la banda sinfónica del Magdalena Medio y las emisoras comunitarias, se ha ayudado a crear un imaginario de región, de ser humano, de ética, y unos principios de reconocimiento como sujetos (Barajas, 2008, entrevista).

En este ámbito, son buenos ejemplos el proyecto “Batuta de la comuna 7” en Barrancabermeja y el proyecto “Cultura para la vida, cultura para la paz” que se extiende a toda la región. Este último consistió fundamentalmente en una estrategia regional de cultura, que ha involucrado 18 municipios del Magdalena Medio, a través de la cual se han apoyado y financiado un amplio grupo de iniciativas y actividades, tales como “Escuelas de paz”, un banco de materiales para diversas áreas de expresión artística, la legalización de diversas asociaciones culturales, y un diplomado de formación en derechos humanos y pedagogías para el arte, que busca que por intermedio del arte se apliquen y se fomenten los derechos humanos (PDPMM, 2005, p. 44). Se pretende fundamentalmente que, a través de distintas formas de expresión artística, se construya “un camino que se aparte por completo de las armas y de cualquier otro tipo de opresión” y se fomente una “región que baile, cante y piense” (Téllez, 2005, p. 85).

El proyecto “Centro orquestal satélite II – batuta de la comuna 7 de Barrancabermeja” corresponde a un programa de formación musical para niños y jóvenes de la comuna 7 de Barrancabermeja, un territorio pautado por profundas carencias sociales, elevados niveles de pobreza, deserción escolar y violencia armada e intrafamiliar. Se concibió como una alternativa de ocupación social y emocional de los tiempos libres para los jóvenes de la comuna, basada en el aprendizaje musical, vista como un instrumento que permite a los jóvenes alejarse de situaciones de riesgo e ilegalidad, como la vinculación a los grupos armados y al cartel de la gasolina, que inciden de forma aguda sobre los sectores jóvenes de esta zona (García y Quijano, 2005, pp. 82-84).

En juego está la multiplicación de las opciones de cada uno, visto como un proceso conducente al desarrollo humano y el refuerzo de lo que Francisco De Roux generalmente llama de la ‘vida querida’. En este ámbito, el proyecto trabaja igualmente el

desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y humano de los niños y acompaña la formación musical por una formación cultural y ciudadana, apoyada en la socialización entre los niños y el fomento de actitudes y valores de responsabilidad, solidaridad, autoestima, tolerancia y trabajo en grupo (García y Quijano, 2005).

## Educación

La educación para la paz se configura como una de las principales herramientas para la construcción de una cultura de paz. Las escuelas son un importante referente de valores y una herramienta crucial para la transformación de los conflictos (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 34). En esta medida y conscientes de este hecho, el PDPMM y el laboratorio de paz han desarrollado una importante estrategia pedagógica y variados proyectos en el campo educativo. Estas ‘escuelas de paz’ pretenden propiciar espacios para el intercambio cultural, para incrementar la solidaridad, nutrir referentes simbólicos de paz y fortalecer una opinión pública sobre la paz (OPI, 2006, p. 65). Asimismo, son medios para la transformación del conflicto en Colombia, pero también para las microtransformaciones de los conflictos cotidianos de la gente en una forma positiva, imaginativa y creativa, para fomentar el uso del diálogo en detrimento de la violencia, de la negociación en detrimento de la confrontación, y de tener actitudes, posturas y valores más proclives a la paz.

Son varios los proyectos desarrollados y apoyados en el marco del laboratorio de paz en el campo educativo, tales como “Bio-pedagogía”, “Propuesta educativa de Barrancabermeja y Puerto Berrío”, el Diplomado en pedagogía para los derechos humanos, y los proyectos desarrollados con la Unipaz en Barrancabermeja. Aquí nos referiremos a tres de las experiencias más emblemáticas desarrolladas en el marco del laboratorio de paz en este campo – las “Escuelas básicas integrales para el desarrollo sostenible” (EBIDS), la “Ciudadela educativa” y el “Proyecto de la escuela campesina para el desarrollo humano (ECDH)”.

Las EBIDS son escuelas para los niños de los campesinos ubicadas en zonas rurales y de alto conflicto, como Landázuri, el Carmen, Gamarra y San Vicente de Chucuri, que se conciben como un modelo de integración para las poblaciones rurales. Asumen particular importancia en la medida en que el conflicto armado en Colombia se apoya en gran medida en las debilidades de las zonas del campo y la ausencia de programas de desarrollo rural.

Pretenden ser un medio educativo para potenciar y capacitar a los sujetos, y para desarrollar las capacidades que permitan sostener un modelo de vida en el campo y alternativas de desarrollo y paz, de forma a que “los chicos ganen herramientas para que se queden en la tierra y no se vayan” (Moncayo 2008, entrevista). De esta forma, han buscado acercar “el aula con la finca campesina” (Vargas, 2007, p. 10), a través de la formación para el trabajo y la producción en las fincas de cacao, frutales y otras siembras, pero también de una educación integral a nivel formal e informal que propicie la construcción de ciudadanía.



Ciudadela educativa

Fuente: Miguel Henriques

Más que un proyecto educativo, las EBIDS se constituyen como un proceso social, al establecer una relación cercana entre la escuela y la comunidad e involucrar en un proceso educativo colectivo a estudiantes, padres, maestros y líderes comunales, con vista a “hacer de los espacios escolares dinamizadores de paz” y a producir frutos no solo en los alumnos, sino en las familias, en las comunidades, en las veredas y en la región (PDPMM, 2005, p. 45).

Las EBIDS se volvieron el eje y la base de varios núcleos veredales para el desarrollo de una cultura de paz, en donde se cruzan los niveles de aprendizaje educativo formal con otros niveles del aprendizaje ciudadano, en torno a temas

medioambientales, simbólicos, económicos, productivos, institucionales, y alimentarios (PDPMM, 2005). Han desempeñado un rol de bastante relevancia al volver una población tradicionalmente excluida y marginada como la rural, sobre la cual incide de forma aguda la violencia y que está en la base del conflicto armado, en actores empoderados y con herramientas para involucrarse menos fácilmente en actividades de riesgo e ilegalidad, como la delincuencia, el narcotráfico, y los grupos armados ilegales. Por intermedio de estos procesos los pobladores adquieren instrumentos para, como plantea Teresa Castrillón (2008, entrevista), “defenderse mejor”. Es verdaderamente un proyecto que le ‘saca’ gente al conflicto, al proporcionarles y conferirles herramientas para huir de la violencia y de la integración en los grupos armados. Por lo demás, se configura como un medio de transformación de los conflictos, en la medida que propicia el cambio de las formas de pensamiento y de actuación.

Las EBIDS se volvieron uno de los proyectos bandera del laboratorio de paz, siendo su modelo incluso replicado y adoptado en varios municipios de la región y se han convertido en un eje de la educación rural en varios municipios del Magdalena Medio (Moncayo, 2008, entrevista). Asimismo, las EBIDS permitieron el aumento de la cobertura escolar en la región (PDPMM, 2008, p. 45).

Otro de los proyectos emblemáticos y de mayor relevancia del laboratorio de paz en este campo es la “Ciudadela educativa”, un complejo educativo ubicado en una de las zonas más violentas y pobres de la capital del Magdalena Medio, la comuna 7.

La comuna 7 es un territorio profundamente marcado por la violencia. Fue durante años un bastión del ELN y morada de sus comandantes. La entrada en 1998 de las autodefensas paramilitares del Bloque Central Bolívar de Carlos Castaño en Barrancabermeja significó para esta comuna un verdadero baño de sangre: los enfrentamientos armados se multiplicaron e intensificaron, y se evidenció en la ciudad un promedio de cinco asesinatos diarios durante cuatro meses (PNUD, 2007, p. 18). Asimismo, la comuna 7 es un escenario de violencia estructural muy marcada, predominando los pobladores de estratos 1 y 2, una parte substancial de ellos conformada por desplazados, y en donde se evidencian exclusiones varias, y situaciones agudas de marginalidad e ilegalidad, así como una gran implantación del cartel de la gasolina.

El proyecto Ciudadela educativa surgió en 1997 en el escenario social, político y armado de la comuna 7, en un periodo en que se vivía y respiraba un ambiente de terror. Tuvo origen en una iniciativa de la comunidad que, frente a la construcción



de una planta termoeléctrica en la comuna bajo un gran dispositivo de seguridad, respondió frente a este evento, poniendo en evidencia la contrastante deuda social que manifestaba la comuna 7 en términos educativos y sociales, particularmente en la ausencia de infraestructuras, y reivindicó la construcción de un colegio (Cárdenas, 2008, entrevista).

Se inició así un diálogo y una negociación entre la comunidad, las instituciones del Estado y la empresa privada de electricidad, en torno a la propuesta de utilizar los mismos recursos destinados a la seguridad de las obras, a favor de la educación y el desarrollo de la comuna. Se pretendía suavizar la dimensión de seguridad del proyecto de la planta eléctrica y así evitar el deterioro de la relación en la comuna entre la insurgencia y las fuerzas armadas. El diálogo culminó en la concesión por parte del Ministerio de Defensa en el 2000 de un terreno para la construcción de un colegio de secundaria y de la aprobación por parte de la gobernación de Santander en el 2002 de la creación de la denominada “Ciudadela educativa del Magdalena Medio”, que entró en actividades en el 2003 (Vargas, 2007, p. 24).

Así, la Ciudadela educativa se conformó como una institución de carácter público, con el apoyo político y financiero del laboratorio de paz, que integra el nivel preescolar, básico y medio técnico, y la participación de aproximadamente 4.000 estudiantes, en torno a un currículo integral que promueve la formación ciudadana de los habitantes y el desarrollo económico con énfasis en la producción agrícola y agroindustrial (PDPMM, 2005, p. 43).

De hecho, la Ciudadela educativa no es simplemente una escuela o un proyecto educativo, se concibe como un espacio público rodeado de lo que Giovanny Cárdenas (2008, entrevista), uno de los líderes de base de la iniciativa, designó como una “cerca viva”. Frente al escenario de exclusión y violencia en que se inserta, la Ciudadela educativa trascendió el carácter estrictamente educativo, para posesionarse “sobre toda la comuna 7” (Cárdenas, 2008, entrevista), en cuanto propuesta y proceso social de derechos humanos integrales, educación y desarrollo humano sostenible, que busca preservar la autonomía ciudadana frente a guerrilla y paramilitares y manejar creativamente el conflicto. Se convirtió en un espacio para el ejercicio de la ciudadanía en el medio de una comuna en guerra y de la máxima pobreza, que busca construir alternativas de desarrollo para la comunidad y caminos para la paz (Vargas, 2007, p. 10). En esta medida, ha integrado un componente económico y de desarrollo en sus currículos y ha procedido a una articulación de la iniciativa con

el mercado laboral, con organizaciones sociales y productivas de la región y varias actividades microempresariales.

De hecho, la intervención de la Ciudadela educativa y del PDPMM en el campo educativo no se agota en su acción como agente educador, ni en la intervención en el sistema educativo formal, abarca y articula una dimensión de educación formal, con un conjunto de acciones de educación no formal, como actividades lúdicas y deportivas, programas artísticos y musicales, y varias actividades e iniciativas comunitarias, tales como agrupaciones de madres comunitarias. Se busca que estos procesos educativos formales y no formales que se han generado con la comunidad mejoren los niveles de convivencia y diálogo y trabajen en el día a día una cultura de paz con la población (Cárdenas, 2008, entrevista).

Estos varios niveles y dimensiones del proyecto se destinan a incidir sobre los niveles de exclusión que se evidencian en un territorio profundamente martirizado como la comuna 7 y como forma de suministrar más herramientas y fuentes de ocupación legales a los jóvenes pobladores de la comuna. La Ciudadela educativa, como la mayoría de los proyectos del laboratorio de paz, pretende ser un microinstrumento de inclusión de la población en varios planos. Procura la generación de nuevas formas e instrumentos de participación ciudadana para los jóvenes de la comunidad en la comuna.

En este ámbito, el proceso social en torno a la Ciudadela educativa produjo un empoderamiento de los sujetos y de la comunidad, y una concientización social y política de sus derechos en cuanto ciudadanos, que les ha impreso una matriz más propositiva y reivindicativa. A partir de la Ciudadela educativa se construyeron propuestas educativas, productivas y sociales para el ordenamiento y desarrollo de la comuna que en cierto sentido, transformaron la forma como se vivía la institucionalidad en este territorio (Vargas, 2007, p. 24).

En este ámbito, contribuyó a posicionar la comunidad como interlocutor válido frente al Estado y permitió que se establecieran nuevas relaciones y diálogos entre los pobladores y jóvenes de la comuna y las autoridades municipales, lo que contribuye a la construcción de otra forma de institucionalidad más incluyente, en un contexto de pobreza y violencia. Asimismo, ha permitido romper un imaginario de violencia y pobreza y construir horizontes de esperanza y confianza en escenarios marcados por la miseria, la victimización, el terror.

Sin embargo, este fue un proceso profundamente delicado, en que se caminó sobre el filo de la navaja. Como relata Marco Fidel Vargas (2007, entrevista), exasesor

del proyecto, “los pobladores se jugaban la vida por el proyecto”. Entre los líderes e integrantes de la iniciativa varios tuvieron que salir amenazados y no han podido volver por el riesgo que implica para sus vidas.

Por último, cabe destacar el “Proyecto de la escuela campesina para el desarrollo humano” (ECDH) de las subregiones de Vélez, sur del Cesar y sur de Bolívar. Esta es una iniciativa educativa para una población rural, construida a partir de la participación de diversos grupos sociales, como los campesinos, los pescadores, los jóvenes y los líderes comunitarios, bajo el propósito de consolidar sujetos constructores de paz. Ha buscado estimular nuevas prácticas, actitudes de escucha, diálogo y comprensión mutua, la creación de una nueva consciencia social en los individuos y procesos de diálogo que inculquen una ética y cultura de la paz. Como señaló un niño vinculado a un proyecto educativo patrocinado por el PDPMM “además de la matemática, del español, aprendemos a ser amigos de las demás personas” (PDPMM, 2002).

En estas escuelas se busca construir la paz cotidianamente con el otro, desde las veredas y de la población más afectada por la guerra, y en esa medida, se incide sobre las estructuras culturales que legitiman la violencia, como describe Galtung (1996), y se construyen las bases para la paz en el largo plazo (Vargas, 2007, p. 33).

En estos procesos la educación y formación se entienden y se conciben como un proceso de diálogo entre seres humanos, concepción que revela un énfasis en la resolución pacífica de conflictos. Las ECDH se han vuelto un importante espacio de encuentro y diálogo entre organizaciones y en una comunidad de aprendizaje que involucra a más de sesenta organizaciones del Magdalena Medio y forma más de 800 líderes (Vargas, 2007, p. 10, 24).

## *Cultura(s) de paz y cultura(s) de violencia*

Los cambios en la forma de pensar, de actuar y organizarse que se estimulan mediante todo este tipos de procesos y proyectos culturales apoyados por el laboratorio de paz son visibles de forma muy clara a varios niveles.

Un ejemplo descrito por Miriam Villegas (2008, entrevista) respecto al municipio de San Pablo da un poderoso testimonio de esta dinámica:

[...] la gente de San Pablo es muy agresiva, porque es de una cultura de coca, una cultura muy dura, de sálvense quien pueda y no más; allí no había solidaridad. Entonces cuando llegamos a San Pablo y arrancamos

a trabajar allá, una asamblea de la organización terminaba en machetazo, en desastre, la gente se mentaba la madre, y se peleaban unos con otros. Hoy en día siguen agresivos, pero conversan, y la organización piensa solidariamente en que tenemos que apoyarnos todos, tenemos que ayudar a sacar el crédito entre todos, hagamos una sede para todos, un proyecto de vivienda para todos... piensa solidariamente. Tú hoy en día los ves tranquilos, organizados, pensando cómo va a ser el desarrollo de todos. Para mí eso es paz. Eso es paz [...]

En realidad, el laboratorio desarrolla un trabajo valiosísimo en el sentido de desarrollar y generar una nueva cultura en los territorios y veredas del Magdalena Medio y cambiar los paradigmas de pensamiento de las comunidades. En varios casos, y como lo comprueba esta anécdota, estas experiencias configuran una “paz de las pequeñas cosas” (Pureza, 2009, p. 9), de los “pequeños nada” (Barreto Henriques, 2012), son microexpresiones de la transformación de diferentes modalidades y manifestaciones del conflicto. La construcción de paz aquí es entendida como la exploración y desarrollo desde lo cotidiano de nuevas formas de relación e interrelación que superen la polarización del conflicto armado y construyan alternativas a la violencia, y generen inclusión en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Pasa por el fomento y desarrollo de actitudes y procesos direccionados a la transformación positiva de conflictos, conducentes a relaciones sociales más inclusivas y generadores de más justicia en los diferentes escalones y niveles de la relación humana (ECP, 2006, p. 6).

Estos procesos han sido bastante valiosos en el sentido de la construcción de ‘un modo de vida distinto’ y ‘contra la corriente’ en varias de las veredas, ciénagas, ciudades y montañas del Magdalena Medio (PNUD, 2007, p. 30), y de una red que sostenga la paz en términos sociales en la región; han contribuido al desarrollo paulatino de unas bases sociales y culturales proclives a la paz y a la civilidad. Su alcance puede ser limitado y circunscrito a microescenarios sociales, pero no solo es vital para la construcción de una paz multidimensional y duradera, es decir para la construcción de la paz positiva, sino encierra un potencial de contagio más allá de su expresión territorial.

Sin embargo, las bolsas de paz que crean no son impermeables al entorno de conflicto y a la cultura de violencia que la circundan. En realidad, se enfrentan a la cultura de un país y una región y a las dinámicas que el conflicto ha enraizado y perpetuado, no solo de violencia, pero también de ilegalidad. Una anécdota relatada por Javier Moncayo (2008, entrevista), ex subdirector de la CDPMM, atestigua la morosidad de

estos procesos y la dificultad para que estos procesos de concientización y transformación lleguen al corazón de los individuos y las comunidades.

Cuando una politóloga del CINEP se fue a hacer unos talleres con jóvenes de las comunas de Barrancabermeja sobre temas de democracia le sorprendió muchísimo porque los ‘pelados’ hablaban con mucha propiedad del Estado social de derecho, de la participación, la construcción del sujeto social, etc. Por la noche la invitaron a tomar unas cervezas, y cuando ya tenían varias cervezas ‘encima’, le contaron que ellos hacían de ‘compañeros’, o sea, de vigilantes en el cartel de la gasolina; les dan un celular, los paran en la esquina y ellos tienen que avisar si viene el ejército. Entonces ella les decía: ¿Pero cómo así? Ustedes estaban hablando de Estado social de derecho y todas estas cosas! ...Y los ‘chinos’ le decían: Ah! Pero es que eso es lo que quiere escuchar la ‘mona’, como le decimos nosotros...

Efectivamente, muchos elementos de una cultura de ilegalidad y violencia, así como de la jerarquización social, están profundamente enraizados y se configuran como estructuras difíciles de penetrar y esquemas difíciles de romper. El nivel cultural de la paz, como Galtung plantea, se sitúa en un marco más macro y de largo plazo, como de las placas tectónicas de la paz. Su desarrollo y sedimentación es más paulatino y gradual, razón por la cual la construcción de una cultura de paz se enfrenta a retos inmensos.

Asimismo, la sociedad civil es a menudo, el espejo de la sociedad en donde se inserta y en esta medida, el laboratorio es permeable, hasta un cierto punto, a los vicios y debilidades de la sociedad que lo rodea. No es una isla de paz; el conflicto permea tanto sus procesos, como la cultura política del país y de la región, y las lógicas de la sociedad.

Esta situación se evidencia en varios elementos: se registran algunos casos de algún centralismo y dependencia de los líderes en los procesos, que muestran que Colombia es un país muy personalista y vertical. En este marco se debe entender por ejemplo la extrema centralidad de Francisco De Roux en el PDPMM, figura casi mesiánica sobre la cual ha recaído mucho del peso de la iniciativa.

Asimismo, incluso entre los procesos de base del laboratorio hay participantes con una afiliación, más cercana o distante, a la guerra, sea en la figura de los paramilitares o los insurgentes (Vargas, 2007). El conflicto atraviesa el laboratorio, nada es puro,

ni blanco y negro en un escenario de conflicto como Colombia. Un análisis empírico del escenario en donde se inserta el laboratorio de paz y sus proyectos y procesos hace resaltar una inmensa complejidad y diversidad en el terreno. Confluyen y coexisten lógicas de guerra y de paz y elementos culturales de violencia y de paz, a menudo en las mismas personas, comunidades y organizaciones. La realidad no es sencilla, el conflicto no es elemental, está lleno de grises.

De igual forma, toca señalar que en los procesos de base del laboratorio de paz ha habido casos, aunque aislados, de manejo indebido de los recursos, así como casos de integración precaria a los procesos. La llegada masiva de recursos a la región proporcionada por el laboratorio, ha propiciado situaciones de integración y participación en los procesos y proyectos del laboratorio con base en el oportunismo y el apetito ‘por la plata’. Asimismo, hay gente que participa en los eventos del laboratorio o del PDPMM por que ‘viene por el refrigerio’. Como ha referido un colaborador del laboratorio, “si están invitados 300 a una reunión, están garantizados 300 almuerzos”. Y hay aún casos de “gente que ni siquiera sabe cómo llegó al proyecto” (Castañeda, 2008, entrevista). Son las vicisitudes y la complejidad de la participación social en un contexto de pobreza, exclusión y violencia estructural, armada y cultural.

No obstante, como señala un excolaborador del PDPMM, lo importante es interrogar cómo se van ver a estos participantes en dos años. Qué progresión y evolución han proporcionado los procesos sociales (Castañeda, 2008, entrevista). Y en realidad, independientemente de las motivaciones que los han llevado inicialmente a la iniciativa, hay en general una evolución muy positiva: escuchan hablar sobre Estado de derecho, derechos humanos, ética ciudadana, desarrollo sostenible, cultura de paz; participan en ejercicios colectivos; ganan herramientas ciudadanas; y así, como efecto secundario, se transforman como individuos y como grupos, como sujetos políticos y ciudadanos y son permeados por el proceso de construcción de paz.

## Procesos productivos ambientales para la equidad y el desarrollo sostenible: la dimensión socio-económica de la construcción de la paz

El tercer eje y línea de acción del laboratorio de paz integra un amplio abanico de proyectos y procesos productivos y socioeconómicos que involucran sectores de la

población socioeconómicamente excluidos y se enfocan en varias microexpresiones e iniciativas de una economía campesina y popular.

Estos proyectos económicos han buscado principalmente crear oportunidades de empleo y alternativas de desarrollo y actividad económica para los sectores excluidos de la población, como alternativa a la guerra. De hecho, 85% de los beneficiarios y participantes de los proyectos del laboratorio de paz presentan niveles de pobreza elevados (PDPMM, 2005, p. 16).

Siguiendo la perspectiva teórica y la lectura política del conflicto previamente explicitadas y analizadas, que identifica la pobreza y la inequidad como causas estructurales del conflicto, se establece una interconexión entre la exclusión económica y la violencia armada en Colombia y un nexo entre el modelo de desarrollo excluyente en vigor en el Magdalena Medio y el conflicto en la región. El laboratorio se propuso desarrollar bolsas de desarrollo campesino y semillas de un modelo de desarrollo incluyente como su principal eje de la construcción de paz positiva desde la base.

Mediante estos proyectos de cariz esencialmente económico y productivo, se configura una estrategia de desarrollo humano y sostenible que pretende movilizar al Magdalena Medio hacia una economía de paz y fomentar un modelo de desarrollo que sostenga la construcción de una paz positiva, focalizándose primordialmente sobre sectores socioeconómicos sobre los cuales más incide el conflicto armado y de los que más se alimenta el conflicto.

La concepción de un programa de desarrollo específico para las zonas rurales y los sectores de la población económicamente más excluidos constituye una apuesta de incidencia sobre uno de los principales canales que alimenta el conflicto, en la medida en que la exclusión socio-económica, y el problema del campo en Colombia constituyen uno de los principales factores que sostienen el conflicto armado desde sus primeros días hasta la actualidad.

Así, el laboratorio de paz, siguiendo la propuesta socio-económica del PDPMM, se propuso construir una forma alternativa de desarrollo en el Magdalena Medio y sembrar semillas de un enfoque económico distinto al modelo excluyente de la región, centrado en la industria del petróleo, la ganadería extensiva y recientemente en los cultivos agro-industriales, que, a pesar de crear, hasta cierto nivel, unos altos ingresos para la región, han dejado a la vasta mayoría de la población y en particular a los campesinos, en la pobreza.



**Barrancabermeja**

**Fuente:** *Miguel Henriques*

Estos proyectos en este campo se conciben como un proceso de generación de condiciones de vida con dignidad y sin exclusiones, llevados a cabo por medios lícitos y en armonía con el medioambiente, con vista a transformar el conflicto social y armado (PDPMM, 2007). Se encuentran bajo esta línea un amplio grupo de proyectos con contornos, actores y matices distintos, desde proyectos de producción de cacao, palma africana o frutas, iniciativas de incentivo y apoyo a la pesca y ganadería, programas de microcrédito y de fomento a “economías populares” (CDPMM, 2005, p. 47). En esta medida, no nos referiremos aquí a la totalidad de los proyectos ejecutados por el laboratorio de paz en este ámbito, sino únicamente a algunos de los más representativos, de forma que permita evidenciar algunos de sus aspectos y elementos más relevantes en el sentido de la construcción de una paz positiva desde la base en el territorio.

En el ámbito urbano y en el marco del impulso a una “economía de los pueblos” (PNUD, 2007), una de las iniciativas más interesantes desarrolladas en el marco



del laboratorio de paz cabe a Merquemnos Juntos, una ONG de Barrancabermeja que ha desarrollado un proyecto de microcrédito para apoyar negocios familiares, microempresas y educación superior para la población pobre de las comunas de Barrancabermeja.

El proyecto dotó de capital semilla a setenta familias en las comunas populares de Barrancabermeja, una población que en otro caso no tendría acceso a crédito bancario (Hernández, 2008, entrevista), una vez que el sistema financiero convencional permita el acceso al crédito a los sectores más marginados y pobres de la población, al funcionar en una lógica que exige la previa posesión de garantías económicas (García, 2007, p. 6). El proyecto de microcrédito de Merquemnos Juntos ha roto con este círculo vicioso y altamente excluyente en términos sociales, que restringe o niega el respaldo financiero a la economía popular.

Este proyecto se configuró de esta forma como un instrumento y proceso valiosísimo de inclusión de poblaciones socioeconómicamente marginadas en la economía y el desarrollo. Ha permitido generar soluciones económicas y alternativas de vida al conflicto para una población tradicionalmente excluida y victimizada de las comunas nororientales de Barrancabermeja (CID, 2003, p. 25). En este sentido, está contribuyendo a una sociedad con más justicia social, y consecuentemente, a la construcción de la paz positiva.

Asimismo, esta organización ha enfocado grandemente sus esfuerzos en “salvar sus hijos del conflicto” (Blanco, 2008). Esta finalidad ha sido puesta en marcha bajo varias estrategias y formas, en particular mediante un sistema de préstamo a los jóvenes para ‘comprar’ la libreta militar que los exime de prestar el servicio militar, así como de un fondo escolar que financia la educación superior, y que ha permitido que centenas de jóvenes frecuenten algunas universidades públicas y puedan garantizarse un futuro profesional de éxito, en vez de caer en actividades de riesgo o de violencia (Hernández, 2008, entrevista). En esta medida, esta es una iniciativa y experiencia que no solo multiplica las posibilidades de vida, sino literalmente saca hombres de la guerra.

Esta perspectiva es reiterada en las palabras de Guillermina Hernández (2008, entrevista), socia fundadora y actual directora de Merquemnos Juntos de la siguiente forma:

[...] si la gente tiene como trabajar, como ganarse el pan de cada día, pues es una alternativa a no estar desocupados, a no estar en el cartel de la gasolina, a no estar en los grupos [armados], de tener un trabajo

que hacer, una rutina diaria, que lo compromete a estar ahí mirando cómo velar por su familia y cómo ganarse la comida.

Otro proyecto de cariz urbano que se ha desarrollado en Barrancabermeja mediante el apoyo y los recursos del laboratorio de paz ha sido “Cootrasalba: Arcilla y vida”, una planta de ladrillos, que emplea 26 obreros provenientes de estratos sociales desfavorecidos de las comunas 6 y 7 de Barrancabermeja.

Este proyecto ha permitido rescatar para la economía legal a hombres previamente involucrados en el cártel de la gasolina, que afecta de forma aguda a las comunas nororientales de Barrancabermeja, como forma de subsistencia de los más pobres fomentada por los grupos armados. En esta medida este proyecto constituye una alternativa de vida, un medio de “cambiar la vida a la gente” (Urrutia, 2008, entrevista).



Planta de ladrillos, Barrancabermeja

Fuente: *Miguel Henriques*

Asimismo, este proceso ha permitido un empoderamiento y capacitación de los trabajadores, mediante el cual muchos han sido alfabetizados, no solo lingüística sino social y políticamente. Como señala Pedro Urrutia (2008, entrevista), obrero de Cootrasalba, “estamos perdiendo el miedo a hablar; tenemos seguridad social,

que no teníamos”. Son pequeños pasos que se dan en el sentido de la ciudadanía, de la inclusión de las poblaciones marginadas y más afectadas por el conflicto armado y en la construcción de una economía legal y un desarrollo con rostro humano. En este sentido, son pequeños pasos en el camino de la paz.

Sin embargo, toca señalar que, en varios proyectos en el campo económico desarrollados por el laboratorio de paz, como los mismos Cootrasalba y Asotedesco, la dimensión de construcción de paz en el discurso de sus intervinientes y en los elementos de la acción no es tan palpable y se pierde un poco de vista, y es legítimo interrogarse en qué medida son estos proyectos de construcción de paz, cómo aportan a la paz y qué los diferencia de proyectos de cooperación al desarrollo o proyectos de desarrollo económico, comunes y corrientes. ¿Es un proyecto de salud sexual y reproductiva construcción de paz? ¿Es la producción de cacao construcción de paz? ¿Son obras de saneamiento básico construcción de paz? ¿Configuran centros de formación juvenil una construcción de paz? ¿Hay ‘ladrillos para la paz’? Si todo puede ser construcción de paz, puede resultar que nada sea construcción de paz.

Pero un análisis más profundo permite integrarlos en el sentido de la construcción de una paz positiva y en la transformación del conflicto armado. Al generar microdinámicas de desarrollo y movilización, que son además complementadas por procesos de concientización y empoderamiento social y cultural, se generan automáticamente microdinámicas contrarias a las lógicas del conflicto y que inciden, en menor o mayor grado, en la violencia estructural y cultural. Por lo demás, teniendo en cuenta que los participantes de varios de estos proyectos son gente de las comunas de Barrancabermeja, o de las zonas rurales más marginadas, territorios de aguda violencia estructural y directa, de altos niveles de ilegalidad e incidencia de economías ilícitas, estos se convierten en instrumentos de construcción de paz que aportan su ‘grano de arena’ a la transformación de las dinámicas que alimentan y sostienen el conflicto. A veces la posibilidad de un empleo, es construir paz, es crear alternativas de vida para las familias lejos de las actividades ilícitas y violentas.

No obstante, hay que introducir matices y señalar que, en muchos aspectos, el laboratorio de paz se asemeja a un proyecto de desarrollo para zonas rurales común y corriente y un proyecto de cooperación al desarrollo estándar y convencional, al apoyar obras de mejoramiento de vías, de construcción de escuelas, y al subsidiar proyectos productivos. Sin embargo, esto no lo convierte en un proyecto

de desarrollo o de cooperación ordinario. La diferencia reside fundamentalmente en la filosofía sobre la que se sostiene y la integralidad y multidimensionalidad que plantea.

El apoyo del laboratorio de paz incide igualmente en otros sectores de la actividad económica, como la pesca. Desempeñó en particular un rol fundamental en la re-creación y fortalecimiento de Asopesam, asociación que integra varias comunidades de pescadores del Magdalena Medio y que se formó frente a la necesidad de intervenir contra un escenario en el dominio de la pesca que presentaba graves problemas en la región.

Los sectores pesqueros del Magdalena Medio, zona ribereña por excelencia y estructurada económica y culturalmente en torno al río Magdalena, han vivido grandes dificultades, al presenciar la reducción drástica de los recursos piscícolas por motivos climáticos y contaminación del río, factores que ponen en entredicho las condiciones sociales y culturales de los pescadores y agravan su condición de exclusión. En cuestión está no solo su subsistencia económica con base en el río, sino también su modo de vida. Como refiere Francisco De Roux (2008, entrevista), “los ribereños necesitan el pescado, como los paisas la arepa. Hoy ya no pueden comer pescado diariamente. Su “vida querida” ya no es posible”. Son microexpresiones de violencia estructural que se hacen sentir y que el laboratorio de paz pretende convertir en la paz de los “pequeños nada” (Barreto Henriques, 2012).

Así, Asopesam fue concebida en este marco fundamentalmente como una plataforma de interlocución y articulación del sector pesquero con las instituciones regionales y nacionales, con vista a incidir en las políticas públicas de pesca y a mejorar las condiciones socioeconómicas de los pescadores de la región. Como plantea Miriam Gutiérrez (2007, entrevista), conocida en la región como Miriam ‘Pesca’, por ser el rostro más visible de la organización, se pretende trabajar desde el nivel local con vista a fomentar una política y uso de la pesca que no ponga en peligro el ambiente. El proyecto del laboratorio de paz incide precisamente en este tema, al ser concebido como una propuesta ambiental para el desarrollo sostenible del sector pesquero.

En el dominio rural, una de las realizaciones más relevantes del laboratorio de paz se ha desarrollado con la Asociación de los Campesinos del Valle del Cimitarra (ACVC). Esta es una de las organizaciones campesinas del Magdalena Medio con uno de los patrimonios de movilización social más rico en la región. Surgió en el ámbito de las marchas campesinas del 1996, a raíz de la problemática de la tenencia

de la tierra, amenazada en la región por la ganadería extensiva, los megaproyectos y la explotación extensiva de los recursos naturales, con vista a rescatar, construir y reconstruir una economía campesina.

En el marco del laboratorio de paz, la ACVC ha desarrollado un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria. La garantía de la autosuficiencia y la seguridad alimentaria de la región fue asumida por el laboratorio como un tema prioritario (Mojica, 2007, entrevista). Esta apuesta se basa en la convicción de que el hambre es una de las expresiones más fuertes de la violencia estructural. Este planteamiento es reiterado desde las cúpulas del laboratorio hasta sus participantes de base. Como afirmó Pedro Urrutia (2008, entrevista), “si uno se muere de hambre, no puede sentirse en paz”. De hecho, quien vive bajo la desesperación y privación cotidiana del hambre y la miseria, no está en paz, vive en conflicto, que, en primera instancia, incide en la relación consigo mismo, pero que fácilmente asume una dimensión interpersonal. La violencia estructural fácilmente se traduce y convierte en violencia directa, al asumir la forma de la criminalidad, de una pandilla, de un grupo narcotraficante o armado. La dimensión intrapersonal e interpersonal de la construcción de la paz están fuertemente asociadas.

### *Las fincas campesinas*

En el dominio productivo la propuesta del laboratorio de paz, con base en las concepciones del PDPMM, se enfoca fundamentalmente en las ‘fincas campesinas’. Estas se configuran como uno de los elementos más importantes de la estrategia de desarrollo integral del PDPMM y eje de la intervención del laboratorio de paz en el sentido de respaldar la economía campesina y construir un modelo de desarrollo más participativo, incluyente y equitativo.

La finca campesina es una pequeña propiedad de diez a doce hectáreas, que corresponde generalmente a una unidad agrícola familiar y se caracteriza por ser simultáneamente una unidad de producción y consumo, y evidenciar baja tecnología y acceso al crédito, así como una debilidad con respecto a las dinámicas del mercado (Briceño, 2007, p. 5). Sigue una lógica diferente si la comparamos con la agricultura de mercado (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 25), pues no tiene necesariamente una lógica de ganancia y sobrepasa su dimensión en cuanto activo productivo, en la medida en que la relación del campesinado con la tierra encierra un componente

socio-espacial y se configura como un hábitat cultural y un medio de reproducción de la identidad campesina como actor social (Briceño, 2007, p. 5).

En el marco del laboratorio de paz las fincas campesinas están centradas en lograr la autonomía alimentaria de las familias, con base en un producto comercializable, cultivado en una finca en asociación con otros campesinos (PDPMM, 2005, p. 26). Entre los proyectos de finca campesina desarrollados por el laboratorio de paz, se incluyen fincas cacaoteras, de bananito, mora, frijol, yuca, y palma de aceite (PNUD, 2007, p. 26).

El modelo de las fincas campesinas ha sido conceptualizado y preconizado por el PDPMM como una alternativa y un medio de resistencia a la dinámica en curso en el Magdalena Medio de megaagroproyectos, agroindustrias y a la creciente concentración de la tierra, que ponen en cuestión la consecución de un modelo de desarrollo humano y sostenible, y acentúan la inequidad en la región (De Roux, 2005, p. 42).

En este campo, una de las principales propuestas económicas del laboratorio de paz para los campesinos es organizarse colectivamente. El laboratorio respalda el trabajo asociativo en granjas cooperativas y promueve el trabajo mancomunado de organizaciones de campesinos con proyectos o finalidades semejantes. A través de esto se propone promocionar la estabilidad de los pequeños campesinos, con vista a neutralizar la concentración de la tierra y a ser una alternativa a las grandes propiedades (De Roux, 2005, p. 42).

La propuesta del laboratorio de paz en términos socioeconómicos, basada en el PDPMM, ha incidido en poner el desarrollo en las manos de los campesinos organizados en asociaciones, cooperativas y proyectos; en capacitarlos económica, social y políticamente; y en reestructurar las estrategias y procesos de producción, para hacerlos más rentables y volverlos sostenibles en términos económicos y ambientales (PDPMM, 2005, p. 33).

Los proyectos de finca campesina desarrollados por el laboratorio de paz se enmarcan en el objetivo de: en primer lugar, garantizar la seguridad alimentaria para las familias campesinas; y en segundo lugar, generar excedentes que puedan ser comercializados con base en cooperativas. La perspectiva del PDPMM, descrita por Luis Hernando Briceño (2008, entrevista), excoordinador de la línea 3 del laboratorio de paz, es que un campesino que no genere excedentes nunca va a mejorar su nivel de vida y tendrá siempre niveles elevados de precariedad y que “el excedente económico es lo único que le da para que pueda mejorar la educación de sus hijos, el transporte, la vivienda, la salud”. En la concepción económica del

PDPMM, incrementar los ingresos de los campesinos es un factor para obtener lo que Francisco De Roux designa como la 'vida querida' (PDPMM, 2005, p. 26), es decir, las condiciones socioeconómicas que les proporcionen bienestar, y acceso a servicios, tales como educación y salud (Valderrama, 2007, entrevista). Obtener la vida querida significa, en gran medida, construir la paz desde el punto de vista emocional, simbólico y material.

El proyecto está concebido como un programa de transformación. Busca un estímulo económico cualitativo y cuantitativo para la región (Mojica, 2007, entrevista). Pasa por la garantía de la seguridad alimentaria de la región, la perspectiva de desarrollo con conciencia ambiental, una dinámica empresarial y un horizonte de mercado. Adicionalmente, estos proyectos pretenden promover un uso racional de los recursos y prácticas respetuosas del medio ambiente, de forma que incrementen la rentabilidad y generen un desarrollo sostenible (Godnick y Klein, 2009).

Los procesos de producción son articulados con procesos y talleres de derechos humanos y ciudadanía, que vinculan los campesinos a procesos sociales de construcción de paz positiva (PDPMM, 2005, p. 26). De hecho, no se trata de la producción por la producción o de la generación de ingresos *per se*, si no como medios de construcción de la paz, fortalecimiento de espacios de convivencia ciudadana y de protección de los derechos humanos. El trasfondo es una generación de capacidades, el fortalecimiento organizativo y un cambio cultural (Briceño, 2007, p. 5). Los proyectos productivos son intervenciones con vista a generar escenarios de participación y decisión colectiva, a fomentar el diálogo y las alianzas entre diferentes sectores de la sociedad civil y un nuevo entendimiento de cómo acercarse a las autoridades regionales y nacionales (Gómez, 2008, entrevista).

Se conciben como procesos de inclusión de grupos sociales y comunidades pobres y marginadas en términos económicos, pero también con repercusión a nivel social, político y cultural; tienen en la mira la posibilidad de entrada de estos grupos a los circuitos económicos del mercado, pero también al espacio público (Angulo, 2007, entrevista).

Como hemos señalado, la inclusión socioeconómica de los campesinos se concibe como esencial, en la medida en que la falta de horizontes de vida de la gente en el campo es un factor determinante que alimenta el conflicto armado y empuja a millares de familias hacia la economía de la coca. En esta medida, intervenir sobre esta raíz del conflicto es un canal privilegiado para su transformación.



Esta matriz y finalidad político-social del trabajo del laboratorio de paz por un ‘desarrollo en caliente’, es decir, en el medio del conflicto armado, es muy clara en las palabras de De Roux (2008, entrevista):

[...] nosotros teníamos muy claro desde el inicio que no hacemos proyectos por que haya gente pobre o desempleada, o niños que no tengan escuela. Nosotros identificamos conflictos, comprendemos el conflicto en espacios de negociación y de superación y poco a poco los convertimos en procesos de desarrollo hacia la paz, tratando en los proyectos de tocar los procesos estructurales que son los que creemos que hacen posible la paz.

Generar espacios y bolsas de desarrollo que permiten reunir condiciones para vivir con más dignidad en un territorio y permanecer en este, son microformas de paz, que no solo inciden en la violencia estructural, sino que son vivenciadas por los campesinos como formas de paz en su dimensión más simbólica y cotidiana. Esta perspectiva es señalada por Arturo Barajas (2008, entrevista), funcionario de la CDPMM,

La paz para la gente es tener tranquilidad, poder trabajar, tener tranquilidad para construir su territorio, para soñar, para construir sus apuestas de desarrollo, para poder reunirse con los demás y construir y planear lo que quieren; en esa medida vamos construyendo y vamos haciendo la paz, estamos construyendo esa ruta de paz y de tranquilidad.

Uno de los proyectos bandera del laboratorio de paz en el ámbito de las fincas campesinas ha sido ejecutado por Ecocacao, una cooperativa de cultivadores de cacao que se conformó con el apoyo del PDPMM y que tuvo origen en una propuesta de los núcleos de pobladores de la serranía de los Yariguíes y la provincia de Vélez, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. Ha integrado 1.800 familias campesinas (PDPMM, 2005, p. 30) en un proceso con vista a proporcionar un “salto de lo comunitario a la construcción empresarial” (Moreno, 2005, p. 97). Ha buscado fortalecer el sector cacaotero y fomentar la inclusión de los pequeños productores de la región, bajo una estrategia de desarrollo integral (Moreno, 2005).

Ha sido unos de los proyectos económicamente más exitosos del laboratorio en la región, al haber logrado un fuerte crecimiento de la productividad por hectárea y



un visible fortalecimiento y expansión de la organización. Hoy Ecocacao evidencia una gran madurez y capacidad empresarial, que ha permitido que los campesinos se empoderaran, perdieran el miedo, ganaran autoestima y se configuraran como sujetos económicos y sociales (Moncayo, 2008, entrevista). Asimismo, se ha mostrado como un medio valioso de arraigo al territorio y una alternativa a las economías ilícitas, en particular la de la coca.

El laboratorio de paz buscó fomentar una economía lícita y ambientalmente sana como factores vitales para la construcción de una paz positiva y un desarrollo sostenible. Algunos proyectos se han planteado explícitamente como alternativas a los cultivos de uso ilícito. Es el caso de la producción de frutales en Vélez. Este proyecto ha permitido a 150 familias asumir una posición fuerte y colectiva en contra de los cultivos de coca y plantear alternativas en términos de comercialización (hacia Bogotá y Europa), al mismo tiempo que los participantes han sido acompañados con un enfoque en los derechos humanos (PDPMM, 2005, p. 27).

Estos proyectos productivos desarrollados por el laboratorio de paz han sido concebidos como medios para una 'ocupación productiva del territorio', concepto desarrollado por Francisco De Roux en el marco del PDPMM, que se refiere al potencial de los procesos económicos como factores para prevenir el desplazamiento de los campesinos, tanto por la guerra, como por la pobreza y la exclusión económica (PDPMM, 2005, p. 30), y para fomentar un arraigo de la población rural en el territorio. La generación de microprocesos de desarrollo humano y sostenible en las zonas rurales se plantea como un elemento que propicia mejores niveles de vida para los campesinos y les confiere mejores herramientas y condiciones para resistirse a los actores en conflicto y así permitir más fácilmente su permanencia en el territorio (Briceño, 2008, entrevista). La valorización productiva de las tierras y el aumento de la rentabilidad económica crean un arraigo, no solo económico, sino cultural y emocional, de los campesinos a sus territorios, lo que se vuelve en un factor de resistencia al conflicto de bastante fuerza política, a pesar de toda la dinámica contraria de desplazamiento y contra-reforma agraria que experimenta la región (Gómez, 2008, entrevista). Si un campesino no tiene medios de subsistencia, o se encuentra frente a tierras degradadas y sin rentabilidad que no generan beneficios, fácilmente se desplaza, sea frente al asedio de un actor armado o un grupo económico.

Son estrategias conducentes a la manutención de una base social y económica campesina empoderada en el campo, que se plantean como alternativas tanto a las

economías extractivas y extensivas, como a los cultivos de coca. En esta medida, son procesos socioeconómicos generadores de medios de vida lícitos y sustentadores de dinámicas de paz. La viabilidad económica de proyectos campesinos, como Ecocacao, se ha convertido en salidas para el campesinado, que les garantizan niveles de vida dignos y una estabilidad y permanencia en el territorio (Briceño, 2007, p. 8).

La cuestión de la ocupación productiva del territorio y del desplazamiento forzado se presentan como temas fundamentales. El Magdalena Medio ha estado sufriendo un proceso acelerado de concentración de la tenencia de la tierra y de desplazamiento de campesinos, motivada por una verdadera ‘contrarreforma agraria’ puesta en marcha por la presión armada de los grupos paramilitares y narcotraficantes y por la presión económica de la ganadería extensiva, las multinacionales de la minería y de los grandes propietarios, quienes actualmente controlan la mayor parte del territorio de la región (Lozano, 2006, p. 59, 61) y han logrado persuadir a muchos campesinos para que vendieran sus propiedades.

La problemática de la tenencia de la tierra y su desigual distribución, como ha sido planteado en el cuarto capítulo, es una de las mayores causas estructurales del conflicto colombiano. Como afirma el sociólogo del CINEP Marco Fidel Vargas (2007, entrevista), “la tierra es la clave para resolver el problema rural en Colombia. Y el problema rural es la clave para resolver el conflicto colombiano”.

En este aspecto, que reviste simultáneamente un componente estructural y uno coyuntural, reside una de las principales limitaciones del laboratorio de paz del Magdalena Medio. El tema de la tierra está más allá de las capacidades y radio de acción del laboratorio. Quien no posee tierra, difícilmente puede acceder a un proyecto productivo del laboratorio o desarrollar fincas campesinas, pues carece del recurso fundamental para su ejecución (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 22). Asimismo, financiar la compra de tierras no ha sido planteada por la UE, ni por el PDPMM en el marco del laboratorio (Briceño, 2007). La propiedad, por más pequeña que sea, es un prerrequisito en estos procesos, lo que configura un escenario en el cual los más excluidos de los excluidos —los campesinos que no poseen propiedades—, están en alguna proporción, también vedados de los procesos de desarrollo del laboratorio, elemento que entra en contradicción con el discurso de inclusión del PDPMM. La intervención del laboratorio de paz en el dominio socio-económico, a pesar de su muy relevante y laudable labor, queda por esta razón excluido de incidir sobre uno de los factores estructurales del conflicto y del recurso que determina toda la vida en el campo.

Sin embargo, importa subrayar que, a pesar de que el laboratorio no haya aún encontrado una solución para la integración de los campesinos sin tierra a sus procesos y proyectos, y no haya promovido de forma sistemática y organizada el tema de la reforma agraria, ha desarrollado, en varias ocasiones, iniciativas y planteamientos frente al tema de la tierra. En particular, ha promovido la titulación de las tierras de los campesinos, la promoción de zonas de reserva campesinas y ha acompañado jurídicamente a los campesinos, en el sentido de la recuperación de sus tierras en casos de desplazamiento (De Roux, 2008, entrevista).

Por último, un proyecto del laboratorio en el área de las fincas campesinas, la 'palma campesina', merece ser destacada por otro orden de razones. Este es un proyecto que está envuelto en todo un manto de controversia. No solamente es criticado en muchas instancias, sino que no es siquiera un proyecto consensual dentro del PDPMM, al ser objeto de críticas de organizaciones de base del laboratorio e incluso de algunos miembros de la CDPMM. En cuestión están fundamentalmente críticas de carácter político e ideológico y críticas de marca socio-económica y ambiental.

El PDPMM ha intentado poner en práctica un modelo de palma campesina, con base en producción en pequeñas parcelas de seis a diez hectáreas, acompañadas por cultivos de pan-coger, con base en trabajo y crédito asociativo (Villegas, 2007, p. 9). El laboratorio se ha involucrado en el tema de la palma teniendo en cuenta su potencial económico. La palma es un bien altamente productivo, que dispone de un gran mercado de exportación, que asegura su comercialización integralmente (Briceño, 2007). La perspectiva del PDPMM consistía en que la palma daría la posibilidad de incrementar el ingreso y las condiciones de vida de la gente en una zona tradicionalmente pobre. Pero han tratado de integrar este bien con las características del programa; estarían basados en el trabajo campesino asociado y sobre la división de la tierra y del excedente (Bayona, 2007, entrevista). El PDPMM partió del supuesto que la palma era compatible con la finca campesina.

Sin embargo, la producción de palma africana encierra en sí misma una fuerte carga y connotación negativas, que reviste una dimensión política, social y simbólica; cada vez que se dio la expansión del cultivo de palma en el Magdalena Medio ocurrió en el medio de profundas tensiones sociales y de violencia armada. De hecho, el cultivo e implantación de la palma en Colombia y en el Magdalena Medio están vinculados con los grandes terratenientes, el paramilitarismo y las mafias narcotraficantes, y su expansión por el territorio ha estado asociada a presiones

varias, desde extorsiones, desplazamientos, amenazas y asesinatos de campesinos y dirigentes sindicales. Grandes áreas de acumulación de tierras por parte de paramilitares y narcotraficantes han estado cultivando palma en la región. Así, este es un cultivo que, en cierta proporción, fue sembrado con sangre, y en esta medida ha generado muchos anticuerpos en varios sectores sociales y políticos, sobre todo los afiliados con la izquierda, lo que generó muchas críticas en cuanto al involucramiento del PDPMM con este tipo de producción.



**Cultivo de palma en el sur de Bolívar**

*Fuente: Miguel Henriques*

Sin embargo, es preciso señalar que el modelo de producción de palma puesto en marcha por el laboratorio de paz es muy diferente del modelo y dinámica de la palma extensiva apoyada por los grandes terratenientes y narcotraficantes. El proyecto de palma desarrollado por el laboratorio de paz fue un proyecto orientado para campesinos, y que siguió una lógica y un sistema de producción distintos, que nada tiene que ver con la palma extensiva con conexiones al paramilitarismo desarrollada en propiedades de centenas de hectáreas. Mientras unos se apoyan en los megaproyectos e involucran grandes propiedades, mucho capital y tienen en muchas ocasiones, un apoyo paramilitar, el modelo que celebra el PDPMM se apoya en los campesinos y en las organizaciones campesinas y se basa en pequeños cultivos

y pequeñas propiedades campesinas unidas en cooperativas y en articulación con producción de alimentos (CPDMM, 2001, p. 14). Está basado en la asociación comunitaria, y sobre la división de la tierra y del excedente (Bayona, 2007, entrevista). Es un modelo que apoya directamente a los campesinos. Propone precisamente ser una medida de contención contra la concentración de la tierra y el desplazamiento forzado (Mojica, 2007, entrevista). Estas son dos dinámicas bien distintas que cruzan el mismo territorio. Pueden tener interconexiones y similitudes, pero son de naturaleza diferente, sin lugar a dudas.

No obstante, hay un aspecto de la producción del proyecto de palma del laboratorio sobre el cual recaen dudas y críticas más legítimas y difíciles de rebatir. En particular, las grandes cantidades de capital, tierra y maquinaria que estos proyectos requieren pueden hacer dudar sobre su sostenibilidad y aplicabilidad como un modelo para campesinos. Asimismo, la dependencia de las extractoras y circuitos de comercialización dominados por grandes empresas agroindustriales, pueden indirectamente configurar la palma campesina como funcional a los intereses y la dinámica de la palma extensiva en la región (Godnick y Klein, 2009). Por lo demás, recaen sobre el cultivo de palma serias dudas sobre sus impactos sobre el medio ambiente, en particular los residuos que genera y las elevadas cantidades de agua que exige (Briceño, 2007, entrevista), elementos que no pueden enmarcarse dentro del concepto y propósitos de sostenibilidad ambiental y social proclamados por el laboratorio de paz (Godnick y Klein, 2009).

Así, proyectos como palma campesina y Ecocacao configuran el enfoque y modelo económico del PDPMM y del laboratorio como una mezcla peculiar de economía tradicional campesina y economía de mercado. Esta característica singular del PDPMM reviste particular importancia en la medida en que el Magdalena Medio se configura como un territorio de visiones y modelos de desarrollo en disputa: el modelo extensivo y latifundista promocionado por las fuerzas paramilitares y los grandes terratenientes, que ve este territorio como una enorme sabana para el ganado y los megaproyectos agroindustriales; y el modelo 'campesinista' defendido por la insurgencia, de matriz anticapitalista y centrado en la representación de los supuestos intereses de los pequeños propietarios (Castro, 2007, p. 38).

En este marco, el modelo y enfoque preconizados por el PDPMM emerge como una especie de tercera vía, siguiendo una línea y visión conciliadora entre estos dos modelos y los intereses de los diversos actores en el territorio (Briceño, 2007). No es

un modelo y enfoque con un entendimiento liberal del desarrollo, pero tampoco es un modelo estrictamente campesino (Bayona, 2007, entrevista). Entre el modelo de globalización excluyente basado en las corporaciones multinacionales y una economía campesina frágil, el laboratorio busca un modelo intermedio, un modelo donde los campesinos desarrollen sus propuestas de desarrollo (Vargas, 2007, entrevista).

El laboratorio busca tratar de encontrar soluciones para las economías tradicionales y trata de hacerlas rentables. Para Bayona, exsubdirector de la CDPMM (2007, entrevista), productos tales como el caucho o el cacao han mostrado que es posible continuar con los cultivos tradicionales y las fincas campesinas, y tener un mercado que permita generar ingresos importantes que permitan mejorar las condiciones de vida de los campesinos.

Asimismo, el laboratorio de paz, al participar y fomentar mesas de conciliación entre las comunidades y organizaciones de campesinos y los sectores económicos más privilegiados, en áreas como la minería, está en gran medida, intentando encontrar un punto de conciliación entre modelos de desarrollo divergentes, es decir que está transformando el conflicto en su expresión armada y social. Este aspecto es de una importancia extrema en Colombia y en particular en el caso del Magdalena Medio, en la medida que el conflicto armado se puede interpretar como una confrontación violenta y social entre modelos distintos de desarrollo y producción en el territorio (Castro, 2007, p. 32).

Estos elementos configuran un modelo económico peculiar para el laboratorio de Paz. No se encuadra de forma clara y explícita en ningún modelo teórico o político de desarrollo, contiene variados elementos. Teniendo en cuenta sus documentos y el discurso de sus intervinientes, encierra una propensión ideológica hacia la izquierda y el socialismo. Hay críticas explícitas al Neoliberalismo expresadas por los documentos y el equipo de trabajo del Laboratorio y del PDPMM. De Roux (2007, p. 6) señala que

[...] la mano invisible del mercado libre no trae el desarrollo que pone a la gente como principio y como fin. El desarrollo regional muestra que se requiere la mano visible del Estado, comprometido en la comunidad regional, que oriente el mercado hacia la vida querida por la gente.

De igual forma, el padre Eliécer Soto (2007, entrevista) plantea el PDPMM como “un instrumento de resistencia al neoliberalismo”. Aún así, el laboratorio de paz no niega el beneficio, ni las posibilidades que trae el mercado, ni pone en discusión la presencia de multinacionales o inversión extranjera en la región. Esto

configura una suerte de tendencia social demócrata dentro de los conceptos del laboratorio de paz, aunque no explícita.

Fundamentalmente se destaca como un enfoque de desarrollo humano y sostenible aplicado a una escala micro de producción y con base en una economía campesina. Sigue manifiestamente otra perspectiva distinta al crecimiento económico o la mera creación de ingresos. Es una concepción del desarrollo eminentemente ética y humanista. Como plantea Francisco De Roux (2008, entrevista), principal ideólogo de esta iniciativa, “para nosotros el desarrollo es la gente. Lo más importante es identificar cuál es la manera de vivir que quieren los pobladores, organizarlos políticamente para que eso sea posible y producir esa manera de vivir”.

Se entiende el desarrollo como “la expansión sostenible de las posibilidades de la dignidad humana en un territorio” (De Roux, 2007, p. 6), concepción que converge con la definición de paz positiva de Galtung analizada en el primer capítulo. En realidad, el laboratorio de paz no ejecuta proyectos, genera y respalda procesos de producción por las comunidades locales, prestando asistencia técnica y financiera. Los pobladores son el centro de las iniciativas económicas desarrolladas, son los protagonistas e investigadores del laboratorio social para la paz que constituye el laboratorio (Castro, 2007, p.13).

En ese sentido tiene mucho que ver con el concepto de *desarrollo humano*, tal como el PNUD lo define<sup>11</sup>, es decir, como un tipo de desarrollo que reconoce a la persona humana como su eje central, que encierra un cariz multidimensional y toma en consideración temas de justicia social. El laboratorio de paz presenta una ‘política de desarrollo’ construida con la participación de la persona, como beneficiario y protagonista. Es un desarrollo definido como proceso social, económico, cultural y político (Katz, 2004, p. 30). Representa una visión amplia e integral del desarrollo. De hecho, el PDPMM ha sido influido por las más progresistas corrientes y conceptos del desarrollo económico (García, 2007, p. 3).

Por lo tanto, estamos delante de una iniciativa que preconiza y pone en práctica un enfoque económico con elementos peculiares e innovadores para la región del

---

11 Para el PNUD (2007), “el Desarrollo Humano consiste en algo más que la subida o caída de los ingresos nacionales. Se trata de crear un ambiente en el cual la gente pueda desarrollar todo su potencial y llevar vidas creativas y productivas de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. El desarrollo consiste, entonces, en expandir las posibilidades de escogencia que las personas tienen para llevar vidas que ellas mismas valoren. Y se trata de algo más que el crecimiento económico, que es solo un medio –y uno muy importante– de ampliación de las posibilidades de escogencia de los sujetos.”



Magdalena Medio. Representa una propuesta económica alternativa, aunque los recursos con que cuenta son pocos y por consiguiente no puede tener la pretensión real de poner en marcha *per se* un desarrollo distinto en la región o de cambiar definitivamente sus estructuras y dinámicas económicas. “Su contribución está en la siembra de una semilla con un enfoque de desarrollo incluyente, sostenible y humano” (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 28).

## El impacto, potencial y limitaciones del laboratorio de paz y del PDPMM en el Magdalena Medio

Considerando que el objetivo del laboratorio de paz es el de ser un experimento y una alternativa de construcción de paz, es no solo académica, sino política y socialmente importante analizar su potencial y limitaciones y evaluar, con mayor o menor exactitud, los impactos multinivel del laboratorio (Barreto Henriques, 2009a, p. 534). Es un ejercicio vital para la autoreflexión de esta iniciativa, para empoderar la experiencia, analizar las fortalezas y disfunciones de sus proyectos, y recoger los procesos de aprendizaje social, político y económico que genera el laboratorio, de tal manera que sea un ejemplo y un referente para otras regiones e iniciativas en Colombia.

No se pretende aquí hacer una evaluación exhaustiva del impacto de la iniciativa, con base en criterios cuantitativos, sino una evaluación de matriz esencialmente cualitativa, en cuanto experiencia de construcción de paz insertada en un determinado contexto social y territorial.

Sin embargo, enfrentamos un problema a este respecto. Evaluar el impacto de una iniciativa tal como el laboratorio de paz, representa una tarea complicada y delicada. A pesar de designarse y constituir un ‘laboratorio de paz’, no es un laboratorio en el cual las variables sean fácilmente aisladas, el ambiente sea esterilizado y los componentes fácilmente controlables o identificables. Es un laboratorio social y en esta medida, la evaluación de su impacto es complicada.

Una variedad de razones obstaculiza la tarea de medición y análisis de su impacto. Ante todo, la noción de impacto es problemática o inapropiada en procesos de



construcción de paz por la dificultad de atribución de causalidad en estos contextos. El conflicto armado es un proceso multi-causal y un escenario social complejo, con dinámicas locales, regionales, nacionales e internacionales que se cruzan. En el Magdalena Medio confluyen fuerzas heterogéneas, factores de cariz distinto, e intervienen actores de naturaleza muy diferentes. Por lo tanto, la complejidad del conflicto y la multitud de los factores que lo influyen hacen difícil evaluar la acción del laboratorio y diferenciar sus impactos de los demás actores que marcan presencia en este territorio (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 40; CID, 2003).

Así, la atribución de impacto al laboratorio de paz debe ser planteada con precaución. El análisis de los indicadores regionales no es una fuente clara de los impactos del laboratorio de paz y del PDPMM. Estos indicadores, como la disminución de los homicidios políticos, son complejos y multi-causales. Adicionalmente, los instrumentos convencionales de medición de impacto no pueden capturar la riqueza de la experiencia y las vastas dimensiones cualitativas del laboratorio de paz (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 41). Por lo demás, la construcción de la paz, más allá de las mediáticas firmas de acuerdos de paz, no siempre es tan palpable, es un proceso moroso, gradual, sutil y de pequeños detalles y 'nadas'.

En términos generales, de acuerdo con varias instancias, existe una evolución positiva de los indicadores regionales del Magdalena Medio: los niveles de violencia armada y violaciones de los derechos humanos han decrecido a partir del final del 2001; los homicidios políticos y los secuestros han bajado en los últimos años; el valor agregado de los ingresos ha subido; ha habido una disminución en la producción de coca (PDPMM, 2005, pp. 19-20; ICG, 2006, p. 20).

Sin embargo, ¿en qué medida se le puede dar al laboratorio crédito por eso? ¿Cuál fue su contribución? ¿Qué papel desempeñó en este proceso de evolución regional? La lectura de estos indicadores no es unívoca ni clara. Es difícil aforar hasta qué grado el laboratorio de paz ha contribuido en este proceso o aún si ha intervenido en eso. La violencia es multicausal y el desarrollo es un proceso complejo. Hay una diversidad de factores y actores que intervienen en el territorio, que condicionan las dinámicas y la propia acción del laboratorio, desde las políticas públicas nacionales, hasta las alcaldías, la acción estratégica y táctica de las fuerzas de seguridad y de los actores armados ilegales, la acción de los movimientos y organizaciones sociales, las parroquias de los pueblos, etc. No hay una relación lineal causa-efecto. Hay muchos factores y elementos en juego.

En términos de violencia, la curva de confrontación ha venido decreciendo en los últimos años. Ha habido una disminución de la violencia a largo plazo a nivel nacional. Pero no podemos atribuírselo al laboratorio. Se tienen que tomar en consideración otros elementos, tales como la estrategia nacional de guerra del gobierno de Álvaro Uribe, que ha disminuido mucha de la influencia territorial de las guerrillas y el proceso de desmovilización con los paramilitares iniciado en el 2006. De igual forma, el desarrollo es también contingente a muchos factores (Banfield, Gunduz y Killick, 2006, p. 83). Es un proceso que tiene que ver con decisiones micro, con políticas económicas macro, con coyunturas económicas, dinámicas de mercado y la misma globalización (Barreto Henriques, 2009a, p. 535).

A pesar de todos estos elementos, ha habido diversos informes de evaluación de impacto del PDPMM y del laboratorio (CID, 2003; García y Sarmiento, 2003; Rudqvist y Van Sluys, 2005; Herrera y Guerrero, 2007). De hecho, aunque es difícil evaluar el impacto del laboratorio de paz, se pueden hacer varias observaciones analíticas con respecto a sus éxitos y limitaciones, sus logros y bloqueos.

En primer lugar, es necesario subrayar que se pueden identificar algunos elementos mensurables del laboratorio y del PDPMM en términos cuantitativos. Según cifras oficiales de Acción Social y de la delegación de la Unión Europea en Colombia, entre 100 mil y 150 mil personas se han beneficiado directa o indirectamente del laboratorio de paz, lo que configura un escenario en el cual cerca de 20% del total de la población de la región ha participado en sus procesos y proyectos (De Roux, 2007); se generaron cerca de 1.700 nuevos empleos directos y 230 indirectos; se verificó un aumento de casi 50% en el nivel de ingreso de los hogares y beneficiarios vinculados a los procesos y proyectos del laboratorio (DNP, 2008, p. 117); se han formado en sus procesos sociales tres centenas de líderes; más de 100 organizaciones comunitarias han participado en esta iniciativa; se establecieron cerca de 200 alianzas entre el sector público y el privado; 2.500 familias campesinas han estado involucradas en proyectos productivos; se establecieron 11.578 hectáreas cultivadas, entre ellas se destacan los cultivos de cacao, frutales, floresta y palma; se han realizado 170 obras de infraestructura en proyectos educativos y la reestructuración de doce unidades de salud (Acción Social, 2010).

Por encima de todo, el laboratorio de paz evidencia un éxito micronotable, al confirmarse como un instrumento extraordinario de inclusión social, económica y política a nivel local (Barreto Henriques, 2009a, p. 536). Ha generado microbolsas

de desarrollo para comunidades y sectores sociales y ocupacionales bajo situaciones de marginalidad y precariedad, tales como los campesinos, los jóvenes y las mujeres.

En las veredas y corregimientos más aislados, en donde el Estado no tiene presencia o se remite a la presencia puntual del ejército, en donde los servicios públicos y las políticas de desarrollo no tienen incidencia, en donde la economía ilegal prospera, el laboratorio de paz ha generado microprocesos de producción campesina alternativa, procesos sociales de empoderamiento, emancipación e inclusión de las comunidades y ha contribuido al acercamiento y reconciliación de las ‘dos Colombias’, factores que verdaderamente representan formas y ejemplos de construcción de paz positiva desde la base. Estos son procesos que tienen no solo un componente económico y material, sino cultural, social, simbólico y psicológico.

Así, el laboratorio de paz, mediante sus proyectos y procesos sociales de inclusión, ha generado nuevos horizontes y proporcionado la esperanza de un futuro mejor en sectores e individuos profundamente marginados y vulnerables (CID, 2003, p. 21). Ha potenciado y multiplicado las capacidades y posibilidades de vida de muchos pobladores y comunidades, proporcionando los verdaderos micromilagros que representan el cambio de sus vidas.

Esta situación está bien reflejada en las palabras del padre Hermes (2007, entrevista), coordinador del “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón:

[...] en este mar inmenso de necesidades y sobre todo a nuestros pobladores demasiado pobres en muchos casos les han matado las ilusiones, los sueños, los ideales [...] y se recuperó una cantidad de valores hermosísimos, por ejemplo el valor humano de la sociedad, el valor de la fraternidad, el valor de la generosidad, el valor del cariño.

De igual forma, como señala Jorge Iván González (2007, entrevista), “escuchar a los campesinos hablar del programa da ganas de llorar. [...] En un mundo absolutamente exasperante de guerra, el programa ha despertado a los campesinos y les ha dado expectativas”. De hecho, en varios casos la voz de los campesinos ha sido escuchada por vez primera en el marco de estos procesos sociales, al permitir que sectores sociales marginados, como las mujeres, los jóvenes y los campesinos tuvieran presencia en la escena política y social, y en los circuitos económicos, y que mediante estos procesos se convirtieran por primera vez en actores de su propio futuro y desarrollo. Como refiere Bayona (2007, entrevista), “la gente volvió a creer

en sus propias iniciativas y que estas podrían sacarlos adelante”. Se permitió a la gente recuperar la confianza, individual y colectivamente.

Es en esta medida que se explica que integrantes de base del laboratorio se hayan referido al laboratorio de paz y al PDPMM como una “bendición de Dios” (Hernández, 2008, entrevista), o “un salva vidas” (Castrillón, 2008, entrevista). El laboratorio de paz hizo, en cierta medida, visible lo invisible y al revelar a los invisibles, puso en evidencia ‘la otra Colombia’ y en qué medida su inclusión es vital para la construcción de la paz en el país y en la región.

Asimismo, el laboratorio de paz ha desempeñado un papel cultural y social muy importante, al funcionar y establecerse como un medio de fortalecimiento y protección de la sociedad civil de la región, ejerciendo un rol muy destacado en el empoderamiento de las comunidades y organizaciones sociales de la región y en el estímulo a la participación popular.

Otro de los elementos de mayor relevancia en la acción de construcción de paz del laboratorio es que produjo la intervención, en mayor o menor profundidad, sobre los canales y las causas que han sostenido, y siguen alimentando el conflicto armado en Colombia, como la exclusión política, socioeconómica y regional. Sin una incidencia sobre estos factores, la transformación del conflicto armado en Colombia se percibe imposible. Así, los procesos de desarrollo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad que fomentó el laboratorio a un nivel local y regional se revelan como un poderoso aporte a la construcción de una paz sostenible, duradera y positiva en el país.

Frente a la exclusión socioeconómica, el laboratorio buscó responder con un amplio grupo de proyectos económicos con miras a generar un desarrollo humano incluyente y sostenible. En este marco ha logrado construir o preservar espacios de economía lícita e integrar a comunidades y sectores sociales con riesgo potencial de caer en actividades relacionadas con el narcotráfico o la violencia armada; confirió alternativas de ocupación económica y dio nuevas posibilidades de vida a varios sectores sociales como los jóvenes de las comunas de Barrancabermeja o los campesinos del sur del Bolívar, incidiendo de alguna forma sobre la violencia estructural y directa que se hace sentir sobre la población más excluida de la región.

Mediante estos procesos se han robado hombres a la guerra, pero también espacio político y social. Se ha contribuido a una deslegitimación cultural y social de la guerra y del recurso a la violencia y mediante microprocesos de transformación, se

ha mostrado que es posible un camino para incidir sobre los problemas estructurales del país con medios pacíficos.

La intervención sobre los canales que alimentan el conflicto pasó igualmente por sus mesas de conciliación con diversos sectores sociales y económicos del Magdalena Medio, que han convertido al PDPMM y el laboratorio de paz en un espacio privilegiado y un instrumento fundamental de transformación de conflictos en la escala regional, al incidir directamente sobre los temas que hicieron emerger el conflicto en el Magdalena Medio, como son la desigualdad en la distribución de los ingresos y la confrontación de modelos antagónicos de desarrollo. Por lo demás, el relativo éxito de estos espacios a nivel regional, así como de sus gestiones de paz con los actores armados, muestra, de cierta forma, que la vía del diálogo y de la negociación es esencial para la consecución de la paz en el país.

Frente a la exclusión política, el laboratorio de paz buscó interponer y fomentar procesos de participación y de integración de las comunidades en los procesos de decisión y elaboración de políticas públicas, mediante iniciativas y proyectos desarrollados paralelamente o en articulación con la institucionalidad, tales como presupuestos participativos y planes de desarrollo municipal, y mediante proyectos y procesos de gobernabilidad y fortalecimiento institucional (CID, 2003, p. 16).

Esta dimensión ha contribuido a acercar los ciudadanos a las instituciones y traer la población hacia el centro de la decisión política; permitió una participación popular en el espacio público que favorece otra forma de hacer política en una región y un país en donde gran parte de la población se encuentra al margen de las instituciones y los procesos democráticos. Ha dado una contribución, a escalas local y regional, para perfeccionar una democracia imperfecta, democratizar las instituciones, las prácticas y la cultura política, construir ciudadanía y superar el bipartidismo y clientelismo históricos, puestos al servicio de la élite (ECP, 2006, p. 20). En este sentido ha contribuido a aumentar la inclusión política y ha sido un medio de construcción del Estado y de la democracia desde la base. La acción del laboratorio de paz se podría percibir así como un referente y una incubadora de un nuevo modelo de construcción de democracia local, que sería conducente a una paz positiva.

A este nivel, uno de los logros más simbólicos del laboratorio de paz ha sido la ya mencionada elección de Carlos Contreras para la alcaldía de Barrancabermeja, hombre formado en el PDPMM, tal como gran parte de su equipo. Representa

un fenómeno curioso y significativo, al ser un joven que fue elegido enfrentando a las élites políticas tradicionales de la región, y que ha introducido nuevas ideas, prácticas y caminos para la alcaldía, de los cuales el presupuesto participativo se presenta como uno de los mejores ejemplos.

De hecho, el PDPMM ha formado una nueva 'élite' política en la región, una generación de líderes políticos y sociales con valores diferentes, formados en la filosofía del PDPMM, algunos de los cuales han llegado ya a lugares destacados de la política local del Magdalena Medio. Se verificó una integración de los beneficiarios del laboratorio en las redes sociales de la región, en los cargos directivos de las organizaciones públicas y de la sociedad civil, así como un incremento de la participación cívica y electoral en los espacios públicos locales (DNP, 2008, p. 123). El verdadero impacto de esta nueva generación en la cultura política de la región y en qué medida los valores y principios éticos sobre los cuales ha sido formada se reflejarán en sus gobiernos, queda como una interrogación que solo podrá ser contestada con el pasar de los años. Todavía, es una clara evidencia que el PDPMM está pasando al otro lado del espejo de Alicia y que su incidencia en las políticas públicas es real.

Otra de las dimensiones del impacto del laboratorio de paz en la región ha sido su incidencia en las políticas públicas locales y regionales, de la cual ha sido ejemplo la adopción del modelo de las EBIDS como parte de iniciativas municipales en Puerto Wilches, el Carmen y Aguachica.

Adicionalmente, uno de los principales aportes del laboratorio de paz en este campo es haber sido un medio y una plataforma privilegiada de diálogo entre la sociedad civil y el Estado, de articulación e interlocución entre las comunidades, los movimientos sociales y las instituciones. El PDPMM tiene una capacidad de interlocución con las altas esferas políticas, y un libre acceso a un círculo cerrado de las élites política y económica colombianas, desde los comandos del ejército a los ministerios, y a la misma Casa de Nariño sin par dentro de la sociedad civil del Magdalena Medio y sin parangón en los demás laboratorios de paz. Esto convirtió al Laboratorio de Paz en un canal de comunicación entre la sociedad civil local y los diferentes niveles de la institucionalidad. En cuanto a plataforma y espacio compuesto por varios actores estatales y de la sociedad civil, el laboratorio de paz constituyó una correa de transmisión y de intermediación entre las necesidades de las comunidades locales de la región y del Estado, y un lugar de llamada de las instituciones a intervenir y dirimir en los conflictos sociales locales (Molano, 2009, p. 11), desempeñando un rol de puente

entre los distintos niveles de la pirámide de Lederach descritos en el primer capítulo. Permitió una interlocución e interacción de asociaciones y comunidades locales con las instancias nacionales del Estado, como los ministerios, que adquieren madurez y *know how* en el proceso, y dejan de necesitar de la mediación misma del PDPMM, factores que transforman la forma de plantearse y percibirse la ciudadanía en el territorio (Moncayo, 2008, entrevista).

Pero el laboratorio se concibió y se estableció también como una plataforma de diálogo y articulación interna de la sociedad civil, al colocar organizaciones de campesinos a dialogar e intercambiar ideas con asociaciones de pescadores, a organizaciones de mujeres en articulación con grupos de jóvenes, a productores de cacao a compartir aprendizajes y concebir estrategias con productores de caucho. Se conformaron diversas redes sociales y temáticas que han generado capital social y sinergias varias.

Estas alianzas y dinámicas organizativas colectivas son clave para el fortalecimiento de las organizaciones, el enriquecimiento de los procesos y las experiencias, la demarcación de la presión de los grupos armados, y el desarrollo de respuestas y propuestas colectivas y pacíficas a las agresiones, no solo directas, sino estructurales y culturales de que son objeto (ECP, 2006, p. 20).

Mantener viva la posibilidad de dialogar con el otro es uno de los grandes logros del laboratorio de paz en la región, en cuanto espacio de libertad de expresión (Vargas, 2007, p. 5), que hace frente a la tendencia propiciada por la guerra para cortar los lazos de comunicación y solidaridad (Páez, 2007).

De igual forma, permitió transcender la dimensión local de algunas organizaciones e iniciativas y adquirir una escala de pensamiento e intervención regional, que las fortaleció y que fortaleció los procesos, lo que configura una ganancia importante en términos de la construcción del territorio y de la identidad del Magdalena Medio (Moncayo, 2008, entrevista).

En esta medida, el laboratorio de paz ha contribuido a la construcción de una nueva concepción de territorio y de espacio y una nueva dinámica de región, en la medida en que su área de intervención no coincide con las divisiones administrativas y departamentales del país, sino con un concepto cultural, social y geográfico, contribuyendo a la construcción de una identidad del Magdalena Medio y a un sentimiento de pertenencia a esta región, al fomentar el trabajo en red de varias organizaciones y comunidades estructuradas en torno a este territorio. Contribuye a la construcción

de un sentimiento de comunidad más allá de la vereda, que, por intermedio de ciertos procesos de inclusión políticos, sociales y económicos, favorece un sentimiento de integración a la comunidad de la nación y a la construcción del Estado.

Esta dimensión de diálogo y articulación del laboratorio de paz, tanto entre la sociedad civil y el Estado, como al interior de la sociedad civil, puede revelarse como uno de los mayores logros e impactos del laboratorio, una vez que la consecución de la paz y del desarrollo se configuren como retos más exigentes a largo plazo.

Mediante los procesos del laboratorio de paz en la región del Magdalena Medio, no está solo en consideración la inclusión de poblaciones y la creación de capital social, sino la construcción de una paz positiva desde la base. En gran medida, el laboratorio de paz, tal como otras iniciativas en Colombia, ha demostrado que, a pesar del escenario de aguda violencia armada, hay procesos organizativos, cívicos y pacíficos que pueden construir la paz desde la base mediante procesos políticos, culturales, económicos y organizativos (Hernández, 2002, p. 180). Se han construido microespacios y expresiones de paz, en los cuales la participación se ha hecho superior a la exclusión, el diálogo a la intransigencia y la dignidad al terror.

Estos demuestran que la paz no se construye solo desde la centralidad del Estado, de los actores alzados en armas y de procesos de negociación a nivel nacional, sino que se puede construir desde las bases, a nivel local, por las comunidades arrinconadas por la violencia, a través de la generación y apropiación por parte de las comunidades de una cultura de paz, de relaciones sociales basadas en valores como la tolerancia, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la solidaridad, la profundización de los espacios de participación y de la democracia a nivel local, y la generación de desarrollo humano (Hernández, 2002, p. 179). Asimismo, estas ‘paces’ locales que emergen en el marco del laboratorio de paz, ponen en evidencia la profunda conexión de la construcción de la paz con la profundización de la democracia y la generación del desarrollo humano sostenible e incluyente (Hernández, 2002). En esta medida, el laboratorio de paz figura como un referente de cómo la paz positiva se podría construir en el largo plazo en las regiones de Colombia, tratándose las causas profundas del conflicto y los problemas estructurales que el país no ha enfrentado históricamente.

En otro plano de su intervención, vale señalar que el laboratorio de paz ha hecho un trabajo de base notable sobre la violencia cultural que también asola de forma profunda la región y en términos del fomento y desarrollo de una cultura de paz, por intermedio de los varios proyectos previamente mencionados en este campo que han



fomentado en las comunidades y grupos de base valores proclives a la paz, como la tolerancia, el diálogo, la solidaridad. Más aún, ha estimulado el cambio de actitudes entre la gente hacia la negociación, la paz y la tolerancia (Rudqvist y Van Sluys, 2005, p. 41), y ha amplificado la capacidad cívica y la conciencia de los ciudadanos.

Así, ha desempeñado, hasta cierto punto, un rol en fomentar un ambiente político y social proclive a la paz y a la solución negociada a un nivel de base (Páez, 2007), a través de su trabajo de concientización con los actores y comunidades sociales locales y por intermedio de las interacciones pacíficas y diálogos que generó entre diferentes sectores de la población colombiana. No solo el laboratorio de paz ha desarrollado varios proyectos que inciden en el fomento de una cultura de paz, sino ha promovido en su trabajo diario y cotidiano con las comunidades y organizaciones de base, prácticas y actitudes a favor de la negociación, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos (Rudqvist and Van Sluys, 2005, p. 41). En este sentido contribuye al camino del diálogo como receta para transformar los problemas estructurales y conflictos en el país y para desarrollar lo que Lederach (1997, p. 94) refiere como una “circunscripción de paz”, es decir, ciudadanos comprometidos con una opción y un *ethos* de paz, que podría proveer, a los niveles micro y regional, la base social para sostener y hacer sostenible un proceso de paz a nivel nacional.

Por último, el laboratorio de paz ha representado un importante instrumento de resistencia civil a los actores armados. Constituido en un momento de gran dificultad para la sociedad civil del Magdalena Medio —en el cual la movilización social sufría una asfixia derivada sobre todo de la expansión e implantación militar, política y social del paramilitarismo en la región y su enfrentamiento con las guerrillas—, el laboratorio de paz ha representado un balón de oxígeno para las organizaciones sociales de la región. Dio a comunidades que viven en zonas y condiciones muy difíciles, la oportunidad de sobrevivir, de organizarse y prevenir el desplazamiento. A la sociedad civil organizada le ofreció medios e instrumentos de protección y resistencia.

En particular, ha desarrollado y recurrido a la creación y respaldo a “Espacios humanitarios”, al apoyo y acompañamiento jurídico de las comunidades, a la denuncia y la visibilización nacional e internacional de las violaciones por parte de los actores armados; a la interlocución con las instituciones nacionales en el sentido de la exigencia de protección, al trabajo con las defensorías del pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a gestiones de paz y acuerdos

tácitos locales con los actores armados, con vista a la protección y respeto de las poblaciones civiles, de los cuales el más emblemático es el del Micoahumado (ECP, 2006, p. 20).

Otro ejemplo de gran relevancia ha sido el de las mediaciones de Francisco De Roux con los grupos armados, que permitieron liberar a gente secuestrada, salvar la vida a campesinos, y dirimir conflictos potencialmente violentos en varias circunstancias, como ejemplifican las anécdotas previamente subrayadas. Así, solo la fuerza de su acción individual en cuanto líder del PDPMM ha salvado decenas, o por ventura, centenas de vidas.

Asimismo, al contribuir para la preservación y promoción de la capacidad de asociarse y de reparar un tejido social, ha hecho posible que los actores armados no sometieran social y políticamente de forma tan profunda a la población.

En realidad, es tan importante preguntar qué impacto ha tenido el laboratorio de paz, en términos de reducción de la violencia directa y estructural, como preguntar también qué hubiera pasado en el Magdalena Medio si no hubiera estado el PDPMM (Katz, 2008, entrevista; De Roux, 2007, entrevista). Este es un ejercicio hipotético muy difícil de plantearse, pero que tiene algún sentido. El PDPMM ha constituido efectivamente una plataforma fundamental de contención de la paramilitarización social, política y económica de la región, de rescate de la sociedad civil y reconstrucción del tejido social (De Roux, 2007). Aunque las AUC, formadas en el Magdalena Medio, se han propuesto volver a esta región el corazón de la expansión de su proyecto político y económico, no han tenido éxito en esa tarea de la forma en que lo han logrado en territorios como Puerto Boyacá o Córdoba. El programa ha contribuido a mantener viva la luz de la esperanza, y un horizonte de paz y de desarrollo incluyente, en el medio de las tinieblas de la violencia, la exclusión, la miseria y el sometimiento, lo que constituye en sí uno de los grandes logros del laboratorio de paz.

Es en esta medida que el trabajo desarrollado por el laboratorio es muy valorado por las organizaciones y comunidades de base de la región. Teresa Castrillón (2008, entrevista), líderesa de Ave Fénix, una organización local de Puerto Berrío, retrató el Laboratorio y el PDPMM como un “salva-vidas”. Efectivamente, el laboratorio ha podido amparar la sociedad civil amenazada en la región y se convirtió, como refiere Molano (2009, p. 111), en una verdadera “trinchera contra la violencia”. Ha tenido el mérito de traer a discusión un tema que estaba prohibido por

los actores armados ilegales, al colocar en la agenda y en el centro de la discusión política y social el derecho a la vida, y al denunciar las masacres, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Su consigna “Primero la Vida” fue acogida y adoptada por toda la región y se volvió la bandera de reivindicación de toda la movilización social del Magdalena Medio (Molano, 2009, p. 111).

Esta posición firme frente al tema de la violencia y de la vida puede haber desempeñado un rol en la disminución de las formas de violencia directa en la región (o su transformación hacia formas más tibias y ‘discretas’ que evidencia el Magdalena Medio en la actualidad), pero fundamentalmente puso en posición destacada la dignidad de la vida que, como señala Molano (2009, p. 105), “es una variable imposible de cuantificar”.

Sin embargo, es imprudente sobrevalorar el rol desempeñado por el laboratorio de paz en la disminución de la violencia armada en el Magdalena Medio. No se han establecido ‘islas de paz’ con el laboratorio y en realidad, la violencia está lejos de desaparecer de esta región, y es aún profundamente atravesada por múltiples dinámicas de conflicto y de control social. Aunque la era de terror que constituyó la expansión del paramilitarismo en el final de los años 90 e inicio de los 2000 haya cesado, la violencia y el control social se transfiguraron y asumieron nuevas formas y configuraciones. Actualmente predominan los asesinatos selectivos en detrimento de las masacres, pero las estructuras de poder y de control del paramilitarismo siguen activas, aunque son más blandas y sutiles. Persisten múltiples amenazas sobre varios sectores y líderes sociales en la región (Molano, 2009, p. 116). A la violencia de las AUC se ha seguido la violencia del neo-paramilitarismo de las Águilas Negras y otros nuevos grupos.

De la misma forma, si las fuerzas guerrilleras dejaron de marcar una presencia de forma destacada y visible en la generalidad de las cabeceras municipales del Magdalena Medio, continúan su implantación y presencia en las zonas rurales, como ha sido posible presenciar mediante mi visita al Sur del Bolívar en donde he avistado a dos guerrilleros al borde de la carretera.

Asimismo, es legítimo atribuir en gran medida la disminución de las cifras de la violencia armada a un éxito de la política de seguridad democrática, enfoque contrainsurgente y de seguridad que sigue la vía contraria a la preconizada por el laboratorio y que ha logrado un arrinconamiento de la insurgencia y la desmovilización de las AUC; o interpretarse como una consecuencia de una dominación territorial

y social de facto del paramilitarismo en la región, subsiguiente a su toma militar (Molano, 2009, p. 116). Los niveles de violencia bajaron significativamente en el Magdalena Medio después del pico del 2001, pero esto puede significar, en gran medida, que hay un ‘control remanente’ paramilitar del territorio, que ya no necesita de la violencia masiva, pues ya se ha implantado; solamente de una violencia selectiva, para asegurar el control social.

De hecho, se nota que las dinámicas del conflicto están profundamente arraigadas, y son aún muy visibles en la región. El laboratorio ha encontrado dificultad en eliminarlas o disminuirlas. Esto se destaca como una de las principales limitaciones del laboratorio de paz. En realidad, hay logros importantísimos de esta iniciativa, pero el laboratorio de paz ha presentado igualmente diversas debilidades y bloqueos, que oscurecen su éxito y su impacto:

En primer lugar, el laboratorio de paz se ha enfrentado a limitaciones de orden estructural: ha generado bolsas y microprocesos de desarrollo campesino y vías demostrativas de otro tipo de producción generadora de un desarrollo humano y sostenible, pero esto no significa que esté modificando o incidiendo sustancialmente sobre las estructuras macro de producción, de propiedad y de riqueza. No ha estado interviniendo ni en la redistribución de la riqueza, ni de la tierra, solamente en la inclusión de los sectores más marginados, lo que encierra significados distintos tanto en términos de impacto social como político.

El monto de recursos que manejó el laboratorio de paz fue limitado y su escala de intervención y de proyectos fue pequeña para influenciar de forma significativa las dinámicas de violencia y desarrollo. Como afirma el economista colombiano Jorge Iván González (2007, entrevista), 42 millones de euros no pueden transformar una región como el Magdalena Medio. Si bien esta es una cifra considerable en términos de ayuda al desarrollo, representa muy poco en el marco más amplio de la economía regional, que moviliza 2.400 millones de euros de valor agregado por año (De Roux, 2007). Son montos poco significativos cuando se comparan con el presupuesto municipal de Barrancabermeja, que es de 126 mil millones de pesos; con los recursos que mueve la coca o con los que genera Ecopetrol en la región; con el presupuesto de los proyectos de construcción de las vías en la región, o aún más con el presupuesto militar de Colombia que alcanzaba la impresionante cifra de 20 billones de pesos en 2010 (CID, 2003, p. 11; De Roux, 2008, entrevista; SIPRI, 2011).

El laboratorio de paz ha figurado como uno entre varios actores en la región, muchos de los cuales con pesos políticos y económicos muy superiores. Hay modelos de desarrollo, de democracia y de paz en conflicto en el Magdalena Medio, verdadero microcosmos del conflicto armado en el país y el Laboratorio de Paz fue tan solo un peón más en este juego de ajedrez. No detenta la capacidad de intervención del Estado, ni se puede comparar con los montos asignados a las políticas públicas. Son dimensiones y escalas claramente distintas en procesos e impactos (CID, 2003, p. 11). Además, se debate en una región con fuertísimas carencias en varios niveles. En este marco, el impacto del laboratorio es, en gran medida, marginal. Pensar que el laboratorio de paz podría por sí mismo generar un proceso de desarrollo regional que transformara radicalmente la faz y las estructuras políticas, económicas y culturales del Magdalena Medio, es ingenuo y configura expectativas irrealizables (CID, 2003, p. 11).

A pesar de tener influencia sobre variadísimos procesos sociales de la región y tener una incidencia visible dentro de algunas comunidades y sectores sociales, su impacto en los indicadores y acontecimientos del Magdalena Medio, como la creación de la riqueza, el desarrollo, el desplazamiento y los asesinatos selectivos, es necesariamente reducido y se limita fundamentalmente a bolsas de microinclusión política, social y cultural. Ha generado espacios de desarrollo y producción campesina; ha empoderado política y socialmente comunidades y organizaciones sociales, ha estimulado la participación social y ha visibilizado a sectores sociales marginalizados como los campesinos, las mujeres y los jóvenes. En un mundo de desesperación dio expectativas de vida y horizontes a los campesinos, lo que configura por sí mismo una labor y rol profundamente laudables y significativos.

Sin embargo, es preciso subrayar que el laboratorio de paz, mediante sus procesos e iniciativas, ha puesto en la agenda política y social de la región y de la nación los temas estructurales y, en esa medida, está contribuyendo para su posible transformación. Por lo demás, ha puesto en práctica vías concretas para la generación de otro tipo de desarrollo conducente a otro tipo de paz; ha demostrado, mediante procesos de base concretos, que hay alternativas viables al modelo económico excluyente que domina la región y que es posible generar un desarrollo humano sostenible e incluyente que esté al servicio de la paz positiva. Más que capacidad de generar desarrollo y paz, el laboratorio ha impulsado referentes que podrían ser generalizados por otras instancias. Tiene fundamentalmente un efecto demostrativo y de aprendizaje en bolsas micro.

En esta medida, no se debe mirar el laboratorio de paz solamente con base en sus impactos palpables, en las transformaciones que ha generado en el Magdalena Medio o en su incapacidad de incidir sobre las estructuras de la región, sino también en cuanto una iniciativa que ha mostrado conceptualmente y en la práctica, que es posible construir unos modelos de sociedad y de desarrollo distintos, en donde todos los colombianos quepan, sin marginaciones y exclusiones (CID, 2003, p. 11). Es decir, se debe evaluar el laboratorio de paz no solo por lo que ha hecho y el impacto que ha tenido, sino también por lo que plantea, que es en realidad su mayor fuerza. Su intervención no ha sido inocua en la región, por el contrario, ha tenido incidencia a varios niveles, pero representa más un camino indicativo que un camino recorrido.

El rol que desempeña el laboratorio de paz en la región y sus limitaciones es descrito de forma ejemplar por Teresa Castrillón (2008, entrevista),

Yo digo que el PDP es una especie de salva-vidas, pero es que las necesidades en el Magdalena Medio son tantas, la pobreza es tanta, que no alcanza; necesitaríamos unos mil PDP para cubrirlas. Pero ellos tienen su “granito de arena” y hacen mucho por la comunidad.

Estas palabras de Teresa ponen en evidencia el mérito y el valor de la acción del PDPMM y del laboratorio de paz en el Magdalena Medio, pero también sus limitaciones. Así que estas iniciativas deben ser entendidas fundamentalmente como unas pocas gotas de agua en un estanque. Dada la gravedad de la situación en la región, el laboratorio no será *per se* la solución al problema (Palechor, 2005, p. 45).

El impacto e incidencia del laboratorio de paz en el conflicto necesariamente depende de dinámicas y factores a nivel macro. Se ha enfrentado a diversas mecánicas (en términos políticos, estratégicos y económicos) en el ámbito regional y nacional, contrarias al camino que preconiza: en particular, el enfoque de acercamiento al conflicto armado y a la paz de la administración Uribe, el fortalecimiento de la vía militar y la negación del conflicto; las dinámicas económicas dominantes en el Magdalena Medio y en Colombia, y la paramilitarización social, económica y militar de la región.

El laboratorio de paz se ha enfrentado a una dinámica económica regional en contravía con su iniciativa y a una paramilitarización de la región en términos políticos, sociales, militares y económicos. Ha habido una tendencia contraria al modelo de desarrollo planteado por el PDPMM en el Magdalena Medio protagonizada por dinámicas económicas de la concentración de la tenencia de tierra, el

desplazamiento forzado de campesinos, el establecimiento de grandes extensiones de monocultivo agroindustrial, como la palma africana; de grandes porciones de tierra para ganadería extensiva, de megaproyectos industriales y de la aceptación de propuestas de grandes multinacionales mineras en la región.

Estas dinámicas económicas que atraviesan la región no favorecen un desarrollo humano, sostenible y a la escala campesina, sino a los sectores sociales y económicos privilegiados, como los latifundistas y los ganaderos extensivos. Por lo tanto, amenazan con marginalizar aún más a los sectores más excluidos socioeconómicamente de la población, empujándolos hacia la miseria, el desplazamiento forzado o económico, la economía informal o ilícita, o aún la integración a grupos armados ilegales. Esta tendencia pone en cuestión la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos socioeconómicos desarrollados y apoyados por el laboratorio de paz. A decir verdad, apoyar y fortalecer las economías campesinas locales constituye un reto enorme para el PDPMM.

Por lo demás, este proceso ha estado íntimamente relacionado con violencia armada sobre campesinos, líderes sociales y sindicales, con vista a desplazar o silenciar (potenciales o reales) opositores, aumentar las extensiones de tierra por apropiar y selectivamente apropiarse de las zonas ricas en recursos naturales, como el oro. El paramilitarismo va hombro a hombro con los ganaderos de la región, la economía cocalera y otros intereses económicos.

Esta dinámica, que reviste a la vez una dimensión militar y otra económica, ha sido bien analizada y planteada por Libardo Sarmiento (1996, pp. 56-58), que describe la violencia paramilitar en el Magdalena Medio como una estrategia de acumulación capitalista. Según el autor, la violencia armada de los grupos paramilitares ha sido funcional a las dinámicas económicas en la región, en la medida en que ha contribuido a atacar la economía campesina y favorecer a los terratenientes, mediante un proceso de desplazamiento de los campesinos, de concentración de la tierra y de implantación de la agroindustria extensiva y de las grandes empresas de explotación minera. En esta medida, la violencia paramilitar en el Magdalena Medio ha servido, como en otras partes de Colombia y de Latinoamérica, para preservar los intereses económicos de la élite y contener movimientos y acciones de sectores sociales considerados antagónicos.

Los campesinos en la región se ven cada vez más vulnerables y arrinconados, y susceptibles al desplazamiento (por las armas o la compra de sus tierras) o a las vías ilícitas y violentas de actividad. Una situación particularmente grave ocurre en el Sur de Bolívar, en donde el desplazamiento de campesinos y el asesinato

selectivo de líderes por motivaciones económicas se volvió un hecho recurrente. Como planteó una investigación de la revista *Semana*, el oro se ha vuelto el ‘plomo’ en el Sur del Bolívar, particularmente en la Serranía de San Lucas, considerada la mayor mina de oro de Latinoamérica. Hay grandes intereses en la explotación de la minería de la región, específicamente de las transnacionales AngloGold Ashanti, San Lucas Gold y Uragold Corp, y de empresas nacionales Mineros de Antioquia y Mineros S.A (*Semana*, 2009).

Por esta razón se reforzó muchísimo la presencia militar y paramilitar en esta zona y la violencia sobre líderes sociales. Hay fuertes indicios de que el desplazamiento forzado de campesinos y de pequeños mineros que rechazan abandonar o vender sus tierras, y el asesinato de líderes sociales y sindicales está conectado a intereses económicos. Algunas mineras han establecido convenios especiales de protección con las fuerzas armadas (*Semana*, 2009), pero hay sospechas de que estos acuerdos hayan podido ser no solo de protección, sino de agresión, por intermedio de grupos paramilitares. Mineros asociados a Fedeagromisbol que se opusieron a la llegada de las compañías mineras, como Alejandro Uribe, de la vereda de Mina Gallo (Municipio de Morales), han sido asesinados. Un caso similar es el de Carlos Mario García, integrante de la ACVC, otra organización que ha manifestado públicamente su rechazo a las mineras en la región (*Semana*, 2009).

El caso de la ACVC es, en realidad, paradigmático de la persecución violenta sobre la sociedad civil, tanto de la parte de los grupos armados ilegales, como del mismo Estado. La ACVC es una organización cuyas posiciones firmes, planteamientos radicales y retórica de izquierda, les ha asegurado diversos sinsabores y ha traído amenazas y acusaciones de nexos a la guerrilla. Ha sido objeto de amenazas y violencia sistemática por parte de grupos paramilitares, situación que es bien visible y patente en la condición de su oficina en Barrancabermeja, que se evidencia como un verdadero bunker cerrado con una puerta blindada.

Pero la persecución a esta organización pasa no solo por los grupos armados ilegales, sino también por el mismo Estado colombiano. La junta directiva de la ACVC ha sido objeto de un proceso judicial por rebelión en el 2008, con base en factores más políticos que judiciales, que se saldó en el encarcelamiento de varios miembros (Martínez, 2008, entrevista).

En realidad, bajo las imperfecciones del sistema político colombiano, el carácter anti-liberal de la administración Uribe y la polarización y maniqueísmo que el



conflicto armado ha impuesto sobre la sociedad civil colombiana, la afiliación a causas campesinas y la crítica abierta al régimen son fácilmente rotulados como un vínculo con la insurgencia. La protesta social legítima ha sido igualmente en muchos casos confundida por el ejército con subversión armada, llevándolo a presión y persecución militar sobre la población civil (*Semana*, 2009). Además la política de seguridad democrática fomentó la colaboración de la población civil en la guerra contra el terrorismo, mediante el establecimiento de una red de informantes.

Esta dinámica de violencia sobre la sociedad civil y sobre la movilización y organizaciones sociales se configura como una de las principales amenazas para una iniciativa como el laboratorio de paz, en particular en un momento de implantación del paramilitarismo en el Magdalena Medio. Gran parte de la esencia del proyecto paramilitar tiene como base y propósito impedir que la gente se organice (McDonald, 1998, p. 106). La movilización social es un blanco militar del paramilitarismo y, en menor medida, de la insurgencia. De hecho, la especificidad del conflicto armado colombiano, en cuanto guerra de guerrillas, reside en pasar no tanto por el enfrentamiento directo entre enemigos, sino por una guerra de tercero interpuesto, en donde se golpea sobre las bases sociales, más frecuentemente supuestas, del otro bando, en el sentido de ‘quitarle el agua al pez’. En esta medida, el conflicto colombiano reviste fundamentalmente la configuración de una guerra contra la población civil o, en los términos del colombianólogo Daniel Pécaut (2001), de una “guerra contra la sociedad”. El paramilitarismo ve la movilización cívica y social como expresiones de respaldo a la insurgencia y es en su esencia anti-sociedad civil, elementos que asumen un matiz distinto a los de la guerrilla, que busca cooptar los movimientos sociales en pro de su lucha revolucionaria. En consecuencia, en particular los grupos paramilitares, han considerado a los movimientos sociales del Magdalena Medio como objetivos militares (Páez, 2007).

Este marco de situación contextualiza, en gran medida, la violencia sobre la población civil en el Magdalena Medio y explica el escenario con que se debate el PDPMM en la región. Los actores armados buscan someter cualquier tipo de proceso social autónomo, visto como amenaza a su control sobre la población (ECP, 2006, p. 20). En este factor residió una de las limitaciones principales del laboratorio de paz del Magdalena Medio. Por más redundante que suene, es el mismo contexto de conflicto armado y de militarización política, social y económica lo que más dificulta la construcción de la paz desde la sociedad civil. En una

situación de violencia, de amenazas, de señalamientos y presión, es muy difícil poner proyectos y procesos sociales en práctica.

El laboratorio de paz se ha enfrentado a problemas serios a este respecto, que han amenazado su viabilidad y sostenibilidad en la región. Los actores armados ven con sospecha al PDPMM y el laboratorio de paz. Si bien las guerrillas lo han visto como parte de una estrategia de contrainsurgencia del Estado y del capital internacional, los paramilitares identifican su retórica progresista como una afiliación a la guerrilla. En un país y conflicto altamente polarizados, hay muy poco espacio para lógicas y aproximaciones alternativas.

Así, la relación entre el laboratorio de paz y los grupos armados siempre ha sido tensa. Varios actores involucrados en el laboratorio han sido blancos recurrentes de violencia y amenazas por parte de los actores armados: organizaciones sociales como la ACVC y la OFP han estado bajo amenaza sistemática de grupos paramilitares; participantes de base han sido desplazados y secuestrados, tanto por las guerrillas como por los paramilitares; diversas figuras de la CDPMM han sido amenazadas en varias ocasiones: Francisco De Roux ha sufrido innumerables intimidaciones por grupos armados y ha sido secuestrado una vez por el ELN; Ubencel Duque, actual director de la CDPMM, ha tenido que enfrentar diversas amenazas de grupos paramilitares, habiendo incluso constado en una lista negra de las Águilas Negras, en la cual figuraban igualmente líderes de procesos de base del laboratorio de paz, como Rafael Gallego, cura de Tiquisio y coordinador del mismo “Espacio humanitario”. Más de treinta personas afiliadas a procesos sociales del PDPMM y del laboratorio de paz han perdido sus vidas, (27 a las manos de grupos paramilitares y tres de la guerrilla) (De Roux, 2005, p. 40), elemento que evidencia la dinámica contrainsurgente del paramilitarismo de ‘quitar el agua al pez’. Ha esto hay que sumas los profundos riesgos que envuelve la construcción de paz en un escenario de conflicto abierto y las dificultades y vicisitudes de la movilización social por la paz desde la base. Por cada víctima de la violencia armada está un rostro humano que prueba que esto no es un escenario aséptico y de ‘laboratorio’. Construir la paz es quitar espacio a la guerra.

Esta situación lanza un anatema y un bloqueo sobre la movilización social por la paz, al diezmar la capacidad de liderazgo de los procesos y colocar entrabas a la participación y la transformación. La violencia armada, en especial la asociada a la expansión del paramilitarismo, ha amputado parte de la capacidad organizativa y

de movilización en el Magdalena Medio, y ha desplazado y amenazado innumerables líderes sociales y comunitarios (Lozano, 2006, p. 66), lo que robó dinamismo a algunos procesos de base del laboratorio de paz. Hubo líderes que tuvieron que irse a lugares como Bogotá, Bucaramanga o Cúcuta, lo que fue un gran golpe para el laboratorio (Moncayo, 2008, p. 2). Como ha sido señalado por varios líderes de procesos de base, en varios casos los niveles de participación han bajado por la violencia armada (Hernández, 2008, entrevista). Las prácticas de terror sobre la población civil, que pretenden subyugar la población, son un factor de bloqueo y restricción a la participación comunitaria y social. Convocar a las comunidades en este marco no ha sido tarea fácil (Briceño, 2007, p. 30).

Asimismo, la exclusión regional que evidencia el país y en particular, la región del Magdalena Medio, representa un obstáculo a la participación social. Hay veredas sumamente aisladas, en las cuales les toca a los campesinos y pobladores viajar y en algunos casos, caminar por horas, literalmente a pie, para llegar a eventos organizados por el laboratorio de paz.

Otro problema relacionado con la participación social se desprende de la previamente analizada metodología de la Comunidad Europea, que ha sido introducida en este territorio mediante el desarrollo del laboratorio de paz. La aplicación del sistema de convocatoria pública de proyectos ha limitado la participación de la gente de la región en la iniciativa, debido a su imposibilidad de formular proyectos que requieren manejar en forma adecuada la pesada burocracia europea. Factores como estos condicionan no solo la cantidad, sino la calidad de la participación social en los procesos del laboratorio de paz y el impacto de estos en las comunidades y en la región. Así, la transversalidad e incidencia de sus procesos de participación no es plena y queda limitada a algunas bolsas sociales de participación y microespacios de paz.

Por lo demás, otros elementos diversos levantan dudas sobre el futuro e impacto del laboratorio.

Con respecto a la sostenibilidad de las iniciativas de base del laboratorio, es necesario señalar que hay proyectos iniciados en el marco del laboratorio de paz que hoy se han convertido en procesos sociales, que caminan solos y tienen condiciones para subsistir después del cese del financiación, es decir que han adquirido sostenibilidad, pues han abierto caminos hacia la gestión mediante recursos propios. El caso del proyecto de producción de cacao es un buen ejemplo de esto (Briceño, 2007). En otros casos, algunos proyectos han tenido más dificultad en subsistir sin

el respaldo financiero europeo, que se redujo substancialmente a partir del 2010, configurando un serio riesgo de volver al status *quo ante*.

No obstante, es necesario señalar que la intervención del PDPMM en la región, contrariamente al laboratorio de paz que tiene un horizonte temporal limitado de ocho años, se plantea a largo plazo y tiene un horizonte previsto de por lo menos veinte años (Valderrama, 2007, entrevista). En esta medida, los procesos de base van a seguir siendo respaldados, independientemente de las modalidades del apoyo.

Frente a todos estos fuertes bloqueos y obstáculos que ha enfrentado el laboratorio de paz y el PDPMM en el Magdalena Medio, sobre todas las dinámicas políticas, económicas y militares en contravía al camino preconizado y trabajado por esta iniciativa, existe el riesgo de que el laboratorio de paz y el PDPMM a medio plazo se vuelvan tan solamente un miraje de paz, y que su impacto y aportes sean disminuidos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores. Hay que subrayar que el laboratorio de paz encierra un valor que también es simbólico, en cuanto propuesta y utopía de paz. Se posicionó conceptualmente y en sus procesos de base como una utopía de región, factor con un potencial que no es cuantificable en términos de impacto, pero que vale en cuanto horizonte para los pobladores, los campesinos y la sociedad civil de la región (Molano, 2009, p. 56). La mayor fortaleza del laboratorio de paz, con base en el PDPMM, es su propuesta alternativa, la fuerza de sus ideas, sus planteamientos éticos, su alternativa conceptual y filosófica, que abre una discusión sobre las vías para la paz en Colombia, desde las veredas del Magdalena Medio hasta la Casa de Nariño. En juego no están solo los impactos sobre los indicadores del conflicto, ni los montos de los recursos gestionados o generados, sino las ideas y los modelos de paz y de desarrollo en confrontación.

Asimismo, ha demostrado hasta qué punto es posible sobrevivir y preservar visiones alternativas y valores de civilidad y solidaridad en medio del conflicto armado y de la cultura de la violencia, tal como las flores pueden sobrevivir en el cieno. Esta es, por ventura, su contribución más valiosa y más valerosa. Este valor, que es a la vez simbólico y político, adviene de su ruptura con las lógicas de la guerra, pero principalmente de la fuerza ética de sus planteamientos y del valor político y social de su metodología participativa e incluyente. Amparó temas que estaban en riesgo de hundirse en la violencia en el Magdalena Medio. En medio de las dinámicas y la cultura de la violencia generada por el conflicto, el laboratorio ha desempeñado un rol importante en el sentido de recuperar valores humanos y éticos, como la vida, la dignidad, la solidaridad,

el bien público, la tolerancia y la legalidad. El aumento de la esperanza y el alimento de la utopía que hace el laboratorio no son cuantificables en términos de impacto, pero son de una importancia extrema para la vida de las personas.

El laboratorio no ha cambiado las estructuras político-económicas de la región, ni ha incidido de forma profunda sobre las causas del conflicto armado, pero indicó caminos y direcciones para la paz y el desarrollo y fomentó verdaderas microtransformaciones del conflicto. Fundamentalmente, ha desbrozado caminos y propuestas concretas de salida al conflicto y de cómo se puede construir una paz positiva a escala micro, que pueden ser generalizables en otros ámbitos y niveles. Los avances en la gobernabilidad, en la participación política, en la protección de líderes sociales, en la reconstrucción del tejido social, o los microproyectos de la economía popular, no configuran en sí mismos la paz, pero configuran una construcción de una paz positiva desde la base.

## Conclusión

Este capítulo permitió analizar en profundidad y detalle el tema de los laboratorios de paz en cuanto instrumento de construcción de la paz positiva desde la base mediante la exposición y el análisis del estudio de caso del laboratorio de paz del Magdalena Medio, desarrollado sobre la base del PDPMM.

Se puso en evidencia la filosofía y la metodología de paz peculiares sobre las cuales se sostiene la iniciativa y cómo la construcción de la paz gana forma y vida en lo cotidiano a partir de las veredas de la región, mediante un recorrido por un conjunto de proyectos y procesos sociales desarrollados por el laboratorio de paz en diferentes áreas.

El laboratorio emerge así como una experiencia peculiar y original de construcción de la paz. Corresponde verdaderamente a un laboratorio de ensayos para la paz que, de forma creativa pero pragmática, imagina y busca nuevos senderos que conduzcan a ella, en la región del Magdalena Medio y en Colombia. Se configura como un medio extraordinario y de relevancia para construir una paz positiva, al permitir que se reduzca la exclusión, la violencia y el sufrimiento, se enfrenten las causas del conflicto y se fomenten la inclusión social, económica y política de las comunidades y los grupos

sociales. Muestra cómo en la práctica, es posible construir micro-paces y propiciar una transformación del conflicto a nivel local, al estimular que la gente maneje de forma más positiva los conflictos en sus vidas cotidianas (McDonald, 1998, p. 55), cambie sus formas de pensar y actuar, y se comprometa con nuevas reglas y principios cívicos.

En esta medida, el laboratorio de paz es una iniciativa que genera enseñanzas que podrán ser aprovechadas, reproducidas por la institucionalidad y otras instancias en el marco de la construcción de una paz positiva en el país. Como señala De Roux (2007, p. 1), configura una respuesta parcial y local que proyecta un camino para la respuesta nacional y total para el conflicto en Colombia.

Sin embargo, como se subrayó a lo largo del capítulo, el laboratorio de paz padece de diversas limitaciones, específicamente su incapacidad para incidir de forma substancial sobre los indicadores del conflicto armado y del desarrollo en la región, y se enfrenta a varios bloqueos y obstáculos, en especial, las dinámicas a nivel macro que intervienen sobre el territorio en contravía con el camino preconizado por el PDPMM, como la ‘paramilitarización’ económica y social de la región.

No obstante, a pesar de ser una contribución pequeña en términos de sus impactos concretos sobre las estructuras y dinámicas macro de la región, es políticamente significativa y de gran simbolismo en cuanto propuesta y alternativa conceptual de paz y de inclusión económica, social, político-institucional y regional. Encierra un potencial grandísimo en cuanto experiencia piloto de transformación de conflictos y de intervención sobre territorios en crisis.

Por lo tanto, esencialmente, esta iniciativa se debe entender en cuanto propuesta y semilla, que trata de mostrar al nivel micro una solución alternativa de paz y desarrollo. Es verdaderamente un ‘laboratorio de paz’ en una región que ha sido históricamente un ‘laboratorio de guerra’ y representa un verdadero microcosmos del conflicto armado y social en el país.

En el capítulo siguiente presentaremos y analizaremos el estudio de caso del laboratorio de paz del Macizo Colombiano y Alto Patía, teniendo en cuenta las transformaciones en la iniciativa, al ser desarrollado en otro contexto y escenario del país, mediante otros actores y otra coyuntura política. Permitirá establecer un estudio comparativo que enriquecerá el análisis y la investigación, y la evaluación de los laboratorios de paz en cuanto alternativas de construcción de paz positiva desde las regiones en Colombia.



# Capítulo





# El segundo laboratorio de paz: ¿la expansión de la ‘formula’ de paz o el ‘secuestro’ por la *realpolitik*? El estudio de caso del laboratorio de paz del Cauca y Nariño (Macizo Colombiano y Alto Patía)

“Este verde poema hoja por hoja, lo mece un viento suroeste, este poema es un país que sueña,  
nube de luz y brisa de hojas verdes”

*Aurelio Arturo*

“My job was to give them faith in their voice and let them know that a friend was listening”

*The King's Speech*

## Introducción

La experiencia peculiar de construcción de paz desde la base del PDPMM y del Laboratorio de paz del Magdalena Medio atrajo sobre sí mucha atención, tanto a nivel nacional como internacional, y conllevó al intento de reproducción de su ‘fórmula’ y enfoque original de paz en otras regiones de Colombia que presentan escenarios similares de violencia estructural y armada y de exclusión socio-económica y

regional. En este ámbito, se ha establecido un segundo laboratorio de paz en tres otras regiones de Colombia: Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Cauca y Nariño (Macizo Colombiano y Alto Patía) (2004-2009) y posteriormente, un tercer laboratorio en Montes de María y en el Meta (2006-2010).

Este capítulo se enfoca en el estudio de caso del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, ubicado específicamente en las zonas geográficas del Macizo Colombiano y del Alto y medio valle geográfico del río Patía, en el sur del Cauca y el norte de Nariño. Busca analizar de qué forma se ha replicado, reinterpretado y desarrollado la ‘fórmula de paz’ del laboratorio de paz del Magdalena Medio, asiente en la experiencia del PDPMM, y su filosofía y metodología innovadoras de construcción de paz desde la base, en otros territorios y escenarios de conflicto del país, fuera de la especificidad de su región y procesos sociales, mediante otros protagonistas y en otros contextos políticos y sociales.

Fundamentalmente, se pretende evaluar el potencial de los laboratorios de paz en cuanto instrumento de construcción de paz positiva en otras regiones de Colombia y analizar los cambios en la dinámica de la iniciativa al pasar del primero al segundo laboratorio de paz. En particular, se procura examinar, en qué medida la introducción de dinámicas verticales y de cooptación de la iniciativa, podrán poner en entredicho el potencial de construcción de paz positiva del laboratorio, y analizar las dinámicas internas, agendas y modelos de paz en diálogo y choque al interior del laboratorio de paz.

Asimismo, en este capítulo se hace un paralelo y estudio comparativo entre las experiencias del Magdalena Medio y del Cauca y Nariño, introduciendo igualmente algunos elementos de los casos del oriente antioqueño y de Norte de Santander, enfatizando la unidad y la diversidad en los laboratorios de paz.

La investigación para este capítulo se basa fundamentalmente en el trabajo de campo, desarrollado en el año 2008, en los departamentos sureños del Cauca y Nariño, por medio de decenas de entrevistas con dirigentes del laboratorio de paz, miembros y funcionarios del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación Supra departamental de Municipios de la Región de Alto Patía (Asopatía), Entidad Coordinadora Regional (ECR), coordinadores y beneficiarios de proyectos, y actores de la región; de la observación participante en diversos eventos organizados por el laboratorio de paz, así como del acompañamiento de la “Misión de evaluación intermedia del laboratorio de paz II” en el Cauca y Nariño;

y de la visita oficial de la delegación de la UE a la región del Macizo Colombiano y Alto Patía, mediante las cuales se pudo visitar y conocer *in loco* un gran número de proyectos del laboratorio, en distintos municipios y veredas de la región, y reunirse y dialogar con sus participantes y comunidades.

## El origen del laboratorio de paz de Cauca/Nariño (Macizo Colombiano/Alto Patía)

Los laboratorios de paz nacen en el Magdalena Medio sobre las bases de la experiencia y la estructura del PDPMM, que venía trabajando en la región desde mediados de la década de 1990. Este se había constituido como un programa social y político para la paz y el desarrollo en la región, involucrando diversas organizaciones sociales, pero centrado en la Iglesia Católica, bajo el liderazgo carismático del padre jesuita Francisco De Roux. Como consecuencia del involucramiento de la UE en este proceso, en el marco de las negociaciones de paz entre el ELN y la administración Pastrana (1998-2002) y de la posibilidad de establecer una zona de distensión en el Sur de Bolívar, surge el laboratorio de paz en el 2002.

La experiencia relativamente exitosa del laboratorio de paz del Magdalena Medio en términos de construcción de paz a nivel de base, empoderamiento social, resistencia civil, generación de desarrollo humano y planteamiento de una propuesta de paz alternativa hizo que se pensara extender esta iniciativa a otras regiones de Colombia e intentar replicar su filosofía y conceptos en regiones que presentaran escenarios similares de violencia armada, pobreza y exclusión social. La idea de un segundo (y un tercer) laboratorios de paz floreció y se desarrolló en otros departamentos del país (Barreto Henriques, 2009a, p. 547).

Así, en 2003 se iniciaron negociaciones entre la Comisión Europea, el gobierno colombiano, el Banco Mundial y algunos Programas de Desarrollo y Paz (PDP), con vista a la creación de un segundo laboratorio de paz, y se estableció una misión de pre-identificación de la UE en Colombia para analizar y definir qué región sería la más apropiada para acogerlo.

Un conjunto de criterios políticos y técnicos fueron definidos considerando, por un lado, los indicadores de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, la presencia institucional y los niveles de violencia y conflicto; y por otro, el grado de madurez y desarrollo de las organizaciones y procesos sociales de resistencia y construcción de paz desde la base en los territorios, en particular de los PDP (Mojica, 2007, entrevista; Moncayo, 2008, entrevista). Se buscó de esta forma un equilibrio entre las carencias y las potencialidades sociales de las regiones. De acuerdo con este grupo de indicadores y variables, y con las prioridades, agendas e intereses políticos de la UE y del gobierno colombiano, se priorizaron y escogieron algunas regiones.

Contrariamente al primer laboratorio de paz, se decidió que el segundo laboratorio se ubicaría no solo en una, sino en tres regiones del país (Bertolini, 2007, entrevista). El consenso se logró en torno a las regiones de Norte de Santander, oriente antioqueño y Cauca/Nariño (Macizo Colombiano y Alto Patía), territorios con características distintas, pero problemas en común, de incidencia de violencia armada y estructural y dinámicas en curso de resistencia civil y movilización para la paz desde la sociedad civil (POG, 2004, p. 4).

Siguiendo el modelo de estructura del laboratorio de paz del Magdalena Medio, que consistía en alianzas con organizaciones sociales regionales que buscasen propuestas alternativas de paz y desarrollo, se involucró a diferentes actores en cada una de las regiones con un acumulado histórico de trabajo social y político por la paz a nivel regional (Herrera y Guerrero, 2008, p. 17). Las entidades gestoras del segundo laboratorio de paz en las regiones serían Consornoc en Norte de Santander, Prodepaz en el oriente antioqueño, y Asopatía y CRIC en el Cauca y Nariño.

En el Norte de Santander la iniciativa se ha sostenido en la dinámica de la Iglesia Católica, corporizada en la Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental de Colombia (Consornoc), un PDP coordinado esencialmente por la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. La selección del Norte de Santander para el segundo laboratorio de paz se debe a que esta es una región con profundas carencias, que incluye una de las zonas más conflictivas del país, el Catatumbo<sup>1</sup>, y que integraba el trabajo previo de un PDP (Heredia, 2008, entrevista).

<sup>1</sup> Sin embargo, la zona del Catatumbo sería excluida del área de intervención del laboratorio de paz, considerando que los niveles de violencia y las operaciones militares podrían imposibilitar el trabajo de base con las organizaciones sociales y las comunidades (Franklin y Moncayo, 2004, p. 11). Esta

En el oriente antioqueño, la entidad gestora del segundo laboratorio de paz ha sido Prodepaz, una de las primeras iniciativas en Colombia que ha buscado adoptar y replicar el modelo del PDP del Magdalena Medio. A pesar de que el oriente antioqueño constituye una región con niveles de desarrollo bastante superiores a cualquier otra región de Colombia que haya acogido un laboratorio de paz, presentaba una elevada inequidad socioeconómica, fuertes índices de violencia y una grave situación humanitaria y de desplazamiento forzado (García, 2008). Pero fundamentalmente la elección de esta región para el respaldo político y financiero de la UE, se produjo por el hecho de que el oriente antioqueño fue escenario de uno de los más interesantes procesos regionales de interlocución con los grupos armados en Colombia entre el 2000 y el 2003. Mediante los llamados 'acercamientos humanitarios', un grupo de 23 alcaldes del oriente antioqueño desarrolló negociaciones con el ELN, con el propósito de contener la violencia armada, proteger la población civil, hacer respetar los derechos humanos, recuperar la gobernabilidad y posibilitar el libre ejercicio de sus funciones ejecutivas en sus municipios (Chica, 2008, entrevista). El laboratorio de paz del oriente antioqueño ha absorbido gran parte de esta dinámica, ha sido fruto de este escenario de construcción de paz desde la base y de la búsqueda de vías regionales para la paz.

En el caso de Cauca y Nariño, se planteó un escenario particular por la ubicación del laboratorio en dos departamentos vecinos, el Cauca y Nariño, con matrices y dinámicas sociales distintas, pautadas por una fuerte presencia social y demográfica indígena en el Cauca, un dominio campesino e indígena<sup>2</sup> en la zona del Macizo, y la presencia de pueblos afro descendientes en el Patía, con sus propias especificidades culturales y de movilización. El laboratorio de paz se estructuró en torno a la colaboración entre caucanos y nariñenses en una unión temporal entre la organización indígena Cauca CRIC y Asopatía. La entidad coordinadora regional se ha basado así en una estructura bicéfala.

Asimismo, el laboratorio de paz del Cauca/Nariño configura un caso *sui generis* en la medida en que, en este territorio, contrariamente a Norte de Santander y al oriente antioqueño (o a Montes de María y el Meta, en donde se ha establecido el

---

fue una decisión controversial que implicó la extracción del laboratorio del corazón del conflicto armado en la región y de la zona más necesitada.

<sup>2</sup> En el corazón del Macizo Colombiano marcan presencia los yanacona, que fueron el único grupo indígena que participó directamente como beneficiario en el laboratorio de paz.

tercer laboratorio de paz), no preexistía, ni antecedió un PDP al laboratorio, sino diversos procesos sociales, algunos asociados al CRIC y a Asopatía, más conectados con cuestiones sociales, culturales y económicas, que con la misma construcción de paz.

Respecto del laboratorio de paz del Cauca/Nariño, tres factores en particular explican la elección de esta región para un laboratorio de paz.

En primer lugar, Cauca y Nariño cumplían los requisitos y criterios para desarrollar un laboratorio de paz por ser regiones marginadas y con altos niveles de violencia armada, pero también por contar con una sociedad civil dinámica, en donde se destacaban diversos procesos de movilización social y resistencia civil, como el Movimiento de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Movimiento Social de la Cordillera, la Asamblea Constituyente de Nariño y el CRIC. En particular, el Cauca tiene un legado y un patrimonio histórico de movilización social y resistencia cívica, en los cuales los pueblos indígenas, pero también los campesinos, han jugado un importante rol de liderazgo. La combatividad de los movimientos indígenas y sociales del Cauca es reconocida y manifiesta, habiendo tenido su mayor y más visible expresión en los últimos años en los paros cívicos y bloqueos de la vía Panamericana, como en movilizaciones regionales y nacionales.

En segundo lugar, algunos lazos y conexiones ya se habían establecido entre organizaciones del Cauca y Europa. El CRIC específicamente, había recibido financiamiento europeo desde su fundación en 1971 y mantenía relaciones con varios Estados europeos, como Francia, Alemania, España y Suecia. En esta medida, tenía una trayectoria y experiencia, no solo de puesta en marcha de políticas sociales desde los pueblos indígenas y los sectores populares, sino en el manejo de recursos internacionales (Ríos, 2008, entrevista).

El último factor fue un evento que sería crucial para la creación de un laboratorio de paz en el Cauca y Nariño. En marzo del 2000, por primera vez en Colombia, pero también en toda Latino-América, un indígena fue elegido como gobernador: Floro Tunubalá Paja, sostenido por lo que se reconoció como el ‘Bloque Social Alternativo’, en el cual confluyeron diversos movimientos sociales de la región que habían integrado las movilizaciones de 1999. Esta elección encierra un gran simbolismo político, pues, a lo largo de la historia de Colombia, la región del Cauca ha sido un bastión de la oligarquía blanca conservadora colombiana y un territorio de

sometimiento y exclusión social y política de los grupos indígenas y afrodescendientes (Tunubalá, 2008, entrevista).

Pero debe ser también encuadrada en el contexto de una verdadera emergencia indígena a nivel regional y nacional. Varios elementos han contribuido para que esto ocurra: en primer lugar, una dinámica internacional de posicionamiento de los pueblos indígenas está en marcha desde los años 90, caracterizada por el reconocimiento de sus derechos a nivel nacional e internacional, por el empoderamiento y creciente movilización de los movimientos indígenas, y por la elección, por primera vez en 500 años, de indígenas para cargos públicos (Barreto Henriques, 2009a, p. 549). Tres elementos han estimulado esta movilización indígena desde los noventa: por un lado, las políticas económicas de mercado puestas en marcha en estos años han motivado fuertes reacciones sociales en el Cauca. Por otro lado, como menciona Catherine González (2006a, p. 330), “la Constitución del 91 ha abierto un nuevo capítulo para la historia de la movilización indígena” en Colombia, en la medida en que significó la garantía de derechos especiales para las minorías y la apertura de nuevas oportunidades para la movilización indígena y la acción política. Finalmente, el conflicto armado en el Cauca –como en todo el territorio de Colombia–, incrementó mucho su intensidad en este periodo, con efectos manifiestos en los pueblos indígenas. Esto los ha empujado a la movilización política y a la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto.

Asimismo, además de esta ‘gobernación indígena’, coincidieron en este periodo diversas gobernaciones ‘alternativas’ en el sur del país. Tanto en el Cauca, con Floro Tunubalá, como en Nariño, con Parmenio Cuellar, y en el Tolima, con Guillermo Alfonso Jaramillo, fueron elegidos gobernadores sostenidos por fuerzas políticas alternativas a los partidos y a las clientelas tradicionales (Cuellar, 2008, entrevista). En este marco, un proceso de acercamiento y articulación política se estructuró entre estas gobernaciones bajo la bandera de la ‘surcolombianidad’, que involucraría también a los departamentos del Huila, Putumayo y Caquetá.

Estas regiones del sur del país hacían frente en ese periodo a un panorama común de fuerte expansión de los cultivos de uso ilícito, con todos los problemas sociales y de violencia asociados, de implantación del Plan Colombia, de avanzada del paramilitarismo de las AUC, así como de graves problemas sociales y económicos (Tunubalá, 2008, entrevista). En este marco de acontecimientos, estos nuevos gobernadores, respaldados por un conjunto de organizaciones y

movimientos sociales, propusieron y pusieron conjuntamente en marcha un programa político: el Plan Alterno (también conocido como Plan Sur), que buscaba presentar y desarrollar alternativas al Plan Colombia y a las fumigaciones aéreas que habían generado fuerte reacción y repercusiones negativas en estas regiones, en particular contaminación del medio ambiente, agravamiento de la situación de conflicto, traslado de los cultivos de coca a otras zonas y desplazamiento entre las comunidades rurales campesinas e indígenas (Díaz, 2008, entrevista).

El Plan Alterno consistía en un programa de desarrollo económico, social y ambiental basado en cultivos alternativos, en la seguridad alimentaria, y en un programa de erradicación manual, voluntaria y gradual de cultivos de uso ilícito (Tunubalá, 2008, entrevista; Cuellar, 2008, entrevista), que partía de la perspectiva de la necesidad de concertar este proceso con las mismas comunidades campesinas, y que “ese proceso [de erradicación de cultivos ilícitos] estuviera acompañado de proyectos para la sociedad” (Tunubalá, 2008, entrevista).

Para los gobernadores del Cauca y Nariño, las políticas de intervención contra el narcotráfico no podían pasar por la represión al eslabón más débil de la cadena, los pequeños productores campesinos, mediante las fumigaciones aéreas planteadas por el Plan Colombia; esta no era la vía política correcta para abordar el tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito. En las palabras de Parmenio Cuellar (2008, entrevista).

[...] nosotros teníamos y tenemos claro, que esa problemática [del narcotráfico] no se debe a la perversidad de los campesinos, si no a su situación económica y social; y por eso considerábamos que para poder lograr la erradicación de esos cultivos, necesitábamos tener un proyecto donde el componente social sea predominante; esta propuesta gustó mucho en Europa.

En este marco de búsqueda de alternativas frente al Plan Colombia para el tema del narcotráfico y las problemáticas sociales en la región, se constituiría igualmente, a partir de la sociedad civil en el Cauca, Mingafondo, una plataforma constituida por 22 organizaciones del Cauca, que pretendía reunir un fondo de cooperación internacional para el trabajo de las organizaciones sociales de la región (Caballero, 2008b, entrevista).

Desde estos espacios de interlocución y de la dinámica política y social generada por el Plan Alterno, que figuraba como una propuesta de desarrollo y paz



construida desde la base, nació el laboratorio de paz del Cauca y Nariño (Collazos, 2008, entrevista). La UE se involucraría en el proceso pues los gobernadores Floro Tunubalá, Parmenio Cuellar y Guillermo Alfonso Jaramillo buscaban un apoyo internacional para su plan. Se lo presentaron a la UE en Bruselas, como una solución y propuesta distinta para el tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito. El planteamiento tuvo un eco político muy positivo en la UE, que no había suscrito el Plan Colombia y que se oponía a las fumigaciones aéreas. En esta medida, la Comisión Europea respaldó las propuestas que partían de la gestión institucional de los gobernadores, y teniendo en cuenta las condiciones de elevada violencia en estos departamentos, se decidió avanzar con la creación de un segundo laboratorio de paz, que buscase incidir sobre los problemas del conflicto armado en estas regiones (Tunubalá, 2008, entrevista).

El segundo laboratorio de paz en Colombia fue formalizado con la firma el 16 de diciembre del 2003 del Convenio Específico de Financiación entre la Comunidad Europea y el Estado colombiano (POG, 2004, p. 3), después de una misión de la UE a la región, de un proceso de interlocución con las comunidades (Díaz, 2008, entrevista) y de una concertación entre las distintas partes interesadas.

A pesar que el contexto nacional que dio origen al primer laboratorio de paz había cambiado radicalmente con la ruptura de los procesos de paz y la ascensión al poder de Álvaro Uribe en 2002, con un enfoque eminentemente militarista en su aproximación al conflicto armado, la UE accedió a conceder un nuevo paquete de financiación para un nuevo laboratorio de paz (Kurtenbach, 2009, p. 390), con miras a la construcción de la paz en otros territorios de Colombia.

En el caso del laboratorio de paz de Cauca/Nariño, por decisión eminentemente gubernamental, y respondiendo esencialmente a criterios políticos del gobierno y de la UE, se estableció finalmente que el laboratorio se ubicaría en las subregiones del Macizo Colombiano y del Alto Patía, abarcando trece municipios del sur del Cauca y trece del Norte de Nariño<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Esta área incluye los siguientes municipios del Macizo y del Patía: Timbio, Sotará, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Mercaderes y Florencia, en el Macizo Caucaño; Bolívar, Patía y Balboa, en el Patía Caucaño; Taminango, San Lorenzo, Arboleda, San Pedro de Cartago, La Unión y San Pablo en el Macizo Nariñense; y Leiva, El Rosario, Policarpa, Los Andes, Cumbitara y El Tambo, en el Patía Nariñense.

Estos coinciden, en gran medida, con el área de intervención de Asopatía, organización que, por su cariz público, merecía la confianza del gobierno, así como por su experiencia previa de ejecución de recursos de la agencia de cooperación bilateral alemana (GTZ), de la UE. Sin embargo, esta decisión política implicó que se dejara por fuera zonas como el pacífico y el norte del Cauca, en donde se evidencian iniciativas sociales de gran valor y procesos de resistencia civil, como los de Caloto, Toribio y Piendamó, para insatisfacción de muchas organizaciones de estas regiones.

## Las regiones del Cauca y de Nariño y las subregiones del Macizo Colombiano y del Alto Patía

“Aquí se vive muy cerca del cielo pero en el infierno”.  
*poblador de Nariño*

En un país caracterizado por sus disparidades regionales, el Cauca y Nariño aparecen como dos regiones hermanas que presentan características sociológicas, económicas y geográficas similares. Localizadas en el suroccidente del país, en la frontera con Ecuador y junto al Océano Pacífico, históricamente consideradas, otrora, como partes del denominado Gran Cauca, enfrentan una situación periférica tanto a nivel geográfico como social.

Ambas regiones son fundamentalmente agrarias y minifundistas, caracterizadas por el predominio de una economía campesina precariamente incorporada al Estado, por una naturaleza multiétnica, y elevados niveles de inequidad (Barreto Henriques, 2009a, p. 550). Un panorama de severa exclusión social, política y cultural, que afecta principalmente a indígenas, afro-colombianos y campesinos, se manifiesta en ambas regiones. Según datos del DANE, los departamentos del Cauca y Nariño presentan elevadas tasas de necesidades básicas insatisfechas (37,8% y 35,4% respectivamente en 1999), cifras de las más altas del país (Herrera, 2003, p. 72). La situación es particularmente grave en la sub-región del Alto Patía, en donde se evidencian alarmantes niveles de pobreza, desnutrición crónica y analfabetismo (POG, 2004, p. 27), y es

posible avistar niños y adolescentes descalzos mendigando en las calles y gente saliendo a pedir limosna alrededor de la vía Panamericana.

De la misma forma, la inequidad en la distribución de la tierra es particularmente aguda. En el Cauca 1,9% de los terratenientes concentran el 45,1% de la tierra (Gros, 1990, p. 177). Un predominio histórico de la minoría blanca y colonial española sobre el resto de la población aún se observa en nuestros días y prácticas de cariz feudal, como el terraje, persisten en pleno siglo XXI.

En términos geográficos y ambientales, la subregión del Macizo, que integra parte del Cauca y de Nariño, y corresponde al nudo orográfico de la cordillera andina, asume una grandísima importancia. Es frecuentemente identificado como “la fábrica de agua más importante del país y la segunda de América Latina” (Herrera, 2003, p. 44). Alberga las principales fuentes de reserva de agua en el país, pues algunos de los principales ríos de Colombia, como el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Patía, nacen en el “corazón del Macizo” (Tocancipá, 2003). Este hecho atribuye a esta región una extrema importancia geopolítica.

En términos sociales y etnográficos el Macizo Colombiano, como el mismo Cauca y Nariño, son una “verdadera colcha de retazos” (Aldana, 1999 citado por Tocancipá 2003), compuesta por archipiélagos de poblaciones indígenas, mestizas, afro descendientes y blancas, como una misma metáfora y síntesis de la diversidad de Colombia. Un territorio que desde tiempos remotos, de tránsito y de comunicación entre el sur y el norte, el oriente y el occidente, ha asistido a varias olas de colonización y desplazamiento que le confirieron una marca de gran heterogeneidad (Tocancipá, 2003, p. 4). Sin embargo, un elemento difiere en ambos departamentos: a pesar de que las dos regiones compartan una composición poblacional con importante participación indígena, afro descendiente y campesina, la influencia indígena en el Cauca es mucho más visible. De hecho, el Cauca tiene el porcentaje más elevado de población indígena en Colombia<sup>4</sup>. Este departamento alberga a 200.000 indígenas, la mitad de toda la población indígena en Colombia, distribuida entre ocho etnias o pueblos: paeces (o nasas), guambianos, yanaconas, kokonukos, totoroés, eperaras siapidara, ingas y pubenenses (González, 2006a, p. 329). Nariño cuenta también con diversos grupos indígenas, entre los cuales están los Pastos y los Awás, como los más destacados, pero en un porcentaje inferior.

---

<sup>4</sup> 24% del total de su población (González, 2006a, p. 33).

Este componente indígena configura una fuerte influencia en el panorama social de la región, particularmente en su movilización social. El Cauca tiene una herencia histórica de resistencia y de movilización política indígena. Los pueblos indígenas del Cauca representan el grupo étnico en Colombia que más ha resistido a la ocupación española y el único que, recurriendo a negociaciones políticas con la Corona de España, obtuvo derechos de propiedad sobre la tierra (Gonzalez, 2006a, p. 332). La historiadora Luz Ángela Herrera (2003, p. 55) señala que uno de los ejes de pervivencia histórica del Cauca es su marca como núcleo de resistencia. Los indígenas “han mostrado desde la llegada de los españoles una resistencia a desaparecer como etnia y a ceder sus territorios ancestrales a los terratenientes” (Herrera, 2003, p. 99). Este eje histórico de resistencia ha sido un patrón de respuesta a las tradiciones esclavistas, racistas y señoriales del Cauca y sus formas sociales de dominación, en particular la hacienda colonial y la minería, que Herrera (2003, p. 55) considera igualmente ejes históricos de la región. De forma similar, la antropóloga Joanne Rappaport (2005, p. 43), refiriéndose al principal grupo indígena Caucaño, señala que ha habido un proceso histórico de construcción de una identidad nasa contestataria, caracterizada por su disponibilidad a levantarse y enfrentar el Estado (Rappaport, 2005, p. 90).

Sin embargo, la naturaleza del Cauca y del Macizo Colombiano como territorios de resistencia no se agota en los indígenas. Las comunidades negras participaron de este proceso de resistencia a la sociedad colonial, habiendo sido el Valle del Patía, en particular, un territorio poblado en gran medida por esclavos huidos de las haciendas (Herrera, 2003, p. 91). De la misma forma, la lucha secular de los indígenas se va a cruzar desde principios del siglo XX con las otras luchas de los campesinos contra la presión de los terratenientes. Así, un hilo continuo de resistencia es notorio históricamente en esta región, desde la resistencia indígena a la conquista, pasando por las luchas de Manuel Quintín Lame en el inicio del siglo XX, y terminando en los paros cívicos y campesinos de las últimas décadas.

Efectivamente, en los últimos quince años esta región evidencia una verdadera efervescencia social y ha desarrollado un movimiento regional reivindicativo que, a través de múltiples formas de protesta y movilización, tales como la toma de la vía Panamericana, han hecho exigencias políticas al Estado en el sentido que este dé una respuesta a las necesidades de la población, en términos de salud, educación, bienestar y distribución de tierras. Este proceso asistió a una convergencia de

fuerzas entre distintos grupos, organizaciones y movimientos sociales, que puso lado a lado a indígenas, campesinos mestizos y afrodescendientes.

En términos políticos, aunque Cauca y Nariño sean dos de las más conservadoras regiones de Colombia, cunas de una fuerte aristocracia de origen colonial, de la cual salieron varios Presidentes de Colombia, y áreas de una fervorosa devoción católica, han desarrollado en los últimos años curiosos y tal vez sorprendentes fenómenos político-electorales. Primero, en Nariño se ha dado la sucesión de tres gobernaciones del Polo Democrático Alternativo<sup>5</sup>, la última de las cuales estuvo encabezada por un exdirigente y líder guerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolff; segundo, en las elecciones presidenciales del 2006, se dio en este departamento una de las únicas disidencias electorales a un país casi monocolor alineado con el gobierno nacional liderado por Álvaro Uribe; tercero, en el Cauca, el primer gobernador indígena de Colombia y Suramérica tomó el poder en el 2000, con el apoyo de una alianza entre indígenas, campesinos y otros movimientos sociales, que se reconoció en su momento como el Bloque Social Alternativo.

Respecto al tema del conflicto armado, como en otras regiones de Colombia, un cierto abandono estatal, tanto en términos de presencia física, institucional y militar, como de servicios sociales a la población, ha sido acompañado en el Cauca y Nariño por una fuerte presencia de actores armados ilegales, sobre todo de guerrillas. Como señala el antropólogo David Gow (2005, p. 74), el Cauca “cuenta con una larga historia de violencia política que data del periodo previo a la violencia de la década de 1950”. La violencia armada y la presencia de grupos ilegales ha persistido en las últimas tres décadas con una fuerte presencia del ELN y principalmente de las FARC, para las cuales el sur del país representa su zona de influencia histórica y en donde concentra aun hoy su mayor presencia en términos militares, políticos y sociales (González et. al, 2003, pp. 116-119). En la última década grupos paramilitares, en particular los Bloques Calima y Pacífico de las AUC, a menudo asociados a militares, terratenientes, y narcotraficantes, se han expandido en la región, creando nuevas olas de terror y violencia; por último, este es igualmente un territorio bastante militarizado en términos de las fuerzas

---

<sup>5</sup> En el caso de la elección de Parmenio Cuellar, esta se basó en el Movimiento Convergencia, que posteriormente se integraría al Polo Democrático Alternativo.

de seguridad del Estado, en sus frentes militar y policial, siendo área de intervención de diversos batallones.

Las variadas olas de actores armados que han atravesado la región han creado un escenario social en donde por veces en una vereda y en la misma familia hay hijos de guerrilleros, hijos de soldados e hijos de paramilitares. Son ‘hijos de la guerra’, como comentó un poblador de Nariño.

En el caso específico de Nariño esta es una realidad relativamente reciente, que traduce solamente las últimas dos décadas de conflicto. Nariño se caracterizaba décadas atrás por ser un departamento de relativa paz (OPPDHDIH, 2001, p. 180). De hecho, el conflicto en este territorio no brota de forma endógena, sino exógena. Ha sido traído esencialmente por factores externos, que acompañan y expresan las dinámicas nacionales del conflicto y que tienen paralelo en la situación en el departamento vecino del Cauca.

Fundamentalmente, la presencia armada en estas regiones ha aumentado en las dos últimas décadas debido a tres factores: en primer lugar, la intensificación de la violencia en estas regiones acompaña la tendencia nacional de escalada del conflicto (González, 2006a, p. 331) en los años 90 y 2000, específicamente con la expansión paramilitar de los últimos diez años.

En segundo lugar, los departamentos de Cauca y Nariño se han vuelto ejes estratégicos para el desarrollo del conflicto armado. De hecho, la importancia geoestratégica de estas regiones ha aumentado en los ochentas y noventas debido a la construcción de la Panamericana, la vía que conecta Colombia al resto de Suramérica, que representa una vía comercial vital, en especial para las armas y la droga, tan importantes para los actores armados (González, 2006a, p. 330).

Por último, la ejecución del Plan Colombia en la región vecina del Putumayo desde 2000, ha tenido como efecto el desplazamiento de una gran cantidad de cultivos de uso ilícito hacía Cauca y Nariño, principalmente a este último, incrementando significativamente la producción de drogas ilegales. Para este proceso de ‘cocalización’ del Cauca y sobretodo de Nariño, ha contribuido igualmente la extrema pobreza que se ha evidenciado entre los campesinos del norte de Nariño, para los cuales los cultivos de uso ilícito (no solo la coca, sino la amapola) se han vuelto una forma de subsistencia (OPPDHDIH, 2001, p. 180; POG, 2004, p. 27), y para quienes la apertura económica iniciada por el gobierno de César Gaviria tuvo consecuencias nefastas sobre la producción agrícola en las regiones, en particular

sobre los productores de trigo y cebada, que vieron sus mercancías reemplazadas rápidamente por importaciones.

El correlato de lo anterior fue el crecimiento de los actores armados ilegales y la intensificación del conflicto en estas zonas, que derivó en una presencia de todos los actores armados, legales e ilegales, en los departamentos de Cauca y Nariño<sup>6</sup>.

Además, la expansión e implantación de la economía de la coca en estas regiones ha tenido como resultado, graves efectos en términos sociales, principalmente en el tejido social, desbaratando las estructuras culturales y dañando la economía y *modus vivendi* tradicionales de los campesinos.

Así se forma un marco de violencia aguda en estas regiones, que tiene una expresión fuerte en términos de enfrentamientos militares, acciones bélicas, violencia y control social sobre la población civil. El río Patía, tal como otros ríos en otras regiones del país, ha sido cementerio de muchas víctimas de la violencia. Isabel Rodríguez, una líderesa comunitaria de Nariño narra, en el 'realismo mágico' propio de los campesinos de este país, que "los pescados del río Patía son más gordos por que se han comido a los campesinos".

En el mapa y panorama del conflicto en estos departamentos, la histórica presencia de las guerrillas en esta área ha disminuido y ha sido retada militarmente en los últimos años por el ascenso del paramilitarismo. Además, actualmente, a pesar del Acuerdo de Santa Fe de Ralito y del proceso de desmovilización de las AUC, es nítido y notorio el ascenso de una nueva generación de grupos paramilitares en el Cauca y Nariño (Schultze-Kraft y Munévar, 2008). La Nueva Generación, las Águilas Negras y los Rastrojos, en particular, marcan presencia en estas regiones, controlando política, social y militarmente diversos territorios, así como gran parte del negocio del narcotráfico. Una complicidad de las fuerzas de seguridad públicas con el paramilitarismo es visible en ciertos casos, comprobada por esta misma investigación en el trabajo de campo en Nariño.

Sin embargo, el debilitamiento de la insurgencia en estos dos departamentos no ha sido tan evidente como en otras zonas del país. La política de seguridad

---

<sup>6</sup> Esta presencia ha incluido en la última década la columna móvil Jacobo Arenas y los Frentes 30, 29, 8, 60 y 6 de las FARC, el Frente José María Becerra y Manuel Vásquez del ELN, la Compañía Huracanes del Bloque, los Farallones de Cali, el Bloque Calima y las Autodefensas Campesinas Unidas del Suroccidente de las AUC, el Batallón Pichincha y la Unidad de Soldados Campesinos del Ejército Nacional (González, 2006b, p. 80; Herrera, 2003, pp. 162-166).

democrática de la administración Uribe, en particular, no ha logrado los éxitos obtenidos en otras regiones de Colombia. Una líderesa comunitaria de Nariño comentaba al respecto que: “a nuestras veredas no llegó la seguridad democrática. Aquí nos toca seguir hablando con los actores armados”.

Todo este panorama de conflicto y violencia en estas regiones ha tenido una expresión particular sobre las comunidades indígenas. Planteando usualmente una posición de distanciamiento a los varios bandos del conflicto y estando ubicados a menudo en territorios estratégicos y apetecibles para los actores armados, ha dejado a los indígenas en una posición de gran fragilidad, siendo víctimas recurrentes de tanto insurgencia, como paramilitarismo y fuerzas del Estado. Masacres como las del Naya y del Nilo han incluido a indígenas como blancos.

Este marco persistente de violencia sobre las comunidades indígenas en el Cauca, que ha durado prácticamente desde el inicio del conflicto armado hasta los días de hoy, llevó en un momento de los años 80 a que algunos indígenas optaran por la misma vía armada para la defensa de sus comunidades y territorios. Se formó el movimiento armado Quintín Lame, tomando el nombre del principal referente de movilización y resistencia indígena de la primera mitad del siglo XX en el Cauca, Manuel Quintín Lame. Así, irónicamente, de cierta forma, los indígenas se volvieron parte activa del conflicto que rechazaban.

Esta situación de estigmatización y violencia armada sobre los indígenas condujo igualmente a la emergencia de diversas iniciativas indígenas de paz y resistencia civil desde la base, como el Proyecto Nasa en Toribio, el Proyecto Global de Jambaló y La María Piendamó (Hernández, 2002, p. 176).

Pero esta situación de conflictividad y violencia también se expresa en una relación de tensión entre indígenas, el Estado y las fuerzas de seguridad. Los eventos de La María en el 2008 son apenas un ejemplo de eso. En gran medida, la construcción del Estado y de la nación colombiana se ha hecho en contra de la cultura, los territorios y la organización política indígena. Así, su relación con el Estado siempre ha sido de naturaleza conflictiva. En el marco del presente conflicto armado los indígenas han perecido tanto a manos de la insurgencia y del paramilitarismo, como a manos de la policía y del ejército nacional. Además, una tendencia del *establishment* colombiano hacia la represión y criminalización de las protestas indígenas ha estimulado y –en cierta medida– legitimado esta violencia estatal, mediante intentos



sucesivos de desacreditar la movilización indígena y tacharla de insurgente y, en el caso extremo de la administración Uribe, de terrorista.

## La concepción y estructuración del laboratorio de paz II del Cauca/Nariño

La creación e implementación de un nuevo laboratorio de paz en Colombia representaba un grandísimo reto. Traducir la experiencia y filosofía particular de paz del PDPMM y del primer laboratorio de paz del Magdalena Medio para otros escenarios y territorios se figuraba como un enorme desafío y un 'laboratorio de paz' en sí mismo, teniendo en cuenta la gran especificidad de la experiencia original en el Magdalena Medio.

El enfoque de paz y metodología participativa e incluyente del PDPMM y del laboratorio de paz del Magdalena Medio han sido el referente de la concepción, estructuración e implementación del segundo laboratorio de paz. Sin embargo, el proceso de estructuración del segundo laboratorio de paz tiene una historia propia y su concepción encierra particularidades y especificidades que lo distinguen de la primera experiencia en el Magdalena Medio. La dinámica sufrió cambios en el proceso, la misma coyuntura política del país cambió radicalmente con la ascensión al poder de Álvaro Uribe en 2002 y la puesta en marcha de la política de seguridad democrática y las relaciones de poder entre los diversos actores involucrados en la iniciativa se transformaron y reconfiguraron. Estos factores han cambiado, no solo el entorno del segundo laboratorio, como la misma dinámica interna del programa.

De hecho, a diferencia del proceso que condujo al establecimiento del primer laboratorio de paz, en el cual el PDPMM tuvo un rol protagónico y determinante, y una casi total autonomía en su ejecución, en el caso del segundo laboratorio, su concepción y estructuración radicó más en las altas esferas de decisión político-diplomáticas, a nivel de la UE y del gobierno colombiano, siendo el proceso y la dinámica más vertical y con menor contribución y voz de la base y los PDP, tanto en la concepción como en la implementación.

Asimismo, los actores sociales involucrados en el proceso asumieron matices distintos y dinámicas propias en cada región, que, en el caso del laboratorio de paz del Cauca/Nariño, han girado en torno a la especificidad y dinámica organizativa y de trabajo de Asopatía y CRIC. El rol equivalente al PDPMM en el laboratorio de paz del Magdalena Medio ha sido desempeñado en simultáneo por estas dos organizaciones que conformaron entre sí una ‘unión temporal’ en febrero de 2004, para la coordinación, programación y ejecución operativa del laboratorio.

En cuanto a la implementación de los proyectos, esta dio cabida a las organizaciones de base, que postularon a las dos convocatorias lanzadas del laboratorio. La primera convocatoria para proyectos se lanzó en enero de 2005 y la segunda en abril del 2006.

El segundo laboratorio de paz tuvo una dotación financiera de 41.4 millones de euros, de los cuales el 40% fue destinado a las regiones de Cauca y Nariño, el 35% al oriente antioqueño y el 25% a Norte de Santander (POG, 2004, p. 58). De estas cifras, la CE ha contribuido con 33 millones de euros y el Estado colombiano con 8.4 millones de euros, los cuales se financiaron mediante un crédito del Banco Mundial.

El lanzamiento oficial del laboratorio se dio el 12 de marzo de 2004. Se estipuló un horizonte temporal de duración de seis años para la iniciativa (diciembre 2003-diciembre 2009), siendo que se siguió una prórroga de financiación parcial por tres años más (hasta el 2011) a algunos de los proyectos más importantes y emblemáticos, de forma que se garantizara una sostenibilidad de los procesos y un *fade out* progresivo de la cooperación europea.

La cobertura geográfica del laboratorio del Cauca/Nariño abarcó las subregiones del Macizo Colombiano y del Alto Patía, integrando trece municipios del sur del Cauca y trece del Norte de Nariño, en lo que pretendió ser una decisión salomónica entre los dos departamentos sureños. El área geográfica comprendida por estos municipios seleccionados tiene una población de aproximadamente medio millón de personas, de las cuales el 80% corresponde a una población rural y el 20% urbana (POG, 2004, p. 27).

En cuanto a los componentes y ejes de intervención del programa, son en gran medida comunes o similares al primer laboratorio, incluyendo un pilar enfocado en temas políticos y de derechos humanos, una línea de fortalecimiento institucional y apoyo a la sociedad civil, y una línea socioeconómica.

Los objetivos del segundo laboratorio de paz (2008) fueron definidos de la siguiente forma:

[...] propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes. El objetivo específico del programa es: establecer y consolidar en tres regiones del país (Macizo Colombiano/Alto Patía, Oriente Antioqueño y Norte de Santander) espacios y procesos territoriales, institucionales, sociales, económicos y culturales, priorizados y sostenibles, resultando en un menor nivel de conflicto y violencia, así como de vulnerabilidad de la población.

Estos objetivos, análogamente al primer laboratorio de paz, se estructuraron y tomaron forma en torno a tres ejes estratégicos:

- Implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del diálogo de paz, el respeto de los derechos humanos y una vida digna;
- Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana;
- Un desarrollo socio-económico sostenible que mejora las condiciones de vida de la población objeto en armonía con el medio ambiente. (POG, 2004, p. 5).

El primer eje se relaciona con la búsqueda de una convivencia pacífica mediante proyectos y procesos de capacitación en derechos humanos, programas socio-educativos, inserción de grupos vulnerables, métodos alternativos de resolución de conflictos, y fortalecimiento de mecanismos de protección de la población civil frente al conflicto armado. El segundo eje ha tenido como finalidad la construcción y recuperación del tejido social y la promoción de la participación social y ciudadana a través del fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones locales de base, de las redes sociales, del fortalecimiento institucional, de la gobernabilidad y de una ciudadanía incluyente, democrática y participativa. En cuanto al tercer eje, incidió sobre el apoyo a actividades socioeconómicas conducentes a la generación de un desarrollo humano y sostenible en términos sociales y ambientales, por intermedio, en particular, del fomento de circuitos de economía solidaria, agricultura limpia, programas de seguridad alimentaria y de la generación de alternativas de ingresos y producción frente a los cultivos de uso ilícito (POG, 2004)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> En lo referido a la repartición de recursos y proyectos por eje estratégico, esta estipuló un mínimo de 20% para el eje uno y dos y un máximo de 60% para el eje tres (ACCI, 2006, p. 6).

La lógica de intervención con base en estos tres pilares y ejes estratégicos se destinaba a incidir sobre las tres causas principales del conflicto, que, según la identificación del Plan Operativo Global (POG, 2004, p. 5), se sitúan a nivel institucional (exclusión política y ausencia o debilidad de las instituciones del Estado), social (inequidad, falta de solidaridad y cohesión social), y económico (modelo de desarrollo excluyente, fragilidad de la economía rural y escasez de alternativas económicas).

Se buscaba “impulsar el cambio estructural de la región” (ACCI, 2005, p. 6), fortalecer los procesos existentes en el territorio que van en el sentido de la construcción colectiva de paz positiva y de un modelo de desarrollo humano, incluyente y alternativo, y “generar las condiciones socio económicas para que la mayoría de la población pueda tener una vida digna” (ACCI, 2005, p.10), en lo que es una clara influencia de la experiencia, filosofía y discurso del PDPMM.

Sin embargo, los tres ejes temáticos del segundo laboratorio de paz no han sido estructurados de forma apartada, como componentes totalmente separados o estancos. La convocatoria de proyectos del laboratorio exigió una transversalidad e integralidad de los ejes, imponiendo que los proyectos del eje dos y tres, aunque se integren a uno de los ejes, contengan componentes de los demás. Así, muchos proyectos productivos por ejemplo, han sido complementados por talleres de capacitación política y formación en derechos humanos. De igual forma, se exigió que los proyectos ejecutados abarcasen al menos tres municipios del área de intervención del laboratorio (ACCI, 2005, p. 10), de forma que los procesos de base tuvieran un carácter regional y se evitara la fragmentación y microlocalización de los procesos.

El laboratorio de paz fue complementado por el proyecto Paz y Desarrollo, que se ejecutó mediante un crédito del Banco Mundial al gobierno colombiano por valor de 30 millones de dólares, y que funcionó como la contrapartida a la financiación de la UE. Se ha destinado a microproyectos de empoderamiento de comunidades de base, mitigación de los efectos de la violencia armada y apoyo a desplazados internos (Econometría, 2007, p. 4).

Asimismo, en cada uno de los proyectos del segundo laboratorio de paz se previó un sistema de contrapartidas, en el cual el 80% de la financiación provenía de los recursos europeos y la restante proporción sería garantizada por la misma organización beneficiaria. Este sistema tuvo, sin embargo, una eficacia reducida, en la

medida en que, de forma general, se estableció que esta contrapartida sería pagada por las alcaldías que, en un elevado número de casos, no han cumplido con los compromisos (Ruiz, 2008, entrevista).

## Los actores y las dinámicas internas del laboratorio de paz del Cauca/Nariño

El segundo laboratorio de paz y en particular, el laboratorio del Cauca y Nariño encierran una estructura de actores peculiar y dinámicas internas específicas, que configuran un caso singular y lo distinguen de la experiencia del laboratorio de paz del Magdalena Medio. En él convergen tanto dinámicas horizontales como verticales. Efectivamente, esta es una iniciativa de construcción de paz desde abajo que encierra, no obstante, dinámicas y presiones desde arriba. El laboratorio de paz tiene una estructura singular e integra diferentes niveles. Es una plataforma peculiar de actores, con una naturaleza heterogénea, en donde se perfila un triángulo de diálogo y articulación sociedad civil –Estado– UE, a través de lo cual se establecen procesos de cooperación, negociación y a veces tensión (Barreto Henriques, 2009a, p. 561).

Funciona como una especie de pirámide relativamente no jerarquizada. Tiene diferentes camadas. En su nivel más bajo, trabaja con las comunidades y la población más vulnerable, con campesinos, indígenas, afrodescendientes, cocaleros, obreros, mineros, grupos de mujeres, organizaciones de base, cooperativas y ONG locales, los cuales implementan los procesos de base del laboratorio y son los beneficiarios de los proyectos. En un nivel intermedio y regional integra actores regionales como las diócesis, universidades como la Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño, asociaciones e instituciones regionales, las autoridades departamentales, la ECR y el comité directivo del laboratorio. En el nivel nacional incluye el DNP, Acción Social y la Red Prodepaz. Finalmente, en el nivel internacional involucra la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE, el PNUD y el Banco Mundial (Laboratorio de paz, 2008; Barreto Henriques, 2009a, p. 562).

El laboratorio de paz del Cauca y Nariño configura una especie de acertijo, por la diversidad de actores, dinámicas y proyectos que ha involucrado. Es organizacional y culturalmente un proceso complejo, probablemente más que el

laboratorio de paz del Magdalena Medio y que cualquier otro laboratorio de paz en Colombia.

A diferencia del caso del Magdalena Medio (o de Norte de Santander y Montes de María), la Iglesia Católica no tiene un rol primordial, no dirige ni maneja el programa, factor que le confiere una dinámica propia y distinta. El proceso se sostuvo en una Entidad Coordinadora Regional establecida entre el CRIC y Asopatía. En el laboratorio de Cauca/Nariño no hubo un liderazgo técnico y político claro del proceso. Su estructura formó un cuadrado en torno al CRIC, Asopatía, Acción Social y la UE. Su eje se estructuró entre las ciudades de Popayán, Pasto, Bogotá y Bruselas.

Mientras el laboratorio de paz del Magdalena Medio tenía menos intereses y actores en juego, el segundo laboratorio de paz reflejó la confluencia de “intereses de entidades cooperantes, embajadas europeas, actores políticos regionales, y decisiones de niveles técnicos y políticos del gobierno central” (Franklin y Moncayo, 2004, p. 11). La participación de la UE y de Acción Social trajo cambios importantes y substanciales a la estructura y metodología establecida originalmente por el PDPMM e introdujo diversas dinámicas verticales al proceso. El segundo laboratorio de paz surge de esta forma como el resultado de un grupo de tensiones derivadas de la intersección de diferentes perspectivas, diferentes intereses políticos y diferentes concepciones de sus actores (Franklin y Moncayo, 2004).

El liderazgo en el terreno de la iniciativa se asentó en una Entidad Coordinadora Regional (ECR) coordinada por la organización indígena CRIC y Asopatía, los cuales fueron responsables por la coordinación, programación y ejecución operativa del laboratorio (POG, 2004, p. 65). Desempeñó un rol similar y equivalente al PDPMM en el primer laboratorio de paz, en cuanto motor, líder regional y principal rostro de la iniciativa, tanto desde un punto de vista técnico, como social. La ECR era responsable por la promoción de procesos sociales, económicos y políticos, y de la articulación, apoyo y seguimiento a los procesos e iniciativas de base. En este sentido, su rol no pasó por la ejecución directa e implementación de los proyectos del laboratorio, sino más bien por su coordinación, orientación estratégica, monitoreo y articulación entre los procesos y organizaciones de base (POG, 2004, p. 65).

Así, la unión temporal conformada por el CRIC y Asopatía configuraron una estructura esencialmente bicéfala para el laboratorio de paz de Cauca/Nariño. Al

incluir dos regiones, se decidió para este laboratorio de paz que su dirección se sostuviera también en dos organizaciones regionales.

Asimismo, contrariamente al caso del Magdalena Medio y de las demás regiones, el laboratorio de paz no se basó en un PDP que existiera previamente en ese territorio, por lo que es, más que cualquier otro laboratorio, una creación artificial inspirada por la UE y el gobierno nacional, aunque con base en la sociedad civil, actores locales y dinámicas regionales en curso.

Este fue, sin embargo, un matrimonio de conveniencia, pleno de contradicciones y tensiones y que provocó muchas dificultades al proceso. Su consumación resultó en que, en la práctica, el CRIC desempeñara solamente un rol político y directivo en el proceso y que se entregara lo esencial de las tareas y competencias administrativas del laboratorio a Asopatía, con sede en Pasto (Ríos, 2008 entrevista). Asimismo, hubo de cierta forma una división de tareas tácita e informal entre CRIC y Asopatía, en la cual el CRIC asumía mayor liderazgo en los temas del primer eje del laboratorio, en particular en lo que dice respecto a derechos humanos y cultura de paz, y Asopatía en los ejes dos y tres, en temas de gobernabilidad y desarrollo rural (Bandini, 2007, entrevista).

El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Se compone por la mayoría de los grupos étnicos del Cauca, pero se sostiene principalmente en los nasa o paeces. Sigue a la vez la estructura de una ONG y de una autoridad tradicional, en la cual convergen centenas de cabildos indígenas de la región representados en una instancia colegiada (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 50; González, 2006b, 31).

Fue fundado en 1971, institucionalizando el movimiento indígena en la región y un largo pasado de resistencia indígena en el Cauca a la ocupación de sus territorios y dominación de sus culturas. Brota en el seno de las luchas por la tierra en la región, en el contexto de las acciones emprendidas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a comienzos de la década de 1970 (Espinosa, 2005, p. 131). Pero, de igual forma, se considera el heredero de las luchas de Manuel Quintín Lame en la primera mitad del siglo XX, cuyas reivindicaciones representan, en cierta medida, una prefiguración del programa del CRIC (Rappaport, 2005, p. 44).

El CRIC ha centrado su organización en la lucha por la recuperación de la tierra y, en cierto grado, en la preservación de la cultura indígena. Su acción y naturaleza han sido fundamentalmente políticos. Como refiere Myriam Amparo Espinosa (2005, p. 146), el CRIC surgió como una construcción de las comunidades para que

actuara como intermediario en las negociaciones con el Estado. “En esa condición el CRIC tuvo un papel básicamente político, alejado, en muchos casos, de cuestiones culturales como la medicina tradicional y la investigación cultural” (Espinosa, 2005). Es una organización fuertemente contestataria e interventora.

En esta posición, el CRIC ha desempeñado un rol notable tanto en su región como en Colombia. Representa la organización indígena más importante del Cauca y probablemente del país. Es el gran referente de la movilización indígena caucana. Tiene un grado de visibilidad y reconocimiento políticos sin parangón en el Cauca y en Colombia (González, 2006b, pp. 13-14). Luis Fernando Giraldo (2008, entrevista) describe al CRIC como una “fortaleza”, por su proyección social y capacidad organizativa. Además, su rol trasciende el universo indígena; constituye una de las fuerzas catalizadoras de la movilización social en el Cauca y en el Suroccidente de Colombia. Efectivamente, más que un programa de desarrollo y paz, el CRIC es un movimiento social<sup>8</sup> (Luna, 2008, entrevista). Es en este ámbito que el CRIC aparece como una de las fuerzas motoras del proceso del laboratorio de paz. Desempeña un rol como dirigente y parte de la ‘unión temporal’, pero también en cuanto referente político y social en la región, haciendo uso y provecho del *background* y patrimonio que ha acumulado como organización social y líder de movilización en el Cauca.

Asimismo, ha desempeñado una labor social de gran importancia junto a las comunidades indígenas caucanas, en particular mediante la creación de escuelas bilingües, cooperativas, y del desarrollo de proyectos ambientales, programas de educación y de medicina tradicional, así como de la programación de mecanismos de planificación participativa del desarrollo a largo plazo, a través de los ‘Planes de Vida’ y de otros instrumentos de democracia participativa.

Por último, ha sido una de las organizaciones que en esta región de forma más vehemente ha agitado la bandera de la paz, al denunciar, de forma sistemática y abierta, las violencias y violaciones de los derechos humanos en la región, y al poner en marcha innumerables movilizaciones e iniciativas por la paz, tales como la guardia indígena y el territorio de convivencia, diálogo y negociación de La María Piendamó.

---

<sup>8</sup> Se entiende por movimiento social un proceso y espacio de acción colectiva, con base en actores excluidos que persiguen objetivos de cambio social y desafían las interpretaciones dominantes sobre la estructura de la sociedad, a través de diversas formas de participación y organización no institucionales (McAdam, 1982, p. 25).



En el marco del laboratorio de paz del Cauca/Nariño, el CRIC surge de cierta forma como el representante y delegado de un grupo de organizaciones sociales caucanas y del amplio movimiento social que convergió en la constitución del Bloque Social Alternativo, que apoyó la candidatura y la gobernación de Floro Tunubalá y la creación de Minga Fondo.

Asopatía es la Asociación Supradepartamental de los Municipios del Alto Patía. Abarca un área que incluye principalmente el norte del departamento de Nariño, y parte del Sur del Cauca (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 52). Tuvo su origen en el llamado Plan Patía, es decir, el “Plan de Desarrollo Integral de la Región del Alto Patía”, concebido y formulado en 1993 para hacer frente a un contexto regional de gran marginación, pobreza, exclusión, hambre, degradación ambiental y débil presencia del Estado. Configuró la primera experiencia de planificación supradepartamental del país, al involucrar diversas organizaciones y la cooperación internacional, por intermedio de la GTZ (Red Prodepaz, 2008).

Asopatía es el fruto institucional de este esfuerzo y del Plan Patía, y nace en 1995, como una asociación de municipios, para su gestión e implementación. Se conforma como una entidad pública, basada en la coordinación y articulación entre alcaldes, concejales y organizaciones sociales<sup>9</sup> de esta región, con el intuito de promover el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y del tejido social y la integración regional (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 25). Se pone en marcha mediante la asistencia técnica del DNP y, desde 1999, de la Agencia de cooperación alemana GTZ.

Sin embargo, dada su forma de operar, esta organización ha desarrollado un fenómeno curioso de autonomización política respecto de sus principales socios, los alcaldes y el poder político. Se ha vuelto el ‘hijo rebelde’ de las alcaldías del Patía, convirtiéndose, en gran medida, en una entidad política y administrativa independiente que la acerca a una ONG o una agencia de desarrollo regional o local (Barreto Henriques, 2009a, p. 564). De hecho, como un exfuncionario subrayó, “Asopatía no es el lugar donde los alcaldes y los municipios como equipos, se reúnen, conciertan, gestionan e implementan propuestas conjuntas; Asopatía cada vez

---

<sup>9</sup> Su Asamblea general está compuesta por 18 alcaldes, 18 delegados de los concejos municipales y 18 representantes de las organizaciones comunitarias de la región (POG, 2004, p. 93).

más es un equipo, distinto de la dinámica de los municipios, que presta servicios”. El equipo que en Asopatía manejó el laboratorio de paz tiene esencialmente un perfil técnico, basado en el grupo de personas que había anteriormente trabajado con GTZ. No obstante, esto no quiere decir que Asopatía sea totalmente impermeable al influjo del poder político local de la región. Asopatía sigue dependiendo a varios niveles de los municipios y de las alcaldías; además, presiones políticas son ejercidas e inciden sobre esta organización.

Así, el laboratorio de paz de Cauca/Nariño se sostiene en dos organizaciones muy distintas, con orígenes, misiones y objetivos políticos disímiles (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 53). La ‘unión temporal’ CRIC – Asopatía constituye, en gran medida, una creación artificial; representa un matrimonio de conveniencia forzado por la UE y el gobierno colombiano. De hecho, han surgido tensiones profundas y conflictos desde el inicio de la relación entre las dos organizaciones, lo que ha dificultado el trabajo y el desarrollo del laboratorio.

A pesar de todo, se ha logrado una progresiva articulación entre los dos y en esta medida, la unión temporal entre el CRIC y Asopatía fue también en sí misma un ‘laboratorio’. Las tensiones correspondieron sobre todo al periodo inicial de negociación y estructuración de la iniciativa, en donde se estaban jugando la correlación de fuerza y luchas de poder. Posteriormente, un trabajo mancomunado entre las dos instituciones fue más visible, pero no exenta de problemas. Ricardo Mendoza (2008, entrevista) señala que:

[...] el problema de la unión temporal no es solo institucional, es de cosmovisiones. Los indígenas tenían unos propósitos y unas formas de hacer las cosas; Asopatía tenía una lógica más institucional y técnica [...]. Cuando tu juntas esas dos es como tratar de juntar el álgebra de Baldor con poemas de Pablo Neruda. Tratas de juntar, pero es muy difícil.

Así, fue un gran desafío el funcionamiento del laboratorio de paz. Terminó habiendo, de cierta forma, una sobre posición de Asopatía por encima del CRIC en la dirección de la ECR, por su capacidad administrativa y técnica, lo que privó, en cierta medida, que el potencial y la riqueza social, conceptual y simbólica del CRIC en términos de su cosmovisión, lenguaje y miradas alternativas de desarrollo, se manifestara de forma tan presente en el laboratorio, en detrimento de una gestión más técnica de Asopatía. Asimismo, ha contribuido, entre otros factores, para un

cierto esbatimiento de los temas políticos en el trabajo de la ECR, en sabotaje de los asuntos administrativos y técnicos.

Esta situación resulta no solo de factores exógenos de la concepción y estructuración del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, sino de factores y problemáticas internas del CRIC. De hecho, la misma participación del CRIC en el laboratorio encierra algunas ambigüedades y problemas políticos. Uno de ellos consiste en que el área de intervención del laboratorio de paz no coincide con el área total de influencia geográfica del CRIC en el Cauca. Mientras el laboratorio operó en la zona del Macizo y del Alto Patía, que corresponde aproximadamente y con mayor incidencia al norte de Nariño y sur del Cauca, el CRIC se ubica y se implanta fundamentalmente en el norte del Cauca, Tierradentro, la zona centro, el Pacífico Caucano y algo del Macizo.

Criterios y decisiones gubernamentales hicieron que el laboratorio se centrara principalmente en la zona en donde Asopatía venía trabajando, la cuenca media del río Patía. Sin embargo, las grandes dinámicas de movilización indígena se han desarrollado en el norte del Cauca y no en el sur. Esto tuvo consecuencias directas e importantes en términos de la participación del CRIC y de construcción de paz. Como señala Henry Caballero (2008, entrevista), miembro del CRIC y de la ECR del Laboratorio de Paz, “[esto] imposibilitó mucho que el CRIC tuviera un mayor compromiso con el laboratorio de paz porque sus principales dinámicas de paz no están en la zona del laboratorio”. De hecho, la delimitación territorial del laboratorio de paz dejó por fuera de su área de intervención importantes iniciativas de paz indígenas, tales como la guardia indígena y la zona de diálogo y coexistencia de La María Piendamó (Caballero, 2008, entrevista).

El compromiso político del CRIC con el laboratorio de paz estuvo así lejos de ser total. El laboratorio de paz no representaba un interés vital para las luchas indígenas, ni para el CRIC. Existía la perspectiva de que, como afirma Aparicio Ríos (2008, entrevista), ex Consejero Mayor del CRIC, “el laboratorio de paz no nos está apoyando, más bien nosotros estamos apoyando el laboratorio de paz con nuestra experiencia y nuestro trabajo”. De hecho, el CRIC es una organización de gran dimensión, con mucha capacidad y fuentes de financiación diversas; no dependía del laboratorio de paz para su sobrevivencia, expansión o labor. Es una situación distinta de la de Asopatía, que encontró en el laboratorio de paz una oportunidad para consolidarse y expandirse, en particular posibilitando la remodelación y expansión de sus infraestructuras y oficina. La acción del CRIC va mucho más allá del

laboratorio de paz. Su compromiso fundamental y fines políticos recaen fundamentalmente en temas indígenas y no en la paz, ni en el laboratorio de paz. Su acción y luchas han precedido al laboratorio y han continuado después que este terminó.

En tercer lugar, la única comunidad indígena que se benefició directamente del laboratorio de paz fue la yanacona, toda vez que sus resguardos se ubican en el sur del Cauca, en un área de intervención del laboratorio. Esto le ha permitido a la comunidad ejecutar un proyecto en el marco de esta iniciativa. De hecho, el laboratorio, en gran medida, se sostiene fundamentalmente en dos grupos indígenas, los nasa y los yanacona, siendo los nasa la fuerza motriz del CRIC y los Yanacona el principal grupo indígena caucano beneficiado con el laboratorio.

Por último, la mayoría de los proyectos del laboratorio están direccionados a campesinos. En gran medida, los laboratorios de paz se configuran y se estructuran como plataformas de inclusión del campesinado en términos sociales, económico-productivos, políticos y culturales.

Además, la participación del CRIC en el laboratorio no fue consensual, tanto entre sus miembros y líderes, como entre el movimiento indígena caucano. Efectivamente, el componente indígena del laboratorio tiene que mirarse a la luz de los distintos grupos indígenas del Cauca y de la diversidad étnica de la región. El movimiento indígena no es monolítico, ni unificado. Las divisiones entre indígenas atraviesan el mismo laboratorio. Una tensión histórica entre nasas y guambianos, que tuvo su episodio reciente más manifiesto en la escisión del CRIC, a mediados de la década de 1980, tuvo impacto en el laboratorio. Los guambianos, en general, no han apoyado al laboratorio, habiendo incluso hecho planteamientos bastante críticos con respecto a esta iniciativa. La participación del Estado en el laboratorio constituye probablemente el factor que trae más controversia, tensiones y escepticismo a los indígenas, pues es considerado como un adversario político histórico del movimiento indígena.

Sin embargo, el CRIC asumió una posición pragmática respecto al laboratorio de paz, al considerarlo como una oportunidad para la región y para desarrollar procesos sociales y de construcción de paz en el territorio. La perspectiva del CRIC, así como de diversas organizaciones sociales de Cauca y de Nariño, como el CIMA, ha sido participar en la iniciativa, manteniendo su autonomía política, no cediendo a cooptaciones, manteniendo una posición crítica al interior y aprovechar el potencial social y de construcción de paz del laboratorio. Su alianza con

la cooperación europea y su articulación con el gobierno colombiano se interpreta desde una lógica de lo que el CRIC (2004, p. 19) caracterizó como conseguir “amigos para la paz con justicia, verdad y reparación”. Esta fue, todavía, una postura que suscitó variadas críticas de algunas organizaciones de izquierda de la región, como Fensuagro y AICO, que vieron esta actitud como una cesión frente al Estado y a la administración Uribe.

Otro de los actores que asumió una importancia vital en la estructura institucional del laboratorio de paz es el comité directivo. El comité directivo es una instancia en la cual estuvieron representadas diversas entidades y sectores sociales, políticos y económicos de la región, así como algunas organizaciones participantes del laboratorio, específicamente, los gremios representados por delegados de las Cámaras de Comercio de los dos departamentos, la Iglesia católica (Arzobispo de Popayán, Obispo de Pasto), representantes de las alcaldías de Nariño y del Cauca, organizaciones sociales de base, las mesas departamentales de paz de las dos regiones, las gobernaciones y secretarías de gobierno de los dos departamentos, la delegación de la Comisión Europea en Colombia, Acción Social, y la dirección de la ECR. Fue como una radiografía y muestra representativa de las sociedades regionales del Cauca y Nariño.

El comité directivo tuvo un rol de veeduría y dirección política y estratégica del laboratorio a nivel regional, priorización y aprobación de los proyectos presentados a convocatoria para el laboratorio, y de articulación interinstitucional (ACCI, 2005). César William Díaz (2008, entrevista) del CIMA, caracterizó este organismo como “un espacio de ensayos del laboratorio, la mitad de intereses y la mitad de diferencias”.

Pero, en gran medida, los principales protagonistas del laboratorio de paz fueron las organizaciones de base y los beneficiarios de los proyectos. Fueron estos quienes pusieron en marcha en el día a día el laboratorio de paz y sus procesos sociales, quienes implementaron los proyectos y aseguraron la construcción cotidiana de la paz desde las veredas del Macizo Colombiano y del Alto Patía. Fueron la base de la pirámide institucional del laboratorio e igualmente la fuerza motriz de la construcción de una paz positiva y sostenible.

De acuerdo con el Plan Operativo Global (POG, 2008, p. 29) del laboratorio de paz, sus beneficiarios directos eran:

[...] los sectores sociales urbanos y rurales más marginalizados y excluidos, así como los pueblos indígenas y los afro descendientes y en general los grupos más pobres y desprotegidos (niños, jóvenes, y mujeres) en cuanto a derechos humanos, culturales, sociales y políticos.

Correspondió a una población esencialmente excluida y marginada en términos políticos y socioeconómicos, sociológicamente de bajo nivel de educación y de ingresos y de cariz principalmente rural (Econometría, 2007, p. 71). Se trabajó fundamentalmente con los tres grupos históricamente más vulnerables de las regiones de Cauca y Nariño: los indígenas, los afro-descendientes y sobre todo los campesinos. Una especie de alianza social se formó dentro del laboratorio entre estas tres comunidades marginalizadas.

El laboratorio de paz de Cauca/Nariño formó y representó una plataforma de movimientos sociales alternativos, una especie de fórum social regional en movimiento y en el contexto del conflicto (Barreto Henriques, 2009a, p. 570). Se ha configurado como un espacio de encuentro entre sectores progresistas y opuestos a la guerra de la sociedad civil, que enfrentan las consecuencias de la violencia armada y estructural (Palechor, 2005, p. 44) y que han encontrado en esta iniciativa un medio privilegiado para pensar la región, definir estrategias de intervención conjuntas y vías para la paz y el desarrollo.

Pero esta participación y convergencia de movimientos sociales en el laboratorio de paz tiene que mirarse e interpretarse como parte de un involucramiento social más amplio. Corresponde a una tendencia en curso en estas regiones y que va más allá de la acción del laboratorio. Luchas y movilizaciones comunes han juntado estos grupos en muchas ocasiones en los últimos años, como en marchas, bloqueos de la vía Panamericana, manifestaciones y reivindicaciones por tierra y derechos sociales. El laboratorio de paz fue apenas otro ejemplo.

Como menciona la antropóloga colombiana Nidia González (2006b, p. 89), “las condiciones sociales y económicas en que los Paeces viven, similares política, social y económicamente a otros grupos marginalizados, como los campesinos y los afro descendientes” han determinado objetivos colectivos. Además, la intensificación del conflicto, la presión de los grupos armados y el abandono del Estado, han impulsado a una estrategia común de los distintos movimientos sociales del suroccidente de Colombia, en términos de integración, coordinación y fortalecimiento de alianzas.

En este contexto de resistencia, los indígenas aparecen como líderes políticos que coordinan iniciativas y presentan soluciones políticas y sociales para el conflicto y la crisis política, social y económica que el país enfrenta (González, 2006a, p. 344).

En gran medida, el laboratorio de paz de Cauca/Nariño absorbió e institucionalizó esta dinámica social. La filosofía de propuestas sociales, económicas, culturales y políticas alternativas, que se ha cristalizado en la experiencia y en el proceso del Magdalena Medio, pudo encontrar en Nariño, pero especialmente en Cauca, un proceso maduro que evidenciaba características y objetivos similares.

Sin embargo, en el marco de los proyectos y procesos de base del laboratorio hubo un predominio campesino, que se sobrepuso manifiestamente en relación a otros sectores excluidos como los indígenas, los afro descendientes, los jóvenes o las mujeres. La mayoría de los proyectos del laboratorio estuvieron direccionados a campesinos.

## **'Bottom up' vs. 'top down': las dinámicas contrarias al interior del laboratorio de paz**

En lo que respecta a los actores y protagonistas del laboratorio y sus dinámicas internas, se debe tener en cuenta que, a pesar de la metodología y filosofía participativa en que se basa y de ser en su esencia una iniciativa de construcción de paz desde la base, que corporiza varios procesos y dinámicas *bottom-up*, es decir, de abajo hacia arriba, estas tuvieron una contraparte en los actores de alto nivel y en las dinámicas verticales que el laboratorio de paz manifiesta, por intermedio de la participación de la UE y del gobierno colombiano (Barreto Henriques, 2009a, p. 571).

## ***El 'secuestro' de la paz por la 'realpolitik': la dinámica de cooptación del laboratorio de paz por el gobierno Uribe***

Como hemos señalado en el capítulo anterior, el Estado colombiano ha sido un actor central en los laboratorios de paz y ha desempeñado un rol de destaque en la iniciativa, por intermedio de Acción Social. La participación y presencia del Estado en la iniciativa ha permitido un trabajo progresivo de la sociedad civil con la institucionalidad y el trabajo del mismo tema de las instituciones en Colombia,

en cuanto una institucionalidad que responda a las necesidades de las comunidades (Heredia, 2008, entrevista). Asimismo, la participación de las estructuras de poder en la iniciativa y la presencia de actores de nivel 1, en el marco de la pirámide de Lederach, como la UE, el Banco Mundial y el Estado Colombiano, han contribuido a fortalecer y potenciar el proceso, en la medida en que un respaldo institucional y político de la propuesta ayuda a su supervivencia.

Sin embargo, algunos problemas y tensiones emergieron de su participación en el proceso. La presencia de actores de alto nivel en la iniciativa fue simultáneamente una de sus principales fortalezas y valores agregados y una fuente de contrariedades. El Estado colombiano fue una especie de actor simultáneamente interno y externo al laboratorio y, en cierta medida, se reveló un caballo de Troya dentro de los laboratorios de paz (Barreto Henriques, 2009a, p. 571). Al encarnar uno de los bandos del conflicto y un actor con objetivos e intereses políticos muy enmarcados y, en particular, al residir, entre el 2002 y el 2010, en la Casa de Nariño un gobierno de matriz fuertemente ‘securitaria’ y hegemónica, hubo un claro intento de cooptación e instrumentalización de los laboratorios de paz por parte del gobierno colombiano, buscando cambiar sus dinámicas y desviarlas de los objetivos y filosofía originales concebidas y desarrolladas por el PDPMM (Barreto Henriques, 2009a).

En cierta medida, el enfoque de construcción de paz original conceptualizado y puesto en marcha por el PDPMM y seguido por el primer laboratorio de paz del Magdalena Medio fue ‘secuestrado por la *realpolitik*’ en el segundo laboratorio de paz y significó la introducción de dinámicas verticales y la instrumentalización de la iniciativa por parte del gobierno nacional.

De hecho, la coyuntura política y el panorama gubernamental cambiaron grandemente desde el lanzamiento del primer laboratorio de paz: mientras el laboratorio de paz del Magdalena Medio fue pensado y concebido en el marco de un proceso de paz en Colombia y de una posible salida negociada para el conflicto, y preveía un elevado grado de descentralización y autonomía del PDPMM en la conducción del proceso; el segundo Laboratorio de Paz fue concebido y puesto en marcha en el marco de la administración del presidente Álvaro Uribe y de la política de seguridad democrática, que preconizaba un enfoque musculado y militarizado para el conflicto colombiano y una filosofía para la paz bien distinta (Barreto Henriques, 2010b).

El enfoque hacia el conflicto de este gobierno era contradictorio con la filosofía original del PDPMM. Asimismo, la administración presidida por Álvaro Uribe



encerraba una tendencia anti-liberal, con manifiesta sospecha hacia los movimientos sociales y una aversión casi ontológica a las organizaciones de izquierda, tildadas a menudo de pro insurgentes o terroristas; de igual forma, seguía una línea política fuertemente ofensiva respecto a sus opositores, sean los armados o civiles, y una línea dura y hegemónica en la conducción de los temas políticos, con tendencias para el control político e ideológico.

Este escenario puso un reto grandísimo al laboratorio de paz en cuanto modelo de construcción de paz positiva desde la base. Llevó a que la consecución de la iniciativa –tanto a nivel político, como en el terreno– haya sido muy problemática. Contribuyó fundamentalmente a una cierta ‘verticalización’ del segundo laboratorio de paz y una relativa cooptación por parte del gobierno.

De hecho, mientras la experiencia original del laboratorio de paz se desarrolló esencialmente en una dinámica de abajo hacia arriba, sosteniéndose fundamentalmente en las iniciativas desde la sociedad civil, en el PDPMM, el proceso del segundo laboratorio de paz ha sido más centralizado, con algunas lógicas que van de la cima hacia abajo. El grado de involucramiento de la UE y de Acción Social ha sido mucho mayor. En cierta medida, el laboratorio ha sido diseñado y administrado desde Bogotá. Los arreglos institucionales del laboratorio de paz II han disminuido el protagonismo y la autonomía de los actores locales y de los PDP. Esto es bastante visible, por ejemplo, en la ejecución de los proyectos mucho más centralizada desde las oficinas de la capital (Franklin y Moncayo, 2004). Como declara Aparicio Ríos (2008, entrevista), “en la parte administrativa, nosotros no manejamos ni un peso. Las decisiones vienen de arriba y tenemos que obedecer”. En el mismo sentido, Henry Caballero (2008, entrevista) refiere que “los arreglos institucionales del laboratorio colocan la ECR en un rol más de supervisión y aprobación de proyectos, más que en un rol de actor en la región, de liderazgo y defensa de los objetivos del laboratorio”.

Esta centralización y verticalización de los procesos en el segundo laboratorio de paz se manifiesta principalmente en el desembolso de los recursos financieros y materiales, y en los procedimientos administrativos. Las regiones y ECR del segundo laboratorio de paz han dependido de los ritmos y gestiones del poder central, factor que ha retrasado y complejizado los procedimientos y procesos. La tramitación de un desembolso podía tardar medio año y la adquisición de equipamiento dependía de la gestión de la oficina de Acción Social en Bogotá. Este factor ha provocado situaciones tan insólitas y bloqueadoras del día a día del laboratorio

en las regiones, como que durante un periodo considerable los funcionarios de la ECR tenían que transportarse a las veredas de la región para visitar y trabajar en los proyectos a través del transporte público, implicando visibles costos en términos de tiempo y operabilidad de los procesos, lo que alejó aún más la ECR, asentada en Pasto y Popayán, de las comunidades y procesos de base; pero, fundamentalmente, este elemento ha ido en contra del mismo propósito del laboratorio de paz en cuanto iniciativa de descentralización de paz y construcción de paz desde las regiones.

Esta es todavía, una tendencia que deber ser entendida, no solo en las líneas de gobernanación y gestión de la Presidencia Uribe, sino en la historia política de Colombia, que se figura como un país que, a pesar de los planteamientos descentralizadores de la Constitución de 1991, sigue fuertemente centralizado y con una macrocefalia ubicada en Bogotá. Las relaciones en el marco de la estructura del laboratorio de paz vienen permeadas por la concepción centralista que acompaña al país casi desde su fundación (Ruiz, 2008, entrevista). Eso ha contaminado el programa, estableciendo una unidad coordinadora de Acción Social sobredimensionada y con pretensiones de controlar lo esencial de los procesos y operaciones de crédito (Gómez, 2008, entrevista). Como señalan Bouchier y Barme (2008, p. 42), hay una contradicción entre la matriz vertical y centralizadora del laboratorio de paz y sus propósitos políticos de construcción de paz desde el nivel local y regional.

Estas presiones de arriba ejercidas sobre todo por el gobierno Nacional, han creado muchas tensiones en los procesos del laboratorio de paz. La relación entre Acción Social y varias organizaciones de base del Cauca y Nariño, particularmente, el CRIC y el CIMA, ha sido muy tensa y cruzada por muchos antagonismos políticos.

Un factor que fue determinante en la verticalización del laboratorio de paz y en la centralización de los procesos ha sido la misma creación en el 2005, por el gobierno Uribe, de Acción Social, que se sucedió a la ACCI como interlocutor de la iniciativa. Mientras la ACCI era un pequeño organismo del Estado, con un número reducido de funcionarios, destinado a canalizar algunos recursos de la cooperación internacional y que funcionaba como una especie de “cuerpo técnico del cuerpo diplomático” (Heredia, 2008, entrevista), Acción Social, que fundió en un mismo organismo la ACCI, la Red de Solidaridad Social y el Fondo de Inversiones para la Paz, se convirtió en una especie de supra-ministerio social, adscrito a la presidencia de la República, con un número exponencialmente mayor de funcionarios, y un grado de politización e intervención de la Casa de Nariño superior.

Esta situación provocó rupturas y cambios substanciales en las dinámicas internas del laboratorio y presiones de cooptación por parte de Bogotá que han sido visible a varios niveles.

En primer lugar, hubo una cierta despolitización del laboratorio, al restringirse los temas políticos que la acción de la iniciativa podía abarcar y al suavizarse el enfoque para la paz desde las regiones que se había desarrollado mediante el PDPMM en el Magdalena Medio. Hubo, en particular, una clara apuesta del gobierno colombiano en buscar que el principal énfasis de los laboratorios no fuera verdaderamente la transformación del conflicto, sino el componente productivo y el desarrollo, y, en menor grado, la gobernabilidad, intentando convertir esta iniciativa en un mero programa de desarrollo regional y un apéndice de las políticas de recuperación social del territorio por parte del gobierno. Es en este marco que un importante miembro del laboratorio de paz del Cauca/Nariño sostuvo que “la intención inicial del gobierno con el inicio del funcionamiento del [segundo] Laboratorio ha sido minimizarlo, reducirlo e invisibilizarlo [...] [e impedir] que se convierta en una propuesta seria.”

De la misma forma, a diferencia del laboratorio del Magdalena Medio, que ha sido invitado en el pasado a hacer parte de esfuerzos nacionales institucionales de paz, en un ejercicio consistente con la política del gobierno de Uribe de concentrar las iniciativas de paz en la Consejería de Paz, se han desautorizado gestiones y acuerdos de paz a nivel regional a los representantes del segundo laboratorio de paz (Gómez, 2008, entrevista). En junio de 2005 Acción Social envió una circular a las ECR de los laboratorios de paz firmada por el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, que prohibía “la inclusión de actividades humanitarias que impliquen contacto con los grupos armados” (Molano Cruz, 2009a, p. 90). Como señaló, un miembro de la ECR del laboratorio de paz del Cauca-Nariño,

[...] el laboratorio no está autorizado para entablar diálogos directos con los actores armados, no podemos hacerlo y si lo hacemos seremos calificados y estigmatizados como auxiliares de la guerrilla y tendremos problemas con el Estado. [...] En el Magdalena Medio lograron hacerlo por que contaban con Francisco De Roux, que está en un nivel político de aceptación enorme.

Por lo tanto, se ha procurado de esta forma afirmar el Estado como el único interlocutor válido y legítimo de las organizaciones ilegales y no perder el monopolio de la política de paz y seguridad (Moreno, 2008, p. 102).

Este factor retiró al Laboratorio una de sus dimensiones originales más importantes y un elemento fundamental de la construcción de paz, o más específicamente, de la resolución del conflicto. En este marco, desaparecía la apertura para la consecución de ‘Espacios humanitarios’, uno de los proyectos más relevantes y emblemáticos desarrollados en el marco del laboratorio de paz del Magdalena Medio (véase el capítulo anterior). Este componente estuvo totalmente ausente del laboratorio del Macizo Colombiano y Alto Patía, pero también del oriente antioqueño, en donde los acercamientos humanitarios de los alcaldes con la guerrilla del ELN habían desempeñado un rol esencial en el origen de la iniciativa, restringiendo por lo tanto el alcance y grado de intervención del segundo laboratorio.

El alto comisionado de paz, figura que puso diversos frenos y bloqueos políticos a los laboratorios, demostró en el transcurso de la iniciativa poco interés y compromiso con los laboratorios de paz en cuanto iniciativas de transformación del conflicto. La construcción de paz en su concepción, y en las líneas oficiales del gobierno Uribe, se confundía con la confrontación militar de la insurgencia. En esta medida, esta figura institucional se mostró siempre como una personalidad ausente o en confrontación con los actores de base del laboratorio de paz.

Este factor mitigó en gran medida el potencial del laboratorio y en cierta medida, lo maniató políticamente en varios dominios. Como afirmó Silvio Sánchez (2008, entrevista), miembro del comité directivo del laboratorio del Macizo, “en un Laboratorio de Paz que el comisionado no esté, es como que un buen padre de familia no esté en la cena de sus hijos”.

En este marco, al esfumarse la posibilidad de diálogos políticos, sea a nivel nacional o regional, el segundo laboratorio de paz terminó teniendo una incidencia fundamentalmente en temas de integración de la sociedad civil, de desarrollo rural y de mitigación de los efectos del conflicto (Bandini, 2007, entrevista). Así, los laboratorios de paz II y III, por iniciativa fundamentalmente del gobierno Uribe, pero con el beneplácito de la UE, sufrieron un cambio y una adaptación a la presencia de la política de seguridad democrática, que los llevó a des-politizarse, suavizar su discurso y objetivos y apostar principalmente por los proyectos productivos (Castañeda, 2009, p. 175).

Como señala Álvaro Gómez (2008, entrevista), el ex coordinador técnico regional de la ECR del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, aunque el espíritu del laboratorio de paz es construido sobre la base de un reconocimiento y apoyo a iniciativas de paz de organizaciones sociales, de la búsqueda de condiciones y mecanismos metodológicos y estratégicos para la paz y de la generación de espacios y procesos sociales, económicos, políticos y culturales, ese espíritu se fue tergiversando y distorsionando en el tiempo y perdió fuerza; el enfoque y metodología para la paz se diluyeron y se fraccionaron progresivamente por las alianzas establecidas en el marco del segundo laboratorio y del creciente influjo y componente gubernamental.

No había una afinidad o identificación política del gobierno Uribe con la filosofía y enfoque para la paz del laboratorio de paz, como fue concebido en el Magdalena Medio, razón por la cual el gobierno entra en la iniciativa, pero con la intención y propósito político de aprovecharla para ponerla a jugar a favor de sus propios intereses, prioridades, programas y políticas y siguiendo una estrategia sistemática para redireccionarlo, reinterpretarlo e instrumentalizarlo. Este choque entre los propósitos del gobierno y la introducción de dinámicas verticales en el proceso es descrito por Álvaro Gómez (2008, entrevista) como un “vía crucis”.

De igual forma, el gobierno Uribe (2002-2010) trató de introducir en el segundo laboratorio a partir del 2005, su retórica oficial de negación de la existencia de un conflicto armado en Colombia. Sin embargo, tal como en el Magdalena Medio, hubo una denuncia política de este planteamiento por parte de los actores de base del Cauca y de Nariño y un rechazo a seguir los lineamientos y la censura lingüística en los documentos producidos por la ECR. Esta dinámica, aunque no haya permeado los niveles de base, por su perseverancia y fuerza política y moral, fue sin embargo, creando varias tensiones, presiones y desgaste en el proceso.

Otra evidencia de esta tendencia a la centralización y verticalización de los procesos pasa por el control de la información procesada y publicada por los observatorios de paz de los laboratorios (Ruiz, 2008, entrevista). Los observatorios de paz han estado bajo la supervisión directa del director de Acción Social-UCP, poniendo en claro la importancia que la administración Uribe concedió al control de la información relativa al conflicto armado, intentando amoldar una adhesión popular a sus políticas y demostrar la infalibilidad de la política de seguridad democrática, en lo

que se puede caracterizar como un intento de construcción de una hegemonía, tal como ha sido planteada por Gramsci<sup>10</sup>.

El presidente Uribe, que figura como un verdadero Maquiavelo criollo madurado en las fincas de Antioquia, fue a lo largo de su administración, ingenioso en el arte de centralizar el poder a su favor, cooptar los distintos procesos e instituciones políticas, y lanzar fuertes embestidas sobre sus opositores, utilizando para ello, recursos de los más variados, entre los cuales resalta una cuidadosa atención y manejo de las estadísticas del país. El control de la información se convirtió en este periodo en un elemento estratégico de su gobierno y parte de la guerra a la guerrilla y de la ‘guerra’ a la oposición. Así, en la medida que los observatorios de paz son una voz directa de las regiones y un reflejo del conflicto armado en el terreno, era fundamental para el poder central controlar la información que estos divulgaban.

En otro plano, la introducción del programa paralelo al laboratorio de paz, Paz y Desarrollo, bajo la supervisión de las ECR de los laboratorios, como contrapartida gubernamental a los recursos de la UE, financiado mediante un crédito del Banco Mundial, también configura una imposición gubernamental. De hecho, aunque los dos programas tengan alguna complementariedad, tienen enfoques y *targets* bastante distintos. Mientras el laboratorio de paz buscaba incidir sobre las causas del conflicto, el programa Paz y Desarrollo intervenía sobre sus consecuencias, beneficiando sobre todo a la población vulnerable y desplazada; buscaba mitigar los efectos de la violencia armada, pero no configuraba una construcción positiva de la paz, al no tener impacto en términos de desarrollo, ni ciudadanía.

Eran microproyectos de corta duración, desarrollados por grupos pequeños de pobladores y organizaciones de base con poca experiencia y de pequeña dimensión, en donde, por ejemplo, se atendían a necesidades urgentes de seguridad alimentaria, se apoyaban individuos o familias desplazadas en procesos de reubicación o retorno y se realizaban talleres de capacitación (Daza, 2008, entrevista). A pesar del valor laudable y benéfico del trabajo de base con estas organizaciones y comunidades, eran proyectos que claramente no configuraban procesos sociales y que tenían un

<sup>10</sup> Para Gramsci (1971, citado por Robinson: 1996, p. 22), hegemonía es una forma de control de las clases dominantes sobre las dominadas por la vía cultural, que establece una dominación consensual a través de la cual los grupos subordinados dan su ‘consentimiento espontáneo’ a la dirección impuesta por los grupos dominantes y aceptan el orden social desarrollado bajo la égida del capitalismo como natural y legítima (Howell y Pearce, 2001, p. 34).

valor e impacto muy diminuto en términos de construcción de paz y generación de desarrollo sostenible; eran esencialmente programas paliativos.

La coincidencia de los dos programas generó disfuncionalidad e ineficiencia en el proceso y se convirtió en uno de los talones de Aquiles del laboratorio. Como señaló Álvaro Gómez (2008, entrevista), habían contradicciones “filosóficas, políticas y operativas” entre los dos programas. Asimismo, produjo entre las comunidades beneficiarias confusión con relación a la diferencia y finalidad de los dos programas (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 69), y sobrecargó el equipo técnico de la ECR. Significó la adición de 150 proyectos a la iniciativa, lo que desbordó las capacidades del equipo técnico de la ECR, multiplicó el trabajo administrativo y le retiró capacidad de intervención social en el territorio.

No obstante, a pesar de todas estas dinámicas verticales introducidas, el laboratorio de paz no fue un programa del gobierno, sino se debe entender en el marco más amplio de una articulación sociedad civil–gobierno–cooperación europea. Las dinámicas verticales tuvieron un peso substancial en la iniciativa, pero no disminuyeron el rol y función esencial y determinante de los actores de base que fueron los principales protagonistas cotidianos y desde el terreno de la iniciativa. Como afirmó Aparicio Ríos (2008, entrevista), ex Consejero Mayor del CRIC y miembro de la ECR, “el hecho de que manejen la plata y tengan en la parte administrativa injerencia no dio para que nosotros doblegáramos nuestros principios políticos; aquí no pudo venir Acción Social y decir: no apoyen ese grupo, aunque lo plantearon con el CIMA”. A pesar del intento de ‘secuestro’ de la construcción de la paz positiva desde la base por la *realpolitik* y de los esfuerzos gubernamentales de cooptación por parte de la administración Uribe, el segundo laboratorio de paz siguió siendo una iniciativa de la sociedad civil, para la sociedad civil y desde la sociedad civil.

No obstante, todos estos elementos y condiciones y condicionamientos impuestos por el gobierno han llevado a un cierto desgaste del laboratorio, que ha contribuido a minimizar el potencial y las posibilidades de actuación de la experiencia.

## *El episodio Chaux vs. laboratorio de paz*

Esta dinámica de cooptación y distorsión también ha sido manifiesta en otros niveles del Estado y de la institucionalidad, en particular al nivel de la gobernación departamental del Cauca. El laboratorio de paz del Macizo/Alto Patía, tal como en

otros laboratorios y PDP, confirió a las entidades departamentales de gobernación un rol más destacado, al permitir que los gobernadores y secretarios de gobierno del Cauca y Nariño fuesen miembros del comité directivo del laboratorio.

El gobernador Floro Tunubalá tuvo un rol primordial en la creación y estructuración del laboratorio de paz. Sin embargo, a una gobernación ‘alternativa’, progresista y cercana a los movimientos sociales, sucedió en el Cauca una gobernación ‘clásica’, asociada a las élites políticas tradicionales de la región. El gobernador Juan José Chaux Mosquera, figura de la aristocracia blanca y terrateniente de Popayán, y posteriormente implicado en el escándalo de la “parapolítica” (Verdad Abierta, 2009), fue un enemigo y una fuerza de oposición frontal al laboratorio. La metodología participativa e igualitaria del laboratorio chocaba con el estilo autoritario de Chaux, que buscó durante toda su gobernación cooptar, dirigir, maniatar y sabotear el proceso.

Esta situación fue manifiesta en diversos casos: Chaux intentó utilizar los recursos del laboratorio para sus propósitos y gobierno, aunque sin éxito; sus delegados se ausentaron de la mesa del comité directivo en cierto momento en un intento de impedir que hubiera quórum (Díaz, 2008, entrevista); buscó bloquear la aprobación de proyectos que fueran contrarios a sus perspectivas políticas; intentó utilizar su influencia y ascendente políticos para colocar alcaldes en contra de la dinámica del laboratorio; y, de la misma forma, sacó provecho de sus buenas relaciones con el gobierno central para intentar sacar a la organización campesina CIMA del laboratorio, alegando supuestos vínculos con la insurgencia (Ríos, 2008, entrevista), y al Consejero de Cooperación de la Delegación de la Comisión Europea, Nicola Bertolini, con quien mantenía una relación personal y política de hostilidad. En este proceso, logró la salida de este funcionario europeo de Colombia y consiguió congelar durante varios meses el proyecto que las organizaciones CIMA y Maestra Vida ejecutaban, debido a sus acusaciones de problemas jurídicos con el gobierno departamental y conexiones con la guerrilla. De hecho, en un escenario altamente polarizado, como es el colombiano, y en el contexto de la retórica maniqueísta estimulada por el gobierno central, cualquier perspectiva política alternativa, como la del CIMA, fue fácilmente rotulada de pro-insurgente o terrorista.

La gobernación de Chaux representó así para el laboratorio su mayor traumatismo. Sin embargo, irónicamente, el ‘factor Chaux’ tuvo un efecto positivo inesperado en la dinámica del laboratorio: logró unir al CRIC y Asopatía, así como a las



organizaciones sociales del Cauca y Nariño frente a un adversario común, fortaleciendo de esta forma el proceso y la ‘unión temporal’.

De la misma forma, en el nivel más bajo de la institucionalidad, el hecho de que Asopatía fuera en su origen y esencia una asociación de municipios, hubiera podido hacerla permeable a las dinámicas perversas de la política local. De hecho, aunque prácticas como el clientelismo y la ‘politiquería’ no hayan contaminado el laboratorio de paz y Asopatía durante su funcionamiento en la región, ha habido intentos de ‘sacar’ a gente de pensamiento e inclinación a la izquierda del equipo, no exitosos todavía, debido al rol y a la capacidad de su exdirector, Carlos Santa Cruz. No obstante, la salida de esta figura de su dirección ha colocado muchas interrogantes sobre el presente y futuro de Asopatía.

### *La UE y la contradicción entre los objetivos de inclusión y los procedimientos de exclusión*

En el organigrama y la estructura del laboratorio de paz cupo a la CE no solo la financiación de la iniciativa, en el marco de su política de cooperación y de la firma de un convenio con el Estado colombiano, sino funciones de supervisión, seguimiento y acompañamiento, a través de la delegación de la Comisión Europea en Colombia.

Pero, respecto a este actor que ha ocupado, al lado del Estado colombiano, un lugar en la cima de la estructura de ‘pirámide’ del laboratorio y en el triángulo institucional de la iniciativa, se manifestaron dos tendencias divergentes (también evidentes en el primer laboratorio). Por un lado, ha habido una dinámica vertical introducida por la UE, visible no solo en el Macizo Colombiano, sino también en los demás laboratorios de paz, en términos técnicos y procedimentales; por otro, se ha verificado una dinámica de sentido inverso en el dominio político-diplomático.

En lo que concierne a la primera dinámica (ya señalada en el capítulo anterior), esta se relaciona con el hecho de que los laboratorios constituyen una iniciativa de construcción de paz basada en mecanismos de cooperación al desarrollo y en procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la Comisión Europea (Barreto Henriques, 2010b). La estructura del laboratorio de paz, con base en un esquema derivado de las lógicas de la cooperación al desarrollo, configura un modelo relativamente vertical y rígido en el cual hay una entidad que financia, la

CE, una entidad que administra, organizaciones que ejecutan y comunidades que se benefician.

Asimismo, el método de la Comisión Europea de basar la colocación de recursos financieros del laboratorio de paz en una convocatoria pública para proyectos (Barreto Henriques, 2010b), a pesar de ser un mecanismo de garantía de transparencia, y equidad de tratamiento, ha tenido efectos secundarios perversos y se ha transformado en uno de los nudos gordianos del laboratorio del Macizo Colombiano, así como de los demás laboratorios. En cierta medida, ha contribuido a limitar la presencia de organizaciones sociales de base y de los sectores sociales más excluidos de la población, ya que no tienen la capacidad técnica para formular proyectos, y tratar con la densa burocracia de la cooperación europea. El efecto ha sido la participación en los procesos de los laboratorios de paz de organizaciones ejecutoras de proyectos con alguna dimensión y capacidad instalada, muchas de ellas con experiencia previa en la ejecución de recursos de la cooperación internacional. Como señala Tito Arvey Pito (2008, entrevista), del CRIC, “el laboratorio de paz le permitió solo a los grandes, a los que tenían experiencia, poder ejecutar un proyecto”. Asimismo, Fanny Medina (2008, entrevista) cuenta al respecto que “hubo organizaciones que pagaron millones de pesos por la elaboración de los proyectos.”

Teniendo los laboratorios la intención de ser instrumentos para combatir la exclusión, esto es altamente significativo y podría representar que la ‘cura’ sea, de cierta forma, tan mala como la ‘enfermedad’, al convertirse en un mecanismo adicional de exclusión en las regiones y entre las organizaciones sociales (Barreto Henriques, 2009a, p. 576).

La población y comunidades más excluidas y vulnerables han participado en los procesos, pero solamente en cuanto beneficiarios (Moncayo, 2008, entrevista). Como refiere Jaime Ledezma (2008, entrevista), un líder social de Nariño y ex presidente de la Asamblea Constituyente de la región, una cosa es que uno participe y se fortalezca como beneficiario bajo las directrices del proyecto y otra es que la “comunidad local tenga capacidad para generar y dimensionar su propia apuesta”; configura situaciones perfectamente distintas en términos de movilización y participación social y de sostenibilidad de los procesos de construcción de paz positiva.

En alusión a un caso sintomático y representativo de esta situación, cuando se le preguntó a un coordinador de un proyecto productivo del laboratorio del Macizo Colombiano en el Cauca si había tenido dificultades en la formulación de su proyecto

en el marco de la convocatoria, su reacción fue: “No. Yo llevo catorce años formulando proyectos”. En un caso igualmente representativo, pero de sentido contrario, una de las organizaciones de base que logró pasar el filtro de la convocatoria, la Fundación Sol de Invierno, se encontró en dificultades debido a su participación en el laboratorio de paz, una vez que, debido a su inexperiencia, cometió diversos errores administrativos en la ejecución del proyecto que fueron sancionados por la auditoría externa del laboratorio como gastos no elegibles (Medina, 2008, entrevista). Análogamente, esta situación se verificó con otras organizaciones y proyectos del laboratorio, lo que refuerza la importancia de este problema<sup>11</sup> (Castañeda, 2012, p. 317).

Pero la densidad y fuerte carga burocrática de los procedimientos de la UE no se limita a las convocatorias; pasa igualmente por la reglamentación respecto a la ejecución de los recursos y a la rendición de cuentas, que figuran como muy exigentes e inflexibles, teniendo en cuenta la especificidad de las zonas rurales colombianas, su informalidad y carencias y la debilidad de la mayoría de las organizaciones sociales en el terreno.

Como cuenta Fanny Medina (2008, entrevista) de la Fundación Sol de Invierno de Nariño,

En la parte técnica, el marco lógico no es tan lógico y la guía práctica no es práctica. Está llena de minucias. Lo ponen a hablar en euros, en una lógica súper minuciosa y súper medible. Una realidad tan compleja, como la Latinoamericana, no es tan medible. Eso está hecho para un mundo donde todo funciona como un relojito, eso es milimétrico y el mundo latinoamericano no está estructurado ni engranado de esa forma. Si fuera así, no necesitaríamos de un laboratorio, ni de apoyos internacionales. Por ejemplo, íbamos a presentar un taller, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que el 90% eran analfabetos o descontinuados. Tienes que ir y hacerte un juego para enseñar al otro, te tienes que volver totalmente elástico, y el laboratorio te dice ¿Cuántos libros escribió, cuántos folletos entregó?”.

---

<sup>11</sup> La misma consciencia de este factor limitante y asunción de esta realidad llevó a que en la segunda convocatoria del laboratorio de paz en mayo del 2006 se estipulara un esquema de convocatoria bipartido que preveía microproyectos para organizaciones de base y proyectos regionales para organizaciones de mayor dimensión (Bouchier y Barme, 2008, p. 28).

La densidad de la normatividad europea es reiterada también por Víctor Bautista (2008, entrevista), exfuncionario del laboratorio de paz del Norte de Santander, que refiere que le llevó dos años y medio prepararse para manejar la guía de procedimientos de la CE y cuestiona cómo un líder popular o el director de una organización de base van a poder manejarlos en los pocos meses que se siguen a la convocatoria o que duran los proyectos. Esta situación llevó a que, en muchos casos, los coordinadores de los proyectos tuvieran que ser contratados en las capitales de los departamentos, como Popayán, Pasto o Cali, para poder cumplir con los exigentes requisitos y perfil técnico, calificado y de experiencia que requerían los procedimientos.

Como es visible en los relatos anteriores, hay contradicciones entre los procedimientos técnicos europeos y la realidad social con que se depara y enfrenta en Colombia y en particular en estas regiones del país, así como inconsistencias con los propósitos y finalidades de los laboratorios de paz (Barreto Henriques, 2010b). El choque de realidades y mundos ya mencionado en el caso del Magdalena Medio es evidente también en el Macizo Colombiano y en el Alto Patía.

La burocratización de los procesos de base del laboratorio se volvió una ‘camisa de fuerza’ para la iniciativa (Vincenti, 2008, entrevista) y llevó a que este se basara, análogamente a los laboratorios de paz del oriente antioqueño y de Norte de Santander, en una ‘élite’ profesionalizada local de movilización y trabajo sociales. En esta medida, se han producido efectos nocivos en términos del tejido social y de la movilización de base. Como fue planteado por diversas voces de las regiones, se puso la gente a pensar en recursos de cooperación, en proyectos y elementos cuantificables, en los parámetros de actividad y los tiempos definidos por los procedimientos y normatividad de la UE, en vez de los procesos sociales (Molina, 2008, entrevista). Por lo tanto, se evidencia el riesgo de un divorcio entre el proyecto y el proceso, o lo que Lederach (1997, p. 130) llama del ‘dilema de proyecto’.

En realidad, la construcción de paz pasa por la construcción y redefinición de relaciones y por generar procesos dinámicos, multidimensionales y de largo plazo, que difícilmente se encuadran en las categorías y tiempos preestablecidos por proyectos de cooperación (Lederach, 1997, pp. 130-132; Tocci, 2008, p. 29).

Por lo demás, la finalidad y horizonte de construcción de paz y de proceso social se enfrenta a que los *timings* de los proveedores de fondos de la cooperación internacional tienden a ser de corto plazo. De hecho, el horizonte temporal de la

financiación europea a los laboratorios de paz es limitado (entre cuatro y ocho años). Aunque los laboratorios se enmarquen, en su concepción y finalidad, en una lógica estructural y de largo plazo que busca incidir sobre las causas profundas del conflicto, su horizonte de pocos años, claramente no configura ni permite transformaciones estructurales y choca con las necesidades necesariamente de largo plazo de la construcción de la paz positiva y del desarrollo. Como señaló, Ricardo Mendoza (2008, entrevista), de la organización Suyusama, “la UE y el Gobierno nos ponen los tiempos, no son tiempos propios del territorio”. Los procesos de base están condicionados por los ritmos de los procedimientos y normatividad exigida por la UE, dificultando largamente las dinámicas endógenas.

De hecho, la realidad en el terreno es dinámica y difícilmente se corresponde con procedimientos estáticos, rígidos y lineales. La construcción de paz es un proceso necesariamente dinámico (Lederach, 1997, p. 131). Esta situación configura un riesgo de que se estructuren proyectos, más que procesos y que, de esta forma, poco distinga al laboratorio y sus proyectos de una iniciativa de la cooperación internacional ‘convencional’ y ‘común y corriente’ (Barreto Henriques, 2009a, p. 577). Esto es un factor de enorme peso político en la medida en que la construcción de paz es fundamentalmente un proceso social (De Roux, 2001).

Asimismo, los procedimientos y requerimientos técnicos de los Laboratorios de Paz han tenido otro efecto secundario negativo de gran relevancia. Significaron una sobrecarga tremenda a los equipos de trabajo de las ECR de los Laboratorios, que sobrepasó su capacidad y al personal disponible y, en gran medida, los transformó en gestores y supervisores de proyectos, más que actores políticos y sociales en las regiones (Gómez, 2008, entrevista; Caballero, 2008, entrevista). Como reconoció Constanza Kahn (2008, entrevista), funcionaria de Asopatía, “los procedimientos nos alejaron mucho de la comunidad”.

De igual forma, sobrecargó también a las organizaciones y líderes sociales. El laboratorio de paz empleó un gran número de líderes comunitarios, direccionando sus esfuerzos para tareas técnicas, como informes, sistematizaciones y evaluaciones, en vez del trabajo social de base con la población en el terreno. Se rompen de esta forma procesos políticos y sociales en detrimento de una cultura de proyecto y de la burocratización (Cardona, 2008, entrevista).

Otra situación que fue posible constatar relacionada con la problemática de la cooperación europea como base para el Laboratorio, y, específicamente, con

la convocatoria pública de proyectos, fue que esta tuvo igualmente como efecto atraer a la región algunas organizaciones sin ninguna trayectoria ni raíces en la zona del Macizo y del Patía, por veces provenientes de la capital, seducidas por los recursos de la UE. En este caso el riesgo es la configuración de proyectos de cooperación de tipo ‘beduino’. Es decir, que montan la ‘tienda’ y parten cuando termina la financiación al laboratorio, sin dejar capacitación de las comunidades, ni transformando los proyectos en procesos (Barreto Henriques, 2009a, p. 577).

Efectivamente la metodología de los laboratorios de paz con base en la convocatoria pública de proyectos estimuló algunas ONG ‘cazadoras de rentas’ y las lógicas de búsqueda y apropiación de recursos, que ponen en entredicho los propósitos de empoderamiento de las comunidades y encierran el riesgo de dependencias de los recursos internacionales por parte de las iniciativas locales (Castañeda, 2009, p. 176; Pastrana y Aponte, 2006, p. 260).

Por lo demás, tiene un efecto nocivo de fomentar una competencia por recursos entre los distintos sectores y organizaciones de la región, elemento que daña, fragmenta y pervierte el tejido social, en vez de fortalecerlo (Ledezma, 2008, entrevista).

Asimismo, las convocatorias se saldaron en la presentación de centenares de proyectos, la mayoría de los cuales incidían en temas productivos y de infraestructura social, factor que disminuyó relativamente la finalidad política de los laboratorios, atomizó los procesos (Moreno, 2008, p. 106) y creó un conjunto de microproyectos no sostenibles, que no lograron sobrevivir a partir del momento que la financiación europea se agotó.

Se configura por lo tanto una situación que se encuadra perfectamente en el debate introducido por Mary B. Anderson (1999) con su libro *Do no harm: How aid can support peace – or war*, en el cual se refiere a los riesgos y potenciales efectos dañinos de la ayuda al desarrollo en escenarios de conflicto. La cooperación europea claramente produjo algunas externalidades negativas en las regiones en donde inyectó recursos por vía de los laboratorios de paz.

## *El bajo perfil político de la Unión Europea al interior de los laboratorios de paz*

Por otro lado, respecto al rol y participación de la UE al interior del laboratorio de paz, se ha manifestado una tendencia divergente en el plano político. En este

campo, la UE ha demostrado alguna falta de involucramiento y compromiso con los laboratorios. Como señala Calos Moreno (2008, p. 109), hubo un desequilibrio entre los aspectos técnico-administrativos y políticos de los laboratorios de paz que se ha manifestado en una ausencia de la UE en el terreno y una falta de compromiso político con la iniciativa. Esto es notorio esencialmente a dos niveles (Barreto Henriques, 2010b):

En primer lugar, se evidenció una cierta ausencia y distancia de la UE, protagonizado por la delegación de la Comisión Europea en Colombia, de los procesos y vida cotidiana de los laboratorios. Los funcionarios de la UE tienen una presencia muy reducida en el terreno. Su acompañamiento de la construcción de la paz en las veredas y desde los proyectos se hace fundamentalmente desde las oficinas de Bogotá. Las visitas de la delegación a las regiones son reducidas, y los equipos en las sedes regionales de los laboratorios son casi exclusivamente colombianos.

Un caso que ilustra esta tendencia política y que contribuyó en cierta medida para la ausencia de la UE del terreno fue la salida del consejero de cooperación de la CE en Colombia, el italiano Nicola Bertolini. Este había sido el principal protagonista e interlocutor europeo en el proceso de los laboratorios y una personalidad muy comprometida con la iniciativa. Sin embargo, entró en conflicto con el gobierno central y el gobernador del departamento del Cauca, Juan José Chaux, volviéndose una piedra en el zapato y persona *non grata* en Colombia, lo que motivó su salida forzada del país. Su salida retiró algún liderazgo y clarividencia políticos a la UE en Colombia y contribuyó a la presencia reducida de la UE en el terreno y a un cierto enfriamiento político de la UE. El nuevo consejero de cooperación de la CE en Colombia asumió un rol de más bajo perfil y el embajador de la UE en Colombia, Fernando Cardesa (2007- 2011), buscó de igual forma distensionar las relaciones entre la UE y el gobierno, y manifestar un mayor respaldo a la presidencia (Heredia, 2008, entrevista).

Este es de hecho un episodio bien sintomático y representativo del bajo perfil político de la UE en el marco de los laboratorios de paz y de la resolución pacífica del conflicto armado en Colombia. Hay una patente timidez política de la UE en Colombia y una manifiesta pasividad respecto al Estado y gobierno colombianos. Como señala Fernando Valencia (2008, entrevista), director del Observatorio de Paz y Reconciliación del oriente antioqueño, “la UE ha aceptado que fuera el gobierno nacional el que direccionara políticamente el proyecto laboratorio de paz

[...] y se ha alejado del acompañamiento político del territorio”. De hecho, la UE ha preferido no comprometer sus buenas relaciones diplomáticas con Bogotá, más que respaldar políticamente a la sociedad civil de base o desarrollar diálogos políticos constructivos.

Constituyen ejemplos evidentes de esta tendencia la relativa inercia política y falta de reacción pública por parte de la UE frente a casos de violencia o amenazas por parte de grupos paramilitares sobre líderes comunitarios participantes de los laboratorios (especialmente en el Magdalena Medio), de violaciones de derechos humanos en las regiones (Bayona, 2007, entrevista), o en el caso de fumigación de proyectos productivos del laboratorio en el Cauca y Nariño, en el marco del Plan Colombia y de la lucha anti-drogas (Barreto Henriques, 2009a, p. 575).

Un alto funcionario de la delegación de la Comisión Europea en Colombia afirma respecto a este tema que “es el precio a pagar para que el gobierno participe” en la iniciativa. De hecho, como refiere Dorly Castañeda (2009, p. 175), la UE se ve frente a un dilema desde la concepción de los laboratorios: “cómo apoyar a la sociedad civil en zonas de conflicto a través de un programa oficial que tenga en cuenta el Estado y ayude a construirlo”. Con el tiempo la desconfianza entre las dos partes se disipó relativamente, pero implicó una cierta apropiación de la iniciativa por parte del gobierno nacional y una retracción política de la UE. La UE no tuvo la capacidad o la voluntad política para trabar la cooptación del proceso por parte de la presidencia y de Acción Social. Así, en gran medida, voluntaria o involuntariamente, tacita o declaradamente, la UE es cómplice de los cambios políticos en el segundo laboratorio de paz.

Esta tendencia no deja de tener en sí misma valor y repercusiones políticas. El proceso de dirección política del gobierno constituyó un hecho político fundamental, en la medida que hubo un intento de cooptación de la iniciativa y distorsión de su filosofía original por parte del gobierno y un intento de instrumentalizarlo como un paliativo o componente social de su política de recuperación del territorio en el marco de la seguridad democrática. Es legítimo cuestionar y especular si esta tendencia manifiesta fundamentalmente una debilidad y timidez política de la UE en Colombia o si constituyó un respaldo tácito, o explícito, al gobierno Uribe y su política de seguridad democrática.

El correlato de esto fue que Acción Social lograra centralizar bajo su control el proceso, y que los PDP y los demás actores de base de la sociedad civil perdieran



autonomía en el proceso, y la UE protagonismo político. En este marco, se limitó la acción política de la UE en la transformación del conflicto y se generó alguna desilusión en las organizaciones de los laboratorios de paz, que reclamaban por un apoyo político más fuerte por parte de la UE y en algunos casos expresan un cierto sentimiento de abandono. De hecho, en el contexto de inseguridad y de amenazas de grupos armados en que se desarrollan los laboratorios de paz, y especialmente el laboratorio del Magdalena Medio, algunas personas y organizaciones de base han demandado una posición y un compromiso político europeo más fuerte, un respaldo político más firme e incondicional con esta iniciativa de paz y una presión sobre el gobierno colombiano que pudiese traer más seguridad al proceso.

Confrontado con este tema un funcionario de la Comisión Europea con responsabilidades importantes respecto a Colombia comenta que sí ha habido discusiones y denuncias hechas por la UE al gobierno colombiano en relación a estas situaciones y un diálogo crítico en privado, pero no “creemos que la “diplomacia de megáfono” sea la mejor arma u opción”. De forma similar, un funcionario de la delegación de la Comisión Europea en Colombia comentó que están regularmente en contacto con las diferentes autoridades civiles, gubernamentales, militares y manifiestan esas preocupaciones “[...] [pero] es que a veces una ‘diplomacia silenciosa’ puede ser igual o más efectiva que una ‘diplomacia de ruido’”.

Es una evidencia empírica de la “faz de Janus” (Roy, 2001, p. 9) de la UE, que se traduce en un *décalage* entre lo que la UE declara públicamente y lo que transmite y plantea en privado. Si bien la UE expresa un respaldo casi incondicional al gobierno colombiano y una relación cordial en público, mantiene, según diversos funcionarios de la Comisión Europea, un diálogo crítico entre puertas y manifiesta preocupaciones políticas respecto a diversos dossiers de Colombia. Sin embargo, el hecho de que estas denuncias no sean públicas no deja de tener en sí mismo un valor y una lectura política.

Sin embargo, a pesar de todo esto, toca señalar que el rol político de la UE en este proceso no es totalmente pasivo y que hubo visibles divergencias entre la concepción y visión del gobierno Uribe y la de la CE respecto al conflicto y al laboratorio de paz, que se manifestaron, con menor o mayor intensidad y visibilidad, en varias ocasiones. El ‘caso Bertolini’ fue claramente el momento de mayor tensión entre la UE y el gobierno en el marco de esta iniciativa. Sin embargo, ha habido otros elementos de divergencia y ocasiones en que la UE no ha coincidido

con el gobierno nacional, tal como el rechazo de la UE para apoyar los programas “Familias Guarda Bosques” y “Familias en acción”.

## Distintos actores, distintas ‘paces’: los modelos y enfoques de paz en confrontación al interior del laboratorio de paz

La diversidad de actores al interior del laboratorio de paz se tradujo en una variedad de enfoques para la paz, de perspectivas políticas, lecturas del conflicto armado y de las vías para su solución, que frecuentemente entraron en choque, en divergencia, pero también en diálogo, concertación y conciliación.

Contrariamente al caso del primer laboratorio de paz, en el cual el PDPMM fue el ideólogo de su iniciativa y de la filosofía de paz, en el caso del segundo laboratorio de paz, este rol se vio compartido con otros actores. En el segundo laboratorio de paz confluyeron miradas diferentes, intereses, agendas y prioridades políticas diversas, y concepciones de paz distintas (Franklin y Moncayo, 2004, p. 11), así como convergieron y se cruzaron diferentes formas de concebir la paz, leer el conflicto armado en Colombia y preconizar la vía de solución, razón por la cual el análisis del laboratorio no puede ser de inclinación unívoca, ni lineal. Hubo modelos de paz en confrontación al interior del laboratorio de paz.

El laboratorio de paz ha sido por excelencia un espacio de intercambio y de articulación, no solo de actores de diversa índole, sino de visiones diferentes. Reunió múltiples actores fundamentales en la construcción de la paz en el país, en la perspectiva de cruzar miradas y estrategias de intervención frente al interés de la paz; ha sido un escenario provocativo para construir nuevas relaciones conducentes a la transformación del conflicto; y una experiencia plural, amplia e incluyente que nace de la sociedad civil y en donde se ha trabajado fundamentalmente desde la sociedad civil, pero que se abrió a otras instancias, y perspectivas políticas (Castillo, 2008, entrevista).

Así, la presencia de estos distintos actores en el laboratorio de paz contribuye a enriquecer el proyecto, pero también se traduce en confrontación y choque de agendas, prioridades, concepciones de paz y percepciones del conflicto. Hay correlaciones de fuerza en el laboratorio y confluencia de lógicas y estrategias divergentes.

A pesar de la transversalidad y centralidad del tema de la paz en la iniciativa, las interpretaciones, alcances, implicaciones y operacionalización de estos conceptos, son distintas (Econometría, 2007, p. 18).

Diferentes actores configuran dinámicas, finalidades, enfoques y concepciones de paz variadas:

### *La paz vista desde la sociedad civil de la región*

En primer lugar, se destacó al interior del laboratorio el enfoque para la paz de la sociedad civil de la región. En realidad, el enfoque alternativo, estructural e inclusivo corporizado por la metodología participativa y el modelo de construcción de paz original del PDPMM encontró en el territorio del Cauca y Nariño y en la sociedad civil regional representada por Asopatía y CRIC, un eco en sus concepciones de construcción de paz desde la base y sus dinámicas y procesos sociales en el terreno.

Ambos compartían una dinámica participativa, un énfasis en las causas profundas del conflicto y en los temas de desarrollo humano sostenible, e inclusión del campesinado y de los demás grupos sociales marginados y excluidos, y una visión amplia y multidimensional de la paz y de la construcción de paz; a la cual se agregaron las especificidades sociales y políticas de Asopatía y del CRIC, y de los demás actores que pusieron en marcha el segundo laboratorio de paz. Hay que destacar en particular la cosmovisión indígena corporizada por el CRIC, el modelo de participación de las comunidades y movimientos sociales campesinos, indígenas y afrodescendientes del Macizo Colombiano, y las dinámicas de desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional asociadas a Asopatía.

Como declaró el CRIC, el horizonte de paz del laboratorio es transformar las condiciones que se viven en la zona del Alto Patía y Macizo Colombiano, con vista a la “construcción de vida digna” (CRIC, 2004, p. 19). Su propósito fundamental, acorde con su perspectiva política y enfoque para la paz, es “la búsqueda de condiciones para una solución política del conflicto social y armado”, y lo que el CRIC identificó como la “paz con justicia, verdad y reparación” (CRIC, 2004).

Recurriendo al marco analítico definido en el primer capítulo, se podría situar y encuadrar el ‘modelo’ y orientación para la paz de la sociedad civil regional y de los actores ejecutores del laboratorio como uno cercano al concepto de paz positiva

y en un enfoque de transformación del conflicto. Las organizaciones sociales que conformaron la ECR del laboratorio de paz del Cauca/Nariño, específicamente el CRIC y Asopatía, pero también la generalidad de las organizaciones de base, precognizan un entendimiento encuadrable con la definición de paz positiva de Galtung (1969; 1990; 1996), que tiene en cuenta no solo la dimensión directa de la paz, sino su dimensión estructural y cultural, que pasa por la profundización de la democracia, por objetivos de justicia social y reconocimiento de la diversidad étnica, y por el desarrollo integral de las posibilidades del ser humano. Es un enfoque para la paz holístico e integral, que apunta a la transformación de las causas y raíces profundas del conflicto, en particular la exclusión política y socio-económica, y a la integración de distintos escalones y sectores de la población en un amplio ‘proceso de paz’.

### *Paz vs. pacificación, la perspectiva del gobierno Uribe*

En segundo lugar, se manifestó en el seno del segundo laboratorio de paz el enfoque hacia la paz y el conflicto corporizado por el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Fue un acercamiento indisociable e íntimamente ligado a la política de seguridad democrática (previamente caracterizada y analizada en el capítulo II). En la perspectiva del gobierno Uribe, los laboratorios fueron entendidos como un apéndice social o un complemento de la política de seguridad democrática, que se destinaba principalmente a garantizar una derrota militar de la insurgencia. La paz en su concepción, y en las líneas oficiales del gobierno Uribe, aparecía como una faz del orden y de la seguridad, entendida *strictu sensu*, y la ‘construcción de paz’ como tan solamente la ruta progresiva para la derrota militar de la insurgencia, concepción que desvalorizaba la noción original de paz positiva y desde la base de los laboratorios.

De acuerdo con esta visión política, los laboratorios eran concebidos como mejores escenarios de desarrollo y gobernabilidad relativamente despolitizados, en los cuales se intervenía no en el amago de la ‘construcción’ de la paz y de la transformación del conflicto, sino en su ‘periferia’, la mitigación de los efectos del conflicto sobre la población civil. Era una concepción de paz que, contrariamente a lo que se podría entender y concluir de la participación del Estado en una iniciativa articulada con la sociedad civil, desvalorizaba grandemente la construcción de paz desde la base y el rol de la sociedad civil en la transformación del conflicto, y situaba la

salida para el conflicto exclusivamente en el nivel 1 de la pirámide de conflicto de Lederach (1997, p. 39), es decir, en las altas esferas de decisión política, y entre los actores alzados en armas.

Es por lo tanto un entendimiento limitado y minimalista de la paz, que lo acerca al concepto de paz negativa, entendida como la ausencia de guerra, y no de una concepción más amplia y multidimensional. El horizonte de la paz es estrictamente la victoria militar y la desmovilización de los grupos armados ilegales (Econometría, 2007, p. 18); equipara y confunde la paz con la terminación de la violencia armada o física.

El enfoque para la paz gubernamental pasaba exclusivamente por la gestión del conflicto. En esta concepción el propósito del laboratorio no era la incidencia sobre las causas del conflicto, sino más bien un proceso complementario de apoyo social y mitigación de los efectos de violencia. La 'gestión' del conflicto se asentaba en la vía militar, con vista a la derrota de la insurgencia y de los grupos alzados en armas, y el laboratorio fue instrumentalizado estrictamente como un paliativo social y un instrumento de extensión del control político, social e institucional a nivel territorial del Estado, y no tanto como un instrumento para la construcción de la paz y la transformación del conflicto. En este marco, la tarea principal y el rol a destacar estaba destinado a los militares. Aludiendo a una metáfora recurrente en la ciencia política y las relaciones internacionales, las fuerzas armadas 'prepararían la cena', y los laboratorios de paz 'lavarían los platos'.

El modelo de seguridad democrática establecido y preconizado por la administración Uribe se basaba en tres pilares y etapas: en primer lugar, la recuperación del control del territorio, mediante ofensivas estratégicas y "un esfuerzo militar intensivo" (Rentería, 2008, p. 13); en segundo, la manutención del orden y de la seguridad en las zonas controladas, mediante la recuperación de las instituciones como la policía, el combate al narcotráfico y a los cultivos de uso ilícito, vistos como fuentes de alimentación de los grupos alzados en armas; y en tercer lugar, la consolidación de la seguridad y de la autoridad estatal a través de la reactivación económica y gubernativa de las zonas afectadas por la violencia y providencia de "servicios básicos como los de justicia, salud y educación" (Rentería, 2008, p. 13; Patiño, 2007).

Los laboratorios de paz se encuadrarían en este último propósito y fase, en cuanto un instrumento de recuperación socioeconómica y gubernativa. Había una notoria convergencia entre esta tercera fase de la seguridad democrática y el segundo

y tercer eje de los laboratorios de paz. Asimismo, en cierta medida, este elemento explica la desvalorización por parte del gobierno del eje 1 del laboratorio, centrado en cuestiones políticas y de derechos humanos, que nítidamente pierde fuerza e impacto en el marco del segundo laboratorio (Bouchier y Barme, 2008, p. 21). Para el gobierno y Acción Social, los laboratorios de paz se convertían en parte de su estrategia de intervención en ciertas zonas de conflicto (Patiño, 2008, entrevista), y en un mecanismo de recuperación social del territorio. En esta medida, encerraban un enfoque esencialmente instrumental de los laboratorios, al buscar convertirlos en un aliado y componente social de su seguridad democrática.

Se convirtió en parte de la estrategia gubernamental de desarrollo en zonas de conflicto (Bouchier y Barme, 2008, p. 21), como ha sido reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2002-2006 y 2006-2010, que integraba, en el capítulo de la “Política de Defensa y de Seguridad Democrática”, una sección referente a una estrategia de ‘Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto’, con referencias explícitas a los laboratorios de paz y PDP (POG, 2004, p. 19). Debe ser entendido y encuadrado por lo tanto en el propósito del gobierno Uribe de recuperación integral del territorio, entendido como el rescate de la plenitud de las funciones y atribuciones del Estado, es decir, no solo el monopolio de la fuerza, sino de la gobernabilidad y control de la economía. La política de seguridad democrática, traducida en El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Uribe, planteó una nueva estrategia de intervención en ‘zonas deprimidas y de conflicto’, en donde los actores armados tenían o hayan tenido una presencia e influencia militar y social, con vista a recuperar la autoridad legítima del Estado y la confianza en las instituciones, a incrementar o recuperar la gobernabilidad y a fomentar el desarrollo en estos territorios.

En este ámbito los PDP y laboratorios de paz figuraron para la administración Uribe como una herramienta de gran valor. El objetivo fundamental de brindar ‘seguridad democrática’ pasaba por elementos como el desarrollo en zonas marcadas por la violencia, el fortalecimiento institucional, el fomento de proyectos productivos, y una articulación con la sociedad civil que permitiera consolidar el Estado de derecho y estimular la reconstrucción del tejido social y económico en las regiones más deprimidas y afectas por el conflicto (Bouchier y Barme, 2008, p. 21). El gobierno entendió el laboratorio de paz, (tal como programas como Familias en Acción y Familias Guarda Bosques), como medios e instrumentos para llegar al territorio mediante programas de desarrollo social.

Sin embargo, este entendimiento y enfoque esencialmente instrumental de los laboratorios, que buscaba convertirlos en un aliado y componente social de su política de seguridad democrática colocó un anatema sobre la iniciativa: encerraba el riesgo de que se confundiera el laboratorio como un brazo de la recuperación militar del territorio, elemento que fue decididamente rechazado por los PDP y en cierta medida por la UE, colocando sus procesos y protagonistas en la mira de los actores armados ilegales y creando anti-cuerpos entre una parte substancial de la población civil y de los movimientos sociales.

Pero en la realidad, las motivaciones políticas del gobierno en su participación en el laboratorio no se encuadraban tanto en su política contrainsurgente, sino en el marco de una estrategia de recuperación de la legitimidad y gobernabilidad del Estado en los territorios atravesados por el conflicto y la violencia armada. En síntesis, no se percibía la utilización del laboratorio en cuanto elemento estratégico, sino en términos de reconstrucción y recuperación social e institucional del territorio.

De igual forma, toca señalar que es erróneo y equivocado identificar los laboratorios de paz como un modelo estatal de intervención post conflicto, en la medida en que esta perspectiva no se aplicaba a la situación en el terreno. A pesar de que en el Magdalena Medio su implementación coincidió con una retracción de la insurgencia y recuperación de la presencia militar del Estado, otras regiones en donde se han desarrollado laboratorios de paz han seguido teniendo intervenciones militares en curso. En particular el Cauca y Nariño (pero también el Meta y Montes de María y en menor medida el Magdalena Medio, el oriente antioqueño y Norte de Santander) son regiones aún en disputa entre los actores armados, en donde se observan y tienen presencia operaciones y confrontaciones militares.

Efectivamente, la definición de la participación del Estado en los laboratorios de paz y de la finalidad de la iniciativa para este actor encerró una contradicción no resuelta (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 69). ¿Configuraba el laboratorio un instrumento de construcción de paz o más bien un complemento social para escenarios de postconflicto, en que se pretendía providenciar ayuda social y extender el dominio institucional, social y económico del Estado en zonas en donde este recuperó (parcial o totalmente) el control del territorio? Hubo una cierta esquizofrenia o bipolaridad del gobierno Uribe en su participación en los laboratorios de paz. Mientras los objetivos proclamados y la filosofía de la experiencia eran de un cariz alternativo y lo colocaban como un mecanismo de construcción

de paz positiva (inicialmente en un contexto de solución negociada al conflicto), la ‘política de paz’ del gobierno Uribe era contraria e inconsistente con la filosofía original del PDPMM.

Elementos de la política de seguridad democrática, tales como las fumigaciones, el reclutamiento de soldados campesinos, la red de informantes y la prohibición de los acercamientos humanitarios estaban en completa divergencia y contravía con el modelo de paz original del PDPMM traducido en el primer laboratorio de paz y con los planteamientos de las organizaciones que componen la ECR en Cauca y Nariño (POG, 2004, p. 19). El gobierno nacional no ha suscrito el concepto y filosofía de paz de la iniciativa y ha buscado fundamentalmente instrumentalizarla y cooptarla para fines políticos de diferente índole.

### *El choque de ‘paces’: sociedad civil regional vs. Bogotá*

Los PDP y las ECR se apartaron de la concepción hacia la paz y el conflicto corporizado por la estrategia de la política de seguridad democrática, y rechazaron ser integrados como parte de esta (Moncayo, 2008, entrevista). Como es reconocido y afirmado por la exdirectora de la Red Prodepaz, Ginny Luna (2008, entrevista), estas iniciativas tienen una visión totalmente distinta a la recuperación social del territorio, que es la de “construir socialmente el territorio”.

El choque entre las voces y miradas de la base y de Bogotá fue particularmente agudo en el caso del CRIC, que figuraba como uno de los más fuertes críticos del gobierno nacional y de la política de seguridad democrática (González, 2006a, p. 341; Caballero, 2008b, entrevista). El CRIC afirmó reiteradamente su posición política contraria a la ‘seguridad democrática’ y no evitó plantearlo y declararlo públicamente tanto al interior de las estructuras del laboratorio de paz, como a nivel nacional.

De cierta forma, ha habido una divergencia de lecturas y visiones respecto a los conceptos de paz y desarrollo y a la relación y dinámica que se establece entre ellos. En cuanto a la filosofía original del PDPMM, replicada en los demás PDP, estos son conceptos íntimamente inter-ligados e indisolubles, y el desarrollo (humano y sostenible) se figura como una vía para la paz. En la perspectiva del gobierno Uribe, la paz (entendida como ausencia de guerra) precedía el desarrollo. Como señala un exdirigente de Asopatía,



Hay un problema conceptual importante: si primero está la paz y luego el desarrollo, es porque el conflicto se resolvió violentamente; si es desarrollo y paz, es porque, en la medida que se desarrolló, se acabaron las bases del conflicto. Nosotros preferimos desarrollo y paz, para superar la pobreza, la exclusión, el conflicto colombiano que se ha degradado por el cultivo de la coca; las causas estructurales de este conflicto hay que ir las superando poco a poco con la nación.

De igual forma, el mismo concepto de desarrollo que aparece en la concepción original del PDPMM y del primer laboratorio de paz como un concepto hermano e interdependiente de paz, es sujeto a distintas interpretaciones y lecturas políticas e ideológicas. En su lectura más restringida es sinónimo estrictamente de crecimiento económico; en una interpretación más amplia e integral, en particular, en la noción del PNUD de desarrollo humano, o en los trabajos de Amartya Sen, incluye muchas más dimensiones, que van más allá de la generación de ingresos, e integran elementos como la equidad, el bienestar, la calidad de vida y la sostenibilidad inter-generacional (Econometría, 2007, p. 18).

Se evidenciaba entre la Casa de Nariño y los PDP una lectura diametralmente distinta del conflicto armado y en particular, de sus causas. Era notoria una desvalorización de las 'causas objetivas de la violencia' (como la inequidad, la exclusión social y política) para la administración Uribe, en detrimento de un énfasis en las agendas económicas del conflicto. La lectura gubernamental veía al narcotráfico como la raíz de la violencia armada. La sociedad civil reunida en torno de los PDP, y en cierta medida la UE, ponían énfasis en temas como la exclusión socioeconómica, como raíces y causas estructurales del conflicto y en esta medida, integraban el tema del narcotráfico en el marco más amplio del problema del desarrollo rural y de la economía campesina en el país. Por lo tanto, el enfoque frente al narcotráfico, que se reflejaba en el enfoque hacia el conflicto y la paz y viceversa, eran opuestos. Mientras la política anti narcótica estimulada por Bogotá y Washington preconizaba e implementaba una represión de los cultivos de coca y amapola, vistos como parte de la cadena del narcotráfico y del conflicto, la sociedad civil, con el respaldo europeo, veía los cultivos de uso ilícito como parte del problema de desarrollo y preconizaba programas de desarrollo alternativo como la solución al tema.

Estas diferencias de concepción política y teórica configuran una aplicación práctica y empírica en el caso colombiano de divergencia entre los modelos y enfoques teóricos para la paz analizados y caracterizados en el primer capítulo; mientras el enfoque gubernamental se insertaba en un marco de gestión de conflicto y en una concepción de paz negativa, el segundo encuadraba en un enfoque de transformación de conflicto, y de construcción de paz positiva.

## *La Unión Europea y la 'paz intermedia'*

A estas dos concepciones se podría aún agregar la visión de paz de la UE. Fundamentalmente, el modelo de paz que preconiza la UE y que ha buscado implementar en Colombia mediante su participación en los laboratorios, está impregnado de una concepción liberal de paz, que tiene como eje estructural promover la estabilidad política con base en un modelo político-económico de democracia parlamentar y economía de mercado (Barreto Henriques, 2010b; Duffield, 2005, pp. 31-34).

Asimismo, ha pasado por la promoción de los valores y principios políticos asociados al modelo social europeo, vistos como la receta para la paz. La posición europea parte de una concepción con claros énfasis sociales, y que de esta forma se diferencia particularmente del enfoque eminentemente militar norteamericano. Pone un nítido énfasis en temas como los derechos humanos, que se convirtieron en uno de los principales ejes de intervención del laboratorio de paz, lo que se tradujo en la puesta en marcha de diversos proyectos en esta área y en la realización de un gran número de talleres de formación en este campo, a los beneficiarios de los diversos proyectos y procesos del laboratorio.

En segundo lugar, un elemento fundamental del enfoque para la paz de la UE en Colombia es que esta prioriza una solución política para el conflicto armado en detrimento de la vía militar. Esta no es una postura radicalmente pacifista, sino que aboga que ninguna estrategia exclusivamente o predominantemente militar pueda poner fin al conflicto armado en Colombia. Fundamentalmente, la UE, rechaza colocar todos los huevos en la misma cesta, como de cierta forma plantea la estrategia norteamericana.

La UE nunca se ha opuesto al legítimo recurso a los medios militares por parte del Estado colombiano, pero ha subrayado la necesidad de acompañar este proceso

y dimensión con una incidencia y transformación de las causas profundas del conflicto, mediante elementos presentes en los laboratorios, como la participación social y regional, el fortalecimiento institucional, la promoción de los derechos humanos y el fomento de un desarrollo sostenible y humano considerados como cemento para la construcción de la paz (ICG, 2006, p. 18). La participación en la concepción y puesta en marcha de los laboratorios de paz es en gran medida una evidencia de esta perspectiva política y noción de la paz. Sigue un entendimiento de la seguridad que podría considerarse como cercano al concepto de seguridad humana y que, a pesar de todas las ambigüedades de la política exterior de la UE hacia Colombia y de sus divergencias internas, se distanciaba en varios elementos de la noción de 'seguridad democrática' del gobierno Uribe.

Asimismo, la disociación de la UE de la vía militar, y específicamente del dominio de la recuperación militar y estratégica del territorio, en el marco del laboratorio de paz, ha sido muy notoria en el hecho de que la UE buscó que las áreas de intervención de los laboratorios se cruzasen lo menos posible con zonas de disputa militar en curso, de forma que no afectara la UE a la contraofensiva del Estado (Castañeda, 2008, entrevista). Es una evidencia de esto la exclusión del Catatumbo del área de intervención del laboratorio de paz de Norte de Santander, y de ciertos municipios que habían sido parte de la zona de distensión en el laboratorio del Meta.

Por lo tanto, se vuelve evidente que, de forma similar a la sociedad civil regional del Cauca y Nariño y al enfoque del PDPMM, la UE reconoce las raíces y causas profundas del conflicto armado colombiano, en particular, factores como la debilidad institucional, la exclusión política, la falta de cohesión social, la inequidad, y la escasez de alternativas económicas a los cultivos de uso ilícito (ICG, 2006, p. 18; Castañeda, 2009, p. 166). En esta medida, su búsqueda mediante los laboratorios de paz de elementos que pudieran incidir en estos factores, acercan el enfoque hacia la paz de la UE en Colombia del 'paradigma' de transformación de conflictos.

De igual forma, el acercamiento de la UE al tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito en Colombia, que se figura como central en el marco del conflicto armado, converge con la perspectiva de la sociedad civil regional y de los PDP. La UE se ha opuesto a las fumigaciones aéreas como elemento estructural de la política anti-narcótica, en detrimento de la erradicación voluntaria y por fases,

y preconiza programas de desarrollo alternativo. De hecho, entre las motivaciones y principios políticos recomendados por la UE para el caso colombiano y con eco en los proyectos del laboratorio de paz del Cauca y Nariño ha estado la defensa y fomento de una economía lícita, es decir, apoyar y generar alternativas económicas a los cultivos de uso ilícito.

El modelo y enfoque para la paz corporizado por la UE se sitúa por lo tanto en un punto intermedio entre los dos polos establecidos por la sociedad civil y el gobierno. Converge en diversos elementos y principios con los planteamientos de la sociedad civil regional colombiana organizada en torno de los PDP y Laboratorios, pero no podrá integrarse plenamente en una concepción de paz positiva y transformación de conflictos, al no buscar incidir sobre todas las relaciones de explotación y represión, y al no colocarse sino limitadamente un compromiso con temas de justicia social. Asimismo, ha confluído con el gobierno colombiano presidido por Álvaro Uribe en varios puntos, pero con algunas diferencias respecto al entendimiento y lectura del conflicto, la concepción y modelo de paz y la vía de resolución del conflicto. Configura por lo tanto una especie de modelo intermedio de paz, una tercera vía entre la paz como mera ausencia de violencia armada y la paz como justicia social, encerrando una concepción y desiderátum político ni tan amplio y multidimensional como el corporizado por el PDPMM, el CRIC y Asopatía, ni tan minimalista como el del gobierno, entendido como desarme y pacificación.

### *¿Un modelo indígena de construcción de paz?*

Por último, hay que referirnos a un actor fundamental del laboratorio de paz: el CRIC que, por su especificidad social y cultural, encierra un entendimiento singular de la paz y en esta medida, hubiera podido conferir una impronta única al modelo de construcción de paz del laboratorio del Cauca y Nariño. En la verdad, una concepción de paz indígena, corporizada en el CRIC y los demás actores indígenas caucanos participantes en el programa, ha atravesado indeleblemente el laboratorio, pero apenas de forma superficial y marginal. No incidió ni se materializó en la iniciativa una forma y concepción indígena de construcción de paz.

Respecto a este tema, lo primero que se debe mencionar y aclarar es el mismo concepto de paz para los pueblos indígenas y su enfoque y respuesta hacia el conflicto. Los pueblos indígenas del Cauca, así como los del resto del país, se han

relacionado con los temas del conflicto armado en Colombia, siguiendo usualmente algunos patrones (Barreto Henriques, 2009a, p. 578). Por encima de todo, la marca y característica que se destaca es una resistencia indígena frente al conflicto. De hecho, la movilización indígena en el Cauca representa un proceso ejemplar de resistencia al conflicto armado y una alternativa social en medio del conflicto para los problemas que el conflicto genera (González, 2006a, p. 82).



Manifestación de indígenas guambianos en Popayán, Cauca, 23 de octubre de 2008

Fuente: *Miguel Henriques*

Fundamentalmente, los pueblos indígenas reclaman autonomía frente a los actores armados. Rechazan la presencia y el control social tanto de insurgentes, como de paramilitares y ejército, reclaman respeto por su medio de vida tradicional y por sus territorios, y rechazan el desplazamiento y el reclutamiento forzado de indígenas (Caviedes, 2007, p. 92). Como declara Aparicio Ríos (2008, entrevista) del CRIC, “decimos que no estamos ni con los unos ni con los otros, ni con la insurgencia ni con el Estado, lo cual no quiere decir que seamos neutrales, pues ser neutral es quedarse quieto, lo que decimos es que tenemos nuestras propias propuestas de paz”. Esta actitud indígena frente a los actores armados, los ha vuelto blancos privilegiados en el contexto del conflicto, siendo un grupo particularmente afectado por la violencia.

En segundo lugar, la mayoría de los antropólogos enfatizan que no hay un concepto filosófico común indígena de paz (Barreto Henriques, 2009a, p. 578). La noción de paz es culturalmente contingente y asume diferentes acepciones y significados en los distintos contextos culturales de los cuales emerge. El movimiento indígena, tanto en el Cauca como a nivel nacional, no ha consolidado un modelo único de paz, ni una política integral de construcción de paz y de resolución del conflicto. Para Gañan el movimiento indígena carece de una propuesta de paz consolidada, tanto en términos filosóficos como concretos (citado por Caviedes, 2007, p. 97). Esto puede ser explicado por el hecho de que es difícil consolidar una propuesta indígena unificada de paz, debido a que los distintos pueblos indígenas miran la paz de forma distinta, y a que hay contextos y condiciones de conflicto muy diferentes en los territorios indígenas (Caviedes, 2007, p. 103).

Es más, para entender la paz desde un punto de vista indígena se requiere ampliar el alcance de una perspectiva estrictamente política para un marco histórico y antropológico (Caviedes, 2007, p. 12). Para Pablo Tatay, el movimiento indígena no busca una definición institucional o intelectual de paz. Su propuesta de paz se basa en el desarrollo de un proyecto político de autonomía en sus territorios, más que en una definición filosófica de paz (citado por Caviedes, 2007, p. 101). Esto tiene que encuadrarse en un contexto histórico y en una temporalidad de largo plazo, teniendo en cuenta el pasado indígena de opresión y su lucha histórica de resistencia y preservación de su cultura y territorio. De hecho, la resistencia indígena al conflicto coincide con su resistencia ancestral. Para los indígenas colombianos no solo está en juego el conflicto armado, sino un conflicto de identidad y de sobrevivencia económica y cultural (Palechor, 2005).

Sin embargo, dentro de la cosmovisión indígena (o de las cosmovisiones indígenas) hay aspectos que pueden indicar y que permiten identificar algunos elementos de una cierta concepción indígena de paz. Por encima de todo, la cosmovisión indígena enfatiza la dimensión comunitaria, la solidaridad, la reciprocidad; atribuye importancia mayor a la necesidad de un equilibrio y armonía con la naturaleza y el territorio (Barreto Henriques, 2009a, p. 579). Como señala Luis Fernando Giraldo (2008, entrevista), “la tierra es como madre para el indígena, es el centro y de allí arranca con todo”. Para el pueblo Nasa del Cauca, paz significa e implica “vivir juntos”, “el amor por la naturaleza” y “armonía con el territorio” (Caviedes, 2007, p. 54). Como enfatiza Aparicio Ríos (2008, entrevista) “en la medida en que se

tenga una vida digna, comamos bien, que se recree la cultura, que se respete la naturaleza, entonces hay paz” (Ríos, 2008, entrevista). Dos comuneros de otros dos pueblos indígenas del Cauca responden de forma similar cuando se les pregunta qué representa la paz para los indígenas: según Lorenzo Muelas (2008, entrevista), gobernador de Guambia y exconstituyente, “la paz es la convivencia, la comprensión; procede de la tierra, vivir de ella, respetar la naturaleza [...]”. Para Omar Darío Piamba (2008, entrevista), comunero del pueblo yanacona,

[...] la paz tiene un componente enmarcado desde el rol social, que tiene que arrancar desde la familia. Para el pueblo Yanacona la paz está fundamentada en el primer grado que es la familia. Nosotros decimos; en torno al fogón es que construimos la paz, y desde ahí arrancan las bases y fundamentos para que exista la paz, para que haya orden; luego sube al cabildo, y después al cabildo mayor. Pero la paz apunta a que los indígenas tengan unas necesidades y unos derechos y se les respete su unidad, su autonomía, su territorio. Nosotros, decimos a mayor usos y costumbres, mayor autonomía, pero desde la familia se aprende el respeto por uno y por el otro, ese es el componente en que se fundamenta la paz.

Se vuelve así claro, por estas declaraciones, que la paz para los indígenas tiene un carácter eminente y marcadamente cultural, se confunde con su misma cultura y cosmovisión.

Teniendo en cuenta estos elementos, importa indagar hasta qué punto han incidido en el laboratorio de paz y en su modelo de transformación del conflicto. La respuesta es en gran medida negativa. No hubo una influencia clara y visible de un concepto indígena de paz y de una cosmovisión indígena en el modelo de construcción de paz del Laboratorio. En primer lugar, esto tiene que ver con el diseño y la estructura del laboratorio de paz. Los procesos de organización y construcción de paz indígenas en el Cauca, como la guardia indígena y el territorio de convivencia de La María en Piendamó, se quedaron por fuera de su delimitación territorial (Franklin y Moncayo, 2004, p. 11). El laboratorio se sostuvo más en el área de intervención de Asopatía, que en la del CRIC. Asimismo, las formas indígenas de construcción de paz se han desarrollado y han progresado autónoma y paralelamente al laboratorio de paz.

Además, como mencionado previamente, el CRIC constituyó apenas uno de los varios actores del laboratorio de paz y estuvo lejos de tener el rol más prominente en el proceso. Representaba tan solo una de las cuatro entidades que dirigían el laboratorio de paz. Se sostuvo tanto en el CRIC, como en Asopatía, Acción Social y en la UE. Sí ha tenido una influencia, pero limitada.

Finalmente, un factor es fundamental para esta limitada influencia indígena. El enfoque de construcción de paz de los laboratorios de paz se desarrolló y basó en la experiencia del Magdalena Medio, una región con un fuerte componente campesino y obrero (este último en el caso de Barrancabermeja), pero no indígena. En gran medida, el modelo del primer laboratorio de paz ha sido replicado en las otras regiones que han establecido laboratorios, como Cauca y Nariño, pero también Norte de Santander, oriente antioqueño, Meta y Montes de María. Sus componentes, filosofía, principios y objetivos habían sido previamente establecidos y consolidados, aunque haya habido espacio para autonomía en cada laboratorio y existan claros y visibles matices y especificidades en cada proceso regional.

Sin embargo, a pesar de estos diversos elementos que problematizaron la participación del CRIC en la iniciativa, esto no inviabiliza que una concepción indígena haya permeado el trabajo del laboratorio de paz del Cauca/Nariño. Como señala, Luis Fernando Giraldo (2008, entrevista), integrante de la ECR,

[...] en cada reunión que hay con Asopatía, el pensamiento indígena aparece. Insisten en lo colectivo, solidaridad, respeto por la vida, el amor a la tierra, y la tierra como madre, en el centro; y de allí arranca con todo.

Así, ha habido una influencia indígena en el laboratorio de paz de Cauca/Nariño, pero representa solamente uno de los componentes de su modelo y dinámica. Por encima de todo, se pudo identificar una confluencia y un objetivo común del laboratorio de paz y de los distintos movimientos sociales del Cauca y Nariño, entre los cuales resaltó el indígena, en la búsqueda de estructurar alternativas sociales al conflicto armado y en la generación de un desarrollo humano sostenible en estas regiones.

El movimiento indígena en el Cauca, por intermedio del CRIC, se volvió parte del laboratorio de paz porque correspondía al perfil que el laboratorio requería, y compartía las preocupaciones políticas y los enfoques alternativos que este vehiculaba. Los pueblos indígenas del Cauca no han establecido una forma indígena de



construcción de paz a través del laboratorio de paz. Sin embargo, han trabajado conjuntamente por el mismo fin de la paz, por acabar con la exclusión social, por generar desarrollo sostenible y por la defensa de una solución política negociada al conflicto. De igual modo, los distintos elementos y componentes del modelo de construcción de paz del laboratorio, aunque no sean de iniciativa e influencia directa indígenas, son todavía convergentes y compatibles con sus concepciones de paz e idiosincrasias políticas, en particular en lo que concierne a una multidimensionalidad del concepto de paz, su carácter de construcción desde la base, una relación cercana e indisoluble entre paz y desarrollo y una concepción humana y sostenible del desarrollo.

### *El laboratorio de paz del Cauca y Nariño: ¿un coctel de paces?, ¿un diálogo de sordos?, o ¿un 'laboratorio de paz' en sí mismo?*

Los laboratorios de paz han involucrado diferentes actores con agendas y filosofías de paz distintas y diferenciadas: ha estado presente la paz de la sociedad civil de base, que se encaja en un enfoque estructural e inclusivo hacia la paz y vio en el laboratorio un instrumento conducente a la construcción de la paz positiva desde el terreno; la paz desde la cosmovisión indígena que la asocia a diversos elementos culturales; la perspectiva de paz gubernamental que se enfocó en la paz negativa y recurrió a esta iniciativa como un paliativo y un complemento social de la política de seguridad democrática y de la estrategia de recuperación integral del territorio; y, al final, la concepción liberal de paz de la UE, centrada en temas como el Estado de derecho y la protección de las libertades civiles y que funcionó, de cierta forma, como una vía intermedia entre el enfoque para la paz de la sociedad civil regional y la visión gubernamental.

En este 'laboratorio de paz', se ha cocinado una vía para la paz en Colombia que contiene simultáneamente ingredientes de paz positiva, paz negativa y paz liberal, o, en otro plano, de transformación y gestión del conflicto. El segundo laboratorio de paz, de forma más notoria que el primero, ha sido un cóctel de enfoques hacia la paz; es la paz con diferentes acentos y timbres de voz.

Son enfoques y modelos de paz que pueden ser considerados complementarios, pero también contradictorios. Estas tres realidades y percepciones se han enfrentado en diversas ocasiones al interior de las estructuras y procesos del laboratorio de paz, siendo notorios choques y tensiones en particular entre algunos actores de base y el

gobierno nacional. Estos actores múltiples de niveles diferenciados, configuraron un escenario de navegación y negociación constante entre diferentes espacios, concepciones, esferas de poder e influencia. La existencia y participación de distintos actores en el proceso de diferente índole, naturaleza, agenda, prioridades, posiciones y concepciones convirtieron el laboratorio en un espacio permanente de concertación entre entidades y niveles. Sin entender estas tensiones y estas dinámicas y concepciones diferenciadas al interior de la iniciativa no es posible entender el laboratorio de paz.

Sin embargo, por otro lado, en la medida en que estas distintas concepciones políticas y de paz han dialogado, chocado, y se han conciliado, el laboratorio de paz se volvió un instrumento *per se* de transformación del conflicto y de construcción de paz. Este fue un escenario que propició choques, pero también conjunciones de estrategias y sinergias, y necesidad de negociación, lo que transformó al laboratorio de paz en sí mismo en un instrumento de resolución pacífica de conflictos entre sectores distintos y representativos de la sociedad colombiana, y en una plataforma de diálogo y discusión política acerca de las vías para la paz en el país y las regiones. En una sociedad tan polarizada y radicalizada como la colombiana, este es un elemento que constituye un factor de grandísima importancia y relevancia.

Sin embargo, hay que señalar que este diálogo y articulación ha encerrado algunas limitaciones. No siempre las voces de los actores sociales de base han sido escuchadas por el poder central y se han podido discutir con la institucionalidad las políticas públicas y plantear qué significa para estos grupos y comunidades la paz y la seguridad. Esto limitó el potencial del laboratorio, aunque algún grado de concertación e interlocución haya sido posible y el laboratorio se haya convertido en un cóctel de paces que es más que la suma de las concepciones de paz de cada uno de sus actores individuales.

En realidad, el laboratorio tuvo su propia dinámica y no puede ser interpretado como una política de gobierno, que nunca lo ha sido, como una iniciativa de la cooperación europea, ni estrictamente como un proceso colectivo de la sociedad civil. En esta medida, las distintas partes se cruzaron, entrelazaron, dialogaron y chocaron al interior de la iniciativa, sin haber un vencedor ni vencido claro, ni una sobreposición clara. Hubo momentos de choque y confrontación, pero también de diálogos constructivos.

En esta medida, la iniciativa ha sido un ‘laboratorio de paz’, no solo para el gobierno y el Estado colombiano, sino para las sociedades civiles regionales. Definió

vías de articulación y diálogo entre las instituciones y las organizaciones sociales y propuestas políticas conjuntas en temas de paz, lo que puede contribuir para la transformación del conflicto, en su dimensión social, y para generar nuevas formas de concebir y pensar la paz en los territorios. El Estado aceptó reconocer las sociedades civiles regionales y discutir la paz con ellas en el ámbito de esta plataforma, y de la misma forma, las organizaciones sociales regionales, a menudo muy contestatarias del Estado, asumieron la necesidad de la construcción de un Estado de derecho y del fortalecimiento de las instituciones y gobernabilidad a nivel local.

Pero es legítimo que uno se interrogué en dónde se situó finalmente el modelo y enfoque de paz del segundo laboratorio de paz, teniendo en cuenta la diversidad de actores y de planteamientos que esta iniciativa encerró, y las dinámicas verticales y de cooptación introducidas en el programa. ¿Sigue siendo válido el argumento en cuanto al potencial de esta iniciativa como un modelo alternativo de construcción de paz positiva desde la base en Colombia? ¿Fue el laboratorio de paz compatible o complementario a la política de seguridad democrática y a un enfoque militar? ¿Han sido los laboratorios una continuación de una estrategia gubernamental, un componente social de la seguridad democrática? ¿Han sido una estrategia de la sociedad civil con la participación del Estado y la UE que el gobierno Uribe toleró? ¿O ha sido una alternativa genuina? ¿Fue el modelo original desarrollado por el PDPM secuestrado por la *realpolitik*? ¿Ha seguido, en su esencia filosófica y en su trabajo desde las veredas, un enfoque estructural e inclusivo de construcción de paz positiva? ¿Ha sido algo de intermedio? ¿Significó una tercera vía entre estos dos polos?

La respuesta a estas interrogantes no es sencilla ni clara o lineal. Se sitúa de cierta forma entre estos distintos polos. A un nivel conceptual, a pesar de las dinámicas verticales introducidas en la iniciativa, los documentos oficiales del laboratorio, en particular su guía, refieren explícitamente una concepción de conflicto y construcción de paz encuadrable en una visión de paz positiva y transformación de dificultades desde la sociedad civil. Señalan la existencia de violencias de tipo estructural, específicamente “la exclusión social, política y económica (causas estructurales del conflicto), que afecta a la mayoría de la población, al impedirles que puedan participar de los beneficios del desarrollo, de la participación política y de iguales oportunidades”; orientan la acción de las iniciativas sociales locales del laboratorio a “la resistencia civil” y “a superar las causas estructurales del conflicto armado”, y plantean una concepción de conflicto integrable en la perspectiva de transformación de

conflictos, al entender al conflicto “como algo inherente a la sociedad humana, que no necesariamente es negativo” y que “lo negativo de los conflictos es cuando éstos [sic] se resuelven de una manera violenta” (ACCI, 2005, p. 4).

De igual forma, toca señalar que no hubo una sumisión de los procesos de base a las directivas gubernamentales y que el laboratorio no se convirtió en un instrumento de la seguridad democrática ni de su agenda; los procesos sociales en el terreno, a pesar de muchas debilidades, han continuado con la metodología inspirada en la propuesta del PDPMM y con un enfoque de transformación del conflicto y construcción de paz positiva. El laboratorio de paz ha seguido en lo esencial, los objetivos y líneas de intervención definidos en su marco lógico (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 69).

Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, como de su intervención en el terreno, el segundo laboratorio de paz siguió siendo una propuesta alternativa de construcción de paz positiva en Colombia desde las regiones. Las dinámicas verticales introducidas en el segundo laboratorio y el rol preponderante que el gobierno desempeñó en esta iniciativa no puso en entredicho el potencial de los laboratorios en cuanto proto-experiencias de cómo construir la paz positiva desde la base y desde las regiones en Colombia.

## Los proyectos y procesos del laboratorio de paz del Macizo Colombiano y Alto Patía: la construcción de la paz desde las veredas

Como se ha analizado y subrayado en el punto anterior de este capítulo, el segundo laboratorio de paz sufrió cambios substanciales en su estructura y agenda y se diferencia en diversos elementos y factores de la experiencia del primer laboratorio de paz, que tuvo como base la experiencia social y la filosofía del PDPMM. Hubo una cierta ‘verticalización’ y cooptación de la iniciativa y en cierta medida, el enfoque para la paz corporizado por la sociedad civil regional fue secuestrado por la *realpolitik* de la Casa de Nariño.

Sin embargo, ¿en qué medida estos cambios del más alto nivel de la iniciativa y estas dinámicas verticales se reflejaron y tradujeron en el terreno? ¿Han contaminado

estas dinámicas, los procesos de base del laboratorio? ¿La experiencia en su más bajo nivel, ha seguido y replicado el enfoque para la paz original del programa? ¿De qué forma se tradujo y se puso en práctica esta filosofía peculiar de paz en otro escenario tan distinto del Magdalena Medio, como el Macizo Colombiano y el Alto Patía? ¿Es la experiencia del segundo laboratorio de paz en el Cauca y Nariño un instrumento de construcción de paz positiva desde la base? ¿Cómo el CRIC y Asopatía, y el conjunto de organizaciones y comunidades beneficiarias ha traducido e implementado en el terreno la letra del compromiso por la paz del segundo laboratorio? ¿Cómo han sido fomentados, contruidos y puestos en marcha los proyectos y procesos del segundo laboratorio de paz en el Cauca y Nariño? ¿Qué faces y problemáticas encierra la microterritorialidad de este laboratorio? ¿Cómo se ha navegado en el medio del conflicto armado buscando la paz en el Cauca y Nariño? ¿Qué bloqueos y potencial se encuentra en términos de paz en estos territorios? ¿De qué forma se ha procesado la construcción de la paz desde las veredas de estas regiones? ¿Cómo las comunidades y las organizaciones sociales del Cauca y Nariño han buscado perseguir los objetivos y construir la paz cotidianamente?

Se buscará a lo largo de esta sección contestar a estas cuestiones y problematizar estos temas, mediante un recorrido por diversos aspectos de los proyectos desarrollados y ejecutados por el segundo laboratorio de paz en el Macizo Colombiano y el Alto Patía. Más que un análisis detallado de cada uno de los proyectos, en principio importa la evaluación de los procesos y dinámicas sociales, políticas y culturales alimentadas por el laboratorio de paz en el territorio y de la contribución de la iniciativa para la generación de vías de construcción de paz positiva desde la base.

El laboratorio de paz del Macizo Colombiano y del Alto Patía ha ejecutado 53 proyectos, los cuales están integrados en tres ejes, que pretendieron incidir en dimensiones específicas de la construcción de paz: un primer eje recayó sobre la “Paz, los derechos humanos y vida digna”, un segundo sobre “el fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática y participación ciudadana” y un tercer eje sobre “el desarrollo socio-económico sostenible (que mejora las condiciones de vida de la población objeto) en armonía con el medio ambiente”.

Cada proyecto fue ejecutado por una organización de base y reunió un número variable de beneficiarios. Tal como en el caso del primer laboratorio de paz, el laboratorio de Cauca y Nariño integró iniciativas y procesos con naturalezas y

modalidades muy distintas que buscaban incidir sobre distintas dimensiones de la paz, involucrando diferentes actores sociales, tipos de intervención y metodologías. Se pretendía trabajar sobre cada microelemento y pieza de un ‘motor’ regional para la paz. Como señala Franco Vincenti (2008, entrevista), cada proyecto del laboratorio de paz es entendido como un “nudo en una red de pescador”. Se concebían como instrumentos para transformar microexpresiones del conflicto y construir ‘micro-paces’ o “paces de los pequeños nadas” (Barreto Henriques, 2012).

Entre los participantes de los proyectos estuvieron fundamentalmente comunidades y pobladores de sectores sociales excluidos, entre los cuales se destacan los campesinos mestizos y en menor proporción, afrodescendientes, indígenas de la etnia Yanacona, jóvenes y mujeres. Tenían en su mayoría un perfil social de bajo estrato socioeconómico y nivel de escolaridad y un cariz eminentemente rural y minifundista (Bouchier y Barme, 2008, p. 519).

## Eje I: Paz, derechos humanos y vida digna. La dimensión política y cultural de la construcción de la paz

El primer eje del segundo laboratorio de paz se intituló de “Paz, derechos humanos y vida digna” y abarcó una serie de proyectos de matriz esencialmente política y cultural, que buscaban generar espacios de diálogo y convivencia pacífica en la región y promover una cultura de paz, por intermedio de procesos de formación y capacitación de las comunidades y de los líderes sociales en temas como los derechos humanos, el DIH, la resolución de conflictos, el apoyo a medios de comunicación locales y regionales orientados para la paz y valores pacíficos, civilistas y democráticos (Bouchier y Barme, 2008, p. 48; POG, 2004, p. 4). Por lo demás, integró iniciativas y procesos destinados a la reconstrucción del tejido social afectado por la guerra, a través del rescate de valores sociales y culturales de solidaridad comunitaria.

Se destaca en este ámbito la Escuela Subregional de Justicia Comunitaria de la Cordillera, un proyecto ejecutado por la Red de Justicia Comunitaria, que se centra en mecanismos alternativos de resolución de conflictos en su dimensión inter-personal, y procesos de mediación y de justicia comunitaria, bajo el lema “otra justicia es posible”. Pasó fundamentalmente por un proceso de promoción

de escuelas de mediadores comunitarios y programas de capacitación de líderes sociales en derechos humanos y resolución de conflictos, que resultaron en la capacitación de 240 líderes en la región de la cordillera.

De igual forma, el proyecto desarrollado por la Red de Justicia Comunitaria ha incidido en la asistencia comunitaria a nivel psicosocial a las víctimas y la recuperación del tejido social y económico afectado, desde el final de los años noventa, no solo por la presencia de los grupos armados y de la violencia, sino también por la expansión de la economía de la coca.

El trabajo con las víctimas del conflicto asume una importancia fundamental en el marco del conflicto en la medida en que para construirse un país y una región en paz, toca parar la espiral y el ciclo de violencia que el conflicto produce y retroalimenta. En la gran mayoría de los casos los victimarios han sido también ellos víctimas de violencia, sea ella directa o en otros casos estructural. Un episodio ocurrido en Montes de María y relatado por el padre Rafael Castillo (2008, entrevista) demuestra con un simbolismo profundo, cómo este trabajo con las víctimas puede ser significativo y producir frutos. En sus palabras,

[...] una señora amiga mía que le mataron su esposo y su hijo iba con la nieta al cementerio y yo la saludé. Entonces yo me fui con ellas al cementerio y cuando llegamos allá, ella me dijo que fuéramos a la tumba de su marido. Yo fui a la tumba, y recé; después me llevó a la tumba del hijo, también recé, y la niñita iba poniendo flores; después ella se quedó con un vasito de flores y la señora me dijo: “Padre, vamos a rezar allí a otra tumba”, y yo le dije: “Bueno, listo.”, y la niñita puso las flores, trajo el agua, la echó y todo lo demás. Yo hice la oración y después les pregunté: “Y, bueno, quién es el muerto este?” Y dice la señora: “él fue el que mató a mi esposo y a mi hijo... y yo traigo a mi nietecita para que, así con la misma fe con que le reza a su abuelo y a su papá, rece por el alma de esta persona, porque yo no puedo permitir que mi nieta crezca con odio, con rencor y con sentimientos de venganza (Castillo, 2008, entrevista).

Esta anécdota, de una carga simbólica fuertísima, evidencia la necesidad de cerrar la espiral y el ciclo de la violencia y las dinámicas de odio y venganza que alimentan el conflicto armado. Es un gesto individual de fuerte simbolismo en el sentido de la

deslegitimación de la cultura de violencia reinante. Esta persona tuvo consciencia de que para que el odio no se perpetuara de generación en generación y para que su niña ‘creciera en paz’ consigo misma, tendría que primero tener paz con los otros, incluso los verdugos de su padre y abuelo.

Esta es una dimensión fundamental de la construcción de una cultura de paz, que es necesariamente un proceso a la vez intrapersonal y estructural y se inserta simultáneamente a un nivel micro y macro. De hecho, como comprueba el episodio mencionado, la dimensión afectiva y cultural son dos pilares de la sustentación y construcción de los individuos, y en la medida que tanto la guerra como la paz “nacen en la mente de los hombres” (UNESCO, 1945), son parte integrante y esencial de la construcción de paz. Esta misma perspectiva ha sido reconocida y reiterada por un poblador de Policarpa que señala que uno de los elementos más importantes en el proceso social en que participa es que “hemos aprendido la demostración del afecto, [...] que hace que la gente se sienta importante. [...] Si hubieran demostrado afecto a un paramilitar, este no se hubiera vuelto paramilitar”.

En el campo educativo, hay que destacar el proyecto desarrollado por la Fundación Sol y Tierra, ONG fundada por los excombatientes del Quintín Lame, después que negociaron la paz y su reinserción en la vida civil a principios de la década de 1990 (Rappaport, 2005, p. 45). La ONG ejecutó en el laboratorio un proyecto educativo dirigido a desmovilizados de esta guerrilla, con énfasis en formación en convivencia pacífica y resolución de conflictos (Peña, 2008, entrevista). Se esperaba que, en el marco de este proyecto, cerca de 1.900 personas concluyeran un bachillerato que permitiera conferir a los estudiantes graduados, herramientas de convivencia pacífica que pudieran aplicar en sus comunidades (Caballero, 2008b, entrevista), generando frutos e impactos que trasvasen el ámbito limitado del proyecto educativo.

Como señala Alfonso Peña (2008, entrevista), coordinador del proyecto y excomandante del Quintín Lame,

[...] lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes cuando terminen el programa, así como reciben el diploma de bachiller, también sean capaces de liderar los conflictos que se presentan en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la vereda, en el corregimiento; que sean más unos gestores de la convivencia pacífica, no por medios violentos, sino por medio del diálogo, de la conversación; y que en el futuro, esos líderes sean capaces



de ser jueces de paz en el municipio, que sean jueces de paz en cualquier inequidad y situación; y que si es un estudiante hombre, que pueda ser un mejor padre de familia, que aprenda a respetar los derechos de los niños, respetar el derecho de la mujer en igualdad de condiciones y que no sea un estudiante más que vaya por un cartón, sino que pueda orientar y que lo que aprenda sea para el beneficio de la comunidad.

Este proyecto, de forma similar al proyecto ejecutado por Progresar en el Norte de Santander y por la Corporación Arco Iris en diversos PDP, al involucrar organizaciones sociales creadas a partir de desmovilizados de grupos armados (específicamente el Quintín Lame, el EPL y la CRS), configura, en este ámbito específico, los laboratorios de paz como instrumentos de post conflicto o encuadrables en procesos de construcción de paz post conflicto. De hecho, la construcción de paz positiva, al incidir fundamentalmente en las raíces de los conflictos y en procesos de largo plazo de ámbito político, social, cultural y económico, converge en las formas y modalidades de intervención tanto con la prevención estructural de conflictos, como con la reconstrucción post conflicto y la transformación de conflictos.

En el ámbito cultural, asume particular relevancia la Escuela intercultural para la promoción de los derechos humanos, la convivencia armónica y la protección ambiental, implementada por la Corporación Maestra Vida, que se conformó mediante una alianza de instituciones educativas e incidió en la recuperación y fomento de la identidad cultural de las tres comunidades socio-culturales del Cauca y Nariño, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, mediante un currículo con elementos del patrimonio cultural de estos tres grupos, en temas como las artes, la educación, los cultivos tradicionales y la agro-ecología (Bouchier y Barme, 2008, p. 54). Este proyecto, que partió de un núcleo de capacitación de 300 personas, ha servido como medio para fortalecer la convivencia pacífica intra e intercomunitaria, así como para promover los derechos humanos y la protección del medio ambiente (Bouchier y Barme, 2008, p. 51).

La Fundación Espacio Abierto ejecutó el proyecto “Huellas e imágenes del Macizo”, un proyecto que incidía en la dinamización de procesos culturales y sociales con jóvenes de los municipios de San Sebastián, Sucre, Bolívar, Almaguer y Santa Rosa, en la zona del Macizo Colombiano. Ha trabajado con diversos procesos de expresión artística y cultural y fundamentalmente, con la apropiación de herramientas y medios de comunicación audiovisual por parte de los jóvenes (Ocampo, 2008, entrevista).

El proyecto incidió en la puesta en marcha de una investigación participativa sobre el Macizo Colombiano, hecha de forma itinerante a partir de las comunidades y organizaciones de la región, en particular de los jóvenes, con base en lo que se llamó ‘tertulias macizeñas’. Tuvo como objetivo que la gente pudiera reconocerse en su territorio, en la diversidad de pueblos, paisajes y culturas que constituye el Macizo Colombiano; y generar procesos y espacios de intercambio y convivencia pacífica desde los jóvenes, a partir del conocimiento del otro, esencial a la construcción de la paz (Ocampo, 2008, entrevista).

La construcción ‘del otro’ a nivel cultural, simbólico, lingüístico, y afectivo es de una importancia vital en cualquier proceso de transformación del conflicto y de construcción de paz. En principio no está dirigida a la eliminación de las diferencias, sino más bien a que los intereses, propuestas y visiones divergentes no colisionen de forma violenta, como suele ser el caso colombiano, sino que interactúen pacíficamente y sean dirimidos o transformados de forma democrática.

Como señaló Silvio Sánchez (2008, entrevista), exrector de la Universidad de Nariño y miembro del comité directivo del laboratorio,

[...] se busca construir un lenguaje distinto en las vistas del otro, no para estar de acuerdo, sino para dejar de matarnos. El hecho de no estar de acuerdo no nos debe llevar a la muerte, yo creo que el hecho de no estar de acuerdo nos debe llevar a crecer como sociedad.

Este es el objetivo último de la transformación de conflictos: transferir el conflicto de la esfera de la violencia armada para el campo social y democrático, al punto que los intereses se conviertan en valores y los actores en partidos (Galtung, 1996, p. 95).

Hay una cultura de violencia en Colombia que se expresa de forma aguda en el sur del país, que legitimó, consensuó y banalizó el ejercicio de la violencia como mecanismo de ‘resolución’ de conflictos. En este sentido, hay un trabajo y un reto profundos en el sentido de la fuerza de transformar los paradigmas de pensamiento que sostienen desde el punto de vista cultural y simbólico la violencia armada en la región y en el país.

Con los diversos proyectos desarrollados por el laboratorio de paz en el campo cultural y educativo, se buscó el cambio de los modelos y paradigmas culturales que se reflejan y traducen en las prácticas políticas y sociales en la región, a favor de una

ética democrática y civilista. Se pretendía construir una forma de pensar, sentir y actuar distinta. Es un proceso que es a la vez cognitivo y comportamental, individual y estructural y que tiene como horizonte último la construcción de una cultura de paz.

En el primer eje estratégico se incluye igualmente el Observatorio Regional de Paz (ORPAZ), proyecto que es transversal a todos los laboratorios de paz, y que en estas regiones ha sido co-ejecutado por la Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño. Contiene funciones y competencias en todo similares al OPI del Magdalena Medio, es decir, realiza trabajo de investigación, análisis y sistematización de la realidad social, económica y política del Cauca y Nariño, seguimiento de las dinámicas de violencia armada y estructural en la regiones, de la evolución de la situación relativa a los derechos humanos, DIH, gobernabilidad y desarrollo económico, así como de las iniciativas y procesos de movilización y construcción de paz (Bouchier y Barme, 2008, p. 47).

Produjo en el marco del proyecto una base de datos y una página web con información estadística y elementos de los municipios y regiones del Cauca y Nariño, que se figuró como un aporte relevante al acompañamiento, lectura y problematización del conflicto armado en la escala regional. De hecho, es fundamental que el laboratorio de paz produzca espacios de reflexión sobre el tema de la paz, que incorporen no solo la esfera social y política sino también la académica<sup>12</sup>.

Toca igualmente señalar que se incluyeron en este eje proyectos como el de Asocafé, una organización caficultora de Nariño que a pesar de los propósitos de incidencia en la promoción de la convivencia pacífica, se reduce enormemente a un proyecto productivo con algunos elementos sociales acoplados (Bouchier, y Barme, 2008, p. 51). De hecho, la mayoría de los proyectos desarrollados en el marco del eje I en el Cauca y Nariño se centraron fundamentalmente en el fortalecimiento de organizaciones, muchas de ellas de productores (Bouchier, y Barme, 2008, p. 54). Esta situación pone en evidencia el mismo fenómeno previamente mencionado en el caso del Magdalena Medio de que en la base suelen priorizarse temas sencillos, concretos y materialmente

<sup>12</sup> Contrariamente a todos los demás proyectos del laboratorio de paz, ORPAZ ha trabajado con la totalidad del territorio de los departamentos del Cauca y Nariño, recopilando datos e información que no se limitan a los 26 municipios integrados en la iniciativa. Esta es una evidencia de la imposibilidad de apartar el área de intervención del laboratorio de las dinámicas regionales y la integralidad de los departamentos y una señal demostrativa de que la selección de los municipios de intervención del laboratorio fue una decisión de gabinete, ajena a las dinámicas del territorio y agendas regionales. Este es, en realidad, un factor que puede dificultar la construcción de una vía regional para el desarrollo y la paz y un obstáculo a no desvalorizar, con respecto a las finalidades y objetivos del laboratorio (Bouchier y Barme, 2008, p. 67).

palpables como la producción, más que temas intangibles e inmateriales como una cultura de paz y de derechos humanos, lo que configura una debilidad para un enfoque integral para la paz y revela el ‘otro lado de la moneda’ de la participación social.

Por último, hay que mencionar el proyecto “Macizo Colombiano, Región constructora de Paz”. Este se concibió y se configuró como un proyecto inicial y articulador del eje I del laboratorio. Se pretendía que fuera ejecutado previamente a los demás proyectos del eje I, buscando integrar y articular todos los ingredientes del primer eje del laboratorio, en particular, fomentar territorios de convivencia pacífica y establecer vínculos de articulación entre las poblaciones, las instituciones y las defensorías del pueblo (Bastidas, 2008, entrevista). Es un proyecto que buscó tocar la totalidad del área de intervención del laboratorio de Paz del Macizo Colombiano y Alto Patía, es decir los 26 municipios del Cauca y Nariño, con la intención de unir el territorio, las organizaciones sociales y las comunidades.

Se constituyó mediante una dinámica y metodología participativa puesta en marcha a través de la realización de asambleas locales en cada uno de los municipios, en las cuales se convocaban “las fuerzas vivas de los Municipios” (Bastidas, 2008, entrevista), es decir, las autoridades públicas, organizaciones, líderes sociales y las comunidades. A partir de estas asambleas se eligieron coordinadores para escuelas de liderazgo y gestores de convivencia y paz.

Las escuelas de liderazgo tenían como propósito formar y capacitar líderes comunitarios para que trabajaran “en los diferentes aspectos y diversos componentes de la realidad, el componente político, económico, social, cultural, ambiental” (Bastidas, 2008, entrevista), y replicaran en cada una de sus veredas “la capacitación que nosotros inicialmente les habíamos dado”. En cuanto a los gestores de convivencia y paz, se pretendía que funcionaran como intermediarios entre la comunidad y la institucionalidad pública de cada municipio, fundamentalmente los personeros y las alcaldías, en temas de derechos humanos.

Se hace evidente que, por medios distintos, la metodología participativa que fue la base del PDPMM y en cierta medida, del laboratorio de paz del Magdalena Medio, también tuvo impacto, eco y presencia en el Macizo, por intermedio de diversos tipos de proyectos y procesos orientados a incidir sobre exclusión e integrar grupos marginados social, económica y políticamente.

Sin embargo, hay que señalar que este proyecto evidenció graves problemas y limitaciones, sobre todo en términos administrativos. En primer lugar, se planteó

la situación insólita de que, lo que se concibió como un proyecto inicial del laboratorio en la región y el primer medio de contacto de las poblaciones y del territorio con el laboratorio, fue en realidad uno de los últimos en ser ejecutado por problemas de carácter administrativo. Por lo tanto, este proyecto no ha cumplido integralmente la función de articulación a que se comprometía y en la práctica resultó en un proyecto de capacitación de líderes en diferentes comunidades de los 26 municipios previstos (Bastidas, 2008, entrevista).

Por lo demás, el previamente analizado problema del choque de los procedimientos de la cooperación comunitaria europea con la realidad social del territorio colombiano fue particularmente manifiesto en el caso de este proyecto. Como señala Henry Caballero (2008b, entrevista), a los gestores locales en las veredas y corregimientos del Macizo, “en pueblos en que ni siquiera consiguen que les firmen un papel”, les fue solicitada la pesada y exigente burocracia europea, lo que complicó profundamente el proceso en términos administrativos, pero fundamentalmente, “le ha quitado mucha fuerza a los proyectos, pues las personas que están listas para actuar en otros frentes más de organización social, deben dedicarse a resolver problemas administrativos o jurídicos para los cuales no están preparados”.

No obstante estas limitaciones, se han producido, en el marco de este proyecto, varios procesos sociales de articulación de comunidades en torno a temas comunes como la defensa del agua, las fumigaciones y las escuelas locales de liderazgo (Caballero, 2008b, entrevista). Se contribuyó a fortalecer o recuperar los liderazgos y la capacidad de movilización, participación y organización de las comunidades, que venía peligrando a raíz de los problemas de violencia en la región. Propició un trabajo mancomunado, que la gente se volviera a unir alrededor de propuestas concretas, y que se dialogara colectivamente con las instituciones locales, haciendo valer sus derechos. Como describe Bastidas (2008, entrevista),

[...] la gente se había disgregado, cada uno andaba por su lado. Este proyecto logró unificarlos, volverlos a reunir. [...] Las capacitaciones sirvieron de pretexto para unir a la gran masa popular, a los líderes, con unas experiencias que compartieron en los talleres; porque no solamente fue la cátedra magistral de darles la charla, sino hacer que ellos mismos crearan esos talleres; prácticamente fue rehacer la práctica pedagógica; hicimos que la gente, desde su base, desde sus percepciones, desde sus conocimientos,

desde sus experiencias, hicieran el taller; nosotros simplemente servíamos de facilitadores y aportábamos con grandes pensadores de este país en torno a problemáticas concretas: el agua, los recursos naturales, el medio ambiente, el modelo educativo, el modelo económico.

La experiencia se basó en una lógica participativa y de empoderamiento, en la cual la receta no es un modelo o un producto final que viene del exterior, sino más bien es una construcción colectiva de la comunidad, es una solución endógena nacida en la comunidad, y, en esta medida, de mucho mayor valor, impacto y sostenibilidad. En esta medida, es una vía para la paz y el desarrollo que no choca con la realidad del pueblo en el terreno, como suele pasar con los modelos económicos y políticos vigentes introducidos desde Bogotá o desde Bruselas.

Se evidenciaron por lo tanto en esta región procesos sociales similares a los planteados en el Magdalena Medio, en el sentido del empoderamiento y organización de comunidades que, al organizarse y unirse han adquirido herramientas para defenderse mejor colectivamente. Como señaló un poblador, “antes éramos vulnerables, nos tomaron por sorpresa, pero ahora, nos vamos a agrupar como gallinitas y nadie más nos va a obligar a desplazarnos” (Bouchier y Barme, 2008, p. 71). Son microprocesos de construcción de paz en los cuales la vía del diálogo y de la negociación es priorizada frente a la violencia, y la dignidad se pone por encima del miedo y la humillación.

Esta dimensión y este eje permitieron, en pequeñas escalas, el desarrollo de espacios de libertad y convivencia pacífica, de ‘islas de civilidad’ en el medio de la confrontación armada en algunas de las áreas más remotas hostigadas por la violencia en el Macizo Colombiano.

## Eje II: Fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática y participación ciudadana. La dimensión social e institucional de la construcción de la paz

El segundo eje del segundo laboratorio de paz incidió sobre fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática y participación ciudadana”. Integró

fundamentalmente la dimensión social e institucional de la construcción de la paz e incluyó sobre todo proyectos de dos ámbitos y a dos niveles: por un lado, fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones y redes sociales locales y regionales; y por otro, fortalecimiento de las instituciones, con vista a la profundización de los niveles de gobernabilidad democrática y de la participación ciudadana (Bouchier y Barme, 2008, p. 52).



**Guardia indígena empuñando 'la chonta', Minga Nacional de Resistencia Indígena, Bogotá, 21 de noviembre de 2008**

*Fuente: Miguel Henriques*

En esencia, estaba dirigido a incidir sobre la dimensión social y política de la exclusión, dos de los ejes estructuradores y sustentadores del conflicto armado en el país. Se pretendía consolidar y perfeccionar, al nivel micro local y departamental, la

‘democracia limitada’ y la exclusión política que evidencia Colombia, especialmente en regiones periféricas como el Cauca y Nariño, y generar o fortalecer un espacio civil y civilista en el medio del conflicto, con base en la sociedad civil y las organizaciones sociales, considerados como cemento esencial para la paz.

Estos proyectos que conformaron el eje II del laboratorio tenían como propósito colmar, en los territorios más marginados y martirizados por el conflicto armado, la histórica ausencia del Estado y de las instituciones y fortalecer el tejido social que se ha venido rompiendo, en el marco de la narcotización de la economía campesina y de la represión de los actores armados, con el fin de recuperar el dinamismo que los movimientos sociales venían perdiendo y los valores de la solidaridad que se venían desvaneciendo (Bouchier y Barne, 2008, p. 68).

En este ámbito, la mayoría de los proyectos en este campo se enfocaron en el apoyo político, social, organizativo y financiero a las organizaciones sociales del Cauca y de Nariño, con vista a la consolidación y empoderamiento político y técnico de las organizaciones de base, el incremento de su capacidad operativa y estructura organizativa, y de su capacidad y competencia de interlocución con las autoridades locales y regionales (Bouchier y Barne, 2008, p. 79).

Por lo demás, estos procesos y proyectos pasaron por la formación y capacitación a los dirigentes asociativos, los líderes comunitarios, y los socios de base. En la óptica del laboratorio estos fueron considerados y concebidos como ‘sembradores de paz’ y agentes de promoción y sustentación de los valores democráticos y civilistas que constituyen el antídoto para la cultura de la violencia y de la guerra (Bouchier y Barne, 2008, p. 68).

## *Fortalecimiento de la sociedad civil*

Los proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones y movimientos sociales asumen particular importancia en el marco de un conflicto armado como el colombiano. Efectivamente, hay que subrayar que cuando hay un tejido social fuerte, en el que las comunidades están asociadas y articuladas y hay una organización civil consolidada, los actores armados tienen mucho más dificultad para implantarse y controlar socialmente un territorio, en la medida que la comunidad está en mejor condiciones para dialogar con los grupos alzados en armas y no dejarse cooptar, maniatar y aterrorizar.



Es en este ámbito que estos proyectos buscaron fortalecer el tejido social y las organizaciones y movimientos sociales y generar espacios y escenarios de confianza, diálogo y articulación colectivos. Es un medio y una herramienta para dejar el conflicto armado a una cierta distancia y manejar de una forma más consistente y fuerte las relaciones con los grupos alzados en armas.

Un ejemplo cabal de esta dimensión es el modelo de interlocución y movilización colectiva de los indígenas del Cauca frente a los actores armados. Cuando se presenta en la región un caso de secuestro o amenaza a un indígena, hay una movilización de toda la comunidad para inmovilizar al grupo armado, mediante acciones como el bloqueo colectivo de su entrada en un municipio o la dislocación de toda la comunidad indígena al acampamiento de la guerrilla o del grupo paramilitar (Moncayo, 2008, entrevista). En este proceso cabe un rol fundamental a la llamada guardia indígena, un cuerpo de seguridad civil de las comunidades indígenas nasa del Cauca, que no porta ninguna otra arma que la carga simbólica de su bastón (conocido como la 'chonta') y que, mediante esta misma carga y fortaleza colectiva, en no pocas ocasiones ha logrado proteger a sus comunidades frente a los actores armados.

En el campo del fortalecimiento de la sociedad civil y del tejido social de las regiones del Cauca y Nariño, uno de los proyectos que más se destacó fue el proyecto de "Fortalecimiento del Movimiento Social de la Cordillera". Este ha sido ejecutado por la Corporación Fondo de Empleados del Incoder (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural) – Corfeinco e incidió en el fortalecimiento organizativo y social del movimiento social en los siete municipios de la cordillera occidental de Nariño.

Constituyó uno de los proyectos más dinámicos e interesantes del laboratorio de paz del Macizo, y que más frutos ha producido en términos sociales. El empoderamiento político de las comunidades, de los líderes y pobladores reviste contornos muy marcados en este proceso. Al escuchar a los líderes del movimiento social, pero también los 'pobladores comunes' y de base, se escucha un discurso político fuerte, coherente, consolidado, determinado e incisivo. De hecho, en un contexto como el colombiano, es común que aún el campesino más pobre e iletrado esté politizado y tenga una 'antena' y consciencia política, pues la política le entra cada día en casa, a través del escenario de conflicto, que es no solo armado, sino social y estructural.



Misión de evaluación intermedia del Laboratorio de Paz II. Reunión con el Movimiento de la Cordillera y la Red de Justicia Comunitaria, Chachagui, 7 de octubre 2008

Fuente: *Miguel Henriques*

En el marco de este proceso hay una visión política y horizonte de futuro que se logró construir, y un empoderamiento social que es innegable. Cuando se le preguntó a un grupo integrante del movimiento: ¿qué han ganado en el proceso?, la respuesta fue “perdimos el miedo otra vez”. Efectivamente, la cordillera era una zona profundamente afectada por el conflicto armado, en donde los liderazgos y participación sociales habían sido diezmados. Procesos como este han permitido que líderes sociales y comunidades que estaban aplastadas y aisladas por el miedo y por el conflicto se reintegraran y volvieran a articularse; se contribuyó a la reactivación de la organización y movilización social, a la recomposición del tejido social y a la capacitación de las comunidades. Como una líder comunitaria señaló, “antes el único que hablaba era el padre o el profesor. Ahora somos capaces de hablar con el alcalde, con el gobernador; somos nosotros, sí podemos solos. No necesitamos que otros vengan y nos digan”. El proceso ha ayudado a que encuentren su propia voz y tengan fe en sus capacidades, independientemente de su estatuto social o condición económica. De hecho, una de las frases que más se

escucha a los pobladores de base de esta iniciativa es “sí, se puede”, mucho antes de la campaña en torno del *yes we can* de Barack Obama.

Uno de los grandes logros de este proceso, así como de varias iniciativas de base del laboratorio, es la afirmación de una luz y vía de salida para su situación de marginalización a varios niveles. Es un proceso de emancipación social que reviste una importancia enorme. Las comunidades se embarcan progresivamente en un proceso de salida de su condición de exclusión política y social y asunción de su estatuto, en cuanto ciudadanos portadores de derechos y deberes.

En realidad, este proceso ya se viene traduciendo en dividendos políticos concretos como el hecho de que, en Policarpa, considerado uno de los municipios más violentos de Colombia, fueron elegidos cuatro concejales integrados en el Movimiento Social de la Cordillera, una evidencia concreta y cabal del crecimiento y consolidación del movimiento y de su implantación e impacto en la región.

Todavía, toca subrayar que a pesar de estos procesos, estas son aún zonas y territorios profundamente marcados por la violencia armada y la presencia de los grupos al margen de la ley. En esta medida, el tema de los actores armados sigue siendo muy sensible, y cuando se anunció la investigación, no se dejó de presentar una reacción de prevención de los pobladores y un pedido para que la grabadora fuera desconectada. Como planteó una pobladora “uno no sabe donde puede estar un informante de la guerrilla”. La movilización social y la construcción de la paz en un contexto de conflicto armado como el colombiano y el presentado en las zonas del Macizo Colombiano y el Alto Patía es un “caminar por el filo de las cuchillas” (Castillo, 2008, entrevista) y la violencia armada de la insurgencia y de los grupos paramilitares sigue condicionando los procesos y las vidas de la gente en estos territorios.

En el ámbito del fortalecimiento organizacional, se incluyó igualmente “Minga de Sueños”, un proyecto ejecutado por la Fundación Social, orientado al fortalecimiento de algunas organizaciones sociales del Norte de Nariño.

El nombre sugestivo y representativo del proyecto encierra los dos ejes y componentes fundamentales del proyecto: en primer lugar es una ‘minga’, es decir, es un trabajo colectivo y asociado. Minga de Sueños es una red de organizaciones de base que reúne desde instituciones educativas a organizaciones de productores de café; es una alianza de organizaciones sociales y una instancia de articulación de los esfuerzos de las mismas (Torres, 2008, entrevista). En segundo lugar, se orienta hacia los ‘sueños’, a las aspiraciones de las organizaciones y comunidades del norte

de Nariño, que buscan construir de forma colectiva una visión de futuro. Esta dimensión tomó sustancia y forma en la construcción participativa de planes de vida y planes de desarrollo, componente que analizaremos en detalle más adelante en este capítulo.

En el trascurso del proyecto, Minga de Sueños, se ha fortalecido y la dinámica social que puso en marcha permitió pasar de 200 personas asociadas al inicio del proyecto a más de 2.000 al final (Torres, 2008, entrevista).

En el campo del fortalecimiento social, cabe mencionar igualmente el proyecto ejecutado por Atucsara, dirigido a las mujeres afrodescendientes del Alto Patía. Ha trabajado con una población doblemente vulnerable y excluida, en la medida que incide sobre todo en mujeres de raza negra. El proyecto se centró en el fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria de las mujeres afropatianas dentro de un enfoque de género y de desarrollo sostenible. Benefició a más de 800 mujeres en un proceso que vio la formación de un número significativo de mujeres y que ha contribuido para el rescate de un tema que es a la vez cultural, político y étnico (Ramírez, 2008, entrevista).

## *Los proyectos y procesos de fortalecimiento institucional y democracia participativa*

El campo del fortalecimiento institucional, tal como en el primer laboratorio de paz, se figuró como uno de los núcleos centrales de los proyectos, procesos e iniciativas del laboratorio de paz en el marco del segundo eje. Asimismo, las modalidades de intervención, los impactos y bloqueos son similares a los del Magdalena Medio.

En el intuito de incrementar la gobernabilidad y la participación ciudadana en las regiones, el laboratorio de paz se enfocó fundamentalmente en tres áreas de intervención: el involucramiento de las poblaciones en la elaboración colectiva de planes de desarrollo (regionales y municipales) y de ‘planes de vida’, la puesta en marcha de presupuestos participativos y la rendición pública de cuentas. En principio apunta al fomento de un nuevo tipo y sentido de gobernabilidad en las regiones, con base en la creación de un espacio de concertación y diálogo entre lo público y lo privado, y la construcción de una democracia participativa.

Por democracia participativa se entiende el sistema y práctica políticos, en que los ciudadanos son parte central y nuclear de la gestión de la *res pública* y participan

activamente y de forma directa en la vida política. Se distingue de la democracia estrictamente representativa, que Sousa Santos (2003, p. 27) describe como “una democracia de baja intensidad”, asiente en la privatización del bien público por las élites, en la distancia entre los representantes y representados y en una inclusión política abstracta cargada de exclusión social, en la medida en que el proceso de toma de decisiones tiene por base la participación pública y este ejercicio no es delegado a un representante. Implica un ideal participativo, una inclusión política que no es meramente formal, una extensión de la ciudadanía y contratos sociales más inclusivos que posibilitan una democracia de más alta intensidad (Sousa Santos, 2003, p. 27). Está asociada generalmente a procesos sociales mediante los cuales se levantan temáticas usualmente marginadas o ignoradas por el sistema político, se redefinen las identidades y se asiste a un aumento y profundización de la participación política, cívica y social (Sousa Santos y Avritzer, 2003, p. 51).

El laboratorio de paz ha respaldado e implementado diversos proyectos y procesos en estos ámbitos, con miras a la profundización del sistema democrático y del Estado social de derecho a nivel local y regional, y a la inclusión de los pobladores y las comunidades históricamente excluidas en la vida política local y departamental (Guarín, 2008, p. 3). En particular, ha fomentado la integración de las poblaciones en la definición de las políticas públicas (Bouchier y Barme, 2008, p. 79), contribuyendo para su conversión en ciudadanos plenos.

Se parte de la perspectiva que la participación de la población y la profundización de la democracia es una vía fundamental para la paz (Guarín, 2008, p. 5). Henry Caballero (2008b, entrevista), coordinador del eje 1 del laboratorio y popularmente considerado uno de los ideólogos del CRIC, vehicula este punto de vista de la siguiente forma: “la paz no se consigue hablando de paz o sacando banderitas blancas, o haciendo solo pedagogía, a pesar de ser necesario. Si logramos una sociedad dinámica y participativa, una democracia local consolidada estamos aportando más a la paz”.

Como planteado por Wallensteen (2002, pp. 286-287), no solo los regímenes democráticos son históricamente más pacíficos entre sí, y la falta de acceso de determinados grupos sociales al poder político se figura como una importante raíz de los conflictos, desde luego en el caso colombiano, sino que las instituciones democráticas son medios privilegiados de resolución y transformación de conflictos. Por consiguiente, un enfoque estructural e inclusivo para la paz, como el planteado

por el laboratorio de paz, presupone el apoyo a las instituciones democráticas y la promoción de los derechos humanos.

Pero en juego está no solo el proceso electoral en sí mismo como base de la democracia a nivel local, regional y nacional, pero todo un *ethos* y práctica política democrática con base en la igualdad de oportunidades y la buena gobernación (Wallenstein, 2002, pp. 286-287); en otras palabras, está en juego la transformación de las instituciones.

La democracia participativa, vista como esencial para la construcción de una paz positiva, implica ajustes en las prácticas, procedimientos políticos y el diseño institucional clásico y convencional de las democracias (Sousa Santos, 2003). Y es en este sentido que se direccionan los proyectos del laboratorio de paz en el ámbito del fortalecimiento institucional.

Es un trabajo de base en el sentido de “democratizar la democracia” (Sousa Santos, 2003), de modificar no solo el contenido de las políticas públicas a nivel local y regional, sino el proceso de construcción y toma de decisión. Se busca cambiar la cultura política local en la cual cada alcalde o gobernador “son pequeños reyezuelos” (Ruiz, 2008, entrevista) para una cultura política de la responsabilidad, de la presentación de cuentas a los ciudadanos, del servicio público.

Mediante diversos proyectos en esta área, el laboratorio de paz ha contribuido, en cierto grado, a romper con las prácticas tradicionales en la región de clientelismo, paternalismo, ‘politiquería’ y corrupción, al estimular nuevas formas de relaciones entre los ciudadanos y los gobernantes y crear y respaldar ejercicios participativos como los presupuestos participativos, los planes de desarrollo municipal y los planes de vida (Bouchier y Barme, 2008, p. 81).

Los cambios en la cultura política son visibles en las palabras de un líder comunitario de Nariño, participante del proyecto de la Red de Justicia Comunitaria, que cuenta que, frente a la necesidad de suplir la falta de un médico en la comunidad, se acercaron colectivamente al alcalde y dijeron “Señor Alcalde, nosotros no le estamos pidiendo el favor, le estamos exigiendo... y ahora el médico tiene que venir cada quince días”.

Se aporta un grano de arena en el proceso de reducción del abismo entre las ‘dos Colombias’ y de construcción de una democracia participativa, que no se basa en las jerarquías verticales de la democracia parlamentaria formal, sino en procesos horizontales a varios niveles, que abarcan un amplio abanico de relaciones, desde las económicas, a las políticas, sociales e incluso ecológicas (Jeong, 2000, p. 315).

En esta medida, el fortalecimiento institucional preconizado por el laboratorio de paz, especialmente en la perspectiva de las organizaciones sociales de base, no es un fortalecimiento de las instituciones que sirviera a los intereses de las élites locales y nacionales y escondiera las diferencias de poder e interés entre los sectores sociales. Es el mismo espacio social democrático que está siendo construido. El laboratorio de paz ha buscado promover el cambio estructural y la democratización de las instituciones y no preservar el *status quo*.

Esta perspectiva va igualmente al encuentro de la visión y motivaciones políticas de la UE en la iniciativa. Como es reconocido explícitamente por el Documento Estrategia País de la CE (Comisión Europea, 2007, p. 31), el énfasis en la participación del Estado en la experiencia ha sido pensado como una forma de transformar las instituciones y las políticas públicas del gobierno colombiano para extender y completar su enfoque exclusivamente centralizado en cuestiones de seguridad *tout court*, en una concepción y una presencia del Estado en el territorio que abarcara un componente social, y de servicios públicos.

El apoyo al tema del fortalecimiento institucional se hizo particularmente a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública (Fonfip), que se asumió como una estrategia al interior del laboratorio para consolidar la gobernabilidad y dirigir fondos a las instituciones públicas, dedicados al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones del Estado.

Se encuadran en este ámbito, el proyecto “Fortalecimiento de la institucionalidad pública en el nivel departamental y local a través del impulso de las políticas de atención, prevención y promoción de los DDHH y DIH en un horizonte de descentralización, participación ciudadana y coordinación institucional”, ejecutado por las gobernaciones de Nariño y Cauca; el proyecto “Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales del Cauca para el diseño de estrategias de articulación de la oferta nacional e internacional con las demandas de proyectos locales y departamentales”, implementado por la gobernación del Cauca, y el proyecto “Laboratorio de desarrollo institucional y gobernabilidad pública territorial”, puesto en marcha por el DNP.

Estos proyectos respondieron a una solicitud del gobierno que buscaba que no se apoyara solo procesos de la sociedad civil, sino también a las instituciones del Estado y denotan una articulación clara del laboratorio con la institucionalidad local y regional, que pretende integrar en sus procesos políticos y sociales de construcción de paz.



En este marco, asume particular valor y relevancia el proyecto de fortalecimiento institucional en el tema de derechos humanos y DIH ejecutado por las gobernaciones del Cauca y Nariño. Este proyecto trabajó directamente con las instituciones de los departamentos de Nariño y Cauca, como la secretaría de gobierno, las personerías municipales, y la defensoría regional del pueblo, en términos de formación de los funcionarios en temas de derechos humanos, DIH y apoyo sicosocial y jurídico a las víctimas.

El proceso de formación incidió en la conceptualización de los derechos humanos y DIH, y en la generación de conocimiento en torno a los temas de la ciudadanía, la presupuestación participativa, la rendición pública de cuentas y la protección del Estado frente a los civiles (Portilla, 2008, entrevista). Se definió no solo para impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, sino para aprovechar los mecanismos existentes en el marco de un régimen que, a pesar de todas sus imperfecciones y limitaciones, es democrático y dispone de instituciones y mecanismos que pueden ser aprovechados por los ciudadanos. Este fue uno de los propósitos fundamentales del proyecto, tal como de las demás iniciativas en esta área.

Se trabajó con las comunidades y los líderes sociales el manejo de herramientas, como el derecho de petición (Portilla, 2008, entrevista), que en un escenario periférico como el de las veredas del Cauca y Nariño, es desconocido en la mayoría de los casos; a acceder a la defensoría del pueblo en el caso de problemas derivados del conflicto armado, tales como señalamientos y asesinatos; y también a recurrir a las instancias internacionales de protección a los derechos humanos. Hoy muchas de estas comunidades son conscientes de la existencia de estos mecanismos, de quién debe proteger sus derechos, y como señala Paola Portilla (2008, entrevista), “no se sienten tan solas, como pasa usualmente”.

Estos gestos y formación son de una importancia determinante en el sentido del perfeccionamiento de una democracia limitada, y de la construcción de la paz positiva desde la base. El hecho de que muchos pobladores se concienticen sobre sus derechos en el marco de la ley, que personeros empiecen a trabajar en comunidades donde nunca se había visto un personero, es en sí mismo de un valor político enorme y configura microprocesos de construcción del Estado y fortalecimiento de la democracia, esenciales para una paz positiva.

El tema de los derechos humanos y del DIH es sin embargo, particularmente sensible y delicado en el contexto del conflicto armado. Como señaló un personero



involucrado en el proyecto “es muy difícil llegar a algunos municipios y hablar de derechos humanos”. Este es un tema que hostiga y es visto directamente como una amenaza por los actores armados. De igual forma, en ciertas localidades de la cordillera no se permite que se reúnan más de cinco personas, lo que casi inviabiliza cualquier proceso social o comunitario.

Así que hay obstáculos a la construcción de paz positiva que son impuestos por la realidad de ausencia de paz negativa, es decir, por la falta de existencia de condiciones mínimas de seguridad. Si bien la situación en el Cauca y Nariño evidenció una cierta mejoría en las cabeceras municipales, en los corregimientos y las veredas más remotas, la realidad es otra. De hecho, como señaló un participante del laboratorio, “la seguridad democrática en realidad no es democrática, porque no llega a todos los sectores de la población, solo a las vías principales”. En una gran parte de las veredas, los actores armados están imponiendo su ley y códigos de conducta, lo que dificulta muchísimo los procesos del laboratorio, especialmente en temas como los derechos humanos y el apoyo a las víctimas.

Frente a este escenario, en ocasiones la construcción de paz reviste elementos de ‘realismo mágico’ y exige una maleabilidad y juego de cintura por parte de las organizaciones de base a fin de abarcar la geografía del conflicto y los grupos armados. Una directora de organización de base refiere que “dónde había guerrilla no se ingresaba con los emblemas de Acción Social, donde estaban los paramilitares no con los de la UE. Nos hicimos los pendejos”.

En el ámbito del fortalecimiento institucional se desarrolló también el proyecto “Producción agroambiental y gobernabilidad en sur del Cauca” desarrollado por el Cindap (Cooperación para la Investigación y el Desarrollo Agropecuario).

A pesar de que el enfoque de la organización recae sobre todo en temas agroambientales y de desarrollo comunitario, en particular en el fomento de fincas orgánicas, el proyecto implementado en el marco del laboratorio de paz incidió en el fortalecimiento de procesos de gobernabilidad y democracia local a partir de 295 familias beneficiarias. Ha buscado construir y fortalecer a nivel local una democracia participativa mediante iniciativas de participación comunitaria y de fortalecimiento del tejido social. Retomo, en particular, lo que llamaron ‘veedurías ciudadanas’, procesos en que, a partir de la comunidad, se fomentó la transparencia y el control en el manejo de los recursos públicos, así como la elaboración de planes de desarrollo con las alcaldías (Bouchier y Barme, 2008, p. 60).

Se han alcanzado algunos frutos de bastante importancia en el marco de estos procesos. Fundamentalmente, han contribuido para la integración de poblaciones y comunidades históricamente excluidas en la vida política local y departamental, y su inclusión en la definición de las políticas públicas a nivel local (Bouchier y Barme, 2008, p. 79), lo que configura un ejercicio de construcción del Estado social de derecho a nivel local y regional.

De especial relevancia en este campo ha sido la inclusión en la agenda política de muchos candidatos a las alcaldías del norte de Nariño y del sur del Cauca en las últimas elecciones municipales, de procesos de formulación de presupuestos participativos. Este elemento es indiciador de un cambio en la forma de hacer política y de una ‘horizontalización’ de la relación entre las gobernaciones y su electorado (Daza, 2008, entrevista).

Otro ámbito de mucha importancia son los procesos de rendición de cuentas públicas por parte de las alcaldías, que están también contribuyendo a la transformación de las relaciones entre los gobernantes, la clase política y la población. Cristina Vallejo (2008, entrevista), coordinadora del eje 2 del laboratorio, señala que estos procesos se volvieron verdaderas “fiestas de la democracia”, en que han participado centenas de personas y vienen incluso escuelas a asistir. Asimismo, refiere que en el municipio de Arboleda en una ocasión, se detectó un robo en una rendición pública de cuentas y la comunidad se rebeló contra la situación, lo que es una evidencia de un empoderamiento político de la población y una señal de los aportes significativos de los procesos políticos y sociales de base del laboratorio.

Hay un camino recorrido en el sentido de la democratización desde la base del sistema político en Colombia, del ‘pasar del gobernante rey solo, al gobernante servidor’ y del acercamiento del Estado a la comunidad (Vallejo, 2008, entrevista). En principio, está el fomento de un nuevo tipo y sentido de gobernabilidad, con base en la creación de un espacio de concertación y diálogo entre lo público y lo privado, y de una institucionalidad pública que respeta las normas constitucionales y los principios democráticos.

En este ámbito, el laboratorio de paz figura como un instrumento privilegiado de apoyo a la consolidación en el territorio del Estado social de derecho y de la democracia participativa, principios proclamados en la Constitución del 1991, pero apenas reconocidos formalmente (DNP, 2008, p. 10). Paulatinamente, se puede

poner en marcha un proceso en las regiones de generación de confianza en las instituciones y el Estado, elemento vital para un país en paz.

Sin embargo, hay que señalar que los aportes del laboratorio de paz en la región han sido superiores en lo que concierne al empoderamiento de la sociedad civil en temas públicos y su interlocución con la institucionalidad, que en la generación de cambios en las modalidades de gestión de las autoridades locales y regionales y en la incidencia en las políticas públicas. Tanto el poder central como local son muy celosos de su autoridad y están presos de modelos y vicios arraigados de funcionamiento interno y de prácticas políticas clientelares de relación con los ciudadanos (Bouchier y Barme, 2008, p. 79). En esta medida, son reacios a un cambio en sus prácticas, concepciones y modalidades políticas de intervención, lo que resultó, en muchos casos, en un bajo nivel de diálogo e impactos reales de los proyectos.

Hay retos grandísimos a este nivel, en un país permeado por un centralismo arrollador, que se traduce en una gestión política centrada en las élites nacionales y regionales y en un abismo tremendo entre el centro político y económico y las periferias sociales, que ha alimentado el conflicto armado, y generando desconfianza mutua entre los dos niveles.

Asimismo, si con las gobernaciones de Floro Tunubalá en el Cauca o Parmenio Cuellar y Antonio Navarro Wolff en Nariño, el laboratorio encontró en el poder departamental un apoyo y un interlocutor atento y receptivo, como ha sido previamente subrayado, con la gobernación de Juan José Chaux en el Cauca se enfrentó un obstáculo político de fuertísimo peso.

De hecho, la relación e impacto de estos proyectos de base con la institucionalidad local y departamental es contingente a elementos circunstanciales, como la personalidad y apertura política de quién esté en la dirección de la alcaldía o gobierno departamental. En esta medida, los procesos sociales y políticos en este ámbito funcionan como un mecanismo incierto, con avances y retiros, lo que no configura verdaderamente impactos y procesos sustentados y sostenibles.

## Los planes de vida

El laboratorio de paz ha buscado promover y consolidar, no solo los canales tradicionales del sistema político colombiano mediante proyectos en el ámbito del fortalecimiento institucional, sino mecanismos alternativos, desarrollados en el marco de la sociedad civil y de los grupos étnicos. La debilidad y descrédito de los

canales convencionales de participación, representación y mediación política en Colombia, minados por la corrupción, la polarización y las redes clientelares, lleva a que se encuentren en los espacios de participación comunitaria estructurados a partir de la sociedad civil, alternativas viables para la profundización de la ‘democracia limitada’ colombiana e instrumentos para combatir la exclusión política.

En este marco, uno de los elementos fundamentales de la puesta en marcha de una metodología participativa en el Cauca y Nariño, propia del territorio, son los llamados planes de vida. Estos constituyen maneras de planificación del desarrollo a largo plazo construidas de una forma comunitaria. Son en su origen, de concepción indígena. Aparecen por primera vez en 1987 en el Cauca como una iniciativa desarrollada por el pueblo guambiano, siendo posteriormente adoptados por otras comunidades indígenas y campesinas.

Un plan de vida es un proceso social y comunitario que plantea una estrategia a largo plazo para el desarrollo integral de un resguardo indígena (o una comunidad campesina o afrodescendiente), que toma en cuenta elementos que van más allá de la estricta dimensión económica de los planes de desarrollo convencionales y se enfoca en todos los aspectos de la sociedad y cultura indígena (Gow, 2005, p. 68). Es un ejercicio colectivo de diagnóstico que se proyecta en el futuro y presenta una visión para el futuro. Jaime Ledezma (2008, entrevista), uno de los líderes sociales de Nariño, refiere que “en los planes de vida se construyen sueños colectivos”. Es una construcción colectiva del territorio, de la gestión de la vida en comunidad, en una óptica fundamentalmente subregional y municipal.

Los planes de vida han sido planteados desde las comunidades indígenas del Cauca también como instrumentos de paz, desde una construcción comunitaria (Palechor, 2008, entrevista). De hecho, la concepción indígena de paz pasa por una visión integral y holística de la sociedad y la comunidad, que integra temas culturales, sociales, económicos y políticos, como la salud, la educación, y los cultivos, y que implica una relación cercana y saludable con la tierra.

Como afirma Libio Palechor (2008, entrevista),

[...] algunos dicen que si cero guerrilla la cosa estaría bien; eso puede ser un punto importante, pero no soluciona los problemas, porque el problema de paz no es solamente un problema de tiros, es un problema de miseria, de falta de garantías territoriales, agrícolas, ganaderas, de producción, de muchísimas cosas [...] La

paz hay que construirla es integralmente; esas son las propuestas de los planes de vida: además de la paz, debe haber comida, buena educación, buena salud, por que se podría buscar un territorio donde no haya guerrilla, no haya paramilitares, no haya nada, pero la gente vive en un estado de miseria entonces no vive dignamente.

La metodología de participación de los planes de vida incluye generalmente una serie de talleres y encuentros comunitarios en cada municipio y un trabajo de base de meses (o años) en las veredas y corregimientos, en los cuales jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, líderes comunales y productores campesinos, están invitados a pensar y planear entre todos el territorio de manera colectiva, y a participar, dialogar y expresar sus opiniones sobre los problemas que afectan a la comunidad (Gow, 2005, p. 86; Minga de Sueños, 2006, pp. 4-5). El proceso de formulación de un plan es por lo tanto, lento e implica un trabajo de base profundo con las comunidades (Palechor, 2008, entrevista).

Los planes de vida se distinguen de los planes de desarrollo convencionales, no solo en su metodología y formulación, sino en su concepto y perspectiva. Tienen una visión y un horizonte de mediano y largo plazo, que puede ser de varias décadas, a diferencia del periodo estrecho de cuatro años de los planes de desarrollo. Por lo demás, no tienen un carácter meramente administrativo. La matriz endógena y participativa de la formulación de los planes de vida también los diferencia de los planes de desarrollo, que a menudo son documentos ajenos al territorio elaborados por asesores distantes de la realidad de las regiones (Minga de Sueños, 2006, p. 18). Los planes de vida se estructuran con base en la participación social, que se concibe aquí como un espacio y una herramienta para el desarrollo humano, integral y sostenible (Minga de Sueños, 2006, p. 4).

Su metodología, enfoque y horizonte temporal contrastan claramente con los planes de desarrollo basados en nociones occidentales de desarrollo (Rappaport, 2005, p. 15). Gow (2005, p. 67) los describe como formas de contra-desarrollo, una vez que contradicen el discurso y la práctica dominante desarrollista y las actuales políticas neoliberales. El autor sostiene que estas ideas y propuestas que emergen desde las comunidades indígenas son una amenaza para el Estado, en la medida en que “no solamente proponen conceptos que son ajenos”, sino también “cuestionan los principios básicos del desarrollo como es entendido convencionalmente” (Gow, 2005, p. 88). Además,

parten del concepto holístico de desarrollo que siguen las comunidades indígenas, que no compartimenta la salud, la educación, el medio ambiente, la cultura, etc., y los ve en su integralidad, como parte de un marco más amplio.

Pero hay que subrayar que, más que los planes en sí que conciben, y que los documentos que producen, el valor fundamental de estos planes está en los procesos sociales de participación social y política que generan. Hay un carácter por veces intangible de los planes de vida, que es la dinámica social que fomentan, la experiencia colectiva e individual que propician, las transformaciones en las mentes y la cultura política que estimulan, elementos que pueden ser más profundos e impactantes que el resultado y destino final de los planes, que suelen no traslaparse con los planes de desarrollo de cada municipio y no impactar las políticas públicas (Ledezma, 2008, entrevista). Como señaló un integrante del Movimiento Social de la Cordillera, “los planes de vida, si no tienen una población que los dinamice, son un documento”. Su valor reside fundamentalmente en la dinámica participativa que los sostiene.

Los planes de vida, a pesar de que sean en su base y génesis instrumentos indígenas, han servido también de modelo a otras comunidades no indígenas, tanto en el Cauca, como en Nariño, al ser aplicados, replicados y adoptados por grupos campesinos y afrodescendientes con respaldo, en algunos casos, del laboratorio de paz o de organizaciones vinculadas al mismo, como Fundación Social, Suyusama, Corfeinco, Fundecima y Funcop. Ahora hay que señalar, que si bien los Planes de Vida funcionan plenamente en el contexto de las comunidades indígenas y de la interacción entre su cosmovisión y la realidad actual, la aplicación de este modelo en las comunidades mestizas y negras ha resultado más difícil y ha producido menos frutos (Katz, 2008, entrevista).

De igual forma, los planes de vida han servido de referente en algunos casos, aunque de manera limitada, para los planes de desarrollo departamentales y municipales, lo que evidencia un claro impacto institucional de estos instrumentos. De hecho, los planes de vida hacen hoy parte de la agenda política de las regiones y los municipios. Actualmente en Nariño, por lo menos, trece municipios cuentan con planes de vida (Albornoz, 2008, entrevista). Esto puede ser un elemento de una importancia enorme en el sentido de la construcción de una vía propia de desarrollo y de paz desde las regiones. Los planes de vida tienen en cuenta la particularidad y las características distintivas del territorio y sus poblaciones, y la especificidad y diversidad étnica y cultural de la región. Configuran ‘economías propias’, es decir

modelos endógenos de desarrollo, concebidos desde las necesidades particulares de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas (Gómez, 2008, entrevista). Permiten una construcción más integral, legítima y sostenible del desarrollo, pues parten de la participación de toda la comunidad, desde sus experiencias, vivencias, aspiraciones, necesidades, potencial y sueños. Es el “modelo de desarrollo que socialmente se quiere construir” (Minga de Sueños, 2006, p. 11).

Sin embargo, hay que subrayar que, a pesar de la ruta ya recorrida por estos procesos protagonizados por los planes de vida, y de su potencial transformador, estos involucran una fracción pequeña de la población y encierran un impacto limitado en las instituciones y políticas públicas. De igual forma, la incidencia de estos procesos en la institucionalidad pública se ve restringida. Como señaló un líder comunitario de El Tambo, refiriéndose al caso de su municipio, “lo que estaba en el plan de vida era el sueño. Pero no se logró que fortaleciera la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. El alcalde no lo tomó en consideración”. Los planes de vida confieren a las comunidades posibilidades y herramientas de negociación con la institucionalidad con base en propuestas concretas, estructuradas y consolidadas, pero no son en sí mismo una garantía de éxito o de implementación.

El caso específico enunciado para el municipio de El Tambo evidencia los riesgos y obstáculos con que se enfrentan estas experiencias. Los procesos sociales y la institucionalidad a menudo siguen caminos con sentidos opuestos. En este marco, si los procesos de empoderamiento y participación de las comunidades no logran tener un eco en la institucionalidad y se vuelven proyectos y planes de desarrollo específicos, como señala Mendoza (2008, entrevista), encierran el riesgo que ser tan solo “un discurso bonito, pero nada más”. Es un reto grandísimo con que se enfrentan estos procesos sociales y que atraviesa toda la actividad y dinámicas de los laboratorios de paz.

En el marco específico de los proyectos del segundo eje del laboratorio de paz, se ejecuta un proyecto de fortalecimiento al plan de vida de la comunidad indígena Yanacona, uno de los ocho grupos indígenas presentes en el Cauca (situado específicamente en la zona del Macizo Colombiano).

## *Cultura y medios de paz*

Por último, hay que mencionar “Palabrar”, un proyecto que utiliza las radios como medio de intervención social y herramienta de construcción de una cultura de

paz. La iniciativa ha sido implementada por el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, una ONG que lleva varios años de trabajo en la región en temas de desarrollo humano, a través de la formación audiovisual, y del trabajo con las emisoras comunitarias e indígenas en la región.

Palabrar es una iniciativa de trabajo sobre la construcción de lo público y la movilización ciudadana, a través del uso de la herramienta radial y de la articulación de los distintos actores de la comunicación del departamento, a través de una red de comunicación. Tiene como eje de trabajo “la cultura, la comunicación y el desarrollo humano” e interviene en cinco municipios de Nariño y un municipio del Cauca (Montenegro, 2008, entrevista).

Vehicula un concepto sistémico de los medios de comunicación, como parte de la esfera social y de lo público e instrumentos integradores de lo económico, lo político y lo educativo. Como señala Gustavo Montenegro (2008, entrevista), coordinador del proyecto, se busca que los locutores y reporteros sean más que todo “investigadores de la realidad social de sus municipios” y que, a partir de esta, puedan “buscar la forma de movilizar a esas comunidades”. Las emisiones radiofónicas sirven de puente para mirar y pensar el municipio y las problemáticas políticas y sociales locales que afectan a la población, tales como el agua, los recursos, los cultivos, el ambiente, etc. En ese sentido, Palabrar recoge el sentimiento de las comunidades y permite una identificación de estas con las emisoras.

Se vuelven por lo tanto medios de construcción de lo público. Permite que la gente empiece a acercarse de otra forma a su territorio, a sus relaciones cotidianas y participe de forma distinta en la gestión política de la *res pública*. Es un proceso de construcción de ciudadanía y democracia, de generación no solo de un espacio público, sino de un *ethos* democrático y una cultura de la paz. Indica caminos concretos sobre cómo se pueden abordar los territorios más marginados y marcados por la violencia armada y estructural, y construir ciudadanía en los sectores rurales. No es un proceso de llegada, pero es un proceso de partida y de horizonte de paz, en el sentido amplio y positivo del término.

En esta medida, los frutos y resultados de este proyecto en Nariño y en el Cauca son en mucho similares a los de Aredmag y otras emisoras comunitarias del Magdalena Medio. Palabrar se ha vuelto un vehículo y una herramienta para que “la comunidad empiece a leer su realidad social, a reaccionar sobre qué busca, y qué relaciones debe establecer con la institucionalidad” (Mora, 2008, entrevista), pero



también un instrumento para cambios individuales en la cultura política y social de cada uno. Como refiere Gustavo Montenegro (2008, entrevista), “cuando un campesino que estaba simplemente dedicado a su jornal y a su vida cotidiana y de un momento a otro empieza a hacer radio y dice – “a mi Palabrar me cambió la vida!” – ahí se pasaron cosas”. Más que los indicadores audiométricos de la audiencia y que los impactos cuantificables de este proyecto, esta es un señal de profundo simbolismo del potencial que encierran proyectos como este. La construcción de las fundaciones de la paz empieza por el proceso intrapersonal de transformación de cada uno y, en este ámbito, iniciativas como Palabrar demuestran el potencial transformativo del laboratorio de paz y de la fortaleza de las ideas en un contexto de armas.

No obstante, hay que señalar que los grados de motivación y niveles de participación no son lineales y la experiencia del laboratorio de paz ha sido a menudo vista en el territorio como tan solamente una ‘gallina de los huevos de oro’, una oportunidad de recursos que podía ser aprovechada. Esta situación es ejemplificada por Gustavo Montenegro (2008, entrevista) que señala que, en el inicio del contacto del Fondo Mixto de Cultura con las emisoras comunitarias del territorio, se presentó en varias oportunidades que el principal foco de interés de los directores de las emisoras en la iniciativa, se situaba en las cifras que el proyecto les podría aportar, más que en el potencial de los procesos sociales del laboratorio.

Este caso denota el riesgo común en proyectos de cooperación al desarrollo de perpetuación de redes clientelares y de la cultura del asistencialismo, en detrimento del empoderamiento y de la emancipación social que se pretenden construir. Es una anécdota ejemplificadora de los enormes retos culturales a que el laboratorio de paz ha enfrentado en el territorio y de las prácticas sociales arraigadas en la cultura política de la gente, que toca abordar e incidir, con miras a la creación de una cultura de paz.

De hecho, como también se subrayó en el caso del Magdalena Medio, el laboratorio de paz no es un ser ajeno a su contexto y los vicios de una sociedad como la colombiana también lo tocan y atraviesan, sea de forma más suave o profunda.

Un episodio contado por Aidé Ramírez (2008, entrevista) demuestra hasta qué punto también la sociedad civil es un espejo de la sociedad y cultura en que se inserta. Cuando, en el marco de la plataforma de organizaciones sociales que convergieron en el apoyo a Floro Tunubalá en el Cauca, la organización de mujeres Atucsara se acercó al movimiento y expresó su voluntad de integrarlo, su inclusión se dio en

condiciones desiguales. No fueron reconocidas como pares en la alianza, y les fue incluso comentado insólitamente que si querían colaborar que vinieran a limpiar la sede de la candidatura, traduciendo el rol social que se espera que sea atribuido a las mujeres. Es un ejemplo de violencia cultural, en este caso específico de la cultura patriarcal predominante en Colombia, que también atraviesa los procesos sociales que sostienen el laboratorio y evidencia los límites de emancipación social que la sociedad civil encierra. De hecho, la paz y la violencia no son la negación, una de la otra, en la generalidad de los casos, se cruzan, se mezclan y se tocan, tal como el yin y el yang (Galtung, 1996, p. 16), como se puede ver en este mismo ejemplo<sup>13</sup>. Esta anécdota encierra por lo demás una gran importancia simbólica y cultural, en la medida en que la violencia armada es construida y legitimada a partir de las construcciones sociales de la masculinidad que tienden a valorizar el ejercicio de la violencia y de la dominación (Pearce, 2007, p. 19).

Hay una violencia cultural arraigada en Colombia que alimenta estructural y cotidianamente el conflicto armado en el país, que pasa por el centralismo, el clientelismo y el caudillismo en las relaciones políticas y económicas, por el machismo de las relaciones sociales, y por la cultura de la ilegalidad. Sin tener este escenario y realidad en cuenta, cualquier iniciativa de resolución de conflicto en el país está condenada al fracaso.

### Eje III: Desarrollo socio-económico sostenible en armonía con el medio ambiente. La dimensión socio-económica de la construcción de la paz

El tercer eje del laboratorio de paz incidió sobre la dimensión socio-económica de la construcción de la paz. Integró fundamentalmente proyectos y procesos

---

<sup>13</sup> Un relato de Javier Moncayo (2008, entrevista) nos da igualmente un retrato cabal de esta realidad. Refiere que una vez en Norte de Santander lo recogieron en un carro del laboratorio y en el camino este se paró en un sitio en donde venden gasolina de contrabando y se tanqueó el carro. Es una anécdota sintomática del grado de infiltración de la ilegalidad en el país, que toca incluso a los que supuestamente están luchando por construir el Estado de derecho, la cultura de legalidad y la economía lícita. Evidencia igualmente el grandísimo reto con que se enfrentan los laboratorios de paz y la construcción de la paz positiva en Colombia, y como esta exige necesariamente un horizonte de trabajo prolongado y complejo.

productivos y de cariz económico, pero que integraban componentes políticos, culturales, ambientales, de derechos humanos y gobernabilidad democrática, bajo un enfoque integral y una articulación y complementariedad con los demás ejes del laboratorio.

Fue un eje notoriamente direccionado para el campesinado y los sectores rurales que se enfocó sobre todo en el tema de la exclusión económica y en la generación de propuestas y procesos de desarrollo incluyente, humano y sostenible desde el territorio. Configuró microprocesos de desarrollo como parte de una estrategia de inclusión de los sectores sociales históricamente marginados en las regiones del Cauca y Nariño y de construcción de un modelo político y socio-económico distinto en las regiones, que sostenga la construcción de una paz positiva.



**Proyecto de café orgánico, Cosurca, Pasto, 2008**

*Fuente: Miguel Henriques*

Se incluyeron en este eje un amplio grupo de proyectos con contornos y modalidades de intervención diferentes: desde proyectos productivos que promueven la economía solidaria, programas de seguridad alimentaria, iniciativas de construcción

o regeneración de infraestructuras sociales y productivas, procesos de desarrollo alternativo a los cultivos de uso ilícito, proyectos enfocados en el manejo ambiental sostenible y la conservación de los recursos naturales, programas de fortalecimiento de los microcircuitos económicos locales, y proyectos de apoyo, fortalecimiento y capacitación a organizaciones de base (Bouchier y Barme, 2008, p. 70). En su mayoría, eran proyectos productivos, que incidían en la producción de distintas líneas y siembras con tradición y potencial económico en las regiones del Cauca y Nariño, como es el caso del café, las frutas, el cacao y la panela.

Los proyectos se han enfocado esencialmente en la mejoría de la productividad y de la calidad de la producción y en el fortalecimiento de las organizaciones de base, mediante la capacitación técnica de los productores, formación en gestión empresarial, mejoría de la infraestructura productiva, y la introducción de técnicas de producción verdes, con miras al aumento de los niveles de ingresos de los productores, pero también a su empoderamiento ciudadano (Bouchier y Barme, 2008, p. 70).

Fue el eje de mayor dimensión del segundo laboratorio, tanto en términos de los recursos financieros y humanos que involucró, como de los proyectos que ejecutó. En la región del Macizo Colombiano se implementaron 27 proyectos en este ámbito (Bouchier y Barme, 2008), los cuales estaban direccionados y estructurados esencialmente para grupos sociales vulnerables. La gran mayoría de los beneficiarios del laboratorio fueron campesinos, pero también tuvieron bastante relevancia los proyectos dirigidos a mujeres<sup>14</sup>.

Un proyecto con este tipo de propósitos fue ejecutado por Fedepanela, una organización nacional de pequeños productores que tiene expresión regional en el sur del Cauca. Este proyecto benefició aproximadamente dos centenas de personas y se concentró en la mejoría de los procesos y condiciones productivas de panela, con el fin de obtener mayores niveles de rentabilidad y de sostenibilidad ambiental. Pretendía cambiar la cultura de producción de los paneleros a través de un cultivo limpio, con base en la utilización de fertilización orgánica, y de un trabajo asociativo que integrara y aliara los pequeños productores de caña del sur del Cauca, en una zona en donde predominan los minifundios que no suelen superar la media hectárea.

<sup>14</sup> Fue el caso de la iniciativa “Cadena panelera orgánica del Patía”, ejecutado por Asprepatía, un proyecto en el Cauca que incide en la producción, transformación y comercialización de panela, por intermedio de pequeños grupos de mujeres (Bouchier y Barme, 2008, p. 71).

El proyecto tenía como objetivo desarrollar y poner en marcha estrategias para que se generen ingresos para los campesinos que puedan ser utilizados a favor de su bienestar y de sus familias (López, 2008, entrevista). En la perspectiva de este proyecto y del enfoque económico del laboratorio de paz, ya presente en el caso del Magdalena Medio, el incremento de los ingresos de los campesinos es visto como esencial para generar estabilidad y seguridad en las comunidades y familias campesinas y alejarlas de las dinámicas de violencia y desplazamiento. Es un planteamiento que se encuentra en la intención de la propuesta económica de los laboratorios de paz. Se busca elevar la calidad de vida de los campesinos y sectores sociales marginados, para que no tengan que vivir de lo que el padre Rafael Castillo (2008, entrevista) llama “los milagros cotidianos”. Se fomenta un proceso de formar empresa en los campesinos y organizaciones de base, con miras a incrementar sus ingresos, capacidad económica y aprovechar el potencial del mercado.

Es una concepción económica que va más allá del modelo tradicional de cultivo campesino, de la economía de subsistencia, así como de las propuestas anti-capitalistas, pero que busca un desarrollo con equidad, sostenibilidad ambiental y un rostro humano, y no relega la economía y el desarrollo a ‘la mano invisible’ del mercado. En esta medida, tal como hemos planteado para el caso del primer laboratorio, es una concepción que se acerca a una propuesta económica social-demócrata, que se plantearía como una vía intermedia entre el modelo neoliberal vigente y preconizado por las elites gobernantes en el país, y el modelo anti-capitalista abogado por la insurgencia y la extrema izquierda.

Pero estos proyectos no se limitan a los componentes económicos y productivos, son complementados por dimensiones de otros ejes del laboratorio, específicamente de gobernabilidad, participación social y derechos humanos. En realidad, en gran medida los proyectos productivos del laboratorio de paz son una excusa y un medio para generar participación ciudadana o para promover los derechos humanos y cambios culturales.

En el marco del proyecto de Fedepanela, esta dimensión complementaria de la iniciativa, se implementó mediante talleres de capacitación y procesos de acompañamiento a las comunidades en liderazgo y resolución de conflictos.

Este último elemento reviste particular relevancia, pues incide de forma directa en el tema de la construcción de paz a nivel interpersonal y comunitario. Si, como señala Freddy López (2008, entrevista), el coordinador del proyecto, hace algunos

años, los conflictos “se arreglaban a machete, a bala o a puño, ya ahora es muy difícil que eso suceda”, se prioriza la vía del diálogo. Son microprocesos de construcción de paz y transformación del conflicto, que son pequeños aportes a la construcción paulatina de una cultura de paz. Sin estos cambios, que parten desde la base y desde las comunidades, la paz nunca será sostenible ni positiva.

Como señala Lederach (2003, p. 17), el sistema de relaciones es el espacio del cual emergen los conflictos y de la misma forma es el núcleo y el motor de los procesos de transformación a largo plazo. En gran medida, el laboratorio de paz es un espacio de generación y transformación de las relaciones humanas, en sus distintas dimensiones, desde la interpersonal a la económica, desde la política a la cultural.

También en el campo productivo, cabe mencionar la iniciativa desarrollada por la Fundación Sol de Invierno, una pequeña organización de base de inspiración católica marcada por la teología de la liberación. Ejecutó el proyecto “Acopios sociales y económicos para la paz”, que tenía como objetivo la atención y rehabilitación de poblaciones vulnerables, en particular, campesinos y jóvenes, y una población beneficiaria de más de 3.000 personas. El proyecto incidió en la promoción de una red de comercio justo para la región, y en el desarrollo de un centro de reeducación para niños y jóvenes en situaciones precarias y de riesgo. El perfil de los beneficiarios eran “niños que viven en conflictos con la ley”, que, según las palabras de Fanny Medina una de sus promotoras (2008, entrevista), “en realidad viven en conflicto consigo mismos”.

Había una consciencia manifiesta en el proyecto, patente en las palabras de la coordinadora del proyecto, de la dimensión cultural de la construcción de la paz y de la herramienta poderosa que es la educación para la paz. Se buscó en este marco construir la paz a partir de las mentes de los jóvenes, creando condiciones culturales y económicas para que estos generaran otros proyectos de vida y se alejaran de opciones de riesgo como los cultivos de uso ilícito o la integración a los grupos alzados en armas.

Otra dimensión transversal a casi todos los proyectos del eje tres en el Cauca y Nariño fue el componente agroambiental. En varios proyectos se han estimulado las prácticas amigas del ambiente, la producción ‘verde’ y un manejo ambientalmente sostenible de los cultivos (Bouchier y Barme, 2008, p. 77). Esta ha sido, de hecho, una de las dimensiones más exitosas del laboratorio en esta área. Permitió una concientización de poblaciones y comunidades rurales respecto al tema esencial que es el medio ambiente y la sostenibilidad de sus actividades productivas.

Se trabajó, en particular, el tema de la organización de las microcuencas, la recuperación de suelos, la optimización del recurso del agua, y se implementaron técnicas agrícolas y agropecuarias más amigables con el ambiente, elementos que son esenciales para un desarrollo humano a largo plazo (Albornoz, 2008, entrevista).

Otra de las áreas de intervención del laboratorio en este campo, fue la reactivación de una economía lícita y la incidencia sobre la economía cocalera campesina, que ha tocado de forma tan aguda especialmente la región de Nariño (Bouchier y Barne, 2008, p. 75), mediante el respaldo a alternativas de cultivos lícitos y sostenibles.

En este ámbito se destacó el proyecto ejecutado por la Cooperativa de Caficultores del Sur del Cauca (Cosurca), una organización conformada por trece organizaciones de productores del Sur del Cauca y que integra simultáneamente comunidades y asociaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. El proyecto fue una de las iniciativas y procesos bandera del laboratorio de paz del Cauca y Nariño y que ha producido más frutos y mejores resultados. Incidió en el fortalecimiento de la capacidad de intervención de Cosurca en la región, específicamente en el apoyo a la producción, comercialización y exportación de café orgánico, pero también en el respaldo a las muchas actividades que esta asociación desarrolla en el campo social.

Esta es, de hecho, una organización con una plena consciencia de su rol político y social. Como señala René Ausecha (2008, entrevista), director de Cosurca, “no es una organización para mitigar las consecuencias de la guerra, es una organización para crear condiciones de vida para los campesinos, para sacarlos de la guerra y crear condiciones de vida”. Tiene como horizonte la construcción de una democracia que no sea solo electoral, sino abarque otras dimensiones, una democracia económica, social, cultural y ambiental (Ausecha, 2008, entrevista). En tal sentido fomenta dinámicas comunitarias y participativas en torno a asambleas, procesos de agremiación y de inversión comunitaria, que pretenden configurar una ‘construcción de democracia en la práctica’, así como procesos de capacitación y concientización política de sus asociados en temas como los derechos humanos.

Cosurca se fortaleció significativamente en el marco del laboratorio de paz. Se ha convertido en una organización de referencia en la región, con competitividad y capacidad para entrar en el mercado internacional de comercio solidario (*Fair Trade*) (Ausecha, 2008, entrevista). Asimismo, viene haciendo un trabajo muy serio de prevención, sustitución y erradicación de coca en la región. Bajo este programa, 36 familias erradicaron voluntariamente sus cultivos de coca y los han sustituido por cultivos

de café. Mediante proyectos como el de Cosurca, se viene demostrando que este producto es una alternativa viable a los cultivos de coca.

De hecho, de forma general, y como se comprobó en el trabajo de campo en el Cauca y Nariño mediante el diálogo con grupos y comunidades de campesinos, estos no quieren sembrar coca; es su situación de exclusión socioeconómica lo que los empuja en esta dirección para obtener un ingreso adicional. Los cocaleros son conscientes de los riesgos sociales, políticos y de violencia asociados. Un señor sexagenario participante de un proyecto de café en un municipio de Nariño, con visible conmoción en sus ojos, señalaba que “pagamos con la pérdida de nuestros seres queridos la coca”.

Es en esta medida, que René Ausecha (2008, entrevista) refiere que los procesos de erradicación de la coca asumen una dimensión casi transcendental y ritualista para el campesino. Es un proceso de renacimiento y reconstrucción como individuos y ciudadanos, de transformación individual, de emancipación de los actores armados y de la ilegalidad; es un ejercicio casi de purga, de liberación del universo de tinieblas de violencia, de armas, miedo, persecución que la coca representaba. Ausecha (2008, entrevista) refiere que en los momentos en que los campesinos erradican sus matas de coca: “es como si estuvieran conjurando los brujos de la selva sacándose los problemas y es como un renacimiento de la familia, es algo trascendental”. Un campesino de Los Andes señaló a este respecto que seguían sin tener dinero, pero ahora tienen tranquilidad, lo que en su entendimiento de común aceptación, se acerca grandemente a la noción de paz.

Todavía, hay que señalar que este es un proceso difícil y que encierra grandes retos y obstáculos. Los cultivos de coca se expanden no solo por la presión armada de los grupos ilegales, pero también por lo apetecible financieramente que este producto es para el campesinado, que enfrenta situaciones de exclusión y de gran precariedad económica, sobre todo en las zonas de colonización periférica. Es un producto que genera ingresos y beneficios económicos que los cultivos tradicionales ya no posibilitan. En esta medida, la coca se ha constituido en un medio de sustento y de sobrevivencia importante para varios sectores campesinos en situaciones de elevada pobreza, como es el caso en el Cauca y Nariño (Molano, 1992, p. 211). El subdesarrollo de estas zonas rurales convierte la coca en una fuente alternativa de ingresos.

En esta medida, arrancar las matas de coca puede representar para un campesino una pérdida importante de capacidad monetaria, que se puede traducir en la



imposibilidad de que sus hijos vayan a estudiar, o que tenga dinero para comprar sus medicinas. Esta situación pudo ser comprobada en el trabajo de campo en la región de Nariño donde una líderesa comunitaria comentó que, gracias a la 'bonanza' de la coca, tuvo condiciones financieras para ir a la universidad y graduarse, oportunidad que le confirió herramientas fundamentales para seguir una vida como líder social.

Este ejemplo pone en evidencia que nada es blanco y negro en un escenario tan complejo como el colombiano y especialmente en territorios periféricos y marginales como los de estas dos regiones. Hay una especificidad y complejidad en la realidad social de estas zonas que ha sido descrita, en su enredo y contradicciones, en el realismo mágico de García Márquez o el sarcasmo de Fernando Vallejo.

En este marco, toca desarrollar procesos sociales, políticos, culturales y económicos para que no solo una cultura de la legalidad florezca, sino que sea económicamente posible, viable y sostenible, lo cual solo se evidenciará el día en que se genere un desarrollo humano y equitativo en el campo colombiano y no predomine un campesinado en situación de exclusión y precariedad.

Adicionalmente al proyecto ejecutado por Cosurca, se implementaron otros proyectos con base en asociaciones de caficultores en el laboratorio de paz del Macizo Colombiano y del Alto Patía, como es el caso Asprounión y Asprocap. De hecho, el café figura como un producto de gran importancia, sobre todo en Nariño, en donde las características físico-químicas territoriales lo posicionan como uno de los más exquisitos cafés, no solo a nivel colombiano, sino a nivel internacional.

El proyecto ejecutado por Asprounión es un proyecto de mejoramiento del proceso de producción agroecológica y comercialización de café especial, que ha beneficiado a 400 familias de seis municipios del norte de Nariño. Asprocap ejecutó un proyecto de fortalecimiento y capacitación de productores de café que trabajó con 286 familias del municipio de La Unión en Nariño. En ambos casos el perfil de los asociados es de pequeños productores de café, con base en la propiedad o la tenencia de la tierra de dos a tres hectáreas, con situaciones de dificultad y de subsistencia. Estas dos pequeñas organizaciones se vieron muy fortalecidas por el proyecto. Francisco Iván Córdoba, uno de los integrantes de Asprocap refiere que; "era una organización que se llevaba en una carpeta debajo del brazo", pero que en el transcurso del proyecto se ha fortalecido.

En este proceso se incidió igualmente en la capacitación y seguridad alimentaria de los asociados y en la formación de una nueva generación de líderes. Hay

una consciencia de que, como señala también el mismo Francisco Iván, “somos nosotros las personas que iniciamos los conflictos”. En esta medida, además del componente de fortalecimiento de la organización y de la capacitación técnica de los asociados, hubo un énfasis en la formación para la convivencia y en la concientización ambiental. Francisco Iván concluye: “esto es lo que hemos aportado, muchachos para la paz”.

Sin embargo, en un proyecto de una duración corta de 16 meses, los resultados, sobre todo en el campo socioeconómico, fueron escasos y las condiciones de vida de los asociados siguen siendo precarias y preocupantes.

Por lo demás, otra situación crítica que se evidenció, involucrando a Asprunión, fue un incidente con paramilitares en el 2003, que pidieron ‘vacunas’ a la organización. Es un síntoma del trabajo y de los riesgos en territorios de conflicto y del apetito que por momentos los procesos económicos despiertan en los actores armados.

No obstante, a pesar de las varias limitaciones y problemas que los cultivos de café enfrentan en este momento en Colombia y de las limitaciones de estos proyectos e iniciativas, este ha servido de ‘colchón’ económico para muchos campesinos en el Cauca y Nariño y de alternativa a la coca (Albornoz, 2008, entrevista). En una región marcada por una fuerte presencia de la economía cocalera y de los grupos armados, estos procesos de desarrollo con base en el café, representan una alternativa pacífica y legítima.

Una situación similar a la del cultivo del café ocurre con el cacao. Este cultivo tenía presencia en el Cauca y Nariño, especialmente en la zona de la cordillera, pero en los últimos veinte años la coca lo desplazó, empezando a emerger recientemente.

El laboratorio de paz ejecutó el proyecto “Cacao Orgánico”, por intermedio de Fedecacao, una federación nacional de productores de cacao. El proyecto incidió en la búsqueda de alternativas de desarrollo para los campesinos, mediante el cultivo de cacao, en cinco municipios del Alto Patía profundamente marcados por la presencia de cultivos de uso ilícito y de actores armados ilegales, en un primer momento las guerrillas, y últimamente los grupos paramilitares. Como origen estaba la generación de alternativas rentables, sanas y lícitas a los cultivos de coca, que marcan de forma profunda las vidas de los campesinos de estas zonas en los últimos veinte años.

En el marco de este proyecto se han sembrado 800 hectáreas en cinco municipios, correspondiendo cada hectárea a una familia beneficiaria del programa. Con base en el cacao, se ha producido un cambio de una cultura de la economía ilícita a lícita. Como

describe Francisco Ñañez (2008, entrevista), coordinador del proyecto, los campesinos aprendieron “a vivir de otra manera”, lo que se ha traducido –inclusive– en la extensión de los cultivos de cacao de forma autónoma y fuera del ámbito del laboratorio de paz, lo que representa un gesto significativo del impacto de estos programas.

En este proceso desempeñó un rol determinante el potencial económico de este producto en el mercado. De hecho, el cacao es un producto competitivo que posibilita un incremento de ingresos al campesino. Solo en esta medida es posible que el cacao se convierta en una alternativa efectiva para los campesinos. Como señala Francisco Ñañez (2008, entrevista), “la coca fue fuerte, porque tuvo mercado. Pues, entonces la idea era buscar un cultivo lícito que tuviera un buen mercado”.

Por lo demás, este proyecto, de forma análoga a muchos proyectos productivos, produjo efectos que van más allá de la estricta dimensión económica y productiva. Concluyó en un empoderamiento de las comunidades en términos sociales y políticos, generando una mayor participación social de las comunidades y pobladores, hasta entonces restringidas por el temor a los grupos al margen de la ley. Se han dado condiciones para que la gente empezara a participar, a usar la palabra en las reuniones, a cuestionar, criticar y aprovechar los espacios de participación.

De igual forma, desempeñó un rol importante en el sentido de volver a integrar el tejido social que la economía de la coca había roto. Efectivamente, la cultura de la coca tiene efectos dañinos y devastadores en las comunidades campesinas, individualizando las personas, dañando los lazos de solidaridad, produciendo violencia, desconfianza y llevando a que sea ‘la plata’ el eje estructurador de toda la vida. El flujo masivo de recursos financieros había cambiado y dañado el *modus vivendi* campesino, provocando que estos recursos se canalizaran para salidas como la prostitución y el alcoholismo. Mediante proyectos como Fedecacao, así como otros programas de desarrollo alternativo, se contribuye a la (re)construcción y reintegración de las redes comunitarias y a la recuperación de los lazos sociales y afectivos.

Asimismo, dio una contribución relevante en términos políticos, en particular al representar una especie de empuje para que algunos pobladores participaran en la vida política y electoral, resultando en ocho concejales entre beneficiarios del proyecto, en municipios como Leiva, Cumbitara y el Rosario. Además, ha contribuido para que por primera vez en estos territorios se vislumbre algún rostro y presencia del Estado, aunque de forma mínima, por intermedio de la participación de Acción Social en el proyecto (Ñañez, 2008, entrevista).

Hay sin embargo que señalar que, además de Acción Social, estas poblaciones han visto otra faz del Estado, a través de las frecuentes fumigaciones aéreas gubernamentales, que han afectado 90 hectáreas sembradas de cacao, café, y otras siembras y diversos proyectos productivos del laboratorio, como los de Ecocacao, Asohofrucol, Asocafe, y Cosurca, en municipios como El Rosario, Cumbitara, Leiva y Policarpa (Bouchier y Barme, 2008, p. 35; Ñáñez, 2008, entrevista).

Es un elemento que encierra una paradoja nada saludable entre el legítimo deseo de construir alternativas lícitas y desde la base a los cultivos de uso ilícito, respaldado por el gobierno nacional, y la implementación de un enfoque anti-narcótico de modalidad perfectamente distinta que, en este caso y en el de otros proyectos, trágicamente se cruzaron y fueron contradictorios. Estos incidentes provocan una frustración en las comunidades que optan por la vía del desarrollo campesino, encerrando el riesgo que abandonen la confianza en este tipo de proyectos.

En lo que concierne al tema de los cultivos de uso ilícito y el laboratorio de paz, cabe mencionar a otro actor: los grupos alzados en armas. Se podría pensar que en este proceso de conversión de una economía cocalera a cultivos lícitos, los grupos armados –para quienes este es un tema de gran interés para su sobrevivencia y manutención– ejercerían una presión sobre estos proyectos y comunidades campesinas y se opondrían al proceso. Todavía, como lo han señalado varias personalidades y campesinos vinculados a estos proyectos, esto no ha ocurrido, al menos de forma pronunciada.

Hasta cierto grado, esto es un elemento positivo y un factor a favor de los procesos en marcha del laboratorio de paz. Todavía, merece igualmente un análisis y una segunda lectura más profunda. En realidad, esto puede ser un indicio del impacto limitado del laboratorio, al indicar que estos procesos no han atacado directamente los intereses vitales de los grupos armados y por lo tanto, no representan una amenaza para ellos. Efectivamente, aunque haya procesos relevantes en curso promovidos por el laboratorio en el sentido del fomentar una economía lícita y alternativa a la coca, solo de forma muy superficial y limitada se puede deducir que estas iniciativas de desarrollo se han traducido en la disminución de las hectáreas de cultivos de uso ilícito en las regiones. Así, la ausencia de violencia armada sobre los participantes de los procesos de base del laboratorio puede ser paradójicamente, una señal indicativa de sus limitaciones e impacto restringido.

Otro dominio de acción del laboratorio es la recuperación de prácticas y técnicas tradicionales y populares de producción, como el trueque, la minga y la sementera. Se encuadra en este ámbito el proyecto de la Asociación Mutua La Esperanza, Asmet Salud, que recae en la recuperación de la 'sementera'<sup>15</sup>. El proyecto, que se desarrolló en los municipios y comunidades de expresión negra del Patía, Balboa, Bolívar, Mercaderes y Leiva, ha beneficiado a 471 familias y buscó recuperar y fortalecer la práctica ancestral y comunitaria de la sementera y la economía solidaria afropatiana. De igual forma, estableció que este proceso productivo tenía que estar enmarcado en una dinámica de fortalecimiento organizativo y de participación comunitaria y encuadrado en objetivos de consolidación de la seguridad alimentaria de los beneficiarios y de generación de excedentes que se pudieran transformar y comercializar en los mercados locales y regionales (Bouchier y Barme, 2008, p. 35; Ñañez, 2008, entrevista).

Así, el proyecto se configuró no solo como un proyecto económico y productivo con énfasis en economía solidaria, sino más bien como un instrumento de recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad afro descendiente de la zona del Patía y preservación de sus especificidades. Configura una forma de etnodesarrollo, es decir, desarrollo desde los grupos sociales y étnicos del Cauca y Nariño y una valoración del patrimonio cultural intangible de las comunidades de la región. En este marco, la paz es entendida como el proceso a través del cual "la gente toma conciencia de lo que es, de su identidad cultural" (Ibarra, 2008, entrevista). Es una dimensión fundamental de la construcción de la paz. Se encuadra igualmente en la concepción holística de salud que encierra la organización ejecutora, Asmet Salud, que converge con la noción de paz estructural como está definida en el primer capítulo.

Otro de los proyectos en este ámbito es desarrollado por Fundecima, la estructura y cara administrativa del CIMA, uno de los principales movimientos sociales de la región, que tiene presencia en 17 de los 26 municipios del laboratorio de paz.

El CIMA viene desarrollando desde el final de la década de 1990 una propuesta y modelo de desarrollo ambiental centrado en las comunidades campesinas. En

---

<sup>15</sup> La sementera es una práctica ancestral de producción del pueblo afrodescendiente de la región del Patía que tiene origen en los asentamientos de las comunidades negras descendientes de los esclavos, en los cuales se cultivaban productos de pancoger, como el plátano, la yuca y el maíz. Funcionaba como una micro unidad de producción familiar y comunitaria con base generalmente en frutas y en una organización comunitaria, a través de una economía solidaria (Ibarra, 2008, entrevista).

este ámbito, ejecutó en el marco del laboratorio de paz, con una población beneficiaria de 400 familias, el proyecto “Encadenamientos agroambientales”, que se centró en “recuperar la economía campesina desde los campesinos” (Collazos, 2008, entrevista). Pasó por la promoción de un modelo de explotación campesina y un proceso agroambiental con base en los cultivos tradicionales y las huertas campesinas en pequeñas propiedades de una hectárea, que establece un equilibrio entre los sistemas agrícolas y pecuarios y la conservación de los ecosistemas (Díaz, 2008, entrevista), al substituir los elementos agroindustriales por técnicas limpias y recuperar prácticas tradicionales ancestrales como el ‘trueque’<sup>16</sup> y la ‘minga’.

Es de particular interés la reactivación de la noción y práctica de la ‘minga’, concepto de origen indígena relacionado con el “intercambio recíproco de labores dentro de la comunidad indígena” (Rappaport, 2003, p. 17). Se aplica a diversos servicios y trabajos en beneficio de la comunidad, como el mantenimiento de los acueductos o de los caminos y el trabajo en una finca; es una forma tradicional de trabajo comunitario que incorpora una concepción de economía solidaria.

Como describe César William Díaz (2008, entrevista), mediante la minga,

[...] se trabaja en la finca de referencia, pero el grupo va rotando su mano de obra en las fincas de sus vecinos, es decir, trabaja de acuerdo a la necesidad que tengan las fincas. Si necesitan hacer una huerta, mejorar una casa, mejorar el establo donde están los animales, se hace un recorrido y una intervención también del grupo comunitario.

Este modelo y sistema se viene aplicando con comunidades locales en experiencias pilotos que se pretende sean reproducidas y replicadas en el territorio (Díaz, 2008, entrevista).

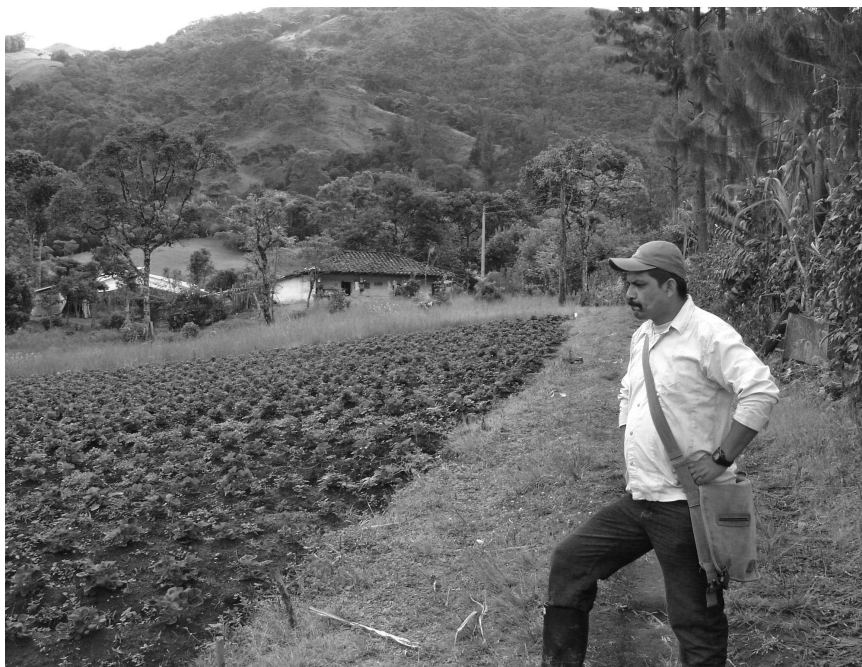
Por último, se destacó también en el ámbito del eje tres del laboratorio de paz, los proyectos en el campo de la seguridad alimentaria. El Macizo Colombiano y el Alto Patía son regiones que enfrentan una situación crítica a este nivel, con niveles de desnutrición crónica que afecta muchos sectores, comunidades y hogares de la región. Varios proyectos del laboratorio han permitido que se recuperaran las huertas para autoconsumo que habían desaparecido con la agricultura de monocultivo, y hoy ya marcan presencia en muchas de las fincas de café, de frutas o de producción de ganado.

---

<sup>16</sup> El ‘trueque’ es un sistema de intercambio directo de bienes o servicios.

Este es un proceso que es llevado fundamentalmente por las mujeres (Daza, 2008, entrevista) y que es de suma importancia para la sostenibilidad económica de las comunidades, las cuales, sin seguridad alimentaria ven recaer sobre sí una espada de Damocles y una violencia estructural profunda, que además los convierte en blancos fáciles de la movilización para los grupos armados.

En este marco se insertó el proyecto de seguridad alimentaria desarrollado en Cartago, Nariño. Incidió en una comunidad campesina de fuerte precariedad económica, en la cual la pobreza y el hambre han empujado a muchos hacia el cultivo de coca, e involucró 43 familias con pequeñas propiedades (media hectárea en promedio) en torno a cultivos como el maíz, la papa, el lulo, la mora, y otros productos.



Proyecto de seguridad alimentaria en Cartago, Nariño

Fuente: *Miguel Henriques*

Por lo demás, este fue un proyecto con una vocación ambiental, orientado a procesos agroecológicos y de desarrollo sostenible, en armonía con el medio ambiente. Se centró en la capacitación en una producción limpia a través de adobos orgánicos. Como refirió un campesino participante del proyecto, “uno come ahora el tomate sin lavarlo, ya no tiene veneno. [...] estamos bajando el químico”.



Los frutos del proyecto tienen un alcance limitado, tanto en términos económicos, como políticos y se evidencia un claro riesgo de insostenibilidad del proceso. Sin embargo, hay que señalar que hubo un cambio en términos de manejo ambiental de los procesos productivos de gran relevancia y resultados, en términos de capacitación social y política y de erradicación de los cultivos de uso ilícito. La coca perdió algún terreno en esta comunidad y municipio.

Asimismo, esta es una comunidad en donde la exclusión socioeconómica y regional son evidentes, al igual que el abandono de las instituciones, el solo hecho de que un proceso social se esté desarrollando allí, es en sí mismo simbólico y un motivo de satisfacción y celebración por parte de los campesinos de la comunidad. Esto ha sido posible comprobarlo, desde luego, en el brillo y la alegría expresada en los ojos de los campesinos y en el cariño y entusiasmo que demostraron, cuando se dio la visita de la misión de evaluación intermedia del laboratorio de paz II al municipio. En un escenario de tal precariedad, en medio de la penumbra, de la exclusión, la miseria, la desesperación, en que los pobladores se sienten abandonados, ignorados y olvidados por las instituciones, y en donde por momentos cualquier manifestación del Estado se encuentra a días de camino, el hecho de que alguien arribe a sus veredas, no solo de la lejana capital del departamento, Pasto, sino de la distante Europa, los hace sentir escuchados, consentidos y valorados en cuanto seres humanos y comunidad y les trae esperanza y aliento a sus vidas. Nos fue comentado y pedido “Estamos abandonados. Acuérdense de nosotros. Cuente lo que nos pasa, que se acuerden de nosotros, que existimos”.

Estos procesos son pequeños pasos en el sentido de la disminución de la diferencia de condiciones entre las ‘dos Colombias’ y de construcción y/o recuperación de un verdadero Estado de derecho a lo largo del territorio nacional. Como señaló Myriam, una pobladora de Cartago, “el campesino estaba harto de promesas que ya no creía, había perdido la credibilidad en las instituciones, en estos gobernantes que no les cumplían”. Así, estas iniciativas, por limitadas que sean, son pasos en el sentido de la construcción de la paz positiva desde la base en Colombia.

Todavía, toca señalar que este amplio abanico de proyectos y procesos de modalidades distintas que integra el eje tres del laboratorio de paz, a pesar de la filosofía y de los objetivos que los une, configuran una cierta fragmentación y una micro territorialización de los procesos. En la mayoría de los casos, no están integrados



entre sí y coordinados en el sentido de una estrategia global direccionada para el desarrollo y la paz en la región.

A esto se agrega que el horizonte temporal de estos proyectos fue de muy breve plazo (en general entre algunos meses y dos años), lo que, atendiendo a las exigencias de los procesos de desarrollo, que se inscriben necesariamente en un horizonte de medio o largo plazo, llevó a que los objetivos de los proyectos no se compaginaran en muchos casos con las finalidades generales del laboratorio.

Por lo tanto, como lo señala el informe de evaluación de término medio realizado por Catherine Barme y Josyane Bouchier (2008, p. 70), a pesar de que estas iniciativas hayan fomentado la generación de empleos y dividendos económicos en poblaciones en situación de gran precariedad, estos corresponden fundamentalmente a empleos poco estables y de baja remuneración, razón por la cual los impactos socioeconómicos del laboratorio de paz en estas regiones son limitados y todavía hay un largo camino que recorrer para que las condiciones de vida de la población mejoren.

De igual forma, se evidencia una debilidad fundamental en los procesos apoyados por el tercer eje del laboratorio de paz. Tal como en el Magdalena Medio, se evidenció una ausencia notoria del tema de la tierra y estructura agraria en los procesos y proyectos del laboratorio. La promoción de procesos de desarrollo se vio maniatada, sin abordar el tema central y neurálgico de la tenencia y titulación de la tierra. Este es, en gran medida, el eje estructural de toda la ordenación económica en el campo, con particular incidencia en regiones como Cauca y Nariño, una de las raíces profundas del conflicto en Colombia y principales causas de la violencia estructural y pobreza endémica de la población rural colombiana. Por lo demás, el tema de la tenencia de la tierra es fundamental, no solo para el desarrollo de las comunidades campesinas que habitan el Cauca y Nariño, como un elemento esencial para resistir a las dinámicas de desplazamiento provocadas por los actores armados. Esta ausencia ha comprometido el impacto del laboratorio en las regiones y mitigado los resultados de los procesos productivos y económicos.

Pero la mayor crítica que se puede plantear a un gran número de proyectos del eje III, es una cierta pérdida de la mirada y la finalidad de paz que está en la base del laboratorio. No solo los participantes, sino incluso los coordinadores y líderes de estos proyectos y procesos, no siempre han tenido claro lo que estaba en juego con el laboratorio de paz. En varios casos la dimensión social, política y de construcción de paz perdió peso en su discurso, en detrimento de componentes

técnicos y estrictamente económicos. Algunas organizaciones e integrantes de proyectos estaban demasiado enfocados en temas como la generación de ingresos, la competitividad y la comercialización de los productos, otorgándole menos importancia a temas esenciales como los procesos participativos, los derechos humanos y el horizonte de paz para la región. Ha sido posible verificar esta situación en varios de los proyectos visitados en la región del Cauca y Nariño y en el marco de la misión de evaluación intermedia del laboratorio de paz II que tuve oportunidad de acompañar.

Por lo demás, la integralidad y articulación de los proyectos económicos con los demás ejes del laboratorio resultó en varios casos en poco más que una fachada social en que los campesinos frecuentaban un taller o curso de formación ciudadana en gobernabilidad o derechos humanos, sin que verdaderamente este componente fuera bien integrado en el proceso social que se estaba implementando y emergía más bien como un apéndice formal que buscaba responder a los requisitos exigidos por la UE. Hubo una ‘tallerización’ de los proyectos, que frecuentemente no correspondió a una visión estratégica para el territorio, ni para cada uno de los procesos sociales y resultó en pocos impactos sociales efectivos.

No obstante, se debe señalar que el ‘modelo’ de los talleres produjo algunos resultados positivos y de valor, en cuanto espacio de reunión de las comunidades, instrumento de reflexión y análisis crítica y constructiva de la situación socio-económica y política, al igual que permitió una aceptación y afirmación de la práctica de las reuniones comunitarias en la región, que eran vistas antes del laboratorio de paz como sospechosas principalmente por la fuerza pública (Gómez, 2008, entrevista).

## El impacto del laboratorio de paz en las regiones del Cauca y Nariño

Las conclusiones respecto al impacto, resultados, potencial, limitaciones y bloqueos del laboratorio de paz, en términos sociales, políticos, económicos y culturales, en las regiones del Cauca y Nariño, convergen en gran medida con las presentadas para el laboratorio de paz del Magdalena Medio. Muchos de los elementos indicados y analizados en el capítulo anterior se hacen extensivos a este laboratorio.

No obstante, hay claramente especificidades del laboratorio de paz del Cauca y Nariño y elementos singulares en sus procesos sociales, derivados no solo de sus contextos distintos y de las particularidades de estas dos regiones, sino de la concepción y estructura institucional del segundo laboratorio.

## El laboratorio como una plataforma de movimientos sociales

Por encima de todo, el trazo más notorio del laboratorio de paz del Cauca y Nariño es que este se evidenció como una plataforma de convergencia y alianza de movimientos y organizaciones sociales. No solo institucionalizó un proceso que estaba en marcha en las regiones, en el sentido de la unión de los esfuerzos y la creación de sinergias entre el movimiento indígena, las organizaciones campesinas y afrodescendientes y otros sectores sociales, sino que potenció y profundizó los lazos y alianzas sociales y generó una dinámica de fortalecimiento interno en la sociedad civil.



Minga nacional de resistencia indígena. Bogotá, 21 de noviembre de 2008

Fuente: *Miguel Henriques*

Se convirtió en un espacio de diálogo y articulación al interior de la sociedad civil, entre ONGs, comunidades, grupos sociales y corporativos, pero también en una plataforma de diálogo interinstitucional entre la sociedad civil y el poder político, a nivel local, regional y nacional. Puso indígenas trabajando mano a mano con afropatianos, organizaciones de caficultores compartiendo experiencias con organizaciones de cacaoteros y paneleros, mujeres trabajando al lado de jóvenes, campesinos mestizos marchando juntos con indígenas y obreros. Como afirmó Víctor Collazos (2008, entrevista) del CIMA, “ha facilitado algunos escenarios donde nos hemos podido encontrar líderes, comunidades, organizaciones grandes, pequeñas etc.” Este escenario intercultural de intercambio es también descrito por Aparicio Ríos (2008, entrevista), ex consejero mayor del CRIC, que refiere: “ellos vienen con sus tambores y nosotros con nuestras flautas”. Valery Jordan (2008, entrevista), de la Delegación de la Comisión Europea en Colombia, habla de una “interculturalidad que se vive, se siente, se oye, y se palpa”.

De hecho, el laboratorio de paz ha impulsado, acogido y consolidado un movimiento convergente entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, y un tejido inter-organizativo que les ha permitido participar de movilizaciones y acciones en conjunto. César William Díaz (2008, entrevista), del CIMA, ve este proceso de confluencia social de movimientos como un río. En sus palabras, “los ríos nacen con poquito, se van juntando y van creciendo hasta que son un torrente”. La minga de resistencia y la marcha hacia Cali y Bogotá son una evidencia de esta dinámica y de un cierto espíritu de solidaridad y alianza entre organizaciones y movimientos sociales en el Cauca y Nariño, que reunió indígenas, campesinos y afros en una misma lucha por reivindicaciones.

Esta constituye por ventura la mayor fortaleza del laboratorio de paz en las regiones del Cauca y Nariño. Su mayor valor agregado ha sido propiciar y potenciar una articulación, no solo entre la diversidad de actores sociales en las regiones del Cauca y Nariño, sino entre los movimientos del Cauca y Nariño, y entre estos actores sociales y las instituciones y Estado local (Franklin y Moncayo, 2004, p. 2). En esta medida, el laboratorio de paz se convirtió en un ejemplo en Colombia de cómo se construyen alianzas horizontalmente entre sectores excluidos. El laboratorio de paz, en este sentido, ha conformado una especie de bloque social alternativo, de forma análoga a la plataforma así designada que apoyó el gobernador Floro Tunubalá, una alianza entre procesos y movimientos indígenas, campesinos, cívicos y en menor medida, sindicales y afrodescendientes.

Contribuyó por lo tanto para la creación de capital social<sup>17</sup>, en la medida en que se crearon redes sociales y se generaron procesos de construcción de confianza entre comunidades, movimientos y organizaciones, que posibilitaron una intervención conjunta y la persecución de objetivos comunes (Econometría, 2007, p. 10). Permitió de esta forma fortalecer o recuperar un tejido social amenazado y en algunos casos roto por el conflicto armado, proporcionando escenarios de encuentro, reflexión, participación y diálogo, un espacio de civilidad en medio del conflicto armado.

Asimismo, esta dinámica de encuentro, discusión y articulación del laboratorio ha posibilitado la consolidación de una propuesta de región y de país desde la sociedad civil del Cauca y Nariño. De forma análoga al Magdalena Medio, estos procesos también han contribuido para la construcción de una mirada social regional, que fuera más allá de la circunscripción de cada vereda o localidad e integrara las distintas comunidades indígenas, afrodescendientes, y campesinas mestizas en la construcción de una propuesta regional de desarrollo y de paz (Kahn, 2008, entrevista). En este ámbito, se fortaleció la noción de 'surcolombianidad' mediante la interlocución entre organizaciones del Cauca y de Nariño, y la puesta en marcha y asunción de dinámicas, problemáticas y carencias, que, en la mayoría de los casos, son comunes.

## Fortalecimiento de la sociedad civil regional

Además de fomentar la articulación al interior de la sociedad civil, el laboratorio de paz ha incidido en el fortalecimiento de la misma sociedad civil y de las organizaciones y movimientos de base que la componen a nivel regional.

El laboratorio de paz en sí mismo, no ha generado movilización social en el Cauca y Nariño, que ya tenían un historial de organización y expresión fuerte, pero sí contribuyó a reforzarla, blindarla, fortalecerla y expandirla, y, en algunos casos, a dar un nuevo impulso a movimientos sociales y organizaciones en peligro o en fase descendente (Bouchier y Barme, 2008, p. 82). Ha contribuido a la reactivación o consolidación de los movimientos sociales y al refuerzo de la capacidad organizativa de base, sobre todo en Nariño, pues en el Cauca esta se encontraba más

---

<sup>17</sup> Se entiende capital social en la definición de Putman (1995) como "las características de la vida social, las redes, las normas y la confianza que permiten a los participantes actuar juntos más efectivamente para alcanzar objetivos comunes" (citado por Econometría, 2007, p. 10).

consolidada. Según Alexander Bastidas (2008, entrevista), su “logro fundamental fue revivir esa chispa que había perdido la gente”.

Ha permitido a organizaciones y movimientos, como el CIMA, aumentar su base de apoyo y trabajo (Daza, 2008, entrevista) y, en casos como la zona de la cordillera, dar nuevo aliento a la movilización y organización social, que se encontraba prácticamente moribunda. La recuperación del Movimiento Social de la Cordillera en Nariño figura de hecho como uno de los logros y frutos fundamentales del laboratorio en la región, al dar nueva expresión a un movimiento social que se había visto aplacado por la violencia, las muertes selectivas perpetradas por el paramilitarismo y por la desaparición de sus líderes. El proyecto desarrollado por Corfeinco aportó las herramientas para que la gente pudiera volver a reunirse, capacitarse y fortalecerse, y una nueva generación de líderes ha venido emergiendo en esta zona, en parte gracias a los procesos del laboratorio de paz (Daza, 2008, entrevista). Así, el movimiento que estaba sumergido, ha empezado de nuevo a tomar fuerza, y hoy es un movimiento del que surgen candidatos a las elecciones municipales, algunos de los cuales han sido elegidos como concejales.

El laboratorio de paz posibilitó de igual forma, una cierta emergencia y consolidación del movimiento afro, que se veía bastante disperso y desorganizado, ha logrado integrarlo en un movimiento social más amplio, al lado de campesinos e indígenas (Díaz, 2008, entrevistas).

Estos procesos sociales asumen particular relevancia en la medida en que una sociedad civil solida y madura es vital para temperar una democracia limitada, transformar el conflicto armado en civil y construir alternativas de civilidad al conflicto armado. De hecho, en el marco del laboratorio se fomentaron y crearon espacios de convivencia pacífica, de libertad y sueño, en algunas de las zonas más remotas de las regiones, contribuyendo al empoderamiento y la unión de las comunidades (Bouchier y Barme, 2008, p. 7). El laboratorio se convirtió para muchas comunidades en un símbolo de resistencia y esperanza; construyó pequeñas ‘islas de civilidad’, procesos de inclusión social y de construcción de paz a nivel de base. Tal como en el caso del laboratorio de paz del Magdalena Medio, la fortaleza de la iniciativa pasó fundamentalmente por la generación de micro procesos de empoderamiento social, político, económico y cultural. Configuró micro impactos de inclusión y de capacitación a nivel local, en medio de profundas carencias y precariedad.

Ahora, como hemos analizado con más detalle previamente en este capítulo, si bien el laboratorio de paz fortaleció a diversas organizaciones sociales, impulsó

la movilización y participación de diversas comunidades y sectores, y formó una nueva generación de líderes, tuvo igualmente efectos perniciosos sobre la sociedad civil, en particular, sobre las organizaciones sociales que han ejecutado proyectos y recursos, al burocratizar sus procesos, sobrecargar sus estructuras y líderes, y cambiar muchas de sus dinámicas. Este fenómeno, condujo a una ‘proyectización’ de los procesos sociales y, en este sentido, el laboratorio no produjo una acción sin daño.

Por lo demás, en otro plano, a pesar de la convergencia de movimientos sociales que encontró en el laboratorio de paz una plataforma y un espacio privilegiado de diálogo y de institucionalización de esfuerzos, hay que señalar que esta dinámica de intercambio de experiencias, ensayos y errores, vital en un ‘laboratorio’, no se evidenció de forma tan clara como se esperaba. Como lo señalaron varias voces de base del laboratorio: “cada proyecto aisladamente tiene sus acumulados, pero no hay una sala común donde se pueda compartir y generar aprendizajes para otros proyectos y para el tejido social e institucional local, regional y nacional” (Ledezma, 2008, entrevista). Hubo no solo una escasez de momentos de encuentro y espacios de interlocución entre las organizaciones y comunidades de base, sino la falta de un ejercicio de sistematización y documentación de las experiencias que pudiera ser compartido entre los procesos. Como afirmó Aidde Ramírez (2008, entrevista), excoordinadora del proyecto ejecutado por Atucsara: “cada uno se queda con su proyecto y es su isla”. Se evidenciaron problemas notorios de falta de coordinación entre los diversos proyectos del laboratorio y pocas experiencias de diálogo entre municipios, en lo que se pretende sea un ‘laboratorio de paz’, es decir un espacio que tiene en vista la explotación de fórmulas de desarrollo y paz, sería esencial. Así, a pesar de los vínculos y procesos de articulación que el laboratorio instituyó y generó, existe el riesgo de que se conviertan en proyectos de enclave, cuyo potencial y enseñanzas no sean plenamente aprovechados (Ledezma, 2008, entrevista).

## Participación social y cívica y fortalecimiento institucional

En un segundo plano, el laboratorio de paz del Cauca y Nariño figuró como un instrumento fundamental de fomento y consolidación de la participación social y política, así como de fortalecimiento institucional. Fue una herramienta muy importante

de aliento a la participación social y ciudadana, en particular, mediante su respaldo a los planes de vida, y otros procesos de planeación y gestión participativa, como los presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas y la rendición pública de cuentas, y a través del respaldo de movimientos y organizaciones sociales.

Los planes de vida se evidencian, de hecho, como uno de los aportes fundamentales del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, en cuanto son un instrumento de participación comunitaria y de transformación de la vivencia política a nivel local. Con una relación directa o indirecta del laboratorio, se elaboraron quince planes de vida (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 38) en las regiones del Cauca y Nariño, que involucraron más de 6.700 personas en su elaboración, y cuyos procesos han sido acompañados, con mayor o menor cercanía, por las alcaldías de los municipios.

Estos procesos son de una gran importancia, en la medida en que son medios de democratización de la vida política local y de inclusión de las poblaciones. El laboratorio de Paz ha sido un medio extraordinario de transformación de la forma de hacerse y vivenciarse la política a nivel local. Introdujo diversos instrumentos, espacios y plataformas para la inclusión política de las poblaciones y el ejercicio participativo de la ciudadanía. Ha logrado promover los valores de la democracia participativa y del respeto por los derechos humanos y capacitar políticamente a la población.

En esta medida, ha contribuido en un proceso de emergencia de la población y del territorio, como sujetos políticos, actores de su propio desarrollo y parte de la gestión de los municipios y de la *res pública*. Se han generado procesos y dinámicas mediante las cuales las comunidades se sienten parte activa y responsable de lo que pasa en su territorio e intervienen en términos sociales y políticos acorde con ello. Configura una integración política y socioeconómica de sectores sociales y geográficos tradicionalmente excluidos, una disminución a nivel local del foso entre las ‘dos Colombias’ y un claro proceso de empoderamiento, entendido en su dimensión a la vez individual y colectiva de potenciación e inclusión de grupos y comunidades marginadas. Presupone participación, autonomía y emancipación y pasa por la integración en el sistema político y por la asunción de sus plenos derechos como ciudadanos (Howell y Pearce, 2001, p. 60).

Los procesos generados por el laboratorio de paz han hecho, aunque de forma limitada, que la gente tenga acceso a las decisiones que afectan sus vidas y que las comunidades se concienticen de sus derechos y deberes y se vuelvan más propositivas,



reivindicativas y proactivas. En este sentido son pasos importantes en la transformación de la cultura política de la región y para que la institucionalidad pública sea expresión de las propuestas que se originan en el territorio, elemento que confiere elevados grados de legitimidad a los procesos políticos (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 18).

A pesar de estar circunscrito a determinados procesos y núcleos de participación, significa un cambio profundo en la generación de una solución de paz endógena, que no pase solamente por un proceso de negociación de alto nivel, sino que emerja del mismo territorio (Heredia, 2008, entrevista). La profundización de la democracia a nivel local es proclive y esencial a la construcción de una paz duradera y positiva en el contexto del conflicto armado en Colombia. Estos núcleos son pasos con miras a sentar las bases para una paz positiva desde las regiones, basada en la equidad, el bienestar, la justicia social, y la cultura del diálogo y de la paz. A pesar de que involucren solamente pequeñas franjas de la población, pueden constituir indicios de que una nueva cultura política está en construcción en algunas instancias de la región, aunque falta saber si de forma sostenida.

De hecho, uno de los aspectos más significativos de estos procesos es el involucramiento, con mayor o menor incidencia e intensidad, de las instituciones y autoridades locales y regionales. La participación de las alcaldías y de las gobernaciones de los departamentos del Cauca y Nariño es un valor agregado para que estos procesos sean sostenibles. Mediante proyectos e iniciativas, como las previamente mencionadas en este capítulo, se han estimulado nuevas relaciones y prácticas políticas. Varias alcaldías empezaron procesos de rendición de cuentas y aprobación participativa de sus presupuestos, en varios casos, no se permitió más a los alcaldes ejercer su cargo público como si fueran reyes, imputándoles su responsabilidad pública y la exigencia de oír y responder a sus conciudadanos. De igual forma, se han delineado algunos Planes de Desarrollo municipales de una forma más participativa y acorde con las aspiraciones de las poblaciones, con base, en ciertos casos, en algunos de los planteamientos de los planes de vida. En principio, aparece todo un cambio de la cultura política local y un proceso de conversión de la institucionalidad pública como expresión de las propuestas que se originan en el territorio. Es decir, de democratización y 'horizontalización' de la vida política.

Asimismo, hay varios casos de líderes sociales formados en los procesos del laboratorio de paz que se han presentado a elecciones y tienen actualmente una participación activa en la vida política de sus municipios, como concejales, aunque

no se presente en el Cauca y Nariño ningún logro tan simbólico como la elección en el Magdalena Medio para alcaldía de Barrancabermeja de Carlos Contreras. Estos son evidencias claras de un proceso de empoderamiento e inclusión política que permite romper con las lógicas tradicionales que alimentan a nivel local el sistema político colombiano y que repercuten en el conflicto armado. El hecho de que un líder campesino haya atravesado para el otro lado del ‘espejo de Alicia y desempeñe un cargo público, es de una importancia extrema en términos políticos.

Estos procesos, mediante el trabajo con las alcaldías y las gobernaciones, ofrecieron una contribución política y social de gran valor para la construcción del Estado y el fortalecimiento de la democracia a nivel local. El laboratorio de paz llegó a zonas donde la presencia institucional era muy reducida o nula, dando pasos en el sentido, no tanto de extender el control del Estado, sino más bien de legitimar su presencia. Proporcionó la generación de espacios de capacitación política, en ocasiones en los lugares más remotos y recónditos, que confirieron herramientas a la población para el ejercicio y asunción de sus derechos y deberes como ciudadanos, la integración en los mecanismos y espacios democráticos y la recuperación de la confianza en las instituciones.

Un informe del DNP (2008, p. 109) destaca a este respecto un aumento de la participación electoral entre los beneficiarios de los proyectos del laboratorio de paz, lo que es una evidencia del éxito de los procesos de promoción de la participación en la vida política. Asimismo, otro elemento del estudio del DNP (2008, p. 88), al cual se debe atribuir aún mayor relevancia política, es el hecho de que el 75% de los beneficiarios de los laboratorios de paz consultados consideren que instituciones como la justicia, la policía y las alcaldías (en este orden) son las instancias a las que deben acudir en caso de amenazas a su integridad.

Hay una lectura política clara de este elemento: es indicio de un proceso de construcción del Estado de derecho y de legitimación de las instituciones, así como de definición de los mecanismos democráticos, como instancias centrales de resolución de conflictos; denota un camino recorrido con miras a la profundización de la institucionalidad, de un sentido de autoridad legítima en la región y de la generación de un sentimiento de pertenencia a la nación, en un país con una histórica sospecha con respecto a la actuación de las instituciones y la fuerza pública, factor que ha alimentado históricamente a los conflictos y a los grupos armados ilegales en el país. En esta medida, son elementos fundamentales de la construcción de paz en un escenario como Colombia.

Sin embargo, hay un largo camino por recorrer a este nivel y estas señales positivas de transformación, se entrecruzan con elementos negativos y con trazos de prevalencia de la cultura política 'tradicional'. En primer lugar, a pesar del involucramiento de las instituciones locales y regionales en varios de estos procesos, la incidencia en las políticas públicas ha sido reducida, por no decir inexistente. No se evidenciaron cambios significativos en los programas y prácticas políticas de las alcaldías y la institucionalización de los planes de vida en los planes de desarrollo municipales y departamentales solo ocurrió puntualmente (Bouchier y Barme, 2008, p. 10; Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 67).

En segundo lugar, hay pocas señales de un cambio en la cultura y mapa políticos regionales. Se repitieron, sin cambios visibles, los fenómenos electorales de cacicazgo y más que un voto programático ha persistido el voto clientelista (Mendoza, 2008, entrevista). Asimismo, han prevalecido las prácticas políticas tradicionales y lo que en Colombia comúnmente se designa como la 'politiquería', y no hay indicios de mejoras substanciales en términos de transparencia en el manejo de los recursos públicos y disminución de la corrupción (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 26). A pesar de fenómenos como la elección de Floro Tunubalá en el Cauca y de Antonio Navarro Wolff en Nariño, las dinámicas políticas vigentes han persistido en estas regiones, lo que evidencia las dificultades de transformar los imaginarios y la cultura política. Más que procesos de fondo, el laboratorio de paz ha generado espacios de participación y transformación política. Sin embargo, estas limitaciones no retiran valor y potencial social y político a estos proyectos y la posibilidad de contagio de los procesos en el territorio.

## Un laboratorio de (cultura) de paz

Gran parte de las iniciativas desarrolladas por el laboratorio de paz corresponden a procesos que se sitúan en un plano de la transformación cultural (individual y colectiva) a largo plazo. En esta medida, son procesos difícilmente cuantificables o medibles. No es posible calcular o medir su riqueza mediante algunos de los indicadores formales de medición de impactos. Como planteó Gustavo Montenegro (2008, entrevista), "¿cómo registrar en un formato de presentación de resultados que a una persona se le cambió la vida?". Se incide en factores intangibles que pasan por procesos complejos de transformación de las creencias, visiones, intereses

y relaciones (Tocci, 2008, p. 19) y que asumen una profunda importancia para la construcción de la paz positiva y sostenible. En realidad, algunos de los mayores logros del laboratorio son inmateriales y se aferran a las transformaciones en el horizonte, y a la mente de las personas con la cuales trabaja.

El hecho de reunir a la gente, que ella se permita oírse y expresarse, es un proceso de recuperación de esperanza y de expectativas, y en cierta medida, de reconquista de la dignidad y humanidad perdidas por el contexto de la guerra, pero también por el escenario de abandono y violencia estructural. Los procesos de base del laboratorio de paz en algunos casos han sido un puerto de abrigo para las poblaciones y comunidades excluidas.

Se está contribuyendo para que “la gente mire la vida desde otro punto de vista” (Ibarra, 2008, entrevista). Mediante procesos políticos, sociales, económicos y culturales, se demuestran y proyectan alternativas de vida en el territorio. El laboratorio de paz ha generado fundamentalmente micro procesos de transformación, que son a la vez individuales y sociales. Los cambios parten del nivel micro intrapersonal y de la transformación de pequeños grupos y comunidades, como base para dinámicas políticas y sociales más amplias y para la proyección a nivel regional o nacional.

El Laboratorio de Paz pretende incidir en la violencia cultural, en la cual la estructura económica y el sistema político tienen un rol fundamental, pero también en las estructuras culturales que legitiman y sostienen esa misma violencia. Así, gran parte de los procesos de base del programa buscan impulsar cambios en la mente de las personas, en el sentido de su valorización en cuanto ciudadanos, y actores de su propio desarrollo.

## Los impactos socio-económicos

En lo que concierne al tercer eje y la dimensión socio-económica del laboratorio de paz, la evaluación es múltiple. Evidenció resultados positivos en varios campos. En primer lugar, puso en primer plano el problema de la preservación del medioambiente en la región del Macizo Colombiano y del Alto Patía, generando procesos importantes de conservación de recursos naturales y de formación y sensibilización ambiental, en particular mediante la introducción de tecnologías y prácticas

de manejo ambientalmente sostenibles en diversas organizaciones de base e instituciones educativas de la región (Bouchier y Barme, 2008, p. 82). Efectivamente, el tema ambiental ha sido introducido en la mayoría de los proyectos productivos del Laboratorio de Paz, lo que es un elemento crucial para la generación de un desarrollo humano sostenible, en una región que encierra una importancia ambiental fundamental en el país, en cuanto confluencia de cuencas hidrográficas de Colombia, y que viene atravesando problemas ambientales graves en términos de deforestación y erosión (Bouchier y Barme, 2008, p. 9).

Un segundo campo en que se evidenciaron frutos de alguna relevancia, fue lo relacionado con la seguridad alimentaria. Hubo una contribución relativa a la seguridad alimentaria de parte de los beneficiarios del laboratorio y sus familiares, lograda a través de la diversificación de los cultivos y huertas familiares, y de la mejoría de la dieta de las familias (Bouchier y Barme, 2008, p. 82). Este aspecto figura como un logro de bastante importancia, no solo porque estas regiones evidencian problemas graves a este nivel, sino porque el hambre es una de las expresiones máximas de violencia estructural y como hemos subrayado anteriormente, es imposible 'estar en paz' si se tiene hambre.

En este aspecto, hay un impacto adicional de los proyectos del laboratorio de paz que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Mujeres beneficiarias del laboratorio han señalado una disminución de la violencia en sus hogares, no solo por el oxígeno que significó los ingresos y beneficios económicos adicionales, como de los mismos procesos en términos culturales y de ciudadanía (Bouchier y Barme, 2008, p. 82).

Otro de los aportes fundamentales del laboratorio ha sido demostrar con hechos y procesos concretos que hay alternativas económicas efectivas a la coca. Mediante proyectos como los desarrollados por Cosurca y Fedecacao, el laboratorio de paz puso sobre la mesa propuestas viables de desarrollo alternativo. En el marco de proyectos implementados por el laboratorio de paz se erradicaron 1.040 hectáreas de cultivos ilícitos y se establecieron 1.966 nuevas hectáreas de cultivos (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 38). Como refirió un miembro de Asphonar: "los campesinos que antes llevaban los hijos a raspar coca, hoy ya los llevan a estudiar". Significó para varias comunidades un cambio de cultura de lo ilícito a lo lícito. Como señaló Ñañez (2008, entrevista) del proyecto de Fedecacao, "es aprender a vivir de otra manera".

Todavía, toca señalar que, a pesar del relativo éxito de erradicación de cultivos de uso ilícito en el marco del laboratorio de paz y de su propuesta conceptual y socioeconómica con respecto a este tema, según datos de julio de 2008 de las Naciones Unidas (citado por Molano Cruz, 2009b, p. 9), los cultivos de coca han crecido en los últimos años en algunos municipios del Macizo Colombiano y Alto Patía, acompañando la tendencia nacional en lo que toca a este tema.

Pero en el ámbito de los proyectos de cariz económico del laboratorio de paz, el factor más preocupante es la sostenibilidad de los procesos. A pesar de que se haya buscado encuadrar las iniciativas en una perspectiva más ‘de enseñar a pescar que a dar el pez’, es decir, de capacitación en detrimento del asistencialismo, y que se hayan producido procesos de formación técnica y organizacional, hay un fuerte riesgo que, terminada la inyección de recursos, los procesos no tengan piernas para caminar solos y no configuren sostenibilidad. Una proporción considerable de los proyectos, sobre todo los productivos, no se convirtieron en procesos, lo que puede significar que las iniciativas sirvieron fundamentalmente para ‘apagar incendios’ y atender a emergencias humanitarias y no sentar las bases de un modelo de desarrollo (Valencia, 2008, entrevista).

Hay un conjunto de microprocesos económicos que no aseguraron sostenibilidad por el cortísimo tiempo en que se ejecutaron (generalmente entre seis meses y dos años), traduciéndose en iniciativas de valor, pero dispersas y volátiles. Al no contar con una inversión de más largo plazo, ha sido naturalmente manifiesta una incapacidad para lograr superar los problemas de una economía campesina deprimida y amenazada por distintos factores, tanto endógenos como exógenos (Bouchier y Barne, 2008, p. 88).

## Las limitaciones estructurales

El laboratorio cualificó, impulsó y potenció micro experiencias de desarrollo económico, pero adoleció de propuestas estructurales que transformaran la región. Efectivamente, a semejanza del caso del primer laboratorio de paz, esta figura como una de las mayores limitaciones de la iniciativa. El laboratorio se mostró incapaz o impotente para generar procesos estructurales o incidir de forma substancial sobre las causas profundas del conflicto.

El laboratorio ha hecho un esfuerzo meritorio en el sentido de reactivar la economía regional en un contexto de pobreza, marginalidad e ilegalidad, y fomentar una economía propia y un modelo de desarrollo generado desde las poblaciones. Todavía, estos procesos representan meras 'cosquillas' en las estructuras económicas que sostienen la exclusión del campesinado y no tendrán gran efectividad si no son integradas en un proceso más amplio.

En realidad, sería ingenuo pensar que el laboratorio podría cambiar las estructuras de poder que sostienen la sociedad, la economía y el sistema político colombiano y que alimentan la violencia estructural y el conflicto armado (Naranjo, 2006, p. 60). Procesos como el fomento de un desarrollo humano y sostenible, la generación de empleo, la transformación de la cultura política, el perfeccionamiento de la democracia local y de la gobernabilidad, y la generación de una cultura de la paz y del diálogo son necesariamente procesos de largo plazo y metas de larguísimo alcance y de un elevado grado de dificultad. En esta medida no son compatibles con una iniciativa de duración tan limitada como el laboratorio, ni con la limitación de medios y de recursos que este encierra (Bouchier y Barme, 2008, p. 24). Seis años de iniciativa, con recursos limitados, son necesariamente escasos, teniendo en cuenta el volumen y el peso de las carencias y dificultades.

El laboratorio de paz fue por ventura demasiado ambicioso y poco realista respecto a los objetivos que verdaderamente podía alcanzar. Sus recursos, medios y población involucrada hacen imposible tener un impacto profundo en las regiones y sus estructuras (Econometría, 2007, p. 13). El poder y alcance de las organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas como las del laboratorio son necesariamente limitados y no equiparables con el del poder político y económico. Como señala Barnes (2005, p. 13), detentan tan solamente "el poder de persuadir, proponer soluciones basadas en su análisis de los problemas e influenciar mediante su ejemplo y la integridad de su voz moral". Funcionan fundamentalmente como una fuerza de presión y de *lobbying* y como una alternativa moral y política (Fischer, 2006, p. 11). Difícilmente un movimiento de cariz esencialmente social podrá incidir de forma substancial en el grado de violencia directa y de militarización del caso colombiano, y de las regiones del Cauca y Nariño, razón por la cual sus esfuerzos tienen necesariamente que acompañarse por dinámicas políticas a otro nivel (McDonald, 1997, p. 135).

Los procesos puestos en marcha por el laboratorio de paz deben por lo tanto ser entendidos fundamentalmente como microespacios de experimentación-acción en términos políticos, sociales y económicos, y como elementos y espacios de desarrollo y democracia (Econometría, 2007, p. 13). Su aporte fundamental es de naturaleza simbólica y social, en cuanto un instrumento para preservar la esperanza viva y visiones alternativas en el medio del conflicto y de la adversidad. En gran medida, parte del valor del laboratorio ha sido su propuesta política, pero también su utopía.

Pero, como señala Carolina Naranjo (2006, p. 15), soñar un mundo mejor y construir uno son cosas totalmente distintas y el laboratorio de paz no puede ser valorado tan solamente en cuanto “procesos del corazón” (Franklin y Moncayo, 2004, p. 15). Sin que se plantee con impactos y resultados efectivos jamás podrá ser considerado como una alternativa real de construcción de paz y transformación del conflicto desde la base.

Sin embargo, el laboratorio ha mostrado rutas políticas, sociales, económicas y simbólicas para abordar las varias violencias y dimensiones de la violencia en las regiones periféricas del país. No ha incidido sobre los aspectos estructurales de la exclusión, pero ha generado procesos de inclusión, ha protegido y potenciado las voces de las bases, y ha establecido un vínculo y un diálogo político entre el gobierno nacional, las autoridades regionales y locales y las organizaciones de la sociedad civil con respecto a temas fundamentales para la paz.

Todavía, estos son procesos que no son transversales a las regiones, son esencialmente espacios de inclusión y participación, limitados en su expresión y alcance<sup>18</sup>. La misma visibilidad de la iniciativa es reducida en las regiones del Cauca y Nariño, más allá del contexto específico de sus proyectos con las comunidades, comprobable por un hecho sencillo: tomando un taxi en Popayán o Pasto, el nombre “laboratorio de paz” no suscita ninguna significación y es totalmente desconocido. En esta medida, superar la dimensión micro y la circunscripción local de estas iniciativas, son algunos uno de sus mayores retos.

Más que todo, el laboratorio de paz del Cauca y Nariño figuró como un ‘laboratorio’ de fortalecimiento de la sociedad civil y de la gobernabilidad, y no ha incidido

<sup>18</sup> El laboratorio trabajó en el Macizo Colombiano y en el Alto Patía con 40 mil beneficiarios y 534 organizaciones (de las cuales  $\frac{3}{4}$  se integran en proyectos del eje 3) (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 38).



(o no se pretendió que incidiera) en temas nucleares como la propiedad agrícola y el diálogo con los actores armados.

## El laboratorio de paz y la violencia directa en el Cauca y Nariño

En lo que respecta a la violencia directa, los resultados del laboratorio han sido relativamente insatisfactorios y quedaron por fuera de los objetivos planteados en su marco lógico (POG, 2004, p. 4). De hecho, no hubo un impacto visible de los procesos de reducción del alistamiento de jóvenes por los grupos armados, en la protección de las comunidades y la población frente a los actores armados, y en la reducción de los índices de violencia armada.

El Cauca y Nariño siguen siendo regiones en disputa territorial, con enfrentamientos frecuentes entre las fuerzas regulares del Estado, la insurgencia y grupos paramilitares, y también de fuerte incidencia violenta sobre la sociedad civil. La situación de derechos humanos se mantiene preocupante y viene agudizándose, mediante la expansión de grupos neo paramilitares como las Águilas Negras y los Rastrojos (Granada et al., 2009, p. 493).

A pesar de que el Macizo Colombiano acompañe las tendencias nacionales en la última década, en el sentido de disminución de las cifras y facetas de la violencia armada, (después de tener un pico de violencia entre 1998 y el 2000), esta tendencia es difícilmente atribuible a la acción del laboratorio de paz. Más bien se debe interpretar esta tendencia a la luz de las macrodinámicas nacionales de desmovilización de las AUC, y de hostigamiento y retracción de las FARC y el ELN en el marco de la política de seguridad democrática (Econometría, 2007, p. 51).

Todavía, tal como hemos subrayado en el capítulo anterior, este es un elemento difícilmente mensurable y un ejercicio analítico delicado; es complicado cuantificar y evaluar hasta qué punto los procesos del laboratorio de paz inciden en estas dinámicas, (Econometría, 2007, p. 51) teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de factores en causa. La disminución de la violencia armada, que tiene, en realidad, múltiples facetas y expresiones, como las masacres, los enfrentamientos armados, los secuestros, homicidios, desplazamientos y amenazas, es contingente a diversos factores.

Sin embargo, hay que destacar una dimensión de la acción del laboratorio de paz que incide sobre el tema de la violencia armada y de los actores de la guerra. Como sostiene Bouvier (citado por Naranjo, 2006, p. 50), cuanto mayor sea el grado de organización de una comunidad, menor es su nivel de vulnerabilidad frente al conflicto armado. Los procesos de empoderamiento de las comunidades fomentados por el laboratorio son factores que propician y confieren medios y herramientas de resistencia civil a los actores armados. Se han fomentado y creado espacios y procesos de organización, unión y concientización política de las comunidades y capacitación en derechos humanos que posibilitaron condiciones para solucionar conflictos por vía comunitaria y para manejar de forma más consistente la relación con los actores armados. Sin lograr incidir de forma substancial sobre las violaciones de derechos humanos y del DIH en la región, se produjeron procesos de reivindicación y exigencia de su cumplimiento, junto con las autoridades e instancias locales, regionales y nacionales, que constituyen factores de protección de las comunidades (Bouchier y Barne, 2008, p. 71; DNP, 2008, p. 109).

Asimismo, a pesar de que la iniciativa en Cauca y Nariño no presentara casos de concertación con los actores armados, como los presentados en el Magdalena Medio, el empoderamiento, movilización, organización y concientización de las comunidades es en sí mismo un factor de prevención y transformación de determinados aspectos de la violencia armada. Como señaló un miembro de ACIN (2010) con respecto a la muerte de uno de sus líderes en el Cauca, “ellos saben bien que ni todas las armas del mundo pueden contra la gente que se atreve a enfrentarlos con la palabra y la unidad”. Como ha sido plasmado en el caso del Movimiento Social de la Cordillera en Nariño, las comunidades se apropiaron de herramientas sociales y políticas que posibilitan una mejor gestión de las relaciones con los actores armados y un menor grado de sometimiento a sus intereses.

Aunque no se hayan logrados resultados significativos en términos de la reducción de la violencia directa en sus diversas expresiones, de la presencia de estos grupos en la región y de la militarización del territorio, estos procesos contribuyeron a fortalecer el tejido social frente al conflicto armado, permitiendo que se desarrollaran procesos sociales y organizaran iniciativas civiles sin el señalamiento de los actores armados, lo que, como refiere Ricardo Arteaga (2008, entrevista), hace algún tiempo era impensable en algunas zonas. La era de los masacres, como las ocurridas en la zona del Patía, en donde hace algunos años, “mataban 300 personas

y la gente se callaba o se iba”, está hoy más lejos, gracias a la integración y reacción de las comunidades frente a este tipo de hechos (Kahn, 2008, entrevista).

Por lo demás, es importante señalar que los procesos de orden cultural y simbólico promovidos por el laboratorio han sido igualmente una contribución para alejar a las personas de las dinámicas de violencia; y que los procesos socioeconómicos fomentan un mayor arraigo al territorio, una resistencia a las dinámicas de desplazamiento y alternativas a la economía del conflicto, elementos que inciden sobre la violencia en su dimensión directa, cultural y estructural.

Cabe señalar que los grupos armados, contrariamente a lo ocurrido en el Magdalena Medio, han sido en gran medida actores ausentes, tanto directa como indirectamente, de los procesos puestos en marcha por el laboratorio. Las iniciativas se desarrollaron con niveles muy reducidos de implicación, condicionamiento o involucramiento de los actores armados. La acción de la ECR y la ejecución de los proyectos no encontraron en los actores armados una fuerza mayor de bloqueo, como ha sido el caso en el primer laboratorio de paz. A pesar de algunos señalamientos por parte de las AUC y del octavo frente de las FARC, y de algunos episodios e incidentes aislados de tensión, no hubo un hostigamiento por parte de los actores armados ilegales a la iniciativa (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 26, 66). Más que todo, manifestaron inicialmente interrogantes en cuanto a los propósitos del programa y al origen de los recursos, que se disiparon en el decurso de la iniciativa y ocasionalmente, un control, cuestionamiento y condicionamiento del acceso a determinadas partes del territorio. En realidad, estos procesos de base se establecieron e implementaron en la geografía del conflicto, razón por la cual el contacto con los actores armados era inevitable.

Esta relativa ausencia de los actores armados de los procesos de base del laboratorio de paz se explica en parte por el hecho que el laboratorio de paz se situó lejos de las zonas de mayor violencia armada de las regiones del Cauca y Nariño, como son el Norte del Cauca y el Pacífico. La violencia armada, en sus variadas modalidades y expresiones, se encuentra concentrada especialmente en estas zonas, que quedaron por fuera, por criterio político, técnico o puramente financiero, del área de intervención del laboratorio. Por su ubicación, el laboratorio de paz se situó a una distancia relativa del conflicto armado, que le permitió estar en el medio de su entorno, pero con una distancia cautelosa, contrariamente al Magdalena Medio en donde el programa asentó verdaderamente sus pies en el corazón de la violencia.

Esta fue una limitación estructural y de concepción del laboratorio que se refleja en su acción e impacto.

Esta relativa ausencia de violencia armada sobre las iniciativas desarrolladas por el laboratorio de paz ha sido, indudablemente, un elemento positivo y un factor a favor de sus procesos en marcha. Todavía, merece igualmente una segunda lectura. En realidad, puede haber sido, paradójicamente, una señal o indicador de un impacto limitado del laboratorio, al evidenciar que estos procesos no han atacado directamente los intereses vitales de los grupos armados y por lo tanto no representan una amenaza para ellos. De hecho, como señala el padre Rafael Castillo (2008, entrevista), un laboratorio de paz debe ser “tan saludable como incomodo”.

Todavía, importa señalar que los procesos sociales y políticos del laboratorio de paz no estuvieron exentos de violencia armada. Se registraron diversos casos de violencia, señalamiento y amenaza a gente vinculada directa o indirectamente al laboratorio de paz, es decir, a participantes, beneficiarios, miembros y líderes de organizaciones afiliadas al laboratorio de paz. Se verificó, en particular, una incidencia sobre la población indígena, miembros del CRIC, así como de la organización campesina CIMA.

Efectivamente, los grupos indígenas son un sector social sobre el cual incide de forma especialmente aguda la violencia armada en Colombia. Al asumir, por veces de forma radical, una posición de no sumisión y resistencia a los varios bandos del conflicto, se han convertido en blancos recurrentes de la insurgencia, del paramilitarismo e inclusive, de las fuerzas regulares del Estado, especialmente en el Cauca en donde se verifican amenazas y hostigamientos sistemáticos a comunidades y líderes indígenas, afiliados en la mayoría de los casos, al CRIC.

Todavía, la generalidad de estos casos no configura un vínculo directo con los procesos del laboratorio de paz. Como refirió Constanza Kahn (2008, entrevista) funcionaria de Asopatía, “cayeron algunos que estaban con nosotros en algunos proyectos, pero no por estar participando en el laboratorio, sino por su proceso de liderazgo”. Estas situaciones y casos no se ven directamente relacionados con las intervenciones del laboratorio de paz, sino más bien con las dinámicas y procesos de movilización social que este acoge, como es el caso del movimiento indígena en el Cauca. Los actores armados no han hostilizado los proyectos desarrollados por el laboratorio de paz *per se*, sino algunos líderes sociales de las regiones que estaban

asociados a la iniciativa y que afectaban las posiciones de los grupos al margen de la ley (Ríos, 2008, entrevista).

Asimismo, el tema de los actores armados se vio distante de la cotidianidad y de la intervención política del laboratorio de paz debido a los —previamente mencionados— cambios verticales en el segundo laboratorio de paz y en la coyuntura nacional. Por decisión política del gobierno central, no se pusieron en marcha iniciativas del mismo cariz que los “Espacios humanitarios” del primer laboratorio de paz. Se prohibió cualquier tipo de interlocución formal y concertación con los actores armados y por lo demás, se excluyeron del ámbito geográfico de intervención del programa iniciativas de resistencia civil en curso en el Cauca y Nariño, específicamente en el norte del Cauca y la zona del Pacífico, como La zona de convivencia pacífica de La María Piendamó (Cauca).

## Los Laboratorios de Paz I, II y III: La unidad y diversidad en los laboratorios de paz. Un estudio comparativo entre el laboratorio de paz del Magdalena Medio y el del Macizo Colombiano y Alto Patía

“Deus não tem unidade, como a terei eu?”

*Fernando Pessoa*

Uno de los aspectos fundamentales e innovadores traídos por los laboratorios de paz, concebido desde la propuesta y filosofía del PDPMM, fue su perspectiva y programa de descentralizar la construcción de paz en Colombia y construir una vía regional para la paz en el país, desde la especificidad de cada región y su escenario de conflicto. Esta concepción estuvo en la base del desarrollo de los tres laboratorios de paz en Colombia, así como de casi dos decenas de PDP, con procesos sociales, actores y dinámicas distintas, pero con un horizonte y objetivos comunes y una base metodológica y conceptual similares.

Esta sección del capítulo pretende analizar y subrayar la unidad y diversidad en los laboratorios de paz, teniendo por base fundamentalmente los dos estudios

de caso sobre los cuales se desarrolló la investigación: el laboratorio de paz del Magdalena Medio y el del Macizo Colombiano. Sin que pretenda ser un estudio comparativo exhaustivo entre el primer y el segundo laboratorio, busca destacar algunos aspectos de convergencia y divergencia entre los procesos de construcción de paz en las regiones del Magdalena Medio y del Macizo Colombiano, y también introducir algunos elementos comparativos de los casos de los laboratorios de paz del oriente antioqueño y de Norte de Santander, que subrayan la unidad y diversidad en los laboratorios de paz y agregan elementos a la reflexión y al análisis de la iniciativa como instrumento de construcción de paz positiva desde la base.

Efectivamente, hay unidad y diversidad en los laboratorios de paz. Partiendo de una base común, los procesos de construcción de paz en las diversas regiones donde han sido puestos en marcha evidencian elementos diferenciados. No se puede mirar los ‘laboratorios de paz’ como una iniciativa y programa único. Los laboratorios del Magdalena Medio y del Cauca/Nariño, así como los demás programas en el oriente antioqueño, en el Norte de Santander, el Meta y Montes de María, encierran características propias y particulares, derivadas de la especificidad política, cultural y étnica de cada región, de sus contextos distintos, de las características específicas del conflicto armado en estas regiones, de los diferentes actores y protagonistas de las iniciativas, y del marco diferenciado del primero, segundo (y tercer) laboratorio de paz. Por lo tanto, se evidencian diferencias substanciales en los procesos sociales puestos en marcha que se traducen en prioridades y énfasis políticos diferenciados, en las diferentes relaciones establecidas con la institucionalidad y los actores armados, en grados de incidencia distintos en el territorio y en bloqueos y procesos de participación diversos (García y Sarmiento, 2002).

Homologable y transversal a todas estas experiencias es la filosofía y la *praxis* que las sostiene, y los escenarios graves de violencia armada y estructural en que se desarrollan las iniciativas, que son comunes a todas las regiones. Todos los laboratorios de paz se han generado y puesto en marcha en regiones relativamente periféricas, que evidencian carencias profundas a nivel institucional y de desarrollo, elevados niveles de exclusión política, socioeconómica y regional, presencia de grupos armados ilegales y panoramas críticos de violaciones de derechos humanos y de violencia armada en sus variadas formas y modalidades.

De igual forma, son regiones en donde estaban en curso procesos sociales de resistencia al conflicto y había un potencial de desarrollo de propuestas de paz y

desarrollo, alternativas a las ofrecidas por el gobierno central y los actores armados, que los diferentes laboratorios de paz han recogido y absorbido y han canalizado a partir de la metodología de paz generada en el Magdalena Medio (Bayona, 2008, entrevista).

La filosofía y enfoque para la paz concebidos desde el PDPMM se replicó en el segundo y tercer laboratorio de paz. Es transversal a todos estos procesos una estrategia integral de intervención, con base en una perspectiva holística y multidimensional de la construcción de la paz, un énfasis en la dimensión económica, y en el tema de la participación social y comunitaria, y una incidencia en la inclusión de los sectores sociales excluidos, en el fortalecimiento de la sociedad civil, en el fomento de procesos de desarrollo humano y sostenible, en la articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad y en el fortalecimiento del Estado y de la gobernabilidad desde abajo.

Asimismo, está en la base de los procesos de los diversos laboratorios de paz una metodología participativa, aun cuando esta se haya visto reducida por el cinturón de los procedimientos administrativos de la cooperación europea al desarrollo y la relativa burocratización de los procesos sociales. Todos los laboratorios de paz han promovido espacios y vías efectivas para la participación social y ciudadana y la inclusión a nivel político, social y económico, considerados como elementos fundamentales a la generación de condiciones para una paz y un desarrollo dignos.

Otro elemento transversal a todos estos procesos es la población beneficiada. Aunque con matices en cada región, los laboratorios de paz han trabajado fundamentalmente sectores de la población marginados y excluidos, con especial énfasis en los campesinos. En el Magdalena Medio se trabajó especialmente con comunidades campesinas y sectores económicos urbanos marginados; en el Macizo Colombiano y en el Alto Patía se destacó el involucramiento de sectores indígenas y afro descendientes, pero también estuvieron representados los campesinos; en el oriente antioqueño las asociaciones de mujeres han desempeñado un rol determinante, mediante la acción de organizaciones como AMOR e iniciativas como “De la casa a la plaza”. En el Norte de Santander tuvo particular relevancia la red de jóvenes.

De igual forma, los ejes y líneas de intervención de los laboratorios de paz fueron similares en los tres laboratorios y comunes en las tres regiones que acogieron el segundo laboratorio de paz. Conformaron una estrategia multidimensional triangular, que pasó fundamentalmente por un componente político y de derechos

humanos, una línea social e institucional de fortalecimiento de la sociedad civil y de la gobernabilidad, y por un eje socioeconómico, con base en procesos de desarrollo campesino y humano.

Hay un modelo común de intervención, con base en alianzas de organizaciones sociales, en el apoyo a la población excluida, vulnerable y pobre, en una metodología de participación y en metas de desarrollo integral. Pero no hay un modelo estándar de desarrollo y paz (Luna, 2008, entrevista). Los procesos se basaron en las dinámicas de cada región y en propuestas regionales y locales de paz y desarrollo, que se formularon y se desarrollaron a partir de actores sociales con arraigo al territorio (Moncayo, 2008, entrevista).

Son programas y procesos con una escala regional o subregional de intervención y con un referente territorial definido que no siempre coincide con las divisiones político-administrativas, y en esta medida, contribuyen a la construcción de nuevas configuraciones del territorio y visiones de región, más consonantes y coherentes con la esencia de los territorios y las aspiraciones de sus pobladores.

En lo que concierne a los dos estudios de caso de esta investigación, los laboratorios de paz del Magdalena Medio y del Cauca/Nariño, se evidencian diversos elementos disonantes y contrastantes, pero también aspectos que acercan los dos procesos sociales y rasgos comunes y análogos. En primer lugar, en ambos casos los liderazgos de los procesos pertenecen a sectores progresistas de la sociedad colombiana, políticamente marcados a la izquierda, con lecturas análogas del conflicto colombiano y sus causas: valorizan factores como la inequidad y la exclusión política y socioeconómica como causas profundas del conflicto, preconizan una agenda de reformas estructurales como esencial para la paz en el país, y vehiculan una oposición frontal y una lectura crítica del enfoque para la paz corporizado por la política de seguridad democrática.

Otro elemento que acerca las dinámicas sociales en el Magdalena Medio y en el sur del país es que sus procesos tienen por base regiones con un patrimonio histórico acumulado de movilización y organización social y una tradición de protesta y reivindicación política, especialmente en el caso del Cauca y del Magdalena Medio, que los laboratorios de paz recogieron e integraron. De igual forma, la metodología participativa puesta en marcha por el PDPMM con base en los núcleos de pobladores, que figuró como uno de los ejes fundamentales de la dinámica en la región del



Magdalena Medio, encuentra un paralelo en los planes de cida en el Cauca y Nariño, aunque estos encierran contornos y encuadramientos distintos.

Pero hay también diversos aspectos y componentes en que los dos estudios de caso divergen y presentan características muy diversas. En lo que concierne a las características de la geografía de estas regiones, se debe señalar que tanto el Magdalena Medio como el Macizo Colombiano son entidades territoriales bastante complejas, que encierran contradicciones internas, una diversidad cultural y comparten elevados grados de exclusión y zonas profundamente periféricas. Adicionalmente, el componente étnico de Cauca y Nariño, con la presencia de comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes, confiere una marca específica a su dinámica, que la distingue del Magdalena Medio, pero también del Norte de Santander y del oriente antioqueño, al propiciar procesos de etnodesarrollo, la utilización de mecanismos tradicionales de participación, y la recuperación de prácticas ancestrales (Pastrana y Aponte, 2006, p. 20). Es indudablemente, uno de los principales trazos distintivos del laboratorio de paz del Cauca y Nariño.

Pero, por encima de todo, se evidenció una diferencia substancial entre los procesos en el Magdalena Medio y en el Macizo Colombiano, que deriva de la verticalización de la iniciativa y cooptación relativa, agenciada por los actores de alto nivel en el segundo laboratorio. Contrariamente al caso del primer laboratorio de paz, en el cual el PDPMM fue la principal fuerza motriz, el protagonista y arquitecto de la iniciativa y logró mantener una, casi plena autonomía en el proceso, en el segundo laboratorio de paz hubo una mayor dispersión de roles y distribución de responsabilidades, funciones y concepciones de paz. De hecho, ha habido en los laboratorios de paz una tensión entre la autonomía y la cooptación, que verifica intensidades y equilibrios distintos entre el primer y segundo laboratorio.

Si en el Magdalena Medio fue delegada a la CDPMM toda la ejecución y puesta en marcha de la iniciativa, la situación en el segundo laboratorio de paz fue bien distinta. Esta ha sido supra-coordinada por la sede de Acción Social en Bogotá, que se ha reservado las competencias de desembolso de los recursos. Así, mientras la ejecución de los recursos y el control administrativo estaba descentralizado en el primer laboratorio, en el segundo pasó por el filtro y la intermediación del Estado, lo que le quito autonomía y capacidad de intervención a los procesos regionales. Efectivamente, en el segundo laboratorio de paz hubo un peso e intervención bastante más fuertes y marcados del gobierno nacional. Si en el caso del primer laboratorio de paz ni la

UE ni el gobierno nacional han sido de ninguna forma artífices o arquitectos de la iniciativa y el programa fue delineado e implementado casi integralmente por la CDPMM en diálogo directo con la UE, en el segundo laboratorio hubo un mayor sello de injerencia de Bogotá.

Así que este proceso de ‘verticalización’ de la iniciativa llevó fundamentalmente a diferentes grados de autonomía entre el primero y segundo laboratorio de paz: el laboratorio de paz del Magdalena Medio fue construido sobre la base de la experiencia del PDPMM y el equipo de la CDPMM y en esta medida, detentó elevados niveles de autonomía y más capacidad de manejo. En cuanto al segundo laboratorio de paz, configuró un esquema de organización más complejo. Hubo una cierta dispersión del poder, compartido entre las ECR, Acción Social, la UE y los comités directivos. En el caso específico del Macizo Colombiano, se agrega a esto un grado más de complejidad, derivado de la particularidad de su unión temporal en sus arreglos institucionales, conformada entre dos organizaciones de carácter y naturalezas radicalmente distintas. Así, el grado de autonomía y de protagonismo de la sociedad civil regional fue bastante menor en el segundo laboratorio que en el primero, razón por la cual este –se puede decir– es una iniciativa de construcción de paz desde la base, pero sometida a intermediaciones directas que le restaron capacidad de intervención de los actores sujetos de la iniciativa.

Esta situación configura un escenario y dinámica de intervención para el segundo laboratorio de paz bastante distinto del primero. Los cambios políticos en el segundo (y tercer) laboratorio de paz introducidos por el gobierno nacional y en menor medida por la UE, retiraron o suavizaron algunos de los elementos originales del enfoque para la paz corporizado por el PDPMM y traducido en el primer laboratorio de paz. La adaptación del programa a la coyuntura y trámites de la política de seguridad democrática maniató en algunos de sus aspectos fundamentales a los laboratorios de paz. Hubo una relativa despolitización de la iniciativa y retirada de peso y sustancia al primer eje del laboratorio, que figuraba como uno de sus mayores aportes y logros en el Magdalena Medio.

En particular, se cerró en el segundo laboratorio de paz el espacio para el desarrollo de iniciativas de resistencia civil y concertación con los actores armados. Hubo una prohibición explícita por parte del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, de actividades humanitarias que impliquen contacto con los grupos armados y de acercamientos o diálogos con los grupos ilegales. Si bien estas

directivas reiteraban la legítima centralidad del Estado en los diálogos de paz, cerraron el espacio para el desarrollo de “Espacios humanitarios”, que figuraban como uno de los componentes más osados, ambiciosos e interesantes del laboratorio de paz del Magdalena Medio (Molano Cruz, 2009b, p. 90). Ningún proyecto o iniciativa en el Cauca y Nariño (y en los demás laboratorios de paz) se asemeja o es comparable a la experiencia de los “Espacios humanitarios”. Por lo tanto, el eje I del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, fue sin duda alguna, más pobre que en el Magdalena Medio.

Las directivas nacionales referidas a las gestiones regionales de paz con los actores armados mitigaron el alcance de una iniciativa que pretendía descentralizar la construcción de paz y la transformación del conflicto. Los contactos con los actores de paz en el segundo y tercer laboratorio de paz fueron diminutos y encarnaron poco alcance político. No configuraron procesos políticos de acercamiento, ni de resistencia civil y se restringieron a contactos puntuales y circunstanciales, aun así manejados con mucha discreción por la dirección de los programas.

Esta dimensión y cambio en la iniciativa tuvo también particular impacto e incidencia en el oriente antioqueño. En esta región se habían desarrollado importantes esfuerzos y procesos políticos de acercamiento humanitario entre un movimiento de alcaldes y el ELN, con vista a aminorar el impacto del conflicto sobre la población civil y permitir el ejercicio del poder local, que culminaron en un acuerdo regional de paz (POG, 2004, p. 23). Sin embargo, esta dinámica, que había sido uno de los factores determinantes en la génesis del laboratorio de paz en la región, se disipó y sumergió con el cambio de coyuntura política a nivel nacional, subsumiéndose naturalmente en la dinámica social que sostiene el laboratorio de paz en la región. Como señala Fernando Valencia (2008, entrevista), director del Observatorio de Paz del Oriente Antioqueño, frente a la priorización de la vía militar y a la imposibilidad de acercamientos humanitarios, se impuso en la región la paz del vencedor y no la paz de la negociación y la intervención del laboratorio de paz quedó reducida a una inversión para atender la crisis humanitaria en la región.

Reducido el espacio para temas de paz *tout court*, es decir de violencia directa, el segundo laboratorio de paz, se vio restringido a convertirse en un programa de desarrollo regional con dimensiones sociales y de gobernabilidad acopladas (Bandini, 2007, entrevista) y a algunos temas de paz positiva, como la inclusión social y el desarrollo rural.

Pero el potencial de construcción de paz del laboratorio de paz se vio reducido en el segundo laboratorio no solo en temas de paz negativa, sino en los mismos componentes de paz positiva. Si el laboratorio de paz del Magdalena Medio se puede mirar como un proto-modelo de como pensar y construir la paz positiva desde las regiones a largo plazo, y figura como una alternativa política y social regional real, esta dimensión en el Cauca y Nariño no fue tan evidente. Aunque no desaparezca, se reduce por las diferencias de contexto, pero también por la cooptación del Estado y minimización de algunas de sus componentes.

El PDPMM tiene una intervención sobre los canales que alimentan el conflicto, particularmente mediante sus gestiones económicas y mesas de negociación con los diversos sectores sociales y económicos que intervienen en el Magdalena Medio. Esto ha convertido al PDPMM y al laboratorio de paz en un espacio privilegiado y un instrumento fundamental de transformación de conflictos a escala regional, al incidir directamente sobre los temas que han alimentando el conflicto en el Magdalena Medio, como la desigualdad en la distribución de los ingresos y, conciliar modelos de desarrollo antagónicos. Esta dimensión del laboratorio en cuanto plataforma de diálogo entre los distintos sectores económicos de la región, que encierra una importancia crucial en términos de transformación del conflicto, estuvo ausente en el caso del Cauca y Nariño, en donde han existido microprocesos de desarrollo económico y desarrollo alternativo que benefician a sectores excluidos, pero que no han integrado otras esferas del poder económico. La carencia de esta dimensión en el segundo laboratorio mitigó el potencial de la iniciativa y su capacidad para intervenir sobre las causas profundas del conflicto y los canales sustentadores de la violencia.

En realidad, el laboratorio de paz del Magdalena Medio parte de un diagnóstico profundo y exhaustivo de los problemas de la región y de una claridad sobre la vía política, social y económica a seguir para enfrentarlos. Esta tiene como base la masa crítica de su CDPMM, compuesta por sociólogos, economistas y antropólogos de gran valor, y, especialmente el liderazgo político, filosófico y conceptual de Francisco De Roux, quien ha tenido la capacidad de pensar la región, el país, y la región en el país, que por ventura ningún otro laboratorio de Paz ha tenido, por lo menos no de forma tan contundente. El PDPMM y el laboratorio de paz del Magdalena Medio figuraron verdaderamente como una alternativa de desarrollo y de paz para la región, y un instrumento de construcción de paz positiva en el marco de las problemáticas y especificidades de la región.

En los demás laboratorios de paz, esto se ha logrado apenas parcialmente y a pesar de sus procesos sociales de gran valor, los programas nunca se han convertido de forma tan consistente en alternativas para las regiones. Hubo grados de madurez diferenciados de los laboratorios de paz, que se tradujeron en resultados e impactos distintos. Efectivamente, el laboratorio de paz del Magdalena Medio, con base en el PDPMM, es un proceso más maduro y consolidado, no solo en sus procesos sociales, sino conceptual y políticamente.

De igual forma, la ECR del laboratorio de paz del Cauca y Nariño no ha logrado asumir un papel, en cuanto actor político en las regiones, comparable al de la CDPMM. No solo la unión temporal entre dos entidades de carácter perfectamente distintos se reveló artificial y complicó esta función, sino que los procedimientos burocráticos exigidos por la cooperación europea sobrecargaron el equipo y centralizaron su labor en la dimensión técnica, en detrimento de su función política y social en la región. Contrariamente a la CDPMM que es un protagonista y actor fundamental en la región, con una gran capacidad de convocatoria e interlocución con las diversas instancias políticas, sociales y económicas del territorio, así como los líderes que la conforman, como Francisco De Roux, y Ubencil Duque, que cuentan con un elevado grado de legitimidad en el territorio, la ECR del laboratorio de paz del Cauca y Nariño tuvo dificultad en asumirse como una entidad convocante, con capacidad de iniciativa política, más que una entidad coordinadora, de supervisión y administración de proyectos. En cuanto la CDPMM es una entidad eminentemente política, que asume un liderazgo social en el territorio, la ECR del laboratorio de Paz del Macizo (tal como del oriente antioqueño y del Norte de Santander) fue una entidad eminentemente técnica, que asumió una dirección administrativa y operativa, pero no necesariamente política y social. En este marco se verificó una relativa atomización y fragmentación de los proyectos y de iniciativas de base, sin una coherencia, ni una integración a un propósito y un horizonte político común, volviéndose una sumatoria de proyectos, más que programas o laboratorios de paz (Valencia, 2008, entrevista).

El CRIC hubiera podido desempeñar este rol político de convocatoria y liderazgo y de cierta forma, lo asumió, pero tan solamente en el marco restringido de las comunidades indígenas del Cauca y fuera del marco del laboratorio de paz, en el cual tuvo un interés limitado. Efectivamente, esta organización tiene un rol en la región del Cauca de cierta forma análogo al del PDPMM: es un motor de transformación social y un vehículo de reivindicación, con capacidad de colocar temas en la agenda

política y cuestionar los modelos de desarrollo y de política vigentes, así como de presentar alternativas políticas efectivas en campos como la participación política y los cultivos de uso ilícito; es por lo demás un actor con expresión y base de apoyo en el territorio, que presenta elevados grados de autonomía frente a los actores armados, a veces con costos elevados. Sin embargo, el CRIC no salió de su esquema y posición en cuanto organización indígena para posicionarse como un verdadero líder de los movimientos sociales en el territorio (Vincenti, 2008 entrevista). Aunque converjan en ciertos momentos en torno del CRIC diversos movimientos sociales, el CRIC no deja de ser una organización indígena direccionada para indígenas y que en esta medida, no tiene ni la capacidad, ni la voluntad de posicionarse frente a la lucha por la paz. Está centrada en otras banderas y en su propia identidad, lo que de cierta forma lo alejó de la cotidianidad y problemáticas del laboratorio de paz. De igual forma, en el caso de Asopatía, a pesar del rol importante desempeñado por su director, la organización se vio limitada por su complejidad en cuanto se trata de una organización de municipios cuyos interlocutores son los alcaldes. Así, el nivel de implantación de los procesos ha sido superior en el Magdalena Medio que en las demás regiones. A su favor tiene un tiempo de intervención superior, pero también una mayor visibilidad de sus liderazgos, en particular de Francisco De Roux.

Un elemento que ciertamente contribuye para que esta situación se dé y que configura una singularidad del laboratorio de paz del Macizo Colombiano se deriva del hecho de que, contrariamente al Magdalena Medio y a los demás laboratorios de paz, en donde la iniciativa fue construida sobre la base de un PDP en curso, en el caso del Macizo Colombiano y del Alto Patía, no preexistía un PDP consolidado en el territorio donde se instituyó el laboratorio, tan solamente organizaciones y procesos sociales como los desarrollados por el CRIC y Asopatía, con un cariz distinto, aunque el CRIC detentaba (por lo menos formalmente) el estatuto de PDP e integraba la Redprodepaz.

Por lo demás, los medios y recursos del laboratorio de paz del Magdalena Medio fueron considerablemente superiores a los del segundo laboratorio de paz, que se vieron además divididos y compartidos entre tres regiones. Este diferencial de recursos financieros es notorio en los presupuestos de los dos laboratorios, pero también en sus equipos, que fueron más reducidos.

Otro elemento que diferenció al laboratorio de paz del Magdalena Medio, no solo del laboratorio del Macizo Colombiano, sino de los demás laboratorios y PDP

en Colombia, fue su relación con Bogotá y el poder central. El PDPMM tiene una capacidad de interlocución con las altas esferas del poder político y económico colombiano sin parangón en los demás laboratorios de paz, lo que convirtió al laboratorio en un canal de comunicación y un instrumento de intermediación entre las necesidades de las comunidades locales de la región y el Estado. El laboratorio de paz del Cauca y Nariño, como los demás laboratorios de paz, constituyeron de forma similar al primer laboratorio, una plataforma de articulación e interlocución con la institucionalidad, pero se limitaron y se circunscribieron a la esfera local, regional e institucional, lo que limitó sus alcances.

Otro factor que imprimió diferencias substanciales a las dinámicas de los distintos laboratorios de paz y que está íntimamente relacionado con el elemento anterior son los liderazgos. El liderazgo de las iniciativas es uno de los factores que estructura, limita o potencia los procesos. Ha habido liderazgos diferenciados en los laboratorios de paz: liderazgos con más o menos poder de convocatoria y movilización en los territorios, con menor o mayor carisma, con más capacidad de intervención política o con perfiles más técnicos, con mayor o menor capacidad de interlocución con el poder político y el poder armado, liderazgos que se tradujeron en procesos más horizontales y con más capacidad para empoderar, y liderazgos más verticales. Estos elementos y diferencias imprimieron matices y características propias a cada proceso regional.

En este ámbito, hay un elemento determinante que diferenció el laboratorio de paz del Magdalena Medio del laboratorio de paz del Macizo Colombiano y de los demás laboratorios. La dirección del padre Francisco De Roux imprimió una capacidad singular y dinámica propia a los procesos, que los demás programas no han dispuesto. Como se subrayó en el capítulo anterior, Francisco De Roux, por su carisma, su condición de sacerdote, su fuerza moral e intelectual y sus conexiones políticas, posibilitó al laboratorio de Paz del Magdalena Medio un grado de interlocución con el gobierno nacional, como ningún otro programa ha dispuesto, pero también una capacidad de diálogo y gestión con los diversos actores armados que tampoco está al alcance de los demás laboratorios de paz. Francisco De Roux es una figura respetada y oída por los más diversos sectores políticos en Colombia. En esta medida, el laboratorio de paz del Magdalena Medio, por su intermedio (pero en cierta medida también de Miriam Villegas) ha tenido libre acceso a un circuito de la élite política de Colombia. Como señala Mauricio Katz (2008, entrevista),

Francisco De Roux es un personaje nacional e internacional. Tiene contacto directo con los embajadores, con los ministros, con el presidente y la casa presidencial; tiene contacto con buena parte de las más importantes ONGs europeas, lo atiende el secretario general de la Caritas francesa, el director para América Latina de USAID le pasa al teléfono y cualquier otro de los directores regionales de los laboratorios es un pobre mortal.

Él mismo asume esta realidad y reconoce que “los otros laboratorios no tienen el “juego” que nosotros tenemos” (De Roux, 2007). De Roux ha sido un puente y un intermediario entre los diferentes niveles de la pirámide del conflicto descrita por Lederach (1997). Confiere un poder de conexión del nivel de base a las altas esferas de decisión, del que los demás laboratorios no disponen. En esta medida, la dimensión del laboratorio de paz como plataforma de diálogo interinstitucional fue superior en el caso del Magdalena Medio que en el Cauca y Nariño y en los demás laboratorios, por lo menos en lo que toca al gobierno central.

No obstante, la presencia y ‘co-habitación’ en los comités directivos del segundo laboratorio de paz de organizaciones sociales de base y de representantes del gobierno (particularmente de Acción Social) fue meritoria y no debe ser despreciada, al significar un vínculo directo y un mecanismo de diálogo entre las bases y el poder central, aunque revistiendo contornos y densidades distintas a las evidenciadas en el Magdalena Medio.

En el caso de las relaciones con el poder local y departamental, se evidenciaron niveles similares de articulación e interlocución, aunque diferenciadas en el espacio y el tiempo: en el oriente antioqueño la iniciativa ha tenido una presencia y respaldo fuerte de las instituciones regionales, en particular de la gobernación de Antioquia (Chica, 2008, entrevista); en el Norte de Santander el nivel de articulación fue menor; en los casos del Cauca y Nariño esta sufrió una evolución a lo largo del periodo de ejecución del laboratorio, que varió del respaldo, afinidad y convergencia iniciales con las gobernaciones de Floro y Parmenio Cuellar, a una oposición frontal y choque con el programa durante el mandato de Juan José Chaux y de una mediana interlocución en el actual panorama político en el Cauca y Nariño.

Lo mismo se aplica al campo de las ‘gestiones de paz’ a nivel local y regional con los actores armados. A pesar de los liderazgos de gran valor y del gran compromiso personal y político con los procesos de Álvaro Gómez Cerón (coordinador



técnico Regional de la ECR) y Carlos Santacruz (director de Asopatía) en el Cauca y Nariño, este tipo de acciones e intervención les estuvieron vedados, quedando lejos de su capacidad y alcance. Como ha sido reconocido por los líderes e intervinientes de los varios procesos regionales, ningún otro laboratorio sino el del Magdalena Medio y ningún otro líder sino Francisco De Roux, tiene la capacidad, pero también la 'libertad' para encarar diálogos políticos con los actores armados, sin que este acto sea objeto de una criminalización. La condición de religioso de Francisco De Roux ha sido crucial en este ámbito, pues permitió al gobierno central aceptar o tolerar sus gestiones con los actores armados bajo la denominación neutral y no comprometedor de 'diálogos pastorales'. No obstante, hubo algunos contactos y diálogos con actores armados en algunos de los laboratorios de paz, pero que no asumieron la forma de diálogos políticos y humanitarios o de gestiones de paz a nivel regional. Por lo demás, se hicieron por debajo de la mesa, pues este tipo de acciones fueron tildadas, durante la administración Uribe, de acción criminal.

Efectivamente, la naturaleza, características y trayectos de los líderes y actores involucrados en los laboratorios de paz y especialmente los que conforman sus ECR, crearon especificidades en cada uno de los laboratorios de paz.

En este campo, la participación de la Iglesia es uno de los principales factores diferenciadores de los laboratorios de paz y PDP. La mayoría de los laboratorios de paz y PDP en Colombia tienen a la Iglesia Católica como base y principal fuerza de sustentación. Como ha sido subrayado en el capítulo anterior, esta es por ventura la institución en Colombia que encierra más credibilidad a los ojos de la población colombiana. Tiene un amplio poder de convocatoria, y permite un más fácil acceso a los territorios y a la población y un cierto blindaje e inmunidad en los procesos. La figura de la Iglesia y de los sacerdotes tiene una carga simbólica profunda en un país profundamente devoto, incluso entre la insurgencia supuestamente más laica y atea. En esta medida, los laboratorios de paz con una presencia y liderazgo de la Iglesia, como es el caso del laboratorio de paz del Magdalena Medio, de Norte de Santander y de Montes de María, asumieron contornos particulares (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 29). De igual forma, esto imprimió a la dinámica del laboratorio del Cauca y Nariño, de cariz laico y más connotado, y con base en los movimientos sociales campesinos e indígenas, una marca distinta, siendo en particular, un laboratorio con mayores dificultades para dialogar con el poder político central y con los grupos armados ilegales.

Sin embargo, hay que señalar que existieron presencias diferenciadas de la Iglesia en los distintos laboratorios de paz. En realidad, la Iglesia Católica en Colombia no es monolítica, hay diferentes Iglesias a su interior. En particular, se evidencian diferencias de relevo entre el rol y la concepción política y social de la Iglesia en el Magdalena Medio y el Norte de Santander. Si en el Magdalena Medio estamos frente a sectores progresistas de la Iglesia Católica, fuertemente marcados en su filosofía y praxis por la teología de la liberación, y se encuentra una diócesis de Barrancabermeja activa socialmente, constituida en torno a comunidades religiosas, e interviniente en temas del conflicto armado; en el Norte de Santander encontramos una Iglesia más conservadora, con una concepción más convencional y tradicional del trabajo religioso y social. Mientras en el Magdalena Medio hay una iglesia más ‘de la vereda’, en Norte de Santander encontramos una iglesia ‘más de la sacristía’, es decir, más ceremonial y ritualista y menos social y política. Asimismo, mientras en el Magdalena Medio se asume una posición ecuménica y abierta a diferentes sectores laicos, en el Norte de Santander se adoptó una posición más confesional, doctrinal o incluso evangelizadora hacia la población. En los procesos del laboratorio de paz del Magdalena Medio, a pesar de la influencia de determinados aspectos de la doctrina social de la Iglesia, el recurso a imágenes y a un discurso litúrgico no es común, contrariamente a otros laboratorios de paz con presencia de la Iglesia, como Montes de María y Norte de Santander. En el caso de Norte de Santander (y en cierta medida de Montes de María), la iniciativa se ha asumido de forma más clara y manifiesta como un programa de la Iglesia católica, siendo bastante permeado por un discurso, una concepción y una metodología religiosa. Consornoc, asociada a la diócesis de Nueva Pamplona, ha promovido un programa dirigido a católicos, con un cierto grado de marginalización de sectores y organizaciones no creyentes o no practicantes; no ha estimulado un espacio plural e integrador de participación con los diversos sectores de la región, al contrario de los demás laboratorios, favoreciendo preferencialmente a beneficiarios católicos.

Efectivamente, los actores en la base de cada laboratorio determinaron en gran medida la naturaleza de sus procesos regionales. Las diferentes ECR, si bien partieron de una base común, de objetivos similares, y en el caso del segundo laboratorio de paz, de una misma guía y plan operativo global, encerraron matices operacionales y conceptuales y diferencias en lo que toca a los enfoques para la paz, los acercamientos al tema del conflicto armado y las concepciones políticas e ideológicas que vehiculan.

La premisa y propuesta de construir paz por intermedio de procesos regionales de desarrollo y de inclusión ha sido integrada en los demás laboratorios y es transversal a su filosofía, pero hubo matices en los ingredientes de la 'receta de paz' diseñada originalmente en el Magdalena Medio. Se evidenciaron énfasis y prioridades diferenciados entre los diversos laboratorios de paz, que, aunque se encuadraron en una perspectiva integral, holística y multidimensional de la paz, se distribuyeron de forma distinta en cada proceso regional, de acuerdo a la sensibilidad y valoración política de cada entidad coordinadora.

Es en este marco que en el Norte de Santander la educación y la cultura fueron priorizados como las vías fundamentales para la paz, lo que se tradujo en un énfasis claro en el trabajo con los jóvenes y niños y en una atención especial a proyectos del eje I, de promoción de una cultura de paz y de convivencia pacífica (Bouchier y Barme, 2008, p. 52). En el Magdalena Medio los temas del desarrollo campesino, de la economía solidaria y de la resistencia civil al conflicto fueron particularmente fuertes y evidentes. El oriente antioqueño apostó, de forma análoga al Magdalena Medio, a los componentes económicos y productivos como camino para alejar a la gente del conflicto, pero le ha imprimido una tónica distinta, menos politizada, con lógica menos 'campesinista' y una racionalidad más empresarial y técnica, que puso énfasis en elementos como las líneas de comercialización, las cadenas productivas y los términos de mercado. En el Macizo Colombiano los temas étnicos, ambientales y de fortalecimiento del tejido social tuvieron un peso determinante y singular comparativamente a los demás laboratorios.

De igual forma, las dinámicas de participación en estas regiones han sido diferenciadas. Si en el Magdalena Medio, en el oriente antioqueño (y en Montes de María) los proyectos en el área de los derechos humanos tuvieron mayor nivel de participación y beneficiarios, en el Macizo Colombiano y en Norte Santander, hubo mayor participación en proyectos de desarrollo productivo (Econometría, 2007, p. 22).

Sin embargo, los procesos de base en los diversos laboratorios de paz encerraron también muchas similitudes y elementos comunes en las dinámicas de inclusión, participación y empoderamiento que pusieron en marcha, así como en los bloqueos y obstáculos con que se enfrentaron; por ejemplo, la dinámica perversa de conversión de procesos e iniciativas sociales en proyectos financiados por la cooperación al desarrollo europea que incidió de forma negativa y similar en las diversas regiones, como se deduce de las palabras de Benjamín Cardona (2008,

entrevista), de la ONG Conciudadanía, del oriente antioqueño, que señala que el laboratorio de paz robó los mejores líderes a la región, al ocuparlos en procedimientos y al estimular una cultura de proyectos en detrimento de una cultura de la planeación y articulación.

De igual forma, en su nivel más alto, se evidenciaron algunos elementos comunes y transversales, pero también lógicas, agendas y prioridades diferenciadas. La naturaleza de la ECR condicionó y determinó en gran medida los procesos y dinámicas sociales. El hecho de que esta tenga un tinte o perfil más técnico o político, más corporativo o religioso, se plasma en los métodos de implementación y las dinámicas regionales. Asimismo, toca también señalar que aunque haya un enfoque y una filosofía de paz comunes a los laboratorios de paz, se evidenciaron matices conceptuales y diferencias de postura política entre las entidades coordinadoras de cada programa regional. Si bien en los actores que lideraron y sostuvieron los procesos en el Magdalena Medio y en el Cauca y Nariño, es decir la CDPMM, el CRIC y Asopatía, hay una notoria ubicación política de izquierda que se refleja en el discurso y la postura de las organizaciones, y se ha traducido en un énfasis en las causas profundas del conflicto armado y una crítica manifiesta al enfoque para la paz protagonizado por la política de seguridad democrática, la situación fue distinta en los demás Laboratorios.

El caso más contrastante y divergente fue el de Norte de Santander, en el cual el liderazgo de Consornoc, asociado a un sector tradicionalista de la Iglesia Católica, encerró modalidades políticas y concepciones algo distintas de la filosofía y praxis original del PDPMM. Consornoc tiene una visión muy asistencialista y humanitaria de su misión social, como benefactora para los pobres. En su discurso y práctica, su intervención en la región es fácilmente confundible con la noción tradicional de la Iglesia de la caridad, lo que es difícilmente encuadrable en un marco de transformación del conflicto y en las concepciones y finalidades de emancipación, empoderamiento y justicia social que preconizan el PDPMM y la ECR del Macizo Colombiano. La filosofía de paz del laboratorio de paz, como concebida y estructurada en el Magdalena Medio, encontró menos expresión en Norte de Santander, en donde el programa se confunde fácilmente con una pastoral social con recursos de la cooperación internacional. Aunque la iniciativa haya producido resultados benéficos en varias áreas, como la cultura de la paz, este caso evidencia la dificultad de reproducir o exportar un ‘modelo’ de paz por fuera

de su contexto y experiencia original y evidencia las posibles distorsiones y filtros que se producen en el camino.

Estas diferencias políticas, conceptuales, filosóficas e ideológicas se manifestaron, por lo demás, en una lectura divergente de las políticas por la paz vigentes en ese período a nivel nacional en Colombia y en la relación con el poder central. Consornoc asumió más fácil y acríticamente el programa de gobierno que los demás laboratorios de paz. Hubo en el caso norte santandereano una identificación, convergencia y alineamiento notorios con el gobierno nacional, en detrimento del diálogo crítico con Bogotá que establecieron los otros laboratorios. Hay efectivamente una postura política diametralmente distinta de Consornoc frente a las demás ECR. Esta es una organización que se declara como apolítica y neutral, y que señala que no hace pronunciamientos políticos, lo que revela una actitud radicalmente opuesta a la forma de estar e intervenir del PDPMM, del CRIC y Asopatía. Encierra de cierta forma, una equivocación, en la medida en que estos procesos son eminentemente políticos, se articulan con la gestión de los destinos de las sociedades regionales y las diferentes vías para la paz y el desarrollo en el país.

En cuanto al caso del oriente antioqueño, la composición y *background* de su ECR también imprimió una tónica propia a su dinámica. El liderazgo del proceso, que se sostuvo, por un lado, en el movimiento de alcaldes y, por otro, en Prodepaz, organización con marcada presencia del poder económico de la región, mediante la participación en su junta directiva de dos grandes empresas hidroeléctricas, Isa e Isagen, imprimió una dinámica institucional y empresarial muy característica a la iniciativa propia de la región de Antioquia. En esta medida, su postura política y enfoque para la paz fue también distinto a la de la CDPMM y de la ECR del Cauca y Nariño. Ha puesto menos énfasis en temas de cultura política y de construcción de poderes alternativos (García, 2008, entrevista) y ha apostado fundamentalmente a una dinámica económica y productiva, bajo una racionalidad empresarial. Vehicula un enfoque para la paz y una lectura política distinta a los del PDPMM, pues los procesos económicos no configuran de forma tan explícita un medio para la paz, como en el Magdalena Medio, pero también un fin en sí mismo. Asimismo, al tener detrás de sus procesos un marcado respaldo institucional, su relacionamiento con el poder político central y regional, así como con los poderes económicos, fue más cercano y cordial, aunque sin asumir la posición acrítica y de plena convergencia de Consornoc. No se opuso, ni ha confrontado las políticas

de paz del gobierno nacional (por lo menos públicamente), como en el Magdalena Medio y en el Macizo/Alto Patía, ni se doblegó a la postura política del gobierno nacional, como en el Norte de Santander. De cierta forma, asumió una posición intermedia y políticamente de centro.

Así, en cierta medida, si se trazara una línea política entre los diversos laboratorios de paz, como si fuera un parlamento, el PDPMM y la ECR del Macizo (y de Montes de María) estarían ubicados a la izquierda, la ECR del Norte Santander a la derecha y del oriente antioqueño (y Meta) en el centro.

Los procesos sociales son distintos en la medida que las propias culturas políticas de las regiones y subregiones son distintas. En cuanto en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio hay una cultura política contestataria y en el Cauca/Nariño una cultura de la resistencia, el panorama es diferente en el Norte de Santander y en el oriente antioqueño (o el Meta) en donde la configuración histórica de esas regiones asumió otras características. En particular, la región de Norte de Santander, contrariamente al Magdalena Medio, al oriente antioqueño y al Cauca y Nariño, no tiene un patrimonio, ni una tradición de movilización social fuerte, lo que explica en gran medida las mayores limitaciones de sus procesos. A pesar de los equívocos y errores en la dirección del programa, estas limitaciones traducen un menor grado de preparación, movilización y organización del territorio. Se debe tener en cuenta que su punto de partida fue distinto e inferior a las demás zonas de intervención de los laboratorios.

Estos factores determinan o condicionan las dinámicas de los procesos sociales, sus características distintivas, y las mismas relaciones que se establecen entre las comunidades, las organizaciones sociales, los actores armados y las autoridades públicas.

Por último, otro campo que diferencia en gran medida los procesos y dinámicas del laboratorio de paz del Magdalena Medio del Macizo Colombiano son los factores de bloqueo a las iniciativas, y en particular, su relación con los actores armados. Si bien en el primer laboratorio de paz los mayores obstáculos con que se enfrentó la iniciativa fueron externos: por un lado, la dinámica de ‘paramilitarización’ de la región en términos estratégicos y sociales, que puso el laboratorio de paz y sus organizaciones afiliadas y procesos de base en la mira de los actores armados, en particular de las AUC y de las Águilas Negras; por otro, la dinámica económica contra la cual se debatió, que va en el sentido contrario al preconizado por el PDPMM,

que pasa por la concentración de la riqueza y de la propiedad, la expansión de un modelo industrial y extensivo de los cultivos y las actividades económicas, en el caso del Macizo Colombiano y del Alto Patía algunos de los mayores bloqueos fueron de naturaleza interna y provinieron de la misma mesa del comité directivo. El laboratorio de paz tuvo un caballo de Troya en su puerta, en su interior: en primer lugar, los cambios verticales en la iniciativa y la cooptación por parte de Acción Social retiró protagonismo y autonomía a los actores de base y maniató algunos de sus procesos de intervención, retirándole diversas dimensiones de construcción de paz. En segundo lugar, el gobernador del Cauca Juan José Chaux, mientras estuvo en su cargo, buscó bloquear y restringir, por diversos medios, las actividades del laboratorio, lo que provocó varios problemas a la iniciativa.

En este campo, uno de los principales factores que distinguió el laboratorio de paz del Magdalena Medio del caso del Macizo Colombiano fue el grado de incidencia de la violencia armada sobre sus procesos y dinámicas. A pesar de que la violencia de los actores armados no estuvo ausente de los procesos de base del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, configuró un escenario perfectamente distinto al del Magdalena Medio, que se enfrentó de forma sistemática y casi cotidiana a la presión, señalamiento y amenaza de los actores armados ilegales, en particular del paramilitarismo.

En parte esta situación se explica por la temporalidad y coyunturas distintas del primero y segundo laboratorio que en el segundo caso, recogió un escenario nacional de conflicto con una insurgencia debilitada y un paramilitarismo en periodo de recomposición mediante la desintegración de las AUC, al contrario del Magdalena Medio que acompañó el periodo de expansión e implantación del paramilitarismo en la región. Por otro lado, tiene que ver con los mismos escenarios y panoramas de conflicto armado diferenciados de cada región y las dinámicas estratégicas de los grupos armados. Mientras en el Macizo Colombiano y en Alto Patía estamos delante de una región con un poder y expresión relativamente repartidos de la insurgencia, del paramilitarismo y de las fuerzas regulares; el Magdalena Medio vivió en gran parte de los años 2000, un orden político y social paramilitar, estando en el corazón de la contraofensiva paramilitar en Colombia y siendo una de las regiones del país que de forma más intensa y aguda sintió la expansión e implantación del paramilitarismo mediante el recurso a prácticas de terror y guerra sucia contra civiles.

El Magdalena Medio es de cierta forma un microcosmos del conflicto armado colombiano, al haber constituido un territorio y baluarte histórico de la guerrilla, que se convirtió en la cuna del paramilitarismo (a partir de las décadas de 1980 y 1990, pero especialmente del 2000), base para la ofensiva contrainsurgente en el país, y local de ensayo para su guerra sucia. Esto imprimió una dinámica particularmente violenta sobre la población civil de la región y los sectores que habían estado connotados con el *status quo* insurgente, como parte de las organizaciones de la sociedad civil de Barrancabermeja. Esta región dio voz a verdaderos “enclaves de odio” (Restrepo, 2008, entrevista) de determinados sectores sociales martirizados por la insurgencia, lo que se tradujo en una ofensiva violenta contra su (supuesta o real) base de apoyo.

En lo referido al caso del Cauca y especialmente de Nariño, son zonas de presencia e implantación más reciente y tibia del conflicto armado, que siempre han estado en la periferia de la violencia armada, contrariamente al Magdalena Medio, que siempre figuró como uno de los epicentros de la violencia. Están asociados a nuevas configuraciones y modalidades del conflicto armado, fundamentalmente en cuanto corredores estratégicos y zonas de expansión de los cultivos de uso ilícito. En este marco geoestratégico, el menor grado de incidencia e implantación del paramilitarismo en el Macizo Colombiano y el Alto Patía se traduce en menores niveles de masacres, violencia y terror sobre la organización social. A pesar de que los territorios bajo el control de la guerrilla no signifiquen un menor grado de sometimiento de las poblaciones, la dinámica de relacionamiento de la insurgencia con las poblaciones y sociedad civil es de un menor grado de hostilidad. Los grupos guerrilleros también limitan la organización civil, pero las organizaciones de base encuentran en el paramilitarismo una mayor amenaza (McDonald, 1998, p. 23). El paramilitarismo, bajo su estrategia de ‘quitar el agua al pez’, interviene fundamentalmente sobre la población civil y mira casi cualquier forma de asociación colectiva y movilización social como un blanco militar. Parte del proyecto paramilitar es asegurar que las personas no se organicen, a través del recurso a la violencia y al terror.

En parte, este fenómeno explica el mayor grado de victimización del laboratorio de paz del Magdalena Medio y del PDPMM, que cuentan con tres decenas de víctimas y una buena parte de sus líderes amenazados o desplazados. Estas iniciativas coincidieron con una estrategia de aniquilamiento de la dirigencia social en la región, y de consolidación de un orden paramilitar al final de la década de 1990 e



inicios del 2000. Esta situación del Magdalena Medio configura un escenario distinto del sur del país, en donde el grado de hostigamiento e incidencia sobre el capital social ha sido menor y en esta medida, las condiciones de trabajo por la paz llevan más espacio de intervención (Patiño, 2008, entrevista).

Por lo demás, en el Magdalena Medio hay modelos de país y de desarrollo en conflicto abierto. El Cauca y Nariño, a pesar del desarrollo de propuestas alternativas por el movimiento indígena y campesino y de la presión de la oligarquía local y de los actores armados, nunca han estado en el centro del choque. En esta medida, el laboratorio de paz del Magdalena Medio sitúa su intervención en el corazón del conflicto e incide directamente sobre las causas directas y profundas de la violencia. En el Cauca y Nariño, hay más bien una mitigación del conflicto y de la situación de vulnerabilidad de la población civil, en la medida en que estos territorios, a pesar del interés estratégico que encierran (en cuanto corredores estratégicos para el narcotráfico y zonas históricas de retaguardia de la guerrilla), no son regiones en el centro del conflicto, como el Magdalena Medio. En realidad, las macrodinámicas del conflicto colombiano dividen el país en dos partes. Se consumó un proceso de consolidación del proyecto paramilitar y relativo proceso de retracción de la guerrilla en el norte de Colombia, mientras que en el sur, la insurgencia mantuvo importantes zonas de control (González et al, 2003, p. 115).

Este diferencial de contextos y escenarios de conflicto configura potenciales y factores de bloqueo distintos para los laboratorios de paz del Macizo Colombiano y del Magdalena Medio. Mientras para el laboratorio de paz del Magdalena Medio, al tener sus pies en el centro del conflicto y buscar incidir directamente sobre las causas del mismo, ha potenciado oportunidades de transformación del conflicto, pero simultáneamente convirtió el laboratorio de paz en un blanco bajo presión por constituir una amenaza concreta para los actores armados y los sectores oligárquicos y terratenientes de la población, en el caso del Cauca y Nariño su labor fue por un lado, menos difícil, porque no fueron tan hostigados por actores externos. Por otra parte, su reto fue superior y su potencial más reducido, pues más difícilmente pudieron incidir en la transformación del conflicto (Restrepo, 2008, entrevista). Efectivamente, si bien el laboratorio de paz del Magdalena Medio ha tenido los pies bien asentados en el terreno, en el corazón del conflicto en la región, los demás laboratorios guardaron una cierta distancia, sea por su incapacidad de intervención, o por los trámites de concepción del laboratorio. En este marco, mientras que en el laboratorio de paz del Magdalena

Medio hubo una presión y amenazas constantes por parte de los actores armados, sobre todo paramilitares, al PDPMM y los líderes de base, en el laboratorio de Cauca y Nariño, este no fue el panorama. No se evidenció un señalamiento sistemático, ni bajas significativas en sus procesos y equipo de trabajo.

Esta diferencia de escenarios puede evidenciar que el laboratorio de paz del Magdalena Medio constituyó una amenaza directa a los intereses y dinámicas políticas de los actores armados en la región, en particular, del paramilitarismo, al contrario del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, regiones en donde la intervención del laboratorio podría encontrar tan solamente en los procesos de erradicación de cultivos ilícitos un elemento de fricción con los grupos alzados en armas. Sin embargo, en la medida en que los procesos de desarrollo alternativo y de erradicación de hectáreas de coca no afectaron de forma substancial la dinámica cocalera y del narcotráfico del que se alimentan los actores armados, estos procesos no se convirtieron en una amenaza para ellos.

En lo que respecta a la situación de los demás laboratorios de paz en su relación e inserción en los marcos de la violencia armada regionales, se debe señalar que todas las zonas en que se desarrollaron los laboratorios de paz son territorios estratégicos para los actores armados y regiones con índices elevados de violencia armada. La geografía del conflicto y de la construcción de la paz se entrecruza necesariamente, aun así se presentan escenarios regionales de conflicto armado bastante diferenciados, con variaciones significativas de la violencia en sus diversas modalidades y expresiones y con características propias que se ven reflejadas en las dinámicas de base de las iniciativas.

Todavía en este ámbito, el panorama de los demás laboratorios de paz se acerca más al caso del Macizo Colombiano que al del Magdalena Medio. Se han presentado situaciones de amenaza y de tensión con los actores armados en las varias regiones en donde se ha desarrollado la iniciativa, pues la intervención política por la paz y la movilización y empoderamiento de las comunidades campesinas pisa necesariamente, con menor o mayor incidencia, los callos a los actores armados. Sin embargo, en ninguna otra región esta ha asumido el grado de intensidad del Magdalena Medio. Como ha sido señalado por los miembros de las diversas ECR entrevistados en el marco de esta investigación, no se han presentado amenazas graves a las organizaciones coordinadoras de los laboratorios de paz y los procesos de base han tenido un relativo espacio de maniobra.

Diversos factores en los procesos regionales, además de los elementos ya mencionados, explican esta tendencia: en el Norte de Santander la debilidad de concepción del laboratorio —que lo situó al margen del epicentro del conflicto en la región, el Catatumbo— así como el carácter cauteloso, neutral y de cierta forma apolítico de su dirección, puso la iniciativa a una gran distancia, no solo de la violencia armada y de los actores ilegales, sino del mismo conflicto armado. El área de intervención del laboratorio integró municipios con niveles de intensidad bajos o medios de violencia, razón por la cual el trabajo de base se ha podido desarrollar sin mayores problemas (POG, 2004, p. 23). En el caso del oriente antioqueño, a pesar de que en el inicio de la década de 2000 la región presentaba algunos de los niveles de violencia armada, desplazamiento forzado y secuestro más elevados del país, vio estos indicadores disminuir paulatinamente, gracias a la contra ofensiva militar gubernamental y a la avanzada de las fuerzas regulares.

La heterogeneidad al interior de los laboratorios de paz, la diversidad de dinámicas sociales y la peculiaridad de cada proceso regional atestiguan en sí mismas la especificidad del caso colombiano y en qué medida, a un macroconflicto corresponde una miríada de microconflictos a nivel local y regional, con características distintas y distintivas. Asimismo, subraya que las iniciativas y procesos de construcción de paz de base son necesariamente diferenciados.

En esta medida, es legítimo afirmar que los laboratorios de paz no configuran una fórmula de paz generalizable o un modelo trasladable como una planta, entendido como un paquete de medidas políticas y sociales pre concebidas, sino más bien un enfoque para la paz que se construye a partir de su contexto y de la especificidad del territorio y sus actores. El Magdalena Medio fue un referente para el segundo laboratorio de paz y los demás laboratorios y PDP, pero estas iniciativas no constituyen réplicas del primero. De hecho, al dialogar con los intervinientes del laboratorio de paz del Cauca y Nariño, es fácilmente comprobable que el conocimiento de la experiencia del laboratorio de paz del Magdalena Medio no es profundo, no solo entre las organizaciones sociales, sino en la misma ECR. Cada laboratorio de paz y PDP se ha construido a partir de sus actores y aspiraciones, así como de las problemáticas y dinámicas del territorio. La filosofía de paz generada por el PDPMM ha sido apropiada por los procesos sociales en cada región, que desarrollan su propia experiencia. Hay unidad y diversidad en los laboratorios de paz. Tal como los heterónimos de Fernando Pessoa, que a pesar de revestir personalidades propias

y distintas, parten de un mismo impulso creativo, los laboratorios de paz tienen biografías propias y visiones específicas del mundo, pero son atravesados por una línea común.

## Conclusión

En este capítulo se expusieron y analizaron en detalle las problemáticas y vicisitudes de la creación y puesta en marcha de un laboratorio de paz fuera de su contexto y experiencias originales, en un escenario regional distinto, con especificidades y dinámicas propias, como el del Macizo Colombiano y del Alto Patía. Se puso en evidencia los diversos elementos que distancian y contrastan este estudio de caso de la experiencia del Magdalena Medio, pero también los componentes que lo acercan.

El potencial del laboratorio de paz como instrumento de construcción de paz positiva desde la base no se agotó en el Magdalena Medio y encontró diversos elementos en el Cauca y Nariño, como la metodología participativa corporizada por los planes de vida, los programas de desarrollo alternativo, con base en el cultivo de café y cacao, y las iniciativas de fortalecimiento institucional y articulación con el poder local y regional. Pero fue más limitado en este segundo laboratorio, por las diferencias de contextos sociales e históricos, su menor capacidad de interlocución con las estructuras de poder político y económico, su más limitada posibilidad de generar procesos de resistencia civil a los actores armados, y por las dinámicas de cooptación y ‘verticalización’ de la iniciativa, que robaron autonomía a los procesos y organizaciones de base y restringieron diversos componentes y elementos de la iniciativa. Siendo aún eminentemente una iniciativa de construcción de paz desde la base, hubo más intervención política desde la cima, en el Macizo Colombiano que en el Magdalena Medio.

Sin embargo, a pesar de la transformación de algunos elementos de los laboratorios de paz y de la reducción de parte de su potencial de transformación del conflicto desde la base en su segunda encarnación en el Macizo Colombiano (y en el oriente antioqueño y el Norte de Santander), esta iniciativa siguió siendo un modelo y un instrumento de referencia de construcción de paz positiva desde las

regiones, y un espacio de experimentación-acción para la paz. No obstante la tentativa de secuestro de los laboratorios de paz por la *realpolitik*, no hubo una sumisión de los procesos y actores a las directivas gubernamentales y el segundo laboratorio de paz no se convirtió en un instrumento de la política de seguridad democrática, ni en una política de Estado. Sus procesos de base, a pesar de muchas debilidades, siguieron configurando una experiencia de construcción de paz positiva, inspirada en la metodología, la filosofía y la propuesta de paz del PDPMM. El laboratorio no se sometió a la agenda política y de seguridad del gobierno y, a pesar de las dinámicas verticales introducidas, siguió siendo, tanto desde el punto de vista conceptual, como de su intervención en el terreno, una propuesta alternativa de construcción de paz positiva en Colombia desde las regiones. Permaneció siendo un modelo válido de inclusión de sectores excluidos de la población a nivel político, social, económico y cultural; un enfoque efectivo para la transformación del conflicto desde las regiones, desde su multidimensionalidad y sus causas profundas; un instrumento legítimo y relativamente eficaz de intervención en los territorios marginados del país, en la 'otra Colombia', el universo del cual emerge el conflicto armado, del cual se alimenta y sobre el cual incide de forma más aguda; y un espacio de construcción de propuestas regionales de paz y desarrollo.

En esta medida, también por todos los juegos de poder que se sintieron en el segundo laboratorio de paz, por los choques, concertaciones y articulaciones que se establecieron entre distintos actores, y por las diferencias en las dinámicas sociales y políticas que se evidenciaron, esta iniciativa ha sido un verdadero 'laboratorio de paz'.





# Capítulo





# Los laboratorios de paz: La relación entre el nivel micro de la iniciativa y el nivel macro del conflicto colombiano

“Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà.”

*Serge Gainsbourg*

## Introducción

Este capítulo se enfocará en la relación entre el nivel micro de los laboratorios de paz y los niveles macro del conflicto armado en Colombia, integrando la iniciativa en su contexto más amplio a nivel nacional. Introduce nuevos elementos analíticos que permiten evaluar mejor la especificidad del enfoque para la paz de los laboratorios y su potencial, y sus limitaciones como instrumentos de construcción de paz positiva.

Después de haber abordado en los primeros cuatro capítulos el escenario macro del conflicto armado en Colombia en que se insertan los laboratorios de paz, y de haber analizado en los capítulos subsecuentes, las problemáticas de la iniciativa en los contextos microregionales del Magdalena Medio y del Macizo Colombiano, este último capítulo pretende cerrar el círculo e integrar las dos escalas de análisis, haciendo el puente entre los niveles micro y macro de los laboratorios de paz.

Se sitúa la experiencia en el contexto macro de Colombia, buscando analizar la relación entre el nivel micro de los laboratorios de paz y el nivel macro del país. Se pretende particularmente analizar cómo una iniciativa eminentemente local y regional se ha integrado en el marco más amplio del conflicto armado nacional y de las dinámicas de resolución y gestión del conflicto, subrayando el potencial y las limitaciones de la iniciativa en este ámbito, pero también proyectando el potencial rol de los laboratorios y PDP en un posible escenario de posconflicto en Colombia.

Por último, se vuelve al marco analítico expuesto en el primer capítulo del libro, procurando situar los laboratorios de paz en las discusiones teóricas sobre la paz. Partiendo de los estudios de caso empíricos y de las problemáticas que han emergido en el terreno, se busca investigar en qué medida los laboratorios de paz desafían o convergen con los modelos y enfoques teóricos para la paz, y traen elementos de reflexión y discusión para las teorías de paz y de conflictos, especialmente los estudios para la paz. Se pretende evaluar desde el punto de vista conceptual la originalidad y singularidad del ‘modelo’ de construcción de paz de los laboratorios, tanto en el marco de los enfoques teóricos *mainstream*, como de los ‘alternativos’ e idealistas (analizados en el primer capítulo).

## Los laboratorios de paz en el contexto macro de Colombia

Cada espacio local y regional se desarrolla en una interacción dialéctica con espacios, estructuras y niveles más amplios (García, 2007, p. 5). Los procesos a nivel micro no se pueden entender por fuera de su contexto macro (González, 2004, p. 79). Las microdinámicas de violencia y construcción de paz se articulan necesariamente con las macrodinámicas del conflicto, y las transformaciones estimuladas por los procesos de los laboratorios de paz están mediadas por muchos factores externos, elementos estructurales y dinámicas exógenas. Es imposible desconectar estas iniciativas regionales de su contexto macro y del gran complejo que es el conflicto armado en términos nacionales. Cada vereda, municipio o región es parte de un todo; no se puede pensar la región sin la nación, ni las especificidades

locales aisladas de las tendencias y lógicas nacionales y de las macroestructuras de poder (García, 2008, entrevista). Por lo tanto, uno de los temas cruciales para los laboratorios de paz es la relación entre su inherente nivel micro y el nivel macro del conflicto armado y de las políticas de paz a nivel nacional.

Los laboratorios de paz son en su esencia una experiencia a nivel micro: nacieron como una iniciativa regional; se estructuraron e implementaron a partir de condiciones, dinámicas y procesos sociales locales y regionales; y se orientaron hacia grupos y sectores de la población, organizados en la escala regional, local y comunitaria. Tenían una lógica de intervención regional. Fueron programas de construcción de paz desde la base concebidos como experiencias de descentralización de la transformación del conflicto. La iniciativa concebía la paz no como un tema reservado a las élites políticas y militares, ni como un resultado de negociaciones de paz entre las partes contendientes, sino como un reto y una tarea colectivos (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 34), que atribuye a cada ciudadano y actor social un rol de protagonista en la construcción de la paz. Se buscaba transformar a un nivel micro, a partir de la especificidad de cada región y de los actores y las dinámicas sociales de cada territorio, las condiciones políticas, socioeconómicas y culturales que sostienen el conflicto y generar vías propias y alternativas para la paz.

Siempre ha sido un objetivo (manifiesto o implícito) de los laboratorios de paz transcender su radio de acción geográfica y socialmente circunscripto y hacer un puente entre el nivel micro y el nivel macro del país. A pesar de estar localizados y estructurados a un nivel local, los laboratorios de paz han tenido unos propósitos y una lógica a nivel macro. Pretendían proyectar cambios a nivel nacional y articular las diversas escalas de intervención política y de transformación del conflicto. Como verdaderos ‘laboratorios de paz’, han buscado generar ‘fórmulas de paz’ y soluciones políticas alternativas que pudieran ser replicadas y reproducidas a un nivel más amplio. La iniciativa ha sido concebida como una semilla que pudiera ser plantada en toda la extensión del territorio nacional. Proyectan propuestas a la sociedad colombiana, a los actores de la guerra y a los decisores políticos a nivel local, departamental y nacional. Ha estado siempre enmarcado en el horizonte de los laboratorios de paz colocar temas en la agenda política e incidir en las políticas públicas, en particular en las políticas de paz y de acercamiento hacia el conflicto armado.

Este es en realidad, uno de los elementos más importantes y determinantes para experiencias del tipo de los laboratorios de paz. La clave para su éxito o fracaso se

encuentra fundamentalmente en la articulación entre sus niveles micro y macro, y su capacidad para trascender su circunscripción social y territorial y tener un alcance nacional. Representa su mayor reto y el factor que determinará, en una gran proporción, el impacto y sostenibilidad del programa. De hecho, para sobrevivir, las iniciativas de paz requieren una coordinación entre el nivel alto, medio y bajo de construcción de la paz (McDonald, 1997, p. 28). La sostenibilidad de iniciativas de expresión local como los laboratorios de paz depende en gran medida de su incidencia en las esferas más altas de decisión política, pero también en la tolerancia de los grupos armados y en la permeabilidad de la sociedad colombiana como un todo. Si no hay un contagio o aceptación de la propuesta de paz que transmiten los laboratorios de paz en una escala política y social más amplia, su impacto es necesariamente limitado, o meramente localizado.

En este ámbito, toca señalar que hay un camino recorrido por estas iniciativas en el sentido de cruzar los niveles micro, meso y macro de intervención y de hacer el puente entre las expresiones y procesos sociales locales y regionales y las dinámicas macronacionales. En primer lugar, hay que subrayar que el nivel macro también ha tenido presencia en los laboratorios de paz mediante la participación de actores políticos de nivel alto en la iniciativa, como son el gobierno colombiano y la UE. Los laboratorios se revelaron como una plataforma multinivel que integraba e interconectaba los diversos escalones de la pirámide de Lederach, mediante la participación de organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales en el proceso, que iban desde las más sencillas y pequeñas organizaciones comunitarias de campesinos hasta la Comisión Europea. Los laboratorios de paz se estructuraron simultáneamente entre Bruselas, Bogotá, Barrancabermeja, Pasto, Popayán y cada municipio y vereda de las regiones en donde se implementaron. Los niveles se cruzaron e interconectaron y fueron de doble vía: hubo dinámicas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo (Barreto Henriques, 2009a, p. 53). La iniciativa se desarrolló en una dinámica de vaivén y de articulación entre la comunidad, la región, y la nación. Los niveles micro, meso y macro se cruzaron, dialogaron y se condicionaron mutuamente.

En segundo lugar, se verificó una expansión de la iniciativa y una proyección de su enfoque y metodología a nivel nacional. Partiendo de la experiencia pionera del PDPMM como referente, se han establecido y puesto en marcha durante los

últimos quince años, 18 PDP que cubren hoy gran parte del territorio nacional<sup>1</sup>, y tres laboratorios de paz, que integraron seis regiones del país. Esta es una señal del éxito, o, por lo menos, del interés suscitado por el enfoque *sui generis* para la paz de los laboratorios de paz y de los PDP en las sociedades civiles regionales, pero también en las instituciones y en la cooperación internacional, y un indicio de que se está configurando como una vía y un modelo alternativo de construcción de paz a escala regional. Se ha convertido de cierta forma en un modelo de intervención territorial con vista a la transformación del conflicto.

En tercer lugar, se estableció un vínculo entre los laboratorios de paz y el nivel macro de la resolución del conflicto a nivel nacional, mediante la participación de Francisco De Roux, monseñor Jaime Prieto y Ubencil Duque, personalidades destacadas del PDPMM, en las conversaciones de paz entre el gobierno Uribe y el ELN en La Habana y Caracas, como representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Paz. A pesar de que en ningún momento se puedan considerar los laboratorios de paz y los PDP como promotores o facilitadores de diálogos nacionales entre los actores armados y el gobierno, este es un hecho políticamente significativo, indiciador de una progresiva integración de los laboratorios de paz y sus líderes en la agenda política en Colombia y de su participación en los temas de la paz, tanto a nivel de base, como a nivel nacional.

Por lo demás, en este marco, hay que subrayar la inclusión por parte del ELN y del gobierno Uribe, del tema de los PDP en la agenda de las negociaciones en La Habana, al ser considerados por ambas partes como un potencial instrumento de relevo en la construcción de paz en las regiones, en el marco de un futuro acuerdo de paz. Se produjo un consenso entre las dos partes en cuanto a la viabilidad e interés de utilizar este modelo de intervención con base en los PDP en el marco de un escenario de post conflicto en Colombia, como ruta para superar el conflicto y los problemas estructurales de subdesarrollo y violencia en el país (Duque, 2008, entrevista; Prieto, 2008, entrevista), hecho sintomático de hasta qué punto los laboratorios de paz y PDP son vistos crecientemente como instrumentos legítimos y eficaces de construcción de paz positiva desde las regiones.

---

<sup>1</sup> Los 18 PDP cubren 22 de los 32 departamentos de Colombia y 517 de los 1.125 municipios del país. Los tres Laboratorios de Paz, incluyeron 11 de los 32 departamentos del país y una población beneficiaria de aproximadamente 3,5 millones de habitantes (DANE, 2005, citado por Herrera y Guerrero, 2008, p. 9).

Pero, en lo que respecta al tema de las negociaciones de paz a nivel nacional, es posible señalar que los laboratorios de paz son ‘facilitadores’ de un ambiente propicio a un proceso de paz negociado y a una solución política para el conflicto armado, al estimular procesos y una cultura política de resolución pacífica de conflictos y lo que Lederach (1997, p. 94) designa como una ‘circunscripción de paz’, al trabajar en temas de transformación del conflicto desde su dimensión violenta hacia un escenario cívico y democrático y generar instrumentos y procesos sociales que son útiles en el marco de un proceso de paz amplio y comprehensivo.

Otro elemento de gran importancia en el sentido de la articulación entre los niveles micro y macro de los laboratorios y de la proyección de la iniciativa a nivel nacional ha sido la creación de la Red Prodepaz en el 2002. Esta es una red nacional que reúne a todos los laboratorios y PDP y pretende ser un espacio de intercambio de experiencias y articulación de procesos, además de un lugar de reflexión, donde se piensa la nación a la luz de las diferentes regiones (Saavedra y Ojeda, 2006, p. 17). Puede significar una contribución esencial en el sentido de la integración y coordinación de todas estas iniciativas, con miras a la generación de una propuesta nacional e integrada de desarrollo y paz.

No obstante, hay que subrayar que los impactos de esta red hasta el momento han sido limitados y las sinergias generadas son inferiores a su potencial. No ha habido suficiente grado de intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, *know how*, ni metodologías entre los laboratorios de paz y los PDP (Bouchier y Barme, 2008, p. 4). Como afirma Franco Vincenti (2008, entrevista), “cada uno está haciendo maravillas en su castillo”, pero no hay una verdadera red. De igual forma, Álvaro Gómez (2008, entrevista) señala que “hay mucho contacto, pero poca comunicación” entre las diversas iniciativas regionales. La Red no ha sido capaz hasta el momento de superar la atomización de los procesos regionales y convertirse en sí misma en un actor nacional. En este sentido, hay un riesgo real de que estos procesos no estén funcionando como verdaderos ‘laboratorios’, es decir que sus experiencias, ‘fórmulas’ de construcción de paz y lecciones aprendidas no puedan ser compartidas.

A escala nacional y en lo que toca el impacto de estas iniciativas en el poder político, el tema es complejo: por un lado, hay una aceptación relativa del formato de los laboratorios de paz y de los PDP, que es evidente desde luego en la participación y el respaldo del Estado a la iniciativa, pero también en otros elementos, como la inclusión por el gobierno nacional del tema de los PDP y los laboratorios en el

Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010). Los laboratorios de paz y los PDP han sido vistos por los dos últimos gobiernos colombianos (Álvaro Uribe 2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-presente) como un complemento de la política de paz oficial, en cuanto instrumentos de recuperación social e institucional del territorio, y programas validos de desarrollo regional en zonas periféricas y deprimidas. No ocuparon un lugar central en las políticas de paz del gobierno Uribe y Santos, por el contrario, han sido elementos razonablemente marginales, pero es políticamente significativo que hayan integrado, aunque lateralmente a través de Acción Social, del Departamento para la Prosperidad Social y del DNP y sin articulación con el alto comisionado de paz, las políticas oficiales para la paz y el desarrollo.

Todavía, la debilidad fundamental de los laboratorios de paz durante lo esencial de su periodo de ejecución, fue su contradicción con el núcleo duro del enfoque hacia la paz y el conflicto de la administración Uribe. A pesar de la participación del gobierno en la iniciativa, el enfoque para la paz corporizado por los laboratorios de paz, especialmente en su espíritu, letra y concepción original, como idealizado por el PDPMM, fue en contravía con las dinámicas políticas y económicas vigentes a nivel macro y con el enfoque político oficial hacia el conflicto armado. Durante ocho años sonaron los tambores de guerra en Colombia; el tiempo fue de paz negativa, no de paz positiva en la Casa de Nariño, pero en cierta medida también lo fue para una parte substancial de la población colombiana. Las dinámicas nacionales de aproximación al tema del conflicto armado iban en el sentido contrario al preconizado por los laboratorios de paz y especialmente por sus actores de base, al haberse establecido una tendencia a la ‘negativización’ de la paz, es decir, a la restricción de su entendimiento a un concepto mínimo y a la finalidad de la ausencia del conflicto, o más precisamente a una ‘paz de los sepulcros’. Se ha verificado una militarización del tema de la paz y del acercamiento al conflicto armado. La política de seguridad democrática desarrollada por la administración Uribe fue lograr la paz por la derrota militar de la insurgencia; puso su énfasis en la solución militar al conflicto y se basó en el fortalecimiento de la dinámica militar y en la misma militarización de la sociedad y del discurso político.

Asimismo, despreció la vía de la negociación política y del diálogo para la paz con la insurgencia, uno de los elementos que ha estado en la génesis del primer laboratorio de paz, así como de la transformación del conflicto armado, mediante la incidencia en las causas profundas que lo sostienen. La ‘política de paz’ de

aquel gobierno se reveló diametralmente contradictoria con la filosofía original del PDPMM, la cual se asienta en el enfoque sobre las causas profundas del conflicto, en un desarrollo campesino sostenible y en un intento de concertación con los actores armados en el terreno. En realidad, la lectura política del conflicto armado del gobierno presidido por Álvaro Uribe fue radicalmente distinta y opuesta a la del PDPMM. Las ‘causas objetivas’ del conflicto armado y sus raíces profundas, como la exclusión política y socioeconómica, han sido despreciadas políticamente en detrimento de una retórica que enfatizaba un ‘narcoterrorismo’ y procedía a una satanización de los grupos guerrilleros que imposibilitaba cualquiera solución política para el conflicto.

Efectivamente, el gobierno colombiano, aunque participando en los laboratorios de paz, y dando soporte y apoyo importantes al programa, no lo ha suscrito verdaderamente en cuanto enfoque para la paz, ni ha adoptado sus principios y procesos. Las políticas públicas y la aproximación gubernamental al conflicto fueron por caminos divergentes a las propuestas regionales de los laboratorios de paz. Su concepto y filosofía eran incompatibles y contrarios a la política de seguridad democrática y a las políticas macroeconómicas puestas en marcha por la administración Uribe.

Eso configuró una de las principales limitaciones de los laboratorios de paz. De hecho, como ha sido mencionado previamente, los laboratorios de paz se enfrentaron con un obstáculo político profundo, motivado por el cambio radical de la coyuntura política nacional con el fracaso del proceso de paz del Caguán y la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en el 2002. En su discurso y políticas oficiales, el gobierno Uribe convirtió la búsqueda de la paz en una acción contra el terrorismo y el tráfico de drogas, lo que dificultó grandemente la acción y el trabajo de base de los laboratorios de paz en las regiones a varios niveles.

Los procesos de construcción de paz son de una naturaleza esencialmente política y en esta medida, son profundamente dependientes de factores y dinámicas a nivel macro en el país. En esa coyuntura política del país, en la cual los vientos soplaron a favor de la guerra más bien que de la paz o de la transformación del conflicto, trabajar en temas políticos y de paz fue una tarea ardua y espinosa.

Hubo una frecuente estigmatización de las organizaciones sociales que trabajan en estos temas y levantan cuestiones de fondo, como los derechos humanos, el DIH, la necesidad de acuerdos y alternativas políticas y de abordar temas estructurales,



como la estructura agraria del país, etc. Esta situación quedó bien patente en la forma como el CRIC, una de las organizaciones coordinadoras del laboratorio de paz, fue puesta en la mira por el gobierno nacional durante la Minga indígena hacia Cali en el 2008, evidenciándose un intento claro por parte del gobierno nacional colombiano de silenciar esta organización, desacreditar el movimiento y asociarlo con la guerrilla, valiéndose por intermedio de desinformación, acusaciones varias y del bloqueo de la página Web del CRIC durante las protestas populares.



Pared pintada durante la Minga de Resistencia Indígena, Popayán, octubre 2008.

Fuente: *Miguel Henriques*

Otro elemento que manifiesta las contradicciones de la participación del gobierno colombiano en el seno del laboratorio de paz y que puso en evidencia el abismo y divergencia entre los propósitos de la iniciativa y las políticas macro del Estado se relaciona con el hecho de que, contrariamente a lo que se había comprometido el gobierno, algunas de las áreas de intervención del laboratorio de paz fueron objeto de fumigaciones aéreas que dañaron cultivos lícitos apoyados en el marco del laboratorio, y que produjeron graves consecuencias ambientales y sociales (Segundo laboratorio de paz, 2007, p. 70). Proyectos tales como el de café orgánico

desarrollado por Cosurca o de cacao ejecutado por Fedecacao han sido fumigados y parcialmente destruidos (Ñañez, 2008, entrevista). En este marco, existe el riesgo de que los procesos e iniciativas de base generados por los laboratorios de paz se vuelvan proyectos dispersos, descoordinados, circunscritos localmente y sin un impacto de fondo en los temas políticos y culturales que afectan las regiones y en los temas de paz y conflicto.

En realidad, como señala Mauricio Katz (2004, p. 34), exsubdirector de la CDPMM, las posibilidades de éxito para una propuesta como la del PDPMM y de los laboratorios de paz, que presuponen cambios estructurales y diálogo político a varios niveles, estuvieron profundamente limitadas en un contexto caracterizado por la priorización de la derrota militar de las guerrillas por parte del Estado, y por la profundización del modelo económico neoliberal.

Por lo demás, la misma sociedad colombiana, después de que el proceso de paz del Caguán (1998-2002) se hundió, desarrolló un profundo escepticismo con respecto a las posibilidades de la paz negociada con la insurgencia y entró en una dinámica de gran polarización, mediante la cual se tiende a una visión en blanco y negro del conflicto y una lógica según la cual ‘o estás con el gobierno, o estás con los terroristas de las FARC’. El ‘enfoque para la paz’ de la administración de Álvaro Uribe, con base en una lógica militarista y antagónica a cualquier concepto o perspectiva de paz positiva o de transformación del conflicto, ha ganado peso social y popularidad en el país, principalmente en los grandes centros urbanos, pero también en los territorios más periféricos como el Magdalena Medio o el Cauca y Nariño. Asimismo, los temas estructurales, como la reforma agraria, la distribución del poder y de la riqueza, así como las causas profundas del conflicto armado, perdieron espacio y peso en la agenda política en Colombia, especialmente con un debilitamiento de la izquierda y de todo el pensamiento progresista y alternativo en las últimas décadas.

Por lo demás, las políticas macroeconómicas puestas en marcha en Colombia en los últimos años van igualmente en la dirección opuesta a las defendidas por los actores de base de los laboratorios de paz, en particular el PDPMM, el CRIC y Asopatía. Mientras los laboratorios de paz se enfocan en una economía campesina, con base en microcircuitos económicos y cultivos tradicionales en pequeñas propiedades y preconizan un modelo de desarrollo social y humano y una visión social de la economía y de los servicios públicos, el modelo de desarrollo vehiculado por los

gobiernos Uribe y Santos se ha centrado en una agricultura extensiva y agroindustrial, que más que integrar, marginaliza los sectores campesinos tradicionales. Tiene esencialmente una matriz neoliberal, al preconizar la privatización de los servicios y las empresas públicas, la atracción del capital extranjero, la absoluta libertad del mercado y los tratados de libre comercio.

En esta medida, surgen diversas interrogaciones en relación con la sostenibilidad de los microproyectos y procesos de desarrollo puestos en marcha por los PDP y los laboratorios de paz. ¿Pueden estas experiencias sobrevivir en una era de globalización económica? ¿Son sostenibles frente a las políticas macroeconómicas neoliberales del país? ¿Puede una economía campesina tradicional sobrevivir en estos tiempos? ¿Es el modelo económico de los laboratorios de paz una alternativa real y viable? ¿Puede contrabalancear la presión nacional e internacional del narcotráfico hacia la integración de los campesinos en la economía cocalera? Estos factores colocan grandes retos y dudas respecto a la sostenibilidad social, económica y política de estas iniciativas.

Efectivamente, los esfuerzos de los laboratorios de paz en el campo socioeconómico fácilmente se disipan y caen por tierra frente a las dinámicas político-económicas a nivel macro en Colombia. El hecho de que los laboratorios de paz apoyen un proyecto económico mediante asistencia técnica y financiera, puede ser manifiestamente insuficiente o aún inútil si el sistema bancario no le da crédito a los campesinos, si los sistemas de comercialización no integran los cultivos tradicionales, si la débil red de vías en Colombia no permite el aprovechamiento de un mercado interno para los productores, si las tierras no son legalizadas o si un actor armado desplaza una comunidad (González, 2007, entrevista). El economista Jorge Iván González (2008, p. 251) identifica tres principales obstáculos estructurales que condicionan la intervención de los laboratorios y de los PDP y limitan su potencial para el desarrollo y la paz: la difícil accesibilidad del crédito, la deficiente red de vías en Colombia y la desigual distribución de la tierra. A estos se agrega, según el autor, la inexistencia de una política fiscal a nivel nacional y regional que decante estas debilidades y asuma una función distributiva de la riqueza que permita el aprovechamiento de los excedentes a favor de un mejor estándar de vida (González, 2008, p. 52).

Los obstáculos al desarrollo rural no pueden ser resueltos sin tomar en consideración estos elementos (Jeong, 2000, p. 262). Hay fuertes limitantes estructurales

para los procesos de los laboratorios de paz. La economía regional y local depende en gran medida de la estabilidad macroeconómica y del modelo de desarrollo nacional (Naranjo, 2006, p. 38) y las políticas macroeconómicas afectan los proyectos y procesos de base de los laboratorios.

En realidad, las macrodinámicas económicas nacionales van en contravía del enfoque y procesos generados por los laboratorios de paz a nivel regional y local. Están marcadas por un proceso de concentración de la propiedad y de ‘contra-reforma agraria’, por una apuesta en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la privatización de los servicios públicos, por una tendencia a la agricultura extensiva y por concesiones a grandes multinacionales mineras en zonas como el Sur de Bolívar, como se ha ejemplificado en la situación del Magdalena Medio. Las políticas públicas vigentes marginalizan al campesinado, mientras que los laboratorios de paz y los PDP son plataformas de discriminación positiva de los sectores campesinos.

Por lo demás, hay necesariamente una dimensión internacional en este nivel macro, que influencia y condiciona los procesos locales. El desarrollo requiere ser pensado también en la relación local-global, dado que el espacio social y económico en que se insertan los productores se amplía cada vez más por efecto de la globalización. Las iniciativas económicas de base se ven influenciadas por el crecimiento económico del país, el sistema comercial y financiero internacional, y las políticas del Norte con respecto al Sur, entre ellas las de la UE.

En esta medida, es importante señalar que en un conflicto crecientemente internacionalizado, como el colombiano, hay una dimensión internacional de la resolución del conflicto que importa no despreciar, y que hay factores y variantes del conflicto que están íntimamente ligadas a temas internacionales, como son el narcotráfico, la hegemonía norteamericana, los equilibrios geopolíticos en Suramérica y las relaciones comerciales internacionales. El peso y ascendiente de los Estados Unidos sobre la Casa de Nariño es tremendo y determinante en el desenlace del conflicto armado. La economía cocalera y el tráfico de droga siguen siendo los principales combustibles que alimentan a los grupos armados y la violencia, y uno de los principales ejes estructuradores de las dinámicas estratégicas a nivel nacional y regional. La Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha vuelto una pieza fundamental del tablero geopolítico en Suramérica, con repercusiones claras en el marco del conflicto interno en Colombia.

Por lo tanto, un enfoque comprensivo y sostenible de transformación del conflicto armado en Colombia tiene hoy necesariamente una dimensión internacional. Los procesos sociales y económicos locales y las iniciativas de paz de base requieren una coordinación y consistencia con los niveles más amplios de la construcción de la paz y la transformación del conflicto (McDonald, 1997, p. 28). En caso contrario, su impacto es inexorablemente limitado o circunscrito.

Los laboratorios de paz se enfrentaron a un escenario a nivel macro que integraba diversos elementos desfavorables y contrarios a su enfoque para la paz. Frente a algunas de las dinámicas políticas y económicas en marcha, figuraron como gotas de agua y pequeños archipiélagos de paz en un océano de guerra. Las dinámicas nacionales de acercamiento al conflicto armado durante la administración Uribe, así como las políticas macroeconómicas en curso, representaron un obstáculo enorme y un freno sobre la iniciativa que puso en entredicho su intervención y encerró el riesgo que esta se volviera una iniciativa volátil y sin sostenibilidad social. Tratar de construir paz y generar desarrollo a nivel de base en el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y las demás regiones de los laboratorios, mientras que las dinámicas nacionales avanzan en el sentido contrario, se convirtió, de cierta manera, en una tarea de Sísifo, empujar penosamente la pesada roca hasta la cima para que descienda tumultuosamente de nuevo (Barreto Henriques, 2009a, p. 539); o convirtió a los laboratorios en meros procesos paliativos y humanitarios o programas de desarrollo regional y movilización social enmascarados con una retórica de paz, una tarea que es bastante útil y meritoria, pero que no constituía su propósito original ni primordial.

Por lo demás, a pesar de algunas iniciativas en latinoamérica en el sentido de buscar un nuevo acercamiento al tema de las drogas, algunas de las cuales respaldadas por el presidente Santos, hay por el momento, pocos indicios de que la política prohibicionista vigente a nivel internacional vaya a ser cambiada en el corto o mediano plazo. Por lo tanto, muy probablemente el tema de la coca seguirá alimentando las dinámicas de violencia armada en Colombia en los próximos tiempos.

Estos factores comprimieron en gran medida la iniciativa y condicionaron sus procesos e impacto. Como hemos señalado anteriormente, el escenario macro del conflicto influencia grandemente los escenarios del conflicto y de la construcción de la paz a nivel local. El conflicto armado es necesariamente un fenómeno nacional, razón por la cual, como afirma Banfield et al. (2006, p. 83), “tanto en cuanto los grupos ilegales sigan luchando, no puede haber paz absoluta localmente”.

Los laboratorios de paz, a pesar de la labor fundamental que han desarrollado en términos sociales, políticos, económicos y culturales, de los procesos sociales que han generado a nivel regional y local, y de las propuestas políticas que han puesto en el orden del día, se vieron maniatados respecto a determinados temas: fundamentalmente, las iniciativas de índole local y regional, como los laboratorios de paz y los PDP, no tienen la capacidad para propiciar o liderar procesos de transformación estructural del conflicto. Tienen poca incidencia en las estructuras macro que sostienen el conflicto en Colombia, en la medida en que son esencialmente proyectos a escala micro. Su incidencia en las causas profundas del conflicto es superficial (García, 2008, entrevista). No tienen la capacidad de transformar las estructuras de poder político y económico, ni de incidir en temas como el narcotráfico, las políticas territoriales o las estrategias militares de los actores armados, que son fundamentales para la transformación del conflicto. Sus medios son escasos y limitados y no son equiparables a los del Estado, ni siquiera a los de los actores armados ilegales, razón por la cual sus impactos sobre los grandes indicadores regionales de violencia armada y desarrollo son diminutos.

Los laboratorios de paz evidenciaron un éxito a nivel micro muy valioso: han generado bolsas de desarrollo campesinas; han empoderado e integrado social y políticamente a muchas comunidades locales; han estimulado la participación popular y visibilizado sectores sociales marginalizados, como las mujeres, los indígenas, los jóvenes y los campesinos; y han conferido un horizonte de vida a grupos sociales tradicionalmente excluidos, lo que es una labor muy significativa en términos de la construcción de paz en un escenario como Colombia.

Sin embargo, a pesar de estos frutos a nivel local y regional, su impacto a nivel macro es marginal y su incidencia sobre la violencia armada y estructural es residual. La intervención de los laboratorios de paz y los PDP desempeña un rol importante en el proceso paulatino y a largo plazo de construcción de paz positiva; pero su alcance en términos de paz negativa, es decir, en términos de incidencia sobre la violencia directa es diminuto, aunque se hayan verificado algunos resultados positivos en algunas comunidades y haya evidencias de reducción de otras facetas de la violencia, como la violencia doméstica entre sus participantes.

Los laboratorios de paz y los actores que los integran son agentes de transformación social, pero solamente hasta un determinado grado. Tienen poca incidencia sobre los diferenciales de poder y riqueza que condicionan y sostienen de forma

profunda el conflicto y la violencia armada. Así, como reconoce César William Díaz (2008, entrevista), uno de los líderes del CIMA, “tenemos que ver los laboratorios de paz como una oportunidad, pero no como la solución, porque los problemas estructurales le corresponden al Estado y a la sociedad colombiana resolver”.

De hecho, las iniciativas de construcción de paz desde la base, como los laboratorios de paz, difícilmente tienen un efecto determinante para traer a su fin a un conflicto armado. Su alcance y escala son más limitados (McDonald, 1998, p. 135), razón por la cual necesitan su integración en esfuerzos de transformación de conflictos a escala más amplia, es decir, a nivel macro. Como Jenny Pearce (2007, p. 29) observa “sin el apoyo activo de una autoridad política legítima, las organizaciones de la sociedad civil por sí mismas enfrentan grandes dificultades para lograr cambios contextuales más amplios”. Pueden ser catalizadores de procesos y desempeñar un rol fundamental a este nivel, pero necesitan que sus propuestas y acciones sean integradas en dinámicas políticas que incluyan a los gobiernos y los actores políticos y armados.

En la realidad, la construcción de paz desde la base es muy importante para una paz positiva y sostenible, pero no constituye un sustituto para el más alto nivel político de decisión y para negociaciones nacionales involucrando al Estado y a los grupos armados. La sociedad civil depende en gran medida del Estado y no puede reemplazarlo (Fischer, 2006, p. 21). Este elemento es especialmente importante en lo que respecta a las iniciativas y actividades de ‘construcción de la paz desde abajo’. Como afirma Naranjo (2006, p. 23),

Independientemente de lo necesarios que son, los esfuerzos de base no pueden ser aislados de los contextos regional, nacional e incluso internacional en que se insieren. Así como los esfuerzos de paz que no toman en cuenta el nivel de base pueden ser insostenibles, las iniciativas locales de construcción de paz sin conectores regionales y nacionales no trascienden su localidad y no podrán alcanzar la paz estructural y cultural.

Hay una interdependencia y necesidad de coordinación entre los diversos niveles y actores de la construcción de la paz que se manifiesta de forma acentuada en el caso de los procesos sociales a nivel local y regional. De forma aislada y autónoma, la capacidad y alcance de las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil para incidir sobre la dinámica de los conflictos es limitada (Barnes, 2005, p. 21). Estas no pueden tomar decisiones que sean mandatorias o legalmente vinculantes para



la totalidad de la sociedad y tienen un poder legal y político reducido. Por lo tanto, suelen tener poco impacto en la violencia directa y estructural y es improbable que desempeñen el rol principal en la resolución de un conflicto armado. Sus efectos son en general sutiles, difíciles de medir y a largo plazo (McDonald, 1998).

En esta medida, es claro que los laboratorios de paz, puestos frente a la gravedad de la situación, no son suficientes para resolver o transformar el conflicto colombiano (Palechor, 2005, p. 45), ni pueden sustituir a un proceso de paz ni a las negociaciones nacionales, esenciales para la paz en el país. Tienen esencialmente un valor demostrativo y simbólico y valen en cuanto propuesta política alternativa de construcción de paz positiva y transformación del conflicto desde la base, mediante procesos sociales participativos a nivel cultural, político, socioeconómico e institucional que involucran una amplia gama de actores sociales y políticos.

Los laboratorios de paz se enmarcan en el objetivo de crear una nueva sociedad, un nuevo país y un nuevo modelo de regiones en paz y desarrollo, mediante la transformación de las diversas expresiones y modalidades de conflicto armado, y la generación de bolsas de cambio y desarrollo social. Hasta cierto punto, lo han venido logrando en el nivel micro, a través de procesos sociales comunitarios, pero hacerlo en el nivel macro resulta una tarea muy ardua y laboriosa.

De hecho, el mayor reto para los laboratorios de paz y los PDP es articular este nivel micro de sus procesos con el nivel macro en donde se sitúa el conflicto armado nacional, la sociedad y el Estado. Hay un foso entre el nivel micro de los laboratorios y la dimensión macro del conflicto armado en Colombia, que se figura como su mayor limitación.

Si el Estado, las instituciones y la sociedad colombiana en general no incorporan los elementos políticos y sociales de las propuestas de los laboratorios, los proyectos y los procesos van en última instancia a fallar, o a resultar política y socialmente circunscritos, porque no están integrados en las dinámicas nacionales. Estas experiencias pueden ser sostenibles solamente si se convierten en políticas públicas o procesos integrados regional y nacionalmente. De otra manera, permanecen muy débiles (Bayona, 2007, entrevista). Si se figuran como islas, fácilmente pueden ser sumergidas o quedarse como experiencias piloto de gran potencial, simbolismo y valor en términos locales, pero aisladas dentro de un océano de violencia(s) (Barreto Henriques, 2007, p. 32).

En este proceso el Estado desempeña un papel determinante. Como señala Wallensteen (2002, pp. 61-65), el Estado es un actor primordial en cualquier conflicto



armado interno y en su resolución. Es, por definición, la única entidad con el legítimo uso de la violencia en una sociedad, y detenta usualmente las principales competencias políticas, fiscales y sociales en un país, así como recursos muy superiores a cualquier otro actor. A estos elementos se agrega, en el caso colombiano, el hecho de que las causas profundas del conflicto armado se entrecruzan con necesidades humanas básicas, como las planteadas por Burton, cuya responsabilidad primera de satisfacción es atribuible (en principio) al Estado.

En esta medida, teniendo en cuenta las limitaciones logísticas y políticas de las iniciativas sociales locales, ha habido una asunción por parte de los laboratorios de paz de esta realidad, que ha convertido la incidencia en las políticas públicas en uno de los principales objetivos de la iniciativa. El Estado y las instituciones a nivel nacional, regional y local han sido interlocutores manifiestos de los laboratorios de paz y de los PDP, razón por la cual ha habido un énfasis claro en integrar proyectos de fortalecimiento institucional y procesos de articulación con las autoridades públicas.

Los laboratorios de paz constituyen, en una gran proporción, plataformas de diálogo entre las sociedades civiles regionales y el Estado. Son una iniciativa ‘pionera’ en este campo, que reúne los tres niveles de la pirámide de Lederach, al tratar de articular la esfera local con el plano de la dirigencia regional, nacional e internacional, y establecer lo que Nicola Bertolini (2007, entrevista) describió como “una conjunción entre el terreno y el Palacio”. Según Fernando Patiño (2007), la naturaleza interdependiente de los problemas que moldean el conflicto y condicionan la paz implica que los laboratorios de paz y PDP asuman una estratégica ‘glocal’, es decir, ‘tanto el actuar y pensar localmente, como el pensar y actuar globalmente’.

Sin embargo, se debe subrayar que hay pocas evidencias de un impacto efectivo de los laboratorios de paz en Bogotá, que se pudiera traducir en la transformación de las políticas públicas del gobierno hacia la paz y el desarrollo, más allá de algunos elementos dispersos y de los procesos políticos a nivel regional y local.

Asimismo, no ha habido un verdadero diálogo región-nación en lo que toca a los temas de paz y de desarrollo. A pesar de que los laboratorios de paz y los PDP se han conformado como un espacio plural y multinivel, las organizaciones de base locales y regionales se han quedado frecuentemente sin interlocutor político, y los procesos de discusión y concertación entre los actores que componen los programas se han restringido a temas técnicos y a la gestión de los proyectos e iniciativas y no han incidido en las vías políticas para la paz en el país. No hubo apertura por parte

del poder político nacional para convertir los laboratorios de paz en plataformas de diálogo con la sociedad civil en relación a temas fundamentales para la paz, como el modelo de desarrollo económico, la estructura agraria, la política anti-narcóticos, o el proceso de desmovilización con las AUC (Caballero, 2008b, entrevista). Los laboratorios de paz fueron transversales en la integración de actores desde el nivel micro al nivel macro, pero no en la inclusión de temas políticos nacionales.

En este campo, hay un profundo centralismo en el sistema político colombiano que dificulta una verdadera descentralización de la construcción de paz, como la pretendida por los laboratorios de paz y los PDP, y configura una contradicción entre los propósitos y la práctica al interior de la iniciativa.

Sin embargo, es preciso señalar que, a pesar de no vislumbrarse impactos notorios de los laboratorios de paz en las más altas instancias de decisión política, su incidencia no se restringe necesariamente de forma estricta a las esferas local y regional. De la misma forma que los procesos a nivel micro son condicionados e influenciados por las dinámicas de nivel macro, también el nivel macro es sensible y permeable a dinámicas a nivel micro. Cambiar una vereda, un municipio o una región, puede cambiar en última instancia un país y conllevar a cambios e impactos mucho más allá de sus límites y circunscripción territorial. Transformar un subsistema puede contribuir para transformar todo el sistema, en la medida en que haya efectos de *spill over*, de difusión, que se generen.

Efectivamente, los laboratorios de paz son simultáneamente procesos para la vereda, las regiones y la nación. Son microprocesos de paz que se conciben como propuestas políticas para el país. Como refiere Miriam Gutiérrez (2007, entrevista), líderesa de una organización de pescadores del Magdalena Medio, “estamos reconstruyendo toda la política desde lo local para llevarla a lo nacional”. Hay diversos procesos de democratización de la vida política local y de articulación de la sociedad civil con las instituciones que, partiendo del ámbito local y regional, van progresivamente alcanzado otros espacios e instancias políticas, como las gobernaciones de los departamentos y los planes nacionales y regionales de desarrollo.

A pesar de la verticalidad y del centralismo de las políticas gubernamentales de paz, puede haber un contagio del enfoque para la paz estructurado por el PDPMM y los laboratorios de paz en el Estado, que puede ser aprovechado por las políticas públicas, tanto en un escenario de confrontación bélica en curso, como de posconflicto. Los laboratorios de paz han indicado un camino efectivo

de intervención en los territorios marginados y afectados por la violencia armada y estructural y medios específicos de construcción de paz, al mismo tiempo que generan ‘circunscripciones de paz’, es decir, ciudadanos y comunidades política, social y culturalmente proclives a la paz.

De cierta forma, esta iniciativa ha sido un ‘laboratorio de paz’, no solo para las organizaciones sociales, sino también para el gobierno y el Estado colombiano. Implicó una concertación entre actores de diferente índole, y definió un canal y una vía para el diálogo y la articulación entre las instituciones y la sociedad civil en las regiones. Es prematuro afirmar que pueda haber contribuido para la construcción conjunta de una nueva forma de pensar la paz, o indiciar un nuevo acercamiento del Estado a los problemas de la guerra, que atiende a elementos como el desarrollo territorial, la gobernabilidad, y la exclusión social. No obstante, es simbólico y políticamente relevante que el gobierno nacional haya aceptado el concepto de ‘laboratorio de paz’ y accedido a participar en esa experiencia, más allá de la ofensiva militar y de las negociaciones de nivel uno en curso. A pesar de sus intentos de cooptación, permitió que la iniciativa fuera avante y se integró en la misma con actores sociales de sensibilidades políticas muy distintas.

Por lo tanto, considerando las diversas dimensiones y variantes de la inserción de los laboratorios de paz en su contexto micro y macro, no está en discusión el despreciar el valor e importancia de las iniciativas de construcción de paz de base, ni sobrevalorar la importancia de los procesos de paz de alto nivel, sino más bien, el demostrar sus limitaciones en cuanto estrategias separadas de transformación del conflicto. Es igualmente erróneo y políticamente *naïf* pensar que el conflicto colombiano se puede resolver mediante un acuerdo entre élites, como considerar que iniciativas de construcción de paz desde la base como los laboratorios de paz pueden traer la paz por sí mismos (Galtung, 1996, p. 89).

Por lo tanto, lo que es evidente es la necesidad de coordinar los diferentes niveles y actores de construcción de paz. La construcción de la paz desde la cima y desde abajo es igualmente necesaria y mutuamente dependiente. Asimismo, pasará por soluciones que son eminentemente nacionales, pero que, para que sean sostenibles, necesitan tomar en consideración la especificidad regional del país y del conflicto armado. No se puede pensar la nación sin las regiones, pero tampoco las regiones sin la nación. No hay soluciones estrictamente nacionales, ni regionales. Un enfoque homogeneizador es débil e insostenible, pero tampoco son

eficaces intervenciones particularizadas fuera de un marco más amplio (García, 2008, entrevista). Hay necesariamente escalas diferenciadas de intervención en la transformación del conflicto colombiano.

Así, el principal aporte de los laboratorios de paz ha sido mostrar, en una escala micro, metodologías válidas de construcción de una paz positiva y de transformación del conflicto desde la base, que pueden ser replicadas en escalas más amplias o servir como complementos para políticas integrales de paz a nivel macro.

## ¿Los laboratorios de paz y los PDP en un escenario de posconflicto en Colombia?

El actual proceso de paz desarrollado entre la administración Santos y la guerrilla de las FARC abre un nuevo contexto político y social en el país y la posibilidad de una salida negociada para el conflicto. Esto permite proyectar un escenario de posconflicto en Colombia, que cambiaría necesariamente el rol y la misión de los laboratorios de paz y los PDP.

Sus procesos sociales se han desarrollado, hasta el momento, en medio del conflicto armado, en territorios de gran precariedad y violencia y contextos supremamente difíciles. No obstante, han obtenido impactos positivos a nivel local en términos de resistencia civil, generación de una cultura de paz y de ciudadanía, inclusión socioeconómica de campesinos y trabajo con las comunidades de base.

En esta medida, la apertura de un escenario de posconflicto y de un nuevo contexto político y social de paz potenciaría el rol de los PDP y laboratorios en Colombia, al conferir las condiciones políticas ideales para una labor por la paz e incrementar las posibilidades de trabajo con las comunidades a nivel territorial (Barreto Henriques, 2014, p. 184).

Efectivamente, un acuerdo de paz, más que un punto final, es un punto de partida para la paz. Esta no se materializará en Colombia, como un ‘café instantáneo’, en el día que se firme un acuerdo entre el gobierno y las FARC. La construcción de una paz duradera, sostenible y positiva implica un proceso mucho más largo y que requiere la participación de muchos más actores de la sociedad, más allá del Estado y de los actores armados. Pasará por las distintas esferas y niveles de la organización social, por las políticas macro definidas desde la Casa de Nariño en Bogotá,

pero también por cada región, territorio y vereda del país, que tendrán que generar nuevas formas de convivencia. Implica un ‘desarme’ social, político, económico y cultural de la sociedad colombiana, y el cambio de una cultura de violencia por una cultura de paz. A la firma de un acuerdo político con la insurgencia seguirán largos años de un complicado y exigente proceso de construcción de una paz sostenible y duradera, al cual se presentarán innumerables desafíos políticos y sociales (Barreto Henriques, 2014, p.183).

En este contexto, los laboratorios de paz y los PDP pueden desempeñar un rol fundamental, en cuanto modelos consolidados de construcción de paz desde la sociedad civil y las regiones, con una experiencia acumulada de casi dos décadas de trabajo junto a las comunidades más necesitadas. Su enfoque multidimensional para la paz ha producido resultados e impactos considerables, abarcando elementos que, si fueran desarrollados en una escala más amplia y potenciados en un escenario de post conflicto, podrían construir los cimientos para la paz durable y positiva en el país.

El potencial de construcción de paz de los laboratorios y PDP para un marco de posconflicto reside en la integralidad de sus elementos. Se destacan por ser programas multidimensionales, que integran simultáneamente diversas áreas y componentes de la construcción de la paz, desde la vertiente económica, a la cultura de paz y al fortalecimiento institucional. Son iniciativas de aproximación integral y holística para la paz, que tienen como horizonte la construcción de la paz positiva y no solo la ausencia de la guerra, elemento central en un escenario de posconflicto.

Por lo demás, podrían configurar instrumentos válidos para que los acuerdos ‘bajen’ hasta las regiones y a las comunidades que vivieron décadas de violencia. Estos elementos son fundamentales para estructurar un proceso integral de construcción de paz en el posconflicto, pues una política o un proceso de paz en Colombia que no tenga en cuenta la variable territorial y las particularidades regionales está condenada a fracasar o a obtener impactos mitigados. Para que sea sostenible y duradera no puede basarse en un enfoque estrictamente nacional. Necesita que encierre escalas y enfoques espaciales distintos y agendas locales y regionales de paz, pasando necesariamente por el involucramiento de las regiones, la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada a partir de los territorios. En este sentido, el potencial de los laboratorios y PDP es inmenso, al constituir procesos regionales de construcción de paz (Barreto Henriques, 2014, p. 194).

## El diálogo entre los laboratorios de paz y los estudios de paz y conflicto

En esta sección del capítulo se pretende analizar en qué medida la experiencia social de los laboratorios de paz en Colombia desafía o converge con los estudios de paz y conflicto. El propósito fundamental es averiguar cómo dialoga una experiencia concreta de construcción de paz con las discusiones teóricas sobre la paz analizadas en el primer capítulo de esta investigación. Se busca someter esta teorización a un análisis crítico e identificar fisuras y debilidades, tanto de los enfoques *mainstream* para la paz, como de la *Peace Research*, a partir del estudio de caso de los laboratorios de paz y de las problemáticas que han emergido en el terreno.

El objetivo no es teorizar sobre la paz, es más modesto. Se pretende fundamentalmente analizar en qué medida estos enfoques teóricos nos ayudan a entender el significado de los laboratorios de paz y funcionan en un contexto real de conflicto armado en Colombia, pero también qué contribución y elementos de reflexión pueden dar estas iniciativas locales al desarrollo de los estudios para la paz.

En esta medida, esta sección funcionará como una prolongación del primer capítulo de la investigación y estará en constante diálogo con este. Se buscará reubicar y replantear la discusión sobre los laboratorios de paz en el marco de las teorías de paz, e inferir la especificidad y singularidad de los laboratorios de paz en cuanto experiencia de construcción de paz que aplica elementos conceptuales de los enfoques teóricos de transformación de conflictos y/o que desafía, revela limitaciones y pone en entredicho a estos mismos enfoques.

## Los laboratorios de paz y los enfoques convencionales de gestión de conflictos

Los laboratorios de paz ponen en evidencia diversas limitaciones, fisuras y ausencias de los enfoques *mainstream* de gestión de conflictos, algunas de las cuales ya fueron mencionadas en el primer y segundo capítulos de esta investigación.

Fundamentalmente, mediante su ejemplo y experiencia política y social concreta en el terreno, los laboratorios de paz destacan un protagonista en el campo de

la construcción de paz y de la resolución de conflictos tradicionalmente vedado o relegado a un segundo plano por los enfoques realistas de gestión de conflictos: la sociedad civil, contribuyendo de esta forma este caso empírico para el debate teórico sobre quiénes son los agentes de cambio y los actores de construcción de paz. De cierta forma, estas iniciativas a nivel local visibilizan lo que estaba oculto en el caso colombiano; procesos sociales de construcción de paz desde la base, y demuestran en qué medida la sociedad civil puede desempeñar un rol en la construcción de la paz mediante la labor de base de comunidades y organizaciones sociales a nivel local y regional. Ponen en evidencia espacios y procesos sociales capaces de generar nuevas formas, estructuras y pautas de relación (Lederach, 2008, p. 99).

Los laboratorios de paz muestran cómo se gana espacio civil al conflicto, mediante procesos sociales, culturales, políticos y económicos que alejan a la gente de las opciones de violencia armada, integran sectores sociales excluidos en la economía lícita, y generan relaciones sociales pacíficas y una cultura de paz, a través de la apropiación por parte de las comunidades de valores de solidaridad, tolerancia y humanismo, de espacios de participación cívica y democrática, y de mecanismos y procesos de diálogo y de resolución pacífica de conflictos (Hernández, 2002, p. 179).

Estos procesos configuran paces locales, es decir, microespacios y expresiones de paz, en los cuales los valores de la civilidad y la solidaridad se han sobrepuesto a las dinámicas de la violencia<sup>2</sup>. En esta medida, demuestran tanto desde el punto de vista conceptual, como desde la práctica social, que la construcción de paz no se restringe a la centralidad del Estado, a los actores alzados en armas y a los procesos de negociación a nivel nacional, sino que tiene una expresión social en el marco de procesos sociales puestos en marcha por comunidades, al ser apropiada por las poblaciones, desde las bases, a nivel local y comunitario (Hernández, 2002, p. 179), configurando paces locales con colores, expresiones, dimensiones, faces, ámbitos y escalas distintas.

En estos procesos la paz se construye, se concibe y se percibe de formas diversas por las comunidades y adquiere significados y materializaciones propias, y no se confunde necesariamente con la paz política y la ausencia de guerra en el

---

<sup>2</sup> Esta realidad va al encuentro del concepto de Mitchell y Allen-Nan (1997) de *zones of peace* (zonas de paz), es decir, microespacios territoriales en donde se acordaron y establecieron algunas formas de regulación y límite a los efectos destructivos de un conflicto en una determinada área y/o periodo de tiempo.

sentido político-militar que vehicula el realismo político y los enfoques de gestión de conflictos. Como quedó patente en los relatos de los procesos de los laboratorios de paz en el Magdalena Medio y en el Macizo Colombiano, hay una “paz de las pequeñas cosas” (Pureza, 2009, p. 9), y de los “pequeños nada” (Barreto Henriques, 2012); o lo que Richmond (2008, p. 109) llamó *everyday peace* (paz de lo cotidiano) y Moura (2005) de *novísimas paces*. Son contextos de construcción de paz usualmente considerados marginales y formas alternativas y post-vestfalianas de respuesta a los conflictos, desarrolladas generalmente en microespacios sociales que encierran un potencial y carga emancipatorios, y corresponden no solo a los intereses, aspiraciones y cálculos de seguridad del Estado, sino de todo el tipo de actores (Richmond, 2008, p. 109). En los casos evidenciados por los procesos de base de los laboratorios de paz, para unos la paz es tener qué comer, para otros es tener tranquilidad o es ser escuchado, algunos asocian la paz con una “democracia real” (Ausecha, 2008, entrevista), o, como en el caso de los indígenas caucanos, con la identidad cultural.

Aquí la paz emerge como un proceso que se va construyendo cotidianamente desde las veredas de las regiones, corporizando una paz del día a día (Richmond, 2008, p. 109). Va más allá de la ‘paz hegemónica’ y estado-céntrica realista, es una paz ‘pragmática’ entre los que viven lado a lado (Barnes, 2005, p. 19). Esta concepción de paz como vivida por las poblaciones en las regiones de los laboratorios de paz queda manifiesta en las palabras de Juan de Dios Castilla (2007, entrevista), que coordina el proyecto “Comunas, territorio de no violencia” en Barrancabermeja. Señala

[...] los compañeros de las comunas hacen una diferenciación entre la paz política, la paz que se puede dar en las mesas de negociación, y la paz que construyen las comunidades. Ellos dicen: mire, la paz no es algo externo a nosotros, la paz la estamos construyendo todos los días desde nuestro hogar; la paz no es esperar allá que se sienten en Ralito, que se sienten en La Habana o en Caracas o donde se quieran sentar, porque eso no es más que una parte del conflicto que se genera en Colombia; hay una paz que generan las comunidades y eso lo vienen construyendo ellas permanentemente, tanto en las comunas populares como en toda la región. La paz está ligada a esa experiencia,



la experiencia de poderles decir no a los actores de la guerra, decir que aquí no queremos ni guerrilla, ni paramilitares, queremos nosotros construir comunas de no violencia.

En esta medida, estas experiencias y procesos sociales de construcción de paz desde la base ponen en juego el estado-centrismo, el elitismo y la verticalidad del enfoque de gestión de conflictos, que oculta la dimensión interpersonal y el nivel microsocial de la violencia, y desafían el paradigma realista y las nociones tradicionales de seguridad, demostrando que hay otras formas y vías para la paz y hay otros espacios, niveles y ‘frentes’ políticos sociales en la superación de un conflicto (Jeong, 2000, p. 40). Ponen en evidencia que cada uno tiene un rol en la construcción de la paz en un país, que la paz se construye en el día a día por la gente, y que los individuos y comunidades son en última instancia, los receptáculos de las transformaciones necesarias para la paz positiva y sostenible. Por lo demás, muestran que la paz, en determinados contextos, se construye contra el Estado, los actores políticos y protagonistas del conflicto armado, poniendo en entredicho sus lógicas, dinámicas, percepciones y lecturas del conflicto y subrayando otros elementos, valores, y vías para su transformación.

Asimismo, otro elemento que queda plasmado en la experiencia de los laboratorios de paz en diversas regiones de Colombia es la importancia de la microterritorialidad en la construcción de la paz. Contrariamente al modelo convencional de gestión de conflictos, que oculta y desprecia la diversidad al interior de los conflictos armados, tanto en términos territoriales, como sociales, bajo el rollo compresor de las dinámicas de poder y el escalonamiento del conflicto a nivel de dirigencias políticas de alta instancia, los laboratorios de paz muestran la diversidad en la unidad. Ponen en evidencia la existencia de dinámicas regionalmente diferenciadas y de microconflictos al interior de un macroconflicto, y que cada territorio tiene sus propias características y problemáticas en lo que toca a la construcción de la paz. Muestran la complejidad y diversidad en el terreno y que una solución política y militar para un conflicto no puede ser necesariamente aplicada de forma homogénea y lineal a lo largo de un territorio y de una población.

Por lo demás, la experiencia de los laboratorios de paz pone en primer plano una problemática social que los enfoques convencionales hacia la paz y los entendimientos tradicionales de seguridad tienden a no tener en cuenta: la violencia estructural y cultural y las causas profundas de los conflictos armados. Los laboratorios revelan

una realidad esencial en la construcción de paz que estaba oculta en Colombia en términos de estrategias para la paz (a pesar de experiencias aisladas en el pasado como el PNR) y tiende a estar oculta en los enfoques de gestión de conflictos. Muestran las diversas periferias sociales y geográficas y su relación con el conflicto armado; ponen en evidencia el foso entre las ‘dos Colombias’, los dramas del universo y economía campesinos en las zonas periféricas del país, y la exclusión de algunas regiones y sectores sociales de Colombia del desarrollo, la democracia y las instituciones del país, factor que ha alimentado históricamente el desarrollo de grupos armados ilegales y la emergencia de violencia bajo distintas modalidades y formas.

Estos elementos se convierten en un argumento en contra de los enfoques estrictamente verticales para la paz, en la medida en que estos no tienen en cuenta otros escalones sociales y niveles de la violencia que son esenciales para construir una paz duradera y sostenible. La complejidad social y multidimensionalidad de la violencia que el trabajo de campo en las regiones del Magdalena Medio y del Macizo Colombiano puso en evidencia, indican que se necesitan soluciones que vayan más allá de las negociaciones entre grupos insurgentes y el Estado o de estrategias militares.

Un enfoque hacia los conflictos que se centre exclusivamente en los aparatos armados de los grupos ilegales solo aborda de forma limitada la problemática de la violencia, que es más compleja y multidimensional, y es a menudo alimentada y sostenida por factores estructurales a nivel político, cultural y socio-económico, como en el caso colombiano (McDonald, 1997, p. 14; Granada, Restrepo y Vargas, 2009, p. 103). En esta medida, el sobreuso y valorización en los análisis realistas del concepto de *mutually hurting stalemate* de Zartman (2000), que se centra en la dinámica militar de los conflictos, figura como una debilidad de estos enfoques, pues no nos dice mucho sobre el proceso de construcción de paz y de transformación de los conflictos en escenarios como Colombia.

Con un acuerdo de paz a nivel de élite no cesaría la violencia estructural que las comunidades viven en el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano o Montes de María en términos de exclusión socioeconómica y marginalización política, así como la violencia armada fácilmente se transfiguraría y asumiría otras formas, como nuevas bandas emergentes, grupos narcotraficantes o pandillas. Como se comprobó con el trabajo de campo en las regiones presentadas, la presencia de nuevos grupos paramilitares, a menudo con una agenda más criminal que política, como las Águilas Negras y los Rastrojos, de perfil similar a las AUC, muestra la falencia de enfoques

verticales y de élite como los Acuerdos de Paz de Santa Fe de Ralito, que no inciden en los diversos niveles y dimensiones de la violencia.

Este es uno de los aportes fundamentales de los laboratorios de paz para la discusión política y académica sobre la paz, tanto en el marco colombiano, como internacional, es decir, haber enfatizado y puesto en la agenda otros niveles de la violencia y otras dimensiones de la construcción de paz que los enfoques realistas de gestión de conflictos tienden a desvalorizar o insisten en no reconocer.

## Los laboratorios de paz y la *Peace Research*

Los laboratorios de paz, en su concepción de paz y su enfoque hacia el conflicto, divergen de forma substancial de los entendimientos convencionales de gestión de conflictos y en esta medida, se acercan mucho más a la *Peace Research*. Hay una clara convergencia conceptual y política de los laboratorios de paz, especialmente en su concepción y filosofía originales definidas por el PDPMM, con los ‘idealistas de la paz’ (véase capítulo I) y los enfoques de transformación de los conflictos.

A pesar de que no haya una referencia explícita, ni influencia por vía directa de la *Peace Research* en la filosofía de los laboratorios de paz, que va beber más en referencias del humanismo, de la teología de la liberación y de autores del campo económico, ni una aplicación o asunción de modelos teóricos preestablecidos, esta iniciativa evidencia diversos elementos que la acercan a los componentes conceptuales de la *Peace Research* analizadas en el capítulo I. En primer lugar, confluye con Burton (1990) en la medida en que vincula directamente el conflicto armado en Colombia a necesidades humanas insatisfechas y pone énfasis en las causas de los conflictos como claves para su solución (véase capítulo I).

En segundo lugar, la visión holística de la paz y de la construcción de la paz desarrollada por los autores afines a la *Peace Research*, en particular Galtung y Lederach, encuentra un paralelo en la praxis y concepción de los laboratorios de paz, mediante lo que suelen designar como un ‘enfoque integral’. Los laboratorios de paz han buscado incidir en todos los dominios de la construcción de paz, desde el componente económico al cultural, de la dimensión política a la institucional, del componente étnico al territorial. Es una especie de ‘combinación de todas las formas de lucha’ al revés, una combinación de todas las formas de construcción de paz.

En este sentido, y por este conjunto de características, los laboratorios de paz convergen con lo que Oliver Richmond (2005, p. 119; 2008, p. 109; Tocci 2008, p. 3) define como “enfoques de construcción de paz de cuarta generación”, que van más allá de la concepción vestfaliana y soberanista de paz e implican una forma emancipadora de paz que refleja los intereses y necesidades de los grupos e individuos en las zonas de conflicto, e integra dimensiones económicas, políticas y sociales; o lo que Betts Fetherston (1998 citado por Woodhouse, 1999, p. 26) designa como proyectos de construcción de paz contra-hegemónicos o post-hegemónicos. Están asociados a modelos sociales alternativos que establecen una dirección contraria a la dominante, ponen en entredicho la hegemonía e intereses de la clase política, económica y cultural vigente y desafían la noción dominante de paz y el paradigma político-económico neoliberal. Encierran generalmente una concepción crítica del sistema capitalista y se enfocan en procesos y agendas emancipadoras (Richmond, 2008, p. 127; Sousa Santos, 2003, p. 11).

Proponen una concepción amplia y multidimensional de la paz, que va mucho más allá que la firma de acuerdos de paz o que la ausencia de hostilidades y por lo tanto, confluye con la noción de paz positiva de Galtung (1969; 1990; 1996), que describimos en el primer capítulo, tanto en su dimensión estructural, como cultural. Este entendimiento de la paz queda bien plasmado en las palabras de Guillermina Hernández (citada por Blanco 2008), directora de la organización Merquemos Juntos, con sede en Barrancabermeja, que señala que “la paz no es solo que no nos matemos; la paz es mirar cómo vivir mejor, cómo alcanzar las cosas que necesitamos”.

Los laboratorios de paz vinculan la paz a la justicia social y a la vigencia de derechos humanos e insisten en la complicitad de los temas de desarrollo con los temas de paz, lo que configura una mirada consonante y convergente con la *Peace Research*. Tienen conciencia de que la paz se construye en un “proceso paciente” (Katz, 2004, p. 32) y ponen énfasis en elementos como la legitimidad democrática, el Estado de derecho, la solidaridad social, la equidad, la participación, el desarrollo sostenible y la solidez de la sociedad civil, lo que apunta a la dimensión estructural de la conflictividad, como definida y planteada por Galtung (1969; 1996).

Asimismo, la concepción galtungiana de la construcción de paz como la ‘transformación no violenta y creativa de los conflictos’ y de Lederach como generación y movilización de ‘imaginación moral’, encuentra paralelo en los procesos puestos

en marcha por los laboratorios de paz que se conciben como ‘laboratorios sociales’ en donde se confiere particular énfasis a la creatividad y a la búsqueda de soluciones propias a través de las comunidades y “en donde se encendió esa imaginación” (Lederach, 2008, p. 72). Se acercan en esta medida igualmente del concepto de Galtung de *transcendencia* (Galtung, 1996, p. 96), que implica la emergencia de algo de nuevo y la transformación creativa en un conflicto.

De igual forma, los laboratorios de paz van al encuentro de muchas de las propuestas políticas y conceptuales de Lederach (1997, 2003) y se ajustan como un guante en diversos elementos del marco teórico para la paz definido por este autor: en primer lugar, esta es una iniciativa que tiene como materia prima y fuerza motriz a la ‘gente’, y pone énfasis en la necesidad de empoderamiento de los actores sociales (Lederach, 2003, p. 21), los cuales son vistos como protagonistas y actores activos de la construcción de la paz, más que recipientes de estrategias, lo que converge con la perspectiva teórico-política de este autor (Lederach, 1997, p. 118).

Asimismo, tal como Lederach, los laboratorios de paz han entendido la construcción de paz como transformación y reestructuración de relaciones, tanto a nivel personal como relacional, estructural y cultural (Lederach, 2003, pp. 23-25; 1997, p. 71). Buscan la generación desde lo cotidiano de nuevas formas de relación e interrelación que superen la polarización del conflicto armado y construyan alternativas a la violencia y procesos de cambio social. Se insiste en la idea de la construcción de paz como un ‘proceso’ que integra distintos escalones y sectores de la población, elemento que converge con toda la estructuración teórica de Lederach. En esta medida, el enfoque para la paz de los laboratorios de paz se acerca del concepto de transformación de conflictos (Lederach, 2003, p. 14), descrito en el primer capítulo, en la medida en que estos programas buscan transformar la dimensión violenta de los conflictos y reubicarlos en procesos civiles y democráticos y no eliminar los conflictos en sí mismos.

Asimismo, los laboratorios de paz son una iniciativa que, en la medida en que se estructuran como una plataforma transversal y multinivel de actores e incluyen tanto a actores de base como institucionales y al mismo gobierno central, proceden a una articulación de los distintos niveles de construcción de paz, elemento central del pensamiento de Lederach (1997).

Así, al poner en práctica diversos elementos de la teorización de Lederach, Galtung y de otros autores vinculados a la *Peace Research*, los laboratorios de paz contribuyen al

refuerzo de este enfoque hacia los conflictos y al debate teórico sobre la paz. Por lo demás, corresponden a un buen ejemplo de lo que en los estudios para la paz es común designar como *peacebuilding from below*, en la medida en que la experiencia se basa en procesos sociales desde la base y en una lógica participativa y de empoderamiento, en la cual la receta de paz no es un modelo o un producto final que viene del exterior, sino más bien una construcción colectiva de la comunidad. Este es uno de los aportes fundamentales de los laboratorios.

## Conclusión

Fundamentalmente, hay dos niveles de análisis para los laboratorios de paz: el plano de las teorías de paz y el plano del conflicto armado colombiano.

Esta evidencia es además reiterada por la diversidad de los microconflictos a nivel territorial y regional que los distintos laboratorios de paz destacaron. De la misma forma que, al interior de un país como Colombia, lo que funciona en una región puede no ser aplicable a otra, esta lógica se extiende a otras zonas geográficas, lo que configura una lección de lo local protagonizada por el estudio comparativo entre el primer y segundo laboratorio de paz, que suele no ser tomada en cuenta en las teorías de paz. Los laboratorios de paz demuestran no solo que cada conflicto tiene su especificidad, sino que cada conflicto a escala regional tiene sus particularidades, tanto en lo que respecta a la conflictividad, como a las vías para transformarla.

Este elemento implica igualmente que no se pueda mirar a los laboratorios de paz como un modelo o fórmula de paz exportable, en cuanto esquema de aplicación universal. Su misma ‘exportación’ interna no está exenta de problemas, como ha sido notorio en el caso del segundo laboratorio de paz. Las vías para la paz tienen necesariamente que ser descubiertas y construidas desde cada región y desde la especificidad de cada territorio. Caso contrario, el ‘modelo de paz’ del laboratorio sería igualmente una propuesta ajena y no sostenible en el territorio, que encerraría las mismas perversidades que los enfoques para la paz verticales convencionales.

De los laboratorios de paz se pueden sacar reflexiones de gran valor en términos políticos, sociales y académicos con respecto a los temas de la construcción de paz y de los procesos sociales en contexto de conflicto, con vista a una paz positiva, pero

la ‘estandarización’ de un modelo de construcción de paz con base en los laboratorios de paz revelaría ser un profundo error, como se puede comprobar por la misma diversidad y especificidad de cada proceso regional de los distintos laboratorios de paz en Colombia.

Por lo tanto, un aprendizaje que el estudio de caso de los laboratorios de paz permite, y que tiene implicaciones en términos conceptuales y teóricos, es la limitación y debilidad de los paquetes preestablecidos de paz, de aplicación vertical, exógena a un territorio dado. Las fórmulas estandarizadas de paz tienen una alta probabilidad de fallar cuando son traspuestas a un escenario ajeno.

En lo que toca al segundo plano de análisis, los laboratorios de paz figuran, a escala colombiana, como una ruptura con el paradigma de enfoque hacia el conflicto. Son una iniciativa contra-hegemónica en términos de construcción de paz y que ha dado una contribución substantiva hacia una nueva forma de pensar la paz en Colombia.

A pesar de evidenciar muchas características convergentes y similares a otras iniciativas de construcción de paz, tanto en Colombia como en otros países, que construyen procesos de paz en medio de la guerra mediante estrategias y modalidades diversas para limitar la violencia estructural, cultural y directa y apuntalar vías políticas y sociales alternativas (Hernández, 2002, p. 179; ECP, 2006, p. 6; Mitchell y Nan, 1997), su originalidad reside fundamentalmente en su matriz holística, en las muchas dimensiones que abarca la misma iniciativa y en su carácter mixto sociedad civil-institucionalidad. Al contrario de la mayoría de las demás iniciativas de paz, basadas sobre todo en la negación de la violencia armada y en procesos de resistencia civil, los laboratorios de paz tienen un enfoque más propositivo, al incidir preferencialmente en temas de paz positiva y en la generación de vías e instrumentos alternativos en los planos político, social, económico y cultural que sostengan una paz duradera y un desarrollo humano.

Su singularidad es incluir una agenda y ámbito de intervención inusualmente amplios, que abarcan resistencia civil, democracia participativa, desarrollo humano y educación para la paz, y una estructura de actores multinivel que integran la sociedad civil local, comunidades de base, el Estado, las administraciones locales y la cooperación europea. No representan un enfoque totalmente nuevo, ni radicalmente diferente de otras iniciativas de construcción de paz desde la base a escala local, pero representan un acercamiento particular, que se diferencia y se destaca por su

multidimensionalidad y por representar un instrumento concreto de construcción de paz positiva desde la base a partir de programas de desarrollo económico. En los laboratorios de paz estas dos dimensiones se casan y aparecen juntas. De hecho, uno de los aportes conceptuales para la paz de los laboratorios es demostrar que integrar iniciativas de resistencia civil en procesos de desarrollo hace las iniciativas y dinámicas más sostenibles.

En este sentido, estos programas son una alternativa genuina, que se aparta de los enfoques convencionales hacia los conflictos y de las nociones tradicionales de seguridad, en la medida en que pone énfasis en la seguridad de las personas, a varios niveles, y en las causas profundas del conflicto, lo que la acerca al concepto de seguridad humana.



# Conclusión

“Hasta la más larga caminata empieza con un paso.”  
*Proverbio hindú*

Para un conflicto armado interno que persiste hace más de cuarenta años, con raíces profundas, causas multidimensionales, distintos actores armados en disputa, diferentes niveles, modalidades y facetas de violencia, y más de dos décadas de procesos de paz fallidos en lo que toca a las dos mayores guerrillas colombianas, no hay recetas infalibles para la resolución del conflicto, ni ningún enfoque para la paz que se aplique cual café instantáneo.

Asimismo, como señala Roland Paris (2004, p. 206), si hay algo que el registro histórico del *peacebuilding* en los años 1990 ha demostrado, es que no hay métodos fáciles, económicos, ni rápidos para establecer la paz, ni vacunas para inmunizar las sociedades contra la violencia.

No se ha pretendido con esta investigación retratar los laboratorios de paz como la panacea que va finalmente a traer la paz a Colombia en un país atravesado por un conflicto de décadas. Más bien, se han puesto en evidencia varias de las limitaciones a las que esta iniciativa hace frente, las debilidades que encierra y los obstáculos con que se encuentra. Fundamentalmente, se ha buscado presentar los laboratorios de paz como una experiencia social con un gran potencial para la construcción de la paz positiva desde la base en los territorios periféricos y marginados de Colombia, en donde el conflicto armado tiene mayor expresión e impacto y en donde la violencia se alimenta y retroalimenta; entendido como un programa que indica y apunta potenciales vías, mecanismos, canales, estrategias e instrumentos para la transformación del conflicto, al incidir en algunas de sus

causas profundas e integrar diversos sectores sociales de la población en procesos de construcción de paz.

En esta medida, los laboratorios de paz configuran un proto-enfoque para la construcción de la paz positiva a largo plazo en Colombia, y para sentar las bases y cimientos de una paz sostenible y duradera. Constituyen una propuesta conceptual distinta y alternativa en el campo de la paz. Indican un rumbo y un horizonte para el país; ponen en la agenda una serie de temas políticos y sociales que contribuyen a la discusión sobre las vías para la paz en Colombia; y plantean cuestiones sobre los modelos políticos y económicos vigentes en el país y las regiones: el modelo de democracia, de ciudadanía, de participación política, de gobernación y de desarrollo.

En realidad, los laboratorios de paz figuran como intentos de democratización a varios niveles. Han puesto en marcha diversos procesos de fomento a una democracia participativa a nivel local y regional, con miras a acercar los ciudadanos a las instituciones, y fomentar un nuevo modelo de relación entre gobernantes y gobernados, mediante procesos de articulación entre el sector público y el privado, y entre la sociedad civil y las alcaldías y gobiernos departamentales, a través de programas de rendición pública de cuentas y presupuestos participativos, así como mecanismos participativos de planificación como los planes de vida en el Cauca y Nariño y los núcleos de pobladores en el Magdalena Medio.

Instrumentos como estos se erigen como fundamentales para la transformación del conflicto, en un país con una ‘democracia limitada’ y una exclusión política que han estado en la base del conflicto armado. Pero los laboratorios de paz no se agotan en la dimensión sociopolítica, han fomentado algunos procesos de democratización a nivel económico y social a través de iniciativas de economía popular y campesina y programas de microcrédito, integrando poblaciones y sectores sociales tradicionalmente excluidos, particularmente los campesinos.

Los laboratorios de paz y los PDP han entendido que la construcción de la paz en Colombia pasa por la democratización de un país que ha sido históricamente bastante excluyente, e incluso represivo, en términos políticos, económicos y regionales, y por la reconciliación entre las ‘dos Colombias’, es decir, por el acercamiento de la integralidad del territorio nacional y de los sectores sociales de la población, desde los campesinos hasta los indígenas, desde los afrodescendientes hasta a los obreros, a los beneficios y dividendos del desarrollo y de la democracia del país.

Esta iniciativa ha asumido que la paz no es un tema exclusivamente de estrategia, de negociación y de correlación de fuerzas y poder, sino un tema de transformación de los seres humanos y de las estructuras sobre las que se cimentan. Han tenido en cuenta que el fenómeno de la violencia y de la conflictividad en Colombia es multidimensional y complejo y en esta medida, requiere soluciones y estrategias que sean también multidimensionales, e incidan en los diversos niveles y expresiones del conflicto.

En este elemento reside el principal factor de singularidad y originalidad de los laboratorios de paz y los PDP, y simultáneamente, su mayor fortaleza conceptual y social. A pesar de que estos programas encierren elementos que los acercan a otras experiencias sociales y políticas de construcción de paz en Colombia, como las comunidades de paz, algunas iniciativas indígenas o, incluso, el Plan Nacional de Rehabilitación, se destacan fundamentalmente por su enfoque integral y holístico, y su concepción amplia de la paz y de la construcción de paz, que busca abarcar dimensiones sociales, culturales, económicas, institucionales, territoriales y políticas, así como una amplitud de actores políticos y sociales.

Su potencial y ‘alternatividad’ en términos de construcción de paz proviene de la multidimensionalidad de su acercamiento y propuesta, que conjuga diversos componentes, escalas, protagonistas y temas, con miras a la transformación del conflicto, como los derechos humanos, la gobernabilidad, y la participación social; pero radica especialmente en su propuesta de conjugar la paz con el tema del desarrollo. Construir la paz mediante procesos de inclusión económica y de desarrollo humano sostenible, aparece de forma innovadora e indisoluble con estos programas. Los laboratorios de paz fueron pioneros en Colombia en su intento por combinar y ‘casar’ la construcción de paz desde la base con procesos de desarrollo, lo que ha permitido una cierta sostenibilidad de los procesos sociales, un arraigo al territorio, y encierra un potencial de inmunización de sectores sociales potencialmente en riesgo, como los campesinos y los jóvenes.

Configuran un enfoque más propositivo que reactivo, dirigido hacia un horizonte de paz, de desarrollo sostenible y de democracia plena y participativa, más que para el mero rechazo de la violencia. Son programas y procesos sociales de movilización con sus ojos puestos en la paz positiva y no solo la paz negativa. No se enfocan solamente en la denuncia de las masacres y la violencia armada, o en acciones de resistencia civil, sino en soluciones más de medio y largo plazo, que incluyen

tanto la dimensión de fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, como las Asambleas Constituyentes regionales; la resistencia civil y protección de las víctimas, como en las comunidades de paz; la promoción de una cultura de paz y un cambio de referentes y paradigmas culturales; procesos de desarrollo económico y humano, y de desarrollo alternativo a los cultivos de uso ilícito (García-Duran, 2008, entrevista). Integran una pluralidad de elementos, dimensiones y modalidades de construcción de paz, lo que configura una ‘combinación de todas las formas de lucha’ para la paz, sin paragón en Colombia.

Como refiere Mauricio García-Duran (2008, entrevista), exdirector del CINEP, lo que los laboratorios de paz y PDP

[...] hacen presente es que una estrategia de construcción de la paz necesariamente está vinculada a una puesta de construcción de sociedad, es decir, el tema de la paz en últimas es una manera de nombrar la sociedad toda y las distintas dimensiones y problemas de la sociedad.

Es en esta dimensión que el concepto de paz positiva de Galtung (1969; 1996) adquiere significado en el marco de los laboratorios de paz y estas experiencias emergen como proto-instrumentos de construcción de paz positiva en los territorios marginados de Colombia, encerrando elementos de lo que podría ser un enfoque alternativo y contra-hegemónico para la paz en el país. Ponen en marcha mecanismos de transformación del conflicto desde la base, a partir de las regiones del país, que descentralizan la construcción de paz; atribuyen un rol protagónico a la sociedad civil y a las comunidades de base en la construcción de paz, pero en articulación con la institucionalidad y los niveles políticos superiores; instituyen canales, vías y mecanismos de diálogo y concertación entre diversos actores y sectores sociales a nivel local, regional y nacional, contribuyendo de esta forma a la transformación del conflicto y de conflictos; y encierran una metodología y filosofía para la paz coherente, estructurada, multidimensional y original.

Por lo tanto, los laboratorios de paz contrastan con los enfoques políticos convencionales de gestión del conflicto puestos en práctica históricamente en Colombia, que han sido esencialmente verticales, no participativos ni inclusivos, se han dirigido y concentrado exclusivamente en el nivel de las élites del conflicto y no han tomado en consideración los elementos y factores estructurales de la conflictividad y construcción de paz.

En esta medida, los laboratorios han dado una contribución sustantiva para una nueva forma de pensar y construir la paz en Colombia. Han indicado y puesto en marcha vías concretas de transformación del conflicto en el marco del contexto colombiano y han demostrado, con hechos y procesos sociales, una metodología pertinente de aproximación a los territorios y regiones, con vista a la paz positiva, a la construcción de lo público y al fomento de un desarrollo incluyente y humano (CID, 2003, p. 31). Pusieron sobre la mesa nuevas vías de desarrollo campesino, pese a que fue a unas escalas muy restringidas, experiencias de participación política y social y posibles mecanismos para incidir sobre las causas profundas del conflicto y los problemas estructurales que el país ha enfrentado históricamente.

Han generado espacios y procesos de experimentación-acción en el campo de la paz con base en una diversidad de actores políticos y sociales (Bouchier y Barme, 2008, p. 95), desde las comunidades de base y organizaciones de la sociedad civil, hasta las alcaldías y el Estado central. Han funcionado fundamentalmente como experimentos sociales de construcción de democracia y de desarrollo a nivel local y regional, lo que resulta esencial para la paz positiva en Colombia, en la medida en que el conflicto tiene que ver con las limitaciones y la naturaleza excluyente de su modelo de desarrollo y de democracia. Como señala Arturo García (2008, p. 236), pueden considerarse “programas de investigación aplicada” cuyo fin último es producir un conocimiento social en beneficio de los grupos sociales y comunidades más excluidas de las regiones más periféricas y afectadas por el conflicto armado.

Son en este sentido, verdaderos ‘laboratorios de paz’ y de ‘paces’ en un país que es un ‘laboratorio’ de guerra y violencias y en un continente de todo el ‘laboratorio’ de nuevas formas de lucha, expresión y movilización social. Han figurado como espacios de ensayo de organización y cambio social y de articulación entre la sociedad civil, la institucionalidad y la cooperación internacional.

De hecho, frente al escenario de crisis que vive gran parte del mundo, los laboratorios de paz en Colombia, de forma análoga a otras experiencias y procesos sociales, particularmente en Latinoamérica, vuelven a poner e insertar en la agenda cuestiones políticas y filosóficas primordiales, que pretenden incidir sobre la raíz de los problemas sociales: ¿Cómo nos debemos organizar en sociedad? ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Qué modelo de democracia? ¿Qué modelo de desarrollo? ¿Cómo debemos gestionar la *res publica*? ¿Qué relaciones se deben establecer entre los gobernantes y los ciudadanos?

En esta medida, su importancia política, filosófica y social trasciende su circunscripción micro y su ubicación en Colombia, y podrían revelarse como ‘laboratorios’ muy útiles para diversos cuadrantes geográficos, para toda Latinoamérica, e incluso para la ‘vieja Europa’, que supuestamente concede una ayuda a países y pueblos en vías de desarrollo.

Por lo tanto, independientemente del impacto de estas iniciativas en términos sociales, políticos y de reducción de la violencia, los laboratorios de paz ya constituyen un referente de construcción de paz positiva, de desarrollo humano y de democratización, desde la base, a nivel regional en Colombia. Muestran, tanto desde el punto de vista conceptual como desde los procesos sociales, líneas de acción y vías concretas para abordar los temas de la violencia directa, cultural y estructural en los territorios más marginados del país, que son el caldo de cultivo del conflicto armado, e indican propuestas de salida a escala micro de cómo construir una paz positiva, teniendo en cuenta las causas profundas que sostienen y alimentan el conflicto en Colombia.

En esta perspectiva, apuntan caminos que podrían ser generalizables y replicables en escalas más amplias. A pesar de las dificultades evidenciadas por los laboratorios de paz para trascender su dimensión micro, establecieron redes y canales de interlocución y concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas, e involucraron al Estado en una iniciativa singular de construcción de paz, con una filosofía y una agenda propias, que han producido enseñanzas y *know how* aprovechables por el Estado y los actores políticos, con menor o mayor intensidad, en el marco de las políticas públicas para la paz. Por lo tanto, podrían contribuir a un nuevo acercamiento del Estado a los problemas de la violencia. Si así fuera, representarían también ‘laboratorios de paz’ para el gobierno y el Estado colombianos.

Pero el carácter ‘alternativo’ de los laboratorios de paz también atraviesa el campo de las relaciones internacionales y de los enfoques internacionales hacia el conflicto armado en Colombia. Desde la perspectiva de la UE y en cuanto instrumentos de la cooperación europea, los laboratorios de paz configuran una política exterior y un enfoque para la paz en este país que contrasta con la estadounidense y que por consiguiente, se plantea como una especie de ‘alternativa europea’ al Plan Colombia (Barreto Henriques, 2006). Es un enfoque, con base fundamentalmente en la Comisión Europea, que reviste e incorpora una concepción de paz más cercana a la seguridad humana que a la ‘seguridad democrática’ y es más próximo a la

paz positiva que a la paz negativa o que a la lógica contra-insurgente y anti-narcótica de los EUA en Colombia.

No obstante, los laboratorios de paz evidencian diversas limitaciones, carencias, debilidades, bloqueos y ausencias en términos de construcción de paz:

En primer lugar, se verificó una erosión entre la propuesta original de los laboratorios de paz con base en la filosofía del PDPMM y su ejecución en los laboratorios de paz subsiguientes. El segundo laboratorio de paz especialmente, sufrió una cooptación relativa por parte del gobierno nacional, que llevó a la introducción de dinámicas verticales y a una disolución de su potencial, fruto del rol preponderante y centralizador que pasó a desempeñar Acción Social en el marco de la iniciativa y de los cambios en la coyuntura política nacional que hicieron inclinar la balanza en el país más hacia el lado de la paz negativa que de la positiva.

En realidad, como ha quedado plasmado en esta investigación, hubo choques al interior de los laboratorios de paz, agendas cruzadas, percepciones, intereses y lecturas diferenciadas, e, incluso concepciones de paz distintas, que configuran estos programas como experiencias no lineales y complejas.

Los laboratorios de paz, especialmente en su segunda y tercera ‘reencarnación’, se vieron de cierta forma entre *El Principito* de Saint-Exupéry y *El Príncipe* de Maquiavelo (Bolívar, 2008, p. 343), en un equilibrio inestable y un cruzamiento entre el idealismo y la utopía de la sociedad civil regional, corporizada en la filosofía y ética del PDPMM, y el realismo y la lógica de poder impuestos por el gobierno nacional.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones y debilidades, estos programas han mantenido su esencia en lo que toca a las finalidades, a la metodología y a los procesos sociales y siguieron siendo, tanto en su filosofía, como en sus procesos sociales, un instrumento de valor y una alternativa válida para la construcción de paz desde la base, en el contexto específico de Colombia y su conflicto armado. Encierran un potencial de construcción de paz positiva, apenas limitado por el relativo ‘secuestro por la *realpolitik*’ de la iniciativa por parte del gobierno nacional, su sumisión al cinturón procedimental de la cooperación europea y por las limitaciones de alcance, implantación y recursos de la experiencia frente a las macrodinámicas políticas y económicas a nivel nacional.

En segundo lugar, frente a las diferentes escalas y niveles de la transformación del conflicto, los laboratorios de paz se sitúan de forma distinta y con alcances

diferenciados. Fue notoria su limitada capacidad para incidir sobre los niveles macro del conflicto en términos estratégicos y políticos, y sus insuficiencias a nivel estructural, desde el punto de vista político, económico y cultural. A pesar de su extraordinario potencial y de los procesos significativos a nivel micro que han fomentado y puesto en marcha, sufrieron de profundas limitaciones y se encontraron con desafíos con los que no pudieron lidiar, debido a la reducida dimensión de sus recursos, de su extensión y de su escala. Son microexperiencias de alcance limitado, tanto en términos territoriales, como en términos sociales y demográficos. Configuran fundamentalmente bolsas de cambio social y de construcción de ‘paces’ locales. No pueden cambiar radicalmente la lógica de la guerra, ni abordar de forma profunda las causas estructurales del conflicto o impulsar de forma significativa y sustentada una agenda de reformas políticas, sino tan solo transformar algunas de las expresiones del conflicto a nivel micro.

En realidad, resulta difícil generar soluciones regionales sostenibles sin una solución nacional, pues el conflicto armado, a pesar de sus especificidades locales y regionales, tiene como base una serie de lógicas nacionales y se asienta en estructuras nacionales de poder político y económico (García, 2008). Hay una dimensión estructural de la conflictividad en Colombia que sostiene y alimenta la(s) violencia(s), que requiere procesos y reformas sistémicas a nivel político, económico y cultural, y que exige que se aborden cuestiones de fondo, como la distribución de la riqueza, el narcotráfico, el modelo de participación política y de gobernación, y el tema de la tierra, factor estructurador de toda la vida y la estructura social en el campo colombiano y uno de los elementos en la base del conflicto armado desde sus primeros días hasta hoy.

Son temas fundamentales de la transformación del conflicto que son eminentemente de naturaleza nacional y pasan necesariamente por el rol del Estado y de las políticas públicas y no están al alcance de los laboratorios y los PDP, sino de forma residual y local. Este es necesariamente un proceso complicado, complejo y de largo plazo, que implica repensar, reestructurar y transformar modelos de desarrollo, de sociedad y de democracia, presupone la generación de difíciles consensos políticos y pasa por políticas públicas para combatir la exclusión a nivel político, socio-económico y regional.

En realidad, la presencia de guerrillas en Colombia es una parte significativa de los problemas sociales, políticos y de la conflictividad en el país, pero no se agota en



este factor. El fenómeno de la violencia en Colombia es mucho más complejo que el aparato militar de los grupos armados ilegales (Granada, Restrepo y Vargas, 2009, p. 103). Hay más violencia(s) más allá de la violencia armada de los grupos ilegales y, en gran medida, estos grupos son síntoma de ‘enfermedades’ políticas y sociales para las cuales Colombia históricamente, no ha logrado encontrar una cura.

Colombia presenta problemas estructurales gravísimos, que van mucho más allá del conflicto armado, y que en gran medida, están en la base del mismo. Las guerrillas son síntoma y expresión armada de una cuestión agraria por resolver y de una desigualdad acentuada en la distribución de la propiedad. Asimismo, la exclusión política, institucionalizada en el pacto de régimen del Frente Nacional, pero con repercusión hasta los días de hoy, es fundamental en la erupción y persistencia del conflicto, así como la débil presencia física y social del Estado.

De este modo, no reconocer a la insurgencia como actores políticos con fines políticos y como se ha hecho de forma recurrente en el discurso oficial y mediático, retratarlos como meros bandos de delincuentes y narcotraficantes, es una receta para el fallo de cualquier proceso de paz. Las causas de la violencia no son la violencia en sí misma, de igual forma que la solución para este problema no puede ser la agregación de un nivel superior de violencia.

Como refiere Marc Chernick (2008, p. 107), “en Colombia la paz consiste, fundamentalmente, en la construcción de un régimen incluyente y participativo y de una presencia legítima, legal, respetuosa y proveedora del Estado a lo largo y ancho del territorio nacional”, no solo en términos físicos, sino institucionales y de providencia. Pasa por generar una democracia y un modelo de desarrollo y sociedad que sirva a los intereses y el bienestar de la población colombiana, de forma integral.

De hecho, como señala Jeong (2000, p. 33), un conflicto armado suele revelar fallos y debilidades en el sistema político y las políticas públicas. Así, mientras el régimen colombiano esté estructurado en torno a los intereses de élites nacionales o regionales, y se acumulen niveles de exclusión social y regional profundos, habrá un germen de violencia en el país, sea en estado abierto o latente. Sin una transformación del conflicto, existe el riesgo de que, dado el historial de violencia política en el país, los elementos de violencia estructural y cultural y el carácter multidimensional y regionalmente diferenciado del conflicto, el país no sea verdaderamente pacificado y que la violencia sea reincidente o asuma nuevas formas y modalidades, como

ocurre en El Salvador, en donde una “guerra de frentes se convirtió en una guerra de todas las esquinas” (Vincenti, 2008, entrevista).

Si las causas de la conflictividad permanecen intocadas y si los esfuerzos para la paz se restringen a la dimensión de la negociación entre las partes en conflicto, cualquier esfuerzo para la paz puede ser limitado, efímero, insostenible o vano, y se seguirán alimentando formas de violencia en el país y grupos con la capacidad de desafiar el monopolio legítimo de la fuerza en los territorios periféricos, sea en la forma de guerrillas, de grupos paramilitares, narcotraficantes o pandillas. Un acuerdo político podría traer una paz negativa, pero las necesidades humanas de las poblaciones excluidas y comunidades marginadas de zonas como el Patía o el sur de Bolívar seguirán presentes y encerrando el riesgo de un fácil asentamiento de estos grupos en el mercado laboral de la ilegalidad violenta.

El fenómeno de las Bacrim, es decir de nuevos grupos paramilitares que han emergido después del proceso de desmovilización de las AUC, revela en gran medida, esta realidad y problemática, y por consiguiente, las limitaciones estructurales de los enfoques tradicionales hacia el conflicto, en particular, de la política de seguridad democrática. Sin la transformación del conflicto a nivel nacional y regional, no se interrumpen los procesos de producción y reproducción de la violencia (Granada, Restrepo y Vargas, 2009, pp. 101-103).

La construcción de la paz en Colombia tendrá que tener en cuenta necesariamente los factores derivados de la ‘geometría variable’ del país en términos institucionales, políticos y sociales, que propicia órdenes sociales regionales propios, ajenos o relativamente distantes del poder central y de los de procesos de negociación política. La generación de espacios regionales de construcción de paz y la transformación de los órdenes sociales regionales es fundamental en cualquier estrategia de paz integral y un necesario complemento a cualquier proceso de negociación política nacional, dada las características de la conflictividad en Colombia (Granada, Restrepo y Vargas, 2009).

Es en este sentido que los laboratorios de paz adquieren un significado político profundo en el marco de la construcción de la paz positiva desde la base y de las regiones en Colombia. Pero la transformación del conflicto y en particular la transformación de las sociedades y órdenes sociales regionales, implica igualmente abordar elementos estructurales como la reforma agraria, tema casi congelado en la agenda política colombiana desde hace mucho tiempo y que ha sufrido incluso un elevado

retroceso en los últimos años debido a las dinámicas de paramilitarización política, estratégica y económica de muchas regiones, que han sido funcionales a los intereses de los grandes terratenientes. Implica también poner en marcha programas que promuevan la inclusión social y mecanismos que institucionalicen formas de resolución de conflictos a las escalas regional y local, áreas en las cuales los laboratorios de paz han dado pistas y rutas y desempeñado un rol de relevo, pero destacarán siempre como actores entre múltiples protagonistas.

Asimismo, este proceso de transformación del conflicto a nivel macro pasa necesariamente por un proceso de negociación política con los actores armados, que tenga en consideración los factores de debilidad que han hecho caer por tierra los procesos de paz anteriores (señalados en el segundo capítulo).

El proceso de paz en curso entre el gobierno presidido por Juan Manuel Santos y las FARC permite soñar con esta posibilidad y proyectar una salida política negociada al conflicto armado. La concretización de este escenario y emergencia de un marco de posconflicto en Colombia reconfiguraría necesariamente la misión de los laboratorios de paz y los PDP, ampliando su potencial de trabajo por la construcción de paz en las regiones.

Hasta el momento, los laboratorios de paz han demostrado que hay rutas alternativas para la paz, pero no se constituyeron como la alternativa. Fundamentalmente, han indicado caminos y direcciones para la paz, pero no tuvieron la capacidad de recorrerlos, ni sería esperable que lo hicieran. Su propósito fue tratar, por encima de todo, de generar y mostrar soluciones para la paz y el desarrollo a nivel micro. Estas propuestas pueden ser apropiadas, replicadas o adoptadas en niveles superiores de decisión, pero este proceso es contingente a diversos factores y dinámicas políticas a nivel central y regional, así como al rol del Estado colombiano, de las élites políticas y económicas, de los grupos armados y de la opinión pública nacional.

Si un puente y una articulación entre los procesos a nivel micro y a nivel macro no se establece, los impactos de los laboratorios y PDP serán limitados, circunscritos o meramente localizados. En este elemento reside la clave para el relativo éxito o fracaso de iniciativas como los laboratorios de paz y los PDP. Representa su mayor reto y determinará, en gran proporción, su impacto (Barreto Henriques, 2009a, p. 539).

Así, en cierta medida, puede afirmarse que aunque el diagnóstico y pronóstico para la paz de los laboratorios sean acertados y válidos en cuanto enfoques para la

construcción de la paz positiva, no han tenido la capacidad de diseminarlos en forma generalizada. Entendemos por tanto que para realizar plenamente su potencial los laboratorios de paz necesitarían fundamentalmente dos elementos: trascender su nivel micro y su ámbito circunscrito en términos sociales y territoriales hacia escalas más amplias; y la aparición de una fuerza de legitimación a nivel político, que absorbiera e integrara algunos de sus procesos, enseñanzas y conceptos y los convirtiera en políticas públicas nacionales, regionales y locales para la paz positiva. Así, los laboratorios de paz son experiencias de construcción de paz positiva replicables en Colombia, pero que necesitan que se reúnan determinadas condiciones y factores para que adquieran sustancia y sostenibilidad, particularmente un respaldo institucional y político, que no se ha verificado en gran medida, a nivel regional ni nacional en las presentes circunstancias.

Un acuerdo de paz con la insurgencia podría cambiar esta situación y propiciar las condiciones ideales para un proceso y estrategia de construcción de paz desde la especificidad de las regiones, que aprovechara y respaldara el potencial de estas iniciativas, e incidiera en los diversos niveles de construcción de paz de la pirámide de Lederach (Véase el primer capítulo).

Efectivamente, como se ha señalado en el capítulo anterior, reviste igual importancia un enfoque en la dimensión macro de la transformación del conflicto, como en la construcción de paz desde la base. La complejidad de la violencia colombiana, en donde conviven diversas violencias, con niveles y temporalidades diferenciadas, exige estrategias complementarias y multinivel (McDonald, 1997, p. 14; González et al, 2003, pp. 51-52) que integren y articulen los niveles micro y macro de la construcción de paz. Como subraya el informe del PNUD (2003) “El Conflicto, callejón con Salida”, el hecho de que las causas del conflicto colombiano sean multidimensionales, exige que las estrategias de paz sean de igual modo multidimensionales e incidan en diversos niveles políticos.

Por lo tanto, la transformación del conflicto pasa por conciliar políticas a nivel macro con intervenciones regionales particularizadas, es decir, la construcción de la paz en Colombia exige estrategias con y para escalas espaciales distintas (García, 2008). Implica una atención a los niveles micro y medio de la conflictividad y sus especificidades, escala en la cual experiencias como los laboratorios de paz se pueden revelar como fundamentales, pero pasa igualmente por procesos y estrategias a nivel macro.

La sostenibilidad de la paz y de la transformación del conflicto implica la participación de amplios sectores de la sociedad. Usando una metáfora de Lederach (1997, p. 37), para construir la ‘casa de la paz’ (*house of peace*), se requiere un trabajo tanto en el techo como en los cimientos, tanto en la cima, como la base de la pirámide del conflicto, todos los niveles son igualmente importantes para que esta se sostenga y no caiga.

Asimismo, se imponen tanto políticas y procesos en el sentido de la construcción de la paz positiva a largo plazo, en las cuales los laboratorios de paz y PDP fácilmente se encuadran, así como estrategias para la resolución del conflicto y búsqueda de la paz directa y negativa en el corto y medio plazo, que pasan necesariamente por elementos como un proceso negociado con los actores armados. Como el mismo trabajo de campo para esta investigación puso en evidencia, ambas vertientes son fundamentales, complementarias e interdependientes. Una sin la otra no adquiere ni solidez, ni sustentabilidad.

La paz requiere transformaciones en las relaciones sociales a varios niveles, que se construyen desde la base, mediante procesos sociales y culturales, pero también desde arriba, mediante políticas públicas, reformas de fondo y procesos de negociación política. Un enfoque comprehensivo y sostenible para la paz en Colombia requiere necesariamente una ‘infraestructura de paz’, es decir un proceso y estructura que involucre múltiples actores, actividades y niveles de construcción de paz (Lederach (1997, p. xvi) y que incida tanto en los aspectos de la paz negativa, como en aquellos de la paz positiva.

Los laboratorios de paz han demostrado ser experiencias de gran valor en el sentido de la construcción de la paz positiva en las regiones en el largo plazo, pero su incidencia en temas de paz negativa es menor (aunque encierren componentes con incidencia en la reducción de la violencia directa por parte de los actores armados, mediante procesos sociales de resistencia civil, de empoderamiento comunitario, de concienciación cívica y de protección de los derechos humanos y del DIH), razón por la cual los laboratorios de paz no pueden asumir, ni desempeñar el rol de principal protagonista en la consecución de la paz en Colombia.

Así, se pretendió poner en relieve un programa y enfoque contra-hegemónico para la paz en relación a los modelos convencionales hacia el conflicto armado en Colombia, pero no presentarlo como la alternativa. Se evidencian diversas limitaciones y retos a la iniciativa, fundamentalmente, la necesidad de conciliar procesos políticos a nivel de élite y procesos descentralizados, horizontales y participativos para la paz.

La paz en Colombia pasa por generar una agenda política y social de cambios que involucre a la nación y a la sociedad colombianas como un todo y no se base solamente en una idea impuesta por las élites. Es en este ámbito en el que experiencias como los laboratorios de paz pueden ser fundamentales y tienen una palabra que decir, como programas de democratización de la construcción de paz y de la misma democracia, que ofrecen rutas y líneas de acción y establecen canales y plataformas de diálogo, articulación y concertación entre sectores políticos y sociales distintos. Los laboratorios han producido y generado fundamentalmente metodologías, procesos, instrumentos y aprendizajes con miras a la paz positiva, así como modelos de participación y de organización, de articulación e interlocución con las instituciones, de integración económica de sectores excluidos y de fomento de una cultura de paz y de los derechos humanos, que pueden ser aprovechados en diversas instancias, ser referentes en el marco de un amplio ‘proceso de paz’, en el sentido definido por Lederach y beneficiar una estrategia integral para la paz en Colombia.

Pero de igual forma, estos programas han puesto en evidencia la especificidad de cada territorio y la contingencia de la construcción de la paz en cada región, razón por la cual no deben ser entendidos como un paquete predefinido de elementos o técnicas, ni como una fórmula de paz generalizable en cuanto un modelo acabado. Representan fundamentalmente un enfoque para la paz, que puede ser apropiado en otros escenarios, con base en sus propios actores y sus particularidades. Configuran una especie de luz de faro para la construcción de la paz positiva en el país, pero no un mecanismo para ser fotocopiado.

Sin embargo, en lo que respecta a los laboratorios de paz y su potencial y valor como enfoque e instrumentos para la paz positiva, hay que tener en cuenta otros factores a diversos niveles: los laboratorios no inciden sobre los aspectos estructurales de la conflictividad y exclusión, pero generan procesos sociales extraordinarios a nivel local y regional; fomentan la construcción de ciudadanía en los sectores rurales en donde la institucionalidad y el Estado son muy débiles; ponen en marcha procesos de inclusión a nivel social, político, económico y cultural; protegen y potencian las voces de las bases; generan experiencias, ejemplos, procesos, canales e instrumentos en términos de participación, articulación, resistencia civil, desarrollo sostenible, economía campesina y de incentivos a la producción; y compelen de cierta forma, al gobierno nacional y las autoridades regionales y locales a reconocer las organizaciones de la sociedad civil y a colocar

en la agenda política temas como la participación, los derechos humanos, y el modelo de desarrollo vigente.

Asimismo, han logrado preservar y hacer sobrevivir miradas políticas y sociales autónomas y alternativas, frente a la mar de violencia de los actores armados, a la masificación de la política de seguridad democrática y la polarización política del país, que configuran verdaderamente estas experiencias como iniciativas contra-hegemónicas.

Por lo demás, en la medida en que la construcción de paz pasa fundamentalmente por la transformación, reconfiguración y reestructuración de las relaciones sociales, cambiar una vereda o un individuo en un municipio del Santander, del Cauca o del oriente antioqueño representa una especie de microtransformación estructural. Los laboratorios de paz han impulsado procesos de cambio que se extienden desde el nivel personal de los beneficiarios y participantes en los procesos de base, a cambios relacionales en las dinámicas institucionales y de gobernación locales, y en los procesos de producción económica.

Pero la importancia y relevancia de los laboratorios de paz no se agota en sus procesos sociales, los recursos que inyectaron en las regiones (que son poco significativos cuando son comparados con los presupuestos de las administraciones públicas o, incluso, con los montantes de la cooperación europea en otros cuadrantes del mundo), ni en su impacto real en el conflicto armado; sino en su contenido, en la filosofía de paz que han preconizado y puesto en marcha, la fuerza ética de sus planteamientos y propuestas políticas, los ideales y valores que han sembrado entre las comunidades, los valores que han inculcado, la metodología participativa en que se han basado, y en el enfoque alternativo y multidimensional que han vehiculado. Esta es su mayor fortaleza y mayor valía.

Configuraron fundamentalmente ‘laboratorios’ de ideas, de líneas de transformación y de cambio social a nivel micro y semillas de una forma distinta de construir y buscar la paz en el país, partiendo de las regiones y de las necesidades y aspiraciones específicas de las comunidades y asociaciones organizadas a nivel local y regional. Se han propuesto demostrar que es posible generar otro tipo de instituciones, otra forma de Estado, de democracia, de desarrollo y forma de vida (Vargas, 2007). De alguna manera, han intentado poner en práctica, al nivel micro, el ‘lema’ altermundialista ‘otro mundo es posible’, al procurar demostrar que otro Magdalena Medio y Macizo Colombiano son posibles, otra Colombia es posible,

otra paz es posible (Barreto Henriques, 2009a, p. 539). En esta medida, los laboratorios de paz pueden integrarse en lo que Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 11, 377; 2004, p. 3) caracteriza como la “globalización contra-hegemónica”, o la “globalización alternativa”, al constituir procesos sociales desde abajo hacia arriba de resistencia al paradigma político-económico neoliberal dominante —que provoca exclusión social y la destrucción del medio ambiente— y que simultáneamente crea nuevas pautas de relaciones a nivel local y abre espacios para la participación democrática, la emancipación social, formas alternativas de desarrollo y la vigencia de los derechos humanos de las cuatro generaciones.

Por lo tanto, los laboratorios de paz revisten y encierran una dimensión que es política y social, pero también simbólica y utópica. Como señala Alfredo Molano (2009, p. 56) refiriéndose al PDPMM, su virtud fue fundamentalmente “mantener la esperanza viva”, dimensión que no es cuantificable en términos de impacto, pero que encierra una gran importancia en el contexto del horror de un conflicto armado. Los laboratorios de paz han permitido a diversas comunidades en varias regiones mantener el sueño de una vida mejor y de una región y un país en paz, y tener un horizonte en el medio de la desesperación y de violencias que asumen distintas formas y expresiones. Los laboratorios rescataron valores amenazados por las tinieblas de la violencia, como el valor de la vida, la dignidad, la tolerancia, la solidaridad y la comunidad, y recuperaron el valor del ser humano en su dimensión simbólica, económica y espiritual.

Este es uno de los aportes más significativos de los laboratorios de paz. Aunque fuera nulo su impacto —que claramente no lo es—, aunque el modelo desigual de desarrollo se imponga, los laboratorios de paz valdrían por sí mismos; no serían en vano, pues seguirían teniendo valor en tanto propuesta conceptual alternativa que demuestra vías posibles y concretas para la construcción de la paz positiva desde la base y las regiones, en un país en donde la permanencia de las causas profundas que ha generado el conflicto van a seguir perpetuando formas y expresiones de violencia directa, estructural y cultural, sea en la forma de grupos armados u otras modalidades. Por lo tanto, en las veredas y procesos sociales de base de los laboratorios de paz y los PDP se están esbozando, en cierta medida, lo que Ernst Bloch (2005) llamó *utopías concretas*, visiones de esperanza que anticipan y proyectan un futuro nuevo que es posible realizar y apuestas concretas por un futuro por concretar (Sousa Santos, 2010, p. 148). De hecho, como señala Elise Boulding (2000, p. 29), el



pensamiento utópico desempeña un rol fundamental para la construcción de la paz y de culturas de paz, en la medida en que la imaginación de algo diferente y mejor constituye una fuente positiva de cambio social.

La principal contribución de los laboratorios ha sido su enfoque singular y holístico para la paz, la fuerza de sus ideas, de sus planteamientos éticos y el valor político del modelo inclusivo y participativo de paz, de democracia y desarrollo que han abogado y puesto en marcha. Permitieron pensar el país y sus regiones de forma diferente y acercarse de forma distinta al tema del conflicto, poniendo en marcha nuevos senderos para la paz en un país que necesita desesperadamente de nuevas e imaginativas soluciones para la superación del conflicto. En última instancia, los laboratorios de paz representan otra forma de mirar y construir la paz en Colombia.

Así, debe subrayarse que, cualesquiera sean sus impactos en las regiones y a nivel nacional, los laboratorios de paz han estado sobre la vía correcta, en el sentido de estar orientados hacia la raíz de las causas del conflicto y de su transformación. Como en un laboratorio real, puede tomar algún tiempo alcanzar algunos resultados, o puede que nunca se obtenga o reproduzca la fórmula para la paz (Barreto Henriques, 2009a, p. 540). Sin embargo, como menciona John Paul Lederach (2008, p. 71),

La gente que vive en escenarios de conflictos muy enraizados se enfrentan a una extraordinaria ironía: la violencia le es conocida, el misterio es la paz. Por su propia naturaleza, por lo tanto, la construcción de la paz exige un camino guiado por la imaginación del riesgo.

Por último, en lo que respecta al potencial de expansión de los laboratorios de paz como proto-instrumentos de construcción de paz positiva desde las regiones, se hace necesario mencionar que, si bien los laboratorios de paz, en cuanto una iniciativa temporalmente delimitada con base en la cooperación no reembolsable de la UE, se cerraron desde el punto de vista administrativo en el 2011<sup>3</sup>, la experiencia de

<sup>3</sup> No obstante, hubo actividades en el marco de los laboratorios de paz apoyadas por la UE hasta el 2013, aunque asumiendo otros contornos y modalidades. Pasaron fundamentalmente por la consolidación de Procesos Estratégicos Territoriales (PET) y de las iniciativas bandera de los

los PDP, que está en la base de los laboratorios de paz y que les trasciende, sigue vigente y en crecimiento en el territorio colombiano.

Los procesos sociales asociados al PDPMM, Asopatía, CRIC y a los demás PDP en Colombia, continuarán sus actividades e iniciativas en las regiones, independientemente del respaldo político y financiero de la UE, aunque la retirada del capital europeo signifique, en algunos casos, una reducción significativa de los aportes para los equipos y actividades. Los recursos se han diluido gradualmente, pero los procesos dirigidos a la construcción de la paz continuarán, así como los ensayos para aprender a vivir pacíficamente y a construir la paz cotidianamente desde las regiones.

La experiencia encarnada por los laboratorios de paz y los PDP está lejos de desaparecer de la agenda política en Colombia, pero queda saber si en algún momento sus propuestas y procesos coincidirán con la agenda política del país; en otras palabras, la principal problemática que recae sobre estos programas es en qué medida serán capaces de trascender su circunscripción territorial y social limitada y conectar el ‘terreno al Palacio’ (Vincenti, 2008, entrevista), las veredas y corregimientos de estas regiones periféricas al poder central, y establecer un puente entre las dos escalas de la construcción de la paz. Este es su principal reto, pero también su mayor obstáculo.

---

laboratorios, e implicaron la disminución de los recursos y proyectos involucrados, siguiendo lo que un funcionario de la Comisión Europea describió como un “*fade out* progresivo” de la UE.

# Listado de entrevistas realizadas

- Albornoz, Maribel (2008).** Miembro del equipo de Asopatía, coordinadora de la línea 3 del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 19 febrero.
- Angulo, Alejandro (2007).** Padre jesuita, exdirector del CINEP. Bogotá, 19 de octubre.
- Arteaga, Ricardo (2008).** Miembro de la Entidad Coordinadora Regional (ECR) del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Acompañamiento y Seguimiento de proyectos. Pasto, 14 de octubre.
- Ausecha, René (2008).** Director de la organización caficultora Cosurca. Popayán, 15 de febrero.
- Bandini, Duccio (2007).** Funcionario del PNUD en Colombia. Bogotá, 18 de octubre.
- Barajas, Arturo (2008).** Coordinador de la línea 2 del PDPMM. Procesos sociales, culturales y democráticos. Barrancabermeja, 30 de agosto.
- Bastidas, Alexander (2008).** Coordinador del proyecto “Macizo Región de Paz” del segundo laboratorio de paz. Pasto, 16 de octubre.
- Bautista, Víctor (2008).** Director del Observatorio de Paz de Norte de Santander y exdirector del laboratorio de paz del Norte de Santander. Bogotá, 17 de diciembre.
- Bayona, Manuel (2007).** Ex subdirector técnico de la CDPMM. Entrevista por teléfono Bogotá - Bucaramanga, 25 de agosto.
- Bertolini, Nicola (2007).** Exconsejero de cooperación de la delegación de la Comisión Europea en Colombia, principal protagonista e interlocutor del lado de la Unión Europea en el proceso de los laboratorios de paz. Entrevista por teléfono Bogotá - Bruselas, 27 de septiembre.

- Briceño, Luis Hernando (2008).** Coordinador de la línea 3 del laboratorio de paz del Magdalena Medio. Barrancabermeja, 2 de septiembre.
- Caballero, Henry (2008a).** Coordinador del eje 1 del laboratorio de paz del Macizo Colombiano, miembro del CRIC, exconsejero de paz del gobernador Floro Tunubalá. Fue miembro y uno de los ideólogos del Movimiento Quintín Lame. Popayán, 13 de febrero.
- Caballero, Jorge (2008b).** Miembro del CRIC. Popayán, 16 de febrero.
- Cárdenas, Jhobanny (2008).** Uno de los líderes del proyecto “Ciudadela Educativa” del laboratorio de paz del Magdalena Medio, que reúne jóvenes de la comuna 7 de Barrancabermeja. Barrancabermeja, 4 de septiembre.
- Cardona, Benjamín (2008).** Coordinador del proyecto del laboratorio de paz del oriente antioqueño ejecutado por la ONG Conciudadanía. Medellín, 1 de diciembre.
- Castañeda, Wigberto (2008).** Sub director del laboratorio de paz del Meta, exfuncionario del PDPMM. Bogotá, 22 de noviembre.
- Castilla, Juan de Dios (2007).** Funcionario de la Diócesis de Barrancabermeja. Barrancabermeja, 13 de diciembre de 2007.
- Castillo, Rafael (2008).** Sacerdote, director ejecutivo del Equipo Técnico Regional del laboratorio de paz de Montes de María. Bogotá, 26 de agosto.
- Castrillón, Teresa (2008).** Una de las líderes del Movimiento de Víctimas Ave Fénix, de Puerto Berrio en el Magdalena Medio. Puerto Berrio, 28 de agosto.
- Celis, Luis Eduardo (2008).** Coordinador del Programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris, excombatiente del ELN e integrante de la Corriente de Renovación Socialista. Bogotá, 4 de diciembre.
- Chica, Pedro (2008).** Coordinador del laboratorio de paz del oriente antioqueño. Rionegro, 3 de diciembre.
- Collazos, Víctor (2008).** Uno de los líderes de la organización campesina CIMA. Popayán. 22 de octubre.
- Contreras, Carlos (2008).** Alcalde de Barrancabermeja, exfuncionario del PDPMM. Barrancabermeja, 7 de septiembre.

- Cuellar, Parmenio (2008).** Exgobernador de Nariño, exministro de Justicia y senador. Estuvo involucrado en el proceso de origen del laboratorio de paz II. Pasto, 16 de octubre.
- Daza, Roberth (2008).** Funcionario de Asopatía. Pasto, 20 de febrero.
- De Roux, Francisco (2007).** Padre jesuita, economista de formación, exdirector de la CDPMM, ideólogo del PDPMM, exprovincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Barrancabermeja, 12 de diciembre.
- De Roux, Francisco (2008).** Cartagena, 23 de enero.
- Díaz, César William (2008).** Uno de los líderes de la organización campesina CIMA. Popayán, 12 de febrero y 20 de octubre.
- Duque, Ubencel (2008).** Excoordinador de la línea 1 del laboratorio de paz del Magdalena Medio. Paz y derechos Integrados. Director de la CDPMM. Barrancabermeja, 4 de septiembre.
- García, Clara Inés (2008).** Socióloga, profesora de la Universidad de Antioquia. Bogotá, 26 de septiembre.
- García-Durán, Mauricio (2008).** Director del CINEP. Bogotá, 30 de septiembre.
- Giraldo, Luis Fernando (2008).** Funcionario de la ECR del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Popayán, 11 de febrero.
- Gómez, Álvaro (2008).** Antropólogo, excoordinador técnico regional del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Popayán, 14 de febrero de 2008.
- Gómez, María del Pilar (2008).** Funcionaria del equipo de comunicación del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 15 de octubre.
- González, Jorge Iván (2007).** Economista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 11 de mayo.
- Gutiérrez, Miriam “Pesca” (2007).** Líderesa de la organización de pescadores Asopesam. Barrancabermeja, 10 de diciembre.
- Heredia, Alberto (2008).** Funcionario del PNUD, programa Redes. Exfuncionario de la ACCI. Bogotá, 21 de febrero.
- Hermes, Aparicio (2007).** Sacerdote de una parroquia de Barrancabermeja, gestor del “Espacio humanitario” de Ciénaga del Opón. Barrancabermeja, 12 de diciembre.

- Hernández, Guillermina (2008).** Una de las líderes sociales históricas de Barrancabermeja. Directora de la ONG Merquemos Juntos. Barrancabermeja, 3 de septiembre.
- Hoyos, Julio César (2008).** Director de la Red de Emisoras del Magdalena Medio Aredmag. Bogotá, 10 de septiembre.
- Ibarra, Alexander (2008).** Funcionario de Asmet Salud, coordina un proyecto del laboratorio de paz con afrodescendientes de Balboa, en el Patía. Popayán, 13 de febrero.
- Jordan, Valerie (2008).** Funcionaria de la delegación de la Comisión Europea en Colombia. Task manager del laboratorio de paz II. Bogotá, 21 de agosto.
- Kahn, Constanza (2008).** Funcionaria del equipo de comunicación del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 15 de octubre.
- Katz, Mauricio (2008).** Funcionario del PNUD en Colombia, exsubdirector de la CDPMM. Bogotá, 27 de febrero.
- Ledezma, Jaime (2008).** Miembro del equipo de Orpaz, expresidente de la Asamblea Constituyente de Nariño. Pasto, 13 de octubre.
- López, Fredy (2008).** Coordinador del proyecto del laboratorio del Macizo Colombiano ejecutado por Fedepanela. Popayán, 21 de octubre.
- Luna, Ginny (2008).** Exdirectora de la Red Prodepaz, exfuncionaria del laboratorio de paz de Norte de Santander. Bogotá, 12 de diciembre.
- Martínez, Mario (2008).** Miembro de la organización campesina ACVC. Barrancabermeja, 4 de septiembre.
- Medina, Fanny (2008).** Directora de la Fundación Sol de Invierno. Pasto, 15 de octubre.
- Mendoza, Ricardo (2008).** Funcionario de la ONG jesuita Suyosama, exfuncionario de Asopatía. Pasto, 17 de octubre.
- Méndez, Mayerly (2008).** Integrante de la Red de Jóvenes del PDPMM. Barrancabermeja, 2 de septiembre.
- Mojica, Ana María (2007).** Funcionaria de la delegación de la Comisión Europea en Colombia. Task manager del laboratorio de paz I. Bogotá, 6 de septiembre.
- Molina, Javier Ignacio (2008).** Director de Prodepaz, expresidente de la Cámara de Comercio de Medellín. Rionegro, 2 de diciembre.

- Moncayo, Javier (2008).** Exdirector de la Red Prodepaz y ex subdirector de la CDPMM. Bogotá, 7 de noviembre.
- Montenegro, Gustavo (2008).** Integrante del Fondo Mixto de Cultura de Nariño y del proyecto “Palabrar” del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 10 de octubre.
- Mora, Mario Fernando (2008).** Integrante del Fondo Mixto de Cultura de Nariño y del Proyecto “Palabrar” del Laboratorio de Paz del Macizo. Pasto: 10 de octubre
- Muelas, Lorenzo (2008).** Gobernador indígena de Guambia, exsenador. Popayán, 23 octubre.
- Ñañez, Francisco (2008).** Integrante de Fedecacao, una organización de productores de cacao ejecutora de un proyecto del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 15 de octubre.
- Ortegón, Eduardo (2007).** Integrante del programa “Justicia y Paz” de la Diócesis de Barrancabermeja. Barrancabermeja, 13 de diciembre.
- Páez, José Antonio (2007).** Jurista, coordinador de los “Espacios humanitarios” del laboratorio de paz. Barrancabermeja, 13 de diciembre.
- Palechor, Libio (2008).** Miembro del CRIC. Popayán, 21 de octubre.
- Patiño, Fernando (2008).** Miembro de la Corporación Nuevo Arco Iris, excombatiente del ELN e integrante de la Corriente de Renovación Socialista. Bogotá, 26 de febrero.
- Parfait, Daniel (2008).** Exembajador de Francia en Colombia. Dirigió el Departamento de Américas del Ministerio de los Relaciones Exteriores de Francia, fue uno de los principales protagonistas en el proceso de origen del laboratorio de paz en el Magdalena Medio, estuvo involucrado en las negociaciones con el ELN durante la administración Pastrana. Entrevista por teléfono Bogotá – Paris, 11 de enero.
- Peña, Alfonso (2008).** Miembro de la Fundación Sol y Tierra, excomandante del Movimiento Quintín Lame, exrepresentante a la Asamblea Constituyente. Popayán, 15 de febrero.
- Pito, Tito Arbey (2008).** Exasesor económico del CRIC, funcionario de la ECR del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Popayán, 20 de octubre.
- Portilla, Paola (2008).** Coordinadora de un proyecto de fortalecimiento institucional en derechos humanos en el laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 16 de octubre.

- Piamba, Omar Darío (2008).** Comunero del pueblo indígena Yanacona, militante de la Alianza Indígena. Funcionario de la ECR del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Popayán, 20 de octubre.
- Ocampo, Enrique (2008).** Miembro de la Fundación Espacio Abierto, organización beneficiaria del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Popayán, 20 de octubre.
- Prieto, Jaime (2008).** Exobispo de Barrancabermeja y presidente de la junta directiva del PDPMM. Estuvo involucrado en las negociaciones entre el gobierno y el ELN en La Habana. Barrancabermeja, 7 de septiembre.
- Ramírez, Aidde (2008).** Coordinadora del proyecto del Laboratorio de Paz del Macizo Colombiano ejecutado por la organización de mujeres Atucsara. Popayán, 23 de octubre.
- Restrepo, Jorge (2008).** Economista, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), profesor de la Universidad Javeriana. Bogotá, 7 de diciembre.
- Ríos, Aparicio (2008).** Ex consejero mayor del CRIC, funcionario de la ECR del Laboratorio de Paz del Macizo Colombiano. Popayán, 12 de febrero.
- Rodríguez, Isabel (2008).** Líderesa comunitaria, integrante del Movimiento Social de la Cordillera. Popayán, 25 de octubre.
- Rojas, Jackeline (2008).** Miembro de la Organización Femenina Popular (OFP). Barrancabermeja, 1 de septiembre.
- Rosero, Sonia (2008).** Directora de Orpaz, profesora de la Universidad de Nariño. Pasto, 10 de octubre.
- Ruiz, Luis Alfonso (2008).** Sub-coordinador técnico del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 20 de febrero.
- Sánchez, Silvio (2008).** Rector de la Universidad de Nariño, miembro de la Mesa Departamental de Paz, miembro del comité directivo del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 15 de octubre.
- Silva, Pascual (2007).** Funcionario de la CDPMM. Barrancabermeja, 11 de diciembre.
- Soto, Eliécer (2007).** Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja, miembro del PDPMM. Barrancabermeja, 23 de mayo.



- Torres, Guillermo (2008).** Director de Fundación Social, organización beneficiaria del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 14 de octubre.
- Tunubalá, Floro (2008).** Exgobernador del Cauca, primer gobernador indígena de Colombia, uno de los propulsores del Plan Alterno, concebido como un plan alternativo al Plan Colombia. Estuvo involucrado en el origen del laboratorio de paz II. Popayán, de 16 de febrero.
- Urrutia, Pedro (2008).** Obrero y miembro del consejo de administración de la planta de Ladrillos Cotrasalba que ejecuta un proyecto del laboratorio de paz. Barrancabermeja, 1 de septiembre.
- Valderrama, Libardo (2007).** Padre jesuita, director de la CDPMM. Barrancabermeja, 24 de mayo.
- Valencia, Fernando (2008).** Director del Observatorio de Paz y Reconciliación del oriente antioqueño. Rionegro, 2 de diciembre.
- Vallejo, María Cristina (2008).** Coordinadora del eje 2 del laboratorio de paz del Macizo Colombiano, funcionaria de Asopatía. Pasto, 16 de octubre.
- Vargas, Marco Fidel (2007).** Sociólogo, investigador del CINEP, funcionario de la CDPMM. Bogotá, 23 de abril.
- Vergel, Mildred (2008).** Funcionaria del equipo de comunicación del laboratorio de paz del Macizo Colombiano. Pasto, 15 de octubre.
- Villegas, Miriam (2008).** Gestora del PDPMM y encargada de los contactos inter-institucionales, funciona como una especie de relaciones públicas y ‘canciller’ del PDPMM. Bogotá, 8 de septiembre.
- Vincenti, Francesco (2008).** Coordinador de la línea 1 de la asistencia técnica internacional al segundo laboratorio de paz. Ex representante residente del PNUD en Colombia. Participó en las negociaciones de paz en el Caguán como facilitador. Bogotá, 26 de febrero.



# Referencias bibliográficas

- Acción Social (2010). La Entidad. Acción Social. Recuperado de: <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=820>
- ACIN (2010). Le temen a la resistencia pacífica: asesinato de Alex Quintero. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Recuperado de: [http://www.nasaacin.org/apc-aailles/9bfc9b34b8952b88fdad1b6509bc504/001\\_A\\_018\\_audiosvilma.mp3](http://www.nasaacin.org/apc-aailles/9bfc9b34b8952b88fdad1b6509bc504/001_A_018_audiosvilma.mp3) Amorim
- Amorin, F. (2007). F. (2007). Cristologia latino-americana e Teologia da Libertação, *Janus*, 4(3). Recuperado de: [http://janusonline.pt/2007/2007\\_4\\_3\\_12.html](http://janusonline.pt/2007/2007_4_3_12.html)
- Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) (2005). *Segundo Laboratorio de Paz en Colombia: guía para los solicitantes de subvenciones*. Convocatoria de propuestas 2005, Bogotá.
- Anderson, M. (1999). *Do no harm: How aid can support peace – or war*. Londres: Lynne Rienner.
- Angulo, A. (2005, noviembre 8). ¿Cooperación o colonización? Editorial CINEP.
- Banfield, J., Gunduz, C. y Killick, N. (Eds.) (2006). *Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private Sector*. Londres: International Alert.
- Barnes, C. (2005). Weaving the Web: Civil-Society Roles in Working with Conflict and Building Peace. En Togeren, V. P., Brenk, M., Hellema, M. y Verhoeven, J. (eds.), *People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society* (pp. 7-24), Londres: Lynne Rienner Publishers.
- Barreto Henriques, M. (2006). Percepções transatlânticas sobre o conflito e a paz na Colômbia. En Miguéis, R. (Ed.). *Europa, Estados Unidos e a Gestão de Conflitos* (pp. 39-47) Lisboa: Fundação Friedrich Ebert.

- Barreto Henriques, M. (2007, diciembre). Peace Laboratory of Magdalena Medio: a “peace laboratory?”. *CERAC, Working Paper 6*. Bogotá: CERAC.
- Barreto Henriques, M. (2009a). El Laboratorio de Paz del Cauca/Nariño: ¿una salida indígena para la paz en Colombia? En Restrepo, J. y Aponte, D. (Eds.), *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (pp. 545-586) Bogotá: Editorial Javeriana.
- Barreto Henriques, M. (2009b). El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio: ¿un verdadero Laboratorio de Paz? En Restrepo, J. y Aponte, D. (Eds.) *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (pp. 501-544). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Barreto Henriques, M. (2010a). A União Europeia e o conflito colombiano: de uma irrelevância de facto a uma irrelevância de conteúdo? En Tavares, R. y Maria, M. (Eds.), *De Roma a Lisboa: A Europa em Debate* (pp. ) Coimbra: Almedina.
- Barreto Henriques, M. (2010b, enero-junio). El rol de la UE en la resolución del conflicto en Colombia: un análisis desde el terreno. *Revista Aldea Mundo*, 15(29), 341-345.
- Barreto Henriques, M. (2012, octubre). La paz de los “pequeños nadas”: una mirada desde los Laboratorios de Paz en Colombia. *Revista Javeriana*, 79(789) 64-77.
- Barreto Henriques, M. (2014, enero-junio). Preparar el posconflicto en Colombia desde los Programas de Desarrollo y Paz: retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 9(1), 179-197.
- Bergquist, C. (1992). Introduction: Colombian Violence in Historical Perspective. En Bergquist, C., Sánchez, G. y Peñaranda, R. *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective* (pp. 139-164). Wilmington: SR Books.
- Bergquist, C., Sánchez, G. y Peñaranda, R. (1992). *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*. Wilmington: SR Books.
- Berryman, P. (1989). *Teología de la liberación: Los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en América Latina y otros lugares*. México: Siglo XXI Editores.
- Blanco, J. (2008, noviembre). Colombia: ¿Laboratorio de paz? *Revista de Periodismo Preventivo*, 9, 341-345.
- Bloch, E. (2005). *O princípio esperança, vol. 1*, Rio de Janeiro: UERJ/Contraponto.

- Bouchier, y Barme, C. (2008, octubre 29). Informe Final Evaluación Intermedia del Programa Segundo Laboratorio de Paz. Bogotá: Transtec. Recuperado de: [http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page\\_content/20080609-informe-final-lpii\\_es.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/20080609-informe-final-lpii_es.pdf)
- Bolívar, I. (2008). Panel 3: Política y Conflicto: Comentarios de Ingrid Bolívar. En González, F. (Ed.), *Hacia la Reconstrucción del País: Desarrollo, Política y Territorio en regiones afectadas por el conflicto armado* (pp. 139-164). Bogotá: CINEP.
- Boulding, E. (2000). *Cultures of Peace: The hidden side of History*. New York: Syracuse University Press.
- Briceño, L. H. (2007). Finca campesina de ladera en el Magdalena Medio: ocupación productiva del territorio con cacao y frutales. En PNUD. *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006* (pp. 139-164). Barrancabermeja: PNUD.
- Burgess, H. y Burgess, G. (2003). What Are Intractable Conflicts? Beyond Intractability. Boulder: Conflict Research Consortium, University of Colorado. Recuperado de: [http://www.beyondintractability.org/essay/meaning\\_intractability/](http://www.beyondintractability.org/essay/meaning_intractability/)
- Burton, J. (1990). *Conflict Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press.
- Burton, J. (1998, enero). Conflict Resolution: The Human Dimension. *International Journal of Peace Studies*, 3(1). Recuperado de: [http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol3\\_1/cover3\\_1.htm](http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol3_1/cover3_1.htm)
- Bushnell, D. (1996). *Colombia: Una nación a pesar de sí misma: de los tiempos precolombinos a nuestros días*. Bogotá: Planeta.
- Castañeda, D. (2009, enero-junio). ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? *Colombia Internacional*, 69, 162-179.
- Castañeda, D. (2012). Peace Laboratories in Colombia: the European Approach to Peace-building. Tesis doctoral no publicada en Ciencias políticas, especialidad en Relaciones Internacionales. Institut d'Etudes Politiques de Paris.
- Castro, J. (2007). *Rural territorial development in the midst of the conflict. Continuation Report*. Manchester: University of Manchester, Institute for Development Policy and Management.
- Caviedes, M. (Ed.) (2007). *Paz y Resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía*. Bogotá: CECOIN.
- Celis, L. E. (2009, abril 18). El péndulo de la guerra y de la paz. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/opinion/articulo/el-pendolo-guerra-paz/102235-3>

- Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID (2003, noviembre). *Informe Final: Evaluación externa del segundo crédito de aprendizaje e innovación (LIL II) del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM (2003, otoño). Consideraciones clave en el diseño de las negociaciones de paz: Reflexiones para el caso colombiano. *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 83. 109-124.
- Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM (2006, febrero). *Documento Estratégico N° 2: La Unión Europea y Colombia en la encrucijada*. Madrid: CIP-FUHEM.
- Clausewitz, K. V. (1989). *On War*. New Jersey: Princeton University Press.
- Chernick, M. (2008). *Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- CIA (2010). South America: Colombia. *The World Fact book*. Recuperado de: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html>
- Collier, P. (1999, abril 10). *Doing well out of war*. Washington D.C.: The World Bank.
- Comisión Europea (2001). *Colombia: Country Strategy Paper*. Bruselas: Comisión Europea.
- Comisión Europea (2007). *Documento de Estrategia país 2007-2013, E/2007/484*. Bruselas: Comisión Europea.
- Consejo de la UE (2004). *Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea con ocasión de comienzo formal de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y los grupos paramilitares AUC*. Bruselas.
- Consejo de la UE (2010, noviembre 15). *Declaración de Madrid: Hacia una nueva etapa en la asociación birregional: la innovación y la tecnología en favor del desarrollo sostenible y de la inclusión social*. Bruselas, 9931/2/10 REV 2 Presse 131.
- Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, CDPMM (2001, junio). *30 meses de acción: informe Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio*. Barrancabermeja: CDPMM.
- Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, CDPMM (2005, diciembre 7). *Programa Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio: Plan Operativo Global, II Fase 2005–2009*. Colombia: CDPMM.
- CRIC (2004, diciembre-enero). El CRIC y el Laboratorio de Paz. *Periódico Unidad Alvaro Ulcué*.

- Curle, A. (1971). *Making Peace*, London: Tavistock Publications.
- Curle, A. (1974). Teaching Peace. *The New Era*, 57(7).
- Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, DELCOL (2005, enero 31). Unión Europea, un aliado para el desarrollo y la paz de Colombia. Bogotá: DELCOL.
- De Roux, F. (2001, mayo 7). *Un Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio*. Barrancabermeja: PDPMM.
- De Roux, F. (2002, agosto). Entrevista. *Universitas Xaveriana*.
- De Roux, F. (2005, abril 14-16). El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Primer Laboratorio de Paz en Colombia. III Jornadas Abiertas - La Cooperación Internacional con Colombia: ¿Paz y Derechos Humanos?, Barcelona.
- De Roux, F. (2007). Análisis de los impactos del PDPMM. En PNUD. *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006*. Barrancabermeja: PNUD.
- Díez, T. y Pace, M. (2007, mayo 17-19). Normative Power Europe and Conflict Transformation. EUSA Conference, Montreal.
- Departamento Nacional de Planeación, DNP (2008, noviembre). *Evaluación de Impacto de los programas Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz: Línea de Base e Impactos Preliminares Hacia la consolidación de una propuesta para evaluar el impacto de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz*. Bogotá: DNP.
- Dominguez-Rivera, R. (2005). The role of networks in the EU's foreign policy toward Colombia. *E-Working Papers*, Vol. 3, N° 1, abril, Centro de Estudios Europeos.
- Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Duchêne, F. (1972). Europe in World Peace. En Mayne, R. (Ed.) *Europe Tomorrow* (pp. 37-47) London: Fontana/Collins.
- Dudouet, V. (2005). *Peacemaking and Nonviolent Resistance: A study of the complementarity between conflict resolution processes and nonviolent intervention, with special reference to the case of Israel/Palestine*. Tesis de Doctorado no publicada en Peace Studies, Studies. Yorkshire: University of Bradford.

- Duffield, M. (2005). *Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security*. London: Zed Books.
- Duffield, M. y Waddell, N. (2004). *Human Security and Global Danger: Exploring a Governmental Assemblage*. Lancaster: University of Lancaster.
- Dunn, D. (2005). *The First Fifty Years of Peace Research: A Survey and Interpretation*. Hampshire: Ashgate.
- Econometría (2007, marzo). *Informe Final: Evaluación de Resultados e Impactos Tempranos del Programa de Paz y Desarrollo y Laboratorio de Paz*. Bogotá: Econometría.
- Escola de Cultura de Pau, ECP (2006). Construyendo Paz en medio de la guerra. Barcelona: ECP. Recuperado de: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/colombia020e.pdf>.
- Espinosa, M. A. (2005). Movimientos sociales en La María-Piendamó. Territorio de convivencia, diálogo y negociación. En Rappaport, J. (Ed.). Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio (pp.). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Estefan, F. (2009, enero 19). Plan Colombia, Obama style. *Colombia Reports*. Recuperado de: <http://colombiareports.com/opinion/the-colombiamerican/2617-plan-colombia-obama-style.html>
- Fescol (2004, enero). Relaciones Colombia-Unión Europea: De la incertidumbre política al posicionamiento estratégico. *Fescol Policy Paper n° 4*, 1-8.
- Fetherston, B. (1998, marzo). Transformative peacebuilding: peace studies in Croatia. Paper presented at the International Studies Association Annual Convention, Minneapolis.
- Francia, R. (2003). *L'Union Européenne et la crise en Colombie: Faits, analyses et propositions pour l'avenir*. UNU/CRIS e-Working Papers. Bélgica: UNU/CRIS.
- Franklin, K. y Moncayo, J. (2004). *Sistematización de las negociaciones de los Laboratorios de Paz I y II, Informe Final*. Colombia: Redprodepaz.
- Fischer, M. (2006, octubre). *Civil Society in Conflict Transformation: Ambivalence, Potentials and Challenges*. Alemania: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Galindo, H., Restrepo, J. y Sánchez, F. (2009). Conflicto y pobreza en Colombia: un enfoque institucionalista. En Restrepo, J. y Aponte, D. (Eds.) *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (pp. 315-352). Bogotá: Editorial Javeriana.



- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, Vol. 27, N° 3, pp. 291-305.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications.
- Garavito, L. J. (2010, enero 22). “Espacio Humanitario del Micoahumado” e a experiência de resistência pacífica de “Agromisbol” em Santa Rosa del Sur. *Dinâmicas atuais de construção da paz e apoio às vítimas na Colômbia*, Seminário CES, Coimbra.
- García, A. (2008). Desarrollo y conflicto: los retos para el trabajo y la investigación. En González, F. (Ed.). *Hacia la Reconstrucción del País: Desarrollo, Política y Territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*. Bogotá: CINEP.
- García, C. I. (2007, marzo 26-28). La Configuración Regional: Aportes Conceptuales para Su Estudio. Seminario Nacional Observatorio Colombiano para el Desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el desarrollo institucional, Documento 1, Bogotá.
- García, J. (2007, julio). Aprendizajes de la estrategia de economía popular urbana. En PNUD *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006*. Barrancabermeja: PNUD.
- García-Durán, M. (2006). *Movimiento por la paz en Colombia, 1978-2003*. Bogotá: CINEP. *Controversia*, (181)
- García, A. y Sarmiento, A. (2002, agosto 6). *Programas Regionales de Desarrollo y Paz: casos de capital social y desarrollo institucional*. Bogotá: Fundación Ideas Para la Paz – PNUD.
- García, G. y Quijano, C. (2005). Proyecto Centro Orquestal Satelite II – Batuta de la Comuna 7 de Barrancabermeja. En PDPMM. *Relatos desde la memoria* (pp. 82-84). Barrancabermeja: PDPMM.
- Gaviria, J. O. (2005). *Sofismas del Terrorismo en Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Giraldo, J. (1996). *Colombia: The Genocidal Democracy*. Monroe: Common Courage Press.
- Godnick, W. y Klein, D. (2009, marzo). *The challenges of supporting “alternative” economic opportunities for peacebuilding - Perspectives from Colombia*. London: International Alert, Strengthening the economic dimensions of peacebuilding – case study series. Recuperado de: [http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/LEO\\_Colombia.pdf](http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/LEO_Colombia.pdf)

- González, F. (2004, febrero). Conflicto violento en Colombia: una perspectiva de largo plazo. *Controversia*, (181), 10-16.
- González, F., Bolívar, I. y Vázquez, T. (2003). *Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: CINEP.
- González, J. I. (2004). La dicotomía micro-macro no es pertinente. *Revista de Economía Institucional*, 6(11), 73-95.
- González, J. I. (2008). El circuito de Loneragan, la función distributiva y los programas de desarrollo y paz. En González, F. (Ed.) *Hacia la Reconstrucción del País: Desarrollo, Política y Territorio en regiones afectadas por el conflicto armado* (pp.). Bogotá: CINEP.
- González, J. M. (1997, junio). Jean Paul Lederach: De la Sociedad Dividida a la Reconciliación. Referencia al Conflicto Armado Colombiano. *Revista Voces* (2), 115-131.
- González, N. C. (2006a). ¿Qué papel juegan las organizaciones indígenas del Cauca en la búsqueda de una solución negociada al conflicto y la crisis democrática colombiana? En Helfrich, L. y Kurtenbach, S. (Eds.), *Colombia: Caminos para salir de la violencia* (pp. 237-255). Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
- González, N. C. (2006b). *Resistencia Indígena: Alternativa en medio del conflicto armado*. Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
- Gow, D. (2005). Desde afuera y desde adentro: la planificación indígena como contra-desarrollo. En Rappaport, J. (Ed.), *Retornando la Mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio* (pp. 329-352). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Granada, S., Restrepo, J., y Tobón, A. (2009a). Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano. En Restrepo, J. y Aponte D. (Eds.). *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (pp. 467-500). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Granada, S., Restrepo, J. y Vargas, A. (2009b). El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano. En Restrepo, J. y Aponte, D. (Eds.), *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (pp. 27-124). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Gros, C. (1990). *Colombia indígena: identidad cultural y cambios sociales*. Bogotá: Fondo Editorial CEREC.

- Guarín, S. (2008, septiembre 30- octubre 3). *Potencialidades y límites de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas: el caso de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz*. I Congreso de Ciencia Política, Bogotá.
- Gutiérrez, F. (2001). Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos. *Análisis Político*, (43), 55-75.
- Gutiérrez, O. (2004). La oposición regional a las negociaciones con el ELN. *Análisis Político*, (54), 34-50.
- Hernández, E. (2002). La paz y la no violencia adquieren significado propio en Colombia. *Reflexión Política*, 4(8), 165-180.
- Herrera, L. A. y Guerrero, L. G. (2008, marzo). *Resultados e impactos de los Laboratorios de Paz en Colombia: Informe para La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción – ALOP*. Bogotá: CINEP.
- Hettne, B., Soderbaum, F. y Stalgren, P. (2008). *The EU as a Global Actor in the South. SIEPS Report*. Bélgica: United Nations University.
- Hylton, F. (2003, septiembre-octubre). An Evil Hour, *New Left Review*, 23, 51-93. Howell, J. y Pearce, J. (2001). *Civil Society and Development: a critical exploration*. Londres: Rienner Publishers.
- International Crisis Group, ICG (2002, octubre 4). *Colombia: Perspectivas de Paz con el ELN. Latinoamérica Informe*, N° 2. Bogotá y Bruselas: ICG. Recuperado de: [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/colombia/02\\_\\_\\_colombia\\_the\\_prospects\\_for\\_peace\\_with\\_the\\_eln\\_\\_\\_spanish.pdf](http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/colombia/02___colombia_the_prospects_for_peace_with_the_eln___spanish.pdf)
- International Crisis Group, ICG (2006, junio 8). *La reelección de Uribe: ¿Puede la UE ayudarle a Colombia a desarrollar una estrategia de paz más equilibrada? Informe sobre América Latina N° 17*. ICG. Recuperado de: [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/colombia/17\\_uribes\\_re\\_election\\_spanish.pdf](http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/colombia/17_uribes_re_election_spanish.pdf)
- Jeong, H-W. (2000). *Peace and Conflict Studies: An Introduction*. Aldershot: Ashgate.
- Kagan, R. (2003). *O Paraíso e o Poder: A América e a Europa na Nova Ordem Mundial*. Lisboa: Gradiva.
- Kaldor, M. (1999). *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity.

- Katz, M. (2004). Experiencia regional de paz: El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. *Controversia*, (181), 385-398.
- Keukeleire, S. (2003, septiembre). The European Union as a Diplomatic Actor: Internal, Traditional and Structural Diplomacy. *Diplomacy and Statecraft*, 14(3), 31-56.
- Kline, H. (1999). *State Building and Conflict Resolution in Colombia 1986-1994*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
- Kurtenbach, S. (2004). *El papel de los actores externos en la contención de la violencia en Colombia*. Hamburgo: Instituto de Estudios Iberoamericanos.
- Kurtenbach, S. (2005, junio). *Europe and the Colombian Conflict. Andean Working Paper*. Washington D. C.: Inter-American Dialogue. Recuperado de: [http://archive.thedialogue.org/PublicationFiles/Europe%20and%20Colombia,%20Kurtenbach%20\(June%202005\).pdf](http://archive.thedialogue.org/PublicationFiles/Europe%20and%20Colombia,%20Kurtenbach%20(June%202005).pdf)
- Kurtenbach, S. (2009). The European Union and the Transformation of the Colombian Conflict. En Bouvier, V. (Ed.), *Colombia: Building Peace in a Time of War* (pp.). Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Laboratorio de paz (2008). <http://www.laboratoriodepaz.org/publicaciones.php?id=27790>
- Leal, F. (2004, enero-abril). La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Análisis Político*, (50), 40-54.
- Leal, F. (2006). *La Inseguridad de la Seguridad: Colombia 1958-2005*. Bogotá: Planeta.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D. C.: United States Institute of Peace Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformations*. Intercourse, United States: Good Books.
- Lederach, J. P. (2008). *La imaginación moral: el arte y el alma de construir la paz*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Leitão, A. R. (2003). A Política Europeia de Segurança de Defesa: que Futuro? *Estratégia*, (18-19), 67-86.
- Leitão, A. R. (2007, julio-agosto). A Europa no Mundo. *O Mundo em Português*, (65).

- Leitão, A. R. (2010). A União Europeia: um actor (político) em permanente indefinição. En Tavares, R. y Maria, M. (Eds.), *De Roma a Lisboa: A Europa em Debate* (pp.). Coimbra: Almedina.
- Loingsigh, G. Ó. (2002, septiembre). La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia. Bogotá: Recuperado de: <http://observatoriosocial.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2010/11/parasmagda2004.pdf>
- Lozano, W. (2006). Prensa y conflicto armado en Barrancabermeja. En *Prensa, conflicto armado y región: Aprendizajes del diplomado Periodismo responsable en el conflicto armado* (pp.). Bogotá: Corporación Medios por la Paz.
- Maio-Coliche, A. (2005). *Los Laboratorios de Paz en el ámbito de las relaciones políticas y de cooperación entre la Unión Europea y Colombia*. Mesa 2: Los Laboratorios de Paz: límites y oportunidades. III Jornadas Abiertas – La Cooperación Internacional con Colombia: Paz y Derechos Humanos. Barcelona.
- Marchetti, R. y Tocci, N. (2009). Conflict society: understanding the role of civil society in conflict. *Global Change, Peace & Security*, 21(2), 201-217.
- Marker, S. (2003). “Unmet Human Needs” *Beyond Intractability*, Conflict Research Consortium. Boulder: University of Colorado. Recuperado de: [http://www.beyondintractability.org/bi-essay/human\\_needs/](http://www.beyondintractability.org/bi-essay/human_needs/)
- Manners, I. (2008). The European Union’s normative strategy for sustainable peace. En Rittberger, V. y Fisher, M. (Eds.), *Strategies for Peace: Contributions of International Organizations, States and Non-State Actors* (pp.). Opladen: Barbara Budrich Publishers.
- Marulanda, A. (2003). *La cuestión agraria y su incidencia en los orígenes de las Farc-EP. Documentos CESO, N° 58*. Bogotá: Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales.
- Marx, K. (1852/2005). *The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. New York: Mondial.
- Massé, F. (2003). Les États-Unis et l’Europe face au conflit colombien. *Les Études du CERI*, (95). Recuperado de: <http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr/ceri/files/etude95.pdf>
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- McDonald, G. (1997). *Peacebuilding from below. Alternative perspectives on Colombia’s peace process*. London: Catholic Institute for International Relations.

- McDonald, G. (1998). *Alternative Perspectives on Building Peace in Colombia and El Salvador: An appraisal of the peace processes with special reference to peacebuilding from 'below'*, PhD Thesis, Department of Peace Studies, Studies. Yorkshire: University of Bradford.
- Miall, H. (2004). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Alemania: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Minga de Sueños (2006). *Plan de Vida Cartago es mi tierra*. Colombia: Minga de Sueños.
- Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2008, junio). *Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD*. Colombia: Ministerio de Defensa. Recuperado de: [http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre\\_el\\_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionales/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Jun%202008.pdf](http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionales/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Jun%202008.pdf)
- Mitchell, C. (2002, mayo). Beyond Resolution: What Does Conflict. Transformation Actually Transform? *Peace and Conflict Studies*, 9(1). Recuperado de: <http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=pcs>
- Mitchell, C. y Nan, S. A. (1997, junio). Local peace zones as institutionalized conflict *Peace Review*, 9(2). 159-162.
- Molano, A. (1992). Violence and Land Colonization. En Bergquist, C., Sánchez, G. y Peñaranda, R. *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective* (pp. 90-95). Wilmington: SR Books.
- Molano, A. (2009, abril). *30 años de construcción de paz en el Magdalena Medio*. Colombia: Corporación Colombiana de Proyectos Sociales.
- Molano Cruz, G. (2009a). Laboratorios de Paz: la Unión Europea y a la seguridad democrática. *Revista Foro*, 69. 97-99.
- Molano Cruz, G. (2009b, mayo-agosto). Apoyo de la Unión Europea a los programas de desarrollo alternativo en Colombia: cooperación para el combate contra el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes. *Análisis Político*, (66), 100-122.
- Moncayo, J. (1999, junio). Los proyectos en el PDPMM: Un laboratorio de paz. *Controversia*, (174).
- Moreno, C. (2008, septiembre/diciembre). Laboratorios de Paz: una política de creación. *Análisis Político*, (65), 94-110.

- Moreno, S. (2005). Ecocacao: Un salto de lo comunitario a la construcción empresarial. En PDPMM. *Relatos desde la memoria* (pp.). Barrancabermeja: PDPMM.
- Morgenthau, H. (1955). *Politics Among Nations*, 2<sup>nd</sup> ed. New York: Alfred Knopf.
- Mouly, C. (2011). Peace Constituencies in Peacebuilding: The Mesas de Concertación in Guatemala. En Pugh, M., Cooper, N. y Turner, M. (Eds.), *Whose Peace? Critical Perspectives on the Political Economy of Peacebuilding* (pp. 304-319). Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Moura, T. (2005). Novíssimas guerras, novíssimas pazes: desafios conceituais e políticos. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 71, 77-96.
- Nan, S., y Strimling, A. (2004). *Track I - Track II Cooperation*. Beyond Intractability. Colorado: Conflict Research Consortium, University of Colorado. Recuperado de: [http://www.beyondintractability.org/essay/track\\_1\\_2\\_cooperation/](http://www.beyondintractability.org/essay/track_1_2_cooperation/)
- Naranjo, C. (2006). *Community-based Peacebuilding Experiences in Colombia: To What Extent do they Contribute to Conflict Transformation?* Master Dissertation. Yorkshire: University of Bradford, Peace Studies Department.
- Nye, J. (2001). Soft Power and Conflict Management in the Information Age. En Crock, C. A., Hampson, F. O. y Aadel, P. (Eds.), *Turbulent Peace: The Challenges of managing international conflict* (pp.). Washington D. C.: United States of Peace.
- Nye, J. (2004, mayo 3). Europe's Soft Power. *The Globalist*. Recuperado de: <http://www.theglobalist.com/europes-soft-power/>
- Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, OPI (2006). *Informe Semestral de la situación de violación a los DD. HH. violencia política, infracciones al DIH, acciones bélicas y acciones colectivas por la paz en el Magdalena Medio. Primer Semestre*. Barrancabermeja: OPI.
- Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, OPI (s.f.). *Mapa del Magdalena Medio colombiano*. Recuperado de: <http://www.opi.org.co/Cartografia/18.jpg>
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, OPPDHDIH (2001, diciembre). Panorama actual del Macizo Colombiano, Bogotá: OPPDHDIH.
- Páez, J. A. (2007). Los Espacios Humanitarios: Una pedagogía en la vida. para la vida. En PNUD. *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006* (pp.). Barrancabermeja: PNUD.

- Palechor, L. (2005, abril 14-16). III Jornadas Abiertas - La Cooperación Internacional con Colombia: ¿Paz y Derechos Humanos? Barcelona.
- Pardo, R. y Carvajal, L. (2004). Relaciones Internacionales, Conflicto Doméstico y Procesos de Paz en Colombia. En Pardo, R. y Carvajal, L. (Eds.) *Violencia, Paz y Política Exterior en Colombia* (pp.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Parlamento Europeo (2001, septiembre 21). Resolução do Parlamento Europeu sobre o “Plano Colômbia” e o apoio ao processo de paz na Colômbia. Bruselas: Parlamento Europeo.
- Paris, R. (2004). *At War's comisión End: Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pastrana, E. y Aponte, D. (2006, julio-diciembre). La Unión Europea como potencia civil: la estrategia de los Laboratorios de Paz en Colombia. *Revista Diálogos de Saberes*, (25), 241-270.
- Patiño, F. (2007). *Territorios de Paz, el aporte territorial para construir una nueva dinámica en el proceso de negociación gobierno-ELN*. Documento borrador. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.
- PDPMM (2002). Culturas Juveniles del Magdalena Medio. Video.
- PDPMM (2004). Acto inaugural de Enraizar. Video.
- PDPMM (2005). *Informe de la Primera Fase del Laboratorio de Paz*. Barrancabermeja: PDPMM.
- PDPMM (2010). <http://www.pdpmm.org.co/FAQs.asp>
- Pearce, J. (1990). *Colombia: Inside the labyrinth*. London: Latin America Bureau.
- Pearce, J. (2007, marzo). *Violence, Power and Participation: Building Citizenship in Contexts of Chronic Violence*. IDS Working Paper 274. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Pécaut, D. (1992). Guerrillas and Violence. En Bergquist, C., Sánchez, G. y Peñaranda, R. *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*. (pp. 19-20). Wilmington: SR Books.
- Pécaut, D. (2001). *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Pécaut, D. (2004). Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra. En AAVV. *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz* (pp.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pécaut, D. (2008). *Las FARC: ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?* Bogotá: Grupo Editorial Norma.



- Petiteville, F. (2002, otoño). L'Union européenne, acteur international "global"? Un agenda de recherche. *La revue internationale et stratégique*, (47), 145-157.
- Petiteville, F. (2006). *La politique internationale de l'Union Européenne*. Paris: Presses de Sciences Po.
- PNUD (2003). *El conflicto, callejón con salida - Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003*. Bogotá: PNUD. Recuperado de <http://www.pnud.org.co/indh2003> PNUD (2008, mayo). *Hechos del callejón*, 4(35).
- PNUD (2007). *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006*. Barrancabermeja, julio de 2007.
- PNUD (2011). Colombia rural: *Razones para la esperanza: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011*, Bogotá: PNUD Colombia.
- Pureza, J. M. (2008, junio 21). Para que servem os Estudos para a Paz? Ponencia en el Colóquio Internacional "Caminhos de Futuro: Novos Mapas para as Ciências Sociais", Centro de Estudos Sociais, Coimbra.
- Pureza, J. M. (2009). *Construções Teóricas da Paz*; Relatório da Unidade Curricular do Programa de Doutoramento em Política Internacional e Resolução de Conflitos, Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
- Pureza, J. M. y Cravo, T. (2007). Critical edge and legitimisation in Peace Studies. En Ferrándiz, F. y Robben, A. (Eds.), *Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research: a view from Europe* (pp.). Bilbao: Humanitarian Net/Universidad de Deusto.
- Puyo, G. (2002). Posiciones en Europa sobre el Plan Colombia. En Estrada, J. (Ed.), *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: Aspectos globales y locales* (pp.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Putnam, R. (1995, enero). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Rabasa, A. y Chalk, P. (2001). *Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and its Implication for Regional Stability*. Arlington: RAND's Publication.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T. y Miall, H. (2005). *Contemporary Conflict Resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts*. Cambridge: Polity Press.

- Ramírez, M. C. (2003). A política do reconhecimento e da cidadania no Putumayo e na Baixa Bota Caucana: o caso do movimento cocalero de 1996. En Sousa Santos, B. (Ed.), *Democratizar a Democracia: Os Caminhos da Democracia Participativa* (pp. 7-16). Porto: Edições Afrontamento.
- Ramírez, S. (2004). *Intervención en conflictos internos: el caso colombiano 1994-2003*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Rappaport, J. (Ed.) (2005). *Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Real Academia Española, RAE (2010). Laboratorio. *Diccionario de la Lengua Española de La Real Academia*. Recuperado de: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=laboratorio](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=laboratorio)
- Red Prodepaz (2008). <http://www.redprodepaz.org/programas.shtml?x=519348>
- Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, REDHER (2008). Nuevas amenazas en el Sur de Bolívar. REDHER. Recuperado de: <http://www.redcolombia.org>
- Rentería, C. (2008, abril). La Consolidación de la Política de Seguridad Democrática en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. *Publicación militar especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia*, LXXVI(205).
- Restrepo, J. (2001, octubre). *Análisis económico de conflictos internos*. Colombia: Fundación Ideas para la Paz.
- Richmond, O. (2005). *The Transformation of Peace*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Richmond, O. (2008). *Peace in International Relations*. Londres: Routledge.
- Richmond, O. (2009). A post-liberal peace: Eireanism and the everyday. *Review of International Studies*, 35, 557-580.
- Robinson, W. (1996). *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*. New York: Cambridge University Press.
- Roy, J. (2001, mayo). European perceptions of Plan Colombia: a virtual contribution to a virtual war and peace plan? Estados Unidos: SSI Publications. Recuperado de: [http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/ssi\\_roy.pdf](http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/ssi_roy.pdf)

- Roy, J. (2003, enero). *Europe: Neither Plan Colombia, nor Peace Process – From Good Intentions to High Frustration. Working Paper N° 11* Miami: University of Miami, The Dante B. Fascell North-South Center.
- Rubenstein, R. (2001, primavera). Basic Human Needs: The Next Steps in Theory Development. *The International Journal of Peace Studies*, 6(1). Recuperado de: [http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol6\\_1/Rubenstein.htm](http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol6_1/Rubenstein.htm)
- Rudqvist, A. y Van Sluys, F. (2005, febrero). *Informe Final de Evaluación de Medio Término Laboratorio de Paz del Magdalena Medio*. Colombia: ECO.
- Saavedra, M. R. y Ojeda, L. D. (2006). Trabajo en Red: Imaginarios conceptuales de paz, desarrollo y región en los programas de la Red Prodepaz. Documentos Ocasionales N° 74. Bogotá: CINEP.
- Sandole, D. (2001, primavera). John Burton's contribution to Conflict Resolution Theory and Practice: A Personal View. *The International Journal of Peace Studies*, 6(1), Recuperado de: [http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6\\_1/Sandole.htm](http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_1/Sandole.htm)
- Sarmiento, L. (1996, noviembre). Violencia y acumulación capitalista en Colombia. *Ensayo y Error*, (1), 46-61.
- Schultze-Kraft, M. y Munévar, J. (2008, noviembre 9). Colombia: “¿Llegó, por fin, la hora de las víctimas?”. *UN Periódico*, (117), 5.
- Segundo Laboratorio de Paz (2004). Plan Operativo Global (POG). Bogotá, abril 2004.
- Segundo Laboratorio de Paz (2007). Elaboración y Análisis de Información relevante del Laboratorio de Paz en la Región Alto Patía – Macizo Colombiano.
- Semana* (2009, julio 28). Oro y plomo. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3>
- SIPRI (2011). The SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute, <http://milexdata.sipri.org/result.php4> [16 octubre 2011].
- Smith, H. (1995). *European Union Foreign Policy and Central America*. Houndmills: St. Martin's Press.
- Sørensen, G. (1999, abril 7). *Development in Fragile/Failed States*. Failed States Conference, Purdue University, West Lafayette.

- Sousa Santos, B. (2003). *Democratizar a Democracia: Os Caminhos da Democracia Participativa*. Porto: Edições Afrontamento.
- Sousa Santos, B. (2010, octubre). La democracia revolucionaria, un proyecto para el siglo XXI. *Revista Internacional de Filosofía Política*, (35), 117-148.
- Sousa Santos, B. y Avritzer, L. (2003). Introdução: para ampliar o cânone democrático. En Sousa Santos, B. (Ed.). *Democratizar a Democracia: Os Caminhos da Democracia Participativa* (pp.). Porto: Edições Afrontamento.
- Sousa Santos, B. (2004). Nuestra América: reinventando un paradigma. *Casa de las Américas*, 237, 7-25.
- Stedman, S. (1997, otoño). Spoiler Problems in Peace Processes. *International Security*, 22(2), 5-53.
- Stokes, D. (2005). *America's other war: terrorizing Colombia*. London – New York: Zed Books.
- Téllez, J. (2005). Cultura para la vida: Un compromiso que se baila, se canta y se piensa. En PDPMM. *Relatos desde la memoria* (pp.). Barrancabermeja: PDPMM.
- Telò, M. (2007). *Europe: A Civilian Power?: European Union, Global Governance, World Order*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tocancipá, J. (2003). Movimientos sociales, cultura política y poder regional. El caso del Movimiento del Macizo Colombiano (MMC). *Journal of Latin American Anthropology*, 1, 1-37. Recuperado de: [http://www.academia.edu/7979700/Movimientos\\_Sociales\\_cultura\\_pol%C3%ADtica\\_y\\_poder\\_regional.\\_El\\_caso\\_del\\_Movimiento\\_del\\_Macizo\\_Colombiano\\_MMC\\_1](http://www.academia.edu/7979700/Movimientos_Sociales_cultura_pol%C3%ADtica_y_poder_regional._El_caso_del_Movimiento_del_Macizo_Colombiano_MMC_1)
- Tocci, N. (2008, julio). The European Union, Civil Society and Conflict Transformation. *Policy Working Paper* 1. Brighton: MICROCON. Recuperado de: [http://www.microconflict.eu/publications/PWP1\\_NT.pdf](http://www.microconflict.eu/publications/PWP1_NT.pdf)
- Tokatlian, J. G. (2000). Las diplomacias por la Paz. En Camacho, Á. y Leal, F. (Eds.), *Armar la Paz es Desarmar la Guerra* (pp. 339-360). Bogotá: CEREC.
- UNESCO (1945). *Acta Constitucional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*. París: UNESCO.
- United Nations Development Program, UNDP (2007). The Human Development. concept. Recuperado de: <http://hdr.undp.org/en/humandev/>

- United Nations Development Program, UNDP (2009). Human Development Report 2009. Hampshire: Macmillan. Recuperado de: [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr\\_2009\\_en\\_complete.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf)
- Vaicius, I. (2002). Una perspectiva hacia el entendimiento del Plan Colombia. En Estrada, J. (Ed.), *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: Aspectos globales y locales* (pp.). Bogotá: Universidad Nacional.
- Vargas, A. (2002). El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina: equivocada respuesta al problema insurgente y poca eficacia en la lucha contra el narcotráfico. En Estrada, J. (Ed.), *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: Aspectos globales y locales* (pp.). Bogotá: Universidad Nacional.
- Vargas, M. F. (2007). Sistematización de la estrategia educativa en el PDPMM. En PNUD. *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006* (pp.). Barrancabermeja: PNUD.
- Vasconcelos, Á. (2003, diciembre). Back to the future? Strengthening EU/Mercosur relations and reviving multilateralism. *Discussion Papers Chaire Mercosur de Sciences Po, An, 1* (3).
- Väyrynen, R. (1991). To Settle or to Transform? Perspectives on the Resolution of National and International Conflicts. En Väyrynen, R. (Ed.), *New Direction in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation, International Social Science Council* (pp.). London: Sage Publications.
- Verdad Abierta (2009). H.H. revela nuevos nexos entre personajes públicos y las AUC. *Verdad Abierta*. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/web3/justicia-y-paz/versiones/80-versiones-seccion/879-hh-reveleva-nuevos-nexos-entre-personajes-publicos-y-las-auc>
- Villamarín, R. (2005). Construyendo Nación desde la Región: La experiencia del Sistema Regional de Planeación Participativa del Magdalena Medio. En Suarez, Ó., Bayona, M. y Gutiérrez, J. (Eds.), *Relatos desde la Memoria: Sistematización de Experiencias del PDPMM* (pp. 93-94). Barrancabermeja: PDPMM.
- Villegas, M. (2007). Finca campesina en el valle del Magdalena Medio: ocupación productiva del territorio en palma de aceite. En PNUD. *Sistematización de los procesos de desarrollo económico y social adelantados por el PDPMM entre 1996 y 2006* (239-286). Barrancabermeja: PNUD.

- Vranckx, A. (2005) European policies on Colombia, *IPIS background paper*, marzo.
- Wallensteen, P. (1991). The Resolution and Transformation of International Conflicts: A Structural Perspective. En Väyrynen, R. (Ed.), *New Direction in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation, International Social Science Council* (pp.). London: Sages Publications.
- Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (pp.). London: SAGE Publications.
- Wallensteen, P. (2011). The origins of contemporary Peace Research. En Hoglund, K. y Oberg, M. (Eds.), *Understanding Peace Research: Methods and Challenges* (pp.). London: Routledge.
- Waltz, K. (1988). *The Origin of War in Neorealist Theory*, *Journal of Interdisciplinary History*, Linklater, Andrew, *Neo-Realism in Theory and Practice*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Woodhouse, T. (1999, junio). *International Conflict Resolution: Some Critiques and a Response. Centre for Conflict Resolution Working Paper 1*. Bradford: Department of Peace Studies, University of Bradford.
- Zapata, M. L. (2006, marzo 8). *Peacebuilding from the Grassroots: Equity Conciliation and Conflict Transformation in Colombia. Beyond Intractability*. Colorado: University of Colorado. Recuperado de: [http://conflict-frontiers.beyondintractability.org/case\\_studies/peacebuilding\\_from\\_the\\_grassroots.jsp?nid=6769](http://conflict-frontiers.beyondintractability.org/case_studies/peacebuilding_from_the_grassroots.jsp?nid=6769)
- Zartman, W. (2000). Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond. En Stern, P. y Druckman, D. (Eds.), *International Conflict Resolution after the Cold War* (pp. 225-250). Washington D. C.: National Academy Press.



ESTE LIBRO EDITADO POR LA  
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ  
JORGE TADEO LOZANO  
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR  
EN EL MES DE ABRIL  
DE 2016

Este libro incide sobre una experiencia *sui generis* de construcción de paz en Colombia, los Laboratorios de Paz. Situados en algunas de las zonas más conflictivas del país, e íntimamente conectados con los Programas de Desarrollo y Paz, constituyeron programas multidimensionales de construcción de paz desde la base, sostenidos por la sociedad civil, y con el respaldo y participación de la Unión Europea y del Estado colombiano. Configuraron un amplio conjunto de procesos sociales, culturales, económicos y políticos de base que buscaban integrar los sectores sociales tradicionalmente excluidos de la población colombiana en territorios marginados y periféricos, y acercarlos a la institucionalidad, al desarrollo y a la democracia, con vista a la transformación del conflicto. El objetivo principal de esta investigación es evaluar en qué medida los Laboratorios de Paz se concibieron como verdaderos “laboratorios de paz” y abrieron caminos novedosos y “fórmulas” alternativas para la paz a nivel local y regional. La hipótesis de trabajo es que los Laboratorios de Paz, a pesar de los múltiples obstáculos con que se han encontrado y de las muchas limitaciones que evidenciaron, se configuraron como instrumentos de construcción de paz positiva a nivel regional, y estructuraron un enfoque alternativo hacia la transformación del conflicto en un escenario como Colombia, con raíces y factores de conflictividad específicos, constituyendo una contribución sustantiva para una nueva forma de concebir y construir la paz en el país, con vista a una paz sostenible y duradera. Esta es una investigación eminentemente empírica, que recae e incide fundamentalmente en el análisis de dos estudios de caso —el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio y el del Macizo Colombiano—. Se ha basado principalmente en trabajo de campo en estas regiones de Colombia, con base en entrevistas con participantes y actores de los Laboratorios de Paz, así como en la observación participante en innumerables eventos e iniciativas organizadas por los Laboratorios de Paz.

